

RICARDO SIDICARO

LA POLÍTICA  
MIRADA DESDE ARRIBA

*Las ideas del diario*  
La Nación  
1909 - 1989

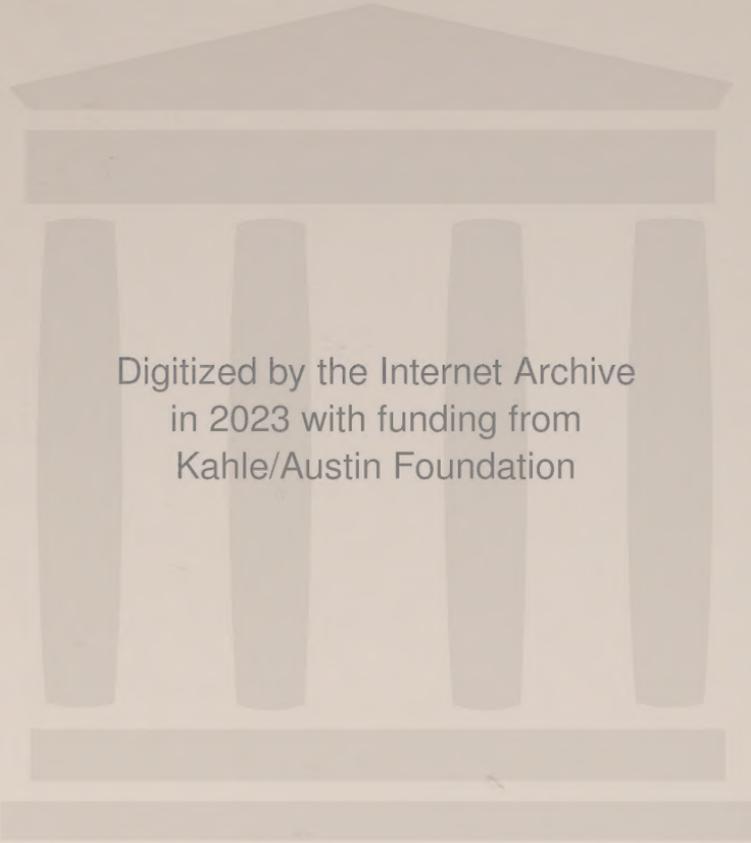


MONSIGNOR WILLIAM BARRY MEMORIAL LIBRARY  
BARRY UNIVERSITY



0 2211 0261853 7

EDITORIAL SUDAMERICANA  
~ Historia y cultura ~



Digitized by the Internet Archive  
in 2023 with funding from  
Kahle/Austin Foundation





ANEXO A ASOCIACIÓN POLITICA  
UNIDAD Y FORTALECIMIENTO  
ORDEN Y JUSTICIA SOCIAL  
RECONSTRUCCION

# La política mirada desde arriba

*Las ideas del diario La Nación*  
1909-1989

COLECCIÓN HISTORIA Y CULTURA  
DIRIGIDA POR LUIS ALBERTO ROMERO

La política mexicana desde 1910

Los ideales del partido la Nación  
1910-1930

RICARDO SIDICARO

# La política mirada desde arriba

*Las ideas del diario La Nación*  
1909-1989

EDITORIAL SUDAMERICANA  
BUENOS AIRES

Barry University Library  
11300 NE Second Avenue  
Miami Shores, FL 33161

IMPRESO EN LA ARGENTINA

*Queda hecho el depósito que  
previene la Ley 11.723.*

© 1993, Editorial Sudamericana S.A.,  
Humberto I 531, Buenos Aires.

ISBN 950-07-0845-0

848  
353  
993

## Introducción

Pocos objetos son tan difíciles de estudiar como aquellos que forman parte de nuestro entorno diario. Sobre ellos tenemos una visión espontánea, fruto de frecuentarlos cotidianamente. Si el objeto habla, dice quién es, explora distintas regiones del saber y relata periódicamente su historia, las imágenes interesadas y distorsionadas se multiplican. Comprar un diario, acto ritual, es adquirir una matriz de decodificación de los hechos sociales que organiza el conocimiento sobre una realidad que al mismo tiempo construye. Mediante ella al lector se le ofrecen formas de ver el mundo social. La fidelidad para con un diario puede llegar a ser mayor que para otros objetos igualmente familiares. Muchas veces se han aproximado las palabras *lector* y *elector* para recordar que la política está presente en ambas. Adquirir un diario es como votar por él en un mercado de opciones que ofrece miradas alternativas sobre la sociedad y sus problemas.

Hay distintas maneras de estudiar las ideas políticas de un medio de comunicación. En nuestro caso analizaremos los editoriales publicados por el diario *La Nación* en el período comprendido entre 1909 y 1989. Estos límites temporales no son arbitrarios. En 1909, la tercera generación periodística de los Mitre decidió distanciar el matutino de las luchas partidarias y convertirlo en expresión y educador de la clase dirigente de la época, colocándolo por encima de sus fraccionamientos. En 1989 se cerró una etapa en el desarrollo político argentino y esto repercutió directamente en el pensamiento político del diario.

En los ocho decenios que estudiaremos, *La Nación* publicó aproximadamente 80.000 editoriales, cuya temática abarcó un espectro muy amplio y variado. Alrededor del 10 por ciento de ese total fue dedicado a temas de carácter político, directamente relacionados con las dimensiones analíticas en que centraremos nuestra atención. Esas dimensiones son las clásicas de todo pensamiento político: el papel del Estado y su relación con la sociedad; la caracterización de los distintos sectores sociales y de las relaciones que éstos mantienen entre sí; la conformación del

sistema de representación política y la legitimidad de sus actores. En todo pensamiento político esas dimensiones se articulan para definir el "interés general", "el bien común" y el "buen gobierno". En tanto todo punto de vista sobre lo social está necesariamente condicionado por el entramado de relaciones materiales y simbólicas del que participa el actor que lo enuncia, su visión no puede sino ser ideológica. Esto supone que, aun a pesar suyo, esclarece algunos aspectos y oculta otros. El componente normativo propio de los discursos políticos pone de manifiesto de manera inmediata el sentido ideológico de su propuesta. Pero cuando esos discursos están combinados muy sólidamente con una estrategia pedagógica orientada a explicar lo que sucede en la sociedad con la pretensión de hacerlo desde una perspectiva objetiva, lo tendencioso se liga de tal modo con lo supuestamente neutro que son mayores sus posibilidades de retener a los sujetos en la ideología allí desplegada. Es decir, de dotarlos de un reticulado de categorías interpretativas cuyo efecto es hacer ver la realidad de un modo determinado y movilizarlos en grados diversos a la acción. Las reflexiones de *La Nación* ejercitaron permanentemente esa combinación entre la explicación y lo normativo.

Los editoriales de *La Nación*, que constituyen el *corpus* sobre el que hemos trabajado, conforman un verdadero tratado de pensamiento político. Pero a diferencia de lo que ocurre con un libro, que entra en circulación luego de un tiempo de haber sido elaborado, un editorial es como una página de una obra mayor y provisoriamente interrumpida, puesta a consideración del público inmediatamente después de ser redactada. La respuesta de una parte de los lectores, sobre todo aquellos a quienes está especialmente dirigido, puede ser inmediata. El comentario del texto llega muy pronto al emisor; efecto imposible en el caso de un libro. Esta peculiar manera de reflexionar por escrito tiene un efecto colectivo muy diferente al de los tratados elaborados en el tranquilo aislamiento de una biblioteca. Letra impresa con el deseo de intervenir en discusiones o meditaciones sobre temas de candente actualidad, es al mismo tiempo portadora de referencias teóricas generales que inscriben el texto en concepciones globales sobre la vida social y política. Pero por la naturaleza del soporte material que vehiculiza la idea, supuestamente precederо en el día, su presentación es a la vez terminante e inconclusa. El estilo editorial sugiere, persuade y está siempre tentado de impartir órdenes. Pero todo lo hace con una singular economía de lenguaje y con la conciencia de que, como en las novelas por entrega, existe un "continuará".

La estructura discursiva del género editorial tiene particularidades que la distinguen de otras formas escritas de ejercer tareas ideológicas. Meg Greenfield, editorialista de *The Washington Post*, sostiene que comprendió una clave del oficio de escribirlos cuando supo que Benito Mussolini había pasado parte de su tiempo redactando editoriales, primero en la prensa socialista y luego en la fascista. Hay un pequeño Mussolini, dice Greenfield al hacer autoanálisis, en cada redactor de editorial, “pomposo, entrometido, pretencioso; un personaje gracioso para todos, menos para él mismo; confía en forma franca y desmedida en la pelea, imparte órdenes grandilocuentes que no surten efecto (...). Esto nada tiene que ver con sus personas, pero tiene absolutamente que ver con su opinión profesional”<sup>1</sup>. Producto de múltiples plumas, los editoriales son la expresión oficial de una publicación. Si la ideología de ésta se puede leer en todos sus artículos y secciones, presenta en el caso de los editoriales una sistematización explícita que le acuerda el mencionado rasgo de página de un tratado. En 1944, el director de *La Nación*, Luis Mitre, definió con términos precisos el lugar y la importancia que acordaba a su rol y que daba a los editoriales en el diario: preservar “la doctrina, es decir, la defensa de las instituciones y los medios de estimular el adelanto del país en sus más variadas manifestaciones es objeto de su continuo desvelo. Si no fuese así no cumpliría sus obligaciones para el pueblo”<sup>2</sup>. Al centrarse sobre temas de coyuntura, los editoriales suelen tener un toque dramático, al anunciar que quizás se esté ante la última oportunidad de evitar catástrofes o males mayores. Luego, en nombre de la tradición, la ciencia o el buen sentido, explican la solución del problema.

A comienzos de 1939, el matutino fundado por Mitre se definía a sí mismo y a su público: recordaba en tercera persona el respeto que rodeaba su nombre y “su arraigo en las clases dirigentes de la República y en las clases productoras, su prestigio en el terreno doctrinal y la honrosa adhesión que los hogares más tradicionales y representativos le han demostrado y le demuestran, pues no se ignora que *La Nación* es el diario de millares de familias en las cuales el hábito de leerlo se transmite de generación en generación”<sup>3</sup>. Esa triple dimensión de su universo de lectores, que remitía a la política, la economía y el honor social, se completaba, según la citada publicación, con otra audiencia, perteneciente a esferas más populares de la población, que en una primera época no se habían contado entre sus compradores. Pero su público, es decir, el tomado prioritariamente como destinatario de su mensaje ético-político, eran los ocupantes de las “alturas” de la sociedad, que siguiendo una conceptualización

similar a la de Max Weber el diario caracterizaba con singular claridad. Los individuos que se encontraban en las posiciones más altas de la estructura del poder político, del sistema económico y de la jerarquía del reconocimiento social, compartían, según *La Nación*, el hábito de la lectura de sus páginas. Ese no era, seguramente, el único aspecto que los acercaba. El diario contribuía en buena medida a homogeneizar las ideas de muchos sujetos dispersos en el espacio social, cuyas visiones de la sociedad no confluían mecánicamente por el hecho de ocupar posiciones altas en los respectivos sistemas de práctica en que actuaban. Esos individuos encontraban en el matutino explicaciones sobre temas heterogéneos y ajenos a sus preocupaciones inmediatas, cuyas claves ideológicas comprendían por haber incorporado "de generación en generación", el hábito tradicional de ver el mundo a través de la particular lente que les ofrecían sus páginas. Al respecto, Alexis de Tocqueville formuló una definición de la prensa que resulta pertinente evocar: "Cuando los hombres no están más ligados entre sí de una manera sólida y permanente, no se podrá obtener de muchos de ellos que actúen en común a menos que se persuada a cada uno de quienes la colaboración es necesaria de que su interés particular lo obliga a unir voluntariamente sus esfuerzos a los del resto. Eso se puede hacer habitual y cómodamente con la ayuda de un diario; sólo un diario puede depositar en un mismo momento y en miles de espíritus un mismo pensamiento"<sup>4</sup>. Esa función de unificación de sectores sociales que ocupaban posiciones prominentes fue una meta que *La Nación* se propuso a lo largo de todo el período que analizaremos. Sin embargo, la dinámica de los conflictos sociales y políticos hizo que ese objetivo en muchos momentos fuera inalcanzable. Encontrar *qué decir* en las épocas de mayor crisis e inestabilidad política no le resultó una tarea fácil y el desconcierto también se instaló en sus editoriales. La fragmentación de los sectores sociales que buscaba unificar terminó reflejándose en el pensamiento político del diario.

Para *La Nación*, los gobiernos fueron siempre interlocutores privilegiados; a ellos les habló sobre el rol del Estado. En su forma ideal, Emilio Durkheim definió al Estado "como el órgano mismo del pensamiento social (...), este pensamiento está vuelto hacia un fin práctico y no especulativo (...), no piensa por pensar, para construir sistemas de doctrinas, sino para dirigir la conducta colectiva"<sup>5</sup>. El matutino interpeló desde su propia perspectiva doctrinaria a los gobiernos y al Estado. Al asumir esa función operó como una especie de superyó freudiano, diciendo en nombre de la Constitución lo que se debía y lo que estaba vedado

hacer. El diario pudo, al mismo tiempo, fundamentar su posición en la tradición y en la ley suprema, presentando a ambas como políticamente neutras. Claus Offe ha caracterizado a las Constituciones como un programa negativo que indica los límites de lo que pueden hacer los actores políticos y, por esa vía, contribuyen a la preservación de los sistemas sociales vigentes<sup>6</sup>. En ese sentido, puede afirmarse que la preocupación del matutino por recordar a los distintos gobiernos el contenido de los preceptos constitucionales se enmarcó en la defensa del orden social, y el énfasis fue puesto en aquellos casos en que las supuestas transgresiones de la Carta Magna afectaban los intereses de los principales sectores propietarios. Pero la coincidencia entre los puntos de vista de determinados sectores sociales y los del diario, o aun el modo de autodefinirse por su proximidad a ellos no permite, como se verá en el desarrollo del análisis de las ocho décadas, caracterizar a *La Nación* como instrumento ideológico de dichos sectores. Ese tipo de reduccionismo, tan frecuente en las visiones simplificadas de los procesos políticos, ignora la autonomía propia que, en tanto aparatos específicos, poseen los medios de construcción y difusión de ideologías. Es imposible imaginar cómo se habría desempeñado *La Nación* si en el curso del período estudiado hubiese existido una clase dirigente compacta y homogénea, capaz de proponer una política coherente para el país. Seguramente habría sido uno de sus voceros periodísticos. Pero tal actor brilló por su ausencia durante muchos años. Así, aun cuando el diario pudo estar más próximo a unos intereses que a otros, la compleja trama de los sectores dominantes carentes de unidad aumentó su grado de autonomía con respecto a ellos. Por momentos, el diario fue el defensor de un orden social cuyos actores principales se revelaban incompetentes para llevar adelante iniciativas colectivas de carácter más global que las puntuales reivindicaciones corporativas. Frente a esos discursos sectoriales, el elaborado por los editoriales apuntó a un nivel de amplitud y a una vocación comprensiva mucho mayor. Sin embargo, en una escena política corporativizada, sus posiciones, en otros momentos, se hicieron eco de la imposibilidad de generalizar propuestas.

Actor de un espacio de prácticas específicas, el campo periodístico, *La Nación* desarrolló un pensamiento político en el que necesariamente se reflejaron sus propios intereses y las posiciones que ocupaba en ese ámbito. Sería imposible, en consecuencia, abordar el estudio de la evolución de sus ideas sin tener en cuenta lo que sucedía en el campo periodístico: allí el diario competía con otros medios de prensa para tratar de colocarse en

posiciones de predominio y sobre el conjunto del campo se ejercía directamente la influencia política del Estado. Para decirlo de otro modo: los medios de prensa participan en una puja contra otros medios de prensa, en la que tratan de convertirse en los más serios, los más prestigiosos, los de mayor tirada, los de palabra más autorizada, los de prédica más legítima, etc. El concepto de campo propuesto por Pierre Bourdieu para el estudio sociológico de los diversos ámbitos de la práctica social es perfectamente aplicable al caso de la prensa. Como señala dicho autor, refiriéndose a un trabajo de Michael Schudson, no se puede comprender la idea moderna de objetividad en el periodismo si no se tiene en cuenta que ella aparece en los diarios preocupados por afirmar su adhesión a las normas de respetabilidad, oponiendo las "informaciones" a las meras "noticias" de los órganos de prensa menos exigentes<sup>7</sup>.

La lucha de *La Nación* por ocupar posiciones dominantes en el campo periodístico complejizó su relación con los sectores sociales a los que se hallaba más próximo. Que se nos perdone la repetición de palabras: hacer un diario serio para gente seria supone, necesariamente, no tomarse siempre en serio los argumentos de esa gente seria, ya que en muchos casos ésta es una condición indispensable para pertenecer, en el campo de la prensa, a la "prensa seria". El matutino, al identificarse con los puntos de vista de determinados intereses sociales, no los transmite con el mismo modo de razonar empleado por los sectores directamente concernidos, sino que, en virtud de su posición en el campo de la prensa, los expresa con un estilo que le es propio. Agreguemos a esto que el Estado tiene capacidad para actuar sobre la libertad de prensa, de imponer límites directos o indirectos a lo que se dice y a cómo se dice. Dado el accidentado desarrollo político de las ocho décadas estudiadas, es claro que en muchos momentos de intolerancia oficial los responsables del matutino debieron optar entre preservar la *tribuna* o ser totalmente fieles a la *doctrina*. Planteo para nada ajeno a un pensamiento que con mucha asiduidad remite a ecuaciones de costos y beneficios.

Para mostrar cómo *La Nación* era percibido social y políticamente por otros actores, a lo largo de nuestro texto hemos introducido distintas caracterizaciones que sobre él formularon diferentes gobiernos, fuerzas políticas, individuos con figuración pública u órganos de prensa. La importancia del diario en los debates ideológicos lo convirtió en blanco de múltiples ataques. Pero así como al seguir la evolución de su pensamiento político no nos interesamos en analizar la validez empírica de sus argu-

mentaciones, si correspondían o no a la realidad sobre la que hablaba, tampoco nos preocupamos por el carácter verdadero o falso de las proposiciones críticas formuladas contra *La Nación* por sus variados y polifacéticos enemigos. Un diario clasifica y califica, es clasificado y calificado, es decir, participa en luchas simbólicas. Es en ese sentido, y no en el de antología de las injurias, que deben leerse los puntos de vista adversos dirigidos contra el matutino, de los cuales sólo evocaremos algunos de los expresados entre 1909 y 1989. Esta aclaración es importante, ya que la objetividad científica que persigue nuestro análisis excluye los juicios de valor, y sería un error suponer que éstos se hallan incluidos por interpósita persona. Nuestro texto desilusionará por igual a quienes esperen apologías o denuestos sobre su objeto de estudio.

Sin pretender resumir la evolución del diario en el período anterior al que analizaremos, nos parece necesario destacar algunos aspectos de la misma para completar esta introducción.

### *La Nación 1870-1909: Un puesto de combate*

“Tribuna de doctrina”. Difícilmente se hubiera podido encontrar una fórmula más adecuada para sintetizar la estrategia discursiva del nuevo diario. Así se definía *La Nación* en su primer editorial. Era el 4 de enero de 1870; ese día inició su publicación con una tirada de mil ejemplares. Su fundador y director, Bartolomé Mitre, alternaba desde hacía mucho el periodismo con las luchas políticas y las actividades militares. Su trayectoria pública revelaba, como sucedía con el país, que las fronteras entre esos campos de práctica distaban de ser nítidas y bien delimitadas. La prensa de la época era partidista; los partidos, estructuras de lealtades nucleadas en torno a grandes figuras; el alzamiento armado, real o potencial, un recurso nunca descartado para dirimir las competencias por el poder. Un diario, un partido y cierta disponibilidad militar configuraban la ecuación óptima, usual y casi ineludible, para aspirar con probabilidades de éxito al control de los centros de decisión política o a influir sobre ellos. Pero aquel primer editorial anunciaba una innovación importante. La nueva hoja impresa formato “sábana” no quería ser un “puesto de combate”, aspiraba a situar su mirada por encima de los enfrentamientos. Si lo lograba, no sería identificado como un actor político o un interés social específico: podría enunciar el carácter del conflicto, el sentido de la historia, hablar por la sociedad, es decir, conseguiría predicar sobre el juego y sus

reglas y, al mismo tiempo, señalar metas colocadas más allá de las pasiones y el ofuscamiento del momento. La aspiración de construir un lugar político pero no partidista, susceptible de hacer aceptar su perspectiva en nombre del buen sentido o de las fuerzas de las cosas, conformaba el entramado conceptual de ese editorial liminar. Mitre ya había relatado la historia del país, ahora se declaraba dispuesto a enseñar a sus conciudadanos, a pensar el presente. Para ello, su diario ofrecería una matriz de inteligibilidad de los hechos sociales, y propondría *qué hacer* no ya desde una opinión más, sino a partir de una óptica consustanciada con lo que un argentino *debía ser*. La empresa, muy pronto, reveló su carácter ilusorio. Todavía no había llegado la hora de redactar el parte después de la batalla. Apresuradamente antedatada, la profesión de fe del primer día se incorporó como una opción política e ideológica entre muchas otras. *La Nación* fue aún, durante largo tiempo, el soporte propagandístico de una facción partidaria, su puesto escrito de combate. En lugar de una tribuna de doctrina, impersonal y universalista, fue la expresión del punto de vista de un tribuno y de sus allegados. Allí, como en una carta de enlace destinada a pocos, aquellos hombres imprimirían la justificación de sus aspiraciones de poder, reflexionarían sobre la guerra y la paz, difundirían sus sueños y meditarían sus reveses.

*La Nación* reemplazaba a otro diario, *Nación Argentina*, creado ocho años antes para defender la obra de gobierno de Mitre. Dirigido por José María Gutiérrez, el periódico cuyo ciclo finalizaba se había identificado con el entonces presidente Mitre y debía transformarse cuando éste retornaba al llano. Cabía, pues, cambiar de nombre y, como Gutiérrez lo explicó en el editorial de despedida de *Nación Argentina*, el nuevo diario se llamaría *La Nación* y la palabra ausente, Argentina, la guardarían. Gutiérrez incurriría en omnipotencia, o en exageración de literato, que evidenciaba el desconocimiento de una clave sustancial del género ideológico: omitir sin aclarar. Los hombres de Mitre, al dejar el poder estatal, debían modificar su lenguaje político. La compleja operación de asumir la representación de la sociedad, sin dejar de defender intereses sectoriales, no sería tarea fácil. Para alcanzar ese fin no bastaban la voluntad o la destreza intelectual. La estructura del campo de la prensa y los conflictos en él planteados reflejaban la dinámica de las relaciones políticas. *Nación Argentina* había canalizado ideas desde el gobierno; *La Nación*, en cambio, pretendería hacerlo con las inquietudes y demandas de la sociedad. Pero en ambos casos había un objetivo en común: construir la opinión pública. Actuar como mediador entre la

sociedad y el Estado, en un espacio público marcado por los estilos de los diarios partidistas. Así, más allá de la vinculación directa con una facción política, el nuevo medio de prensa nacía en el seno de una situación condicionante cuyas trazas conservaría durante varias décadas.

¿Era posible construir la opinión pública con una tirada de mil ejemplares? La ciudad de Buenos Aires contaba, según el Censo Municipal de 1869, con 177.787 habitantes; de ellos, 98.700 constituían la población de más de catorce años de edad. Según la clasificación de la época, la estructura social estaba dividida en dos sectores: la *gente decente* y la *gente de pueblo*. El 5% de la población ocupada, es decir, algo menos de 5.000 personas, correspondía a la *gente decente* o *clase alta*. En la integración de ese sector social convergían varias vertientes: origen familiar prestigioso, posesión de riqueza, poder político y reconocimiento cultural. La propiedad de grandes establecimientos rurales, la participación en el alto mundo de los negocios y el desempeño en la capa superior de las profesiones liberales eran las condiciones sociales más frecuentes de los miembros más encumbrados de la *clase alta*. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Club de Progreso y la Sociedad Rural Argentina reunían a los notables de la época más allá de sus afinidades partidarias. Los mil ejemplares de *La Nación*, colocados por suscripción, encontraban sus lectores en la *gente decente* o, mejor dicho, en aquella parte de la misma más próxima a las posiciones políticas de Mitre. En la tarea de formar opinión pública, *La Nación* competía en 1870 con otros diarios cuya tirada no era muy diferente a la suya. Todos sumados publicaban alrededor de cinco mil ejemplares por día.

El capital invertido para crear *La Nación* fue de 800.000 pesos moneda corriente. Para dar una estimación aproximada de la importancia de esa suma de dinero, cabe señalar que equivalía al precio de 2.500 hectáreas de tierra bien localizadas en la región pampeana. En esa época, los principales terratenientes de la aludida zona disponían de campos que superaban varias veces esa superficie. Esta comparación permite relativizar la significación económica de la inversión originaria realizada para crear el nuevo diario. El capital de la empresa estaba fraccionado en 32 acciones, de las cuales, Bartolomé Mitre, Antonio P. Lezica, José María Gutiérrez, Anacarsis Lanús, Rufino de Elizalde, Cándido Galván y Delfín Huergo poseían cuatro cada uno, Juan Agustín García dos y Francisco de Elizalde y Adriano Rossi una. Todos los integrantes de la sociedad editora del diario gozaban de cierta notoriedad política; algunos habían ocupado, o alcanzarían luego,

posiciones ministeriales en diferentes gobiernos. A fines de 1879, Bartolomé Mitre adquirió la totalidad de las acciones, convirtiéndose en el único propietario de *La Nación*.

Entre el momento de su fundación y 1901 el diario conoció cinco clausuras, impuestas por distintos gobiernos. La acción revolucionaria organizada por Mitre contra el presidente Sarmiento provocó su primer cierre en septiembre de 1874. La reaparición fue autorizada en mayo del año siguiente. El día de su retorno alcanzó una edición récord de 10.500 ejemplares. Un año y medio más tarde, el presidente Nicolás Avellaneda lo cerró por una semana en razón de la beligerancia de sus editoriales. A comienzos de la década del 80, según José Ceppi, quien en la época llegó a desempeñar la dirección interina, la tirada tocó los 13.000 ejemplares<sup>8</sup>. De acuerdo con la información del Censo Municipal de 1887, *La Nación* y *La Prensa* coincidían en la cantidad de ejemplares publicados diariamente: 18.000. Con el estallido de la Revolución del 90, a la que el matutino contribuyó con su prédica, el gobierno de Juárez Celman lo clausuró; permitió su reapertura una semana después, y luego volvió a clausurarlo. Su sucesor, el vicepresidente Carlos Pellegrini, levantó la sanción. El quinto cierre le fue impuesto por el presidente Roca a mediados de 1901, debido a la crítica sistemática a la política económica del gobierno, que el diario juzgaba demasiado favorable a los bancos extranjeros, a los cuales con imaginativo lenguaje denominaba textualmente "la hidra financiera a cuya cabeza se hallaba el banquero Morgan"<sup>9</sup>. Esta vez la sanción duró un solo día. Cinco clausuras en 27 años es un buen indicador de los costos que implicaba, para un medio de prensa, ocupar un puesto de combate en un período que, sin embargo, con el tiempo sería recordado en sus páginas como una época dorada. Paradójicamente, fueron los hombres de la luego tan encomiada generación del 80 los únicos que aplicaron medidas tan drásticas contra el diario creado por Mitre.

A comienzos de la pasada década del 90, *La Nación* era mucho más que una simple carta de enlace de los seguidores de su fundador. Así, cuando Mitre y Roca acordaron la renuncia del primero a la postulación presidencial por la Unión Cívica, la venta del diario cayó vertiginosamente. Gregorio Aráoz Alfaro sostiene que los suscriptores renunciantes eran parte de quienes escindían la Unión Cívica detrás de Leandro N. Alem para fundar el radicalismo<sup>10</sup>. El carácter político y escasamente comercial que Mitre acordaba a su diario quedó registrado en una anécdota narrada por varios de sus biógrafos. Cuando el administrador de la empresa, Enrique de Vedia, le comunicó que los suscriptores

se borraban en forma alarmante, Mitre le contestó: "Cuando haya renunciado el último imprima dos, uno para usted y otro para mí"<sup>11</sup>.

Pese a que el diario estaba definido a favor de una corriente política, en su redacción participaban hombres de otras ideas y de otros partidos. Un buen ejemplo es el caso de Juan B. Justo, fundador del Partido Socialista. Cabe señalar que la tarea periodística realizada por Justo para el matutino no era simplemente profesional y en temas desvinculados de su ideología. Varios de sus artículos, publicados en *La Nación* en 1896, formaron parte años más tarde de un libro de carácter doctrinario editado por el Partido Socialista<sup>12</sup>. La asamblea fundadora de dicho partido, realizada en julio de 1896, había sido objeto de una minuciosa crónica del diario, cargada de parcialidad y simpatía, firmada con seudónimo por Justo. La aparición del socialismo en la Argentina aseveraba la nota, sería un factor de progreso político y revelaba el grado de madurez económica y social alcanzado por el país. En la misma época, también Alberto Ghirardo, por entonces director del periódico anarquista *La Protesta*, trabajaba en el diario. Esa actitud en el reclutamiento del personal de redacción no significaba que los puntos de vista de *La Nación* sobre los problemas sociales fuesen equidistantes de todos los sectores que integraban la sociedad. Justo renunció al diario, en agosto de 1896, disconforme por las informaciones que había publicado a propósito de la huelga ferroviaria, a las que juzgaba contrarias a los trabajadores<sup>13</sup>. Un año más tarde, cuando se realizó la primera marcha de desocupados registrada en Buenos Aires, los manifestantes revelaron su animadversión hacia *La Nación* y *La Prensa* al intentar incendiarlos, acciones frustradas por la protección establecida por un cordón de policías y bomberos<sup>14</sup>. En 1899, Justo expresaba su opinión sobre el diario con términos por demás elocuentes: "*La Nación* habla de política, en el alto y verdadero sentido de la palabra, como hablaría un *amateur*, con curiosidad de *dilettante*; pero reserva su energía para defender las porquerías de las camarillas mitristas"<sup>15</sup>. De todas maneras, como se verá, las apreciaciones de Justo no modificaron la buena imagen que el diario tenía de él, del socialismo argentino y de su futuro.

En los intensos debates registrados en los tres últimos decenios del siglo pasado a propósito de la profundización del proceso de secularización de la vida institucional y social, *La Nación* se alineó entre quienes reclamaban la limitación de la influencia de la Iglesia Católica. En el ejercicio de la presidencia, Mitre había tomado medidas en tal sentido, y el diario se mostró partidario de orientaciones similares, aun cuando éstas fueron adoptadas por

gobiernos a los que criticaba en muchos otros aspectos. Durante el gobierno de Roca, Mitre escribió varios editoriales y artículos con el objetivo de defender el laicismo y opuso múltiples argumentos a las objeciones que al respecto formulaban las autoridades eclesiásticas. En esos textos, reclamaba a los dignatarios de la Iglesia no entrometerse en la política nacional; la Santa Sede era caracterizada como un poder extranjero. Con prosa agresiva, Mitre recordaría en diversos artículos la posición contraria a la independencia latinoamericana asumida por muchos altos prelados y, a nivel nacional, la complicidad más reciente con el gobierno de Rosas. Según el matutino, la religión formaba parte del dominio privado y no cabía de ningún modo extender su acción en las cuestiones de orden público. Desde esa perspectiva, la educación era definida como de exclusiva incumbencia del Estado. Algunas personas que habían desempeñado altas responsabilidades en el diario y que seguían vinculadas a él ocuparon cargos importantes en el gobierno de Roca, como José Ojeda, subsecretario de Culto durante uno de los períodos de relaciones más conflictivas con la Iglesia. En la presidencia de Juárez Celman, los editoriales apoyaron los proyectos a favor del matrimonio civil, que despertaron la oposición de los sectores más tradicionales de la sociedad. "Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios", decía *La Nación* en septiembre de 1888, para sugerir a la Iglesia no participar en la política nacional. En opinión del diario esa participación era anticonstitucional, porque la soberanía nacional era excluyente y no podía compartirse con el Sumo Pontífice. Cuando algunos legisladores intentaron avanzar con las propuestas de secularización y propusieron establecer el divorcio, el matutino estimó que la iniciativa era legítima, pero que era más urgente sancionar la ley de matrimonio civil, y propuso pasar las restantes discusiones para el año siguiente<sup>16</sup>. La definición de *La Nación* en los memorables debates de fines de siglo pasado a propósito de la secularización de la vida pública le granjeó adversarios que conservaría de allí en más, pese a que, con el tiempo, matizó aquellas posiciones.

Pocos meses antes de que Mitre fundara su matutino había comenzado a aparecer *La Prensa*. En ese momento todavía los seguidores de Mitre publican *Nación Argentina*, y éste, como señaló Tulio Halperin Donghi<sup>17</sup>, recibe al nuevo diario con expresiones un tanto desdeñosas. Durante décadas *La Nación* y *La Prensa* compartieron la franja de lo que dio en llamarse la "prensa seria"; actuaron juntos en algunos momentos y se enfrentaron en otros. La comparación entre ambos fue abordada de distintos modos por observadores o actores de la vida política argentina.

Juan Balestra, en su libro sobre la Revolución del 90, diferenciaba para esa época la prudencia y el estilo más refinado y sutil de *La Nación*, en contraste con la mayor franqueza y contundencia de los juicios de *La Prensa*. Del primero decía que era preferido por intelectuales y políticos, en tanto imparciales y comerciantes estaban por el segundo. Las diferencias de estilo señaladas por Balestra estuvieron destinadas a perdurar y, en buena medida, a tener consecuencias sobre la trayectoria posterior de ambos diarios, reflejada especialmente en sus relaciones con el poder político.

Al retirarse el general Mitre de la acción política a principios de este siglo, una parte de sus seguidores organizó, bajo el liderazgo de su hijo Emilio, el Partido Republicano. En esa época, Emilio Mitre dirigía *La Nación*, que así seguía asociado a un partido y a un presidenciable. Emilio era ingeniero, formación profesional poco usual en los dirigentes políticos de la época, y eso le permitió alcanzar un alto reconocimiento en algunos debates en materia de obras públicas, lo que completaba su perfil de estadista. Partidario de la moralización de las prácticas electorales, como señaló José Luis Romero, con su acción y su prédica, Emilio Mitre contribuyó al desarrollo de las ideas renovadoras que luego darían lugar a la reforma identificada con el nombre de Roque Sáenz Peña<sup>18</sup>. De no mediar su inesperado fallecimiento en mayo de 1909, según Carlos R. Melo, hubiese sido candidato a la presidencia en las elecciones que se avecinaban<sup>19</sup>. Su sucesor en la dirección del diario fue Luis Mitre. Con el nuevo director llegaba también la decisión de alejar al matutino de la identificación directa con un partido político. Durante años, la aspiración de forjar un punto de vista colocado por encima de los conflictos partidarios no había pasado del mero nivel del enunciado. Jorge A. Mitre, propietario del diario junto con Luis Mitre, ha relatado cómo decidieron, en 1909, tomar distancia con respecto a los partidos para relacionarse mejor con el conjunto de la clase dirigente<sup>20</sup>. El pensamiento político del matutino no debería estar más al servicio de un candidato, sino de una visión de la sociedad. *La Nación* ya no sería un órgano de partido; se empeñaría en convertirse en "tribuna de doctrina" de la clase dirigente argentina; a ella le prestaría su voz, pero también le hablaría. Así, en 1909, comenzaba el esfuerzo político-pedagógico que, a lo largo de las páginas que siguen, analizaremos hasta 1989<sup>21</sup>.

## NOTAS

- <sup>1</sup> Meg Greenfield: "La posición editorial", en *La Página Editorial. The Washington Post*, Ediciones Gernika, México, 1989, pág. 39.
- <sup>2</sup> "En la misma línea", editorial firmado por Luis Mitre, *La Nación*, 6-1-1944, pág. 4.
- <sup>3</sup> Folleto institucional, *La Nación*, Buenos Aires, 4-1-1939, pág. 17.
- <sup>4</sup> Alexis de Tocqueville: *De la Démocratie en Amérique*, Flammarion, Paris, 1981, Tomo II, pág. 143.
- <sup>5</sup> Emilio Durkheim: *Lecciones de Sociología. Física de las costumbres y el derecho*, Editorial Schapire, Buenos Aires, 1966, pág. 52.
- <sup>6</sup> Claus Offe: *Lo stato nel capitalismo maturo*, Etas Libri, Milano, 1977, pág. 155.
- <sup>7</sup> Pierre Bourdieu avec Loïc J. D. Wacquant: *Réponses*, Seuil, Paris, 1992, pág. 77. Bourdieu se refiere al libro de Michael Schudson: *Discovering the News*, New York, Basic Books, 1978.
- <sup>8</sup> Anibal Latino (Jose Ceppi): *Tipos y costumbres bonaerenses*, Losada, Buenos Aires, 1943, reeditado por Hyspamérica, Buenos Aires, 1984, pág. 22.
- <sup>9</sup> Horacio Juan Cuccorese: *El tiempo histórico de Carlos Pellegrini*, FECIC, Buenos Aires, 1985, Tomo II, págs. 316-334.
- <sup>10</sup> Gregorio Aráoz Alfaro: discurso incluido en *Homenaje a La Nación y a su ilustre fundador*, Institución Mitre, Buenos Aires, 1945, pág. 17.
- <sup>11</sup> El poco interés de Mitre por la circulación del diario se refuerza aún más en la versión de la misma anécdota propuesta por Juan Balestra en *El noventa. Una revolución política argentina*, Roldán, Buenos Aires, 1935, pág. 259. Según Balestra, Mitre dijo que cuando no quedaran más suscriptores se debían tirar dos ejemplares, uno para él y otro para el archivo.
- <sup>12</sup> Juan B. Justo: *Internacionalismo y Patria*, Librería y tipografía La Vanguardia, Buenos Aires, 1925, págs. 198-202.
- <sup>13</sup> Dardo Cúneo: *Juan B. Justo y las luchas sociales en la Argentina*, ALPE, Buenos Aires, 1956, pág. 177.
- <sup>14</sup> Enrique Dickmann: *Recuerdos de un militante socialista*, Edición La Vanguardia, Buenos Aires, 1949, pág. 77.
- <sup>15</sup> Juan B. Justo: "La culpa de la prensa en los vicios de la política", publicado originariamente en *El Diario del Pueblo*, 7-10-1899, e incluido en *Internacionalismo...*, ob. cit, pág. 215.
- <sup>16</sup> Al respecto, ver Atilio E. Torrasa: *Mitre, paladín del laicismo*, Ediciones de Sarmiento, Buenos Aires, 1957; Carlos Dalmiro Viale: *Buenos Aires-1902. Batalla del divorcio*, Ediciones de El Cuarto Poder, Buenos Aires, 1957; José S. Campobassi: *Ataque y defensa del laicismo escolar en la Argentina*, Ediciones Give, Buenos Aires, 1964; Néstor Tomás Auza: *Católicos y liberales en la generación del ochenta*, Ediciones Culturales Argentinas, Ministerio de Cultura y Educación, Buenos Aires, 1975.
- <sup>17</sup> Tulio Halperin Donghi: *José Hernández y sus mundos*, Sudamericana-Instituto Di Tella, Buenos Aires, 1985, pág. 68.
- <sup>18</sup> José Luis Romero: *La experiencia argentina*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1989, págs. 278-280.

<sup>19</sup> Carlos R. Melo: *Los partidos políticos argentinos*, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1964, pág. 42.

<sup>20</sup> Jorge A. Mitre: "Contribución a la historia de la libertad de prensa argentina. Discurso de incorporación a la Academia Nacional de Historia", en *Boletín de la Academia Nacional de Historia*, Año XXXIV, Buenos Aires, 1957, pág. 327.

<sup>21</sup> El autor agradece los comentarios y sugerencias que a lo largo del proceso de investigación recibió de distintos colegas, especialmente del Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración (CISEA) y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, así como de alumnos de distintas materias y seminarios dictados en la mencionada facultad y en la de Filosofía y Letras de la UBA. Deja, también, constancia de su agradecimiento a los licenciados Claudia Guerrero, Diego Barros y Julio Canessa, que participaron en distintos periodos en calidad de ayudantes de investigación; a Norman G. Enz que incorporó correcciones al estilo de presentación del texto; a Inés Queirolo por su paciente trabajo de dactilografía; al personal de hemeroteca de la Biblioteca Nacional, de la Biblioteca del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires y de la Biblioteca del Congreso Nacional por su gentileza y atención.



PRIMERA PARTE

EL TIEMPO DE LAS CERTEZAS  
1909 - 1943



# I

## Las propuestas de modernización política y social en la época del Centenario

### *Las transformaciones del régimen político*

El año 1909 fue importante para el país y para *La Nación*. En los altos círculos del conservadorismo se discutía la designación del candidato presidencial que debía suceder a José Figueroa Alcorta en la titularidad del Poder Ejecutivo Nacional. Según procedimientos entonces habituales, el postulante, y seguro presidente, fue escogido por un reducido núcleo de notables, sobre el que gravitaba de manera decisiva la opinión del magistrado saliente. La opción de esos "grandes electores" favoreció a Roque Sáenz Peña. La imagen y la prédica del candidato se asociaban al compromiso de sanear el funcionamiento de las instituciones y, sobre todo, de sancionar una nueva legislación electoral para posibilitar la expresión plena de las preferencias políticas de la población. Los partidarios de Sáenz Peña le reconocían una singular capacidad diplomática, por su desempeño en foros internacionales, y un coraje personal que lo llevara, incluso, a campos de batalla en el Perú, de donde retornó con el grado de general de ejército de ese país. El conocimiento vivencial del mundo de la época y, en especial, de los sistemas políticos de las naciones más admiradas por la clase dirigente argentina, era otra de las características que favorecían al candidato. Virtudes de diplomático, osadía de guerrero, experiencia directa en regímenes políticos más modernos y democráticos fueron, sin duda, el cúmulo de dotes que contribuyó a que Sáenz Peña fuese percibido, por Figueroa Alcorta y la elite conservadora que lo apoyaba, como el hombre adecuado para dirigir el proceso de transformación política. Dichos cambios debían dotar de nueva

legitimidad a las instancias estatales, en especial con la resolución de la compleja y conflictiva cuestión electoral.

Para explicar la situación política de fin de la primera década de este siglo, Octavio R. Amadeo usó conceptos de inspiración paretiana y sostuvo que "las elites que antes gobernaron con éxito, habían dejado de producir tipos de selección para el gobierno perdiendo su aptitud política"<sup>1</sup>. Según el citado autor, Roque Sáenz Peña se encontraba entre los pocos que habían comprendido ese deterioro. Tratando de captar los condicionantes que habían contribuido a la formación de las ideas renovadoras de Sáenz Peña, varios autores coincidieron en adjudicar un papel significativo a su experiencia internacional. Los hombres de la elite que habían seguido con atención la evolución de los países más avanzados para tratar de imitar sus instituciones pudieron modernizar su pensamiento y aceptar, como parte de los "costos del progreso", nuevas ideas y nuevos actores, que ponían en cuestión las formas hasta entonces imperantes de mantener cerrado, cual un coto privado, el espacio de las lides políticas. Al respecto, O. Amadeo aseveró que "estaba próximo el día que Inglaterra iba a ser gobernada por los obreros y en que algunos de éstos iban a sentarse en la Cámara de los Lores, al lado de los más antiguos *baronets*. En sus viajes, Sáenz Peña se sintió herido al escuchar con reiteración el concepto despectivo que acusaba a su patria entre los países sin libertad política"<sup>2</sup>. Fermín V. Arenas Luque, en su biografía de Sáenz Peña, describió la situación política de fines de la primera década de este siglo, señalando que "los partidos argentinos no funcionaban orgánicamente; deshechos por efecto de los venenos activos, el abuso y los métodos de ilegalidad inveterados, la impavidez primaba ocupando el plano de principios e ideales"<sup>3</sup>. Según testimonios de Vicente Blasco Ibáñez, citados por Arenas Luque, de no existir Sáenz Peña tal vez hubiera sido Guillermo Udaondo el favorito de la opinión pública. La referencia a la candidatura presidencial de Udaondo, sostenida por sectores republicanos pertenecientes al partido que había tenido como jefe al recién fallecido Emilio Mitre, permite establecer el nexo entre lo que sucedía en el país en 1909 y el lugar que ocupaba el diario en la escena política.

*La Nación* se hallaba todavía estrechamente vinculada a muchos de los políticos que se unificaron detrás de la postulación presidencial de Guillermo Udaondo y recuperaron, en esa coyuntura electoral, la histórica denominación de Unión Cívica, el partido que habían liderado, entre otros, Bartolomé Mitre y Leandro Alem. Ese intento de organizar un polo político para oponerse a la candidatura oficialista de Roque Sáenz Peña se mostró rápida-

mente destinado a la derrota, ya que sólo consiguió apoyos muy limitados, y Udaondo se retiró de la contienda electoral. Paul Groussac, decidido defensor en 1910 de la candidatura de R. Sáenz Peña, para ironizar sobre la debilidad de las fuerzas que acompañaban a Udaondo, decía que “la masa —o mesa— electoral del doctor Udaondo se compone de un Estado Mayor, cuyo núcleo está constituido por una minoría decorativa de *reduci dalle patrie battaglie*, a la cual se han adherido algunas riquezas erráticas de los pasados acuerdos, con el coro inevitable de los anónimos aspirantes a ‘entrar’ ”. En referencia directa a *La Nación*, Groussac agregaba que la heterogénea base política de Udaondo constituía “un conjunto halagador y hasta imponente —sobre todo para ser contemplado desde las columnas prestigiosas de un gran diario—”<sup>4</sup>. Por su parte, *La Nación* mantuvo en todo momento su oposición a lo que consideraba un proceso político absolutamente viciado, y no escatimó calificativos para caracterizar lo que juzgaba el último acto de arbitrariedad cometido por la administración de Figueroa Alcorta.

A principios de octubre de 1910, *La Nación* formuló un balance extremadamente negativo de la gestión de Figueroa Alcorta. Las críticas no sólo se dirigían al mandatario saliente: se extendían al modo con que la elite política conservadora encaraba el manejo del Estado y mantenía su control por medios ilegítimos. Según el diario, el período gubernamental que llegaba a su fin se había caracterizado por un despilfarro administrativo que iba desde la creación innecesaria de empleos burocráticos hasta la corrupción en el otorgamiento de pensiones, subvenciones y suscripciones. Además, consideraba que se habían realizado excesivos y estériles gastos en armamentos. En fin, también deploraba la inversión de cuantiosas sumas en los festejos realizados con motivo de la celebración del Centenario<sup>5</sup>.

Es interesante destacar que en 1910 el diario ya criticaba lo que denominaba la “empleomanía”, término con el cual se refería al sobredimensionamiento del empleo estatal causante, a su juicio, de un excesivo gasto público. En esa época, *La Nación* encontraba la explicación del crecimiento de la burocracia y de las expensas fiscales en la ausencia de regulaciones electorales democráticas. La ilegitimidad de origen de las autoridades y la falta de controles sobre su gestión por parte de la sociedad sólo podían solucionarse, según su opinión, modificando el modo de funcionamiento del sistema político, para lo cual “el principal y más eficaz remedio es el sufragio, llamado a constituir congresos genuinos, identificados con las necesidades y conveniencias públicas, y responsables ante sus representados, víctimas explia-

torias de una disipación a mansalva dispensada por mandatarios de simulación oficial"<sup>6</sup>. Estas objeciones a los mecanismos excluyentes y fraudulentos de regulación de la vida política colocaban a *La Nación* en el campo de quienes reclamaban la sanción de nuevas leyes electorales, susceptibles de garantizar el libre ejercicio de los derechos de la ciudadanía propios de los regímenes democráticos. Es importante subrayar esta orientación del diario, ya que la misma revelaba una coincidencia de fondo con los seguidores de Figueroa Alcorta y con su sucesor Roque Sáenz Peña. Es decir que el enfrentamiento en torno a cuestiones de candidaturas y el apoyo dado por el diario a Udaondo no significaban disconformidad con los proyectos de democratización política impulsados por el presidente saliente y por su sucesor. Esas opiniones favorables a la reforma del régimen político no eran compartidas por el conjunto de la clase dirigente ni, naturalmente, por todos los políticos conservadores que, en grados diversos, habían accedido a cargos y responsabilidades públicas en razón de los mecanismos limitantes de la participación electoral.

El 12 de octubre de 1910, día que Roque Sáenz Peña accedió a la presidencia, el diario fundado por Bartolomé Mitre no escatimó críticas al proceso electoral que le había dado la primera magistratura. En otros países, reflexionaba editorialmente, la transmisión del mando constituía un acontecimiento de repercusiones populares, pero eso no sucedía en la Argentina, porque el pueblo no había tenido ningún protagonismo y sólo le tocaba ser mero espectador de cambios de elencos gubernamentales<sup>7</sup>. Desde esa perspectiva de análisis, *La Nación* se dirigió en varias oportunidades al nuevo presidente recordándole que su gran promesa había sido la creación de un ordenamiento legal que diera garantías de respeto a las preferencias electorales de la ciudadanía.

### *Los conflictos sociales*

En la primera década del siglo los conflictos surgidos en el mundo del trabajo suscitaban dos tipos distintos de reflexiones en los sectores políticos e intelectuales de la clase dirigente argentina. Una perspectiva tendía a ver esos conflictos como un aspecto normal e inevitable del proceso de modernización de la sociedad y de la economía. Los asalariados y los empresarios, según ese punto de vista, tenían intereses divergentes y, en consecuencia, no podían sino surgir tensiones y enfrentamientos. Es decir, cabía reconocer la legitimidad de los conflictos y tratar, desde los poderes públicos, de crear las condiciones para que su

desenvolvimiento no afectara la continuidad del progreso del país. La posición contraria consistía en analizar la emergencia de conflictos como el resultado de una acción premeditada de "minorías subversivas", a las que se suponía constituidas por extranjeros de ideologías extremistas, que se libraban a la agitación social y lograban "arrastrar" episódicamente a sectores obreros. Desde ese enfoque, los conflictos sociales eran definidos como ilegítimos y debían encararse mediante la acción represiva del Estado. Es interesante señalar que, para algunos actores destacados de la época, esas interpretaciones alternativas no eran necesariamente excluyentes. Por eso podían optar, según los momentos y situaciones, por favorecer iniciativas de políticas públicas inspiradas por una u otra de esas explicaciones de la "cuestión social".

Desde una conceptualización que veía los conflictos como una pugna legítima entre sectores sociales, Joaquín V. González, ministro del Interior en la presidencia de Roca, elaboró en 1904 el denominado proyecto de Ley Nacional de Trabajo que, si bien nunca fue sancionado por el Congreso, mostró la temprana disposición de relevantes figuras de los elencos gobernantes para buscar las causas sociales de los enfrentamientos entre asalariados y empresarios y hallarles vías de solución pacíficas, equitativas y negociadas. Joaquín V. González afirmaba que la Argentina debía aprovechar el ejemplo de la legislación de los países más desarrollados y no esperar como aquéllos la aparición de convulsiones revolucionarias y sangrientas sacudidas para formular leyes sociales. Era necesario evitar ese tipo de acontecimientos, estableciendo con claridad las condiciones en que se debían desenvolver las relaciones de trabajo, para lo cual su proyecto de ley incluía la aceptación de las organizaciones sindicales, las instancias de arbitraje para los conflictos y la legitimidad de la huelga como forma de acción reivindicativa<sup>8</sup>.

El proyecto de Ley Nacional de Trabajo fue considerado demasiado limitado y restrictivo por las organizaciones obreras, y no viable en términos económicos por las entidades patronales, en especial por la Unión Industrial Argentina, que aceptaba muchas de las innovaciones contenidas en la propuesta, pero rechazaba sobre todo la posibilidad de implementar la semana laboral de 48 horas, una de las modificaciones más importantes propuestas por la Ley. Estas actitudes de oposición patronal ya habían sido previstas en el informe que el Poder Ejecutivo había hecho confeccionar a Juan Bialek Massé, dedicado al relevamiento de las condiciones de vida y de empleo de las clases obreras del interior de la República y cuyo objetivo era fundamentar el

proyecto de ley de trabajo. En la introducción al informe se señalaba que la sola idea de introducir modificaciones en las condiciones de trabajo había despertado la resistencia de los propietarios de empresas del interior, que rechazaban la legislación social, argumentando que se trataba de "teorías de los doctores socialistas de Buenos Aires, que no sabían lo que era un taller ni una industria"<sup>9</sup>.

La preocupación por la situación social motivó, en 1907, la creación del Departamento Nacional de Trabajo, cuya misión debía consistir, según el entonces presidente Figueroa Alcorta, en encontrar los medios para mejorar las condiciones de vida y laborales de los obreros, evitar los conflictos y mantener actualizada la información del Estado en todo lo referente al ámbito social. Si bien dicho Departamento fue efectivamente organizado recién algunos años más tarde, en 1908 produjo su primer informe, suscripto por José Nicolás Matienzo, que tomaba decidida posición a favor de la implementación de reformas sociales. Dichas reformas eran consideradas necesarias para disminuir los conflictos sociales y las huelgas, cuya causa no era atribuida a "agitadores", sino al descontento por la mala situación salarial. Para evaluar en términos comparados internacionalmente la magnitud alcanzada por los conflictos sociales en 1907, el Informe del Departamento Nacional de Trabajo elaboró un índice demostrativo de que el número de obreros afectados por huelgas, por cada 10.000 habitantes, era ese año mayor en la Argentina que en los principales países europeos. Esa constatación llevaba al organismo a sugerir al gobierno la adopción de leyes para mejorar las condiciones de vida de los sectores obreros, haciendo extensiva su acción a cuestiones como las concernientes a la situación habitacional y a la creación de sistemas jubilatorios<sup>10</sup>. Recién en 1910, el Departamento Nacional de Trabajo fue dotado de los recursos técnicos adecuados para responder a sus funciones y se elaboró un proyecto de carta orgánica, inicialmente preparado bajo la dirección de Marco M. Avellaneda, quien reconocía haber acumulado conocimientos sobre ese tipo de instituciones a partir de sucesivas tomas de contacto con experiencias similares emprendidas por países europeos<sup>11</sup>.

La intención de excluir a los extranjeros propagadores de ideologías consideradas contrarias al orden público dio motivo, en 1909, a una propuesta de reforma de la Ley de Inmigración, donde se enumeraban, entre quienes no podían entrar al país, las siguientes categorías de individuos: los enfermos crónicos, los incapacitados físicos, los que cometieron delitos mayores, los polígamos, las prostitutas, los anarquistas y las personas que

profesaban o preconizaban el asesinato de funcionarios públicos. En 1910, dicha legislación se completó con la denominada Ley de Defensa Social. La causa inmediata de la misma fue la explosión de una bomba en el Teatro Colón, en junio de 1910. Al día siguiente de ese atentado los legisladores aprobaron el nuevo cuerpo legal, que introducía las mayores restricciones a las garantías democráticas que el país había conocido hasta entonces. Se penalizaban no sólo las acciones terroristas, sino, además, el conjunto de actividades ideológicas que según la ley tenía conexión con la producción de hechos de violencia. Se limitaba la libertad de prensa, de reunión y de asociación. Se introducían penas para los propagandistas de ideas relacionables con la violencia y para los encubridores e instigadores. La celeridad del proceso judicial a los acusados, que según se establecía no podía durar más de diez días, implicaba una notable limitación del derecho de defensa.

En sus análisis referidos a la "cuestión social" *La Nación* enfatizaba la necesidad de hallar soluciones negociadas, evitando confundir las divergencias entre obreros y empleadores con los hechos de violencia protagonizados por grupos de ideología extremista. El conflicto social era el resultado, según lo planteó muchas veces el diario, de naturales e inevitables disputas de intereses entre "el capital y el trabajo", donde no cabía excluir a priori la responsabilidad del primero. Por otra parte, si bien juzgaba imprescindible sancionar a quienes cometían atentados terroristas, en su opinión la represión debía evitar toda extralimitación que violase las protecciones jurídicas fundamentales. Un buen ejemplo de sus posiciones en resguardo de las libertades públicas y de las garantías y derechos que merecían los acusados de acciones terroristas, fueron sus duras y sustanciosas críticas contra la Ley de Defensa Social. Sin negar la pertinencia de una legislación que reprimiera a los autores de atentados, *La Nación* sostuvo que la Ley de Defensa Social, aunque necesaria, adolecía de muchas deficiencias debido a la forma precipitada de su sanción, y destacó que colocaba los derechos esenciales de la democracia al arbitrio de la policía. Según el diario, la ley consideraba delito criticar sus propias disposiciones, "y lo castiga con procedimientos sumarios, que precisamente van quedando abolidos por todos los países civilizados; disminuye hasta tornarlas imposibles, las garantías de los juicios de instrucción, tan influyentes, sobre las sentencias, entregando otra vez a la policía esta facultad judicial; declara de hecho en permanencia el Estado de Sitio; sustituye el orden constitucional por el orden policial"<sup>12</sup>. Estas críticas no sólo tenían por blanco la Ley de Defensa Social,

sino que presuponían una concepción del funcionamiento del sistema constitucional, cuya protección no podía negarse a ningún individuo, incluidos aquellos que actuaban tratando de destruirlo. Esa idea de lo jurídico, que defendía las garantías de quienes podían haber atentado contra el orden social, hacía que el diario rechazase totalmente la Ley: "Bien mirada, es una ley de comité de salud pública, un instrumento terrorista análogo a la misma propaganda que se propone extirpar"<sup>13</sup>. Refiriéndose a lo que consideraba la mejor tradición argentina, *La Nación* sostenía que "es inadmisibles que las amenazas del sectarismo lleven a suprimir la misma Constitución que bastó a Mitre y a Sarmiento para gobernar ejemplarmente en situaciones mucho más difíciles (...) todos deseamos (respecto al terrorismo anarquista) energía y severidad. Queremos que la democracia argentina, a semejanza de la francesa, los combata y los domine, pero sin sacrificar una sola libertad. Porque las libertades son de la mayoría sensata y consciente que merece el nombre de pueblo; y si a virtud de que los anarquistas le arrebatan unas, el gobierno le quita otras, so pretexto de defenderla, acaba por ser víctima inocente de los dos terrorismos"<sup>14</sup>.

Las preocupaciones de *La Nación* sobre la problemática social en la época del Centenario no se limitaban a requerir respuestas encuadradas en la Constitución para sancionar a los partidarios de la "acción directa"; además, proponía una modalidad más moderna y semejante a la de los países más desarrollados para encarar los conflictos emergentes en el mundo obrero. Desde esa perspectiva, elogió las iniciativas del recién instalado gobierno del presidente Roque Sáenz Peña, tendientes a mejorar el clima social. Adhiriendo a esas medidas, afirmaba que bajo la administración anterior se habían confundido los desbordes incitados por la prédica de "agitadores políticos" con las reivindicaciones promovidas por el interés de gremios obreros. Consideraba que esa actitud revelaba muy escasa versación en la índole de los movimientos sociales, lo que influía siempre en las decisiones del gobierno, inclinándolo a las medidas de fuerza como fórmula obligada de solución. Para el diario, esa falta de discernimiento explicaba por qué surgía el estado de sitio como respuesta oficial obligada en cuanto una agitación obrera empezaba a cobrar alguna importancia. Esa visión limitada de los sectores gobernantes con respecto al problema social había ocasionado, según *La Nación*, que no se implementaran desde el Estado "intervenciones conciliadoras que buscando armonizar los intereses en pugna evitasen el efecto suprimiendo la causa; nada de medidas preventivas estableciendo normas de equidad en las relaciones de obreros y

patrones que se anticipasen a sus frecuentes desinteligencias. La consecuencia de este sistema es que durante varios años no se ha dado un solo paso en la legislación del trabajo"<sup>15</sup>. Frente a un pasado inmediato descrito en esos términos, el matutino consideraba que la administración de Sáenz Peña actuaba adecuadamente y que sus orientaciones demostraban el deseo de resolver de manera moderna y pacífica los problemas sociales.

La decisión del gobierno de Sáenz Peña de impulsar las actividades del Departamento Nacional de Trabajo fue firmemente apoyada por el diario, que veía en dicha institución un medio idóneo para resolver los conflictos laborales y crear mejores situaciones materiales y culturales para los sectores obreros. Según afirmaba, la Argentina debía tomar el ejemplo de las naciones más avanzadas en las formas de encarar los problemas sociales. Sostenía que era reconocida generalmente la necesidad de dictar leyes protectoras del obrero, a ejemplo de las que el espíritu moderno había empezado a introducir en Europa. Este interés por la situación de los obreros no debía, en su opinión, hacer olvidar los problemas de otros sectores, y por eso sugería también legislar para favorecer a la clase media, cuya condición consideraba la más precaria de todas<sup>16</sup>.

También cuando los conflictos sociales tenían por escenario el ámbito rural *La Nación* buscaba explicaciones y, a la vez, sugería iniciativas a los gobiernos y a las partes para hallar solución a sus diferendos. El diario se preocupaba por estudiar la complejidad de las situaciones para evitar caer en las argumentaciones simples sostenidas por algunos sectores propietarios agrarios, para quienes los reclamos y tensiones eran la obra artificial de "agitadores políticos". Los análisis del matutino sobre el movimiento agrario de protesta denominado "Grito de Alcorta" ofrecen un ejemplo altamente significativo de su modo de caracterizar los conflictos sociales en el campo. Frente al inicio de la movilización de los arrendatarios, comenzó formulando una reflexión en la que el problema era explicado en términos de regulación entre la oferta y la demanda de tierras. Así, relativizaba el conflicto diciendo que en el país había abundancia de tierras y eso debía motivar la rebaja de los cánones de arriendo. Sin embargo, según el diario, si esto no había sucedido era porque los arrendatarios no habían actuado con una lógica económica racional, equívoco en el que persistían con las movilizaciones de protesta, ya que los chacareros se empeñaban "en arrancar a los dueños de campo reducciones que ellos mismos se encargan de impedir al forzar la demanda de esas tierras, como si no hubiese otras tan explotables y más baratas en la República"<sup>17</sup>. Poco

después, ante la continuidad del malestar social en las zonas rurales, retomó el análisis del problema postulando alternativas más complejas que la simple referencia a los equilibrios emergentes de la libre regulación de las fuerzas del mercado. Con motivo de nuevas movilizaciones de arrendatarios en la Provincia de Buenos Aires, sostuvo que era necesario considerar las protestas como fenómenos normales, y verlas como una expresión de la desinteligencia "que proviene de la eterna lucha entre el capital y el trabajo, de la repartición de los productos obtenidos por la acción conjunta de ambos factores (...) ¿Por qué no reconocer entonces en los conflictos un principio, un origen, una causa económica, y de acuerdo con las indicaciones de la ciencia buscar un remedio al mal?"<sup>18</sup>. Desestimaba explícitamente, por inconducentes, los intentos de dominar la agitación rural mediante la violencia policial. Esos recursos extremos aparejaban, decía, calmas pasajeras, pero luego suscitaban mayores conflictos, movimientos más intensos y consecuencias más graves. Proponía encarar el funcionamiento de nuevas formas de representación de los intereses rurales, para que las protestas entrasen en vías de negociación y fuesen menos conflictivas. Consideraba "indispensable y de urgencia crear los mecanismos económicos de los sindicatos agrícolas, dar existencia legal a sociedades dedicadas al estudio, defensa y práctica de los intereses agrarios, como se han organizado en Francia con la Ley del 21 de marzo de 1884 y se comienza a proceder en otras naciones"<sup>19</sup>.

Tal como razonaba sobre las tensiones sociales en el medio obrero, el diario diferenciaba los conflictos rurales surgidos de "protestas justificadas" de aquellos fomentados por "agitadores políticos". Atribuía esas funciones "agitativas" a la recién constituida Federación Agraria Argentina. Por eso, recomendaba al gobierno nacional y a las autoridades provinciales proceder teniendo en cuenta las diferencias existentes entre los reclamos legítimos de los trabajadores y las influencias subversivas que las tomaban como pretexto para mantener a todo trance un estado enconado de agitación<sup>20</sup>. Desde una perspectiva más estructural, en sus análisis de los conflictos en el sector rural, *La Nación* destacó en varias oportunidades el problema que surgía de la manera arbitraria en que se había realizado la distribución de tierras públicas. En 1910, había sostenido que "la tierra pública, a pesar de las severas disposiciones legales para impedir la especulación ha sido acaparada por postulantes influyentes y afortunados, que valiéndose de subterfugios la han adquirido en vastas extensiones y a precios viles. La tierra pública de las zonas más indicadas para la colonización ha sido enajenada a favoritos

que la mantienen inculta y abandonada, especulando con un valor en expectativa. Como consecuencia de estos abusos se han ingeniado proyectos de compra de tierras en secciones apropiadas, mediante combinaciones financieras aventuradas e inconvenientes que encarecían su precio y la hacían inaccesible al hombre de trabajo<sup>21</sup>. Pero las dificultades que acosaban a los productores rurales no se reducían, según *La Nación*, sólo al problema del acceso a la tierra o al precio de los arriendos. Consideraba que en el estallido de los movimientos de protesta había jugado, además, la incidencia negativa que sobre los ingresos de los agricultores tenía la acción de los intermediarios comerciales. Con una prosa cargada de realismo, que lo aproximaba a la literatura social de la época, describía los males que pesaban sobre el productor: "El engranaje terrible de los intermediarios que lo atrapaban y lo trituraban sin esperanza. Tras el proveedor que lo esquilma con sus consumos va el acaparador de granos que le impone sus ventas, para concluir en el exportador, dentro de una máquina de hierro donde deja el diezmo de sus afanes. El intermediario constituye un mal nacional, una rémora pública que pone insalvables diques a la obtención del beneficio total del trabajo"<sup>22</sup>. Pero no sólo se preocupaba por trazar un cuadro dramático de las condiciones en que se encontraban los productores, sino que proponía lo que entendía debían ser las soluciones adecuadas: "El medio de defender al agricultor de esa expoliación es ponerlo en condiciones de prescindir de los servicios prestados por los gremios y *trusts* que acechan la cosecha en el momento que el labrador más necesita recursos. La organización del crédito agrícola en condiciones suficientes, oportunas y desahogadas, lo emanciparía de la usura y de las apreturas que la favorecen, y el labrador podría sin quebrantos ni premuras esperar a que los precios se rigieran por los factores naturales del mercado"<sup>23</sup>.

### *La Nación y el Estado*

La posición de *La Nación* con respecto a la presencia del Estado en la actividad económica se ajustaba, a comienzos de la década del 10, a las ideas de la escuela liberal, que el diario solía denominar "teoría científica de la economía". Interpretando estrictamente esas doctrinas, desde los editoriales se criticaba la intervención del Estado en la economía, pero también se objetaba que no sancionara a los sectores empresarios cuyas prácticas distorsionaban la ley de la oferta y la demanda. El rol del Estado

debía consistir en respetar y hacer respetar la libertad de mercado.

*Trusts* era el término genérico con el que el diario designaba a las empresas, nacionales o extranjeras, que realizaban prácticas contrarias a la libre concurrencia. En 1910 afirmaba que los aumentos de precios eran resultado de concertaciones empresarias realizadas ante la indiferencia o, más aún, la complicidad del Estado. Con términos inequívocos sostenía que el encarecimiento de los artículos resultaba de "la conjuración de los *trusts*, que al suprimir la competencia, la gran ley reguladora de los precios, se hacen árbitros de su fijación con pruritos de usura leonina. Éste es el principal parásito del consumo tanto aquí como en los demás países donde el monopolio absorbente ha conseguido imponer sus logrerías con la complicidad de la política fiscal". Para *La Nación*, los *trusts* podían tener origen nacional o extranjero, actuar en la producción o los servicios y ser el resultado de beneficios acordados por el Estado o de controlar recursos que les permitían actuar monopolíicamente. Al referirse a los impuestos que protegían a la industria azucarera, condenaba los excesos de la protección industrial y las maniobras de los *trusts*, que provocaban el sacrificio del consumidor<sup>24</sup>. Esta misma idea se empleaba para demostrar que el único resultado del proteccionismo industrial era encarecer los productos porque engendraba el "trustismo": "Las confabulaciones insidiosas para sostener y gravar esos favores, informado en el propósito de frustrar la concurrencia interna, así como la gabela fiscal impide la externa"<sup>25</sup>. El diario criticaba que el fomento arancelario de la producción nacional hiciera caer sobre el consumidor o el país gabelas proteccionistas para favorecer a "los gremios fabriles agraciados que pueden expoliar el consumo a discreción y a mansalva, haciéndole pagar doble o triple de lo que bajo un régimen de moderada competencia valdrían los artículos"<sup>26</sup>.

También criticaba la acción del Estado cuando no controlaba con el rigor necesario a las empresas privadas concesionarias de servicios públicos. Refiriéndose a las compañías telefónicas que tenían concesiones del Municipio de Buenos Aires, un editorial sostenía que "el interés privado, más diligente y aguzado, ha encontrado manera de combinar habilidosas chicanas para sostenerse en sus pretensiones y para eludir un contralor eficaz que pudiera restringir el alcance de su imperio. Así han conseguido muchas concesiones verdaderamente leoninas que representan para el municipio una situación doblemente desventajosa por los tributos que deja de percibir y por la imposibilidad en que se halla para fiscalizar debidamente la regularidad y el precio de los

respectivos servicios públicos<sup>27</sup>. El análisis generalizaba el problema suscitado por las empresas que, decía, abusaban discrecionalmente de sus monopolios, y conjeturaba que no hubiera sido ésa su conducta si hubiesen sentido sobre sí un contralor permanente, traducido en una sanción positiva para sus excesos. *La Nación* se colocaba en portavoz de los intereses del conjunto de la población y exigía al Estado que castigara con todo el rigor del caso a las empresas que obtenían mayores ganancias gracias a posiciones monopólicas.

El proteccionismo aparecía, en 1910, como un problema de carácter internacional que limitaba las posibilidades de la Argentina de colocar su producción agraria en los mercados mundiales. Frente a esas condiciones adversas que restringían la comercialización de los bienes del país, *La Nación* juzgaba que las medidas proteccionistas adoptadas por los gobiernos del viejo continente no podían mantenerse durante mucho tiempo, ya que las mismas provocarían un encarecimiento de los alimentos consumidos por la población europea y despertarían protestas sociales que llevarían a la anulación de esas políticas. Por eso creía que las carnes argentinas tenían sus aliados y defensores más poderosos en los mismos consumidores europeos, quienes reclamarían en actitud resuelta hasta imponer sus exigencias. Pero la importancia de la apertura de nuevos mercados era también subrayada, ya que eso significaría que la Argentina "se habrá emancipado de la exclusividad de un solo cliente (Gran Bretaña) que le franquea sus puertas consultando sus propias necesidades, sin tener en cuenta las nuestras"<sup>28</sup>.

El diario planteó la urgente necesidad de mayor control estatal sobre los *trusts* ante la amenaza de los efectos negativos que podrían derivar del control del comercio de exportación de carne por parte de las empresas frigoríficas de capital norteamericano instaladas en el país. Como estrategia defensiva, proponía que el Estado facilitara la exportación de ganado en pie, para evitar así la intermediación de los frigoríficos y permitir a los ganaderos obtener mayores ingresos<sup>29</sup>.

En la relación de los productores agrarios con el Estado, *La Nación* asumió con frecuencia la defensa de los primeros contra lo que estimaba la desmedida "voracidad fiscal" del segundo. El exceso de impuestos que según el diario se aplicaba al sector agropecuario se originaba en la necesidad de satisfacer el crecimiento de los gastos del Estado. Afirmaba que tanto en el orden nacional como provincial, se votaban gastos cuantiosos cuyos gravámenes recaían sobre los agricultores y los ganaderos, haciendo del gobierno "una plaga voraz, más temible que la sequía y

la langosta, convertido en un parásito fiscal que labra sin piedad las entrañas mismas de la economía, viviendo a expensas de la producción y del consumo esquilmos<sup>30</sup>. Esas prácticas se habían visto favorecidas, según el diario, por la total falta de mecanismos de control democrático sobre la gestión del Estado.

### *El radicalismo*

Las primeras elecciones en las que fue aplicada la Ley Sáenz Peña suscitaron múltiples elogios de *La Nación*. Reclamando que se cerrara para siempre la época del fraude y de los gobiernos elegidos por reducidos cenáculos, destacaba el gran número de ciudadanos que habían concurrido a depositar sus sufragios en las elecciones de diputados de la Capital Federal de abril de 1912. Esa alta afluencia de votantes era, según afirmaba, el mejor indicador para mostrar que cuando había garantías de respeto a la voluntad de los ciudadanos libremente expresada, éstos no desertaban de las contiendas cívicas, como sucedía en épocas en que imperaban el fraude y la coacción<sup>31</sup>. Parece importante señalar que en las elecciones de diputados metropolitanos tan encomiadas por el diario habían resultado electos ocho candidatos de la Unión Cívica Radical, dos del Partido Socialista, uno de la Unión Cívica y uno de la Unión Nacional. Es decir que el libre ejercicio del sufragio universal había favorecido a un partido que se oponía al conservadorismo y, además, había otorgado representación parlamentaria a dos dirigentes socialistas. De los dos legisladores conservadores uno pertenecía a un partido de tradición mitrista y el otro a la coalición formada para apoyar a Sáenz Peña.

Lo que *La Nación* consideró un triunfo de las nuevas y alentadoras regulaciones democráticas de la vida política era visto, en cambio, como una alarmante amenaza por los dirigentes de las facciones conservadoras menos proclives a aceptar las incertidumbres comiciales. En esos grupos, el matutino creyó identificar a los incipientes enemigos de la democracia. Se trataba, según decía, de políticos conservadores que veían peligrar los privilegios y prebendas que les otorgaba su permanente control del poder. Percibía a esas facciones del conservadorismo como proclives a "intentar una vuelta atrás del progreso político del país", dado que "razonan ahora bajo la ofuscación de la derrota"<sup>32</sup>. Frente a los sectores conservadores reacios a aceptar reglas pluralistas y democráticas, en especial los que defendían la preservación de situaciones de poder a nivel provincial, el diario

no ahorra críticas, al mismo tiempo que los invitaba a deponer resistencias e iniciar "de una buena vez su buen vivir con las prácticas institucionales".

La Unión Cívica Radical exigió desde su creación que los poderes públicos garantizaran la libre expresión del sufragio y respetaran los veredictos de las urnas. En su oposición al fraude, su actitud de intransigencia y abstencionismo la diferenció de otros sectores políticos que, aun denunciando lo que consideraban una situación ilegal, participaban de los actos electorales. La gran mayoría de los dirigentes de las facciones políticas más afines al pensamiento de *La Nación* coincidían con la segunda de las actitudes mencionadas. Cuando los radicales decidieron levantar la abstención, el matutino estimó que ésa era una condición necesaria para la rápida democratización del sistema político. Esta satisfacción por la incorporación de la UCR a la vida electoral iba acompañada, sin embargo, por explícitas dudas sobre la capacidad de dicha fuerza política para actuar de modo constructivo. Frente al primer triunfo de candidatos a gobernadores de extracción radical, en la provincia de Santa Fe en 1912, el diario había iniciado lo que sería de allí en adelante una de sus reflexiones típicas sobre dicho partido. A su modo de ver, el problema que debían resolver los radicales era no sólo abandonar sus objeciones revolucionarias y su sistemático abstencionismo, sino asumirse como hombres de gobierno que debían "demostrar al país lo que valen y lo que pueden sus postulados, cuando se los saca de sus abstracciones teóricas para concretarlas en hechos reales"<sup>33</sup>. Los interrogantes sobre el radicalismo parecieron disiparse para *La Nación* a la luz de los magros resultados que, en su opinión, mostraba el primer año de labor parlamentaria de sus legisladores. Aun cuando el diario manifestó su aprobación por algunas iniciativas de los diputados radicales, al evaluar sus tareas en términos globales las estimó insuficientes y por debajo de las expectativas depositadas en ellos. Los representantes del radicalismo no habían sido capaces, decía, de plantear ideas y proyectos para contribuir efectivamente a la construcción del régimen democrático y la renovación de la cultura política<sup>34</sup>. Al buscar explicación a esa situación, atribuía las causas a la falta de un programa que expusiera claramente los objetivos políticos de la UCR y los fundamentos de su futuro accionar. Según este enfoque, el radicalismo había hecho de la pureza del sufragio prácticamente su única demanda, razón por la cual, obtenido ese reclamo, se había quedado sin propuestas. Es decir que Sáenz Peña, al realizar la originaria exigencia radical, había vaciado de sentido a esa fuerza política.

El supuesto de la ausencia de programa como una clave básica para explicar al radicalismo fue uno de los temas centrales de los análisis del diario cuando abordaba el tratamiento de ese ascendente partido político. Si bien por momentos se hacía referencia a esa carencia con propósitos críticos, la cuestión ocupaba, sin embargo, un lugar importante en las reflexiones encaminadas a tratar de explicar a sus lectores el "fenómeno radical". En algunos editoriales intentó incursionar en análisis de política comparada mediante la contraposición del Partido Socialista y su programa explícito con el radicalismo. Según afirmaba, los socialistas apuntaban a la crítica del orden social y a conquistar el apoyo de electorados ideológicamente más exigentes. En cambio, la UCR sólo objetaba el mal funcionamiento del régimen político. De allí, creía poder explicar la diferencia en los implantamientos electorales de uno y otro partido. Los socialistas habían aventajado en sufragios a los radicales en la Capital Federal en 1913 y en 1914, con el apoyo de aquellos electores más propensos a votar proyectos definidos y claridad de ideas. Los radicales, en cambio, eran fuertes en las provincias "cansadas por el monopolio ejercido por las oligarquías"<sup>35</sup>, decía el diario, donde un electorado más simple votaba por quienes prometían, sin mayor temeridad, la solución de todos los problemas políticos. También la falta de un programa explícito, de acuerdo con el punto de vista del matutino, favorecía a los radicales, en la medida que les permitía mantener dentro del partido a "hombres que profesaban las opiniones más contradictorias sobre todos los asuntos"<sup>36</sup>.

En la medida que *La Nación* creía en la existencia de tendencias al progreso y al desarrollo social ineludibles para toda sociedad, sus análisis sobre el futuro del radicalismo, en los primeros años de la incorporación de éste a las lides electorales, oscilaron entre dos modos de razonamiento distintos, cuyas dimensiones prospectivas tenían claras implicaciones políticas. Una interpretación consideraba que, como consecuencia de la mayor complejización de la sociedad, el radicalismo debía inevitablemente perder gravitación electoral, tal como sucedía en la Capital Federal. La otra remitía al carácter heterogéneo de los hombres y sectores que coexistían dentro de la UCR y deducía de dicha situación la imposibilidad de que una fuerza política de esas características consiguiera mantener su unidad; por consiguiente, debía dividirse y perder parte de su alta convocatoria electoral.

*El Partido Socialista*

Posiblemente, uno de los aspectos más interesantes del pensamiento político de *La Nación*, en la época en que se democratizó el régimen electoral, hayan sido sus reflexiones frente a los avances del Partido Socialista. La existencia de una fuerza política que cuestionaba los fundamentos del sistema social y económico sobre el que se fundaba el poder de la clase dirigente daba lugar a controvertidos análisis y a reacciones encontradas. ¿Era aceptable en el sistema de partidos que comenzaba a crearse la presencia del socialismo? ¿Podía ese partido hallar condiciones propicias para su desarrollo en la Argentina del Centenario?

Desde la particular óptica que le daba la ocupación del cargo de Jefe de la Policía de la ciudad de Buenos Aires, el coronel Ramón L. Falcón, algunos meses antes del atentado anarquista que segó su vida, incurrió en el análisis de la significación del Partido Socialista. Al referirse a enfrentamientos ocurridos con motivo de la celebración del 1° de Mayo de 1909, en los cuales la policía había reprimido a manifestantes obreros, escribió un informe al ministro del Interior, donde sostenía que no había demasiadas diferencias entre el modo de acción de los "agitadores" socialistas y de los anarquistas. En ese texto, el coronel Falcón creyó pertinente formular sus propias hipótesis sobre el Partido Socialista, al que consideraba sólo un partido político con carátula de mejoramiento obrero. Agregaba en respaldo de su afirmación: "Ya lo dijo así muy claramente el célebre sociólogo Ferri al estudiar las condiciones económicas de la clase obrera en este país, y al definir científicamente la sinrazón de ser del socialismo entre nosotros. Pueblo esencialmente agricultor, sin grandes y difundidas industrias, no alberga en su seno los mismos problemas económicos de la vieja Europa"<sup>37</sup>. Es de destacar que las afirmaciones de Falcón remitieran a consideraciones de orden socioeconómico y trataran de respaldarse teóricamente en las ideas del diputado socialista italiano Enrico Ferri, que en una reciente visita al país había sostenido, para indignación de los socialistas locales, que en la Argentina la meta fundamental del socialismo —la propiedad colectiva— no podía plantearse como objetivo político, ya que no se había desarrollado el capitalismo industrial.

Lucas Ayarragaray, diputado conservador y colaborador asiduo de *La Nación*, planteó sus ideas sobre el Partido Socialista en un artículo publicado en 1912. Colocando el problema en el contexto global de la "cuestión social", Ayarragaray minimizaba

las posibilidades de desarrollo del socialismo en la Argentina, ya que, según entendía, en el país no había mayores injusticias sociales y todos los habitantes podían enriquecerse con facilidad. Para el citado autor no existían clases, sino situaciones individuales fortuitas, razón por la cual proponía no exagerar en materia de legislación social de protección a los asalariados, actitud que según entendía podía estar motivada por "la sugestión de lecturas teóricas y la imitación inconsciente de las leyes del viejo mundo"<sup>38</sup>. La caracterización de Lucas Ayarragaray sobre el Partido Socialista guardaba total coherencia con su forma de ver la problemática social. Sostenía que "el Partido Socialista, o mejor dicho, la multitud socialista militante, compuesta en buena parte por la plebe cosmopolita arrojada a nuestras playas por las agitaciones del Viejo Continente, no está identificada con la historia política del país, y no pudo obtener aún una carta de ciudadanía e imponer sus exigencias..."<sup>39</sup>. Pero esta manera de definir al socialismo, descalificándolo como actor legítimo del juego político de la época, se veía en parte matizada en la medida que el autor consideraba que dicha agrupación comenzaba a incorporar ciudadanos a quienes reconocía valor y capacidad intelectual.

*La Nación* mostraba en sus editoriales una posición más abierta frente al Partido Socialista. Según entendía, el socialismo debía ser considerado como expresión del progreso de la vida política del país. Una demostración del reconocimiento que el diario otorgaba al Partido Socialista fue, sin duda, que para el suplemento especial programado para la celebración del Centenario, solicitara a Juan B. Justo una contribución sobre el socialismo en la Argentina. El texto no pudo ser publicado debido a la implantación del estado de sitio en virtud de la situación de conflicto social, disposición que prohibía a la prensa publicar noticias o comentarios sobre el movimiento obrero y partidos afines. El artículo fue incluido en el libro *Socialismo*, de Juan B. Justo, editado años más tarde por la Librería de La Vanguardia. En su análisis, Justo reseñaba la trayectoria del Partido Socialista y lo fundamental de sus ideas y proyectos. Entre éstos, el autor recordaba que el Partido Socialista había propuesto la reducción a 8 horas de la jornada de trabajo de los asalariados municipales, proyecto que, según subrayaba, "fue muy combatido por *La Nación*"<sup>40</sup>.

Como se señaló anteriormente, en las primeras elecciones realizadas en la Capital Federal según las disposiciones de la Ley Sáenz Peña, el socialismo logró incorporar dos de sus candidatos a la Cámara de Diputados: Juan B. Justo y Alfredo L. Palacios. Ante este avance del Partido Socialista *La Nación* expresó su

beneplácito, porque consideraba conveniente que accedieran al Parlamento los representantes del "pensamiento de las clases trabajadoras y propendan a impulsar la legislación obrera, tan descuidada hasta ahora por los legisladores"<sup>41</sup>. Parece importante destacar que los votos de los candidatos socialistas habían superado los obtenidos por los grandes dirigentes del conservadorismo, como Eliseo Cantón, Pedro Luro, Carlos Meyer Pellegrini, Luis Zuberbühler, todos ellos de la Unión Nacional; y también los de Santiago O'Farrell, Honorio Pueyrredón, Octavio Pico, José Evaristo Uriburu, postulados por la Unión Cívica. En todos estos casos se trataba de personas que pertenecían a los altos círculos del poder, el prestigio y la riqueza de la época. Sin embargo, el diario mostró satisfacción por los resultados electorales, en tanto abrían las puertas del Congreso a expresiones políticas que se preocuparían por los intereses de los asalariados.

En 1913 la Capital Federal fue convocada a elecciones para designar un senador. Nuevamente el socialismo consiguió la mayoría de los sufragios y consagró a su candidato Enrique del Valle Iberlucea. Los radicales quedaron en segundo lugar y los conservadores en el tercero. El candidato postulado por el conservadorismo fue Estanislao Zeballos. El nuevo senador socialista por la Capital era extranjero naturalizado, mientras que el frustrado aspirante conservador reunía todas las características curriculares de los presidenciables. Frente a los resultados de las elecciones senatoriales, *La Nación* buscó interpretar el hecho y, a la vez, apaciguar inquietudes suscitadas en los sectores adversos a las ideas de izquierda. Según el matutino, era necesario no alarmarse por los avances electorales del socialismo. Señalaba que la elección de Del Valle Iberlucea no significaba que la Capital fuera socialista, ni que el país se encontrara al borde de agruparse en torno a las banderas rojas. Para el diario, el socialismo había recibido coyunturalmente el apoyo de electores independientes y conservadores que no querían votar por la UCR, pero se trataba de "una paradoja que no volverá a repetirse. Argentino por definición verbal, nuestro socialismo resulta, en el hecho, un partido de extranjeros naturalizados. Y por grande que sea el extravío de la opinión, el país sabrá gobernarse al fin de cuentas"<sup>42</sup>. Para probar que los sufragios de los socialistas provenían también de sectores sociales muy poco compatibles con las ideas de izquierda, observaba que hasta las parroquias más aristocráticas de la Capital habían colaborado con su voto al predominio del partido triunfante<sup>43</sup>. Pero como el tema del socialismo siguió despertando resquemores en sectores difíciles de tranquilizar con argumentaciones de sociología electoral, el diario

volvió a abordar el problema remitiéndolo al marco global de las teorías de la evolución y el progreso social y político, en las que en última instancia siempre fundaba la mayoría de sus análisis. Frente a los temores ante el crecimiento electoral del Partido Socialista, se refirió a lo que sucedía en los países más avanzados, reconocidos como ejemplo y guía por la mayoría de los hombres de la clase dirigente. Afirmó al respecto que "en el estado actual del país la aparición del socialismo entre los factores de la liza política marca un estado del proceso evolutivo argentino. Parécenos excusado recordar que en Francia ese partido gobierna ya largo tiempo y que en Alemania o en Inglaterra o en Italia sus representantes en el Parlamento forman un grupo tan numeroso como influyente"<sup>44</sup>.

La apertura con que *La Nación* consideraba la participación del socialismo en la vida institucional indicaba una manera de analizar la evolución de las relaciones políticas nacionales, pero esa actitud no suponía simpatía hacia dicho partido de izquierda. El diario había estimado conveniente que Justo y Palacios llevaran al Congreso propuestas para ampliar la legislación obrera, pero los dos diputados socialistas no limitaron sus iniciativas a esa única temática. En sus intervenciones parlamentarias no menudearon los ataques a quienes los socialistas llamaban la "gente de clase", las objeciones a la acción de la Iglesia, las condenas a lo que denominaban las "innecesarias instituciones militares" y las denuncias contra los terratenientes. Es de destacar que, con respecto a la política impositiva, Justo no se limitaba a defender el librecambismo, tema en el cual coincidía con los sectores conservadores, sino que, además, proponía un nuevo sistema de imposición fiscal centrado en el gravamen a la renta del suelo, incluyendo cargas fiscales adicionales a los rentistas argentinos que vivían fuera del país, así como el incremento de los aranceles de los productos de importación suntuarios, entre los que incluía los automóviles.

En 1914 el Partido Socialista volvió a obtener mayoría electoral en la Capital Federal. *La Nación* encaró el tema con similar voluntad analítica a la desplegada el año precedente. Sostuvo que el acceso de nuevos representantes del socialismo al Parlamento era una cuestión que no debía inquietar; la alarma, decía textualmente, era una actitud propia de espíritus timoratos. El diario se declaraba contrario a las propuestas que integraban el ideario socialista, aun de su programa mínimo, y enumeraba, entre los aspectos que rechazaba, los proyectos de ley de divorcio y de abolición del servicio militar obligatorio. Sin embargo, sostenía que no veía mal que esas propuestas llegaran al Poder Legislati-

vo, ya que el mismo debía "ser la imagen de la conciencia del país reflejada en sus ideas contradictorias y en sus aspiraciones antagónicas"<sup>45</sup>. Al igual que el año anterior, razonaba en términos de política comparada y remitía a los avances que los partidos de izquierda lograban en los países más desarrollados. En última instancia, llamaba a sosiego a sus lectores y a aceptar los cambios, diciéndoles que "después de habernos asimilado a la civilización europea en todas sus complicaciones económicas y morales, teníamos que afrontar, tarde o temprano, sus problemas correspondientes. Los socialistas encarnan, bien o mal, tendencias y opiniones que deben estar representadas en el Congreso"<sup>46</sup>.

### *Los conservadores*

La modalidad de desarrollo de la política argentina hasta la sanción de la Ley Sáenz Peña favoreció la dispersión y división de los partidos conservadores. Los grupos de notables que dirigían fuerzas provinciales de orientación conservadora realizaban alianzas más o menos durables, pero no tenían ninguna necesidad de crear estructuras políticas unificadas. El sistema político con participación restringida, anterior a 1912, suponía la existencia de ásperos enfrentamientos entre fracciones conservadoras, que podían llegar a la lucha armada, fundados en la lealtad a jefes y en la competencia por el acceso a posiciones de gobierno nacionales o provinciales. Las confrontaciones de carácter ideológico, como las que protagonizaran liberales y católicos a fines del siglo pasado, fueron excepcionales. Por regla general, los argumentos ideológicos quedaban en un plano secundario y las alianzas se realizaban con criterios extremadamente pragmáticos.

Casi todos los principales jefes de las fracciones conservadoras pertenecían a las clases altas de las distintas regiones del país. Los estados mayores así conformados eran acompañados por individuos reclutados en otros sectores sociales que aspiraban a ocupar posiciones institucionales de importancia menor. Puede sostenerse que los políticos que disponían de fortuna y de prestigio social, con independencia de su participación en las esferas del poder, se hallaban en distinta situación que muchos de sus seguidores, a quienes, empleando términos de Max Weber, cabe caracterizar como personas que "vivían de la política". Sergio Bagú cita el diario *La Prensa* del 11 de diciembre de 1899, que describía con elocuencia a los políticos de segundo rango: "Las legislaturas de provincia están llenas de los parientes famélicos de las primeras autoridades, de logreros pensionados de

todos los partidos, de comodines de las situaciones más incompatibles"<sup>47</sup>. En sus cúspides, los principales partidos conservadores provinciales de comienzos de la década del 10 contaban en varios casos con dirigentes prestigiosos y disponían de electorados significativos. En las primeras elecciones provinciales realizadas con garantías de respetar la voluntad de los votantes, aun cuando todavía no había entrado en vigor la Ley Sáenz Peña, el conservadorismo de Santa Fe fue derrotado por escaso margen por los candidatos radicales. En Córdoba, Ramón Cárcano, una de las figuras más progresistas del conservadorismo de la época, consiguió acceder en 1912 a la gobernación imponiéndose sobre el candidato de la UCR. En la provincia de Buenos Aires el conservadorismo, cuyo jefe era el gobernador Marcelino Ugarte, tenía gran gravitación a nivel nacional y contaba con un sólido aparato, resultado de la fusión de un partido conservador con una escisión del radicalismo dirigida por Bernardo de Irigoyen.

En las elecciones de 1914 *La Nación* había expresado su simpatía por los candidatos del partido Unión Cívica, que disputaban con el radicalismo y el socialismo las bancas de legisladores por la Capital Federal. El diario sostuvo que el partido Unión Cívica expresaba "los intereses más vitales y genuinos de la República; representa lo que se ha dado en llamar la opinión conservadora, en el buen sentido de la palabra, esto es la opinión que quiere el progreso de las instituciones sin perturbar la sociedad"<sup>48</sup>. Pero las manifestaciones de afinidad con ese partido político no implicaban que el matutino aceptase ser considerado como su portavoz oficial u oficioso. Con motivo de las declaraciones de un legislador, que lo identificaba con las autoridades de la Unión Cívica, el diario fue harto elocuente al deslindar toda asociación con cualquier fuerza partidista: "No es *La Nación* un diario de la Unión Cívica, y mucho menos su órgano oficial. Nuestras apreciaciones no interpretan el juicio, ni están sometidas al control de ningún comité, nuestras simpatías o nuestras resistencias, no nos obligan a asimilarnos, ni a empecinarnos, con o contra las actuales o venideras fuerzas de opinión (...) fuimos un diario de partido, abierta y francamente, en días de grandes y famosas contiendas, pero dejamos de serlo más, cuando el genio de bien y virtud que inspiraba nuestra prédica dio por cerrado el ciclo de su acción"<sup>49</sup>.

Al aproximarse las elecciones presidenciales, surgió la propuesta de unificar las fuerzas conservadoras en torno al denominado Partido Demócrata Progresista. La iniciativa encontró resistencia, sobre todo, en el conservadorismo de la Provincia de Buenos Aires. El gobernador Ugarte fue la cabeza más visible de

esa oposición, que comenzó cuestionando la designación de los candidatos a presidente y vice del Partido Demócrata Progresista, Lisandro de la Torre y Alejandro Carbó. Esta negativa de sectores conservadores a la formación del nuevo partido tuvo eco entre muchos legisladores, y sobre la hora de las elecciones de 1916 recibió el apoyo casi explícito del presidente Victorino de la Plaza.

Las declaraciones de neutralidad partidaria no fueron óbice para que, al aproximarse las elecciones presidenciales de 1916, el matutino volviera a empeñarse en la delicada tarea de preservar su imagen de independencia, pero, a la vez, sin ocultar su simpatía por determinadas corrientes del conservadorismo. Así, el intento de dirigentes y legisladores de los distintos partidos conservadores de formar, como fuerza unificada, el Partido Demócrata Progresista, recibió el beneplácito de *La Nación*. Sugiriéndoles cuáles debían ser sus próximos pasos, aconsejaba a los dirigentes del nuevo partido designar candidatos presidenciales, dado que "la concentración de fuerzas conservadoras conocida bajo el nombre de Partido Demócrata Progresista era ya bastante fuerte y compacta como para convocar una asamblea de delegados que fijara su fórmula de combate"<sup>50</sup>. Pocos días después, ante la posición de algunos legisladores conservadores que se resistían a apoyar una fórmula presidencial unificada, el diario los criticó y sostuvo que eran simples unidades personales, sin acción popular ni prestigio, que ocupaban la escena política como últimos resplandores de focos ya extinguidos; y agregaba, con vocación admonitoria: "Entre el Partido Demócrata Progresista y los miembros del bloque (de legisladores conservadores) que se oponen a la fórmula de concentración, el juicio público se pronuncia decisivamente a favor del primero"<sup>51</sup>.

A pesar de los esfuerzos realizados para unificar a las fuerzas conservadoras, en las elecciones presidenciales de 1916 éstas se mantuvieron divididas en dos binomios que disputaban la adhesión de las franjas electorales que no simpatizaban con el radicalismo. *La Nación* no disimuló sus preferencias por la fórmula De la Torre-Carbó sostenida por el Partido Demócrata Progresista. El proyecto de plataforma propuesto por la democracia progresista, vivamente elogiado por el diario, contenía considerables modificaciones en el pensamiento del conservadorismo argentino. Partidario decidido de la democracia en lo político, el proyecto demócrata progresista propendía en lo social a la mayor participación del Estado para mejorar las condiciones de vida de las clases populares. Las actividades del Estado debían cubrir aspectos relacionados con el desarrollo industrial y estimular la producción de energía, así como fomentar por la vía del crédito y la

política monetaria el crecimiento de las actividades económicas consideradas más importantes para asegurar la mayor independencia del país. Se incluía, además, la necesidad de crear una flota mercante nacional para asegurar los intercambios comerciales con el resto del mundo. El programa había sido propuesto en la convención del Partido Demócrata Progresista por Carlos Ibaguren, quien muchos años después, con referencia a las ideas centrales del mismo, sostuvo que las iniciativas allí contenidas no diferían de las que inspiraron a los gobernantes que rigieron el país hasta 1955<sup>52</sup>. Otra figura del conservadorismo, José María Bustillo, evaluó ese mismo programa como de "marcada tendencia izquierdista que trajo el descontento entre los que tenemos convicciones de doctrinaria ideología conservadora"<sup>53</sup>.

Para con los dirigentes y legisladores conservadores que se negaban a converger en la democracia progresista, *La Nación* utilizó términos singularmente críticos. Sobre la eventual fórmula presidencial de los conservadores opuestos a Lisandro de la Torre, que en un momento se supuso estaría integrada por el binomio Güemes-Ugarte, el diario dijo que había sido "incubada por artificiosos medios" y que "no ha recibido el calor del pueblo (...) aparece ante los ojos del país como una fórmula vacía, expresión tangible de las situaciones provinciales que tratan de abroquelarse contra el peligro del momento"<sup>54</sup>.

### La Nación: 1909-1916

*En el período analizado, el pensamiento político de La Nación reveló un alto grado de optimismo con respecto a las posibilidades de resolver de una manera democrática y moderna los diferentes problemas que enfrentaba la sociedad argentina. El diario coincidía en su visión de lo político y de lo social con las orientaciones de los sectores más progresistas de la clase dirigente. En términos sociológicos, y de acuerdo con la conceptualización desarrollada por Alain Touraine<sup>55</sup>, lo que caracteriza a una clase dirigente es su capacidad de proponer y llevar a la práctica un proyecto de sociedad —en lo ideológico, lo político y lo económico— predominantemente destinado a beneficiar y ampliar sus propios intereses, pero, al mismo tiempo, susceptible de permitir y estimular el desarrollo y la mejora de la situación de un conjunto más amplio de sectores sociales. De este modo se puede crear un relativo consenso en torno a las metas societarias más generales, lo que no implica, por supuesto, la ausencia de conflictos. La capacidad de dirección de una clase dirigente se manifiesta, justamente, en la disposición*

para crear instituciones políticas, condiciones socioeconómicas e instancias culturales con el fin de tratar de neutralizar y resolver los conflictos planteados por los sectores menos favorecidos o perjudicados por el modelo societario vigente. Sólo en situaciones límite la represión estatal aparece como el último, y extremo, recurso para asegurar el orden social. El concepto de clase dirigente no hace referencia a un actor colectivo homogéneo y sin conflictos internos. En su seno se libran competencias económicas, debates ideológicos y enfrentamientos políticos. Esos antagonismos existen en tanto los miembros de la clase dirigente comparten los mismos valores, y la unidad social no se quiebra en la medida que todos acepten ciertas reglas de juego para dirimir las tensiones y diferencias. Una matriz explicativa que combine las características de los conflictos internos de una clase dirigente con los efectos, igualmente conflictivos, de las resistencias a sus proyectos emergentes de la acción de los restantes sectores sociales, es indispensable para formular un análisis adecuado de la situación que aquí nos interesa.

En sus notas de viaje de la época del Centenario, Georges Clemenceau escribió que a los propietarios de La Nación les parecía adecuado comparar su publicación con *Le Temps*, por entonces un prestigioso diario francés<sup>56</sup>. De *Le Temps*, el político socialista Jean Jaurés había dado una breve, terminante y reduccionista definición: es la burguesía hecha diario<sup>57</sup>. Volviendo a la conceptualización de una clase dirigente, cabe señalar que si esa categoría explicativa resulta útil para hacer inteligibles las características de la acción societaria de los sectores predominantes en la política, la economía y la ideología, así como las relaciones de los mismos con el resto de la sociedad, es a condición de discernir debidamente las diferentes funciones o roles de cada uno de esos sectores en los campos específicos de desempeño de sus prácticas. No es subsumiendo a La Nación en una hipotética burguesía compacta que podrían explicarse sus ideas políticas durante la etapa analizada. En tanto productor y difusor de ideas sobre la "cuestión social", el matutino se colocaba en posiciones sensiblemente más avanzadas que los sectores empresarios. Coincidió, en cambio, con los políticos e intelectuales más abiertos a las concepciones consensuales y modernas de regulación del conflicto social. Con los políticos discrepaba cuando, frente a episódicas alteraciones del orden público, éstos optaban por adoptar disposiciones extremadamente represivas, violatorias de los principios constitucionales según su óptica. La gran convergencia de La Nación con los políticos conservadores se dio en torno a la democratización del régimen político, con la reforma de la legislación electoral. Que el suyo no

era un discurso decodificable exclusivamente en términos ético-políticos, lo revelan sus posicionamientos en los conflictos entre partidos y la manera, directa en algunos casos e implícita en otros, de definirse por determinadas candidaturas. En ese aspecto, en el sexenio estudiado, los cambios fueron igualmente significativos. Entre el apoyo casi solitario a Guillermo Udaondo, tan bien ironizado por Paul Groussac, y la adhesión a Lisandro de la Torre, existió un periplo en las preferencias electorales del diario fundado en referencias a legitimidades de distinta naturaleza. Si había una temática especialmente difícil para despartidizar las ideas, ésta era, naturalmente, la que se ocupaba de la reflexión sobre candidatos y partidos.

La Nación no tenía una posición lineal y simple en el análisis de los partidos políticos presentes en la arena electoral inaugurada en 1912. A los conservadores lo unía un vínculo contradictorio: compartía sus lineamientos doctrinarios más generales, pero desconfiaba de buena parte de sus dirigentes. Posiblemente, la mayor proximidad con la comunidad conservadora había dejado en los hombres del diario más rencillas personales con esa corriente que con cualquier otra. La animadversión hacia los caudillos conservadores del interior se encontraba en estricta continuidad con la tradición del partido de Mitre, esencialmente porteño. El radicalismo le suscitaba a la reflexión del matutino una ambigüedad cuya raíz, probablemente, no era ajena al origen de esa fuerza política. Desprendimiento de la Unión Cívica, los radicales fueron la creación política más exitosa de la época y podía reprochársele, en consecuencia, haber contribuido al debilitamiento del originario tronco compartido con los seguidores de Mitre. Desde 1912, comenzaron a sumarse a las filas de la UCR algunos importantes dirigentes del mitrismo; el más célebre fue Honorio Pueyrredón, y esto debió reactivar los enconos lógicos de quienes hasta hacía poco habían compartido con los "herejes" tribunas y comités políticos, al verlos convertirse en figuras destacadas del partido radical. El mismo Honorio Pueyrredón, terrateniente de la Provincia de Buenos Aires, fue el primer ministro de Agricultura y Ganadería del gobierno de Hipólito Yrigoyen. Pero, acorde con las referencias empíricas contenidas en esos mismos argumentos, es notorio que el radicalismo presentaba para La Nación ciertas garantías en virtud, justamente, del origen social de muchos de sus dirigentes más importantes. En un partido sin programa y sin discusiones ideológicas profundas, las afirmaciones del diario acerca de la existencia de sectores radicales más confiables derivaba, aunque no exclusivamente, de la percepción del clivaje social presente en su dirigencia. Marcelo T. de Alvear resumía indudablemente, en el grado

más elevado, los sistemas de predisposición cultural e ideológica apropiados para convertir en aceptable para el matutino a un dirigente radical. Fuerza política con estrategia de catch-all party<sup>58</sup>, precursora y avant la lettre, la UCR prefería no perder apoyos por explicitar propuestas programáticas, o bien, como creía el diario, lisa y llanamente carecía de proyectos. En todo caso, esa ausencia fue el gran motivo de crítica de La Nación, formulado en nombre de la modernización política y de la construcción efectiva de un régimen democrático. Con respecto al Partido Socialista, la posición del diario era menos compleja. Celebraba el crecimiento de su influencia electoral a la vez como un costo y como un fruto del progreso y rechazaba la mayoría de los puntos de su programa, pero sin negarle el derecho a competir libremente por las preferencias de la ciudadanía. Un partido que introducía en el Congreso las demandas obreras era bien recibido por los sectores más progresistas de la clase dirigente, familiarizados con los desarrollos políticos de los países más modernos. Esta amplitud de criterios se veía favorecida, seguramente, por el hecho de que el socialismo era un partido de implantación casi exclusiva en la Capital Federal, donde competía exitosamente con el radicalismo. En el mundo obrero, la presencia del Partido Socialista tenía, también, la característica de una alternativa relativamente aceptable en comparación con el sindicalismo de origen anarquista. En los márgenes del sistema sólo quedaban los propagandistas de la acción directa, quienes debían ser excluidos y perseguidos, en opinión del diario, por sus prácticas violentas, pero no por sus principios doctrinarios. Todos los aspectos del pensamiento político de La Nación llevaban a confiar en el progreso de la institucionalización democrática, y por ello invitaban a esperar el perfeccionamiento de todos los partidos, incluidos aquellos más distantes de sus propias afinidades.

El diario concebía la relación entre el Estado y la sociedad en los términos clásicos de la teoría liberal. En tanto garante del interés general, al Estado le correspondía neutralizar los abusos y desviaciones provenientes de actores de la sociedad que podían beneficiarse con la distorsión del libre funcionamiento del mercado. Esta matriz de decodificación de los hechos sociales daba a La Nación una especial sensibilidad para descubrir trusts y monopolios capaces de perjudicar a la sociedad en su conjunto. Por otra parte, sus análisis no descuidaban la evolución de la esfera estatal, cuya eventual ampliación, fuese de personal o de funciones, juzgaba peligrosa. La idea de un Estado "minimal", propia de la época anterior a la Primera Guerra Mundial, se comenzó a poner en duda en el seno de la clase dirigente argentina a partir de los efectos de dicha conflagración sobre la economía del país.

Ese cambio de concepciones tuvo su inicial e importantísima expresión en el programa de la coalición conservadora formada en torno a la candidatura de Lisandro de la Torre. Ésa fue la primera vez que las ideas intervencionistas en lo social y en lo económico fueron sistematizadas en una plataforma electoral en la Argentina. En condiciones políticas donde el tema del programa, en buena medida por la actitud radical de negar su necesidad, era una cuestión de debate, sería un error considerar la plataforma demoprogresista como un simple texto de circunstancia escrito pour la galerie. Si bien es cierto que la lucha entre facciones conservadoras ocupó lo central de la atención en las vísperas de la elección presidencial de 1916, los hechos posteriores se encargaron de demostrar la profundidad de las nuevas ideas y los cambios de perspectiva en la definición del problema estatal. A La Nación le correspondió en la etapa siguiente impulsar en muchos aspectos la discusión favorable a la ampliación de la esfera de intervención del Estado.

#### NOTAS

<sup>1</sup> Octavio R. Amadeo: *Vidas Argentinas*, Bernabé y Cía. Editores, Buenos Aires, 1939, pág. 112.

<sup>2</sup> Amadeo: Ob. cit., pág. 115.

<sup>3</sup> Fermín V. Arenas Luque: *Roque Sáenz Peña. El presidente del sufragio libre*, s/e, Buenos Aires, 1951, pág. 199.

<sup>4</sup> Paul Groussac: "Candidato para Presidente de la República", en *Sáenz Peña. La campaña política de 1910*, Tomo I, publicado por Unión Nacional, Establecimiento Gráfico G. Pesce, Buenos Aires, 1910, pág. 115.

<sup>5</sup> *La Nación*, 4-10-1910, pág. 10.

<sup>6</sup> *La Nación*, 7-10-1910, pág. 10.

<sup>7</sup> *La Nación*, 12-10-1910, pág. 10.

<sup>8</sup> "Proyecto de Ley Nacional del Trabajo (Segunda presidencia del general Julio A. Roca, ministerio del Dr. Joaquín V. González). Mensaje del Poder Ejecutivo", en Cayetano Carbonell (comp.), *Orden y Trabajo*, Tomo I, Librería Nacional, J. Lajouanne y Cía., Libreros Editores, Buenos Aires, 1910, pág. 251.

<sup>9</sup> Juan Bialek Massé: *Informe sobre el estado de la clase obrera (1904)*, reedición de Hyspamérica, Buenos Aires, 1985, pág. 22.

<sup>10</sup> Boletín del Departamento Nacional del Trabajo, N° 5, Buenos Aires, 1908, págs. 179-191.

<sup>11</sup> Marco M. Avellaneda: *Del camino andado (Economía social argentina)*, Buenos Aires cooperadora editorial limitada y agencia general de librería y publicaciones, Buenos Aires, 1919, págs. 167-198.

- 12 *La Nación*, 19-10-1910, pág. 10.
- 13 *Ibid.*
- 14 *Ibid.*
- 15 *La Nación*, 7-11-1911, pág. 8.
- 16 *La Nación*, 13-5-1912, pág. 5.
- 17 *La Nación*, 10-8-1912, pág. 12.
- 18 *La Nación*, 3-3-1913, pág. 9.
- 19 *Ibid.*
- 20 *La Nación*, 7-4-1913, pág. 9.
- 21 *La Nación*, 18-10-1910, pág. 9.
- 22 *La Nación*, 11-3-1913, pág. 9.
- 23 *La Nación*, 12-3-1913, pág. 10.
- 24 *La Nación*, 11-1-1911, pág. 9.
- 25 *Ibid.*
- 26 *La Nación*, 1-6-1912, pág. 11.
- 27 *La Nación*, 5-1-1911, pág. 9.
- 28 *La Nación*, 4-10-1910, pág. 10.
- 29 *La Nación*, 24-5-1911, pág. 9.
- 30 *La Nación*, 20-1-1911, pág. 7.
- 31 *La Nación*, 7-4-1912, pág. 16.
- 32 *La Nación*, 17-4-1912, pág. 9.
- 33 *La Nación*, 1-4-1912, pág. 9.
- 34 *La Nación*, 20-7-1913, pág. 11.
- 35 *La Nación*, 2-4-1914, pág. 12.
- 36 *La Nación*, 16-4-1914, pág. 10. La ausencia de un programa que sistematizara los objetivos del partido también había generado discusiones en el seno del radicalismo. Esa inquietud por una mayor definición del perfil ideológico de la UCR tuvo uno de sus portavoces, a fines de la primera década del siglo, en el dirigente Pedro Molina, quien polemizó sobre el tema con Hipólito Yrigoyen. Es interesante destacar que, para reforzar sus argumentos sobre la vaguedad de los proyectos políticos del radicalismo, *La Nación* apuntó como ejemplo elocuente de esa situación, justamente, la falta de ideas de Pedro Molina. En el editorial citado, señalaba que "el Dr. Pedro Molina creyó encontrar la fórmula: era el libre cambio. Pero fácilmente se echa de ver que una doctrina de política fiscal no basta para dar unidad a un partido, y que es absurdo suponer que todas las cuestiones que agitan la conciencia de un país pueden reducirse a los límites estrechos de una cuestión aduanera".
- 37 Ramón L. Falcón: "Nota al ministro del Interior sobre los sucesos del 1º de Mayo de 1909", datado mayo 11 de 1909, en Cayetano Carbonell (comp.), ob. cit., Tomo II, pág. 177.
- 38 Lucas Ayarragaray: artículo reproducido en *Cuestiones y problemas argentinos contemporáneos*, Talleres Gráficos Argentinos L.J. Rosso, Buenos Aires, 1937, pág. 23.
- 39 *Ibid.*, pág. 37.
- 40 Juan B. Justo: *Socialismo*, Tipografía La Vanguardia, Buenos Aires, 1920, pág. 108.
- 41 *La Nación*, 19-4-1912, pág. 9.

<sup>42</sup> *La Nación*, 8-4-1913, pág. 10.

<sup>43</sup> *La Nación*, 9-4-1913, pág. 8.

<sup>44</sup> *La Nación*, 11-4-1913, pág. 9.

<sup>45</sup> *La Nación*, 3-4-1914, pág. 12.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Sergio Bagú: *Evolución histórica de la estratificación social en la Argentina*, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 1961, pág. 43.

<sup>48</sup> *La Nación*, 22-3-1914, pág. 11.

<sup>49</sup> *La Nación*, 3-4-1914, pág. 12.

<sup>50</sup> *La Nación*, 20-7-1915, pág. 8.

<sup>51</sup> *La Nación*, 24-7-1915, pág. 9.

<sup>52</sup> Carlos Ibarguren: *La historia que he vivido*, Biblioteca Dictio, Buenos Aires, 1977, pág. 410.

<sup>53</sup> José María Bustillo: *Mi rumbo cívico*, Francisco Colombo Editor, Buenos Aires, 1942, págs. 25-26.

<sup>54</sup> *La Nación*, 29-3-1916, pág. 10.

<sup>55</sup> Alain Touraine: *Production de la société*, Seuil, Collection Sociologie, Paris, 1973, pág. 30.

<sup>56</sup> Georges Clemenceau: *Notas de viaje por América del Sur*, Ediciones Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, pág. 117.

<sup>57</sup> La caracterización de Jean Jaurès está citada en Jean G. Padioleau: *Le Monde et le Washington Post*, Presses Universitaires de France, Paris, 1985, pág. 21.

<sup>58</sup> La estrategia del *catch-all party* en el plano ideológico es definida por Kirchheimer en los siguientes términos: "Dirige su atención ante todo hacia el electorado, sacrifica, por tanto, una penetración ideológica más profunda a una irradiación más amplia y a un éxito electoral más rápido". Otto Kirchheimer: "El camino hacia el partido en todo el mundo", en Kurt Lenk y Franz Neumann eds.: *Teoría y sociología crítica de los partidos políticos*, Editorial Anagrama, Barcelona, 1980, pág. 331.

## II

# La oposición al gobierno de Hipólito Yrigoyen

En el curso del proceso electoral que en 1916 finalizó con la victoria de la Unión Cívica Radical y la designación de Hipólito Yrigoyen para ocupar la primera magistratura, *La Nación* combinó su preferencia por los conservadores con periódicas declaraciones de neutralidad política. El día de los comicios, el diario reiteró su posición equidistante de los candidatos en pugna en términos elocuentes: "Asistimos sin ningún interés de clase o de partido a esta contienda que será memorable (...) cualquiera sea la fórmula triunfante, será la fórmula consagrada por la mayoría del pueblo" <sup>1</sup>. Así, si bien no había ocultado el descontento que le producía la candidatura de Yrigoyen, una vez llegado el momento de las elecciones prefirió colocarse en el rol de espectador y trató de distanciarse de las fuerzas en pugna. A la luz de los cómputos electorales, reconoció la legitimidad de la victoria del partido radical.

Para los adversarios del radicalismo que trataban de analizar con objetividad el éxito obtenido por dicho partido en las urnas, el atractivo carismático de Yrigoyen no aparecía como razón suficiente para explicar su triunfo. Lisandro de la Torre se contó entre quienes trataron de relacionar el ascenso radical con las "divisiones y miserias" de sus contrincantes políticos, que hicieron, según su opinión, que "millares de personas que encontraban peligroso y absurdo llevar a la presidencia de la República a un hombre que no ha expuesto jamás una idea de gobierno, concluían por preferir esa solución antes de entregar el gobierno a los representantes del pasado, o a un hombre como yo, que sólo podía triunfar apoyado en fuerzas antagónicas, expuestas a una rápida dislocación" <sup>2</sup>. En la misma perspectiva se colocaba el análisis de *La Nación*: "El triunfo del radicalismo se debe, pues, más al desacierto de sus adversarios que a la propia virtud de sus elementos, cuya vaga estructura, y la indefinida sustancia

que le es propia, no explican la coherencia aparente que presenta como expresión de la vida colectiva" <sup>3</sup>. Pero no dejaba de subrayar que el radicalismo llegaba al poder político como resultado de la voluntad mayoritaria de la población. Frente a esta insoslayable constatación inauguraba, ya en 1916, su reflexión sobre las situaciones creadas cuando las mayorías electorales llevan al gobierno hombres o fuerzas políticas que podían, en su opinión, no estar a la altura de las tareas, desafíos e idoneidad requeridos para dirigir el Estado. Sintetizaba así su posición: "Sabemos que existirá un gobierno traído por una mayoría popular, que a falta de acertadas soluciones políticas o estadistas, se ha pronunciado en favor de una solución doctrinaria simplista; ignoramos totalmente lo que piensa, lo que quiere y lo que puede" <sup>4</sup>.

Aunque los resultados de la elección presidencial dieron mayoría de sufragios al radicalismo, dicha fuerza política carecía del número suficiente de votos en el Colegio Electoral para consagrar su fórmula. Quedó abierta, en consecuencia, la posibilidad de que Yrigoyen no fuese designado Presidente. Como ni la UCR ni las fracciones conservadoras tenían mayoría propia en el Colegio, el rol de árbitro quedó en manos de los electores del radicalismo disidente de la Provincia de Santa Fe. En los debates que libró el conservadorismo sobre la conveniencia de bloquear el acceso de Yrigoyen a la presidencia, *La Nación* expresó claramente su disconformidad con tal estrategia. Opinaba que se debía aceptar que el jefe radical asumiera la titularidad del Poder Ejecutivo por dos razones que no remitían a una cuestión de afinidad política. En primer lugar, se trataba de no dar a los radicales renovados justificativos para asumir actitudes conspirativas que podían desembocar en nuevos intentos revolucionarios. Por otra parte, aseveraba que, al demostrar su incapacidad para gobernar, el radicalismo perdería seguramente su prestigio popular y su atractivo electoral <sup>5</sup>. No es posible evaluar cuánto pesó la opinión de *La Nación* en la determinación de la orientación de los conservadores en la coyuntura que finalizó con la designación de Yrigoyen. Pero parece interesante destacar que Federico Pinedo, observador atento y participante activo de la vida política de entonces, consideró la posición asumida por el matutino como muy importante para debilitar las tratativas realizadas por dirigentes del conservadorismo para elegir en el Colegio Electoral otro postulante y evitar así el ascenso de Yrigoyen <sup>6</sup>.

El diario estimaba que la UCR se había impuesto en las elecciones nacionales no sólo por el atractivo que ejercía Yrigoyen sobre parte del electorado, sino también debido a las insuficiencias demostradas por los partidos conservadores. Desde ese

punto de vista, vaticinaba el seguro fracaso de la gestión radical y el consiguiente desencanto y frustración de sus votantes. Caba, en consecuencia, a los conservadores, organizarse mejor políticamente para recoger los frutos de la incapacidad gubernativa de la UCR. Parece pertinente subrayar que el diario no ponía en duda la racionalidad de los electores, de quienes esperaba que, si bien habían dado su sufragio a Yrigoyen, evaluaran luego su gestión de gobierno y, en caso de hallarse descontentos, cambiaran sus preferencias. De acuerdo con esta manera de ver el problema, la popularidad del radicalismo no duraría mucho tiempo, ya que "la opinión pública suele ser tanto más severa cuanto menos equivoco ha sido su favor" <sup>7</sup>. Dicho en otros términos, consideraba que existía en el electorado capacidad para juzgar a los candidatos de su preferencia a la luz de su gestión de gobierno, más allá de la adhesión ferviente o la fascinación circunstancial que éstos despertasen en el momento de ser ungidos. Es notorio que este reconocimiento de la racionalidad de los electores formaba parte de la visión global del diario, tributaria de una concepción de optimismo democrático, sobre la vida política del país y su esperable evolución.

Al cumplirse el primer año de la presidencia de Yrigoyen, *La Nación* realizó un balance totalmente negativo de su gestión. Consideró que ya se estaba frente a una experiencia que demostraba fehacientemente la incapacidad de los radicales para conducir los negocios públicos. Entre otros aspectos, se señalaba que el criterio para designar funcionarios había sido estrechamente tendencioso, razón por la cual se poblaban las altas y medianas responsabilidades de la administración con personas carentes de conocimientos y de eficiencia. Ese modo de reclutamiento para ejercer funciones públicas resultaba, según el diario, agravado por la falta de programa y de objetivos claros del radicalismo. Para tratar de disipar cualquier sospecha sobre eventual subjetividad o parcialidad de sus aseveraciones, invitaba a recabar opiniones disconformes con la gestión radical: "Óigase a los militares sobre el ejército, a los marinos sobre la marina, a los profesores sobre la enseñanza, a los partidos sobre la política (...) y se tendrá la comprobación que en todas partes se acusa a los funcionarios de una incompetencia desastrosa" <sup>8</sup>.

No es casual que entre los sectores o categorías sociales invocados para testimoniar sobre la gestión yrigoyenista estuviesen ausentes los que globalmente cabría denominar sectores asalariados. En efecto, el diario afirmaba con frecuencia que el gobierno favorecía y apoyaba las reivindicaciones y movilizaciones de las organizaciones sindicales de la época. Esa orientación era

caracterizada como "una tendencia a estimular, aun contemporalizando con sus peores excesos, los movimientos gremiales y sus derivados más o menos indirectos"<sup>9</sup>.

*La Nación* abordó a menudo la relación entre el gobierno radical y los sectores económica y socialmente menos favorecidos, y dio respuestas diferentes, según los casos, a una actitud oficial juzgada demasiado complaciente frente a sus reclamos y expectativas. Considerados en conjunto, es posible distinguir varias líneas principales en esos análisis. Por momentos se privilegiaban las explicaciones que ponían énfasis en lo que denominaba intereses partidistas o electorales de la UCR. En ese sentido, sostenía que los radicales actuaban movidos por motivaciones demagógicas al aceptar indiscriminadamente demandas populares, convencidos de que esa actitud les sería redituable en términos electorales. Otra línea de interpretación remitía las orientaciones de los funcionarios radicales a un sentimentalismo que revelaba un total desconocimiento de la economía y de las condiciones generales en que debían desenvolverse las relaciones laborales. Una tercera forma de reflexionar sobre el tema prefería hacer hincapié en la parsimonia de los funcionarios que, para evitar comprometerse con la gestión de los conflictos sociales, optaban por no intervenir a tiempo para controlarlos y dejaban así que las protestas crecieran en intensidad y organización. En fin, en otros casos adoptaba el enfoque de suponer que, después de tantos años de conspiraciones y amagos revolucionarios, en muchos radicales había quedado cierta simpatía hacia todos aquellos que luchaban contra el poder y el orden, y de allí sus excesivas consideraciones y sus eventuales afinidades con los gestores y dirigentes de las protestas sociales.

En la segunda mitad de 1917, ante la multiplicación de movimientos huelguísticos —ferrocarriles, petróleo, frigoríficos—, *La Nación* reiteró sus reclamos de mayor energía por parte del gobierno. A partir de sus dudas sobre la capacidad y la voluntad de los radicales para hacer frente a los conflictos sociales, el diario fue agudizando el tono de sus críticas. Con marcado catastrofismo, frente al desarrollo de la huelga de obreros ferroviarios, que incluyó acciones de sabotaje, decía: "Cuando un gobierno se revela impotente para asegurar el orden público y el imperio del derecho y de la ley, ha perdido a su vez la razón de existir"<sup>10</sup>. Cuando a los conflictos urbanos se sumaron los protagonizados en la campaña por desocupados rurales, sus análisis no vacilaron en anunciar la inminente descomposición del tejido social por entera responsabilidad de la impericia gubernamental. El diario alertaba contra la acción de "un grupo alzado de quinien-

tos individuos que han estado a punto de saltar una población (...) y su actitud será imitada en otros puntos del país si el gobierno no procede con severidad ejemplar (...) El país está inficionado por un fermento de anarquía que mantiene a la opinión sobresaltada y atónita, ante la impasibilidad con que el gobierno contempla estas aberraciones”<sup>11</sup>. En ese clima, descripto con trazos tan dramáticos, los representantes de la Sociedad Rural Argentina concurren a entrevistar al presidente Yrigoyen para expresarle sus preocupaciones por las consecuencias de una huelga de los obreros de los frigoríficos. La delegación no fue recibida por el primer magistrado. Ante esa actitud, *La Nación* lamentó que la Sociedad Rural no hubiera “merecido, empero, la atención con que son tratados los cabecillas de las huelgas, cuyas querellas son acogidas por el gobierno y satisfechas con resoluciones fulminantes contra las empresas”<sup>12</sup>.

Las críticas de *La Nación* a la política social del gobierno radical no tenían como único objetivo reclamar mayor rigor para los movimientos de protesta, sino también exigir de las autoridades la creación de nuevos y modernos sistemas de regulación de los conflictos laborales. Para el diario, era lógico que existieran diferencias entre los intereses de los empleadores y los del trabajo. Si bien hacía referencia, en algunos casos, a la acción de supuestos “agitadores profesionales”, justificaba la eclosión de muchos conflictos sociales por la legitimidad de las reivindicaciones obreras, que pedía estudiar con seriedad. Al mismo tiempo, pedía al Estado que asumiera un rol equidistante de las partes en pugna. Para ello consideraba necesario crear instituciones especializadas para arbitrar los problemas sociales. Como en muchos otros aspectos, sugería al gobierno que tomara como ejemplo la legislación de los países más avanzados, la adaptara en la medida de lo necesario a las peculiaridades del país e implantara de una vez por todas las bases de un régimen orgánico en los conflictos del trabajo<sup>13</sup>. Estas ideas, favorables a la sanción de leyes sociales y la implementación de instancias estatales para el arbitraje de los conflictos, coincidían en múltiples aspectos con las que Joaquín V. González había defendido durante las dos décadas precedentes como ministro y legislador, y en diversos medios de prensa. González, que mantenía sus enfoques amplios y progresistas en el modo de proponer políticas sobre la “cuestión social”, se había incorporado a *La Nación* en calidad de editorialista desde 1916.

Junto con sus críticas punzantes, por momentos lapidarias, contra el gobierno de Yrigoyen, *La Nación* aclaraba con frecuencia que sus objeciones no comportaban un desconocimiento del adelanto que significaba para el país el funcionamiento de las insti-

tuciones democráticas. En especial, el respeto al sufragio universal motivaba su explícita satisfacción. Así, luego de las primeras elecciones legislativas realizadas bajo la administración radical, en las que triunfó el oficialismo, destacaba que por encima de todo sentido partidista cabía reconocer la corrección y limpieza del acto electoral, y que eso debía considerarse un testimonio honroso para la democracia argentina. El respeto por las preferencias políticas de la mayoría de los ciudadanos era presentado en el análisis como una condición esencial para el futuro de las instituciones. Aun cuando la mayoría se equivocara, era dueña de su opinión y tenía la aptitud para regir sus propios destinos. La confianza en la racionalidad del electorado era reafirmada por el diario: "Para llegar a la verdad de la democracia no existe otra vía posible que la práctica del sufragio"<sup>14</sup>.

Las dos situaciones de mayor agudización de conflictos sociales registradas durante el sexenio de Yrigoyen —la Semana Trágica y las huelgas de la Patagonia— dieron motivo a *La Nación* para reiterar sus análisis sobre la problemática social y el rol que al respecto le cabía desempeñar al Estado. Ante sucesos que alcanzaban un grado de violencia superior al registrado hasta entonces, el diario expresó su preocupación por la preservación del orden social y atribuyó la causa de los acontecimientos a la forma de proceder del gobierno.

Algunos días antes de producirse los más luctuosos enfrentamientos en los Talleres Vasena, que marcaron el inicio de la Semana Trágica, el diario alertaba sobre la huelga que paralizaba las actividades de esa empresa, y lamentaba que el Departamento Nacional de Trabajo no interviniera y sólo se limitara a hacer estadísticas de lo que ocurría. La falta de arbitraje podía llevar a un incremento de las tensiones, decía, y eso no beneficiaría a nadie. En ausencia de una mediación estatal, sugería que podían cumplir ese rol otros empresarios industriales y los sindicatos no implicados en el conflicto<sup>15</sup>. Criticaba al gobierno y a los legisladores por no crear instituciones para canalizar y resolver los diferendos entre patrones y obreros, ya que ése era el mejor modo de salir al encuentro de las fuerzas revolucionarias que podían formarse en las clases populares y así evitar la utilización "del sable o el fusil de las necesidades extremas"<sup>16</sup>. Ya estallados los primeros enfrentamientos, se encargó de recordar a los dirigentes de los gremios obreros que ellos eran responsables por "los actos de sus afiliados y (tenían) el deber de emplear su consejo y su influencia para mantenerlos alejados de la violencia"<sup>17</sup>. Ese llamado a la colaboración de las direcciones sindicales para encauzar la opinión y los comportamientos obreros suponía, tam-

bién, reconocer la legitimidad de muchas de las demandas formuladas. Para el diario, podía haber "agitadores", pero eso no debía llevar a ignorar la existencia de sindicatos representativos ni, menos aún, la realidad de los problemas económicos que afectaban a los obreros. Definida la situación en esos términos, afirmaba que "nada puede haber más respetable que las instancias obreras en pro de su mejoramiento material, como nada puede haber menos tolerable que los golpes de mano preparados por agitadores extranjeros contra la estabilidad de las instituciones nacionales"<sup>18</sup>.

Pasados los momentos más agudos del conflicto de enero de 1919, el matutino sacaba como conclusión de lo sucedido la urgente necesidad de concretar una legislación social que con ecuanimidad encarara los problemas de la clase obrera. A ello debía converger la acción del sindicalismo y del Estado. Uno y otro tendrían, según su opinión, que realizar una obra cultural que "inculque en los obreros la noción inteligente de sus propias conveniencias y de los medios más adecuados para hacerlas valer, sin excluir la huelga y los demás instrumentos de defensa legítima"<sup>19</sup>. Ésa debía ser la vía, aseveraba, para evitar la reiteración de hechos como los vividos a principios de 1919. Consideraba esa obra cultural del Estado y de los sindicatos, así como la elaboración de una amplia legislación social, como aspectos necesarios para impulsar el progreso del país.

Durante la Semana Trágica, grupos civiles opuestos a los reclamos y movilizaciones de obreros atacaron a trabajadores extranjeros por considerarlos "peligrosos agitadores revolucionarios". En buena medida, esos grupos de choque estaban integrados por jóvenes de la clase alta. *La Nación* repudió las manifestaciones de xenofobia y, en especial, las agresiones perpetradas contra inmigrantes de origen ruso y miembros de la comunidad judía. Al señalar a quienes denominaba despectivamente "caballeros", que veían en todo extranjero un "ácrata", aseveraba que la policía no necesitaba de tal colaboración para asegurar el orden público. Con prosa analítica de dimensiones humanísticas, afirmaba que "sin duda, entre la colectividad rusa hay ácratas y revolucionarios y fácil sería explicárselo por la opresión secular en que esa gente ha vivido; pero la enorme mayoría es gente buena, modesta y benéfica, que vino a la Argentina huyendo de las matanzas de ese doble fanatismo que no hace mucho ensangrentó a su país natal. El caso de los judíos rusos, tan abundantes entre nosotros, no tiene otro origen (...) y no estaría bien ni sería lógico que quienes huyeron de la violencia nefasta se la encontrasen aquí (...) Buenos Aires, en cumplimiento de su mi-

sión histórica, no puede hacer esta cuestión de xenofobia, impropia siempre dentro de la cultura moderna y más todavía en nuestro país<sup>20</sup>. El texto citado, por su estilo y forma de razonamiento, parece tener la impronta de Alberto Gerchunoff, quien se había incorporado a la redacción del diario desde 1908.

Desde las filas del radicalismo yrigoyenista, el diario *La Época* se dedicó sistemáticamente, en el período analizado, a atacar a *La Nación*. La burla, el agravio y la crítica a la actuación histórica de Mitre se alternaban casi cotidianamente en la publicación defensora del gobierno, cuando se refería a *La Nación*. La idea de que el matutino mentía en razón de encontrarse enrolado entre los partidarios del "régimen", le servía al periódico radical para desacreditar sus afirmaciones cuando éstas objetaban acciones oficiales. En su opinión, *La Nación* hacía "propaganda antipatriótica" al difundir entre la población noticias alarmistas. Eso sucedió, por ejemplo, a raíz de informaciones sobre el posible y próximo agotamiento del stock triguero o la eventual falta de material de reposición para atender las necesidades de las líneas de trenes controladas por el Estado<sup>21</sup>. El lenguaje empleado por *La Época* era particularmente duro, y si utilizaba metáforas éstas eran de lectura directa. Caracterizaba a *La Nación* como perteneciente a los "insectos de clase parasitaria (...) insectos rezongones y malhumorados (...) nada encontraban bueno, nada útil; nada digno de alabanza"<sup>22</sup>. El diario radical no sólo actuaba a favor del gobierno cuando éste era atacado por su tradicional colega, sino que, además, consideraba poco serios todos los argumentos expuestos en sus editoriales en reclamo de políticas oficiales para el desarrollo de la minería y de la actividad siderúrgica. Con un estilo que no dejaba lugar a equívocos, *La Época* descalificaba así a *La Nación*: "Entregado a combatir al gobierno y no sabiendo ya de qué echar mano, se agarra a las minas más o menos probables, pero cuya situación no ha podido localizar todavía... ¿Por qué el diario mitrista tan vinculado a los grandes industriales y a los hombres de empresa norteamericanos no los convence de la existencia de esas enormes fortunas enterradas para que vengan a explotarlas?"<sup>23</sup>. Tampoco quedaban fuera de las contestaciones del periódico radical las referencias al general Bartolomé Mitre, cuya capacidad militar ponía en duda, y a quien le reprochaba haber movilizadado a las tribus del cacique Catriel para combatir en la Revolución de 1874. Al negar a *La Nación* el derecho de hablar en nombre de la paz social, *La Época* afirmaba con frecuencia que "el diario mitrista deseaba que el Ejecutivo haga valer su poder e influencia en favor de los capitalistas cuya intransigente actitud alimenta con sueltos cotidianos e insi-

diosos"<sup>24</sup>. En fin, la publicación yrigoyenista tomaba en solfa el autocalificativo de "prensa independiente" que se atribuía su denostado rival.

La Argentina de 1920 no era sólo tumultuosa en los cambios de su escena política. De manera más lenta, pero igualmente persistente, también se transformaba su estructura social. En la cúspide, dinero y prestigio permitían conformar una clase pequeña pero consistente a la que otros anhelaban acceder. *La Nación* tenía la sección sociales, donde registraba hechos varios acaecidos a la minoría de gente de pro. Allí informaba sobre viajes cortos y dolencias fugaces, junto con fallecimientos y largas travesías, de quienes habían logrado un reconocimiento social tal que hacía susceptible de convertir en letra impresa un esguince de tobillo o un deceso sólo referenciable por virtudes privadas. Aquellos que poseían riquezas pero carecían de prestigio social, debían leer esas informaciones imaginando a los personajes en el color sepia de las fotografías de rotograbado. Sin embargo, el drama del *parvenu*, que habiendo conseguido fortuna no había aún podido ennoblecerla con ese añejamiento equívoco que otorga el tiempo, no estaba ausente de las páginas del matutino. Al despuntar los años 20, comenzó a publicar las peripecias socio-conyugales de Trifón y Sisebuta, tira cómica del autor norteamericano George Mac Manus, donde se ocuparía de quienes, viniendo de abajo, se desvelaban por ser aceptados arriba. Las claves del ascenso social, que muchos buscaban en la época, eran sistemáticamente convertidas en esa tira en objeto de una reflexión humorística de vocación universal sobre los sistemas de predisposiciones incorporados a los sujetos que, a pesar de disfrutar de un buen pasar material, seguían siendo portadores de los usos y costumbres de su medio social de origen. Los Trifón y Sisebuta *made in Argentina* probablemente hubieran comprado *La Nación*, votado al Partido Conservador, habitado en la parroquia del Socorro, comentado en el verano las noticias del día en la Rambla de madera, donde el diario tenía una agencia desde 1891, pero eran socialmente clasificables por debajo de sus aspiraciones en virtud del empleo de códigos corporales y lingüísticos que escapaban a su propia percepción.

A comienzos de 1921 el Partido Socialista realizó un importante congreso en el cual una numerosa fracción de convencionales propuso adherir a los principios de la Tercera Internacional y adoptar una estrategia de tipo revolucionario, tomando como modelo el emergente poder soviético. *La Nación*, que había seguido con simpatía el crecimiento de la influencia del socialismo local, se alarmó frente a esa eventual transformación de su

línea de acción. Cuando la fracción más moderada se impuso, el matutino expresó su satisfacción, caracterizando al ala más izquierdista como una tendencia retrógrada y perturbadora que desconocía la libertad ajena como límite del derecho propio y quería utilizar las garantías constitucionales para servirse de ellas e instaurar un sistema opresivo. Parece interesante señalar que entre quienes formaban parte de la tendencia extremista del socialismo se hallaba Roberto F. Giusti, un intelectual que muchos años más tarde se incorporaría al equipo de redactores de editoriales del diario<sup>25</sup>. En la época del congreso, el Partido Socialista mantenía cierta influencia sindical y un elevado caudal electoral en la Capital Federal, donde era la principal fuerza de oposición al radicalismo.

Los análisis de *La Nación* sobre las responsabilidades del gobierno yrigoyenista en la aparición y el desenvolvimiento de huelgas y enfrentamientos sociales se mostraban sensiblemente más críticos del Estado y de los asalariados cuando los conflictos tenían por escenario el medio rural. Sin duda, esto se debía a la mayor proximidad social del diario con los propietarios afectados o, más en general, al lugar privilegiado asignado en sus ideas a la producción agropecuaria. Pero, es notorio que frente a las protestas de los asalariados rurales el contenido explicativo de los análisis disminuía y, en cambio, se acentuaba la crítica a la administración radical y se urgía a la búsqueda de soluciones mediante la presencia de las fuerzas del orden. Además, los movimientos sociales rurales en reclamo de mejores condiciones de trabajo y mayores salarios eran descriptos con facilidad como manifestaciones lindantes con el bandolerismo. Tal fue el caso de muchos de sus análisis sobre la crisis social registrada en los años 1921-22 en las provincias del sur.

A principios de 1921, cuando recién comenzaban los movimientos de huelga y los enfrentamientos sociales que luego se generalizaron en la región, *La Nación* alertó sobre la conflictiva situación que se vivía en la gobernación de Santa Cruz. El énfasis era puesto tanto en descalificar los motivos de protesta social cuanto en la falta de aptitudes del gobierno de Yrigoyen para encarar el mantenimiento del orden. Los análisis se centraban en la supuesta intención delictiva de los trabajadores movilizados y en negar justificaciones a sus reivindicaciones salariales y pedidos de mejores condiciones de trabajo y alojamiento. Sin mayores consideraciones contextuales, a diferencia de lo que generalmente hacía con los conflictos laborales urbanos, en uno de sus primeros análisis sostenía que "sería inexacto considerar como movimiento obrero huelguista la serie de perturbaciones que se vienen

produciendo actualmente en el territorio nacional de Santa Cruz (...) todo lo que allí ocurre es simplemente un caso de bandolerismo desaforado en gran escala, cuya médula habría que buscarla en el proceso de desorden implantado en todo el país, por el descrédito y el relajamiento del principio de autoridad<sup>26</sup>. Por esa vía invitaba a no confundirse sobre la naturaleza de los sucesos santacruceños y a no verlos equivocadamente como un producto de injusticias sociales. Se corría el riesgo de malinterpretar los hechos, ya que, según el diario, "es frecuente en la actualidad designar bajo el rótulo de movimientos sociales cualquier empresa de desorden o delito, cargando sobre el problema del trabajo y de la economía situaciones típicamente exclusivas del Código Penal"<sup>27</sup>. Adoptada esta perspectiva conceptual, se consideraba aún más importante la responsabilidad que cabía atribuir al gobierno en la génesis y el desenvolvimiento de los conflictos patagónicos.

Freunte a lo que se definía como un "torrente de bandolerismo" desencadenado en la gobernación de Santa Cruz, el diario llamaba a las autoridades a preocuparse por la defensa de los intereses y bienes de los pobladores, acumulados, según decía, con el esfuerzo de años. Pocos días antes de que Yrigoyen designara nuevo gobernador en Santa Cruz y enviara un regimiento de caballería del Ejército, que llegó la primera semana de febrero de 1921, se preguntaba qué esperaba el gobierno nacional para enviar las fuerzas necesarias para restablecer el orden. Como resultado de las iniciativas adoptadas por el nuevo gobernador, por la justicia y por las fuerzas militares, se alcanzó una negociación de las partes en conflicto y la situación del sur pareció recobrar la normalidad. Pero la falta de cumplimiento patronal de los acuerdos generó nuevas tensiones sociales y se generalizaron las huelgas a fin de 1921, cuando ya se habían retirado los efectivos de la caballería. *La Nación* encaró otra vez la temática de las conmociones sociales sureñas desde la misma perspectiva que durante el precedente movimiento de protestas. Criticó al gobierno por no enviar con la debida celeridad fuerzas militares "para efectuar la campaña de pacificación y policía a fondo, requerida por el estado endémico del bandolerismo"<sup>28</sup>. No cabía utilizar otros medios, ya que no se trataba de obreros sino de "bandas profesionales de delincuentes forajidos alzados contra el orden que se rotulan de sindicatos obreros y federaciones profesionales para cohonestar la esencia exclusivamente criminal de sus vidas"<sup>29</sup>. La intervención anterior del gobierno había sido, según el diario, excesivamente tolerante con los huelguistas. De allí que juzgara equivocado tener nuevamente miramientos y tratos

benévulos con ellos. En su opinión, recomponer la tranquilidad social podía ser una tarea fácil, sólo se requería la acción de "dos o tres regimientos de caballería, conducidos por expertos jefes de los muchos con que cuenta nuestro Ejército (y así) se habría realizado la pacificación definitiva y ejemplar de todo el sur argentino"<sup>30</sup>.

La nueva intervención militar se llevó a cabo en diciembre de 1921; dejó como saldo un elevado número de víctimas entre los obreros en huelga y generalizó en la región una situación de persecución y terror. La represión militar y policial, que contó con la colaboración de bandas blancas armadas por los propietarios de la zona, suscitó encrespados debates parlamentarios impulsados por los legisladores socialistas y recibió críticas del movimiento sindical<sup>31</sup>. Una vez así restablecido el orden, *La Nación* encaró en varios editoriales una reflexión sobre los acontecimientos y, especialmente, se preocupó en proponer medidas para evitar su repetición. El diario no se dejaba ganar por el optimismo, y recordaba que "el año pasado, a raíz también de un envío de tropas, quedaba todo tranquilo, y seis meses después, en cuanto se retiraron las fuerzas y se aflojó la violencia, se repitieron los sucesos con más gravedad que antes"<sup>32</sup>. La preservación del orden debía encararse, en su opinión, no sólo desde una perspectiva policial sino, además, mediante reformas sociales. Era imprescindible "estimular trabajo que arraigue a los hombres a aquel suelo, dar facilidades para que su riqueza sea más aprovechada y no sea la vida tan cara"<sup>33</sup>. Junto con esas iniciativas de corte social, el matutino no olvidaba aconsejar la creación de mejores cuerpos policiales y de gendarmería para evitar nuevos movimientos de protesta. Al respecto, señalaba las dificultades existentes para reclutar personal de seguridad, ya que era ilusorio "pretender que con sueldos de ciento noventa pesos vayan vigilantes al sur, en donde la vida es tan cara"<sup>34</sup>. Es interesante señalar que el salario reclamado por los obreros huelguistas era del orden de los ciento veinte pesos mensuales.

Las motivaciones sociales de las protestas obreras fueron abordadas en los análisis de *La Nación* recién después que se saldó violentamente la segunda fase del conflicto. Tomando como base un informe sobre la situación de Santa Cruz preparado por Manuel Carlés, presidente de la Liga Patriótica Argentina, el diario reiteraba sus acusaciones contra la inoperancia gubernamental, pero reconocía que podían existir, más allá de los manejos de los "agitadores" y "bandoleros", injusticias en las relaciones laborales y malestar por el "costo de vida", susceptibles de contribuir a la generación de conflictos sociales<sup>35</sup>. Alertaba, también,

contra ciertos actos de revanchismo patronal, no sólo por ser éticamente condenables, sino, además, por generar situaciones de injusticia social que podían ser aprovechadas por el "bandolerismo organizado"<sup>36</sup>. En fin, luego de haber formulado múltiples análisis plenos de certezas y de esquemas maniqueos, trató de retomar un estilo de reflexión más mesurado y reconoció que eran varias y contradictorias las interpretaciones de lo acaecido en los territorios sureños. Enunciando las posiciones polares, constataba la existencia de versiones muy distintas: "Desde el alegato socialista, que presenta a las víctimas de la perfidia patronal, hasta el informe militar, que los señala como delincuentes alzados contra las leyes del país, hay explicaciones adaptables a todos los temperamentos"<sup>37</sup>. Para hacer una política estatal adecuada, encaminada a resolver las necesidades de la región y a evitar nuevos conflictos y estallidos de violencia, el matutino aconsejaba a las autoridades realizar estudios en profundidad.

Como consecuencia de la experiencia de la Primera Guerra Mundial, numerosos países modificaron sus políticas económicas, desarrollando instituciones y prácticas de tipo intervencionista. En el plano del comercio internacional finalizaba, también, el prolongado período en que predominaron las libres regulaciones de mercado en los intercambios mercantiles. Se iniciaba la época de la economía dirigida. En la Argentina, tal como se señaló anteriormente, las ideas favorables a la intervención del Estado en la economía fueron sistematizadas por primera vez en el programa elaborado por los políticos conservadores que impulsaron entre 1914 y 1916 la organización del Partido Demócrata Progresista. Dicho programa respondía a las preocupaciones de los principales sectores propietarios de la época, cuyos intereses eran afectados por las consecuencias de la conflagración mundial, y fue recibido con elogios por *La Nación*. Sin embargo, en los dos años que siguieron a la finalización de la guerra mundial aumentó la demanda internacional de los productos exportados por la Argentina, de modo que los sectores que habían postulado el intervencionismo dejaron de defender esas ideas. En ese contexto de prosperidad, las altas cotizaciones llevaron a los hacendados, que esperaban recoger pingües beneficios, a aumentar la existencia de ganado. Como era habitual en esa época, los propietarios rurales operaban con créditos otorgados por la banca oficial y garantizados con hipotecas. De allí que al comenzar a declinar los precios de la carne vacuna a fines de 1920 los ganaderos pampeanos se encontraron frente a una situación económica difícil. Como además disminuyeron la demanda y los precios de los

cereales, esto afectó también los ingresos de los propietarios rurales que arrendaban tierras.

El exceso de oferta interna de carne vacuna y la disminución de las ventas internacionales crearon condiciones favorables para que los frigoríficos impusieran precios a los productores, juzgados por éstos desventajosos. La reacción de la Sociedad Rural Argentina fue dirigirse a los poderes públicos para solicitar la protección de sus intereses. Olvidar el liberalismo económico pareció ser una idea aceptada por los distintos sectores de la clase dirigente, que veían en la crisis de los ingresos rurales una catástrofe para el país en su conjunto. En 1921 el legislador y ganadero correntino Mora y Araujo elaboró un proyecto en el cual proponía que el Estado fijara el precio mínimo que los frigoríficos debían abonar por kilogramo de carne vacuna. Difícilmente se hubiese podido proponer una transgresión mayor a la libertad de mercado. Sin embargo, *La Nación* acogió positivamente esa iniciativa: "Basta un somero estudio de la situación que tiende a corregir para comprender que su influencia ha de ser tan benéfica y eficaz como lo exige la situación actual de la ganadería argentina"<sup>38</sup>. La indiscutida fe en el *laissez-faire* dio paso, cuando fue necesario buscar razones para preservar los ingresos de los ganaderos, a los más diversos argumentos. Reconociendo que demandar al Estado la fijación de los precios mínimos que debían abonar los frigoríficos a los productores era solicitar una medida contraria a las doctrinas liberales, el matutino consideraba que la emergencia justificaba tal desviación de los principios. En la medida que los frigoríficos negativamente afectados por ese proyecto eran de capital extranjero, el diario se preguntaba si no habría quienes vieran en las iniciativas en discusión una agresión contra esos intereses, que estimaba muy respetables. Pero, sin mayores inhibiciones ideológicas, afirmaba que esa "respetabilidad, muy merecida y muy digna cuando ese capital es un factor concurrente del progreso que sólo busca una retribución razonable, desaparece cuando, por lo contrario, no persigue sino un medro desmesurado a costa de la propia riqueza de la Nación (...) Si el país hubiese de pagar un precio usurario por los progresos que aún habrá de alcanzar con el apoyo del capital ajeno, sería el caso de pensar seriamente qué era lo que más le convenía"<sup>39</sup>.

La idea de que el Estado debía intervenir para paliar los efectos de la crisis del sector rural no era, sin embargo, un criterio que en opinión del diario podía legitimar cualquier tipo de medida. Así, cuando ante la continuidad de las dificultades económicas que vivía el agro, el gobierno de Yrigoyen propuso a comienzos de 1922 disminuir los cánones pagados por los arrien-

dos en un 50%, la medida fue acogida con duras críticas por *La Nación*, que la juzgó de una "violencia insólita" y en "discordancia con los principios básicos del régimen constitucional". El diario estimaba que detrás de la medida había motivaciones electorales, y que, para asegurar a los arrendatarios una mínima disminución en el monto general de sus gastos de explotación, se quitaba a los dueños del campo la mitad de sus ingresos. Pero no sólo, según estas objeciones, el gobierno yrigoyenista buscaba aumentar su caudal de sufragios, sino que actuaba movido por prejuicios contra los terratenientes, ya que "el proyecto obedece a la idea ligera de que el propietario es un parásito cargado de privilegios, sobre el cual se puede operar *in anima vili* para buscar, a su costa, la panacea de todas las dificultades"<sup>40</sup>. Como Yrigoyen trató de demostrar lo correcto de la iniciativa señalando la recepción de numerosos telegramas enviados por productores rurales en apoyo del proyecto de disminución de los cánones de arriendo, el diario descalificó esa expresión de solidaridad arguyendo que en realidad el gobierno podía jactarse de recibir una adhesión unánime por parte de los interesados, pero que aun "la habría encontrado más entusiasta si en vez de limitar la rebaja a un cincuenta por ciento hubiese propuesto lisa y llanamente la supresión de todo pago. Ya el señor Lenín había escuchado himnos parecidos antes que la miseria y el hambre glosasen la eficacia de sus descubrimientos"<sup>41</sup>.

A comienzos de la década del 20 *La Nación* no sólo propuso la intervención del Estado para favorecer los intereses de los ganaderos, sino que, además, reclamó insistentemente a los poderes públicos que se ocuparan del desarrollo industrial del país. El Estado debía, según la perspectiva analítica adoptada por el diario, asumir un rol activo en la explotación de los recursos minerales y en el fomento de la producción industrial, en especial, de la siderurgia. El tema de la industrialización lo abordó desde distintas perspectivas y a la pregunta sobre las causas del insuficiente desarrollo manufacturero del país daba varias respuestas. Si bien reconocía que los consumidores preferían los productos importados, no cabía por ello ignorar que además había una notoria falta de dinamismo de los capitalistas argentinos, quienes buscaban grandes y seguras ganancias, arriesgando lo menos posible. Frente a ese estilo de comportamientos, hacía una reflexión que desbordaba el marco de lo específicamente económico: "Los propietarios de fortunas considerables deberían comprender que manejan riquezas de las cuales son regentes ocasionales, y serán estimables si saben aplicarlas al desarrollo de la grandeza económica del país, llave del bienestar social y del

florecimiento de la civilización. El capital tiene una misión hondamente patriótica que cumplir<sup>42</sup>. Este enfoque, similar a los que suelen evocar quienes defienden la llamada función social del capital, se completaba con una serie de consideraciones sobre los perjuicios que acarrearaba al país la carencia de una estructura industrial. Consideraba esa ausencia tanto más injustificable cuanto abundantes eran los recursos y materias primas, así como la mano de obra, comparativamente más barata que la de los países europeos o de los Estados Unidos. Este llamado a "los propietarios de fortunas considerables" para que invirtieran en la industria era una recriminación contra quienes, disponiendo de riquezas, se resistían a convertirse en empresarios capitalistas similares a los de las naciones tomadas como modelos por la clase dirigente argentina. En ese sentido el análisis sostenía que, más allá de las riquezas ganaderas o agrícolas con que contara un país, su situación sería secundaria si no se industrializaba<sup>43</sup>. Al plantear esa diferencia entre las formas de desarrollo industriales y agrarias, quitando preponderancia a las segundas, *La Nación* introducía, con singular fuerza, una novedad en sus reflexiones sobre la economía.

El desinterés del gobierno de Yrigoyen por el fomento de la industria era, en opinión de *La Nación*, otro aspecto de fundamental importancia para analizar el problema. En contraposición a lo que sucedía en la Argentina, mencionaba con frecuencia la actitud industrialista del gobierno brasileño, empeñado en desarrollar la industria siderúrgica, destacando que esa orientación permitiría en el mediano plazo al vecino país sacar considerables ventajas al nuestro. Es muy probable que esos análisis salieran de las tempranas inquietudes industrialistas de Leopoldo Lugones, quien en la época era editorialista del diario. El razonamiento favorable al desarrollo industrial tenía implicaciones muy profundas y sugería orientaciones estatales de neto corte intervencionista. Para el matutino, los poderes públicos no sólo debían impulsar la industria siderúrgica, sino que el mismo Estado debía comprar esa producción de hierro y acero para abastecer al sistema ferroviario que tenía bajo su control. Desarrollo industrial y posición soberana en el concierto mundial se convirtieron en términos prácticamente intercambiables. Con el estilo de quien cree enunciar una verdad indiscutible afirmaba, en enero de 1922: "Los países puramente agrícolas y pastoriles podrán ser muy ricos, pero no saldrán del orden secundario que les corresponde. Dicho en dos palabras: serán mercado, no potencias"<sup>44</sup>. Con idéntico énfasis, y no es para nada arbitrario seguir presuponiendo la anónima pluma del polifacético Lugones,

en otro editorial se aseveraba dos meses más tarde que "retardarse en la actual competencia de las Naciones equivale a subordinarse, tal vez sin remisión, a pesar de la soberanía jurídica que no es, en suma, sino una expresión de hechos"<sup>45</sup>.

En el curso de la década del 20 la temática de las fuerzas armadas fue abordada desde distintas perspectivas por los sectores conservadores y, más en general, por todos los adversarios del radicalismo yrigoyenista. El proceso que culminó en 1930 con la interrupción de la continuidad institucional supuso, entre otros aspectos, una reelaboración ideológica del rol de los militares en la vida nacional, que implicó una sustancial modificación de las concepciones que hasta entonces habían tenido muchos de los dirigentes políticos y de los mentores intelectuales del antiyrigoyenismo. *La Nación* tuvo una activa participación en ese debate de ideas sobre los militares y la política.

El esquema de organización institucional que habían impulsado las políticas conservadoras desde comienzos de siglo suponía excluir el uso de la coacción militar en las confrontaciones por el poder. Para ello se había construido un entramado de instituciones castrenses destinadas a crear un tipo de personal militar semejante al de los países más desarrollados, modelos también en este aspecto. Con ello no sólo se trataba de diferenciarse de las inestables repúblicas latinoamericanas, sino que, además, el militarismo era homologado a la situación que el país había conocido en la época de las luchas internas anteriores a la organización nacional. En las últimas décadas del siglo pasado la reflexión sobre el militarismo había sido abordada con el claro objetivo de evitar la implantación del fenómeno en las luchas políticas. Bartolomé Mitre definió su posición en diciembre de 1880, en términos inequívocos, en un editorial de *La Nación*: "El militarismo como hecho, o es pretorianismo brutal de los soldados, o es despotismo militar bajo la férula de una espada, es el gobierno de la fuerza armada en equilibrio en la punta de una bayoneta (...) En América tenemos ejemplos, que nos enseñan que el militarismo es el que ha desorganizado la defensa nacional enervando las fuerzas populares que debían concurrir eficazmente a ella"<sup>46</sup>. Las ideas favorables a la despolitización de los militares se habían reactualizado en las elites conservadoras a partir de la aparición de la Unión Cívica Radical. En sus intentos de derrocar al "régimen" por vías revolucionarias los radicales habían buscado, y conseguido, el apoyo de miembros de las fuerzas armadas. La profesión militar reclutaba la mayor parte de los cuadros de su oficialidad en las clases medias. En consecuencia, ya fuese por afinidad ideológica o como un modo de acelerar

su carrera en el escalafón en caso de éxito, no faltaban oficiales que se plegaban a los intentos revolucionarios organizados por el radicalismo. En esas condiciones, la minoría gobernante buscó asegurar la mayor profesionalización de los miembros de las fuerzas armadas, tarea que fue firmemente impulsada por el general Pablo Riccheri, ministro de Guerra del presidente Roca, entre 1900 y 1904. Como el mismo Riccheri lo destacó en los debates parlamentarios donde se discutieron sus iniciativas de reforma de las organizaciones militares, sus ideas contaban con la aprobación y el apoyo del teniente general Bartolomé Mitre, a quien definía como "el primero de nuestros veteranos".

Con el ascenso del radicalismo al gobierno, los dirigentes conservadores comenzaron a plantearse en nuevos términos el problema de la relación entre las fuerzas armadas y la política. Para los críticos de la administración de Yrigoyen la desorganización campeaba en todas las instancias estatales. Pero si las consecuencias de esa situación se estimaban graves cuando se trataba de la gestión de la esfera civil, los riesgos, según los opositores al radicalismo, se multiplicaban si la supuesta impericia gubernamental afectaba aspectos vinculados a la defensa nacional. Los sectores antiyrigoyenistas criticaban al radicalismo el "favoritismo" para promover oficiales que le eran adictos, postergando a quienes tenían más méritos y mayor preocupación profesional. La política de "reparación", por la cual se reincorporó a militares dados de baja por participar en las revoluciones radicales, reconociéndoles ascensos y antigüedades, fue caracterizada por los sectores de oposición como una manifestación más del "clientelismo" y la "demagogia" propios de los actos del gobierno yrigoyenista. Para la opinión conservadora, los radicales estaban politizando a las fuerzas armadas, para ponerlas al servicio de sus intereses partidarios. Esas prácticas creaban una situación de descontento institucional, que debilitaba, según esos críticos, las bases de la defensa nacional.

De acuerdo con numerosos y confiables estudios, documentos y testimonios, puede afirmarse que el proceso de politización militar que culminó con el golpe de Estado de 1930, encuentra sus antecedentes directos en una serie de iniciativas tomadas por miembros de las fuerzas armadas desde principios de la década del 20. Según se explica en una publicación del Círculo Militar, en 1921 un grupo de oficiales descontentos con la política del gobierno creó la denominada Logia San Martín, sociedad secreta cuyo primer presidente fue el coronel Luis Jorge García<sup>47</sup>.

En septiembre de 1921, *La Nación* llamaba la atención sobre el malestar que producía en las filas de la oficialidad la intro-

misión de la política por obra de los funcionarios civiles a cargo de la dirección de los Ministerios de Guerra y Marina. Según esa reflexión, los ascensos determinados con criterios partidistas desmoralizaban a los hombres de armas. A esto se agregaba, según el diario, que los jefes y oficiales "leen lo que ocurre en Naciones próximas a la nuestra, comparan, y aunque silencian el juicio que del contraste nace, podemos asegurar que no es halagüeño. Claro está que los dictados del patriotismo, de disciplina, del amor a la institución hacen que se mantenga la armazón del Ejército incólume"<sup>48</sup>. Un mes más tarde, abordaba nuevamente la temática militar en el contexto global de la gestión yrigoyenista y explicaba que muchos de los problemas que tenían la Armada y el Ejército se debían a que sus estructuras habían sido afectadas por el "proceso de descomposición en que lenta y paulatinamente ha sido sumergida toda la administración por obra y gracia de las medidas de gobierno puestas en práctica desde los últimos meses del año 1916"<sup>49</sup>.

Remitía invariablemente la explicación principal de lo que supuestamente ocurría en las fuerzas armadas a la politización introducida por las autoridades para beneficiar a los cuadros militares partidariamente más afines. También decía que la falta de preocupación por el equipamiento técnico producía frustraciones en el personal militar. Pero, a su juicio, esto no era sino un reflejo en las instituciones castrenses de la manera en que los radicales concebían la gestión del Estado, desinteresados siempre por lo técnico y los aspectos específicos de la defensa nacional, y preocupados sólo por cuestiones susceptibles de reportarles beneficios políticos. De allí que el desorden de las instituciones fuese para el diario una consecuencia natural de la manera que Yrigoyen gestionaba los asuntos públicos. Puede afirmarse que, al referirse al ámbito castrense, *La Nación* aplicaba las mismas ideas que utilizaba para analizar el desenvolvimiento de otras esferas de la vida institucional. Cabe destacar, sin embargo, que en el caso de las fuerzas armadas estos análisis se realizaban en el mismo momento en que comenzaban a organizarse en su seno tendencias castrenses de abierta oposición al gobierno, a las que el diario alentaba objetivamente. Reafirmando la tesis de que todas las instituciones tarde o temprano se veían alcanzadas por la desorganización originada por los manejos oficiales, uno de sus editoriales de marzo de 1922 llevó el sugerente título "El turno del Ejército"<sup>50</sup> que, por cierto, podía incitar a lecturas ambiguas.

Para *La Nación*, en 1922 debía "hacer crisis el proceso de transición iniciado en 1916"<sup>51</sup>. La importancia de ese año residía,

entre otros aspectos, en que debían realizarse nuevas elecciones presidenciales. El diario consideraba la situación institucional como totalmente desorganizada y caótica y hacía votos por el retorno a la normalidad. Frente a un contexto global pleno de motivos para suscitar su preocupación y crítica, encontraba una nota consoladora y auspiciosa en la formación de un acuerdo de partidos conservadores denominado Concentración Nacional. Consideraba esa nueva propuesta política, nucleada en torno al Partido Conservador de la Provincia de Buenos Aires, un síntoma alentador de despertar cívico.

Cabe destacar que dicho Partido había mejorado sensiblemente su situación electoral en los comicios para designar gobernador, realizados a fines de 1921. Esos progresos del conservadorismo fueron analizados por *La Nación* como un elocuente indicador de sus posibilidades para competir con éxito con la UCR. Al reflexionar sobre las modificaciones registradas en las diferencias porcentuales entre el radicalismo y los conservadores, que se redujeron del 41% en 1918 al 19% en 1921, cifraba sus expectativas en la consolidación de la fuerza opositora, ya que "el tiempo actúa siempre contra los oficialismos y permite (a la oposición) organizaciones más fuertes y precavidas"<sup>52</sup>.

Al llegar el momento de las elecciones para la renovación presidencial, *La Nación* multiplicó sus análisis sobre el radicalismo, su gestión de gobierno y la relación que el mismo mantenía con los sectores sociales que le brindaban sus sufragios. Más allá de expresiones por momentos marcadas por cierto apasionamiento coyuntural, trató de sistematizar en diversos editoriales un conjunto de explicaciones que, alejadas de las críticas inmediatas, proveyeran algunos parámetros para comprender objetivamente el "fenómeno radical". Invocaba una preocupación relacionada con la producción de conocimiento científico y reflexionaba sobre las dificultades que enfrentarían en el futuro los investigadores de ciencias sociales al abordar el estudio del período yrigoyenista; con cierta ironía decía: "No faltará algún día un investigador ingenuo que se proponga discernir a través de los actos realizados por el actual gobierno, los principios doctrinarios, o, por lo menos, las orientaciones dominantes de su criterio político"<sup>53</sup>. Para el diario, ese futuro "investigador ingenuo" podría suponer equivocadamente que detrás de la "enorme masa de votantes, unidos bajo la bandera del radicalismo, exista un vínculo ideológico cuya definición haya de centrarse en el desempeño público de sus dilectos mandatarios"<sup>54</sup>. Colocándose en el lugar de ese hipotético investigador, planteaba el interrogante, a su parecer ineludible para cualquier analista futuro: ¿cuál era,

en definitiva, el pensamiento del radicalismo y de sus representantes gubernativos, en cuanto al modo de realizar sus someros ideales? Las respuestas a esta pregunta no se podrían encontrar, según el matutino, en ningún programa explícito, ya que esa especificación de objetivos y metas nunca se había hecho. Para el diario, la acción del partido y del gobierno mismo se entendía partiendo de la base de que sus hombres actuaban movidos "por la conveniencia del radicalismo, o, con más propiedad, por la conveniencia de la fracción partidista que acate incondicionalmente la autoridad presidencial"<sup>55</sup>.

En este orden de reflexiones teóricas sobre el yrigoyenismo, *La Nación* trataba, además, de establecer nexos conceptuales que pudieran explicar el comportamiento de la UCR en el gobierno a partir del estilo de prácticas desarrolladas por dicho partido cuando se hallaba en la oposición. Pensando en la importancia de la continuidad de las conductas políticas, formulaba su interpretación: "Nada más lógico que el principio de la ciencia política a cuya virtud el procedimiento de los partidos en el llano determina su conducta en el Gobierno (...) (se podía) inferir que una colectividad sistemáticamente revolucionaria gobernará, o mandará, mejor dicho, practicando en el gobierno lo único que sabe hacer, a consecuencia de ese mismo sistema: la revolución, que administrativamente hablando es también sistemático desorden"<sup>56</sup>. De esta manera, no cabía sorprenderse con el "desgobierno" producido por los radicales, ya que éste se encontraba inscripto en una especie de naturaleza esencial, resultado de la prolongada socialización de sus jefes y de sus cuadros de dirección en la acción revolucionaria contra el régimen precedente.

Al nominar la UCR a Marcelo T. de Alvear como candidato a la presidencia para las elecciones de abril de 1922, *La Nación* expresó su alivio y satisfacción, viéndolo como una de las mejores personalidades que podía ofrecer el radicalismo. Pero junto con ese reconocimiento, se preguntaba hasta qué punto Alvear contaría con la autonomía necesaria para desempeñar sus funciones. La duda surgía del claro predominio de los seguidores de Yrigoyen en la convención partidaria que designó al candidato. Esa gravitación había permitido al sector yrigoyenista postular para vicepresidente a Elpidio González, reconocido por su lealtad al primer mandatario saliente. El diario criticaba el modo en que se había desarrollado la asamblea partidaria, y señalaba que los radicales reproducían los mismos manejos que habían criticado a los conservadores. Lamentaba, además, que de la convención no hubieran salido proyectos de gobierno, y comentaba con cierta ironía que "hubiera sido ilusorio esperar otra cosa tratándose del partido radical"<sup>57</sup>.

Realizadas las elecciones presidenciales con la victoria de la UCR, el diario volvió a preguntarse sobre las razones del éxito del radicalismo. Tratando de situar su reflexión en un plano más abstracto que el de las manipulaciones yrigoyenistas y los manejos espurios atribuidos a las autoridades, propuso una explicación del poder de convocatoria electoral del partido triunfante basada más en las características de los votantes que en las de dicha fuerza política. Afirmaba al respecto que la UCR era "la expresión auténtica del ambiente cuya rudimentaria diferenciación hace de nuestro pueblo una muchedumbre pasional antes que un agregado de unidades reflexivamente autónomas"<sup>58</sup>. Pero sus análisis evitaban caer en el fatalismo y considerar irreversible la situación política. En ese sentido, reconocía que existían en el radicalismo sectores no identificados con Yrigoyen, lo cual mostraba posibilidades de un cambio emergente de las propias filas del partido oficial. Al analizar las elecciones que dieron la presidencia a Alvear en 1922, sostenía: "El radicalismo es una fuerza que a despecho de la conducta de quienes lo dirigen, contiene sanas energías y méritos efectivos para el futuro político"<sup>59</sup>. Confiando en los resultados positivos que debían surgir de un proceso de aprendizaje y mejoramiento de la cultura cívica de los dirigentes radicales, consideraba que se podían cifrar expectativas favorables en una evolución en la que el yrigoyenismo perdiese la hegemonía partidaria. Se podía ver, entonces, con cierto optimismo el futuro de la UCR, ya que con "su progresiva educación política y sociológica operará en sus filas el proceso de depuración, en la medida que sea capaz de apreciar la falacia declamatoria de sus usufructuarios y la necesidad de constituirse según los modelos propios de un partido organizado"<sup>60</sup>. Al explorar las perspectivas, no vacilaba en augurar el desenlace a sus ojos inevitable del conflicto entre fracciones internas de la UCR, y anunciaba que la lucha "entre el personalismo despótico y la tendencia democrática habrá de resolverse, tarde o temprano, por la prevalencia de esta última"<sup>61</sup>.

El día que Hipólito Yrigoyen finalizó su presidencia, *La Nación* realizó un balance sumamente negativo de sus seis años de ejercicio del poder. En un análisis que trascendía la crítica al mandatario saliente y era en realidad un ditirámico ataque a la manera de gobernar de la fracción "personalista", el diario centraba como uno de los ejes principales de sus argumentos el proceder de las autoridades frente a las clases populares. Según su opinión, desde el día en que accedió a la primera magistratura, Yrigoyen "se entregó de cuerpo y alma a cultivar el favor de las masas menos educadas en la vida democrática, en desmedro y

con exclusión deliberada y despectiva de las zonas superiores de la sociedad y de su propio partido"<sup>62</sup>. Decía que los radicales habían cedido inalienables privilegios del poder en favor de las "sectas anárquicas" y habían tolerado excesivamente sus huelgas y agitaciones obreras. La actitud del gobierno frente a los conflictos sociales y a las clases populares en general sugería a *La Nación* que, en última instancia, Yrigoyen había buscado "connubios con las multitudes inferiores"<sup>63</sup>.

### La Nación: 1916-1922

*De objeto idealizado, el régimen democrático de regulación del sistema político se convirtió en realidad empírica en la Argentina posterior a 1916. El pensamiento político de La Nación, como sucedió con las ideas de los demás actores en presencia, reflejó la nueva situación. El problema de la democracia pasó a ser un eje vertebrador de los debates. Todos los demás temas políticos se vinculaban con esa cuestión central, aun cuando ésta no estuviese mencionada explícitamente. La modificación del régimen político produjo una transformación de las relaciones entre el Estado y la sociedad y, en consecuencia, del modo de pensar todas las dimensiones de la práctica social. Los cambios en la dinámica de la política y de la sociedad provocaron, también, una modificación del lugar que el diario se adjudicaba a sí mismo; sus interlocutores, reales o imaginarios, se diversificaron. La exterioridad con respecto a las posiciones centrales del Estado en que quedó colocada la mayoría de los integrantes de la clase dirigente, constituía una situación inédita en el país. Esa disociación entre la cumbre económica y social y el poder político institucional incentivó la producción de nuevos enfoques para viejos temas. La complejidad de las reflexiones se hizo aun mayor en razón de la presencia de algunos miembros de la clase dirigente tanto en altas funciones gubernamentales cuanto en la dirección del radicalismo.*

*Con Yrigoyen, la democracia argentina asumió un temprano sesgo populista, concepto que, por supuesto, no había sido aún inventado. Pero la matriz clásica del pensamiento político tenía su casillero clasificatorio para ubicar la desviación de la democracia: la demagogia. El matutino analizó al yrigoyenismo desde esa perspectiva, sin perder el optimismo sobre las posibilidades de construir un régimen democrático en el país. Desde su óptica, Yrigoyen era un accidente, y no podían atribuirse sus faltas y errores al andamiaje institucional democrático. La confianza en el aprendizaje político de las clases populares y en su eventual cambio de pre-*

ferencias electorales, así como la diferenciación de sectores internos dentro del radicalismo, eran aspectos que contribuían a mantener las expectativas favorables del diario hacia el régimen democrático en tanto tal. Su visión positiva podía sintetizarse en la fórmula "la democracia se arregla con más democracia". Por el contrario, muchos opositores ponían en duda las virtudes del sufragio universal, hacían una amalgama entre las críticas al gobierno y a los mecanismos de representación pluralista de la ciudadanía, y no faltaban quienes desvalorizaban a los sectores populares, a quienes consideraban incapaces de participar en la vida pública de manera racional. En cambio, La Nación empleaba el concepto de demagogia para adjudicar las responsabilidades de la situación a Yrigoyen y sus colaboradores, y evitó, durante un largo período, hacer extensiva la crítica a sus bases sociales de apoyo. Con el transcurso del sexenio fue, fundamentalmente, en las adjetivaciones utilizadas para referirse al electorado popular de los radicales donde el diario reveló un paulatino endurecimiento de sus juicios y el empleo de (des)clasificaciones de carácter elitista.

La idea de que el gobierno yrigoyenista, por demagogia o ineficacia, era demasiado tolerante con los reclamos obreros, supuso una redefinición de la conceptualización del matutino sobre los conflictos sociales. A diferencia de la etapa anterior, cuando el mundo del trabajo parecía prepolítico o simpáticamente socialista, con Yrigoyen el diario se planteó un tema, por cierto, mucho más complejo: los efectos del conflicto social en las relaciones entre partidos. Como sostiene Lipset<sup>64</sup>, es posible pensar la confrontación entre partidos en un régimen democrático como una situación donde se libran conflictos de clase, expresados en los apoyos socialmente disímiles de cada fuerza política; ese tipo de lectura podía aplicarse a lo sucedido entre 1916 y 1922. En este sentido, la "demagogia" radical podía ser reflexionada como un modo sui generis de introducir el conflicto de clases en el sistema político y en las instancias estatales. Esto ocurría, según La Nación, sin que mediara una voluntad consciente del radicalismo de producir esos efectos. Simplemente, la impericia, la irresponsabilidad y el deseo de conquistar sufragios convertían a los yrigoyenistas en portadores, malgré eux, de reivindicaciones obreras susceptibles de ponerlos en colusión con el anarquismo primero y luego con los admiradores de la recién inaugurada experiencia leninista. Más allá del componente retórico y agitativo de muchas de las acusaciones del diario a las preferencias radicales por los activistas extremistas, lo importante fue el cambio de su percepción de la relación entre las luchas sociales y las disputas entabladas en la arena político-electoral. David Rock ha mostrado

la complejidad de las relaciones del movimiento obrero con el gobierno radical<sup>65</sup>.

Como en todo pensamiento político, en el de La Nación se acumulaban aspectos contradictorios. La concepción favorable al respeto por el mantenimiento del régimen democrático, a pesar de su disconformidad frente al yrigoyenismo, se combinó, a fines del sexenio, con un evidente interés en reintroducir al actor militar en las relaciones políticas. Durante mucho tiempo, politizar a las fuerzas armadas había sido una estrategia del radicalismo para incorporarlas a sus periódicos alzamientos. El recurso discursivo utilizado por los radicales para invitar a los militares a la sublevación había consistido en clasificarlos como "pueblo con uniforme" y, en consecuencia, perjudicado como el resto de la población por el "régimen falaz y descreído". Los gobiernos conservadores habían construido una caracterización exactamente inversa, y para evitar las rebeliones militares proponían para los hombres de armas la identidad de funcionarios apolíticos del Estado. La Nación mantuvo esta última idea durante el gobierno radical, pero la incorporó a un sistema más global de reflexión sobre la situación política. Según su razonamiento, los militares eran funcionarios apolíticos del Estado, perjudicados por la politización y el clientelismo yrigoyenista. De esa premisa era fácil deducir la legitimidad de un eventual movimiento militar contra las autoridades. Parece válido conjeturar que, siguiendo esa línea de reflexión, La Nación se hubiese colocado en una posición más cuestionadora de la continuidad constitucional en 1922 si el candidato oficialista no hubiera sido Marcelo T. de Alvear.

El otro cambio muy importante registrado en el pensamiento del diario durante el período analizado correspondió a la mayor y más coherente formulación que asumieron sus argumentos a favor del intervencionismo estatal en la economía. La perspectiva industrialista y el reclamo de políticas oficiales de estímulo a las actividades mineras aparecieron, junto con las críticas a la especialización exclusiva en la producción agropecuaria, como elementos configuradores de un nuevo concepto de las prácticas estatales. Así, el matutino, que se preocupaba desde hacía mucho por sugerir al Estado la implementación de funciones de intervención en lo social, completó esa perspectiva, en los finales del gobierno de Yrigoyen, con la demanda de más Estado en lo económico. Concepción que incorporaba la defensa de los intereses rurales, pero de ningún modo se agolaba en esa parcialidad sectorial. Esa manera de pensar el Estado y el modo nuevo de reflexionar acerca de los conflictos sociales y de su proyección en las luchas entre partidos, permiten definir a los años 1916-1922 como una verdadera etapa de transición en las ideas de La Nación.

## NOTAS

- <sup>1</sup> *La Nación*, 2-4-1916, pág. 6.
- <sup>2</sup> Lisandro de la Torre: *Obras*, Tomo V, Editorial Hemisferio, Buenos Aires, 1954, pág. 59.
- <sup>3</sup> *La Nación*, 26-4-1916, pág. 11.
- <sup>4</sup> *Ibid.*
- <sup>5</sup> *La Nación*, 11-4-1916, pág. 8.
- <sup>6</sup> Federico Pinedo: *En tiempos de la República*, Tomo I, Editorial Mundo Forense, Buenos Aires, 1946, pág. 27.
- <sup>7</sup> *La Nación*, 11-4-1916, pág. 8.
- <sup>8</sup> *La Nación*, 19-11-1917, pág. 8.
- <sup>9</sup> *La Nación*, 23-11-1917, pág. 9.
- <sup>10</sup> *La Nación*, 13-11-1917, pág. 7.
- <sup>11</sup> *La Nación*, 25-11-1917, pág. 9.
- <sup>12</sup> *La Nación*, 19-12-1917, pág. 10.
- <sup>13</sup> *La Nación*, 9-1-1918, pág. 7.
- <sup>14</sup> *La Nación*, 14-3-1918, pág. 8.
- <sup>15</sup> *La Nación*, 6-1-1919, pág. 5.
- <sup>16</sup> *La Nación*, 8-1-1919, pág. 17.
- <sup>17</sup> *La Nación*, 10-1-1919, pág. 6.
- <sup>18</sup> *La Nación*, 13-1-1919, pág. 5.
- <sup>19</sup> *La Nación*, 15-1-1919, pág. 5.
- <sup>20</sup> *La Nación*, 14-1-1919, pág. 6.
- <sup>21</sup> "Sobre el problema de las existencias de trigo": *La Época*, 4-7-1920, pág. 1. "Sobre los ferrocarriles": *La Época*, 12-7-1920, pág. 1.
- <sup>22</sup> *La Época*, 16-7-1920, pág. 1.
- <sup>23</sup> *La Época*, 27-7-1920, pág. 1.
- <sup>24</sup> "Sobre el cacique Catriel": *La Época*, 5-8-1920, pág. 1. "Sobre las intenciones de *La Nación*": *La Época*, 1-9-1920, pág. 1.
- <sup>25</sup> El diario dedicó tres editoriales al Congreso Socialista: 11-1-1921, pág. 4; 12-1-1921, pág. 4, y 14-1-1921, pág. 4.
- <sup>26</sup> *La Nación*, 7-1-1921, pág. 4.
- <sup>27</sup> *Ibid.*
- <sup>28</sup> *La Nación*, 28-11-1921, pág. 4.
- <sup>29</sup> *Ibid.*
- <sup>30</sup> *Ibid.*
- <sup>31</sup> En el periódico de la central obrera de la época se describieron los acontecimientos en términos que orillaban lo dantesco: "La clase obrera de la Patagonia ha sido asesinada a mansalva. Suman más de dos mil trabajadores fusilados, quemados con nafta, arrojados al mar, enterrados vivos (...) El delito de esas peonadas masacradas no es otro que el de haber tenido la evidencia de reconocer el grado de inferioridad moral, política y económica a que los ha condenado el latifundismo absorbente". Unión Sindical, Año I, N° 1, 1922.

- 32 *La Nación*, 7-1-1922, pág. 4.
- 33 *Ibid.*
- 34 *Ibid.*
- 35 *La Nación*, 9-1-1922, pág. 4.
- 36 *La Nación*, 4-2-1922, pág. 4.
- 37 *La Nación*, 31-1-1922, pág. 4.
- 38 *La Nación*, 15-7-1921, pág. 4.
- 39 Esta toma de posición de corte nacionalista era seguida por otra de factura antimonopolista: "No olvidemos, por lo demás, que en el caso de los frigoríficos el primer ejemplo de restricción fue dado, justamente, por el país al cual pertenece la mayor parte de los capitales en ellos invertidos: Estados Unidos". *La Nación*, 19-7-1921, pág. 4.
- 40 *La Nación*, 3-1-1922, pág. 4.
- 41 *La Nación*, 5-3-1922, pág. 4.
- 42 *La Nación*, 10-11-1921, pág. 4.
- 43 *La Nación*, 24-11-1921, pág. 4.
- 44 *La Nación*, 12-1-1922, pág. 4.
- 45 *La Nación*, 3-4-1922, pág. 4.
- 46 Mitre: "El militarismo", *La Nación*, 19-12-1880, reproducido por Héctor González Iramain: *Bajo la dictadura de junio*, s/e, Buenos Aires, 1946, págs. 69-73.
- 47 Isaias José García Enciso: *Los 100 años del Círculo Militar*, Ediciones del Círculo Militar, Buenos Aires, 1981, pág. 67.
- 48 *La Nación*, 17-9-1921, pág. 4.
- 49 *La Nación*, 20-10-1921, pág. 4.
- 50 *La Nación*, 23-3-1922, pág. 4.
- 51 *La Nación*, 1-1-1922, pág. 4.
- 52 *La Nación*, 12-1-1922, pág. 4.
- 53 *La Nación*, 19-1-1922, pág. 4.
- 54 *Ibid.*
- 55 *Ibid.*
- 56 *La Nación*, 3-1-1922, pág. 4.
- 57 *La Nación*, 14-3-1922, pág. 4.
- 58 *La Nación*, 22-4-1922, pág. 4.
- 59 *Ibid.*
- 60 *Ibid.*
- 61 *Ibid.*
- 62 *La Nación*, 12-10-1922, pág. 4.
- 63 *Ibid.*
- 64 Seymour Martin Lipset: *El hombre político*, EUDEBA, Buenos Aires, 1964, cap. III.
- 65 David Rock: *El radicalismo argentino. 1890-1930*, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1977.

### III

## Los debates del período de Alvear. *La Nación*: precursor del intervencionismo económico del Estado

El gobierno del presidente Alvear contó desde su inicio con las expectativas favorables de la mayoría de los sectores políticos y sociales que se habían opuesto a su predecesor. Muy pronto se hizo notorio que tampoco en el tratamiento de la "cuestión social" la nueva administración repetiría las orientaciones de la anterior. La abierta preferencia de Alvear por reclutar muchos de sus altos funcionarios en los medios más antiyrigoyenistas de su partido completaba un cuadro juzgado como francamente alentador por *La Nación* y por quienes tenían posiciones similares a las defendidas desde sus páginas<sup>1</sup>. ¿Había comenzado la esperada "regeneración" de las instituciones? ¿Sería capaz Alvear de gobernar sin la influencia, o aun en contra, de Yrigoyen y los yrigoyenistas? El sexenio iniciado en 1922 se convirtió en el escenario de múltiples y diversas luchas políticas a propósito de esas fundamentales cuestiones. El matutino fundado por Mitre no dejó, en ningún momento, de participar de esas confrontaciones.

Desde sus primeras manifestaciones, los conflictos entre Alvear e Yrigoyen fueron seguidos con interés por *La Nación*. Desde su perspectiva analítica, era perfectamente previsible y explicable que los dos estilos políticos coexistentes en la UCR entrarán en colisión una vez instalado Alvear en la primera magistratura. Las diferencias que llevarían a la división del radicalismo eran vistas como producto no sólo de concepciones políticas sino también de sensibilidades sociales. En el alvearismo se nucleaban los dirigentes más afectos a coincidir con las clases altas o con quienes de ella provenían. En consecuencia, no es sorprendente que, para los sectores adversos al yrigoyenismo, una eventual escisión radical encabezada por los seguidores de Alvear apareciera como una alternativa apta para cambiar el panorama

político; de allí que favorecieran esa ruptura. En esa actitud se colocó el diario, aun cuando con frecuencia afirmara su neutralidad en la vida política y el quehacer interno de los partidos.

Al iniciarse el período legislativo de 1923, un grupo de senadores radicales enfrentó al vicepresidente de la República y titular de la cámara alta, Elpidio González, acusándolo de discriminación en favor de los yrigoyenistas al integrar las comisiones senatoriales. Para muchos observadores de la historia de la UCR, ése fue uno de los primeros y más significativos hechos públicos del enfrentamiento, hasta entonces más larval y silencioso, que se registraba en el seno del oficialismo. *La Nación*, que desde el día de la nominación de su candidatura había caracterizado a González como el representante de Yrigoyen en la cúspide del gobierno de Alvear, dio gran importancia a los acontecimientos del Senado.

Como había sucedido en el período presidencial precedente, las discusiones en torno a la problemática social fueron uno de los ejes que definieron y contrastaron posiciones entre sectores políticos. Pero, a diferencia de los años 1916-1922, los del gobierno de Alvear se caracterizaron por la disminución de los conflictos sociales. La mejora de la economía nacional trajo la posibilidad de disminución de las tensiones entre empresarios y asalariados. Contribuyó a ese proceso la paulatina pérdida de gravitación de las corrientes obreras anarquistas y el aumento de la influencia de orientaciones sindicales más negociadoras. Durante el gobierno de Alvear, con el apoyo de sectores radicales antiyrigoyenistas y del conservadorismo, el Congreso modificó en parte la legislación social vigente, eliminando medidas y regulaciones favorables a los asalariados.

De todos los debates parlamentarios y nacionales generados en torno a las modificaciones de leyes sociales, uno de los que alcanzó mayor trascendencia fue la discusión que finalizó con la derogación de la Ley 11.289, que aseguraba a los asalariados una jubilación por lo menos igual al salario mínimo. *La Nación*, en coincidencia con las distintas organizaciones de representación de los intereses patronales, se definió a favor de la derogación de esa ley. Los empresarios se oponían a ella porque los obligaba a contribuir a la formación de los fondos para pagar las jubilaciones y pensiones. Pero, y esto muestra la complejidad de las ideas y debates al respecto, también desde el campo de las organizaciones obreras se reclamaba su derogación. La Unión Sindical Argentina sostenía que los aportes patronales serían recargados en los precios, ya que los empresarios no disminuirían sus ganancias. En cuanto a la contribución obligatoria a realizar por

los asalariados, la Unión Sindical Argentina la equiparaba a un préstamo forzoso de los trabajadores al Estado, ya que, aducía, todas las administraciones necesitaban más ingresos para solventar gastos y despilfarros.

En los debates parlamentarios y en artículos de 1925-1926, el senador Ricardo Caballero fue uno de los principales defensores de la Ley 11.289. Miembro en esa época de la fracción yrigoyenista del radicalismo, Caballero se había caracterizado a lo largo de toda su actuación política por su preocupación por los problemas sociales. Al defender esta ley, Caballero caracterizó en varias ocasiones a *La Nación* como defensor de intereses sociales económicamente privilegiados; afirmó que en un editorial del 28 de enero de 1926, el diario defendía "el criterio de los explotadores desalmados del trabajo humano, de los economistas sin conciencia que formulaban doctrinas científicas al capitalismo y a la burguesía para que, en nombre de ellas, ésta pudiera llegar a la explotación del hombre por el hombre"<sup>2</sup>. Según Caballero, como reacción a ese tipo de posiciones había surgido "la doctrina de la solidaridad social, en cuyo nombre el radicalismo ha emprendido en este país su obra redentora"<sup>3</sup>. Pero el legislador yrigoyenista, no conforme con criticar a *La Nación* a propósito del tema jubilatorio, se remontaba a la acción política de Bartolomé Mitre para dotar de fundamentaciones históricas sus argumentaciones. Así, afirmaba que "para *La Nación* el pueblo argentino fue el caudillaje bárbaro y por eso sus fundadores ordenaron asesinarlo y arrasarlo sus viviendas a hordas mandadas por jefes extranjeros, después de Pavón"<sup>4</sup>.

Si bien el matutino apoyó muchas iniciativas del gobierno de Alvear, en especial todas aquellas que lo alejaban del yrigoyenismo, también objetó los aspectos de la política oficial que consideraba equivocados. En múltiples oportunidades reclamó mayor intervención del Estado en la economía, y reprochaba a Alvear y sus ministros el excesivo apego a las ideas del liberalismo económico. La prédica del matutino en ese sentido se mantuvo a lo largo de todo el sexenio alvearista. Empleó los más diversos argumentos para explicar a sus lectores que la época del liberalismo había finalizado y que correspondía, como sucedía en los países más desarrollados, que el Estado asumiera un rol activo en la orientación de la economía. Es importante señalar que las ideas defendidas por *La Nación* acerca de la perentoria intervención de los poderes públicos no eran justificadas como simples y pasajeras medidas de coyuntura, sino que las consideraba necesarias para un nuevo y necesario estilo de desarrollo económico, ante un mundo nacionalista y proteccionista. El Estado argentino

debía adoptar, según su opinión, políticas acordes con las nuevas circunstancias internacionales para preservar los intereses del país. Esas ideas permiten considerar a *La Nación* como uno de los principales precursores del intervencionismo del Estado en la economía argentina. Importa destacar que esas reflexiones dirigistas se formulaban en momentos de bonanza económica, más de un lustro antes de que el país conociera los primeros efectos de la crisis de 1930. Los editoriales de *La Nación* fueron uno de los lugares, no el único por cierto, donde la prédica intervencionista se expuso con fundamentaciones tanto coyunturales cuanto estructurales. Los problemas de la exportación de carnes motivaron frecuentes reclamos del diario en ese sentido. En 1923, ante las dificultades para colocar ese producto en el mercado mundial, exigió "la revisión completa del actual régimen de intercambio, la abrogación de nuestros actuales tratados de comercio (para) establecer condiciones preferenciales de estricta reciprocidad hacia las naciones que acordaran favorable tratamiento para nuestros productos nobles"<sup>5</sup>. Es interesante señalar que el editorial citado se cerraba con la frase "compradores de quienes nos compren", fórmula que ligeramente modificada se convirtió cuatro años más tarde en la principal consigna de la Sociedad Rural Argentina. Sostenía que el Estado, además de intervenir en el comercio exterior, debía actuar frente a lo que denominaba "las confabulaciones del capital extranjero" contra la ganadería. Al respecto, reprochaba al Congreso no haber convertido en ley la propuesta de "creación de un frigorífico en la Capital (es decir) un factor de regulación comercial que rompa el predominio hoy absoluto de las empresas similares extranjeras"<sup>6</sup>. Pero sería inexacto presumir que *La Nación* demandaba mayor intervención estatal sólo para proteger o beneficiar los intereses del agro. También en el transcurso del gobierno de Alvear, como ya lo había hecho bajo Yrigoyen, criticó en reiteradas ocasiones a las autoridades nacionales por no preocuparse por el futuro de la industria. Al mismo tiempo que proclamaba sus méritos por haber iniciado esos reclamos a favor de la industria diez años antes, en un editorial de enero de 1926 afirmaba: "De tres elementos depende la completa emancipación industrial del país, con perspectivas que exceden a la misma prodigiosa expansión de los Estados Unidos: el hierro, la hulla y el estaño, laboreados y aplicados dentro del territorio, puesto que los poseemos en cantidad considerable"<sup>7</sup>.

A medida que transcurría el período de Alvear, las críticas del diario a la política económica se hicieron más duras y más frecuentes. Refiriéndose en 1926 al discurso presidencial de aper-

tura del período de sesiones ordinarias del Congreso, lamentaba que a pesar de haberse anunciado en años anteriores una supuesta preocupación por la industria, ninguna medida se hubiera tomado al respecto. Acerca de dicho mensaje, afirmaba: "Tampoco se hace referencia directa a esos planes del fomento industrial, ni se recuerdan las promesas concretas ofrecidas en defensa y para la dignificación del trabajo nacional (...) la evolución de las ideas gubernativas en materia económica no parece, en consecuencia, que marca un progreso"<sup>8</sup>. Para brindar un indicador más de la importancia que adjudicaba a la industria, el matutino iniciaba el año 1927 con un editorial donde comparaba las carencias del sector siderúrgico local con la vitalidad de ese rubro en Chile. Preguntaba con insistencia sobre las causas por las cuales las compañías siderúrgicas se instalaban en el país vecino y no en la Argentina, aun con yacimientos de hierro y hulla tan aptos como los de aquél. Para *La Nación*, la falta de desarrollo de la industria siderúrgica argentina era aún más criticable si se tenía en cuenta que nuestro país importaba cuatro veces más hierro que Chile<sup>9</sup>.

Para dar un panorama de conjunto de la situación económica y explicar las razones de la inacción del Estado, no vacilaba en remitir al lector a las concepciones ideológicas anticuadas de las más altas autoridades del país. Con una prosa singularmente clara, objetaba al gobierno mantener imperturbable su doctrinarismo librecambista, "que es profesado de una manera fatalista, a pura persistencia del régimen arcaico de otras épocas económicas diametralmente diversas de las que operan en estos momentos con efectos ruinosos para nuestros intereses"<sup>10</sup>. Le resultaba incomprendible que, en un mundo caracterizado por el abandono del liberalismo, en la Argentina se persistiera con la adhesión a esas concepciones. Si se tenía una mirada abierta y no dogmática, decía, no podía dejar de percibirse cómo las principales naciones del planeta abandonaban el librecambio. Aquellas ideas, cuya validez teórica no se negaba, debían confrontarse con una realidad nacional que las revelaba inadecuadas. El liberalismo correspondía a una organización social de completa independencia individual y con libertad de competencia, sólo concebible en la teoría, pero, aclaraba: "No ha existido ni existe esa organización social, el mercado no ha sido sino muy contadas veces libre y muy pocas transacciones se han realizado con la absoluta independencia requerida para que representen el resultado efectivo de las ofertas y las demandas reales"<sup>11</sup>. A partir de esa posición rigurosamente crítica de las simplificaciones librecambistas que, en su opinión, nutrían las ideas oficiales, sostenía que los inter-

cambios internacionales se hallaban en manos de poderosas corporaciones, que había grandes empresas capaces de imponer el control monopólico del comercio y que los regímenes aduaneros o las disposiciones sanitarias debían verse como instrumentos de una lucha implacable por el control de los mercados. En un contexto internacional así caracterizado, cabía desconfiar de las doctrinas propaladas por los gobiernos de los países centrales cuando sostenían que para preservar en países como el nuestro "la baratura de la vida, la conveniencia del consumidor y la excelencia de las manufacturas"<sup>12</sup> se debía recurrir a las importaciones. Contra esa posición, *La Nación* creía que "el momento actual es de fomento de las industrias de transformación y desarrollo de la utilización de nuestros recursos naturales (ya que) aún tenemos que pedir al extranjero la provisión de incontables mercaderías cuyas materias primas son nuestras"<sup>13</sup>. En esas condiciones nacionales e internacionales, lamentaba la falta de visión industrialista del gobierno de Alvear.

Como en muchos otros temas, los países europeos eran tomados como modelos a imitar y su ejemplo nutría las reflexiones del diario sobre la perentoria necesidad de adoptar iniciativas de tipo proteccionista. Así, el alejamiento del conservadorismo británico de las ideas librecambistas era presentado como un indicador más de los cambios de mentalidad registrados en la década del 20. En el carácter perjudicial para la economía argentina de un eventual proteccionismo británico en materia de importaciones agrícola-ganaderas, *La Nación* veía una razón más para la implementación de políticas estatales dirigidas a amparar "las industrias existentes y otras posibles dentro de nuestra estructura económica, régimen que venimos preconizando con insistente porfía"<sup>14</sup>. Cuando el país que había impulsado las ideas librecambistas a nivel mundial se las replanteaba ante la nueva realidad internacional, era aún más criticable que el gobierno de Alvear se mantuviera en los preceptos doctrinarios liberales, sin comprender que los mismos se diluían "en una lejana región de los recuerdos", según sostenía, con cierto dejo poético, en el editorial antes citado. Para posibilitar el desarrollo fabril consideraba imprescindible que el Estado dejara de lado las ideas liberales y se comprometiera en el impulso a la industria. Comparaba con lo sucedido durante la Primera Guerra Mundial: "Si antes la protección fiscal no era aplicable, puesto que las industrias surgían precisamente por la desertión de las extranjeras (...) las nuevas condiciones económicas del mundo indican claramente que la inacción del Estado y la indiferencia de las autoridades constituyen una política suicida, que atenta fatalmente contra el porvenir de la República"<sup>15</sup>.

La administración de Alvear manejó la relación con las fuerzas armadas de un modo más cordial y comprensivo que su predecesor. Sólo el hecho de que Alvear tuviese como vicepresidente a Elpidio González, ministro de Guerra de Yrigoyen, cuya gestión había sido cuestionada por la oficialidad militar, generó en un primer momento cierta inquietud en los hombres de armas. Según se afirma en la historia del Círculo Militar antes citada, esa institución envió a Alvear, una vez electo, "un memorial que incluía tres pedidos: por el primero se le solicitaba que su primera visita luego de asumir fuera al Círculo Militar (...), por el segundo se le requería que no delegase en Elpidio González, por el tercero que no nombrase ministro de Guerra a Dellepiane. Alvear satisfizo los tres, visitó el Círculo Militar el 14 de octubre y si bien nunca pensó nombrar a Dellepiane, se decidió por el candidato de la logia que era el coronel Agustín P. Justo, que no obstante no integrarla, gozaba de sus simpatías"<sup>16</sup>. El historiador del Círculo Militar no hace referencia al tercer pedido, pero cabe recordar que Alvear no delegó el mando durante su sexenio en su vicepresidente Elpidio González, violando así las disposiciones constitucionales cada vez que se ausentaba de la Capital Federal.

Sin enfrentar grandes conflictos sociales y sin discrepancias a propósito de la gestión interna de las fuerzas armadas, todo hacía prever al comienzo del gobierno de Alvear que el tema militar perdería vigencia para los sectores conservadores que se habían interesado en él durante la presidencia de Yrigoyen. La satisfacción dada por Alvear a las demandas militares, la designación de Justo como ministro de Guerra o las posiciones institucionales ganadas por altos oficiales manifiestamente anti-yrigoyenistas eran aspectos favorables, entre otros, a la distensión con proyecciones políticas en el seno de la entidad castrense. En consecuencia, la situación militar parecía muy poco propicia para la penetración de ideas cuestionadoras del régimen democrático. Aparentemente, tampoco había entre los políticos antirradicales sectores significativos dispuestos a fomentar el militarismo. Sin embargo, en ese contexto se inició la reflexión autoritaria cuyo más conocido expositor fue Leopoldo Lugones. El ya célebre bardo colaboraba en *La Nación* desde hacía muchos años. El diario no asumió durante la gestión de Alvear una posición militarista o favorable al golpe de Estado y criticó en varias oportunidades las ideas de Lugones. Nos parece interesante detenernos brevemente en las diferencias ideológicas entre *La Nación* y Lugones, porque revelan aspectos importantes del pensamiento político del matutino.

Leopoldo Lugones comenzó a escribir en *La Nación* en 1903. Tenía en ese momento 29 años y cierta trayectoria política. En 1895 había redactado el acta fundacional del Centro Obrero Internacional de Córdoba. Dos años después, ya radicado en Buenos Aires, inició en codirección con José Ingenieros la publicación del quincenario *La Montaña*, que se definía como "Periódico Socialista Revolucionario" y fechaba sus ediciones con el calendario de la Revolución Francesa y la periodización anual a partir de la Comuna de París. La prédica anticlerical, antimilitarista y antiburguesa de *La Montaña* provocó el secuestro de alguna de sus ediciones y el periódico dejó de publicarse al llegar al número 12. En esa época Lugones escribía en *La Vanguardia*, órgano oficial del Partido Socialista. La adhesión extrema a los principios del socialismo puso al poeta en situación de conflicto con sectores más moderados de su partido. En 1898 las diferencias se acentuaron y, con un pequeño número de afiliados, Lugones rompió con el partido y fundó al año siguiente la Federación Socialista Obrera Colectivista. A pesar de sus posiciones políticas extremistas, en 1898 fue designado para ocupar un cargo administrativo en la Dirección General de Correos y Telégrafos, empleo que obtuvo, según algunos autores, por influencia del general Julio A. Roca, en ese momento presidente electo de la República<sup>17</sup>. En dicha repartición permaneció hasta 1900, año en que pasó a ocupar un alto cargo en el Ministerio de Instrucción Pública, donde revistó hasta 1903; renunció por disconformidad con la política educativa del gobierno, que juzgó perjudicial para los sectores populares. En junio de 1903 Joaquín V. González, ministro del presidente Roca, le encomendó la redacción de un informe sobre las ruinas jesuíticas de Misiones; hacia fines de ese año, su interés por la política lo llevó a participar de la organización del Comité de la Juventud pro-candidatura de Quintana. En ese momento comenzó a escribir en *La Nación*.

La enemistad con el Partido Socialista no había apartado de las ideas de izquierda al nuevo colaborador del diario. En 1904 participó en la redacción del ya comentado proyecto de Ley Nacional de Trabajo, en un equipo integrado además por Enrique del Valle Iberlucea, Augusto Bunge, Manuel Ugarte y Juan Biale Massé. Ese equipo fue caracterizado por Estanislao Zeballos como constituido por "cerebros dirigentes, propagandistas ardorosos de las reivindicaciones socialistas europeas que exaltaban y lanzaban a los obreros a la violencia"<sup>18</sup>. Lugones fue muy crítico del gobierno de Figueroa Alcorta y desde esa perspectiva ingresó a la redacción de *El Diario*, periódico de oposición dirigido por Manuel Láinez. En el año del Centenario, según uno de sus

biógrafos, mantuvo conversaciones con el radicalismo para participar en una eventual conspiración armada<sup>19</sup>. Ese mismo año se pronunció públicamente contra la Ley de Defensa Social, que, como hemos visto, también fue duramente objetada por *La Nación*. Cumpliendo funciones de corresponsal en Europa, Lugones siguió colaborando en sus páginas entre 1911 y 1914. En sus artículos europeos, en especial en aquellos que anunciaban la casi inevitabilidad de la guerra mundial, las ideas anticlericales y posiciones antimilitaristas ocupaban un lugar destacado. Además, Lugones criticaba a los socialistas del viejo mundo por apoyar los preparativos bélicos. Refiriéndose a los dignatarios religiosos y a los dirigentes socialistas, escribía en *La Nación* en septiembre de 1912: "Los amos del derecho divino, y los del sufragio universal, quizá peores porque son más hipócritas, no tienen ya nada con qué engañar a sus siervos"<sup>20</sup>. En julio de 1914, en una de sus tantas referencias condenatorias de la política alemana contra Inglaterra, ironizaba sobre el error cometido por el Kaiser y sus generales, quienes habían subestimado el valor de la democracia a la que, decía, "la casta militarista (germana) no puede naturalmente concebir sino como un estado de permanente desorden"<sup>21</sup>. Reflexión paradójica, sin duda, de quien algunos años después se convirtió en uno de los mayores detractores de la democracia y en firme apologista del militarismo.

El caso Lugones no se diferenció mayormente de aquellos adeptos del fascismo europeo que habían comenzado su actuación política en partidos de extrema izquierda. La trayectoria que permite recorrer el arco ideológico que culmina en la extrema derecha conserva ciertas referencias prácticamente constantes. De la época en que adhería al "socialismo revolucionario" Lugones mantuvo sus críticas a la "democracia burguesa". La desconfianza y el desprecio por la dimensión electoral de la política asumieron frente a los primeros comicios que llevaron a Yrigoyen a la presidencia connotaciones peyorativas en las reflexiones lugonianas. En una conferencia pública sostuvo de las elecciones de 1916: "La Atenas del Plata, loca de libertad, acaba de elegir sus representantes en la ralea bastarda o servil de ilotas y metecos"<sup>22</sup>. Además, Lugones criticó a Yrigoyen por su decisión de mantener la neutralidad argentina en la Primera Guerra Mundial; le reprochó falta de decisión para alinear a nuestro país junto con las naciones que, en su opinión, defendían la libertad contra el despotismo germano. En especial, Lugones se esforzó por alabar la política norteamericana del presidente Wilson, y denostar a quienes en la Argentina eran neutralistas y temían una alianza con los norteamericanos por el riesgo de caer bajo la

influencia de un país tan fuerte<sup>23</sup>. La guerra vista como gesta apareció en la reflexión lugoniana como la posibilidad de diferenciar el heroísmo militar, digno de sus elogios, del militarismo en política, rechazado por aberrante en sus ideas de 1917.

Entre 1917 y 1919 Lugones volvió a demostrar que sus ideas no eran fácilmente clasificables en la cartografía izquierda/derecha. Frente a la revolución rusa de febrero de 1917, que puso fin al zarismo, tomó una posición favorable; veía en ese acontecimiento un avance de la libertad contra el despotismo. En lo inmediato el triunfo de los bolcheviques no lo hizo cambiar de opinión. La Reforma Universitaria suscitó su adhesión porque vislumbraba en ella inquietudes anticlericales con las que simpatizaba y, también, valoraba la importancia del activismo estudiantil contra las autoridades educacionales<sup>24</sup>. Ante los sucesos de la Semana Trágica manifestó su simpatía por los reclamos obreros y repudió expresamente los hechos de violencia cometidos contra miembros de colectividades extranjeras. ¿Había retornado Lugones a sus pasadas convicciones revolucionarias de izquierda? Si se acepta la interpretación de Arturo Capdevila, fundada en el texto de Lugones titulado "Dogma de obediencia", es posible pensar que existió un giro a la izquierda en las ideas del poeta en esos tres densos años<sup>25</sup>. Siguió luego un profundo viraje a la derecha, cuya explicación encontraron algunos autores, entre otras causas, en la decepción que causó en el politizado escritor la evolución de la situación rusa.

A Lugones no le satisfacía la democracia como régimen político y sus ideas no cambiaron con el ascenso de Alvear al gobierno. A diferencia de *La Nación*, que podía dudar de los radicales y de su capacidad para gobernar pero afirmaba su adhesión a las instituciones democráticas, Lugones las rechazaba explícitamente. Para explicar las razones de su voto en blanco en las elecciones de 1922, el escritor manifestaba su disconformidad con el régimen democrático en cuanto tal y no con las opciones partidarias. Es decir, su planteo era prácticamente inverso al del diario. Según Lugones, la democracia dejaba librada la suerte del país a la "plebe"<sup>26</sup>. Mediante un sencillo cálculo estimaba que la mayoría de los votantes de 1922 eran analfabetos. Pero no era totalmente pesimista con respecto al futuro argentino, ya que creía posible la realización de cambios revolucionarios; señalaba, a modo de ejemplo, el proceso por el cual Mussolini había llegado al control del poder en Italia.

Desde una perspectiva definidamente opuesta a la democracia, a mediados de 1923 Lugones pronunció cuatro conferencias en el Teatro Coliseo con el auspicio de la Liga Patriótica Argentina

y el Círculo Tradición Argentina. En esas alocuciones, cuyos títulos fueron "Ante la doble amenaza", "El peligro exterior", "Disciplina nacional" y "Programa de acción", el escritor desplegó una multiplicidad de argumentaciones chauvinistas y reafirmó su fe en las instituciones militares, que caracterizaba como una garantía para la defensa de los intereses nacionales. En distintos pasajes de sus conferencias encomió a *La Nación*, definida como "alta fortaleza de patriotismo y de verdad"<sup>27</sup>, y elogió al entonces director del diario, Jorge A. Mitre. En la culminación del ciclo de disertaciones, convocó a la creación de una nueva agrupación política que, entre otros postulados programáticos, debía incluir la autonomía administrativa del Ejército y de la Armada<sup>28</sup>. Como buen indicador de que no se trataba del libre discurrir de un poeta puesto a ideólogo, es de señalar que en el comienzo de la mencionada conferencia una banda militar ejecutó una diana en honor de la concurrencia y en homenaje al Ejército. Esa participación castrense motivó, días más tarde, un pedido de informes en el Congreso.

Por su parte, en el curso de 1924, *La Nación* opinó en varias ocasiones sobre temas directamente relacionados con el problema militar. Refiriéndose a una nota de respuesta del ministro de Guerra, general Justo, a su colega de Interior, donde el primero consideraba que las fuerzas armadas no debían intervenir de modo preventivo frente a las protestas sociales, el diario juzgaba acertada esa posición. Coincidió con Justo en que las instituciones castrenses debían salir a la calle para preservar el orden público sólo en las circunstancias extremas en que la policía se mostrara ineficaz y, entonces, les cabía actuar con toda la energía y la violencia propias de la categoría militar; en ese caso, sentenciaba, "los revoltosos deben saber a qué atenerse para el porvenir"<sup>29</sup>. Esta manera de caracterizar la relación entre orden público y acción militar encontró días más tarde un nuevo y por cierto original campo de aplicación con motivo de un fortuito, pero nada anecdótico, acontecimiento de consecuencias harto reveladoras.

El 8 de mayo de 1924 falleció el diputado socialista electo Eugenio Albani, y el Poder Ejecutivo decretó, según la práctica habitual, la rendición de honores militares en el acto de sepelio. Sin embargo, el oficial del Ejército encargado de realizar el homenaje se negó a cumplir la orden porque el féretro se hallaba cubierto con una bandera roja, obviamente, el estandarte del partido del occiso. En el análisis de ese acto de desobediencia, el matutino consideró digna del mayor elogio la reacción del oficial, dado que esa "rápida decisión del mencionado jefe, en cuya vir-

tud el decreto del P.E. no ha podido cumplirse en su integridad, acusa un justo y encomiable concepto que enaltece a quien lo ha realizado sin incurrir en las vacilaciones que pudo promover en su espíritu el carácter desconcertante del episodio<sup>30</sup>. Afirmaba, además, que el comportamiento del oficial se encuadraba perfectamente en los reglamentos militares, donde se acepta la eventual desobediencia al cumplimiento de órdenes frente a circunstancias inesperadas en las que cabe tomar decisiones sin dilatorias consultas a los superiores. En la medida que el general Justo se manifestó *a posteriori* de acuerdo con lo actuado por el oficial, *La Nación* sostuvo que el ministro de Guerra había "interpretado el sentir del Ejército y el juicio sensato de la opinión nacional"<sup>31</sup>. Si bien el fallido acto de homenaje no tuvo luego mayores repercusiones<sup>32</sup>, no cabe duda de que la posición del diario mostraba una particular visión del grado de autonomía de los comportamientos militares en cuestiones políticas.

En diciembre de 1924 se celebró en Perú el centenario de la batalla de Ayacucho. Lugones fue invitado a asistir por el gobierno peruano. *La Nación* lo designó enviado periodístico para cubrir el acontecimiento. Llevaba, además, la representación de un conjunto de entidades culturales argentinas. Lo que pudo haber resultado una rutinaria conmemoración se convirtió, sin embargo, en el escenario donde el polifacético escritor emitió la frase que, posiblemente, más se haya citado de su abundante, y controvertida, producción político-literaria. Después de ensalzar las virtudes heroicas de los viejos guerreros, anunció su voluntad de referir su alocución al tiempo presente y pronunció las palabras tantas veces recordadas: "Ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada". Para que no quedaran dudas sobre sus ideas, agregó luego que así como antaño la "espada" había hecho la independencia, ahora "hará el orden necesario, implantará la jerarquía indispensable que la democracia ha malogrado hasta hoy". Seguramente por un afán de exactitud, para evitar que se interpretara a la "espada" como una mera figura poética, ya que no era de poesía sino de política que hablaba, precisó su pensamiento diciendo: "El sistema constitucional del siglo XIX está caduco. El ejército es la última aristocracia, vale decir la última posibilidad de organización jerárquica que nos resta entre la disolución demagógica"<sup>33</sup>. En la crónica que *La Nación* publicó sobre el acto de Ayacucho, minuciosa en su parte inicial, se suprimieron sin embargo los contenidos más antidemocráticos y militaristas de la alocución de Lugones. Ante esa omisión, al regresar a Buenos Aires, el escritor solicitó al diario que se publicara el texto completo de su discurso de Ayacucho, el cual ya

había provocado muchas denuncias y repudios de periódicos y entidades democráticas. En la nota dirigida por Lugones a *La Nación* con ese motivo señalaba también que había formulado declaraciones favorables al movimiento militar producido en Chile en esos días, pues "considerando allá como acá mejores a los militares que a los políticos, y no siendo yo una ni otra cosa, deseo con imparcialidad —allá como acá— el gobierno de los mejores"<sup>34</sup>.

A propósito de la intervención política de las fuerzas armadas chilenas, que impuso en un primer momento la renuncia del presidente Alessandri, *La Nación* desarrolló, en una larga reflexión sobre el problema del militarismo, una posición totalmente distinta a la de Lugones. Entre otras consideraciones, afirmaba que los gobiernos militares latinoamericanos, en comparación con los de origen democrático, no tenían "la ventaja de ser más eficaces en la práctica precisamente porque suprimen el concurso de los elementos más sanos, persiguen el examen de los sucesos como un crimen y cultivan exclusivamente la preocupación de mantenerse donde están. En vez de gobernar cuidan el gobierno con la espada en la mano"<sup>35</sup>. Comparaba los casos de la Argentina y el Uruguay con la situación chilena, y destacaba que en ambos países del Río de la Plata la institución castrense era "un órgano de la nacionalidad que sirve a un objeto definido, sin salirse de su cauce natural ni desbordar la misión que se le asigna. Formado por la renovada afluencia popular es, claro está, un instrumento constitucional y, por ende, esencialmente democrático"<sup>36</sup>. En sus planteos, *La Nación* criticaba a quienes querían que las fuerzas armadas se inmiscuyesen en política. El editorial sobre Chile constituyó, posiblemente, una de las mayores tomas de distancia del diario con respecto a las concepciones lugonianas. Con un estilo incisivo, en el cual no estaba ausente la ironía, afirmaba que al producirse en "algunos Estados americanos las agitaciones militares, esos acontecimientos repercutieron aquí en ciertos círculos con un eco de simpatía que no tardó en cobrar el valor de un propósito. Aduciase, entonces, la doctrina curiosa de que los militares se encuentran especialmente capacitados para gobernar por ser teóricamente hombres de una preparación especial y por haberse educado en un sentido disciplinario y en la noción de orden. Es éste un argumento visiblemente falaz, puesto que las cualidades de la disciplina y del orden se quiebran y derivan al caos no bien comienza la participación del Ejército en la política, según lo demuestra la dura lección de los países que se han dejado tentar por el ensayo"<sup>37</sup>. Refutaba casi textualmente una de las justificaciones militaristas de Lugones, y la ridiculizaba así: "En cuanto al privilegio uni-

forme de su preparación, es como si se sostuviera la tesis de que una Nación debe ser gobernada por los médicos, por los ingenieros o los abogados, en virtud de que son gremios de un oficio aprendido en los altos institutos", y afirmaba, con satisfacción, que "nuestro Ejército está desvinculado de esa clase de alucinaciones y el espíritu civil prima con indesarraigable solidez como única potencia directriz de la República"<sup>38</sup>.

El decidido planteo favorable a la exclusión de las fuerzas armadas de la vida política fue retomado por el matutino con motivo de un acto de homenaje al general Pablo Riccheri. En su discurso, dicho hombre de armas había recomendado a los militares respetar el orden constitucional y los poderes civiles y no caer en las tentaciones pretorianas de otros países del continente. *La Nación* comentaba esas ideas y afirmaba que "nos hemos ocupado en distintas ocasiones de esos hechos para mostrar el peligro que entraña para la tranquila evolución democrática la injerencia de los militares en la acción de gobierno y nos complace que un representante del Ejército, de tanto crédito moral como lo es el General Riccheri, coincida con las ideas que hemos sostenido al respecto"<sup>39</sup>. La subordinación de los militares a las leyes, según dicha reflexión, completaba el carácter de una sociedad de estructura democrática y definía en el continente nuestra fisonomía civil.

No sólo el diario se oponía editorialmente, en 1925, a las tesis militaristas de Lugones, sino que lo mismo hacían otros de sus más importantes colaboradores. Así, Lucas Ayarragaray, durante los años de Alvear, rechazó en sus páginas la posible intervención de militares en la política nacional. Si bien Ayarragaray no ocultaba sus críticas de base elitista al funcionamiento del sistema democrático, se definía, sin embargo, contrario a suprimirlo, ya que entendía posible su perfeccionamiento. En un ilustrativo intercambio epistolar con Lugones, en 1925, desarrolló plenamente su posición antidictatorial. Para Ayarragaray la democracia se debía consolidar lentamente y, en su opinión, la generación a la que él pertenecía estaba obligada a aceptar las imperfecciones de un sistema todavía sin raíces en la sociedad y en la cultura política nacional. Siguiendo un razonamiento coherente con su elitismo, Ayarragaray reprochaba a Lugones profesar un pensamiento idealista al suponer que un país con las condiciones sociales y culturales de la Argentina podía generar una dictadura política inteligente y expeditiva en el resguardo de los intereses nacionales. Por el contrario, para Ayarragaray no cabía esperar al "déspota brillante" que reclamaba Lugones, sino "según todas las posibilidades la dictadura que seguro usted

obtendría sería gauchesca y soldadesca”<sup>40</sup>. E ironizaba sobre la admiración de Lugones por el fascismo italiano: “En vez de los acantos y las violetas clásicas de las campiñas romanas o florentinas, brotarían los cardos y los abrojos de la campaña pampeana. Nuestro país político, pues, respondería a sus ensueños clásicos engendrando con su ingénito y tradicional temperamento un mandón silvestre. No hay que dejarse engañar por la leyenda patriarcal del ‘buen tirano’ ”<sup>41</sup>.

Las posiciones antimilitaristas del matutino y de muchos de sus colaboradores se combinaban con las esperanzas puestas en una posible fractura del radicalismo. Los estímulos de *La Nación* a la división de la UCR provocaban airadas críticas de *La Época*. El periódico radical se ocupó con frecuencia de denunciar que el diario fundado por Mitre se dedicaba a atizar las diferencias entre yrigoyenistas y alvearistas. Alineado a favor de Yrigoyen, los comentarios de *La Época*, que por entonces denominaba a *La Nación* “el pulpo máximo”, se especializaron en recordar todos los obstáculos y críticas que dicho diario había desplegado en el sexenio del caudillo radical. Con cierta ironía señalaba que la prédica contra el “personalismo” no la podía hacer con un mínimo de autoridad una publicación que había sido creada, argüía, por uno de los jefes políticos más personalistas que había tenido el país. Con inocultable indignación, el periódico radical objetaba los editoriales de *La Nación* que estimulaban al gobierno de Alvear a intervenir provincias gobernadas por partidarios de Yrigoyen, y recordaba que a éste le habían reprochado permanentemente haber tomado medidas como las aconsejadas ahora a su sucesor. “La moral de un diario” se tituló uno de los editoriales de *La Época* donde más acremente se atacaba al matutino por “incitar a la traición y a la apostasía (...) con el consejo velado que da al presidente de la Nación de desterrar de la administración pública a los hombres que lo llevaron a la investidura que ejerce”<sup>42</sup>.

El interés de *La Nación* por observar y reflexionar sobre los conflictos internos del radicalismo se mantuvo y agudizó en tanto éstos se vislumbraban como irreconciliables. La posible ruptura de la UCR se combinaba con el avance de otras fuerzas opuestas a dicho partido, y el diario alentaba una eventual escisión radical que podía permitir la formación de un nuevo frente político. A fines de 1925, el matutino no ocultaba su satisfacción al destacar los éxitos electorales del conservadorismo cordobés, y también seguía con interés la profundización de la división de la UCR, manifestada, en ese momento, en la formación de una lista alvearista autónoma para concurrir a las elecciones nacionales

en la Capital Federal y en la reorganización del radicalismo santiagueño con la exclusión de los yrigoyenistas. Como signo de los nuevos tiempos, adjudicaba importancia a las convergencias de conservadores y alvearistas para designar al presidente de la Cámara de Diputados y para definir la política en determinadas comisiones. Esos hechos eran interpretados como los halagüenos anuncios de la formación de un futuro frente contrario al yrigoyenismo, "de una aspiración colectiva de organizar la fuerza llamada a contrarrestar su predominio"<sup>43</sup>. Entusiasmado con la idea, el diario estimaba que a la esperada convergencia le sería "fácil enunciar el programa cuando llegue el momento de conscribir las fuerzas llamadas a engrosar la línea de batalla"<sup>44</sup>. Su beneplácito frente a las iniciativas de los antipersonalistas tendientes a dividir al radicalismo se acompañaba, sin embargo, con muchas dudas y resquemores sobre el carácter de la fracción alvearista. Si bien alentaba su antiyrigoyenismo, distaba de otorgarle un mayor crédito político. A comienzos de 1926, en un editorial titulado "Personalismo y antipersonalismo", exponía una crítica punzante y minuciosa a los radicales alineados contra Yrigoyen. ¿Se podía confiar en los antipersonalistas o eran similares a sus adversarios? A esa pregunta el matutino no daba una respuesta terminante, pero indicaba múltiples razones para no acordar total confianza a los antipersonalistas. Si habían cohabitado durante tanto tiempo en un mismo partido con los yrigoyenistas, no se podía dejar de tener dudas sobre ellos. Buscando una respuesta a la pregunta sobre la naturaleza del antipersonalismo, *La Nación* sostenía que era "una expresión política intermedia, y como tal insegura para cualquiera de los elementos opuestos. Entre sus antiguos compañeros de causa es el cisma, la defección o el contubernio; en los partidos de oposición no infunde confianza (...) por sus vacilaciones y la quimera inaccesible que los embriaga"<sup>45</sup>. La desconfianza respecto de los antipersonalistas aumentaba en la medida que éstos se resistían a hacer pactos electorales con los conservadores y a distribuir candidaturas en un intento de polarizar todos los votos antiyrigoyenistas.

En marzo de 1926 las elecciones de renovación de legisladores, realizadas en la Capital Federal, acordaron el primer lugar a los radicales yrigoyenistas, seguidos por los socialistas; los antipersonalistas quedaron relegados al tercer puesto. El matutino vio en los cómputos electorales una confirmación de sus dudas sobre el radicalismo antipersonalista y, además, un nuevo motivo para lamentar la ausencia de un gran partido conservador. Según su balance, las contiendas democráticas

seguirían desarrollándose sin mayor interés "mientras no actúe frente al radicalismo un partido que, como éste, generalice sus enunciados y extienda sus actividades a toda la República"<sup>46</sup>. Consideraba que la oposición a la UCR sólo podía ser asumida eficazmente por un partido conservador con una doctrina y con proyectos claros. En razón de valorar las dimensiones programáticas de la acción política, pese a su distancia de las ideas de izquierda, *La Nación* seguía reconociendo al Partido Socialista el mérito de haber "desenvuelto una larga y fecunda labor de divulgación, de organización y de enseñanza política, que ha sido útil al progreso de la democracia argentina, y ha inducido a los demás partidos a ocuparse de problemas de los cuales se desinteresaban excesivamente"<sup>47</sup>.

En abril de 1927, un hecho de características singulares sirvió para mostrar que *La Nación* se había convertido en más respetuosa de los poderes eclesiásticos que en otras épocas. Un texto del escritor Carlos Alberto Leumann suscitó la protesta del Arzobispo de Buenos Aires y la indignación de la Liga Argentina de Damas Católicas, que estimaron herida su sensibilidad religiosa por la manera en que se habían tratado algunos temas centrales del dogma de la Inmaculada Concepción. Además, millares de suscriptores pasaron del descontento a la acción y cancelaron sus suscripciones. La litigiosa nota, publicada en el suplemento literario, motivó el alejamiento de Leumann de la redacción. El director, Jorge A. Mitre, formuló sus disculpas al Arzobispo y le explicó que no podía controlar cuanto artículo se publicara<sup>48</sup>. Roberto F. Giusti expresó en la revista *Nosotros* su rechazo a la actitud del diario, lejana, a su modo de ver, de la tradición liberal del fundador. Giusti aportaba, además, una visión interesante sobre los editoriales de *La Nación*: "Antes, bajo la mirada distraída del director, podíase escribir a derecha e izquierda, como saliera, hasta los editoriales, hoy digo esto, mañana aquello, aquí pego, aquí no pego. Pero en el futuro habrá que pensarlo dos veces, porque si un redactor puede caer en desgracia aun en la libre condición de colaborador literario y firmando, ¿qué será de los que comprometan al diario sin firmar?"<sup>49</sup>. En fin, preocupado por los posibles rumbos a tomar por el matutino, el mencionado articulista no ocultaba su malestar y se preguntaba si, además de la hora de la espada, estaba por llegar la hora de la cruz.

Pese a tomar de manera permanente posiciones en la vida política y aun en los conflictos internos de los partidos, el diario sostuvo al acercarse las elecciones presidenciales de 1928: "Equidistante de las entidades políticas, juzgamos los actos de los partidos con total neutralidad y aplaudimos o censuramos lo que

por su fin nos parece plausible o inconveniente, de acuerdo con sentimientos y convicciones que están por encima de las simpatías u hostilidades que pueden ocasionar y que consultan las conveniencias permanentes del país<sup>50</sup>. Así, imaginariamente colocado por arriba de las disputas sectoriales y adjudicándose la adecuada visión de los intereses generales de la sociedad, volvía a definir su identidad como políticamente neutra.

Al aproximarse las elecciones presidenciales, el antipersonalismo se convirtió para los sectores de pensamiento conservador en el "mal menor" o la alternativa para impedir el retorno de Yrigoyen a la presidencia. En el caso de *La Nación*, esto se reflejó en la disminución de las críticas contra el radicalismo antiyrigoyenista. A mediados de 1927 los partidos conservadores dieron su apoyo a la fórmula antipersonalista integrada por Leopoldo Melo y Vicente Gallo, conformándose el denominado Frente Único. El diario expresó, desde el momento de su proclamación, simpatía por Melo, en quien veía al portador del espíritu democrático con que el antipersonalismo iniciaba la campaña electoral.

Si bien la ruptura del radicalismo podía generar expectativas optimistas en los sectores conservadores, también causaba inquietudes el posible retorno de los yrigoyenistas al gobierno, quienes esta vez, sin el contrapeso interno de la fracción alvearista, se podían sentir más libres para llevar adelante políticas favorables a las clases populares. En agosto de 1927, en un artículo publicado en *La Nación*, Ayarragaray definía al yrigoyenismo como una versión vernácula del comunismo, "una especie de bolcheviquismo confuso con derivaciones hacia una idolatría de jefatura"<sup>51</sup>. Esta identificación entre la UCR y el comunismo no impedía, sin embargo, al mencionado autor, reiterar su oposición a eventuales intentos autoritarios para bloquear el acceso de los radicales al gobierno.

Aun antes de que se realizaran las elecciones presidenciales de abril de 1928, una serie de triunfos del yrigoyenismo en varios comicios provinciales llevaron a *La Nación* a analizar las causas de la segura victoria nacional de esa fuerza política. La "demagogia" fue una variable explicativa a la que adjudicaba singular relevancia ya que, según afirmaba, el pueblo era fácilmente "seducido por aquellos que con más desenfado halagan sus apetitos, y no es su culpa si al bienestar material inmediato sacrifican un porvenir que puede estar lleno de incertidumbre y zozobra"<sup>52</sup>. Refiriéndose a las elecciones provinciales donde se había impuesto el radicalismo, señalaba: "Contra las previsiones sugeridas del progreso político del país, el prestigio del partido ha

crecido día a día merced a la exclusiva exaltación personal del señor Yrigoyen<sup>53</sup>. Consideraba al anciano caudillo seguro ganador de las elecciones presidenciales, le deseaba éxito en su futura gestión y reafirmaba que, en su opinión, por encima de las discrepancias políticas se encontraban los intereses del país.

La ausencia de un programa que explicitara sus proyectos de gobierno motivaba críticas del matutino contra el radicalismo. Es de destacar que en 1928 la UCR no tenía inhibiciones para declarar públicamente que carecía de programa o plataforma electoral; más aún, los consideraba documentos superfluos carentes de valor alguno. La Convención partidaria reunida el 13 de marzo de 1928 para designar la fórmula presidencial emitió una declaración donde renegaba por su "inutilidad de las plataformas electorales de que tantas veces se ha hablado, y que se reparten profusamente en el país en vísperas electorales. La UCR no tiene en verdad programa escrito en el frontispicio de su templo, ni se busca adherentes con proclamas o mentidos manifiestos. El radicalismo evangeliza con la Constitución, en la cual, como es sabido, caben todos los programas, todas las plataformas, todas las iniciativas, todas las mejoras que el pueblo necesita para su redención y su bienestar"<sup>54</sup>. Esta declaración dio renovados motivos de indignación a *La Nación*. Dos días después de la Convención radical, el diario dedicaba su editorial a analizar el referido documento citándolo extensamente. Acerca del programa, sostenía: "Si en la Constitución, con la que evangeliza el partido, caben todos los programas, es, precisamente por eso, conveniente que cada partido diga en qué consiste el suyo"<sup>55</sup>. Pero es importante aclarar que a pesar de todas sus críticas al radicalismo, aconsejaba a sus adversarios respetar la voluntad electoral de la mayoría, aun cuando ésta se inclinara por ese "programa simplista"<sup>56</sup>.

Los resultados electorales, que otorgaron a la fórmula Yrigoyen-Beiró una amplia victoria sobre sus contrincantes Melo-Gallo, superaron, incluso, las expectativas más optimistas de los partidarios del anciano jefe político. Finalizado el escrutinio, el matutino realizó un balance: "La inmensa mayoría de los votantes se ha decidido sin preguntarse a sí mismos, ni preguntar a nadie, cuáles eran los ideales concretos que apoyaban. Han ido como fuerzas regimentadas a girar en blanco la letra proverbial"<sup>57</sup>. El mayor temor del diario era que Yrigoyen repitiera con respecto a las clases populares una gestión similar a la que había realizado entre 1916 y 1922.

Una ola de huelgas obreras, producida en Rosario a mediados de 1928, dio motivos a *La Nación* para abordar en distintas

oportunidades el tema del conflicto social y de su relación con la política. Las huelgas de la ciudad santafecina habían generado protestas y reclamos de las organizaciones patronales por la falta de rigor policial para preservar el orden. El jefe de la Policía de Rosario era Ricardo Caballero, el mismo dirigente radical que desde su banca de diputado había atacado duramente al diario y a Mitre con motivo de los debates sobre la ley de jubilaciones. Frente a la huelga, el matutino coincidía con los argumentos patronales de crítica a la policía, y sostenía que Caballero había "perdido la confianza de la población y se ha manifestado incapaz de desempeñar acertadamente las funciones que le corresponden"<sup>58</sup>. Objetaba, además, la falta de respuesta del gobernador de la provincia, afirmaba que con su displicencia el gobierno personalista de Santa Fe había comenzado a derrumbarse y muy pronto, profetizaba, tendría en contra a toda la población, aun a aquella que todavía no captaba los efectos de su política.

En ese contexto de conflicto social, Ricardo Caballero introdujo un nuevo elemento irritativo al emitir declaraciones públicas en las que reafirmaba su visión positiva del rol del radicalismo yrigoyenista en relación con las movilizaciones y demandas obreras. En un editorial titulado "Contradicción demagógica", el diario sostenía: "El jefe de la policía de Rosario acaba de formular una doctrina novedosa, mediante la cual define su actitud de funcionario ante los conflictos industriales entre empresas y obreros, aunque no como tal, según era de esperarse, sino como miembro del 'partido' que representa en la Jefatura de Policía de esa ciudad"<sup>59</sup>. El mayor desacuerdo de *La Nación* surgía ante las fundamentaciones de Caballero, quien sostenía "que la igualdad requerida por la justicia no existe entre los que contratan sus brazos sin poder esperar, porque ellos constituyen su único elemento de subsistencia, y los que lo hacen pudiendo esperar, amparados por la fuerza económica que les asegura su subsistencia indefinidamente"<sup>60</sup>. De estas premisas, Ricardo Caballero sacaba como conclusión que cabía reconocer y hacer respetar la libertad de trabajo cuando ésta era el fruto de acuerdos entre las partes en igualdad de condiciones; pero mientras ella fuera invocada por los "privilegiados de la fortuna" no cabía apoyar sus demandas. La particular manera de definir la libertad de trabajo y la justicia por parte del dirigente radical a cargo de la policía rosarina superó ampliamente los límites aceptables para el matutino. Editorializó que Caballero, "en pleno extravío doctrinario, o mejor dicho demagógico, no sólo se arroga la facultad judicial de discernir justicia calificada por la posición económica de las partes en

conflicto sino que subordina la justicia misma a la posición económica de las partes"<sup>61</sup>.

El día que Yrigoyen fue investido por segunda vez con el cargo de Presidente de la República, *La Nación* comparó la nueva etapa con la iniciada en 1916, con el primer gobierno radical. La experiencia anterior, decía, había correspondido a un auspicioso movimiento de incorporación de la población al pleno ejercicio de la ciudadanía. En 1928, en cambio, en la Argentina se expresaba, según el diario, un fenómeno presente en otros países, caracterizado como una situación de "bancarrotas de los políticos" frente a la cual, "bajo diferentes tipos de cultura institucional, se perfila la tendencia de los pueblos a esa actitud y a la vez a hacer depositario a un solo hombre de este imperativo del momento"<sup>62</sup>. Citaba luego ejemplos de esa supuesta tendencia mundial: "El fascismo italiano, la renovación de Primo de Rivera, la omnipotencia de Poincaré, la vuelta de Venizelos, en Europa, y en América Coolidge, que debe negarse con toda energía a la tercera presidencia; Calles omnimodo en México, como Leguía en Perú e Ibáñez en Chile. ¿No son todas manifestaciones del mismo fenómeno? Aquello que en otras partes ha ocurrido mediante la revuelta, las fuerzas militares, el empuje de los descalabros económicos, ha ocurrido entre nosotros, a Dios gracias, sin barricadas y sin cadáveres"<sup>63</sup>. Es decir, para el matutino, Yrigoyen no era sino una expresión local de un proceso de centralización del poder en una persona que se registraba en muchos otros lugares del mundo y en la mayoría de ellos bajo formas dictatoriales. Esto sucedía en el caso argentino sin violentar, sin embargo, las aspiraciones de amplios sectores de la sociedad, ya que según el diario corrían "por el mismo nivel las decisiones del caudillo con las aspiraciones de la masa, y así ésta integra a aquél, dándole una dictadura sin título después de haberlo levantado en una revolución sin sangre"<sup>64</sup>.

*La Nación* expuso algunos aspectos de su estructura interna en un folleto publicado en 1928. En la redacción periodística trabajaban 184 personas y contaba con 550 colaboradores residentes en el país y en el exterior. Las posiciones ideológicas y políticas de los colaboradores nacionales abarcaban un espectro muy amplio; entre ellos cabe mencionar a: Roberto Arlt, Leónidas Barletta, Alejandro Bunge, Juan E. Carulla, Manuel Gálvez, Raúl y Enrique González Tuñón, Carlos Ibarguren, Leopoldo Marechal, Roberto Mariani, Ezequiel Martínez Estrada, Victoria Ocampo, Ernesto Palacio, Horacio Quiroga, Raúl Scalabrini Ortiz, Alfonsina Storni, Hugo Wast y Alvaro Yunque. El carácter polifacético y diverso de esa lista revelaba no sólo la amplitud del diario para

buscar o aceptar colaboradores, sino, además, su función de lugar de acercamiento de ideas, en tanto promotor objetivo de recíprocas aproximaciones de personas cuyas definiciones políticas, ideológicas o estéticas eran hartamente disímiles. La capacidad de *La Nación* de hacerse reconocer como una institución cultural se debió, sin duda, a ese pluralismo que con los años, y en especial después de la década del 40, perdería. El folleto que mencionamos señalaba que la tirada récord, no aclaraba cuándo, pero probablemente en 1928, había sido de 300.000 ejemplares, cifra que comparaba con orgullo con los 1.000 iniciales. En cuanto a la empresa propietaria, se había convertido en una sociedad anónima cuyo paquete accionario estaba íntegramente en poder de los herederos del fundador.

### La Nación: 1922-1928

*Los sectores más progresistas de la clase dirigente argentina habían abierto en 1912 el sistema de participación electoral porque creyeron que el conservadorismo podía acceder legítimamente al control del Estado. Luego, sobrevino el "accidente" yrigoyenista y con él las dudas. La experiencia de la presidencia de Alvear presentó el carácter de segunda oportunidad para hacer coexistir el régimen democrático con canales fluidos de comunicación entre los centros de decisión gubernamentales y los intereses económica y socialmente predominantes. La Nación, que en todo momento había percibido el doble y ambiguo contenido social del radicalismo, alentó su división. El alvearismo, fuerza con apoyos electorales importantes y sin actuación estatal demagógica, era, sin duda, la fórmula exacta para combinar exitosamente la democracia con las expectativas de la clase dirigente. Sin embargo, la relación del diario con la administración de Alvear no fue fácil. En la década del 20 la visión moderna de la política, según la entendía el matutino, suponía un protagonismo estatal para orientar la economía y el desenvolvimiento de lo social, que los radicales antipersonalistas no estaban dispuestos a asumir. En tanto lugar de organización intelectual de una concepción intervencionista del Estado fragmentaria y parcialmente compartida por los principales sectores propietarios, el pensamiento del diario quedó en una posición de avanzada con respecto a dichos sectores y, más aún, al gobierno.*

*El antiliberalismo económico de La Nación tenía una clave en el paralelismo que siempre había trazado entre las innovaciones de ingeniería institucional de los países centrales y su necesaria adopción en el nuestro. El espejo europeo confería a su pensamien-*

to una dimensión prospectiva. Las ideas favorables al intervencionismo estatal acordaban con los intereses de la gran burguesía agraria, preocupada en la época por el problema de los mercados e inclinada a un "antiimperialismo" coyuntural frente a los frigoríficos extranjeros. Pero el matutino reclamaba una acción más integral del Estado, y de ningún modo reducida a la defensa exclusiva del sistema agroexportador. Así, muchas de las prácticas estatales que cambiaron el modo de regulación de la economía durante la década siguiente comenzaron a ser propuestas desde sus columnas en los años de Alvear.

A pesar de sus desacuerdos con el alvearismo, La Nación no le retaceó su apoyo cuando debió enfrentar electoralmente, en 1928, a la oposición personalista. Esa diferenciación entre discrepancias de orden estratégico y coincidencias políticas inmediatas confería aun mayores matices a su pensamiento. La existencia de un juego político donde cabía optar por el "mal menor" se articuló perfectamente con la ambigüedad del diario hacia los partidos conservadores durante el sexenio de Alvear. La declinación de la capacidad política de los partidos conservadores, la debilidad de la alternativa antipersonalista para conquistar una mayoría electoral y derrotar al yrigoyenismo y la necesidad de un Estado intervencionista fueron factores no demasiado fáciles de conciliar con los postulados de defensa del mantenimiento del régimen democrático. Pero esta situación recién quedó configurada claramente en 1928. Mientras tanto, el matutino no cesó en sus planteos de apoyo a la democracia y, en especial, en su oposición a las ideas lugonianas, expresadas en sus propias páginas.

La caracterización formulada a propósito del triunfo de Yrigoyen dejó instalado el debate en una lógica que conducía a la alternativa del golpe de Estado. Por medio del sufragio, modo democrático por excelencia para designar autoridades, podían acceder al gobierno un conjunto de hombres y un caudillo calificados como no democráticos desde la matriz cognitiva propuesta por La Nación. Si en gran parte la política es una lucha discursiva, el diario cerraba el sexenio de Alvear posicionado y definido para la nueva etapa. La supuesta legitimidad del derrocamiento de Yrigoyen se inscribía en un tradicional y recurrente dilema del pensamiento político: ¿cabe el trato democrático con los no democráticos? El interrogante y su respuesta suponían un conflicto clasificatorio en cuya base se encontraban las controvertidas definiciones de la democracia. El matutino se hallaba óptimamente dotado para participar en el debate. Su punto de vista podía tener una alta gravitación en la formación de la opinión pública en razón de las posiciones contrarias al militarismo que sostuvo a lo largo de este período.

## NOTAS

- <sup>1</sup> En un editorial titulado "Buenos propósitos", publicado a los seis meses de asumir la nueva administración, *La Nación* sostenía: "Aun cuando el Dr. Alvear conserve y proclame su solidaridad con el partido radical, deben existir entre su gobierno y el anterior diferencias sensibles, que se han manifestado ya en muchos actos públicos y que necesariamente se irán acentuando con el transcurso del tiempo". *La Nación*, 9-5-1923, pág. 4.
- <sup>2</sup> Roberto A. Ortelli (comp.): *Discursos y documentos políticos del Dr. Ricardo Caballero*, Sociedad de Publicaciones del Inca, Buenos Aires, 1929, pág. 543.
- <sup>3</sup> *Ibid.*
- <sup>4</sup> *Ibid.*
- <sup>5</sup> *La Nación*, 24-5-1923, pág. 4.
- <sup>6</sup> *La Nación*, 25-5-1923, pág. 4.
- <sup>7</sup> *La Nación*, 27-1-1926, pág. 6.
- <sup>8</sup> *La Nación*, 13-7-1926, pág. 4.
- <sup>9</sup> *La Nación*, 1-1-1927, pág. 6.
- <sup>10</sup> *La Nación*, 9-1-1927, pág. 6.
- <sup>11</sup> *La Nación*, 13-1-1927, pág. 4.
- <sup>12</sup> *Ibid.*
- <sup>13</sup> *Ibid.*
- <sup>14</sup> *La Nación*, 4-10-1927, pág. 6.
- <sup>15</sup> *La Nación*, 1-2-1928, pág. 6. La preocupación del matutino por la falta de políticas estatales de protección y fomento a la industria lo llevaba a reiterar sus reflexiones sobre los perjuicios que podían derivar del empecinamiento de los poderes públicos en mantenerse apegados a las ideas liberales. El 24-2-1928 ironizaba, en otro editorial, sobre la actitud de los "teorizadores impertérritos (que) sostienen que el librecambio es el régimen de justicia ideal (sin comprender que) si el proteccionismo es en sí un error, el librecambismo sistemático y ciego resulta un mal mucho más grave".
- <sup>16</sup> García Enciso: *Ob. cit.*, pág. 68.
- <sup>17</sup> Alberto A. Conil Paz: *Leopoldo Lugones*, Librería Huemul, Buenos Aires, 1985, pág. 62.
- <sup>18</sup> *Ibid.*, pág. 88.
- <sup>19</sup> Leopoldo Lugones (h): *Mi padre*, Centurión, Buenos Aires, 1974, pág. 167.
- <sup>20</sup> Leopoldo Lugones: *Mi beligerancia*, Otero y García Editores, 1917, pág. 65.
- <sup>21</sup> *Ibid.*, pág. 112.
- <sup>22</sup> Conil Paz: *Ob. cit.*, pág. 252.
- <sup>23</sup> Lugones: *Ob. cit.*, pág. 217.
- <sup>24</sup> Conil Paz: *Ob. cit.*, pág. 266.

- 25 Arturo Capdevila: *Lugones*, Aguilar, Buenos Aires, 1973, págs. 286-287.
- 26 *La Nación*, 3-12-1922, pág. 4.
- 27 *La Nación*, 12-7-1923, pág. 4.
- 28 *La Nación*, 18-7-1923, pág. 4.
- 29 *La Nación*, 9-5-1924, pág. 6.
- 30 *La Nación*, 11-5-1924, pág. 6.
- 31 *Ibid.*
- 32 Juan B. Justo, en un editorial de *La Vanguardia* del 11 de mayo de 1924, le restó importancia al hecho.
- 33 Leopoldo Lugones: *La Patria fuerte*, Circulo Militar, Buenos Aires, 1930, pág. 18. Esta edición incluye "El discurso de Ayacucho" y la carta enviada por Lugones a *La Nación* donde reclamaba la publicación completa del texto.
- 34 En *La Nación* del 13-1-1925. Los hechos chilenos a que se refería Lugones eran el desplazamiento del presidente Alessandri, por iniciativa de una junta militar integrada por dos generales y un almirante.
- 35 *La Nación*, 3-10-1925, pág. 4.
- 36 *Ibid.*
- 37 *Ibid.*
- 38 *Ibid.*
- 39 *La Nación*, 20-10-1925, pág. 4.
- 40 Ayarragaray: *Ob. cit.*, pág. 192.
- 41 *Ibid.*
- 42 *La Época*, 15-12-1923, pág. 1. "Sobre el personalismo de Mitre", *La Época*, 11-10-1923, pág. 3. "Sobre las intervenciones federales", *La Época*, 6-2-1923, pág. 3.
- 43 *La Nación*, 19-12-1925, pág. 6.
- 44 *Ibid.*
- 45 *La Nación*, 9-1-1926, pág. 4.
- 46 *La Nación*, 13-3-1926, pág. 6.
- 47 *La Nación*, 1-7-1927, pág. 6.
- 48 El episodio fue relatado por Carlos Alberto Leumann en su libro *La Iglesia y el hombre*, El Ateneo, Buenos Aires, 1927, que incluye como apéndice la correspondencia intercambiada entre el director de *La Nación* y el arzobispo de Buenos Aires, Fray José María Bottaro, págs. 232-235. Parece interesante señalar que el diario católico *El Pueblo* sostuvo, a propósito de las excusas de *La Nación*, que no se las podía considerar sinceras. Al respecto, editorializaba: "Alguna alma cándida hallará satisfacción en las posturas sumisas y deferentes que suele observar, cuando el chaparrón arceja y repercute administrativamente, el citado diario (*La Nación*). Nosotros, no. Ni una, ni dos, ni tres golondrinas hacen verano". Citado por Leumann, *ob. cit.*, pág. 38.
- 49 Roberto F. Giusti: "Apostillas de un hecho de crónica", en *Nosotros*, N° 215, Año 1927, reproducido por Noemi Ulla, *La revista Nosotros*, Galerna, Buenos Aires, 1969, pág. 206.
- 50 *La Nación*, 4-6-1927, pág. 6.
- 51 Ayarragaray: *Ob. cit.*, pág. 351.

<sup>52</sup> *La Nación*, 1-3-1928, pág. 6.

<sup>53</sup> *La Nación*, 3-3-1928, pág. 6.

<sup>54</sup> Declaración de la UCR publicada por *La Nación* el 14-3-1928, pág. 9.

<sup>55</sup> *La Nación*, 15-3-1928, pág. 6.

<sup>56</sup> *La Nación*, 30-3-1928, pág. 6.

<sup>57</sup> *La Nación*, 15-4-1928, pág. 6. Luego del triunfo de Yrigoyen, Lucas Ayarragaray sostenía, en un análisis publicado en *La Nación*: "El país consagró el mutismo, el enigma, la esfinge, pues el candidato presidencial victorioso no esbozó ideas gubernativas ni programa político". Más adelante, el autor se internaba en la predicción catastrofista: "Pocas veces encontróse la Argentina en los bordes de más honda crisis". Líneas antes, con el mismo tono admonitorio, había sostenido: "El poder está desorganizándose y la anarquía constituyéndose". En fin, al referirse a los orígenes multirraciales de la población argentina, Ayarragaray, que además de columnista de *La Nación* era médico, incursionaba en una especial concepción de biosociología política: el país "conserva bajo apariencias novísimas los estigmas aborígenes hereditarios, reforzados y realzados por los estigmas cosmopolitas migratorios. Democracia de conglomerados mixtos, con mucho malo y poco bueno". Ayarragaray: Ob. cit., pág. 419.

<sup>58</sup> *La Nación*, 12-7-1928, pág. 6.

<sup>59</sup> *La Nación*, 7-10-1928, pág. 8.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.* En diciembre de 1928, en un informe al ministro de Gobierno, Justicia y Culto de la Provincia de Santa Fe, Ricardo Caballero se refirió expresamente a las críticas de *La Nación*, en un intento de precisar el papel político que, en su opinión, jugaba dicho diario. Tras reseñar la situación social en Rosario en aquel año, Caballero destacaba su propia concepción de la doctrina de la UCR acerca de la "sociedad de clases", objetaba las conductas de los principales sectores propietarios y para concluir sostenía que "la prensa en general se había caracterizado, en el comentario de los hechos y en la exposición de los mismos, por una tendencia francamente favorable a los intereses de la clase rica". Para precisar el rol cumplido por los órganos de prensa, especificaba: "Se ha distinguido en esta obra demoledora, brutalmente reaccionaria, un diario, viejo conocido del país por su invariable adhesión a todos los privilegios: me refiero a *La Nación*. He vuelto a encontrar en sus columnas el veneno que durante 60 años ha derramado gota a gota sobre la vida argentina". R. A. Ortelli (Comp.): Ob. cit., pág. 520.

<sup>62</sup> *La Nación*, 12-10-1928, pág. 8.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

## IV

### El retorno de Yrigoyen y... de corceles y de acero

Para *La Nación* con Yrigoyen no cabía sorprenderse. La reflexión formulada en el momento de su advenimiento a la presidencia no dejaba mayor espacio para dudas. Desde el punto de vista de sus análisis, los hechos sólo se encargaron de confirmar sus previsiones y temores. Como el resto de la oposición, el diario no escatimó críticas al gobierno y contribuyó a su derrocamiento militar. Al igual que los demás integrantes del amplio movimiento de opinión adverso a Yrigoyen, incrementó sus objeciones en el transcurso de los dos años de la gestión radical. Pero, a diferencia de otros opositores, se preocupó por combinar esas críticas con la defensa de las instituciones democráticas. De modo similar a lo expresado en el precedente sexenio de Yrigoyen, consideraba que el presidente obraba objetivamente contra la democracia. Un ilustrativo ejemplo de esa manera de criticar al gobierno radical lo ofrecen las referencias a la supuesta locura senil de Yrigoyen. A mediados de 1929, en un editorial titulado "Mando discrecional", sostenía: "Víctima de un ensimismamiento extraño, el presidente de la Nación parece no darse cuenta de que tiene deberes constitucionales a los que ha de ajustar el desempeño de su mandato. La hipótesis de una perturbación de criterio resulta más consoladora que la de un deliberado alzamiento contra las leyes. No es menos grave, sin duda, a los efectos del juicio que la gestión gubernativa merezca, pero deja siquiera la esperanza de rectificaciones posibles para cuando los hechos se impongan con su dura elocuencia"<sup>1</sup>. Esta interpretación, por cierto, no era unánimemente compartida por todos los opositores, pero contaba con muchos adeptos entre ellos. La misma se articulaba con las objeciones a la labor parlamentaria, juzgada insuficiente, y vista como el resultado de la voluntad presidencial de actuar de modo absolutista. Desde esa óptica, el matutino consideraba que el Poder Ejecutivo llevaba adelante sin disimulo una política de sub-

versión institucional. ¿Cómo debía resolverse una situación planteada en términos tan graves? Desde sus columnas, no daba una única respuesta sino que dejaba abiertas varias vías de solución.

Frente a las críticas del matutino a la administración de Yrigoyen, el diario *La Época* parecía superado en su capacidad de indignación. El periódico radical se especializó en negarle a *La Nación* autoridad moral para objetar al gobierno de la UCR. En su opinión, el matutino creado por Mitre apelaba a "estúpidas y malevolentes falsedades", "sus columnas acogían todas las vilezas cuando no las inventaban", "jamás se preocupó del pueblo al que sólo supo denominar chusma o canalla", adolecía de una "miserable ausencia de probidad moral", "metió las manos hasta los codos en el despilfarro"<sup>2</sup>; éstas son sólo muestras del arsenal permanente de frases contra *La Nación* que *La Época* publicaba, por los más diversos motivos, casi cotidianamente. A los ataques a la trayectoria política y militar del ex presidente Mitre, el periódico yrigoyenista sumaba con frecuencia referencias a los orígenes, en su opinión dudosos, de la imprenta donde se editaba el matutino. Le atribuía un origen *non sancto*, ya que habría sido "donada" por los proveedores de armas y vituallas del Ejército Argentino que había combatido en la guerra del Paraguay: "Ocupa una casa y explota una imprenta obsequio que jamás debió recibir un presidente argentino y que fue, sin embargo, la base de su riqueza posterior"<sup>3</sup>. La vituperación se combinaba, según las oportunidades, con argumentos para refutar las andanadas del matutino contra Yrigoyen.

*La Nación* no polemizaba con *La Época*; sus preocupaciones se mantenían en el plano de la escena política nacional. La construcción de un partido conservador fuerte y capaz de disputar el predominio electoral a la UCR era una de las alternativas esbozadas a menudo en sus análisis. Desde esa óptica observaba con interés los procesos provinciales de reorganización de los partidos conservadores y las campañas electorales llevadas a cabo en el turbulento bienio radical. Hacían falta programas y continuidad en la acción proselitista, les explicaba a los conservadores de Córdoba en octubre de 1929<sup>4</sup>. Pero a los pocos días de esa sugerencia la reflexión se tornaba apesadumbrada porque los destinatarios del consejo habían realizado arreglos de trastienda para elegir sus candidatos; quedaban así, objetivamente, desmerecidos en comparación con el radicalismo provincial que, según el matutino, "ajusta acertadamente sus reglas y proclama sus candidatos de acuerdo con las mismas"<sup>5</sup>. De todos modos, era en las provincias donde percibía los peores manejos del oficialismo. En especial, las intervenidas por el Poder Ejecutivo. Así,

al ocuparse a principios de 1930 de los casos de San Juan, Mendoza y Corrientes, manifestaba que las intervenciones federales parecían dispuestas a no convocar a elecciones de diputados nacionales para evitar la derrota de los candidatos del radicalismo. Si no se realizaba el acto electoral, decía, ello "implicaría un alzamiento tan grave contra el orden institucional que otorgaría definitiva e inequívocamente a este gobierno las crudas características de los regímenes de fuerza"<sup>6</sup>. Es interesante destacar que esa reflexión sólo formalmente estaba planteada en tiempo condicional, ya que con frecuencia los análisis sostenían que había múltiples hechos para atestiguar que "el país está viviendo, decididamente, fuera del régimen constitucional"<sup>7</sup>. Sin embargo, el diario no perdía oportunidad para recordar a los conservadores la perentoria necesidad de organizarse y hacer política para derrotar al oficialismo en las confrontaciones electorales<sup>8</sup>.

A principios de 1930 los avances electorales de la oposición alimentaron en los sectores opuestos al gobierno esperanzas de alcanzar un triunfo por vías comiciales para desplazar al radicalismo. En esa estrategia se inscribieron muchos análisis de *La Nación*. Pero en la medida que las fuerzas de oposición consideraban al gobierno radical capaz de llevar adelante todo tipo de atropellos para mantenerse en el poder, la vía electoral y su posible eficacia eran puestas en duda por muchos de sus dirigentes<sup>9</sup>. También desde esa perspectiva, por cierto pesimista sobre el futuro institucional, reflexionó el diario en los últimos meses del gobierno de Yrigoyen. Frente a la decisión de la cámara baja, con mayoría yrigoyenista, de rechazar el diploma del diputado electo Daniel Videla Dorna, del conservadorismo bonaerense, el matutino sostuvo a mediados de julio de 1930 que todos los límites ya conocidos se estaban superando<sup>10</sup>. Días más tarde, comentando las acusaciones formuladas en la Cámara de Diputados con motivo de la aceptación de unos diplomas de la Provincia de Corrientes y de conflictos políticos ocurridos en Córdoba, sostenía: "Todo refleja un estado de descomposición moral cuyas consecuencias sociales justifican la mayor inquietud y que debe anotarse como el efecto más duradero y deplorable de un sistema de gobierno que el país sufre con demasiada resignación"<sup>11</sup>. Es interesante señalar que en el seno del radicalismo yrigoyenista también se elevaron protestas contra los procedimientos de la mayoría de los diputados de la UCR. Tal fue el caso de Raúl F. Oyhanarte, quien pronunció dos importantes discursos condenando las orientaciones seguidas por sus correligionarios<sup>12</sup>.

En un clima de creciente crisis política y de agudo deterioro del gobierno, *La Nación* comentó con beneplácito un acuerdo de

los partidos opositores para organizar una campaña de "agitación cívica" en defensa del respeto a las instituciones democráticas y al sufragio universal. Elogiaba esa iniciativa considerando que era fundamental "no limitar la vida política al interior del comité o a las salas del Parlamento, llevándola a la calle y buscar así el saludable y educativo contacto con el pueblo"<sup>13</sup>. Esas movilizaciones urbanas contra Yrigoyen eran impulsadas por los distintos partidos políticos de oposición y tenían como antecedente directo las manifestaciones realizadas por la Liga Republicana, entidad de ideología nacionalista que desde el año precedente había convocado a varias marchas y actos políticos. Algunas de esas manifestaciones desembocaron en enfrentamientos callejeros con los partidarios del gobierno. Para tratar de contrarrestar las movilizaciones de la oposición, los radicales optaron por organizar marchas de apoyo a las autoridades. Sobre una de ellas, el diario formuló un análisis por demás elocuente, donde no ahorró adjetivos para calificar a los participantes. Había sido, decía, una "procesión rodante y aullante (...) una ululante bacanal demagógica (...) un raid callejero (...) una manifestación que por su confuso abigarramiento y su inofensiva truculencia recordaba a la vez a la Mazorca y al Carnaval, pero la Mazorca de los sainetes con pretensiones históricas y el Carnaval de cuando empezó la decadencia del buen Carnaval porteño"<sup>14</sup>.

Es importante aclarar que los epítetos despectivos, incluso las descalificaciones racistas, eran de uso corriente en el lenguaje de algunos sectores de la oposición al radicalismo. El periódico conservador *La Fronda*, una de las tribunas donde se expresó el más acérrimo antiyrigoyenismo, consideraba en 1929 que el triunfo del radicalismo traía "como principal consecuencia un predominio evidente de la mentalidad negroide". El articulista de *La Fronda* definía a Yrigoyen como el "cacique" y promotor de un movimiento de "manumisión de los negritos". Refiriéndose al libro del radical yrigoyenista Ricardo Caballero, en el que se recopilaron sus intervenciones parlamentarias y notas periodísticas anteriores a 1929, *La Fronda* decía: "Se escucha la voz del negrito que ha reunido en un libro la doctrina política y social de su raza"<sup>15</sup>. El citado periódico fue una de las usinas intelectuales donde se comenzaron a difundir las ideas del nacionalismo profascista en la década del 20. Muchos ensayistas y periodistas simpatizantes con el pensamiento de Charles Maurras, fundador de la Action Française, escribían en *La Fronda*. Los nacionalistas argentinos encontraban en las ideas autoritarias francesas nuevas argumentaciones, y más a la moda, para justificar sus concepciones aristocratizantes. La fluida circulación de ideas y de

hombres en el periodismo de los años 20 era reflejada, como lo señala Carlos Ibarguren (h), en el caso del entonces maurrasiano Alfonso de Laferrère, el colaborador más destacado de *La Fronda*, donde "escribía siempre artículos de fondo, sin perjuicio de dirigir, por otra parte, el suplemento literario de *La Nación*"<sup>16</sup>.

Con la transición de Alvear a Yrigoyen, *La Nación* modificó su posición sobre el problema militar. Las ideas favorables a la exclusión del actor castrense del juego político, defendidas en el sexenio 1922-28, fueron relativizadas desde el momento del acceso al gobierno del anciano caudillo radical. Las temáticas relativas a desorganización y descuido de las fuerzas armadas por las autoridades civiles, planteadas en el anterior período de Yrigoyen, fueron retomadas por el diario de un modo aún mucho más insistente. Esto sucedía en un contexto en el cual el tema del posible golpe de Estado ya formaba parte de la discusión política nacional. Más aún, cuando parecía seguro el triunfo electoral del radicalismo yrigoyenista de 1928, se había denunciado la intención del general Justo, ministro de Guerra de Alvear, de encabezar un golpe para impedir las elecciones. En una carta enviada a *La Nación* en febrero de 1928, dicho militar rechazó esa acusación y se declaró contrario a la instalación de una dictadura. Sin embargo, varios autores y testimonios de la época coinciden en afirmar que desde 1928 no hubo una sino por lo menos dos conspiraciones en marcha. Una más próxima al general José Félix Uriburu, la otra al general Justo.

Alrededor de Uriburu se unieron los civiles y militares más influidos por las ideologías nacionalistas. Entre los civiles se encontraban muchos de los intelectuales y de los propagandistas partidarios de una transformación corporativista del régimen político. Su problema no era de oposición a un gobierno sino a la democracia en tanto modo de regulación de la vida política. Entre ellos estaba Leopoldo Lugones, quien distribuía su tiempo de conspirador en dos direcciones: escribía sus artículos antidemocráticos para el matutino fundado por Mitre y concurría cotidianamente a practicar esgrima al Círculo Militar, convencido, seguramente, del efecto proselitista de su palabra. Al partir para el Círculo, solía bromear, según relató Ezequiel Martínez Estrada, con una expresión propia de quienes no tomaban en serio su beligerancia: "Vamos; es la Hora de la Espada"<sup>17</sup>. Según otro participante del núcleo uriburista, Juan E. Carulla, *La Nación* no daba mayor espacio ni especial atención a los requerimientos de esa corriente conspirativa<sup>18</sup>. El diario tenía mejores y más fluidos contactos con la fracción que se identificaba con el general Justo.

En torno a Justo se habían agrupado los sectores de ideas más liberales y más contemporizadoras con los partidos políticos. Uno de los mentores de este grupo era el coronel Luis Jorge García. Tal como se señaló anteriormente, dicho hombre de armas fue en 1921 el principal gestor, y primer presidente, de la logia creada para cuestionar la política militar de Yrigoyen. Cuando Justo fue designado ministro de Guerra por el presidente Alvear, nombró al entonces teniente coronel García primero subdirector y luego director del Colegio Militar de la Nación. García desempeñaba ese cargo cuando Yrigoyen asumió por segunda vez la titularidad del Poder Ejecutivo. El general Luis J. Dellepiane, nombrado ministro de Guerra por Yrigoyen, objetó aspectos de la gestión de García en la dirección del Colegio Militar; éste solicitó el relevo en enero de 1929 y a mitad de junio pidió el pase a retiro. Individuo polifacético, el ya retirado coronel García empezó, según Juan V. Orona, a escribir editoriales en *La Nación* desde mediados de julio de 1929. Orona aclaró que no se trataba de una simple inserción periodística en la vida civil del mencionado coronel: "Es de suponer que el coronel García comenzó a conspirar con sus primeros editoriales. Hasta el 5 de septiembre de 1930, alternados los últimos con manifiestos de partidos políticos de oposición, el gran matutino de Mitre publicó 137 editoriales salidos de su pluma con la acrimonia de verdaderas filipicas"<sup>19</sup>. De este modo, la conspiración militar antiyrigoyenista se expresaba, también, en las páginas del diario por medio de un coronel que había trocado momentáneamente el arma por la pluma. Cambio coyuntural, es cierto, ya que dos años después, cuando el general Justo ocupó la presidencia de la República, el coronel García fue designado jefe de la Policía Federal.

Los análisis de *La Nación* sobre la problemática militar tuvieron invariablemente como eje la crítica a la política gubernamental que, supuestamente, desorganizaba las instituciones castrenses. Desde esa perspectiva, el diario solía hacer referencia al malestar existente en las distintas armas. La acusación de manejos discrecionales, sólo orientados por motivaciones políticas menores, fue un tema recurrente durante los dos años de la gestión radical. A los diez meses de la asunción de Yrigoyen el diario formulaba una evaluación global de la situación y de la política militar cuyo título, por demás tendencioso, era "Balance deplorable". Allí se objetaban los más diversos aspectos de la conducción del Ejército a cargo del general Dellepiane. En pormenorizada síntesis se señalaban deficiencias tanto en el orden interno cuanto en las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo. Nada, prácticamente, parecía corresponder a las necesidades de

la entidad castrense y de sus miembros. Según esa reflexión, el favoritismo provocaba la anarquización "del escalafón concediendo arbitrarias antigüedades a los calificados de amigos, mientras el silencio oficial establece la táctica negativa para quienes las requieren sin serlo"<sup>20</sup>. Esos tratos arbitrarios motivaban, según el diario, la desmoralización en las filas de la oficialidad. De allí que cundiera una gran insatisfacción, una de cuyas principales expresiones eran los pedidos voluntarios de pase a retiro. La reflexión concluía deseando que el repertorio de "subversiones" señaladas sirviera a Dellepiane para modificar sustancialmente su orientación en la conducción del Ejército.

En realidad, el matutino no era optimista sobre posibles cambios en el ámbito militar. Consideraba a la esfera castrense totalmente dependiente del conjunto del resto de la política. Sobre las fuerzas armadas no podían sino repercutir los malos manejos gubernamentales y, en su opinión, la situación tendería a agravarse con el tiempo. Más aún, creía que la impericia de los radicales agudizaría los problemas objetivos que enfrentaba el país y eso perjudicaría también a las instituciones militares. Así, por ejemplo, ante la falta de disponibilidad de divisas, se generaron en 1929 dificultades para adquirir material bélico y el gobierno demostraba, según el matutino, que carecía de capacidad para afrontar debidamente esa delicada cuestión<sup>21</sup>. La despreocupación oficial por el respeto de las jerarquías institucionales era otro factor que contribuía a debilitar el orden castrense. Todo se presentaba en sus editoriales como si se estuviera frente a una generalización de los hábitos introducidos en la gestión de lo público por los radicales y que alcanzaba también a las fuerzas armadas. A propósito de un altercado producido en el seno del Ejército, se afirmaba: "El mal ejemplo cunde y el subalterno que considera vulnerados sus derechos con sorprendente menosprecio de las más elementales disposiciones reglamentarias y salvando de un salto todas las instancias intermedias acude a exponer sus quejas al comandante en jefe de las fuerzas de mar y tierra"<sup>22</sup>. El comentario finalizaba preguntando hacia dónde se conducía al Ejército con la política del gobierno de Yrigoyen.

A mediados de 1930, a raíz del derrocamiento de algunos gobiernos latinoamericanos por iniciativa de sus fuerzas armadas, *La Nación* planteó sus ideas sobre las intervenciones militares en situaciones políticas juzgadas graves. En el caso de Bolivia, donde se había instaurado una junta militar, le pareció tranquilizante que las nuevas autoridades anunciaran la decisión de retornar pronto a la normalidad constitucional. En su opinión, cuando había regulaciones democráticas funcionando adecuada-

mente, los resultados electorales debían servir para cambiar el rumbo de los asuntos públicos. Pero podía suceder que los gobernantes no fuesen capaces de captar y aprovechar las señales enviadas por los comicios. En esos casos, agregaba, quienes se negaran a comprender lo que sucede "a causa de hallarse dominados por la egolatría están condenados de antemano a bajar del poder en el más completo aislamiento"<sup>23</sup>. Con la notoria intención de encontrar nexos entre lo que acaecía en otros países y la situación local, el matutino abordó el análisis de los sucesos que siguieron a la caída de Leguía en el Perú en agosto de 1930. Comentando la decisión de las nuevas autoridades militares peruanas de castigar a aquellos miembros de las fuerzas armadas que habían apoyado al derrocado dictador y a último momento quisieron dar su adhesión a los vencedores, sostuvo que las sanciones eran necesarias para preservar la altivez de los hombres de armas. Luego pasaba sin solución de continuidad a la situación nacional para referirse al Ejército Argentino: "Confiemos que la depresión moral que florece en el ambiente y lleva a los hombres a humillarse ante gobernantes desorbitados no contagie también a nuestros oficiales, transformándolos en genuflexos (...) que no olviden pues nuestros oficiales que la ley les impone, tanto como su condición de argentinos, la obligación de ser altivos"<sup>24</sup>.

Y llegó septiembre. Cuando ya el golpe de Estado era inminente, el ministro de Guerra de Yrigoyen, general Dellepiane, renunció al cargo. Depositario de las críticas del diario desde hacía mucho tiempo, el militar dimitente fue objeto de nuevas e igualmente duras objeciones en el editorial en el que se analizaba y comentaba su decisión. *La Nación* pasó revista al modo en que Dellepiane había desempeñado sus responsabilidades y consideró que éste no podía atribuir únicamente a Yrigoyen la culpabilidad de la situación de la institución castrense. Con términos lapidarios afirmaba que nada podía excusar a Dellepiane por el modo en que había conducido al Ejército. El ex ministro, decía, "había adoptado una actitud de sumisión incondicional al primer magistrado incompatible con la altivez de todo militar"<sup>25</sup>. Así, mientras los acontecimientos que desembocarían en la destitución de Yrigoyen se precipitaban, el diario descargaba sus últimos ataques contra el jefe militar renunciante.

Como sucede en todas las coyunturas políticas densas y decisivas, las palabras, los textos y los hechos se articularon en las vísperas del golpe de Estado con una profunda y peligrosa interpenetración. Las argumentaciones bélicas llamando a pasar a la acción no sólo fueron patrimonio de los opositores al gobier-

no radical. Según sostiene uno de los más documentados, y tendenciosos, testimonios de las jornadas de septiembre de 1930, los partidarios de Yrigoyen se propusieron dirigir directamente sus represalias contra la prensa adversaria y no faltaron las exhortaciones oficialistas "en el sentido de que el pueblo incendiara los locales de los órganos independientes (...) se llegó a tanto que el ex diputado yrigoyenista Héctor Bergali dijo en un discurso que era necesario ahorcar en la Plaza de Mayo a los directores de *La Prensa* y *La Nación*"<sup>26</sup>. Pero más allá de la amenaza, *La Nación* y su director pudieron festejar la caída del gobierno radical.

El diario *Crítica*, dirigido por Natalio Botana, entró en la historia, entre otros aspectos, por ser uno de los órganos de prensa que más intensamente agitó contra el gobierno en los meses previos a la deposición de Yrigoyen. Tal como lo evocaron varios autores, en sus instalaciones se realizaron importantes reuniones de políticos opositores, algunas de ellas con representantes del Ejército. Desde el edificio de *Crítica* se estimularon movilizaciones callejeras antiyrigoyenistas en vísperas del golpe. Sus posiciones motivaron la decisión oficial de secuestrar la edición anterior a la jornada del 6 de septiembre por la manera directa en que llamaba a la quiebra de la continuidad constitucional. Como recuerda Roberto A. Tálice, desde dicho vespertino salió hacia Campo de Mayo una delegación de periodistas y políticos para persuadir a sectores militares dubitativos para que se sublevaran <sup>27</sup>. Dada su actuación, *Crítica* se consideró con derecho a reivindicar una porción de la paternidad de la revolución. Mientras otros medios, como *La Nación* o *La Prensa*, habían jugado básicamente roles de agitación intelectual, *Crítica* operó, además, como organizador material de la ruptura institucional. En una situación en que los diarios ocuparon posiciones tan claras y decisivas en la escena política como ocurrió en el último bienio de la década del 20, era previsible que los efectos de las tensiones y conflictos alcanzaran negativamente, una vez producido el golpe, a la prensa adicta al gobierno. Por ello, pudo resultar vandálico, pero no sorprendente, que en la noche del 6 de septiembre el local de *La Época* fuera saqueado e incendiado por quienes celebraban el fin del gobierno radical.

Julio R. Barcos afirmó, inmediatamente después de la destitución de Yrigoyen, que el anciano caudillo radical había despreciado, con espíritu suicida, el poder del periodismo. Con una particular visión del carácter de los diarios, Barcos señalaba que Yrigoyen "no quiso comprar la prensa grande, porque la creía representativa de intereses plutocráticos y espirituales antagónicos a los intereses de las clases productoras del país"<sup>28</sup>. Un pe-

riodista extranjero, V. Gutiérrez de Miguel, redactor del diario español *La Voz*, testigo presencial de los acontecimientos previos al golpe de septiembre de 1930, destacó la amplia libertad de prensa y de expresión existente en el país. A su entender, ese factor contribuyó enormemente a generar una opinión masiva y dispuesta a movilizarse contra la debilitada administración radical<sup>29</sup>. Otro testigo, estratégicamente mucho mejor ubicado en el dispositivo de la conspiración que llevó al general Uriburu al poder, al reflexionar sobre la jornada del golpe, lamentó la escasa participación de las fuerzas armadas en el evento y elogió el protagonismo decisivo que, en cambio, asumió la movilización popular. Ese testimonio privilegiado lo dio el entonces capitán Juan Domingo Perón, quien en un interesante informe, escrito en 1931, decía que la acción militar del día 6 de septiembre prácticamente había fracasado, y "sólo un milagro pudo salvar la revolución. Ese milagro lo realizó el pueblo de Buenos Aires, que en forma de avalancha humana se desbordó en las calles al grito de 'viva la revolución', que tomó la Casa de Gobierno, que decidió a las tropas en favor del movimiento y cooperó en todas formas a decidir una victoria que de otro modo hubiera sido demasiado costosa si no imposible"<sup>30</sup>. Perón había desempeñado un rol muy activo en la preparación de la sublevación y su mirada sobre los hechos coincidió con la de muchos otros observadores.

"Ayer, en un movimiento popular, verdadera apoteosis cívica, Buenos Aires ha enterrado para siempre el régimen instaurado por el Sr. Yrigoyen"; así comenzaba el editorial de *La Nación* del 7 de septiembre de 1930. Uniendo el jolgorio con la voluntad analítica, el diario retomaba en ese texto todas las ideas que ya había expresado en muchas oportunidades sobre la naturaleza del yrigoyenismo. Al identificar pueblo y fuerzas armadas, definía la jornada de la vispera como una epopeya protagonizada por la sociedad en su conjunto. La idea de que la revolución había sido popular más que militar vertebraba la reflexión. Desde esa óptica, afirmaba que "los que ayer vieron entrar a los garridos muchachos del ejército por las calles de la ciudad, confundidos en la multitud, como si en vez de una marcha marcial contra un gobierno capaz de todo en su desesperado terror fuese aquella una pacífica procesión cívica, no lo olvidarán jamás"<sup>31</sup>. De allí que, según su opinión, el día 6 de septiembre no quedaría sólo como el fin de un "régimen estulto" sino que, sobre todo, se recordaría como "uno de los momentos de mayor comunión espiritual entre el pueblo y su ejército"<sup>32</sup>. Pero, en tanto era evidente que Yrigoyen había recibido el apoyo de mayorías electorales, el diario pareció sentirse interpelado por un hipotético interlocutor que le pregun-

taba sobre los motivos de esas preferencias populares. Pensando que no cabía atribuir toda la responsabilidad del yrigoyenismo al depuesto presidente y a sus colaboradores inmediatos, el análisis incursionaba sumariamente en la parte de la culpa que correspondía al pueblo. Según *La Nación*, al votar a Yrigoyen el pueblo "jugó con su voto, que le habían regalado los hombres del pasado, como juega el niño con un arma heredada"<sup>33</sup>. En esa actitud lúdica atribuida a quienes habían dado por dos veces el gobierno "a ese hombre que no se entendía ni se dejaba entender ni quizás se entendía él mismo"<sup>34</sup>, veía un peligro para la democracia y una situación que podía favorecer la aceptación de "las doctrinas que niegan aptitud al pueblo para dirigirse y lo condenan a la eterna condición de menor de edad; a las dictaduras abusivas y a las oligarquías desdeñosas"<sup>35</sup>. Rechazaba explícitamente ese criterio minusválido de las mayorías electorales y, parafraseando la fórmula de Roque Sáenz Peña, sostenía: "El pueblo debe y puede votar"<sup>36</sup>. Elogiaba luego las últimas elecciones porque en varias provincias, y en la Capital Federal, habían avanzado los sectores contrarios al gobierno depuesto, con lo que el pueblo había mostrado un principio de discernimiento, y le aconsejaba que "siga así cada vez con mayor conciencia y cualquiera que sea el rumbo que la mayoría ciudadana quiera fijar a la Nación, él se cumplirá sin tropiezos, ni dolorosos contrastes"<sup>37</sup>. Desde esta óptica favorable a la democracia y a la participación electoral, el comentario finalizaba deseando que el régimen provisional fuese breve y confiaba en su éxito, ya que creía que era "un gobierno de hombres de bien, de antecedentes intachables, que saben pensar y no temen hablar"<sup>38</sup>. Poco después, cuando los gobernantes ungidos por el golpe del 6 de septiembre comenzaron a hablar sin inhibiciones, *La Nación* manifestó primero su desacuerdo y luego su oposición acerca de muchas de las ideas políticas antidemocráticas por ellos enunciadas.

### La Nación: 1928-1930

*La reflexión apologética sobre el protagonismo popular en la caída de Yrigoyen constituyó un punto de condensación de los distintos componentes presentes en el pensamiento político de La Nación. El suceso adquirió con el tiempo una dimensión mítica para los más disímiles actores. En el calor de la coyuntura, el diario lo interpretó como una revolución popular en la que incluso los militares participaban en tanto parte del pueblo. Su enfoque coincidió con el de muchos otros observadores. Si los golpes de*

Estado posteriores hicieron que el de 1930 quedara como el primero de una larga serie, en lo inmediato el evento podía ser interpretado como una nueva y exitosa versión de los movimientos populares con alguna participación castrense que ocurrieron entre la última década del siglo pasado y la primera del presente. Visión interesada en algunos casos, que implicaba poner en cuestión el carácter igualmente popular del gobierno destituido. Pero el contenido civil y popular de los sucesos de septiembre era, también, resaltado por quienes se preparaban a librar un debate político e ideológico con los cultores del pensamiento elitista y militarista, próximos al fascismo, cuya influencia sobre Uriburu era notoria.

A La Nación, en particular, la exaltación del contenido popular de la revolución, más allá de las polémicas políticas, le permitía mantener los nexos teóricos con su prédica a favor del respeto por las instituciones y por la Constitución. Desde esa óptica, los yrigoyenistas, por sus prácticas gubernamentales, eran quienes habían violado los principios constitucionales. El pueblo, y no el aparato militar, se había movilizado para defender las instituciones y precipitado la caída de los personalistas. La ponderación positiva de la democracia quedaba también a salvo; la eliminación de los demagogos del poder abría nuevas perspectivas para la estabilización próxima del régimen democrático. En consecuencia, la movilización social producida el día del golpe se convertía en un referente empírico que permitía reforzar la creencia, por momentos puesta en duda, en la viabilidad de la democracia en la Argentina y en las predisposiciones hacia ese régimen político por parte de la mayoría de la sociedad. La dicotomía democracia-demagogia, presentada en su forma más simple, estimulaba la visión optimista sobre el porvenir político.

Las fuerzas armadas habían sido interpeladas por el matutino que, al evocar su responsabilidad ante la desorganización institucional, les recordaba sus obligaciones de funcionarios del Estado. Pero el cariz asumido por la jornada de septiembre permitió subsumir a los militares en el colectivo pueblo. Esta interpretación objetivamente desvalorizaba su rol en los sucesos y estaría luego presente en las discusiones sobre la legitimidad de los seguidores de Uriburu para introducir reformas en el sistema institucional.

Si se consideraba al yrigoyenismo como un percance o desviación en una evolución signada por la necesidad de la democracia, se relativizaban con facilidad los obstáculos para lograr esa meta. El apego de La Nación por la democracia mostraba no sólo una voluntad de coherencia con los principios defendidos desde sus columnas, sino, además, que continuaba pensando la sociedad y la política según un modelo cuyas premisas ya habían

sido abandonadas, o lo serían muy pronto, por distintos sectores de la clase dirigente. La viabilidad del régimen democrático suponía la existencia de una clase dirigente con capacidad de dirección consensual sobre el resto de los sectores sociales. La experiencia yrigoyenista había revelado la declinación del personal político de los partidos conservadores. Lo que en los planteos del diario aparecía como una demanda de mayor intervención del aparato estatal en la economía era, en parte, un reflejo de las dificultades de los principales sectores propietarios para predominar por sí solos en el mercado; la crisis mundial agravó su situación. Los nacionalistas de derecha expresaban en el plano de las ideas el debilitamiento del pensamiento liberal, otrora el cemento ideológico del conjunto de la clase dirigente. En esas condiciones, el funcionamiento plural y abierto de la sociedad y la política debía encontrar grandes dificultades. Naturalmente, esas transformaciones afectaron el lugar ocupado por el diario en la sociedad y en la política.

#### NOTAS

<sup>1</sup> *La Nación*, 31-7-1929, pág. 6.

<sup>2</sup> *La Época*, 18-7-1929, pág. 1; 19-7-1929, pág. 1; 22-7-1929, pág. 1; 25-7-1929, pág. 1.

<sup>3</sup> *La Época*, 31-7-1929, pág. 1.

<sup>4</sup> El programa y prosecución de la acción proselitista serían importantes, según *La Nación*, ya que así los conservadores podrían dar a la población "la sensación de que constituyen un elemento positivamente distinto de los demás y arraigarán en el pueblo la convicción de que si llegasen al gobierno aplicarían en los hechos el plan definido y no se abandonarían al azar de lo inesperado que caracteriza justamente a los partidos y los gobiernos sin rumbo". *La Nación*, 22-10-1929, pág. 10.

<sup>5</sup> *La Nación*, 27-10-1929, pág. 8.

<sup>6</sup> *La Nación*, 6-1-1930, pág. 4.

<sup>7</sup> *La Nación*, 12-1-1930, pág. 6.

<sup>8</sup> Así se refería a unas elecciones realizadas en la Provincia de Buenos Aires: "Sin una propaganda tenaz y sin una organización sólida (los conservadores) obtuvieron 125.000 votos contra 178.000 del oficialismo (lo que) demuestra la importancia de la opinión conservadora en el país". *La Nación*, 13-1-1930, pág. 4.

<sup>9</sup> Según Pinedo, "todo indicaba, pues, que en los albores de 1930 el yrigoyenismo estaba bien destruido en el alma de las masas argentinas; la mística que lo acompañó se había desvanecido; el repudio por la inepticia de su gobierno, por la vergüenza de la administración, por la incalificable conducta de su representación parlamentaria, ya no era el juicio

de una elite calificada sino la opinión de todo el país. Politicamente Yrigoyen estaba aniquilado, no por oligarquias, ni capitalistas, ni militares, sino por la opinión pública de la Nación entera, representada por un grupo de partidos populares, que no tenían el poder sino que lo sufrían y de modo horroroso. Ha de recordarse a ese respecto no sólo episodios de importancia relativa ocurridos en todo el país sino sucesos escandalosos, como el secuestro de los fiscales demócratas, en plena ciudad de Córdoba, por parte de los yrigoyenistas, para adulterar durante su ausencia los escrutinios, y los bochornosos hechos que precedieron y coincidieron ese año con las elecciones en San Juan y en Mendoza, bajo la presidencia del campeón del sufragio, donde los agentes del gobierno literalmente aniquilaron por la violencia más desmedida a sus opositores, no sólo privándoles del voto, sino de todos los derechos, reduciéndolos a prisión por centenares, golpeándolos y torturándolos de manera innoble y negándoles hasta el último extremo, recursos legales, sin que hubiera estado de sitio declarado, pero bajo verdadero estado de terror de que se hizo eco toda la prensa del país y que me tocó presenciar y denunciar". Federico Pinedo: Op. cit., Tomo I, pág. 71.

<sup>10</sup> *La Nación*, 17-7-1930, pág. 10

<sup>11</sup> *La Nación*, 25-7-1930, pág. 8.

<sup>12</sup> Raúl F. Oyhanarte: *Radicalismo de siempre*, Club Radical de Hombres Libres, La Plata, 1932, págs. 31-62.

<sup>13</sup> *La Nación*, 2-8-1930, pág. 8.

<sup>14</sup> *La Nación*, 31-8-1930, pág. 6.

<sup>15</sup> *La Fronda*, 31-7-1929, pág. 1.

<sup>16</sup> Carlos Ibarguren (h): *Roberto de Laferrère. Periodismo. Política. Historia*, EUDEBA, Buenos Aires, 1970, pág. 38.

<sup>17</sup> Ezequiel Martínez Estrada: *Leopoldo Lugones. Retrato sin retocar*, Emecé, Buenos Aires, 1968, pág. 34.

<sup>18</sup> Juan E. Carulla: *Al filo del medio siglo*, Editorial Llanura, Buenos Aires, 1951, pág. 194.

<sup>19</sup> Juan V. Orona: *La revolución del 6 de septiembre*, s/e, Buenos Aires, 1966, pág. 22.

<sup>20</sup> *La Nación*, 23-7-1929, pág. 6.

<sup>21</sup> *La Nación*, 28-7-1929, pág. 6.

<sup>22</sup> *La Nación*, 8-1-1930, pág. 8.

<sup>23</sup> *La Nación*, 8-7-1930, pág. 8.

<sup>24</sup> *La Nación*, 31-8-1930, pág. 8.

<sup>25</sup> *La Nación*, 4-9-1930, pág. 8.

<sup>26</sup> Diez periodistas porteños: *Al margen de la conspiración*, Biblos Editorial, Buenos Aires, 1931, pág. 151.

<sup>27</sup> Roberto A. Tállice: *100.000 ejemplares por hora. Memorias de un redactor de Crítica, el diario de Botana*, segunda edición, Corregidor, Buenos Aires, 1989, págs. 511-525.

<sup>28</sup> Julio R. Barcos: *Política para intelectuales*, s/e, Buenos Aires, 1931, pág. 70.

<sup>29</sup> V. Gutiérrez de Miguel: *La revolución argentina. Relato de un testigo presencial*, CIAP, Madrid, 1930, pág. 90.

<sup>30</sup> Juan Domingo Perón: *Lo que yo vi de la preparación y realización de la Revolución del 6 de septiembre de 1930*, en José María Sarobe: *Memorias*, Ediciones Gure, Buenos Aires, 1957, pág. 310.

<sup>31</sup> *La Nación*, 7-9-1930, pág. 16.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

## V

# Contra el corporativismo de Uriburu y a favor de la economía dirigida

Con referencia al acto en que, con gran afluencia de público, juraron los miembros del gobierno provisional presidido por el general Uriburu, *La Nación* editorializaba sobre el retorno a la democracia y sugería a las fuerzas populares que se organizaran para tomar parte en las luchas electorales que debían acercarse. Como lo hacía a propósito de muchas otras cuestiones, el ejemplo de los países desarrollados le servía para ser optimista con respecto al futuro de la democracia y de los comportamientos de las mayorías populares. Era menester, sostenía, que los partidos políticos se esforzaran por mejorar en calidad y cantidad la participación de la ciudadanía; cabía esperar, además, que el desarrollo de la instrucción popular contribuyera poderosamente a lograr ese resultado, como se consiguió en Gran Bretaña cuando después de las grandes reformas electorales se temió haber saltado al vacío<sup>1</sup>. Así, al día siguiente de la asunción de las nuevas autoridades, el matutino comenzaba a construir la agenda electoral.

Apenas se inició el gobierno del general Uriburu los sectores civiles y militares que habían apoyado el golpe de Estado se dividieron en dos corrientes de opinión enfrentadas. Esos alineamientos continuaban y profundizaban una fractura ya perceptible en los prolegómenos de la intervención castrense contra Yrigoyen. El presidente y su más próximo círculo de asesores civiles se pronunciaron a favor de modificar la Constitución Nacional e introducir un sistema de representación denominado "funcional", usualmente conocido como corporativo, con la finalidad explícita de disminuir la importancia política de los partidos. Los partidos políticos rechazaron esta iniciativa por considerarla contraria al espíritu de las instituciones argentinas. Se objetaba la reforma por su inspiración fascista, imputación que, seguramente, no hería la sensibilidad de muchos partidarios de Uriburu, cuya simpatía por la experiencia mussoliniana no constituía

un secreto. Quienes impugnaban el derecho del gobierno provisional a propiciar la reforma de la Constitución sostenían, entre sus argumentos de mayor peso, que la actuación de los civiles había sido decisiva para el triunfo de la revolución del 6 de septiembre de 1930. Los dirigentes de los partidos se atribuían, desde esa perspectiva, total autoridad para oponerse a las modificaciones de la estructura de representación política, obviamente imaginadas para limitar su influencia futura. Uriburu defendía un punto de vista simétricamente opuesto al de los partidos sobre la génesis y el desarrollo del movimiento militar que lo llevó a la presidencia. Para el general-presidente, la paternidad del golpe sólo podía ser reivindicada por las fuerzas armadas y negaba todo protagonismo de los partidos en su realización. Creía que la salida a la calle de una considerable parte de la población de Buenos Aires para respaldar el desplazamiento de las autoridades civiles no podía atribuirse a una acción de los partidos políticos. Posiblemente, entre los relatos y testimonios que más contrastaban con los de Uriburu acerca del rol desempeñado por los militares en el golpe de Estado, se encontrarán las opiniones antes citadas del entonces capitán Perón, alineado en el sector contrario a los corporativistas.

A sólo unas tres semanas de la caída de Yrigoyen, *La Nación* criticaba al ministro del Interior del nuevo gobierno, Matías Sánchez Sorondo, por el discurso que había pronunciado en una reunión con los miembros de la llamada Legión de Mayo<sup>2</sup>. El diario creía detectar en las palabras del alto funcionario orientaciones que se alejaban de las ideas democráticas. Le recordaba tácitamente que existía un pacto con la ciudadanía y que nada debía apartar al gobierno del retorno a la plena y total vigencia de la Ley Sáenz Peña. El mismo día en que su editorial objetaba a Sánchez Sorondo, el diario publicaba en su Revista Semanal un texto de un "experto" en revoluciones que reflexionaba sobre las características y costos de esos procesos de cambio social. Se trataba de León Trotski, de quien el matutino había adquirido los derechos para publicar fragmentos del libro *Mi vida*. En la entrega de ese domingo, Trotski incursionaba en lo que se suele denominar la sociología o historia natural de las revoluciones, y sostenía que "la revolución es gran devoradora de hombres y caracteres: acaba con los más valerosos y abruma a los débiles. No deja ascender sino a gran precio"<sup>3</sup>. Lo que ya era el soliloquio del "profeta desarmado" llevó, quizás, en aquel movido mes de septiembre de 1930 argentino, a meditar sobre éxitos y fracasos políticos a muchos de los participantes del reciente, y ya dividido, movimiento revolucionario que depuso al radicalismo del poder.

Mientras *La Nación* insistía con su calendario electoral, Leopoldo Lugones rechazaba totalmente, desde las mismas páginas del diario, esa perentoria finalización del acto revolucionario en que había participado, entre otros aspectos, con la redacción de la primera versión de la proclama de las fuerzas armadas. Para Lugones la gran mayoría del pueblo quería una transformación profunda del régimen político y su aspiración no era el simple retorno a la democracia de partidos. Tampoco, a su entender, esa vuelta a las anteriores regulaciones del sistema político podía ser la meta de las fuerzas armadas. Profundizar la revolución sin concesiones con el pasado era, pues, la necesaria tarea que según el ideologizado poeta debía afrontar inexcusablemente<sup>4</sup>. Como la línea editorial de *La Nación* estaba totalmente en contra de esos propósitos, cuando publicó el texto de Lugones lo encabezó con una aclaración firmada "Nota de la Dirección", donde sostenía que la amplitud de criterios que inspiraba al matutino le permitía difundir artículos con los cuales no acordaba en absoluto, y dejaba bajo la exclusiva responsabilidad del autor opiniones como la que se leería a continuación.

Meses más tarde, en uno de los tantos análisis de rechazo a la posible reforma electoral, el diario sostenía: "Cuando circuló el rumor de un cambio fundamental nos inclinamos a suponer su falta de consistencia. Sin un desconocimiento profundo del espíritu de nuestro pueblo no era posible creer en la tentativa de restringir el sufragio universal o de suprimir el cuarto oscuro"<sup>5</sup>. Es de señalar que estas posiciones eran defendidas por el diario luego de las elecciones ganadas el 5 de abril de 1931 en la Provincia de Buenos Aires por el radicalismo, y cuyos resultados fueron anulados meses después por el gobierno de Uriburu. Es decir, en un contexto donde el mantenimiento del sistema electoral parecía favorecer un eventual retorno de la UCR al control del Estado, el matutino reiteraba sus puntos de vista en respaldo del libre funcionamiento del régimen democrático. Pero, para evitar interpretaciones equivocadas, es necesario recordar que en 1931 el radicalismo presentaba características notoriamente distintas de las del período anterior al golpe.

En la última semana de abril de 1931 había regresado al país el ex presidente Alvear. Bajo su jefatura se comenzó a reorganizar y unificar el partido, mediante la superación de la división entre personalistas y antipersonalistas. Aunque el radicalismo conservaba su carácter de movimiento político contradictorio y pleno de tendencias, bajo la dirección de Alvear cabía esperar un predominio de los sectores internos más conservadores. *La Nación*, que había cifrado sus esperanzas en el derro-

tado antipersonalismo en 1928, podía encontrar perfectamente aceptable un juego político libre y democrático con el radicalismo orientado por los alvearistas. Depositadas sus expectativas en esa renovación, criticó en 1931 ciertas prácticas radicales que le parecían reiteraciones del estilo yrigoyenista. También aconsejaba al gobierno de Uriburu que comprendiera los cambios ocurridos en el radicalismo y facilitara el accionar de su nueva dirección. Los hechos se encargaron de mostrar cómo el gobierno de Uriburu escapaba a las optimistas reflexiones del matutino.

Con referencia al llamado a elecciones para noviembre de 1931, que significaba la derrota de la facción corporativista del gobierno, *La Nación* expresaba su confianza en el "pueblo argentino (quien) no ha de olvidar que su suerte está en sus manos. Creer en la posibilidad de conducirlo como si fuese un rebaño de Panugro, sería inferir un agravio y suponerlo animado del propósito de trabajar por su propia ruina" <sup>6</sup>. Combinaba esa visión positiva del pueblo con un claro elogio de la democracia: "Por una que otra actitud de la masa electoral sólo los espíritus vacíos son capaces de pronunciar anatemas. La democracia persistirá y se perfeccionará, debido a las cualidades del pueblo"<sup>7</sup>. Con esta posición de defensa de la democracia y de la racionalidad del electorado, el matutino no podía menos que mostrarse contrariado cuando descubría en el radicalismo la persistencia de conductas que estimaba reprobables. Así, en un editorial sobre la convención de la UCR cordobesa, objetaba su poca inclinación a la autocrítica y lamentaba que rechazara aliarse con otros partidos. Si bien la unificación radical bajo la hegemonía alvearista despertaba su satisfacción, aconsejaba a sus dirigentes que para cambiar la imagen del partido era necesario romper con el pasado mediante la proclamación de fórmulas gubernativas cuyos componentes garantizaran la sinceridad de la renovación de las ideas y propuestas <sup>8</sup>. Pero la situación política, relativamente bien encaminada en opinión del matutino, sufrió un abrupto e inesperado revés a raíz del levantamiento armado de inspiración radical, liderado en Corrientes por el teniente coronel Gregorio Pomar el 20 de julio de 1931. Aunque sólo fue apoyado por los "personalistas", el intento revolucionario tuvo consecuencias sobre el conjunto de la UCR. El gobierno obligó a Alvear a abandonar el país.

En un esfuerzo por llamar a la reflexión a las autoridades nacionales, el matutino trataba de explicarles la notoria diferencia entre Alvear y los "subversivos de Corrientes"; no cabía, entonces, destruir la promisoría posibilidad de que aquél reorganizara a los radicales bajo su dirección. En uno de sus más

claros editoriales escritos sobre el tema, señalaba que si bien entre los subversivos había radicales, éstos no eran todo el partido. Con la convicción de hallarse frente a un hecho clave, afirmaba que la UCR tenía "en su seno elementos sanos capaces de reorganizarla para actuar en la lid comicial (...) Los disenso de carácter histórico que hemos tenido con el Partido Radical no son óbice, naturalmente, para que lo respetemos como entidad democrática. Fue el concepto que expresamos a propósito de la llegada al país del Sr. Alvear, en cuya oportunidad estimulamos al radicalismo a constituir un gobierno tipo Alvear y no tipo Yrigoyen" <sup>9</sup>. Esa mirada sobre la UCR y su aristocrático jefe no era compartida en absoluto por el general Uriburu. Para el Presidente de facto, Alvear no merecía ninguna confianza y sus verdaderas intenciones eran devolver el gobierno a los yrigoyenistas. Consciente del prestigio social del jefe radical desterrado, Uriburu evocó directamente el tema en un manifiesto dedicado a criticarlo, donde entre otras cosas afirmaba que Alvear, "escudado en un nombre respetable y detrás de las estatuas de sus antepasados, engañaba al país"<sup>10</sup>. Los conflictos entre el gobierno militar y los radicales ya no encontrarían ninguna forma de solución.

Con vistas a las elecciones presidenciales que debían devolver la normalidad institucional, los partidos políticos compusieron alianzas y proclamaron candidatos. Los conservadores, los socialistas independientes y los radicales antipersonalistas disidentes con la unificación dirigida por Alvear formaron la Concordancia para apoyar la candidatura del general Agustín P. Justo. Los demócratas progresistas y los socialistas confluyeron en la Alianza Civil, cuyo binomio fue De la Torre-Repetto. La UCR, en abierto desafío al gobierno, ungió candidato presidencial a Alvear, aún en el destierro. La reacción oficial fue vetar al conflictivo candidato radical; el decreto argüía que, por no haber transcurrido un período presidencial completo desde la finalización de su precedente mandato, su eventual triunfo electoral entrañaría una reelección, situación expresamente prohibida por la Constitución Nacional. Esa decisión alarmó al diario por varios motivos. Consideró que la población podía interpretar el veto de la candidatura de Alvear como "el deseo de cerrar al Partido Radical el camino a las urnas, o sea retrotraer la República a los tiempos anteriores a la Ley Sáenz Peña"<sup>11</sup>. Para evitar la ilegitimación del acto electoral pedía al radicalismo la proclamación de una nueva fórmula, aceptable para el gobierno militar. No había que convertir, decía, la elección presidencial en una opción forzosa entre la Alianza Civil y la Concordancia.

Según su óptica, la Coalición formada para apoyar la candidatura del general Justo no estaba en condiciones de asegurar la adecuada evolución democrática de la vida política nacional. *La Nación* no ahorra críticas a la Concordancia; era, decía, un frente "formado por una aglomeración amorfa, compuesto por una reunión de minorías o núcleos locales y de tendencias de carácter diferente. Es un conglomerado y como tal tiene inconvenientes para el desarrollo progresivo de la democracia, que vive de organismos coherentes"<sup>12</sup>. En su opinión, también un triunfo de Justo en las elecciones sería negativo, pues su origen militar lo haría aparecer como continuador del gobierno provisional<sup>13</sup>. La clave del problema sólo podía hallarse en la decisión radical de evitar la abstención y presentar nuevos candidatos, siguió argumentando el diario hasta prácticamente el momento de las elecciones. De allí que el día del acto electoral en su editorial lamentaba no poder considerarlo "como un retorno a la normalidad, con plenitud efectiva y el vigor moral absoluto que dé a todos la certidumbre de que estamos en presencia de una incontrovertible expresión de la voluntad popular"<sup>14</sup>.

Hacia extensivas las reflexiones críticas y pesimistas sobre las elecciones también al orden provincial. En la Provincia de Buenos Aires el acto electoral asumía un valor aún más simbólico debido a la mencionada anulación de las elecciones del 5 de abril de 1931, ganadas por el radicalismo. El diario no había escatimado expresiones de censura en aquella ocasión: ese acto era, dijo, "un precedente peligroso para el juego normal de las instituciones democráticas"<sup>15</sup>. Para los comicios de noviembre de 1931, el radicalismo no presentó candidato a gobernador y los conservadores postularon a Federico Martínez de Hoz. La elección dio a los conservadores mayoría en la legislatura provincial y, desde esa instancia, fueron designados senadores nacionales dos de las mayores figuras de la derecha de la época: Antonio Santamarina y Matías Sánchez Sorondo. La reflexión de *La Nación* sobre la compulsión bonaerense fue cáustica y terminante: "El Partido Conservador habrá triunfado esta vez, pero su prestigio ya quebrantado ha sufrido una nueva disminución"<sup>16</sup>. La sola idea de un retorno a la época del fraude y del desconocimiento de las preferencias políticas de la ciudadanía engendraba la indignación del matutino. Las prácticas políticas anteriores a la Ley Sáenz Peña debían, en su opinión, descartarse para siempre, ya que significaban el estancamiento, el desorden y la ruina.

Así como el diario criticó las medidas o proyectos del gobierno de Uriburu juzgados erróneos o perjudiciales, aplaudió aquellos que, a su entender, significaban un progreso o una contribu-

ción para los intereses del país. Consecuente con su prédica acerca de la necesidad de mayor intervención del Estado en la economía, *La Nación* elogió la iniciativa oficial de crear en octubre de 1931 una Comisión de Control de Cambios para regular la compra y venta de moneda extranjera. Después de haber pregonado durante mucho tiempo la urgente puesta al día de las ideas gubernamentales y el abandono del liberalismo en materia económica, el diario apoyó sin ambages las medidas destinadas a regular el cambio de divisas y, por esa vía, intervenir en el comercio exterior. Frente a ese primer gran hito en la estructuración de las prácticas intervencionistas del Estado argentino, sostuvo que la medida fundaba "un organismo de entendimiento y de solidaridad bancaria que no puede producir sino felices resultados en la organización y el regimiento de las operaciones más importantes para nuestra economía"<sup>17</sup>. Pero no se limitaba a elogiar una decisión gubernamental considerada correcta; detallaba también los perjuicios y males que la misma permitía eludir. De no adoptarse el control de cambios, afirmaba, "la valoración rápida del peso ocasionaría para nosotros, por ejemplo, una rápida baja de precios de productos exportables y establecería un desnivel considerable entre esos precios y los de las mercaderías y servicios generales, con el desmedro consiguiente para nuestros productores y nuestra economía"<sup>18</sup>. Así, al ponderar los efectos socioeconómicos neutralizados por el control de cambios, sintetizaba con singular precisión los objetivos buscados con las medidas intervencionistas adoptadas por Uriburu.

Las definiciones favorables a la democracia y contrarias al corporativismo defendidas por *La Nación* no dejaron de tener consecuencias en las relaciones que el diario mantenía con Leopoldo Lugones. El politizado poeta acentuaba sus expresiones de solidaridad con las tendencias más pro-fascistas del momento y esto lo había llevado a desfilar con la Legión Cívica, organización civil militarizada prohijada por el gobierno e instruida y disciplinada por oficiales del Ejército. Las posiciones antidemocráticas de Lugones le provocaron conflictos en el seno del diario, según sostuvo su hijo y biógrafo. De acuerdo con ese testimonio, tan pronto se instaló el gobierno de Uriburu, Lugones empezó "a hallar solapadas dificultades por parte del elemento democrático del periódico, conformado tan sólo a regañadientes con los nuevos hechos políticos"<sup>19</sup>. Cabe destacar que el hijo de Lugones era un observador interesado, en esa época era firme partidario de Uriburu, quien lo designó comisario inspector de la Policía Federal a pesar de no haber pertenecido anteriormente a la institución<sup>20</sup>. Como fruto de esas discrepancias, *La Nación* decidió

interrumpir a fin de junio de 1931 la colaboración de Lugones, quien siguió publicando sus ideas y propuestas políticas en el periódico nacionalista *La Fronda*.

Poco antes de cumplir su primer aniversario el gobierno de Uriburu ya había clausurado algo más de 100 publicaciones periódicas. De ellas, la más importante era *Crítica*. El diario dirigido por Natalio Botana había asumido una línea de oposición al régimen militar y, a pesar de su contribución al golpe de Estado, fue prohibido. Botana debió exiliarse, en tanto su esposa, Salvadora Medina Onrubia, fue arrestada y sufrió prisión en la Cárcel del Buen Pastor. El vacío dejado por *Crítica* en el sector de lectores de prensa popular vespertina lo cubrió, con cierto éxito, un nuevo diario: *Noticias Gráficas*. Según múltiples y confiables fuentes, su principal promotor y propietario era Jorge A. Mitre, el director de *La Nación*. Un nada inesperado conflicto se abrió en el campo de la prensa, pues el tradicional matutino fundado por el general Mitre se convirtió en blanco de los ataques sistemáticos del vespertino *Jornada*, creado por colaboradores de Botana, quienes eludieron con el cambio de nombre la prohibición que pesaba sobre *Crítica*. Denunciar a *La Nación* y descubrir orientaciones reaccionarias en su pensamiento político o simplemente inconsistencias en su información fue una de las especialidades de *Jornada* y, finalizada la dictadura militar, de la reaparecida *Crítica*. Desde los más disímiles ángulos, el matutino fue acusado de complicidad con el gobierno autoritario, con argumentos que el diario de Botana se preocupaba por demostrar rigurosamente. Así, durante un tiempo, en las páginas de *Crítica* fue utilizada invariablemente la denominación *La Nación-Noticias Gráficas* para designar de modo peyorativo y burlón al primero y más tradicional de ambos diarios. A manera de simple ejemplo de la intensidad alcanzada por el conflicto, parece ilustrativo citar algunas caracterizaciones sobre *La Nación* o simplemente epítetos lanzados en su contra, de una nota editorial de *Crítica* a propósito de un tema secundario: "tiene espíritu fascista", "La Nación tiene que vivir en permanente gimnasia de intriga, trabajando maquiavélicamente para socavar los cimientos de quienes tienen personalidad y están animados por definidos propósitos de justicia social"; "la estulticia es el reflejo del mitrismo"; "el diario que aún suspira por la dictadura uriburista"<sup>21</sup>. El conflicto entre lo que podría denominarse *Crítica-Jornada* y *La Nación-Noticias Gráficas* coincidió con el cambio de director en el matutino: Jorge A. Mitre, que había ocupado el cargo desde 1912, cedió en 1932 la conducción a Luis Mitre, quien ya había ejercido esas funciones entre 1909 y 1912. Poco tiempo después del cambio de director,

se desvinculaba *La Nación* de *Noticias Gráficas*, que seguiría publicándose como vespertino.

Es difícil discernir en qué medida el enfrentamiento entre *Crítica* y *La Nación* estuvo motivado por una cuestión de ética periodística y cuánto jugó el alineamiento político de ambas publicaciones. Primero *Jornada* y luego *Crítica* fueron, en los años del diferendo, simpatizantes del general Justo, cuya candidatura y comienzo de gestión fueron vistos con distancia y desconfianza por *La Nación*. Probablemente allí se encuentre una de las claves del conflicto, aun cuando esto no permita, de ninguna manera, relativizar la significación que tuvo para el mismo la tentativa del director o del diario de los Mitre de usufructuar en su provecho la prohibición dictatorial que dejó fuera de juego transitoriamente al popular periódico de Botana. Además, a este entrecruzamiento entre las lógicas propias de las afinidades políticas y de la ética profesional se sumó, naturalmente, la no menos importante de los respectivos intereses empresarios o económicos.

#### La Nación: 1930-1932

*En los más diversos géneros de relatos sobre el pasado argentino, el año 1930 adquirió una dimensión mítica: fin de la edad de oro económica según unos, interrupción del progreso institucional según otros; para todos, pérdida de rumbos y de objetivos de un país que suponían llamado a destinos mejores. La crisis mundial y la quiebra de la continuidad constitucional se convirtieron en los hechos clave para datar el comienzo de una época. Sin negar la validez de tal periodización para pensar el ulterior desenvolvimiento de la economía o de las luchas por el poder y su marco legal, entendemos que una explicación del desarrollo político y social argentino que pretenda evitar los reduccionismos economicistas o juristicistas, debe construir su conceptualización remitiendo a un entramado más complejo y exhaustivo de relaciones sociales, y no a los hitos míticos. Desde un análisis sociológico, el año 1930 adquiere relevancia en tanto momento revelador de aspectos significativos del proceso de transformación de las prácticas de los sectores sociales que en etapas anteriores habían actuado como una clase dirigente y que a partir de entonces pasaron a desempeñarse como una clase dominante, entendida según los términos de Touraine<sup>22</sup>.*

*El concepto de clase dominante se emplea para hacer referencia a aquellos sectores sociales que ocupan posiciones de predominio en los sistemas de relaciones sociales sin lograr, o sin pro-*

ponerse, hacer aceptar por consenso sus situaciones de poder y privilegio por el resto de la sociedad. En tanto los sectores sociales que integran una clase dominante desarrollan sus prácticas en esferas distintas —política, económica, ideológica— aunque interconectadas, sus intereses distan de ser homogéneos. Definida por su incapacidad para elaborar un discurso societario integrador, una clase dominante refleja en su interior la fragmentación propia de su debilidad ideológica. Con la falta de modelos consensuales, la sociedad se hace más conflictiva y el mantenimiento del orden supone mayor probabilidad de utilización de los aparatos coercitivos del Estado para reprimir o neutralizar la disconformidad de las protestas de los sectores sociales o de los actores políticos perjudicados por el modo de acción de la clase dominante. La inexistencia de formas democráticas de regulación del sistema político suele ser un rasgo distintivo de aquellas sociedades en las que una clase dominante, o alguno de los sectores que la integran, hace prevalecer, directa y prácticamente sin negociaciones, sus propios y excluyentes intereses en la toma de decisiones del Estado.

Los sectores sociales que en épocas anteriores habían desempeñado roles de clase dirigente no modificaron sus inserciones en la política, en la economía y en la ideología en una coyuntura o fecha precisa de la historia argentina. Se trató, por el contrario, de un proceso prolongado en el que es posible distinguir una asincronía en la pérdida de capacidad de dirección de los diferentes sectores o conjuntos especializados de actores que confluían a formar la clase dirigente. Como hemos visto anteriormente, la implantación de las regulaciones democráticas del sistema político demostró que los partidos conservadores carecían de poder de convocatoria para librar exitosamente las luchas electorales. En cierto sentido, cabe afirmar que esos políticos eran el conjunto de actores especializados más vulnerable de la clase dirigente. Es más, su derrota podía no constituir mayor problema para dicha clase, que tenía alternativas de representación aceptables en la tendencia alvearista de la Unión Cívica Radical. Los grandes empresarios que integraban la clase dirigente tuvieron orientaciones amplias e incluyentes mientras la economía abierta y la inserción internacional fácil no presentaron mayores problemas; luego, sus contradicciones con los restantes sectores propietarios y con los asalariados aumentaron, y sus posiciones se hicieron más defensivas y más difíciles de negociar. En el dominio ideológico, la manifestación de los cambios producidos en la clase dirigente fue la emergencia del pensamiento antidemocrático. Más que la influencia fascista, cuyo alcance fue menor, resultaron significativos en este

orden de fenómenos el cuestionamiento de la legitimación electoral y las dudas sobre su pertinencia, críticas dirigidas, en realidad, a la posible acción racional del pueblo-ciudadano, desde un elitismo nunca hasta entonces verbalizado de manera tan franca en los debates argentinos. Sin embargo, es interesante destacar que en el campo ideológico la fuerza del liberalismo, en tanto cosmovisión fundadora de la nacionalidad y de las instituciones, dificultó dar una base de legitimidad histórica a los discursos antidemocráticos. Muy sumariamente esbozadas, las respectivas evoluciones de los sectores políticos, económicos e ideológicos integrantes de la clase dirigente marcaron su desplazamiento a su nuevo rol, caracterizable como propio de una clase dominante.

Durante el gobierno del general Uriburu todo giró en torno a cómo transformar las instituciones y las ideas, que habían sido viables y aceptables mientras los sectores sociales predominantes tuvieron un desempeño de clase dirigente, y ajustarlas a la nueva realidad de esos sectores. La novedad más simple y compartida fue comenzar a instrumentar el Estado intervencionista. La más compleja e imposible fue cambiar el régimen político y darle formato corporativista. En una situación intermedia se halló la salida política que devolvió el manejo del Estado al conservadorismo, mediante una mixtura de proscripción y fraude que dejó fuera de juego a sus adversarios. Una nueva etapa histórica había comenzado, y aunque los actores no tenían todavía bien configurados sus roles, sus relaciones no eran las mismas que las del período precedente.

El pensamiento político de La Nación reflejó muy bien las transformaciones que vivía la dinámica política y social del país. En tanto actor especializado en la formulación de análisis ideológicos, el matutino había hecho una contribución muy importante a la construcción del imaginario de la clase dirigente y, por esa vía, de la sociedad en su conjunto. El gobierno de Uriburu propuso algunas iniciativas fáciles de rechazar por parte del diario, como el corporativismo. Sobre la economía dirigida, en cambio, hubo total acuerdo. En la discusión de la salida electoral, su opinión fue adversa al gobierno y mantuvo coherencia con sus principios favorables a la libertad de sufragio y a un juego político abierto y sin restricciones. Globalmente, frente al régimen de facto, La Nación reflexionó sobre su carácter de transición política, cuando en realidad se trataba del comienzo de una mutación mucho más profunda de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Su matriz cognitiva y de decodificación de los hechos políticos y sociales correspondía a la época en que los sectores sociales predominantes actuaban como una clase dirigente. En estricta correspondencia con ese modo de

ver los acontecimientos, el diario aconsejaba a dichos sectores políticas y líneas de acción de tipo consensual que éstos ya no podían llevar a la práctica. Así, el matutino inició la década del 30 en contradictoria relación con la clase dominante, al pedirle que se desempeñara como una clase dirigente.

## NOTAS

<sup>1</sup> *La Nación*, 9-9-1930, pág. 16.

<sup>2</sup> *La Nación*, 28-9-1930, pág. 10.

<sup>3</sup> Revista Semanal de *La Nación*, 28-9-1930, pág. 29. La revista había comenzado a publicar el texto de Trotski el 6 de abril de 1930. En su presentación publicitaria, la víspera de la primera entrega de *Mi vida*, prevenía a sus lectores que muchos se sorprenderían al comprobar que el jefe bolchevique era "un escritor de raza, dueño de un estilo cautivador, matizado por una ironía que suele lindar con el sarcasmo". *La Nación*, 5-4-1930, pág. 6. Una publicidad a doble columna completa en página 8, ilustrada con Trotski vestido con uniforme militar, anunciaba que el matutino tenía la exclusividad de publicación del material en la Argentina.

<sup>4</sup> Leopoldo Lugones: "Lo grande y lo chico", *La Nación*, 29-9-1930, pág. 6.

<sup>5</sup> *La Nación*, 17-6-1931, pág. 4.

<sup>6</sup> *La Nación*, 6-6-1931, pág. 6.

<sup>7</sup> *La Nación*, 11-6-1931, pág. 4.

<sup>8</sup> *La Nación*, 18-7-1931, pág. 6.

<sup>9</sup> *La Nación*, 26-7-1931, pág. 4.

<sup>10</sup> *La palabra del general Uriburu. Discursos, manifiestos y cartas publicados durante su gobierno*, segunda edición, Roldán Editor, Buenos Aires, 1933, pág. 134.

<sup>11</sup> *La Nación*, 7-10-1931, pág. 6.

<sup>12</sup> *La Nación*, 8-10-1931, pág. 6.

<sup>13</sup> *La Nación*, 22-10-1931, pág. 4.

<sup>14</sup> *La Nación*, 8-11-1931, pág. 6.

<sup>15</sup> *La Nación*, 9-10-1931, pág. 6.

<sup>16</sup> *La Nación*, 11-11-1931, pág. 4.

<sup>17</sup> *La Nación*, 4-10-1931, pág. 6.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Leopoldo Lugones (h) (comp.): *Leopoldo Lugones. Antología. Prosa*, Centurión, Buenos Aires, 1949, pág. 468.

<sup>20</sup> El Poder Ejecutivo justificó ese nombramiento con el argumento de que Lugones (h) poseía notoria "versación en materia social lo que lo habilita a desempeñarse sin mayor práctica previa en asuntos policiales". Orden del Día 21-10-1930, citada por Adolfo Enrique Rodríguez, comisario general (R): *Historia de la Policía Federal Argentina*, Tomo VII, 1916-1944, Editorial Policial, Buenos Aires, 1978, Vol. 262, pág. 208.

<sup>21</sup> *Crítica*, 17-8-1932. El autor de este libro agradece a la licenciada Sylvia Saitta, quien le llamó la atención sobre el conflicto *Crítica-Jornada* vs. *La Nación-Noticias Gráficas*. Para una descripción de la relación entre *La Nación* y *Noticias Gráficas* como estrategia comercial de una misma empresa, ver Ricardo M. Setaro: *La vida privada del periodismo argentino*, Federación Gráfica Bonaerense, Buenos Aires, 1936, págs. 57-62. Una versión distinta sostuvo Helvio I. Botana en *Memorias. Tras los dientes del perro*, Peña Lillo Editor, Buenos Aires, 1977, pág. 64, donde afirma que *Noticias Gráficas* no pertenecía a *La Nación* como empresa, sino a su director Jorge Mitre.

<sup>22</sup> Alain Touraine: *Production de la société*, Seuil Collection Sociologie, Paris, 1973, pág. 218.

## VI

# La ilegitimidad del poder y las transformaciones de las ideas sobre el Estado durante el período 1932-1943

En vísperas de la asunción del presidente Justo, *La Nación* relativizó los vicios de origen de su designación y procuró realzar el significado del período a iniciarse, en tanto recuperación de la normalidad institucional. El nuevo gobierno estaba integrado por ministros cuya trayectoria anterior podía despertar la confianza de los sectores afines al pensamiento del diario. Es más, muchos de ellos habían sido elogiados en diversas ocasiones desde sus columnas. Leopoldo Melo y Manuel de Iriondo provenían del radicalismo antipersonalista. El primero de ellos había sido candidato presidencial de esa fuerza en 1928 y, tal como señalamos, contó con las simpatías del matutino. Carlos Saavedra Lamas y Alberto Hueyo eran conservadores sin partido. La estratégica cartera de Agricultura tenía por titular a Antonio De Tomaso, una de las figuras más notorias del Partido Socialista Independiente, quien invariablemente, aun en los tiempos de su militancia en el socialismo de Juan B. Justo, había merecido el reconocimiento del diario. Los dos ministros militares, el coronel Manuel Rodríguez y el capitán Pedro S. Casal, declaraban entre sus principales objetivos hacer volver a las fuerzas armadas a sus funciones profesionales y apartarlas de la política.

Durante los primeros meses de gobierno, *La Nación* criticó al presidente Justo por lo que consideraba la falta de una política económica bien definida. Opinaba que las nuevas autoridades no tenían un buen diagnóstico de la situación y carecían de orientaciones doctrinarias claras para emprender una reestructuración de la economía nacional capaz de enfrentar los cambios producidos por la crisis mundial. Esta preocupación fue corroborada por los hechos cuando el gobierno británico manifestó su decisión de privilegiar el comercio con los países integrantes del Common-

wealth. El mismo día en que se hicieron públicos los acuerdos concluidos en la conferencia de Ottawa entre Gran Bretaña y sus dominios, *La Nación* reclamó a las autoridades la pronta sanción de una "ley de defensa ganadera (que debía) completarse con una acción diplomática y consular muy enérgica y con una política comercial muy eficiente"<sup>1</sup>. El tema de la comercialización mundial de los productos agroalimentarios no sólo inquietaba a *La Nación*. Los grandes propietarios rurales y sus representantes corporativos pedían al gobierno, en octubre de 1932, que asumiera una posición más activa para favorecer las exportaciones. Según dichos sectores rurales, era necesario ofrecer a las importaciones de bienes ingleses más facilidades y trato preferencial para pedir, como contrapartida, un tratamiento igualmente privilegiado para nuestras exportaciones. La demanda de los grandes productores rurales era utilizar el control de cambios para orientar el comercio exterior, fortaleciendo así la posición agroexportadora. El matutino coincidía con esa idea y la justificaba afirmando que ya no cabía pensar como si existiera libertad de mercado, pues en el mundo entero regía una "economía dirigida". Según su opinión, la Argentina se había resistido durante la gestión radical a aceptar esa nueva realidad mundial en la que el Estado no podía desentenderse de los intercambios internacionales; por eso, cuando Gran Bretaña, tres años antes, propuso establecer pactos comerciales, no había encontrado respuesta positiva: "La misión D'Abernon nos visitó con ese propósito en 1929, pero en esa fecha Gobierno y Congreso no estaban preparados para comprender la importancia de un pacto semejante"<sup>2</sup>. Sin embargo, estimaba que en 1932 las posiciones con respecto a los pactos habían cambiado, pero aún no había por parte del Estado definiciones claras, dado que el gobierno de Justo no mostraba todavía ninguna orientación definida sobre el tema. De allí que cuando se anunciaron las primeras iniciativas que desembocarían en el tratado Roca-Runciman, el diario las recibiera con inocultable beneplácito. Una vez conocidos los términos del pacto anglo-argentino, que respondía positivamente a las demandas de los principales intereses agropecuarios, *La Nación* celebró el acuerdo y señaló que quería "dejar constancia de nuestra satisfacción por haberse llegado a un convenio que interesa a una de las grandes industrias nacionales; de nuestra congratulación a los propios negociadores del arreglo, como asimismo al gobierno que, apoyado en las cláusulas de los pactos, podrá desarrollar su acción económica y financiera con más libertad puesto que le permitirán ejercer una influencia considerable en la actividad general"<sup>3</sup>.

Los pactos comerciales internacionales constituían sólo uno de los aspectos del intervencionismo estatal en la economía que defendió el diario en el curso del gobierno de Justo. Las reflexiones sobre las transformaciones del Estado, y especialmente de su necesaria participación en la actividad económica para solucionar problemas que no se resolvían automáticamente por la libre acción de las fuerzas del mercado, fueron una temática profundizada por *La Nación* en la década del 30. Siempre con referencia a un imperativo que surgía de la situación mundial, frente a la cual los principales países adoptaban iniciativas proteccionistas, afirmaba que la Argentina debía protegerse mediante el encauzamiento de las corrientes comerciales con los aranceles aduaneros, la defensa de la producción agraria y la fiscalización de los cambios. La conclusión más general que sacaba era que "la economía liberal y el libre cambio son, sin duda, los sistemas más eficaces para el progreso y la prosperidad de los pueblos; pero así como el libre cambio es un error cuando impera el proteccionismo en el resto de la tierra, la economía dirigida es una necesidad cuando la actividad de la producción mundial está sujeta a las condiciones dictadas por los intereses de los pueblos extranjeros"<sup>4</sup>. Para diferenciar el intervencionismo "necesario" del "excesivo", *La Nación* recomendaba al gobierno evitar la implementación de medidas de "economía dirigida" en actividades donde no fuese imprescindible, dado que "dentro del dominio de la economía dirigida su acción se ha de limitar a lo indispensable para poner a cubierto a las industrias de la tierra de una caída como la que amenazaba cuando se dictó el decreto disponiendo la compra de cereales"<sup>5</sup>. En tanto recurso excepcional, según el diario, la "economía dirigida" debía aplicarse en sectores de actividad de importancia estratégica tales como el agro, pero podía infligir perjuicios si no era empleada con mesura y pleno conocimiento de las necesidades que la justificaban.

El intervencionismo estatal en la economía impulsado por el gobierno de Justo tuvo como principal inspirador a Federico Pinedo y, en grado menor, a Luis Duhau. El primero fue ministro de Hacienda y el segundo de Agricultura, en los dos casos entre mediados de 1933 y fin de 1935. Pinedo había hecho sus primeras armas en política en el Partido Socialista, por el cual fue diputado nacional, y participó luego en el grupo de dirigentes que creó el socialismo independiente en 1927; fue desde entonces favorable a los acuerdos con los conservadores para combatir al yrigoyenismo. El presidente Justo lo designó ministro de Hacienda en reemplazo de Alberto Hueyo, y la etapa de economía dirigida iniciada en 1930 conoció por obra suya una notable profun-

dización. Luis Duhau siguió una trayectoria más lineal que Pinedo. Fue uno de los más importantes ganaderos de la Provincia de Buenos Aires y, entre 1926 y 1928, ejerció la presidencia de la Sociedad Rural Argentina. Desde ese cargo dirigió múltiples demandas al gobierno de Alvear pidiendo la intervención del Estado a favor de los intereses ganaderos. En la época en que Duhau desempeñó la titularidad de la entidad ruralista, patrocinó un notable estudio favorable al intervencionismo estatal realizado por Raúl Prebisch<sup>6</sup>.

Tanto la gestión ministerial de Pinedo como la de Duhau recibieron el apoyo de *La Nación*, que con motivo de la renuncia de ambos en diciembre de 1935 sostuvo que su alejamiento "ponía término a una acción que en corto período logró transformar la fisonomía del gobierno por la introducción de un criterio nuevo en los objetos esenciales de la administración"<sup>7</sup>. Las innovaciones introducidas por los dos ministros habían permitido que se convirtiera en una realidad la mayor intervención del Estado en la economía, tantas veces pedida por el diario desde la década del 20. Según afirmaba el mencionado editorial, hasta el momento de la entrada en el gabinete de Pinedo y de Duhau, el gobierno permanecía como un juez imparcial frente a la situación económica sin intervenir en ella. Luego, por iniciativa de los dos altos funcionarios, se creó el entramado de instituciones intervencionistas que el matutino sumariaba elogiosamente: "La organización de la Junta Reguladora de la Carne, de la Junta Reguladora de Vinos, de la Junta Reguladora de la Yerba Mate, de la Corporación de Productores de Carne, de la Corporación Frutícola, etc., responde al concepto aludido de la intervención del Estado en la dirección y en el desenvolvimiento de la producción y del trabajo del pueblo, y la ley que establece el régimen del petróleo obedece igualmente a la idea de la conveniencia moderna de sujetar las actividades particulares a los dictados del interés nacional"<sup>8</sup>. El análisis finalizaba destacando que incluso en el extranjero se habían elogiado los hallazgos en materia de técnicas gubernativas pergeñados por los dos ministros que dejaban sus cargos.

La intervención del Estado en la economía era también necesaria, según el diario, para fomentar el desarrollo industrial. Diversas iniciativas tomadas por instancias públicas y que podían favorecer al sector manufacturero fueron comentadas con beneplácito por sus editoriales. Desde esa óptica, elogiaba en 1935 la decisión de las "autoridades navales que han puesto de manifiesto su propósito de utilizar en lo sucesivo la industria privada argentina para la construcción de gran parte de los avisos y

rastreadores que figuran en su plan de adquisiciones"<sup>9</sup>. Además, encomiaba a la Dirección General de Comunicaciones del Ejército por aprovisionarse con productos de industria argentina. Pero, al mismo tiempo, lamentaba el escaso conocimiento que existía acerca de la capacidad industrial del país. En su opinión, eso debía solucionarse mediante un relevamiento censal, frente a cuyos resultados afirmaba: "Estamos seguros que el país se sentirá halagado por el esfuerzo industrial realizado silenciosamente hasta la fecha y las instituciones armadas encontrarán motivos para alentar aún más su desarrollo como un medio de favorecer la independencia industrial de la Nación y poner en propias manos la preparación de los elementos necesarios a la defensa nacional"<sup>10</sup>.

*La Nación* consideraba en sus análisis de 1935 que existían condiciones muy propicias para el desarrollo industrial del país y que esta situación ya había sido comprendida por los hombres con vocación emprendedora. Tomaba como indicador de esa tendencia el interés por los papeles bursátiles de las empresas industriales, que habían comenzado como pequeños talleres individuales para luego crecer y convertirse en sociedades anónimas. El diario sostenía que había sido necesario iniciar el proceso de sustitución de importaciones industriales a causa de los cambios acaecidos a nivel mundial cuando fue difícil ubicar las exportaciones agroalimentarias, pero una vez puesta en marcha esa producción había "ido perfeccionándose y desarrollándose, hasta adquirir proporciones considerables que requieren cada vez mayores capitales"<sup>11</sup>. La colocación de acciones en la Bolsa era vista como un modo óptimo de asegurar la capitalización de las empresas y hacer participar en la propiedad de las industrias a amplios conjuntos sociales.

En el curso de la década del 30 *La Nación* no sólo fue partidaria de la intervención del Estado en la economía sino que, además, propició la sanción de reglamentaciones y normas para regular los conflictos entre empleadores y asalariados. Refiriéndose al informe del Departamento Nacional de Trabajo del año 1934, el diario afirmaba que muchas de las huelgas registradas se hubiesen evitado de haber existido leyes y procedimientos similares a los de países más avanzados en la materia. Concretamente aludía a leyes de organización sindical y mecanismos para laudar y conciliar conflictos. Las reglamentaciones harían posible, de acuerdo con la perspectiva del matutino, el funcionamiento de sindicatos legales, fiscalizados en su composición y en sus decisiones, lo que resultaría más beneficioso que el sistema vigente de gremios sin ningún tipo de control. En cuanto a las

funciones de las instancias de conciliación, preveía que "el conflicto habitual, las normales condiciones que ocurren en el proceso industrial, desaparecería en su expresión aguda y se allanaría con un concepto de justicia posible, de orden basado en el empleo de reglas claras"<sup>12</sup>. Tomando como referencia la experiencia de los países más avanzados, *La Nación* sostenía que en ellos los conservadores y los socialistas "optan por definir sencillamente órganos que aseguren la estabilidad económica del obrero y de la empresa con un sentido de estricta imparcialidad, en que se sustraen las dos fuerzas a la noción teórica de la lucha de clases con el fin de encontrar para ambas la coincidencia imprescindible que interesa a la comunidad"<sup>13</sup>.

Cabe señalar que estas ideas favorables a incorporar legislaciones modernas eran, en algunos aspectos, relativizadas en los análisis del diario; según afirmaba, era importante no introducir ciertas leyes sociales que pudieran perjudicar el progreso que se realizaba en la producción. Así, frente a un fallo judicial que extendía a los obreros industriales los alcances de la ley de despidos con indemnización vigente para los empleados de comercio, *La Nación* expresaba su disconformidad y adhería a las objeciones formuladas por la Unión Industrial Argentina. Según los argumentos del diario, cuando se recordaba el "progreso notable realizado por la industria argentina, el número de las familias y los millares y millares de obreros ocupados en ellas, se tiene la sensación de que la ley (de despido), si es aplicable según se pretende, significará una traba en el desarrollo fabril"<sup>14</sup>. Según ese razonamiento, todavía no se había alcanzado un nivel de desarrollo tal que permitiera la generalización de los beneficios de esa ley.

La perspectiva adoptada por el diario sobre la problemática social hizo que apoyara la decisión del gobierno de Justo de declarar día feriado el 1° de Mayo; en su opinión, dicha fecha "se ha ido despojando poco a poco de los rasgos inquietantes con que solía presentarse en los países en que las masas proletarias se hallaban en el período inicial de su organización"<sup>15</sup>. Además, consideraba que los tiempos en que el 1° de Mayo tenía limitado su sentido a la protesta obrera ya habían sido superados en la Argentina y que "ésa era la razón que induce al gobierno, que no representa a una clase sino a la Nación, es decir a las clases todas que componen la sociedad, a auspiciar la conmemoración de los hombres de trabajo, obreros y no obreros manuales, asalariados o no"<sup>16</sup>. Cabe sin embargo destacar que esta manera de pensar la sociedad como un conjunto de relaciones sociales en las que tendía a prevalecer la armonía no impedía que el diario

recordase que siempre podían existir conflictos artificialmente creados y que, en consecuencia, la vigilancia policial debía extremarse para impedir la intromisión de "agitadores profesionales" que intentaran aprovechar las eventuales desavenencias entre patronos y obreros con fines políticos<sup>17</sup>.

Cuando se refería a los partidos de izquierda, *La Nación* se preocupaba por establecer diferencias entre los que a su juicio realizaban aportes positivos para el país y aquellos que eran contrarios a las instituciones y a la tradición nacional. Como un ejemplo de orientación constructiva, el diario elogiaba la actitud de los dirigentes del Partido Socialista que, en el acto del 1º de Mayo de 1934, habían ofrecido su colaboración al gobierno. Sobre el tema decía que seguramente esa actitud de los socialistas sorprendería a quienes tenían de esa fuerza política una imagen demasiado asociada a su época más combativa. Pero el matutino no se consideraba sorprendido ya que, según afirmaba, había observado la lenta adaptación del socialismo "en los países en los que se ha ido popularizando hasta cobrar la importancia de un elemento influyente, a veces decisivo, como llegó a serlo la Social Democracia Alemana, particularmente después de la guerra"<sup>18</sup>.

Junto con estas consideraciones favorables a la integración del socialismo en el orden político y social existente, el diario no perdía de vista los riesgos que, en su opinión, podían emerger de otras orientaciones de izquierda más combativas. Así, por ejemplo, a mediados de la década del 30 expresó su preocupación frente a la aparición de tendencias clasistas en el Partido Socialista. Señalaba que cabía estar alerta y vigilante ante las corrientes internas del socialismo que querían construir un "partido de clase", y por ello vio con satisfacción su derrota y condena ideológica y el triunfo de la fracción mayoritaria que apoyaba la línea moderada de la dirección partidaria. También el Partido Comunista motivaba la reflexión crítica del diario, pues consideraba que respondía a intereses extranjeros. Por eso consideró necesaria y justa la resolución de la Junta Electoral Nacional que negó a los comunistas el derecho de participar en las elecciones para gobernadores y legisladores en 1935. La Junta Nacional Electoral había basado su decisión aduciendo que el Partido Comunista quería subvertir el orden de la sociedad y destruir el Estado, y que veía en las elecciones sólo una oportunidad de agitación proselitista. Para el diario, si bien esas razones eran válidas, el justificativo más importante para excluir al comunismo era su negación de la existencia misma de la nacionalidad<sup>19</sup>.

Lo que ponía la nota discordante en el panorama político, en opinión del diario, era la persistencia desde 1931 de la absten-

ción electoral de la UCR. Según ese punto de vista, el radicalismo había cometido el error de deteriorar la legitimidad de las nuevas autoridades absteniéndose de participar en la compulsa electoral, pero ya instaladas éstas en el gobierno, con frecuencia *La Nación* instó a los radicales a deponer esa actitud. Los argumentos eran diversos, pero todos resaltaban el mismo objetivo: la necesidad de dotar nuevamente de plena legitimidad al juego político. Aun cuando el poder cometiera abusos, decía, éstos debían solucionarse mediante la participación electoral, y reclamaba a los radicales no "seguir en este abandono del deber, que le corresponde en la necesidad de contribuir a la conciliación nacional"<sup>20</sup>. Desde esa perspectiva, el diario saludó la decisión de la UCR de modificar, en enero de 1935, su posición abstencionista, como un paso decisivo para la demorada normalización definitiva de la vida política nacional. Un mes más tarde Alvear fue designado presidente de su partido. Otra vez el análisis editorial expresaba su satisfacción, ya que consideraba haber "bregado de continuo para que se produjera por parte del radicalismo esa declinación de una actitud que juzgábamos injustificada, y su consiguiente vuelta al camino de los comicios"<sup>21</sup>. Un sistema político en el cual la confrontación electoral se diese entre los conservadores y los radicales dirigidos por Alvear, parecía constituir, desde su óptica, el ideal. Sólo se preguntaba sobre la capacidad del Poder Ejecutivo para disciplinar a los gobiernos provinciales reacios al juego electoral limpio. Formulaba ese interrogante con cierta preocupación en su balance de los tres primeros años de gestión del presidente Justo<sup>22</sup>.

A partir de 1935 la dinámica político-electoral argentina cambió, pero no en el sentido esperado por *La Nación*. El conservadorismo no se consideró en condiciones de competir lealmente con sus adversarios y prefirió recurrir al fraude y a la violencia. Antes de optar por esa vía para asegurarse el control de las posiciones de poder, algunos casos de comicios no distorsionados por el fraude revelaron la debilidad numérica de los apoyos conservadores. Así, por ejemplo, en la elección de un senador por la Capital Federal, realizada el 24 de marzo de 1935, la coalición conservadora, conocida como Concordancia, sufrió una aplastante derrota frente al Partido Socialista. Alfredo Palacios obtuvo alrededor de 180.000 votos, mientras el candidato conservador apenas superó los 30.000<sup>23</sup>. El análisis del diario a propósito de los comicios revelaba extrema perplejidad. Tras pasar revista a los sectores sociales conformes con la acción del gobierno, se preguntaba por qué esa satisfacción no se había reflejado en el caudal electoral. Según entendía, se hallaban contentos los agricul-

tores con la Junta de Granos, los ganaderos con la de Carne y el convenio con Londres, los propietarios con la moratoria hipotecaria y todos los sectores que habían recibido beneficios. En ese contexto, juzgado por *La Nación* tan favorable, sin embargo, "la Concordancia o sus componentes comienzan a perder elecciones y a perderlas, como acaba de suceder con la última (en la Capital), de una manera que, si se fuera a juzgar solamente por las cifras del escrutinio, significaría el más completo rechazo popular. ¿Cómo se explica que un gobierno pueda haber realizado obra buena, que cuenta con el asentimiento general y que es, por cierto, benéfica para los intereses del país, y que su partido sea derrotado en tales proporciones?"<sup>24</sup>. La respuesta a este interrogante debía buscarse, en opinión del matutino, en la insuficiente dedicación a la acción electoral por parte del conservadorismo. La escasa o nula capacidad proselitista de los partidarios del gobierno explicaba la mínima atracción de sufragios ejercida por sus candidatos. Entendía, también, que las autoridades debían mejorar algunos aspectos de la gestión pública.

Que el Estado debía velar por el correcto desempeño de las empresas concesionarias de servicios públicos fue una preocupación muchas veces reiterada por *La Nación*. Fiel a esa concepción, criticó la decisión del Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires de prorrogar en 1936 las concesiones de la empresa CADE, proveedora del servicio de energía eléctrica. Cuando en el Concejo Deliberante se debatió extender las concesiones que debían finalizar en 1957 hasta 1982, el diario se opuso con argumentaciones técnicas, económicas y políticas. Según afirmaba, no se podía ceder a una empresa una concesión tan importante en un dominio que necesariamente conocería grandes innovaciones tecnológicas en los años próximos. Desde el punto de vista económico la prórroga no significaba ninguna ventaja en favor de los usuarios. En términos políticos, consideraba que los ediles no tenían atribuciones para tomar una decisión de tal trascendencia. Cabe recordar que el affaire CADE cubrió en 1936 de desprestigio a los concejales radicales, quienes luego del levantamiento de la abstención constituían la mayoría en el Concejo y, como se revelaría muy pronto, habían sido sobornados por la empresa para que aprobaran la prórroga. El diario llamaba a los ediles radicales a rechazar la concesión y les recordaba que los arreglos de esa índole eran censurados por sus propios correligionarios<sup>25</sup>. Aprobada la prolongación del contrato, *La Nación* pidió al intendente conservador que la vetara, y en términos admonitorios decía: "La opinión pública, si esta prórroga se hiciese efectiva, puede algún día tener que pedir cuentas"<sup>26</sup>.

Aceptar la resolución del Concejo sería un error profundo y difícil de reparar, sentenciaba el editorial citado.

El funcionamiento del sistema telefónico, explotado en concesión por una empresa extranjera, era también motivo de preocupación para *La Nación*. Creía que el Estado, por medio de la Dirección de Correos y Telégrafos, no ejercía suficiente control sobre la calidad de las prestaciones de la Unión Telefónica y que dicha empresa se beneficiaba de disposiciones legales viejas e inadecuadas. De allí que en 1937 reiterara sus quejas pidiendo la sanción de "una reglamentación precisa basada en una ley, la cual hace tiempo venimos reclamando"<sup>27</sup>. A esta desconfianza hacia las empresas concesionarias de servicios tampoco escapaban las ferroviarias. Cuando a comienzos de 1938 las compañías de ferrocarril solicitaron al gobierno un aumento de tarifas, el matutino consideró que la situación del país no permitía ese incremento, y aconsejó a las empresas desistir del pedido y tener en cuenta las ventajas de que gozaban: "La duración de las concesiones, la seguridad de las mismas, la buena fe del país, sus propias conveniencias identificadas con las regiones a las cuales sirven, condiciones que le permiten y aconsejan observar con paciencia el desenvolvimiento del fenómeno económico, a la espera de días más favorables"<sup>28</sup>. Sostenía que si el Estado otorgaba los aumentos empeoraría la situación del conjunto de la economía.

La creación, a fines del gobierno de Justo, de la Dirección General de la Marina Mercante Nacional, dio motivo al matutino para volver sobre un tema ya abordado en otras ocasiones. Al fin, en su opinión, había llegado el momento de subsanar la carencia de una flota fluvial y marítima estatal, ya que "razones de distinto orden habían impedido hasta el presente que la marina mercante nacional ocupe el lugar que la potencia económica, industrial y comercial del país reclamaba para ella"<sup>29</sup>. Incitaba a las autoridades a no quedarse sólo en disposiciones formales y las urgía a organizar la Marina Mercante, destacando los beneficios para el intercambio comercial del país de navegar bajo pabellón propio. ¿Cuál debía ser el límite de la intervención del Estado en la economía? Tal como se vio anteriormente, las instancias estatales debían, según *La Nación*, evitar los efectos perjudiciales de un excesivo intervencionismo. Cabía encontrar en cada caso el difícil equilibrio entre la acción estatal y la privada. Así, por ejemplo, señalaba que las iniciativas industrialistas fomentadas por las fuerzas armadas debían articularse adecuadamente con la iniciativa privada. Daba como modelos a imitar los casos norteamericano y brasileño, donde se buscaba el referido equilibrio y se

fomentaba la actividad de establecimientos, fábricas y talleres privados. También la Argentina, a su entender, poseía el desarrollo industrial suficiente como para seguir esa vía. De no proceder de ese modo, afirmaba, se corría "el peligro de que el Estado se extienda demasiado en el campo industrial y limite sin razón la colaboración que las fuerzas vivas pueden prestarle cuando ellas son orientadas hábilmente y a su debido tiempo"<sup>30</sup>.

La propuesta de *La Nación* a los conservadores en el sentido de mejorar su actividad proselitista no era la única alternativa de que disponían para retener el control del poder. Cuando se acercó el momento de discutir la estrategia para las elecciones presidenciales de 1937, los métodos fraudulentos aparecieron para los conservadores como una salida frente a la amenaza de un triunfo radical. En opinión del matutino esa respuesta debía ser totalmente rechazada, porque no cabía "creer en la posibilidad de proseguir en la tarea delictuosa de sustituir el veredicto popular por el de los gobiernos"<sup>31</sup>. Los argumentos con que respaldaba la limpieza de los comicios eran varios. Por una parte, consideraba que el fraude hacía perder legitimidad a las autoridades que resultaban electas. Pero lo que le resultaba más importante para mostrar lo equivocado de los métodos propiciados por los conservadores contra los radicales, era que a su juicio ambas fuerzas políticas "por su arraigo en las masas populares y otras razones, no están separadas por ideologías irreconciliables"<sup>32</sup>. Los enfrentamientos se debían más a cuestiones del pasado que a ideas sobre el modo de gobernar al país. Instaba, en consecuencia, a aceptar una rápida reconciliación y poner fin a la etapa, que caracterizaba como de transición y anormal desde el punto de vista institucional, presidida por Justo.

En 1937, con la certeza de estar frente a comicios nuevamente fraudulentos, *La Nación* criticó intensamente esa situación desde antes del acto electoral. El diario no escatimaba adjetivos para calificar la conducta de los gobernadores provinciales que propiciaban abiertamente burlar la voluntad de la ciudadanía. Para impedir esos manejos, reclamaba una acción enérgica del presidente Justo, aun cuando no ponía excesivas esperanzas en que eso sucediera. Ya sobre el momento de las elecciones afirmaba: "A pocas horas de distancia de los comicios domina la sensación de que el país asistirá a una gigantesca parodia, si el Poder Ejecutivo no se propone evitarlo con el rigor de medidas decisivas"<sup>33</sup>. Le provocaban especial indignación los gobernadores que querían suprimir el voto secreto, al punto que algunos, predicando con el ejemplo, hacían público su voto en el momento del sufragio. Esa actitud había adoptado el gobernador de Buenos

Aires, Manuel Fresco, en las elecciones provinciales realizadas la semana anterior a los comicios presidenciales de 1937<sup>34</sup>.

Al día siguiente de las elecciones en las que, como era previsible, se impuso el binomio Ortiz-Castillo apoyado por la Concordancia, el matutino sistematizó en su reflexión editorial todas sus objeciones a lo que había sucedido: "El acto electoral de ayer, no será colocado seguramente entre los que han prestigiado a las instituciones en las épocas en que las autoridades respetaban el imperio de la legalidad"<sup>35</sup>. A renglón seguido pasaba revista a las anomalías ocurridas, y señalaba que bajo el patrocinio de la autoridad policial se habían registrado diversas violaciones de las leyes electorales: en algunos casos se suprimió el cuarto oscuro, en otros se "votó cantado" o se expulsó a los fiscales de los partidos opositores. Pero los análisis del diario no se limitaban a la mera enumeración de actos viciados; también se preguntaba sobre las posibles consecuencias de esas situaciones de anormalidad institucional. Cabía suponer, afirmaba, que "el sistema de coacciones, francas o disimuladas, terminará algún día porque el pueblo no se resignará a perder sus derechos"<sup>36</sup>. Combinaba ese optimismo sobre un posible cambio del estado de cosas con denuncias puntuales de todos aquellos actos que para el diario mostraban los excesos cometidos o tolerados por las autoridades. Como no le faltaba materia prima para ilustrar las transgresiones, y día a día le llegaban nuevas denuncias de arbitrariedades cometidas, los ecos de las elecciones presidenciales de 1937 ocuparon un desusado espacio en sus análisis.

La indignación moral de *La Nación* ante los procedimientos empleados por los gobernantes conservadores no impedía que sus comentarios editoriales se explayaran en la descripción de episodios dignos de integrar una antología de la picaresca política. Denunciaba qué durante las elecciones en el pueblo de Lincoln "la policía atacó al comité radical con descargas de fusilería (llegándose al extremo que) un hacendado conocido y que ni siquiera milita en el radicalismo, sino en una fracción conservadora no afecta al oficialismo regional, fue sacado a golpes de su domicilio y maltratado"<sup>37</sup>. El matutino, que siempre había estado atento a cualquier trastrocamiento de valores y jerarquías sociales, vio las acciones represivas de la policía contra políticos opositores respetables como un signo grave del deterioro de la vida pública del país. Denunciaba el entorpecimiento del desarrollo de los actos políticos y aun de meras conferencias, donde "la libertad de tribuna ha estado subordinada al criterio de empleados policiales subalternos, investidos de facultades de

quitar bruscamente la palabra al que expresara conceptos que juzgaran poco satisfactorios<sup>38</sup>.

En mayo de 1938, el legislador conservador correntino Felipe C. Solari presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para pedir al Poder Ejecutivo que investigara si la sociedad anónima propietaria y administradora del diario *La Nación* se ajustaba a los requisitos establecidos en el Código de Comercio. El proyecto de Solari continuaba una iniciativa por él planteada el año precedente que, en lo sustancial, se basaba en la presunción de la transferencia de una parte del paquete accionario de la empresa editora del matutino a capitales norteamericanos<sup>39</sup>. Esa inquietud había motivado en su momento una acre respuesta del diario, considerada por Solari como injuriosa para él y, más aún, como una falta de respeto al cuerpo colegiado en su conjunto. Al reiterar su pedido de investigación en 1938, enfrentó la objeción del diputado radical Emilio Ravignani, quien explicó que el año anterior una comisión legislativa había concurrido a *La Nación* y encontrado respuestas satisfactorias para los interrogantes planteados sobre la propiedad de las acciones y el manejo de la empresa, por lo que descartaba la necesidad de una nueva investigación. Sin embargo, el tema de la propiedad de la empresa fue, desde entonces, muchas veces abordado por los adversarios del diario, quienes evocaron insistentemente las presunciones del diputado correntino.

Con la ausencia de los legisladores opositores, que se negaron a convalidar la elección fraudulenta del binomio Ortiz-Castillo, la Asamblea Legislativa consagró a las nuevas autoridades que debían regir el país entre 1938 y 1944. *La Nación* señaló que luego de un proceso tan anormal sólo cabía esperar el fin de "las bastardas maquinaciones de los últimos años y volver al imperio de las instituciones"<sup>40</sup>. Esta posición del diario no era una simple expresión de deseos, sino que encontraba cierto asidero en manifestaciones públicas del presidente electo. En efecto, Roberto M. Ortiz había declarado durante la campaña que se empeñaría en recomponer el sistema democrático y terminar con la corrupción electoral imperante. La meta era difícil, aunque no imposible en opinión del matutino, y el nuevo presidente tendría que intentarlo contra buena parte de los políticos que lo llevaban a la más alta magistratura. Con evidente intención de apuntalar el proyecto de saneamiento institucional, empleó términos muy rigurosos para condenar las elecciones provinciales que ya sobre el umbral del nuevo período presidencial se realizaron en Mendoza. "Voto cantado", violencia directa contra los candidatos y dirigentes de la oposición y, para completar la lista

de transgresiones, sostuvo que "gente de acción adueñada de los comicios presionaba a los votantes, a los fiscales y a las propias autoridades de mesa en cuanto insinuaban algún respeto por la ley"<sup>41</sup>. El día en que Justo transmitió el mando a Ortiz, en el balance del sexenio sintetizaba todo lo ocurrido con una escueta y terminante frase: "En resumen, el juicio de los seis años transcurridos, si pudiera dictarse brevemente, sería: favorable ante lo económico y administrativo, y de imposible elogio en lo político"<sup>42</sup>.

En la misma jornada del cambio de presidente, *La Nación* publicaba la necrológica de Leopoldo Lugones, quien se suicidó el 19 de febrero en una isla del Tigre. Lugones había vuelto a escribir en el diario desde 1934. Al morir dejaba inconcluso un libro sobre el general Roca, cuyo texto se interrumpía en los comienzos de la campaña al desierto contra la población aborigen. El manuscrito se cortaba con una frase trunca, cuya última palabra quedaba sin terminar: La Na... Un año más tarde, con motivo de la publicación del inacabado texto, la nota bibliográfica del matutino decía: "El nombre inconcluso de nuestro diario pone imprevisto final a la producción total del más prodigioso escritor argentino..."<sup>43</sup>. La compleja relación del escritor e ideólogo con *La Nación* sería evocada desde su muerte tanto por amigos como por adversarios de dicho medio de prensa y, en buena medida, tergiversada en muchos aspectos por unos y otros.

### *El fin del régimen conservador para el país y del tiempo de las certezas para La Nación*

La posición de *La Nación* frente al comienzo de la presidencia de Roberto M. Ortiz fue bastante similar a la que había planteado, casi tres decenios antes, con respecto a Roque Sáenz Peña. Esperaba, y urgía, que el nuevo mandatario cumpliera su promesa de sanear los procedimientos electorales. A pesar de su origen irregular, si Ortiz realizaba esa tarea, entendía el diario, entraría en la historia de las instituciones nacionales como un restaurador de la democracia. En ese sentido, señalaba que la democracia no es un mero conjunto de ideas, sino un sistema de prácticas, de las cuales las electorales son fundamentales. Con términos precisos el matutino afirmaba al día siguiente de la investidura de Ortiz que de su primer discurso se podía creer que el presidente estaba dispuesto "a observar primordialmente fidelidad a los instrumentos legales que aseguran la libertad de sufragio, sin cuya virtud nada es real en una democracia"<sup>44</sup>. Un par de semanas después, con motivo de la realización de elecciones para

renovar parcialmente la Cámara de Diputados, el análisis del diario consideró que llegaban las pruebas liminares para la nueva administración. Recordaba los tiempos anteriores a 1912, cuando las irregularidades eran menores que las contemporáneas. La compra de votos de otrora implicaba a menos sujetos y, en cambio, las transgresiones de la década del 30 habían tenido un carácter mucho más global y generalizado. En esas primeras elecciones bajo Ortiz consideraba imprescindible que el gobierno impusiera un cambio sustancial; "si eso no sucediere, sería forzoso convenir en que, como decíamos en nuestros últimos comentarios, el fraude ha echado profundas raíces. De esa manera se habría cubierto una nueva etapa en la marcha hacia la completa decadencia de las instituciones"<sup>45</sup>.

Posiblemente, ni al diario ni a ningún observador de la época haya sorprendido la repetición de usos fraudulentos en esa primera elección bajo Ortiz. De todos modos, su reacción editorial fue inmediata y condenó no sólo las distorsiones menores, sino la persistencia del voto a la vista estimulado por el ejemplo de altos funcionarios que obligaban a sus empleados a sufragar de igual manera. Como un extremo casi patológico, citaba el caso de la Provincia de Buenos Aires, gobernada por Manuel Fresco, donde los radicales se habían abstenido de concurrir a los comicios por falta de garantías, y en Bahía Blanca, único distrito en que se presentaron, el fraude había reinado de la peor manera. De prolongarse ese estado de cosas, decía, se infligiría al país un mal incalculable, y censuraba: "Mostrar continuamente el espectáculo de maniobras destinadas a burlar los derechos del electorado es trabajar por el quebrantamiento de los conceptos morales"<sup>46</sup>. Esos principios son necesarios para todos los pueblos, decía, y el argentino no es una excepción.

Así como el caso de la Provincia de Buenos Aires le servía al diario para revelar las peores modalidades de violación a la voluntad de la ciudadanía, tomaba el ejemplo de la Capital Federal como muestra de la posibilidad de un comportamiento electoral acorde con las leyes y procedimientos correctos. Entendía la normalidad en el distrito metropolitano como un indicador de que ninguna causa misteriosa o ineludible impedía al país vivir en democracia. En la Capital Federal se había respetado la Ley Sáenz Peña; los votantes habían concurrido en un porcentaje muy elevado y habían expresado libremente sus preferencias; todo eso constituía, según la reflexión del matutino, un aliento "para los que tienen fe en la democracia y comprenden que tarde o temprano llegaremos al nivel de cultura y a la honestidad suficiente en los gobiernos como para que en el resto del país las

elecciones revistan la seriedad y la pureza con que se caracterizaron nuevamente ayer en Buenos Aires<sup>47</sup>. Pero la preocupación del diario por el futuro de la democracia no se agotaba en las críticas a los manejos electorales. Hacía falta, también, que se perfeccionaran los partidos. En la comparación entre los grandes partidos políticos nacionales, según *La Nación*, salía ganando "el radicalismo, en cuanto puede presentar un respeto más constante de ciertas reglas democráticas, en la mayor consulta a las masas de sus partidarios y en la más ardiente defensa de la legalidad en el sufragio"<sup>48</sup>. En cuanto a los conservadores, señalaba que con frecuencia caían exactamente en las prácticas opuestas a las elogiadas en el caso de los radicales. Por otra parte, consideraba que la permanente discusión de la problemática electoral impedía llevar adelante grandes debates políticos, al limitar las confrontaciones doctrinarias y el consiguiente desarrollo intelectual de los partidos. Como ejemplo auspicioso, el matutino traía el caso del Partido Socialista, cuyos esfuerzos por comprender la realidad nacional debían, a su juicio, ser imitados por los restantes partidos.

En 1939 el presidente Ortiz llevó adelante varias iniciativas para tratar de cumplir sus promesas de sanear las prácticas electorales. A comienzos de dicho año unas elecciones fraudulentas realizadas en San Juan motivaron la protesta del diario. En su opinión, los gobiernos provinciales se amparaban en el federalismo para mantener una situación que las autoridades nacionales no debían tolerar. Si los mandatarios de provincia sancionaban leyes de alcance local con el objeto de distorsionar la voluntad de la ciudadanía, el gobierno nacional debía detener esas iniciativas. Recordaba el caso de La Rioja, que sancionó "una ley por la cual se hizo optativo el modo de votar (...) el elector podía sufragar públicamente en la mesa o secretamente en el cuarto oscuro"<sup>49</sup>. El diario elogiaba a Ortiz por pedir al gobernador de La Rioja que volviera a las normas del voto secreto. Reiteradamente apoyó las medidas de Ortiz tendientes a cambiar el curso de los acontecimientos y reencarrilar al país en la senda de la democracia. En tanto el presidente se mostraba decidido a cambiar la situación, reforzaba los elogios a su política y le aconsejaba no ceder a las presiones de muchos de sus correligionarios y aliados; contaba, le decía, con el apoyo de la gran mayoría de la opinión pública. La anulación de las elecciones fraudulentas de San Juan fue tomada como una prueba fehaciente de la voluntad presidencial de sanear la lucha política. Pocos días antes de que Ortiz adoptara esa medida, el editorial del diario sentenciaba que si el gobierno aceptaba lo sucedido en San Juan "las instituciones de la

República irán de nuevo a la deriva, como un barco abandonado que se va desmantelando en cada temporal y desvencijando en cada escollo, con una tripulación para la cual ya no hay ley, ni reglas, ni norte, ni esperanza"<sup>50</sup>. Por eso dio su total apoyo a la anulación del comicio, la consideró acertada y afirmó que contaba con la simpatía de la gran mayoría de la población. Al finalizar 1939 se acentuó el distanciamiento entre Ortiz y los políticos conservadores cuando aquél pidió la anulación de elecciones fraudulentas realizadas en Catamarca, de donde era nativo el vicepresidente Ramón S. Castillo quien, a su vez, se declaró solidario con las autoridades provinciales cuestionadas. Enfrentado a los conservadores de la Concordancia, el presidente conservaba el apoyo de los radicales antipersonalistas que participaban en la coalición gubernamental. El problema catamarqueño, saldado con la intervención federal, llevó a una situación de crisis mucho mayor que las precedentes en el seno del conservadorismo: la decisión democratizadora del primer magistrado pareció haber alcanzado un punto sin retorno.

Un paso más en esa dirección se dio frente a las elecciones de febrero de 1940 en la Provincia de Buenos Aires, donde mediante el fraude el gobernador Fresco quiso imponer como sucesor a Alberto Barceló, quien había sido intendente de Avellaneda y cuyo nombre se hallaba asociado a las más variadas formas de corrupción de las prácticas cívicas. Aun antes de que Ortiz decidiera intervenir la provincia, *La Nación* se encargó de reclamar esa medida: cuando "se presenta en la historia electoral la oportunidad de poner en evidencia la necesidad de regularizar los procedimientos de los comicios el deber de retornar a la normalidad es recordado con frecuencia, repitiéndose hasta en las conversaciones sociales que el país no puede vivir constantemente bajo el imperio del fraude"<sup>51</sup>. El matutino llamaba a las autoridades nacionales a "echar por la borda" los intereses creados que buscaban justificar la tergiversación de las opciones de la ciudadanía. Cuando el Poder Ejecutivo Nacional declaró intervenida la Provincia de Buenos Aires, el análisis editorial no escatimó elogios a la decisión presidencial. Con referencia a los políticos conservadores, que habían hecho del fraude un estilo permanente, destacaba que "el apego a las posiciones públicas los hizo impermeables a la realidad, es decir, a la evidencia de que el sistema de gobierno se convertía en una ficción, desde que se reemplazaba la voluntad popular con la prepotencia de los mandatarios y círculos afines"<sup>52</sup>. El diario invitaba a retornar a los grandes valores, propios de los tiempos de Mitre, que parecían a punto de perderse, decía, "debido a que el sacrificio por el bien público de

aquella época se ha sustituido por la concupiscencia del poder"<sup>53</sup>. Con la intención de profundizar en el tema del fraude, pero sacándolo ya de las causas más inmediatas, un par de días más tarde retomaba esa cuestión y sostenía que el retroceso de la vida institucional se había iniciado durante el segundo gobierno de Yrigoyen y se generalizó luego, de 1931 en adelante. Desde esa perspectiva afirmaba: "En el origen de los males que el país viene soportando ha entrado por mucho el mal uso que las mayorías hicieron de la libertad, y la falta de capacidad que demostraron para reaccionar contra los efectos de su propia equivocación"<sup>54</sup>. De esa apreciación sacaba como conclusión, y consejo, la necesidad de que cada ciudadano tuviera presente esa experiencia en momentos en que muchos indicadores parecían anunciar el retorno al imperio de la legalidad. Posiblemente buscando contribuir a esa normalización de las prácticas electorales, el diario se hizo aún más perseverante en la denuncia de sus transgresiones. Para ello no le faltaron motivos; así, luego de unas elecciones complementarias realizadas en la provincia de Salta, recogió editorialmente la denuncia, entre otras, de que un comisario de policía llevó ocho ciudadanos atados a un comité conservador<sup>55</sup>.

En un contexto global signado por el optimismo producido por la decisión presidencial de continuar con su cruzada de purificación de las prácticas electorales, los análisis del diario seguían con atención las transformaciones del partido radical, sin duda el principal beneficiario de los cambios que se estaban realizando. La figura y actuación de Alvear eran elogiadas con frecuencia. Comentando un discurso pronunciado por dicho jefe radical en la Cámara de Comercio Británico, decía que sus palabras habían impresionado "no sólo por la importancia de sus declaraciones, sino por la franqueza de su actitud"<sup>56</sup>. Alvear había reiterado en esa oportunidad la necesidad de un pronto retorno a las prácticas democráticas.

Las preocupaciones por los problemas sociales y, en términos generales, por la situación de los sectores más pobres, fue una temática que *La Nación* abordó desde múltiples ángulos en los últimos años de la década del 30. En especial, los efectos de la migración del campo a la ciudad y del desarrollo industrial introducían nuevos temas de reflexión y, también, reavivaban otros ya conocidos. La equidad social, no sólo en las relaciones laborales sino como valor humanitario y meta que debía ser buscada por la sociedad en su conjunto, llevó al diario a incursionar en las más variadas cuestiones. Así, pudo editorializar sobre las misérrimas condiciones habitacionales del servicio doméstico en

los departamentos contruidos para sectores de ingresos altos, donde según el matutino contrastaban los detalles de un lujo superfluo con lo que llamaba las oscuras covachas sin ventilación destinadas al personal de servicio. En esos casos, como en otros similares, se hacía eco de reclamos formulados por la Acción Católica Argentina que, en esa época, se mostraba especialmente inquieta por las condiciones de vida y trabajo de las capas menos favorecidas de la población. Al recoger denuncias de la filial cordobesa de la mencionada entidad sobre el problema de la vivienda obrera, *La Nación* se ocupaba de las afligentes condiciones de alojamiento de buena parte de los trabajadores de esa ciudad mediterránea. Como solución, sugería la pronta acción del Estado mediante el estímulo del ahorro y la máxima participación de los propios interesados para resolver el déficit habitacional <sup>57</sup>.

Los abusos en las relaciones obrero-patronales y la violación flagrante de las leyes vigentes brindaron con frecuencia materia prima para los análisis de *La Nación*. Jornadas de 14 o 16 horas y salarios muy bajos con la obligación impuesta previamente de que el personal adquiriera en la proveeduría de la empresa los artículos de consumo doméstico, temas investigados por el Departamento Provincial de Trabajo de Catamarca; las condiciones a que eran sometidos los obreros de las salinas del norte de Córdoba, o de las caleras de esa misma provincia, le dieron motivo para pedir que se extremaran las inspecciones legales a los establecimientos situados en regiones de acceso difícil, donde "los hombres de trabajo se hallan a merced de los patrones no siempre humanitarios ni respetuosos de las leyes"<sup>58</sup>. Naturalmente, la constatación de abusos no llevaba al diario a generalizar un pésimo concepto sobre los patrones por las prácticas denunciadas. Se trataba de abusos que podían ser subsanados con más control y mayor eficacia de los órganos estatales creados para tal fin.

El tema del rol del Estado en relación con los problemas sociales y económicos encontró en la experiencia norteamericana del New Deal un rico y atractivo ejemplo extranjero que el matutino observaba con interés desde la problemática argentina. Los programas de construcción de vivienda obrera impulsados por el gobierno del presidente Roosevelt debían, en su opinión, tomarse como ejemplo porque, además de solucionar carencias, servían para recuperar y dinamizar el conjunto de la economía<sup>59</sup>. Pero sobre el New Deal llegaba, también, otra versión: las grandes empresas norteamericanas impugnaban el excesivo intervencionismo del Estado en la economía. Como se ha señalado anteriormente, la pregunta sobre los límites de la economía dirigida

no era ajena a la preocupación del matutino. Sobre las objeciones de los empresarios norteamericanos a las medidas de control de prácticas monopólicas tomadas por Roosevelt por la vía de fiscalización de precios, decía que esas disposiciones podían admitirse perfectamente, a pesar de perturbar el libre juego de los factores económicos, en tanto se trataba de casos circunscriptos y tenían carácter de medidas extraordinarias. Homologaba el episodio con la situación en nuestro país, justificaba las iniciativas de economía dirigida, en especial las destinadas a defender los precios agrarios, en función de lo excepcional de esa situación, y subrayaba que la "necesidad nacional es la única consideración que puede justificar la intervención del Estado en los negocios privados"<sup>60</sup>.

En sentido estricto puede afirmarse que el diario pretendía ser ecuaníme cuando planteaba el rol del Estado y no veía un favoritismo injustificado en el apoyo oficial al agro, iniciativa que debía, en su opinión, repercutir positivamente sobre toda la economía. Así, el dirigismo no asumía carácter parcial ni tendencioso y desde esa particular óptica debía coincidir con el interés general. Con similar intención de construir una visión de la sociedad ubicada por encima de los intereses sectoriales, el diario se refería al festejo del 1° de Mayo de 1939 y destacaba que ese día había dejado de ser, como lo había sido en su origen, una fecha "destinada a expresar la protesta de una clase social o las aspiraciones de una tendencia doctrinaria o política, sin haber perdido en realidad su amplio sentido humano"<sup>61</sup>. En defensa del interés general, objetaba a quienes en los actos de ese 1° de Mayo habían reclamado la reducción de la semana de trabajo a 40 horas, medida que, sostenía, acarrearía consecuencias negativas para el desarrollo de la economía. Al mismo tiempo, el diario asumía la defensa de otras demandas sociales que consideraba totalmente justas y fundadas. Tal era el caso de sus reiteradas posiciones a favor de las trabajadoras a domicilio que protestaban contra la situación a que se hallaban sometidas en el sistema de trabajo por pieza. Un indignado editorial recordaba que desde 1918 había comenzado la lucha contra "la explotación inhumana de la mujer que trabaja en su casa y no se halla en condiciones de obtener las ventajas o las mejoras que conquistan los sindicatos que comprenden a los demás oficios"<sup>62</sup>. Esa situación le parecía tanto más grave en cuanto ya había leyes para proteger a esa categoría de trabajadores, sistemáticamente trasgredidas por los empresarios con los recursos más variados, lo que configuraba una injusticia social que el Estado no debía tolerar por más tiempo.

A fines de la década del 30, ante la inminencia de un nuevo conflicto bélico internacional y luego frente a su desencadenamiento, los temas favorables al desarrollo industrial fueron abordados por el diario con renovado interés. Muchas de las problemáticas que desde los años 20 eran tratadas por *La Nación* con preocupación, como la vulnerabilidad argentina en el comercio mundial, se confirmaron al aproximarse la gran conflagración. Las restricciones para nuestras exportaciones agroalimentarias, con la consiguiente escasez de divisas, creaban condiciones propicias para el crecimiento de la actividad manufacturera. El matutino lamentaba el tiempo perdido y recibió con satisfacción algunas medidas tomadas a comienzos de la presidencia de Ortiz para favorecer el desarrollo de la siderurgia. Recordaba que por muchos años desde sus columnas había bregado por la adopción de un papel más activo de los poderes públicos en la promoción de la industria, y sostenía que ya no cabía otra alternativa, ante las dificultades creadas para la colocación de nuestras exportaciones tradicionales por las naciones compradoras, que "defienden su explotación agrícola con altísimas barreras fiscales y fomentan la propia producción con primas, subsidios, cuotas y embargos. La Argentina, que se había desarrollado y engrandecido por la división del trabajo, se ve en la obligación de substituir las manufacturas y herramientas que antes compraba, fabricándolas con los elementos de que dispone el país"<sup>63</sup>. En su opinión, el desarrollo industrial debía servir tanto para satisfacer las necesidades de la población como para asegurar funciones básicas de defensa nacional. Reiteraba la complementación entre las industrias militares y civiles con motivo de las actividades de la Fábrica Militar de Aviones. En la Argentina, decía, era preciso —como pasaba en muchos otros países— propender a la fructífera combinación entre las industrias de defensa estatales y las empresas privadas, lo que permitiría a éstas participar de la técnica de aquéllas, aumentando la existencia de herramientas y maquinarias y acrecentando el número de obreros especializados para que el país en general y la defensa en particular resultaran beneficiados<sup>64</sup>.

La convulsionada situación en que se hallaba el mundo desde 1939 preocupaba a *La Nación* cuando consideraba las consecuencias que el conflicto bélico internacional podía tener para el país. De manera directa, se alarmaba por la existencia de grupos instigados por las potencias fascistas que trataban de hacer propaganda totalitaria y ganar adeptos para su causa. Si bien creía que esos grupos no tenían mayores posibilidades de éxito, aplaudía la acción de las autoridades cuando éstas desbarataban

alguna campaña llevada a cabo con ese fin. Tal fue el caso de una serie de procedimientos realizados por la Gendarmería Nacional en Misiones, donde detuvo a algunos individuos de origen alemán que, según el matutino, habían establecido un movimiento tendiente a derrocar a las autoridades nacionales "para que ocupasen su lugar agentes del Reich"<sup>65</sup>. Sin minimizar la significación de esas amenazas, consideraba que las mismas podían tener una reacción beneficiosa y robustecer los sentimientos democráticos de nuestra población. Cabe señalar que así como *La Nación* se inquietaba por la eventual acción local de agentes del nacional-socialismo, la embajada alemana en la Argentina se interrogaba sobre las causas de las dificultades encontradas por su propaganda para acceder a los principales medios de prensa. En los archivos de la Cancillería de Berlín se hallaría al terminar la guerra un informe del embajador von Thermann, dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores alemán a fines de diciembre de 1938, donde decía que *La Nación* había sido "vendido hacia pocos años a un sindicato norteamericano, probablemente judío, lo cual explicaría su tendencia filosemita"<sup>66</sup>. Desde esta misma óptica de interpretación racista, von Thermann aludía al poco eco de la acción ideológica de su embajada en otros órganos periodísticos. En el curso del año 1939, el ensayista nacionalista Ramón Doll propuso, en varios folletos analíticos de la situación argentina, una caracterización de *La Nación* similar a la sugerida por el embajador alemán. Doll lamentaba que la Cámara de Diputados no hubiera continuado la investigación parlamentaria sobre la supuesta transferencia de la propiedad del matutino a capitales norteamericanos<sup>67</sup>. Desde 1939, un nuevo diario, *El Pampero*, financiado por la embajada alemana, se encargaba de difundir noticias y comentarios favorables al Eje. Ese novel participante del campo periodístico ejerció un discurso singularmente agresivo contra *La Nación*, al que atacó desde los más diversos ángulos, y descalificó sus opiniones políticas e informaciones por considerarlas sesgadas como resultado de sus sospechadas vinculaciones con los países aliados.

Las iniciativas y declaraciones de la Unión Industrial Argentina a favor del desarrollo fabril eran comentadas editorialmente con simpatía por el diario. Además, Luis Colombo, presidente de la mencionada entidad, publicaba en sus páginas colaboraciones firmadas donde propiciaba la adopción de políticas industrialistas. *La Nación* sintetizaba, en agosto de 1940, su opinión sobre la importancia del sector manufacturero con términos hartamente laudatorios: "Nuestra producción industrial, en la mayor parte de los productos necesarios para la existencia, ha

obtenido triunfos definitivos; muchas de nuestras manufacturas se han destacado entre las superiores del mundo entero y en abundantes materias han comenzado a poner de relieve una excelencia indisputable<sup>68</sup>. Estas opiniones sobre el nivel y calidad alcanzados por la industria nacional, llevaban al diario a alentar a los empresarios del sector para que buscaran las mejores formas de armonizar sus intereses y estudiaran las vías para continuar el proceso de crecimiento de sus actividades.

*La Nación*, como hemos visto, no escatimaba objeciones y recelos sobre el desempeño de las empresas extranjeras concesionarias de servicios públicos. En general, formulaba las críticas desde la perspectiva de la defensa de los intereses del usuario. A comienzos de la década del 40 el diario emitió reiteradamente juicios extremadamente negativos sobre la Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, sociedad anónima controlada por capitales ingleses que, como consecuencia del acuerdo Roca-Runciman, gozaba de una posición monopólica en el transporte de pasajeros de la Capital Federal y tenía garantizado un margen de ganancia. El diario, que había recibido con muy favorables expectativas los aspectos principales de esos acuerdos comerciales internacionales era, años después, inclemente con la Corporación, que consideraba no había estado a la altura de sus compromisos. Ante una inminente demanda de aumento de las tarifas tranviarias, justificada por la Corporación en las pérdidas que le ocasionaba ese medio de transporte, sostenía que el incremento implicaba "la extracción de otros 50 millones de pesos a la masa de empleados y obreros (es decir, los usuarios) (que) era absolutamente inaceptable y prácticamente sería desastroso"<sup>69</sup>. La decisión de crear la Corporación no había estado motivada, según el análisis del diario, en el deseo de ayudar a empresas en desgracia ni, tampoco, de asegurar ganancias artificiosas. Además, agregaba, era notorio el empeoramiento de los servicios y la escasez de tranvías aun cuando aumentaba el número de pasajeros. Como los problemas y los malos servicios de la Corporación no se solucionaban, el matutino volvió sobre el tema en varias oportunidades y a mediados de 1941 enumeraba, de nuevo, sus falencias: "Los pasajeros deben viajar en condiciones que nunca se hubieran imaginado por el hacinamiento, por la suciedad"<sup>70</sup>. No sólo había fracasado la empresa sino, además, la ley que había creado esa situación en el sistema de transporte metropolitano.

Desde julio de 1940 el presidente Ortiz había delegado temporariamente su cargo, por hallarse enfermo, en el vicepresidente Castillo. Fue entonces notorio que el proceso de democratización

impulsado por el primer magistrado corría el riesgo de frustrarse. La adhesión de *La Nación* a Ortiz volvió a manifestarse cuando éste, todavía de licencia, presentó su renuncia por considerar que su investidura había sido afectada por las investigaciones parlamentarias realizadas a propósito del llamado negociado de las tierras de El Palomar. Colocándose en actor, el diario afirmaba que había sostenido, y seguía sosteniendo, que era imprescindible fijar todas las responsabilidades sobre ese escándalo, pero de ningún modo el primer magistrado podía sentirse tocado por los resultados de la investigación para dilucidarlo. Consideraba que la Asamblea Legislativa debía rechazar su renuncia<sup>71</sup>, decisión que efectivamente aquélla adoptó.

A fines de 1940, para elaborar una estrategia abarcadora del conjunto de los problemas que afrontaba la economía argentina, el ministro de Hacienda, Federico Pinedo, preparó el denominado Plan de Reactivación Económica. El Plan diagnosticaba la situación en términos bastante sombríos, fundamentalmente en virtud de la imposibilidad de vender los saldos agropecuarios exportables a los habituales clientes europeos. Como eventual solución proponía la compra por el Estado de los excedentes a precios que cubrieran los costos de producción; el proyecto estimaba necesario implementar un plan de construcción de viviendas modestas por el alto efecto multiplicador de esas inversiones, y proponía impulsar el desarrollo industrial mediante el estímulo de la demanda interna y la adjudicación de líneas de crédito orientadas al crecimiento del sector. Si bien muchos de los temas y preocupaciones incluidos en el Plan coincidían plenamente con planteos anteriores de *La Nación*, la iniciativa fue analizada por el diario con inocultable recelo. Aun antes de que el proyecto fuera discutido por el Congreso, objetó dos aspectos básicos del mismo. Por una parte consideró que en el Plan se pedía la cooperación y el esfuerzo de la sociedad, pero reclamó, para que esto fuera justo, que el Estado pusiera por lo menos igual voluntad para sacrificar también lo superfluo de sus gastos. Esta objeción provenía, fundamentalmente, de la constatación de la falta de inquietudes en el Plan por los desequilibrios que podía provocar en las finanzas públicas su implementación por el crecimiento que ocasionaría en los gastos del Estado. La segunda objeción era más puntual, y revelaba una preocupación sectorial bien definida. Citaba textualmente el párrafo del Plan referente a los arrendamientos excesivos, y juzgaba impropio que se reputaran "elevados los niveles de la renta territorial cuando bien sabemos que ella depende directamente de los rendimientos económicos de la producción, en un paralelismo permanente que

no se puede abrogar, y cuando es notorio que ingentes recursos del Estado extraen de esa fuente los dineros públicos”<sup>72</sup>. Dos días más tarde, editorializaba que el Plan intentaba “crear un poderoso organismo para utilizar el crédito, para provocar la actividad, para incitar la producción y el consumo (y que era) (...) necesario estudiar muy meditamente toda la estructura del proyecto”<sup>73</sup>. Si muchas veces el matutino había reflexionado sobre los límites de la intervención estatal en la economía, todo indicaba que el Plan Pinedo de 1940 franqueaba, en su opinión, un umbral para llevar al dirigismo más allá de lo aconsejable.

La preocupación por lo que denominaba la excesiva intervención del Estado apareció cada vez más frecuentemente en los análisis de *La Nación*, en muchos casos a partir de las quejas de entidades de representación sectorial. El gobierno, según el diario, desanimaba con planillas, controles e injustificadas injerencias a quienes querían dedicarse a nuevas actividades económicas y “otros, al verse trabados en su labor, dudan si la continuarán bajo tales condiciones”<sup>74</sup>. Pero atento a tratar de encontrar una explicación de los fenómenos que criticaba, el análisis incursionaba en la teoría de las organizaciones para concluir que en el seno de los aparatos estatales se estaba produciendo una autonomización burocrática con sus propios intereses creados, que convertían en intocables los mecanismos que ponía en pie. Estas prevenciones con respecto a la acción del Estado no significaban que *La Nación* postulara su alejamiento de todo tipo de actividad económica. Así, por ejemplo, a mediados de 1941 instaba a las autoridades a crear una marina mercante que obviamente en principio no podía ser sino estatal<sup>75</sup>. Pero esa posición en materia de transporte marítimo se combinaba con el pedido de que el Estado aliviara su presencia en otras áreas de actividad para evitar, decía, “el riesgo de ver acrecentar el despotismo burocrático, que en la actualidad tiene variadas manifestaciones. Menos juntas, más trabajo administrativo y reducción de las trabas que afectan a los hombres de trabajo es una de las condiciones requeridas por el progreso del país”<sup>76</sup>. Ese delicado equilibrio entre el intervencionismo estatal legítimo y el objetable a los ojos del diario se planteó, también, a partir de una propuesta del gobierno de Castillo de ajustar el valor de las prestaciones de los contratos de arriendo mediante la creación de una comisión arbitral presidida por el ministro de Agricultura e integrada por funcionarios de ese ministerio, delegados de bancos oficiales, representantes de los propietarios y de los productores no propietarios. La Sociedad Rural Argentina elevó su protesta frente a esa iniciativa y el matutino retomó editorialmente la

argumentación de dicha entidad. Se podía aceptar, reflexionaba, que el Estado comprara cosechas para evitar situaciones de crisis; ése era un ejemplo de lo que caracterizaba como una injerencia lícita. Pero ésas eran alternativas de emergencia, muy distintas de aquellas que podían "vulnerar en sus bases los principios directivos de la sociedad, como sucede con el derecho de dominio en el proyecto sobre reajuste de los arrendamientos, censurado, con acierto, por la Sociedad Rural Argentina"<sup>77</sup>. En la misma época en que *La Nación* formulaba sus consideraciones sobre injerencia estatal lícita e ilícita, Arturo Frondizi, por entonces un joven abogado radical cuyos análisis mostraban un neto sesgo materialista, dictaba un curso sobre el régimen jurídico de la economía argentina en el Colegio Libre de Estudios Superiores, y con conceptos claros abordaba el tema de la "economía dirigida" diciendo que era siempre preciso preguntarse "quién" dirige y en beneficio "de quién". Para Frondizi, el Estado intervencionista había aparecido para salvar determinados intereses empresarios aun cuando éstos pudieran objetar en parte las políticas dirigistas<sup>78</sup>. Según el mencionado autor, se debía modificar la acción intervencionista del aparato estatal y hacer que sirviera al conjunto de los intereses de la sociedad.

El intervencionismo económico del Estado siguió provocando discusiones en los distintos sectores políticos y empresariales. En 1941 se propuso en el Congreso constituir una comisión para analizar las consecuencias negativas para el comercio derivadas del control de cambios. El diario comentó la iniciativa con una breve reseña histórica de las causas que habían creado la necesidad de ese mecanismo exactamente una década antes, y destacó la urgencia de replantear esa forma de regulación cambiaria<sup>79</sup>. Pocas semanas después, abordó con un sentido igualmente crítico el problema de las juntas reguladoras. La Cámara de Diputados había votado la supresión del ente regulador de vinos. El matutino estimó muy correcta esa iniciativa ya que, según sostenía, la experiencia de siete años de funcionamiento no había confirmado las optimistas previsiones enunciadas al proceder a su creación. Más aún, veía cómo el organismo iba en camino de convertirse en una de las tantas dependencias administrativas con presupuesto abultado y acción escasa; de esa experiencia entendía que podía sacarse una conclusión de carácter general: "La intervención del Estado en la industria y el comercio tiene casi siempre un resultado semejante al señalado en este caso, y muchas veces constituye un factor de perturbación y desorganización"<sup>80</sup>. Estas posiciones se profundizarían en el curso del año siguiente, último completo de gobierno del conservadurismo.

En septiembre de 1942 el presidente Castillo envió un proyecto al Congreso para crear nuevos impuestos. Esa iniciativa suscitó la oposición de las principales entidades empresarias, que convocaron a la realización de un acto público para expresar su rechazo. El denominado Comité de Defensa Económica, integrado por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina y la Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción, buscaba por ese medio impedir la aprobación de los nuevos impuestos. *La Nación* expresó su simpatía por la movilización empresaria y consideró que se estaba produciendo una separación profunda entre lo que llamaba el país oficial, o sea el Estado, y el país económico. Con la clara intención de estimular la protesta empresaria, decía que "desde hace mucho tiempo no ha habido un movimiento tan vivo y general como el que se advierte frente a los proyectos financieros y la política de injerencia en las actividades privadas"<sup>81</sup>. El análisis advertía que el malestar y la disconformidad no podían atribuirse a agitaciones que escondieran un origen político o la defensa de intereses personales. En la reflexión sobre los resultados y las exposiciones del acto empresario, *La Nación* hizo girar el aspecto central de su análisis en la autonomía que había ganado el Estado frente a la sociedad. Interpretaba lo que entendía era el pensamiento de los empresarios al afirmar que "las fuerzas productoras se sienten indefensas en el seno de los poderes del Estado"<sup>82</sup>. Esta distancia entre el aparato estatal y la sociedad se traducían, decía, en un modo de gobernar, en el cual "todas las cuestiones que se refieren a las actividades económicas suelen ser resueltas por la imaginación burocrática o parlamentaria"<sup>83</sup>. En su opinión, se equivocaban quienes gobernaban si creían que a partir de los datos e informaciones que manejaban podían tomar decisiones sin atender las demandas de los empresarios. Tocando lo que había sido un argumento de las autoridades para defender sus propuestas de política fiscal, el matutino argumentaba que si alguna vez habían existido subsidios para algún sector de la producción, tal el caso de la ganadería, los recursos para pagarlos no habían sido generados por el Estado sino por el mismo sector agropecuario. Era pues, sentenciaba, una devolución. En términos aún más cortantes afirmaba que era "absurdo este nuevo derecho de cobrarse los supuestos beneficios distribuidos, que han suscitado los doctrinarios fiscales, aparte de que en los tales beneficios incluyen los errores y los excesos de la injerencia"<sup>84</sup>. El análisis finalizaba diciendo que los productores querían ser tenidos en cuenta para consultas, colaboración y coordinación, es decir que hubiera menos autonomía del Estado.

El mismo día en que *La Nación* formulaba sus coincidencias con el Comité de Defensa Económica, esta entidad publicaba una solicitada en la que, entre otras consideraciones, sostenía que uno de los grandes problemas que afectaban al país era el aumento del número de empleados de la administración central. En seis años —de 1935 a 1941— el crecimiento burocrático había sido del 27%, en tanto que en ese período el aumento de la población había sido del 9 %<sup>85</sup>. La protesta empresaria, al menos en cuanto al problema puntual en discusión, resultó efectiva. En el Congreso se decidió analizar en profundidad y con más tiempo el proyecto impositivo enviado por el gobierno. El diario, por su parte, vio bien esa postergación, y recordó a los legisladores que las reformas propuestas habían sido rechazadas unánimemente por la opinión pública. Con más impuestos, sostenía, se desestimulaban las inversiones y el trabajo, se quitaba la atracción por los negocios, a la larga disminuían las recaudaciones fiscales y se dañaba toda la economía<sup>86</sup>. Desde esa óptica, el matutino rechazó con indignación los propósitos del ministro de Hacienda Carlos Acevedo, quien había criticado a las entidades empresarias. Eso era, argumentó, contribuir a que se profundizara la distancia del Estado con la sociedad. Le reprochaba al ministro haber afirmado que los empresarios movilizados tenían el entendimiento oscurecido por el egoísmo y la codicia. El Comité de Defensa Económica también replicó lo que estimaba inmerecidos agravios, pero al mismo tiempo reiteró todos sus ataques contra el Estado que aplastaba a la actividad privada, y la proliferación burocrática que creaba nuevas reparticiones para desempeñar funciones que podían ser atendidas por los mecanismos administrativos ya existentes<sup>87</sup>.

En el transcurso de ese conflictivo año 1942, los principales dirigentes de las grandes corporaciones empresarias expresaron con acres y combativos términos su rechazo a las políticas estatales intervencionistas. José María Bustillo, presidente de la Sociedad Rural Argentina entre 1942 y 1946, sostuvo que la "evolución demagógica ha concluido con la oligarquía argentina. La clase gobernante ha sido reemplazada por la clase burocrática con simuladas pretensiones técnicas y sociales"<sup>88</sup>. En una presentación al Congreso realizada conjuntamente por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina y la Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción, integrantes del Comité de Defensa Económica, se argumentaba contra las políticas fiscales propuestas por el Poder Ejecutivo, porque no se podía "permitir el cambio total de la vida de un país, en el que la burocracia

sea la única que se expanda constituyéndose en su amo absoluto<sup>89</sup>. Que nada era simple en el año 1942 lo revela, entre otros hechos, que la posición contraria a la expansión de la burocracia estatal planteada por las entidades empresarias fuese interpretada por Victorio Codovilla, secretario general del Partido Comunista, como un auspicioso indicador del progresismo político e ideológico de esos sectores de la burguesía. Codovilla, quien paradójicamente reunía todas las características de lo que *La Nación* podía definir como un agente del "comunismo internacional", coincidía, sin embargo, con el diario y con las corporaciones patronales en criticar al gobierno de Castillo por su política de ampliación de la esfera de intervención del Estado y de aumento del empleo público. Para el dirigente comunista, el gobierno estaba "empleando sumas gigantescas para aumentar la burocracia con el fin de sobornar o influenciar a ciertos sectores de la población y conseguir puntos de apoyo políticos para mantenerse en el poder y seguir realizando su política antinacional"<sup>90</sup>. Dada su posición política e ideológica, Codovilla no pudo dejar de preguntarse por las razones que pudieran explicar el enfrentamiento entre el gobierno de Castillo, al que caracterizaba como fascista, y los principales sectores empresarios. En su interpretación, la gran burguesía había apoyado la creación del Estado intervencionista y se había beneficiado con él pero, llegado a un punto, había percibido que la política del gobierno llevaba al país a un desastre y se disponía a resistir sus orientaciones, lo que objetivamente la hacía coincidir con las luchas de los sectores populares<sup>91</sup>.

A comienzos de 1941 Federido Pinedo había tomado una serie de iniciativas tendientes a concretar un acercamiento entre el gobierno y la Unión Cívica Radical. A tal fin, Pinedo se reunió con Alvear, a quien encontró bien predispuesto para entablar conversaciones con miras a un acuerdo que incluía la normalización de los procedimientos electorales<sup>92</sup>. *La Nación* reveló su satisfacción, que extendía también a la opinión pública, ante la posibilidad de que se concretara lo que algunos denominaban una "tregua política". El diario decía que era necesario concretar esa propuesta y cerrar definitivamente el ciclo que por responsabilidad de los radicales se había abierto en 1930 y que los conservadores aprovecharon luego para burlar la voluntad del electorado<sup>93</sup>. Ni la propuesta de Pinedo, ni la exhortación del matutino, tuvieron mayores ecos en el seno del conservadorismo, cuyos principales dirigentes se resistieron a conciliar con los radicales al precio de moralizar las prácticas electorales. Como consecuencia de ese fracaso, se precipitó la renuncia de Pinedo, quien,

además, disentía en varios aspectos con la política seguida por el vicepresidente Castillo en ejercicio del Poder Ejecutivo.

*La Nación* volvió a coincidir con Ortiz cuando éste, que seguía con licencia por enfermedad, publicó un manifiesto para convocar a la pacificación política y a poner fin a las prácticas violatorias de las regulaciones electorales democráticas. Era notorio que la declaración de Ortiz apuntaba a criticar al vicepresidente Castillo. El diario comentaba la gravedad de esa toma pública de posición y su significado en cuanto a crisis gubernativa, pero al mismo tiempo relativizaba su importancia, ya que, a su entender, no estaba lejos el momento en que Ortiz reasumiera la presidencia y se terminara la pasividad ante el fraude que era una característica de la gestión de Castillo<sup>94</sup>. Como indicio de la complejidad de la situación, y en contradicción con ese optimismo, el mismo día que se publicaba el mencionado editorial, el Senado resolvió crear una comisión con el objeto de estudiar el caso institucional que planteaba el estado de salud del presidente de la República. Para quienes simpatizaban con Ortiz, las intenciones del Senado iban mucho más allá de una simple preocupación por lo institucional y buscaban su alejamiento definitivo de la primera magistratura. El diario señaló que no dudaba de que los senadores integrantes de la comisión actuarían con imparcialidad y su dictamen sería pertinente pero, agregaba, de todas maneras el problema podía resolverse fácilmente si Ortiz manifestaba cuándo entendía que podía reasumir la presidencia<sup>95</sup>. Más allá de las expectativas que hubieran depositado amigos y adversarios de Ortiz en esa comisión senatorial, ésta no llegó a ninguna conclusión que alterara los datos básicos de la situación. El vicepresidente Castillo continuó en el ejercicio de la primera magistratura.

En el curso de 1941 trascendieron a la opinión pública diversas manifestaciones de indisciplina militar. Los sectores democráticos de la sociedad veían con preocupación esos sucesos y sospechaban que se trataba del resultado de la acción de propagandistas de ideas nacional-socialistas o de agentes germanos. La comisión parlamentaria creada para investigar presuntas actividades antiargentinas se fijó, entre otros objetivos, estudiar las causas del malestar castrense. *La Nación* expresó en varias oportunidades su opinión sobre el tema militar, y pidió a las autoridades nacionales que actuaran rápido y con rigor para neutralizar posibles conspiraciones. Los generales Juan Bautista Molina y Benjamín Menéndez aparecieron para algunos observadores de la escena militar como las cabezas visibles de un eventual golpe de Estado o, al menos, de planteos institucionales

para condicionar al gobierno. Una declaración atribuida a "un grupo de oficiales jóvenes" motivó la reacción editorial del matutino. Allí decía que en caso de poder demostrarse la autenticidad del documento, se debía hallar y castigar a los culpables y "terminar de una vez por todas con la tolerancia que ha favorecido hasta hoy las sombrías actividades de los que conspiran contra la estabilidad de nuestro régimen institucional y aspiran a uncirnos al carro de eventuales dominadores del mundo"<sup>96</sup>. Para el diario, si alguien estaba tratando de quebrar la disciplina militar debía recibir sanciones muy severas para evitar la desmoralización del conjunto de la oficialidad. *El Pampero*, que simpatizaba con los militares politizados, no dejaba de llamar la atención acerca del tratamiento dado por *La Nación* al tema. El matutino fundado por Mitre y *La Prensa* eran vistos por el periódico germanófilo como embarcados en una campaña contra las fuerzas armadas "ya que ellas son, hoy por hoy, el único baluarte opuesto a los intentos de avasallamiento, especialmente a los organizados por Estados Unidos"<sup>97</sup>. Coherente con esa perspectiva, *El Pampero* denunciaba a *La Nación* por tergiversar las informaciones sobre la delicada cuestión militar y, también, las provenientes de los frentes bélicos con el propósito de perjudicar la imagen del Eje y favorecer a los aliados.

El presidente Ortiz renunció a mediados de 1942. Al analizar esa decisión, *La Nación* expresó el profundo pesar que la misma le causaba. La reflexión editorial cubría de elogios al dimitente, además de señalar las virtudes de su proyecto e invocar el necesario protagonismo del pueblo, quien "continuará combatiendo por su ideal, sin el cual la democracia es una ficción"<sup>98</sup>. El alejamiento definitivo de Ortiz marcaba el cierre de una etapa política y, evidentemente, el matutino percibía con claridad la incertidumbre propia de la fase que se iniciaba.

Como desconfiaba de que un eventual golpe militar pusiera fin al gobierno conservador, el nacionalismo de derecha creyó conveniente organizarse para presentar una opción propia en las ya cercanas elecciones presidenciales. Con ese fin, fue convocado el denominado Congreso de la Recuperación Nacional, cuyas sesiones se realizaron en la Capital Federal, durante la tercera semana de diciembre de 1942. El evento fue coordinado por una Junta Organizadora. Es interesante señalar que si bien las relaciones del nacionalismo de derecha con *La Nación* distaban de ser cordiales y fluidas, ello no significa que no existieran hombres en el diario con dicha inclinación política. El presidente de la Junta Organizadora del congreso nacionalista fue Alberto Caprile (hijo), bisnieto del general Mitre, miembro de una de las familias pro-

pietarias del matutino y representante de *La Nación* en Nueva York desde fines de 1936. El discurso de Caprile en la sesión inaugural del Congreso anunciaba el fin de la época del liberalismo en el mundo y en la Argentina y convocaba a la necesaria organización política del nacionalismo, único actor capaz, en su opinión, de salvar al país. Comparativamente, su alocución fue más moderada que la de otros participantes. De su discurso estaban ausentes, por razones obvias, las referencias negativas a la gran prensa, blanco habitual del sector allí reunido<sup>99</sup>. La atracción por las tantas veces denostadas urnas pareció ganar a los nacionalistas, dispuestos, al menos en la coyuntura, a reconciliarse con la aritmética del sufragio. Marcelo Sánchez Sorondo, participante de la reunión, escribió en mayo de 1943 un artículo sobre la experiencia de la Action Française, el grupo de Charles Maurras que tanto había inspirado al nacionalismo local. En su opinión, cabía evitar el error de Maurras, quien había sabido conquistar mentalidades pero no la política francesa. Sánchez Sorondo sacaba una conclusión: "Al talento de Maurras le faltó descubrir la multitud, que luego, desde su balcón, hallaba el genio de Mussolini"<sup>100</sup>. El nacionalismo argentino debía, según razonaba el entonces joven propagandista, perder su inocencia y meterse en política. A quienes así pensaban, los hechos se encargarían de demostrarles que era más fácil abandonar el candor que encontrar multitudes propias bajo los balcones.

En 1943 debían realizarse comicios presidenciales. Múltiples signos auguraban el predominio de las prácticas fraudulentas. Con igual o mayor dramaticidad que en oportunidades anteriores *La Nación* llamó a la reflexión a las autoridades acerca del peligro que entrañaba continuar con la violación de los principios democráticos en materia electoral. Había que terminar con el fraude, decía, ya que "la salvación del país, la preservación de sus instituciones libres exigen el reemplazo de aquellos procedimientos"<sup>101</sup>. Toda esa prédica parecía inútil: los conservadores no revelaban el menor interés por abandonar los métodos que les aseguraban la continuidad del control de los aparatos estatales. Repetidas en varias oportunidades con matices más o menos similares, el matutino mantuvo sus posiciones y anunció que las consecuencias del fraude en el mediano plazo serían graves. Cuando se aproximó el momento de designar los candidatos presidenciales, el diario se encargó de criticar los procedimientos seguidos por el conservadorismo para postular a Robustiano Patrón Costa "sin haberse reunido la convención que es la autoridad competente para proclamarlo y aun antes que los comités provinciales envíasen su adhesión a la candidatura"<sup>102</sup>. La

situación daba, por cierto, para pesadumbres cuando la política se veía desde la óptica de *La Nación*, que había cifrado expectativas intelectuales y políticas en las posibilidades de éxito del proyecto de saneamiento de las prácticas electorales impulsado por el fallecido presidente Ortiz. De todas maneras, la candidatura de Patrón Costa no llegó a proclamarse: en su camino se cruzó la revolución militar del 4 de junio de 1943.

### La Nación: 1932-1943

*La política y la sociedad argentina se transformaron en múltiples aspectos en el período comprendido entre 1932 y 1943. Federico Pinedo caracterizó el régimen político de esos años como una "semidemocracia". Al reflexionar, tiempo más tarde, sobre su paso por las funciones gubernamentales, Pinedo lamentó no haber desarticulado el intervencionismo estatal en la economía, en cuya creación había colaborado de modo muy importante<sup>103</sup>. La "semidemocracia", forma amable de aludir al fraude, y el Estado intervencionista, supusieron una convergencia entre los políticos conservadores y los sectores económicamente predominantes que se prolongó hasta algunos años antes de 1943. Los conflictos entre el gobierno conservador y los sectores empresarios revelaron que el sentido del intervencionismo económico no era el mismo para ambos. Para los dirigentes del conservadorismo, expandir la esfera de intervención del Estado era un recurso que aseguraba el crecimiento de su poder político y burocrático. En cambio, para los sectores empresarios la acción estatal debía servir como instrumento de preservación y ampliación de sus beneficios económicos. En la fase inicial del intervencionismo estatal los respectivos proyectos no entraron en contradicción; luego los intereses se bifurcaron. Los dirigentes de los partidos conservadores cobraron una alta autonomía con respecto a la sociedad en tanto podían retener el poder mediante mecanismos fraudulentos, y en ese proceso se distanciaron también de los principales sectores propietarios y de sus corporaciones. El fraude como modo de selección de gobernantes contribuyó al resquebrajamiento de la unidad de la clase dominante. Las polémicas a propósito de los roles del Estado introdujeron efectos de deslegitimación de la fórmula política establecida a partir de 1930. La propuesta de democratización impulsada por el presidente Ortiz puso en evidencia que tampoco en la coalición gobernante las coincidencias eran completas. Al prevalecer las tendencias identificadas con Castillo aumentó el aislamiento de los partidos conservadores con respecto a la sociedad.*

La Nación no escatimó críticas a las prácticas electorales vigentes durante el periodo estudiado. Pero más allá de la dimensión ética, su pensamiento se centró en tratar de explicar que existían buenas condiciones para hacer funcionar un régimen político democrático, donde compitieran libremente conservadores y radicales. El matutino parecía ver con beneplácito el eventual acceso de Alvear a la presidencia. En las discusiones sobre el intervencionismo económico, el diario expresó ideas coincidentes con las entidades corporativas que representaban los principales intereses propietarios. Las críticas a las reglamentaciones estatales innecesarias o excesivas no implicaron, de ninguna manera, un retorno a la ideología liberal, sino una elaboración más compleja sobre el rol de los poderes públicos en la regulación de la economía y de los problemas sociales. También en estos temas existía coincidencia con el radicalismo, que en el curso de los años 30 comenzó a elaborar programas favorables a una moderada intervención del Estado en la economía y a una legislación para mejorar la equidad social y proteger a los sectores de menores recursos. La tradicional perspectiva del diario sobre la necesidad de instancias oficiales para negociar los conflictos laborales, cobró rigurosa actualidad en el segundo lustro de la década del 30 en virtud del aumento de la actividad industrial. El rechazo de la participación de los militares en la política, asociada al riesgo de penetración de la influencia fascista, completaba su apoyo a la reconstrucción del entramado institucional democrático.

La convicción de que el grado de madurez política de la sociedad argentina hacía inaceptable el mantenimiento de prácticas fraudulentas ubicaba a La Nación en una óptica prospectiva anunciadora del fin no lejano de una época. En sus análisis abordó una serie de cuestiones y alternativas para mejorar la calidad de la vida pública y el manejo de los problemas económicos y sociales que, luego de la ruptura de 1943, encontraron conductores y apoyos difícilmente imaginables tiempo atrás. Pero antes de esa fractura, la condena del matutino a las prácticas de los conservadores había contribuido objetivamente a deteriorar las bases del sistema de dominación política. Los grandes empresarios y sus corporaciones aportaban su cuota a ese debilitamiento al criticar el excesivo crecimiento del Estado, que entendían motivado por meras finalidades políticas y burocráticas. El diario se hacía eco de esas objeciones y les daba proyección aún más universal, al atacar la ilegitimidad de origen de las autoridades. Aunque la crisis de la clase dominante se agudizaba, el matutino expresaba su certidumbre sobre la viabilidad de una recomposición democrática que sólo creía obstaculizada por la obcecada decisión de los políti-

cos conservadores de mantenerse a cualquier costo en el control del gobierno. Los acontecimientos tomaron otro rumbo y para La Nación se cerró el tiempo de las certezas.

## NOTAS

<sup>1</sup> *La Nación*, 12-10-1932, pág. 4.

<sup>2</sup> *La Nación*, 16-10-1932, pág. 4.

<sup>3</sup> *La Nación*, 28-4-1933, pág. 6.

<sup>4</sup> *La Nación*, 9-4-1935, pág. 6.

<sup>5</sup> *La Nación*, 20-4-1935, pág. 6.

<sup>6</sup> Sociedad Rural Argentina: *El pool de frigoríficos. Necesidad de la intervención del Estado*, Buenos Aires, 1927.

<sup>7</sup> *La Nación*, 31-12-1935, pág. 6.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *La Nación*, 3-4-1935, pág. 6.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *La Nación*, 12-12-1936, pág. 6.

<sup>12</sup> *La Nación*, 15-4-1935, pág. 4.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *La Nación*, 27-12-1935, pág. 6.

<sup>15</sup> *La Nación*, 26-4-1935, pág. 6.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *La Nación*, 13-4-1935, pág. 6.

<sup>18</sup> *La Nación*, 3-5-1934, pág. 6.

<sup>19</sup> *La Nación*, 22-3-1935, pág. 6.

<sup>20</sup> *La Nación*, 18-5-1934, pág. 8.

<sup>21</sup> *La Nación*, 6-2-1935, pág. 8.

<sup>22</sup> *La Nación*, 20-2-1935, pág. 4.

<sup>23</sup> Si bien el radicalismo había modificado la política abstencionista, no concurrió a esas elecciones.

<sup>24</sup> *La Nación*, 3-4-1935, pág. 6. Las reflexiones sobre el conservadorismo se inscribían en un marco más amplio de demanda de una reorganización y de depuración de todos los partidos políticos, que el diario consideraba como una condición necesaria para asegurar la permanencia del régimen democrático, en una situación mundial en que el mismo era seriamente cuestionado. Señalaba que "en un mundo tan agitado como el actual, en que el régimen democrático ha desaparecido en potencias de primera categoría y es blanco, en los demás, de censuras apoyadas en una copiosa literatura", era necesario que en la Argentina los partidos comprendieran las consecuencias que su mal desempeño podía tener para las instituciones, porque "entre nosotros, la suerte de la democracia depende, en buena parte, de la conducta de los partidos". El diario proponía que los partidos no sólo pusieran fin a la "corrupción" de la vida cívica y administrativa, sino que además procedieran a una "depuración (...) de los malos elementos que los infeccionan (lo que) habría de con-

tribuir a levantar su moral y a desvanecer la impresión absolutamente desfavorable que producen en la opinión". Pero para que el cambio fuese efectivo y para salir de "la tradición de engaños a que nos tiene habituados la política", era imprescindible que los partidos actuaran "definiendo sus posiciones y difundiendo sus programas". *La Nación*, 21-4-1935, pág. 6.

<sup>25</sup> *La Nación*, 16-12-1936, pág. 8. En los debates realizados en el radicalismo a propósito de las concesiones eléctricas se destacó el entonces joven dirigente Arturo Frondizi, quien impugnó la actitud de su partido.

<sup>26</sup> *La Nación*, 24-12-1936, pág. 8.

<sup>27</sup> *La Nación*, 20-11-1937, pág. 6.

<sup>28</sup> *La Nación*, 20-1-1938, pág. 6.

<sup>29</sup> *La Nación*, 22-2-1938, pág. 6.

<sup>30</sup> *La Nación*, 13-2-1938, pág. 6.

<sup>31</sup> *La Nación*, 11-12-1936, pág. 6.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *La Nación*, 3-9-1937, pág. 6.

<sup>34</sup> Fresco consideraba que "el voto secreto es el autofraude más escandaloso que puede concebirse, porque no hay duda de que un ciudadano que públicamente, socialmente, representa una cosa y el día de la elección aprovecha la soledad para votar una idea o un partido contrario a lo que él, personal y socialmente representa, se hace un fraude a sí mismo, se traiciona a sí mismo". Manuel Fresco: *Mi verdad*, s/e, Buenos Aires, 1966, págs. 229-231. Declaraciones periodísticas del 29 de agosto de 1937.

<sup>35</sup> *La Nación*, 6-9-1937, pág. 6.

<sup>36</sup> *La Nación*, 8-9-1937, pág. 6. El diario no consideraba muy lejano el momento de esa hipotética respuesta popular. En su opinión, había una ciudadanía independiente hastiada de los manejos oficiales, con la cual se identificaba, y que constituía "la contrarreacción de las fuerzas morales que se ciernen por encima de los intereses bastardos". *La Nación*, 22-9-1937, pág. 6.

<sup>37</sup> *La Nación*, 13-9-1937, pág. 6.

<sup>38</sup> *La Nación*, 11-10-1937, pág. 6.

<sup>39</sup> Cámara de Diputados: Diario de sesiones 1937. Sesión del 13 de mayo de 1938, págs. 159-163.

<sup>40</sup> *La Nación*, 26-11-1937, pág. 6.

<sup>41</sup> *La Nación*, 4-1-1938, pág. 6.

<sup>42</sup> *La Nación*, 20-2-1938, pág. 10.

<sup>43</sup> *La Nación*, Suplemento Literario, 12-2-1939, pág. 4.

<sup>44</sup> *La Nación*, 21-2-1938, pág. 12.

<sup>45</sup> *La Nación*, 5-3-1938, pág. 6.

<sup>46</sup> *La Nación*, 15-3-1938, pág. 8.

<sup>47</sup> *La Nación*, 28-3-1938, pág. 6.

<sup>48</sup> *La Nación*, 17-6-1938, pág. 6.

<sup>49</sup> *La Nación*, 10-1-1939, pág. 6.

<sup>50</sup> *La Nación*, 11-5-1939, pág. 6.

<sup>51</sup> *La Nación*, 1-3-1940, pág. 6.

- <sup>52</sup> *La Nación*, 8-3-1940, pág. 6.
- <sup>53</sup> *Ibid.*
- <sup>54</sup> *La Nación*, 10-3-1940, pág. 8.
- <sup>55</sup> *La Nación*, 19-3-1940, pág. 6.
- <sup>56</sup> *La Nación*, 13-7-1940, pág. 6.
- <sup>57</sup> *La Nación*, 31-3-1938, pág. 6.
- <sup>58</sup> *La Nación*, 13-4-1938, pág. 6.
- <sup>59</sup> *La Nación*, 22-4-1938, pág. 6.
- <sup>60</sup> *La Nación*, 2-5-1938, pág. 6.
- <sup>61</sup> *La Nación*, 1-5-1939, pág. 6.
- <sup>62</sup> *La Nación*, 15-5-1939, pág. 8.
- <sup>63</sup> *La Nación*, 15-8-1938, pág. 6.
- <sup>64</sup> *La Nación*, 1-6-1939, pág. 6.
- <sup>65</sup> *La Nación*, 17-7-1940, pág. 6.
- <sup>66</sup> Citado por Carlota Jackisch: *El nazismo y los refugiados alemanes en la Argentina, 1933-1945*. Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1988, pág. 235.
- <sup>67</sup> Ramón Doll: *Acercas de una política nacional y otros textos*. Ediciones Ducto, Buenos Aires, 1975, págs. 199 y 207.
- <sup>68</sup> *La Nación*, 21-8-1940, pág. 6.
- <sup>69</sup> *La Nación*, 4-6-1940, pág. 8.
- <sup>70</sup> *La Nación*, 26-6-1941, pág. 8.
- <sup>71</sup> *La Nación*, 23-8-1940, pág. 6.
- <sup>72</sup> *La Nación*, 8-11-1940, pág. 6.
- <sup>73</sup> *La Nación*, 10-11-1940, pág. 8.
- <sup>74</sup> *La Nación*, 30-12-1940, pág. 6.
- <sup>75</sup> *La Nación*, 13-5-1941, pág. 6.
- <sup>76</sup> *La Nación*, 26-5-1941, pág. 6.
- <sup>77</sup> *La Nación*, 15-5-1941, pág. 6.
- <sup>78</sup> Arturo Frondisi: "Regimen jurídico de la economía argentina", en *Cursos y conferencias*, Año X, N.ºs. 7-8-9, octubre-noviembre de 1941, págs. 863-956.
- <sup>79</sup> *La Nación*, 9-10-1941, pág. 6.
- <sup>80</sup> *La Nación*, 2-11-1941, pág. 6.
- <sup>81</sup> *La Nación*, 15-9-1942, pág. 4.
- <sup>82</sup> *La Nación*, 17-9-1942, pág. 4.
- <sup>83</sup> *Ibid.*
- <sup>84</sup> *Ibid.*
- <sup>85</sup> Solicitada del Comité de Defensa Económica, en *La Nación*, 17-9-1942, pág. 5.
- <sup>86</sup> *La Nación*, 23-9-1942, pág. 4.
- <sup>87</sup> Solicitada del Comité de Defensa Económica, en *La Nación*, 2-10-1942, pág. 5.
- <sup>88</sup> José María Bustillo: *Ob. cit.*, pág. 43.
- <sup>89</sup> Reproducido en Adolfo Dorlaín: *La emergencia del Estado y la política en la Economía Argentina de Finanzas y Administración*, Buenos Aires, 1944, pág. 205.
- <sup>90</sup> Victoria Costantini: *La Unión Nacional en la economía*. Economía y discursos, Editorial Problemas, Buenos Aires, 1943, pág. 325.

<sup>91</sup> Ibid., pág. 336. Señalemos que el citado jefe del Partido Comunista siguió con interés la evolución de la línea editorial del matutino. En un artículo aparecido en *La Hora*, en marzo de 1942, Codovilla decía: "La propia *La Nación*, antes del 1° de marzo, publicó un editorial exhortando a los partidos democráticos a realizar su unidad para asegurar su triunfo sobre los partidos de la violencia y el fraude. Es claro que su concepto de la democracia y de la libertad no es el mismo que tienen los demócratas consecuentes; pero el hecho de que estén contra la dictadura fascista y por el triunfo de la democracia en general, crea las condiciones para su participación en la Unidad Nacional". Codovilla: Op. cit., pág. 152.

<sup>92</sup> Federico Pinedo: *En tiempos...*, op. cit., pág. 191.

<sup>93</sup> *La Nación*, 12-1-1941, pág. 8.

<sup>94</sup> *La Nación*, 13-2-1941, pág. 6.

<sup>95</sup> *La Nación*, 14-2-1941, pág. 6.

<sup>96</sup> *La Nación*, 25-6-1941, pág. 8.

<sup>97</sup> *El Pampero*, 9-11-1941, pág. 9.

<sup>98</sup> *La Nación*, 25-6-1942, pág. 6.

<sup>99</sup> *El Fortín*, segunda época, N° 18, 6 de febrero de 1943.

<sup>100</sup> Marcelo Sánchez Sorondo: *La revolución que anunciamos*, Ediciones Nueva Política, Buenos Aires, 1945, pág. 247.

<sup>101</sup> *La Nación*, 23-10-1942, pág. 4.

<sup>102</sup> *La Nación*, 8-5-1943, pág. 4.

<sup>103</sup> Federico Pinedo: *El fatal estatismo*, segunda edición, Guillermo Kraft, Buenos Aires, 1956, pág. 167.



SEGUNDA PARTE

PENSANDO LA NUEVA ARGENTINA  
1943-1955



## VII

### La revolución de 1943: del apoyo a la crítica

El golpe de Estado del 4 de junio de 1943 sorprendió a la gran mayoría de la sociedad argentina. El descrédito del gobierno de Castillo y la disconformidad con el previsible fraude conservador para elegir a su sucesor habían hecho que los partidos opositores cifraran ciertas expectativas en una eventual reacción militar, pero muy poco había trascendido sobre la actividad conspirativa de las fuerzas armadas. De allí que al producirse el derrocamiento de las autoridades reinaron la duda y la confusión acerca de los objetivos de sus marciales reemplazantes. El manifiesto revolucionario alimentó la idea de que la iniciativa recogía la demanda de moralización de la vida pública existente desde hacía tiempo en el seno de la sociedad. *La Nación* creyó, seguramente, sintetizar el estado de ánimo de la población, cuando al día siguiente del golpe sostuvo en su editorial: "El pueblo sigue atento los acontecimientos y toma nota del compromiso que contraen los hombres del nuevo gobierno de esforzarse en cumplir con eficiencia la tarea que han tomado a su cargo para propender a la grandeza moral y material del país"<sup>1</sup>. Recordaba, además, que no debía tocarse la Constitución, pues entendía que los defectos eran de los hombres y no de las instituciones. Estas expectativas iniciales puestas en el nuevo gobierno militar eran compartidas por buena parte de los dirigentes políticos de la oposición, y en especial por los del radicalismo, que habían sido los más perjudicados por las transgresiones de las regulaciones electorales. Al día siguiente de instalados los militares en el poder, la Unión Cívica Radical emitió una declaración de apoyo al evento donde valoraba "las palabras y propósitos enunciados por los señores jefes de la revolución triunfante y hace fe en los mismos, con la convicción de que será posible alcanzar una mejor salud moral y política para la Nación"<sup>2</sup>. Con esta posición coin-

cidía la fracción interna más significativa del radicalismo de la Provincia de Buenos Aires, el denominado movimiento revisionista, que en esa época estaba globalmente disconforme con la línea oficial del partido. El comunicado de adhesión al golpe de Estado hecho público por el movimiento radical revisionista llevaba, entre otras, las firmas de Ricardo Balbín y de Oscar Alende, y aseveraba compartir "con el pueblo de la República la emoción patriótica provocada por la decisión revolucionaria que ha terminado con un régimen de bochorno"<sup>3</sup>. Aunque los políticos conservadores resultaban los perjudicados inmediatos y directos de la acción militar, eso no impedía que en sus filas hubiera dirigentes favorables a los sucesos. Tal fue el caso, entre otros, de Rodolfo Moreno, una de las figuras más prominentes del conservadorismo de la Provincia de Buenos Aires y aspirante frustrado a candidato para las elecciones en que se designaría al sucesor de Castillo<sup>4</sup>. Agreguemos que desde la perspectiva de los grupos de ideología nacionalista no faltaron, tampoco, quienes consideraban posible que las fuerzas armadas realizaran la revolución que ellos creían anunciar desde hacía mucho tiempo.

Apenas constituido el nuevo gobierno el diario estimó necesario reactualizar en sus editoriales algunos de los principales temas de política económica que habían ocupado su atención en la etapa precedente. Es interesante destacar que al segundo día de la revolución de junio, *La Nación* señalaba a las nuevas autoridades la necesidad de una política industrial más coherente que la de las anteriores, capaz de impulsar mejor el desarrollo del sector. Objetaba la falta de medidas industrialistas de la administración depuesta y llamaba la atención sobre la necesidad de crear un sistema crediticio más acorde con las características de la inversión fabril, "actividad que requiere (créditos) a más largo plazo que el comercio y la agricultura"<sup>5</sup>. Los bancos debían, en su opinión, privilegiar aquellas demandas de apoyo a la industria que más podían contribuir al crecimiento general de la economía nacional, y el Estado, por su parte, tendría que establecer disposiciones para defender la producción nacional frente a la competencia desleal del extranjero, situación previsible una vez que terminara la guerra mundial. Planteaba que la política económica del derrocado gobierno de Castillo había sido incapaz de generar las condiciones de estabilidad y seguridad imprescindibles para el desarrollo industrial, debido a la estrecha orientación fiscalista que lo había caracterizado.

Para llevar adelante una política económica eficaz y de resultados positivos para el conjunto del país, el diario veía como imprescindible que quienes gobernaban mantuvieran estrechos

vínculos con los grandes intereses propietarios. Con nostalgia, ilustraba a los flamantes mandatarios militares sobre lo que había sido, a su juicio, la fórmula del éxito argentino, abandonada en especial en los años recientes: "En otros tiempos el gobierno del país contaba siempre con la colaboración total de los hombres prácticos, que entonces se los llamaba así para diferenciarlos de los estudiosos de las condiciones económicas"<sup>6</sup>. Esos "hombres prácticos" —grandes jefes de empresa y dirigentes de las corporaciones— habían sido permanentemente interlocutores de los poderes públicos, acercando sus propuestas, proseguía la argumentación, sin ningún interés de grupo, sino movidos por el deseo de cooperar con el progreso nacional. Y trazando a continuación una de las mejores síntesis de las tantas que ya había expuesto en otras oportunidades sobre el proceso de formación del Estado intervencionista el diario contrastó esos viejos buenos tiempos con los cambios introducidos en los últimos años por los conservadores. Los gobiernos habían avanzado sobre la iniciativa privada y "con las regulaciones, el poder del consejo fue pasando insensiblemente a manos de las juntas oficiales, en que aquellas entidades (empresarias) solían tener una representación. Pero más tarde se agregaron nuevas juntas o comisiones de carácter más intrínsecamente oficial, y aun en las otras su sentido se fue burocratizando porque el aumento de la injerencia se produjo en condiciones gigantescas. Al último quienes predominaban casi exclusivamente eran los técnicos dependientes de los ministerios"<sup>7</sup>. Entendía que frente a la evolución así descrita, había surgido el Comité de Defensa Económica para plantear sus objeciones a un Estado cuya voracidad parecía no tener límites. En su opinión, en las nuevas condiciones abiertas por el gobierno militar, otra vez las grandes asociaciones del comercio, la industria, la ganadería y la agricultura podrían rendir un gran servicio al país si, además de observar los proyectos que directamente les sometieran las autoridades, se adelantaran a sugerirles espontáneamente las soluciones para cada problema que se presentara.

Desde esa perspectiva, que juzgaba imprescindible la colaboración de las "fuerzas vivas" de la economía con el poder político, *La Nación* recibió con simpatía las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Santamarina, hombre del mundo de los negocios, cuando afirmó que antes de tomar decisiones escucharía atentamente a los representantes de los distintos sectores empresarios. Esos propósitos coincidían perfectamente con la voluntad de colaborar con las autoridades expresada, para satisfacción del diario, por los presidentes de la Unión Industrial Argentina, la

Sociedad Rural y la Bolsa de Comercio, en oportunidad de visitar al nuevo ministro. Con augurios y optimismo, el editorial comentaba las halagüeñas perspectivas y terminaba: "Se han reunido, pues, todos los requisitos para el cambio de rumbo que necesitaba el país"<sup>8</sup>. Esa esperanzada expectativa puesta en la administración militar se vio reforzada cuando, antes de cumplirse el primer mes del derrocamiento de Castillo, se resolvió disolver la Junta Reguladora de Vinos, iniciativa resistida, como se ha señalado, por la precedente administración. El diario percibió la decisión adoptada por el gobierno militar como un signo claro de la decisión de "concretar los propósitos de reducir en todo lo posible la intervención del Estado en las actividades económicas"<sup>9</sup>.

Las orientaciones políticas del gobierno militar suscitaron también, durante los meses iniciales de su gestión, el apoyo del diario. Los anuncios de retorno a la democracia plena, sin venalidad y sin fraude, formulados por el presidente Ramírez, aparecían para el matutino como un claro camino hacia la vigencia total de la Constitución. Además, coincidía en el reconocimiento del primer mandatario al protagonismo popular en el quehacer político. Para *La Nación* era posible recomponer un buen funcionamiento del sistema político justamente en razón de las reservas morales conservadas por el pueblo, no contaminado, a su juicio, por lo sucedido en los años precedentes<sup>10</sup>. Desde esa perspectiva descalificaba a quienes se creían "dotados de aptitudes eximias (y) miran despectivamente a las masas por suponerlas incapaces de reflexión, de discernimiento, en los asuntos de Estado, entre lo apropiado y lo que no lo es"<sup>11</sup>. Esta manera de plantear el problema llevaba directamente a la defensa de los partidos políticos y de su aptitud para gestionar los asuntos públicos. Como era notorio que había en el seno del gobierno militar algunos funcionarios civiles que no ocultaban su simpatía por ideologías nacionalistas totalitarias, el matutino comentó con satisfacción un discurso del presidente de la República donde se rechazaba terminantemente toda posible inclinación de las fuerzas armadas a favor de opciones distintas a la democracia. En opinión del diario, esas declaraciones no hacían sino reafirmar todo lo dicho desde el 4 de junio por los gobernantes militares<sup>12</sup>.

Esa confianza en la gestión de las fuerzas armadas no era óbice para que *La Nación* objetara un aspecto de la misma con el cual no acordaba en absoluto. Nos referimos a la neutralidad ante el conflicto mundial que los militares parecían dispuestos a mantener. Esa actitud no era homogénea ni carente de contradic-

ciones. El primer canciller del gobierno de Ramírez, el almirante Storni, había manifestado su inclinación por los aliados. En los tres meses que Storni estuvo en ese cargo, el diario conservó sus esperanzas en el pronto rompimiento de relaciones con el Eje, y luego de su dimisión se dirigió al gobierno en reiteradas ocasiones para insistir en la conveniencia de adoptar esa decisión. Tal orientación era justificada con argumentaciones variadas y complementarias, pero sobre todo, decía, se trataba de recuperar la confianza internacional y ser solidario con el resto de los países de América; recordaba a las autoridades que teníamos "un pueblo firmemente reacio a los regimenes totalitarios"<sup>13</sup>. Vista la decisión de continuar con el neutralismo, señalaba poco después que así se negaba la voluntad popular, llevando al desprestigio internacional al país.

El último día de octubre de 1943, *La Nación* publicó un comentario editorial donde por primera vez mencionó a un todavía secundario, pero ascendente, personaje de la política argentina. El Poder Ejecutivo había designado un nuevo presidente del Departamento Nacional de Trabajo. Se trataba del coronel Juan D. Perón, quien al asumir el cargo había formulado un discurso que en muchos aspectos repetía preocupaciones planteadas por el diario a lo largo de las décadas anteriores. Perón había expresado su intención de escuchar al sindicalismo, que debía a su parecer ser representativo de los legítimos intereses obreros y no de intenciones partidistas; pidió, además, a los empresarios no tener recelos ante la acción que se proponía desarrollar, ya que apuntaba al bien general; y subrayó su ambición de lograr un espíritu de justicia y equidad para resolver los conflictos que se produjeran entre el capital y el trabajo<sup>14</sup>. El matutino abordaba en su editorial la reflexión sobre los propósitos enunciados por Perón: "El desenvolvimiento más amplio de las funciones del Departamento de Trabajo, que propicia su nuevo presidente, responde a necesidades impuestas por diversas transformaciones habidas en el trabajo, según se ha manifestado varias veces en estas columnas. Así, por ejemplo, se ha recordado la deficiencia del organismo nacional para encauzar los conflictos obreros"<sup>15</sup>. El análisis invitaba a Perón a tener en cuenta los avances y experiencias previos en materia laboral en el ámbito nacional y en las provincias y sostenía que el Departamento ahora bajo su dirección era la "célula destinada a crecer y fortalecerse en adelante, de acuerdo con las exigencias que aparecen"<sup>16</sup>. Es notorio que si bien resultó cierto que el Departamento, creado por Figueroa Alcorta y cuyo primer presidente había sido Matienzo, comenzó en 1943 a expandir sus actividades por iniciativa de

Perón, sus orientaciones tomaron un rumbo bien distinto del imaginado por el mencionado editorial.

El mayor punto de discrepancia entre el gobierno militar y las posiciones de *La Nación*, la cuestión de la neutralidad frente al conflicto internacional, quedó resuelto a principios de 1944 cuando las autoridades rompieron relaciones con el Eje. Aunque a su juicio tardía, el diario recibió con satisfacción esa decisión<sup>17</sup>. Por entonces, ya existían nuevos temas de fricción, en razón de la adopción de disposiciones oficiales que limitaban la libertad de prensa. Con frecuencia, durante los tres primeros meses de 1944, el matutino criticó las nuevas medidas reglamentarias de la actividad periodística, hasta que éstas fueron suprimidas a fin de marzo de ese mismo año. Evaluaba, producida la derogación, que pocas iniciativas gubernativas de los últimos tiempos habían provocado una reacción tan unánime<sup>18</sup>. Apaciguadas sólo en apariencia, las tensiones en torno a la libertad de prensa continuaron durante todo el gobierno militar. La poca tolerancia de las autoridades a las críticas provenientes del periodismo se puso en evidencia a fines de abril de 1944, cuando impusieron una clausura temporaria al diario *La Prensa* por haber publicado un artículo en el que se objetaban medidas municipales para reducir los gastos en los hospitales.

En un contexto donde explorar los límites del disenso se había convertido en una tarea riesgosa, *La Nación* protagonizó un episodio revelador de su intención de mantener buenas relaciones con el régimen de facto. Con el título "El Estadista", en mayo de 1944 el diario publicó un artículo de Mila Forn de Oteiza Quirno. En el texto se contraponía la figura del estadista a las del dictador y del demagogo. Allí se realizaban las dotes intelectuales y morales de los estadistas y las notas características de sus desempeños cuando ejercían el gobierno. Mitre, Pellegrini, Roca... eran parte, afirmaba la autora, de los mejores ejemplos de la especie elogiada encontrables en el pasado argentino. ¿Por qué dudar de que el país fuera capaz de darse figuras de la misma talla?, se preguntaba, con una transparente referencia a la coyuntura. En contraposición al estadista se señalaba a quienes amaban más al Estado que a la Patria, diferencia importante donde la autora creía se hallaban los gérmenes de totalitarismo. También peligrosos, a su parecer, eran los demagogos, cuya meta era lograr apoyos y adulación a cambio de beneficios a sus seguidores. Ya en el delicado tema de la libertad de expresión decía: el verdadero estadista "gobernará sin temer la opinión de la prensa (...) porque prefiere la manifestación espontánea del pensar y del sentir de su pueblo, al aislamiento que sólo conduce

al error"<sup>19</sup>. El mismo día de la aparición del citado artículo, el director de *La Nación* escribió al presidente *de facto*, general Farrell, para comunicarle que luego de su publicación se había percatado de que el mismo vertía conceptos agraviantes y encubría una intención aviesa: "*La Nación* que a través de largos años de intensa prédica periodística ha mantenido una invariable línea de conducta, lamenta sinceramente haber sido sorprendida en su buena fe y desautoriza públicamente las consideraciones que surgen de aquel artículo, habiendo dispuesto borrar por tal motivo del elenco de sus colaboradores a la autora citada"<sup>20</sup>. Difícilmente *La Nación* hubiese podido encontrar una fórmula mejor para comunicar a las autoridades militares su deseo de no tener conflictos con ellas. Roberto F. Giusti debió recordar, ante el hecho, sus comentarios de hacía casi dos décadas a propósito del "caso" Leumann.

Al cumplirse el primer aniversario del gobierno, ya presidido por el general Farrell, el diario trazó un balance relativamente neutro de los doce meses de gestión militar. Entre los aspectos positivos se destacaba la tarea de la Secretaría de Trabajo y Previsión, dirigida por Perón, de la cual se decía que había comenzado a "encauzar las disidencias que a veces ocurren entre los patronos y los obreros y empleados"<sup>21</sup>. Señalaba que los esfuerzos de la Secretaría se dirigían a suprimir las causas de los conflictos y colocar a los trabajadores en mejores condiciones allí donde existían pruebas de una falta de equidad en las retribuciones salariales. Otra cuestión que consideraba como un acierto era la creación del Banco Industrial, para permitir un mejor desenvolvimiento del sector manufacturero. Pocos días después del aniversario del golpe de Estado, volvía sobre la política industrial con dos temas que parece interesante mencionar. Refiriéndose a las iniciativas del gobierno encaminadas a atenuar las consecuencias negativas previsibles del fin de la guerra, el diario asumía totalmente la defensa de la industria y rescataba muy elogiosamente todos los esfuerzos realizados para sustituir importaciones, afirmando que el desarrollo alcanzado era "una conquista que comprende desde los más altos intereses de la Nación hasta sus fundamentos económicos y, por lo tanto, debe ser consolidada"<sup>22</sup>. Por otra parte, se refería a la supuesta confrontación de intereses entre el desarrollo fabril y la producción agropecuaria, para desestimar cualquier posible antagonismo, porque "lo industrial no contradice lo agrario, sino que lo completa con la transformación y mejor aprovechamiento del producto rural"<sup>23</sup>.

Con motivo de la lección inaugural de la Cátedra de Defensa Nacional de la Universidad de La Plata, dictada por el coronel

Perón, que en ese momento además de secretario de Trabajo y Previsión era ministro de Guerra, *La Nación* volvió a comentar editorialmente una alocución del ya entonces más conocido funcionario. El matutino reflexionaba sobre las ideas expuestas por Perón y, resumiéndolas, veía en ellas una adecuada actualización de los conceptos que debían inspirar a la Argentina en materia de defensa de la soberanía nacional. La experiencia de la guerra mundial, sostenía, demostraba la necesidad de encarar la movilización completa de los recursos, tanto de los hombres cuanto de los elementos materiales. Así, más allá de que el país estuviera movido por sentimientos pacifistas y respeto recíproco, le parecía correcto el pensamiento enunciado en esa oportunidad por Perón<sup>24</sup>. La alocución mencionada tuvo inesperada trascendencia: el Departamento de Estado norteamericano la consideró como una demostración del ánimo bélico y de las ideas totalitarias del conferenciante y de las autoridades argentinas. El diario salió entonces en defensa de Perón, y atribuyó las acusaciones del país del Norte a una errada interpretación de sus palabras. Con términos inequívocos, sostuvo: "Se ha querido ver en el espíritu del conferenciante una especial predisposición guerrera, pero no en el sentido que impone y obliga su condición de patriota y de militar, sino en el alcance agresivo y de conquista que la guerra puede envolver en el campo político. Nada más lejos, sin embargo, de una exacta interpretación de los conceptos expresados por el coronel Perón"<sup>25</sup>. El comentario hacía notar, además, lo poco pertinente que era la actitud de la administración norteamericana al referirse de ese modo a un miembro del gobierno argentino. Por otra parte, reprochaba a los críticos haber tomado arbitrariamente algún párrafo de la conferencia y hacer decir al ministro de Guerra lo que no había dicho. Invitaba a los hombres del Departamento de Estado a releer a Perón, asegurándoles que nada podrían encontrar en sus posiciones que justificara sus recelos. Agregaba que las posiciones del conferenciante se habían ajustado a los conceptos en boga en la época y eran visiblemente juicios doctrinarios detrás de los cuales no cabía buscar segundas intenciones. Para disipar todo malentendido, y con un dejo de ironía, afirmaba: "Nadie podría sostener fundadamente que haya perdido actualidad la vieja y exacta definición de que la guerra es la continuación de la política por otros medios"<sup>26</sup>. Y luego de evocar la conocida frase de von Clausewitz para defender a Perón, finalizaba recordando palabras recientes del presidente Farrell, donde éste afirmaba que la verdad era siempre indestructible y terminaba por triunfar. Es interesante señalar que Perón contestó a las objeciones del

Departamento de Estado de forma mucho menos rigurosa que *La Nación* y atribuyó, en buena medida, el diferendo a un posible error de interpretación de quienes habían traducido al inglés el texto de su conferencia<sup>27</sup>.

El diario volvió poco después a ocuparse de otro discurso de Perón, quien desde julio de 1944 ejercía la vicepresidencia de la República reteniendo la titularidad del Ministerio de Guerra y de la Secretaría de Trabajo y Previsión, pronunciado en una reunión del Consejo Nacional de Postguerra, del cual también era presidente. La función del Consejo consistía en estudiar alternativas y proponer medidas para que el país y en especial su economía industrial resultaran menos afectados por el cambio de condiciones derivado del fin de la conflagración. A *La Nación* le parecieron auspiciosas las propuestas de Perón sobre la conveniencia de fomentar industrias utilizadoras de materias primas nacionales. Coincidió también en la importancia de adoptar criterios adecuados para discernir acerca de qué actividades fabriles debían preservarse preferentemente y destacaba el insustituible rol que debían cumplir el Estado y el Consejo presidido por Perón<sup>28</sup>.

La permeabilidad de los organismos estatales a las demandas de las entidades empresarias había sido siempre una de las dimensiones valorada por el diario para reconocer la existencia de buenas administraciones. Como se ha visto, con la llegada al poder de los militares había recomendado al gobierno y a los representantes de las "fuerzas vivas" la conveniencia de mantener fluidas relaciones. Desde esa perspectiva, *La Nación* destacó la importancia de una presentación hecha por la Sociedad Rural Argentina a la Secretaría de Trabajo y Previsión con una serie de consideraciones sobre el estatuto del peón, tema destinado a convertirse en uno de los varios motivos de enfrentamiento entre los propietarios rurales y el Estado<sup>29</sup>. ¿Estaban los gobernantes en condiciones de resolver en materia social con tino y pericia técnica, si no escuchaban debidamente a los sectores empresarios? La pregunta tenía en las argumentaciones del matutino una respuesta negativa. Revelando su gusto por los recursos literarios y las evocaciones históricas, en varias oportunidades, ante problemas sociales de ese cada vez más complicado año 1944, los editoriales llamaron a la reflexión a las autoridades: "Las cuestiones de gobierno no se resuelven con el corazón sino con la cabeza"<sup>30</sup>. Esa fórmula, a guisa de consejo, fue empleada por el matutino al analizar declaraciones suscriptas por la Unión Industrial Argentina y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en las cuales se criticaba la política social del gobierno. Al comentar

específicamente la presentación de la entidad fabril, *La Nación* recordaba el malestar generado por la acción de la Secretaría de Trabajo y Previsión en los medios industriales, para quienes antes "no existía en nuestro país un verdadero proletariado industrial contrapuesto a las fuerzas capitalistas (...) (y se lamentaban) de la indisciplina que necesariamente engendra en cada establecimiento el uso cada vez más generalizado de cierta terminología que presenta a los patronos en una posición de prepotencia y cada arreglo no como un acto de justicia, sino como una 'conquista' que los trabajadores sabrían defender aun con la fuerza"<sup>31</sup>. Se identificaba, aunque guardando cierta distancia, con los empresarios, y finalizaba su reflexión con un llamado al gobierno y a las entidades patronales a encontrar un punto de acuerdo que, a su juicio, sería beneficioso para todos.

En lo estrictamente político las relaciones del diario con el gobierno se hicieron más tensas en la medida que apareció la sospecha sobre eventuales manejos tendientes a buscar una salida electoral sucesoria favorable a quienes manejaban la administración de facto. Ante la decisión del presidente Farrell de nombrar una comisión encargada de preparar un estatuto de los partidos políticos, en ese momento disueltos, sugería a las autoridades no innovar en un dominio tan delicado y mantener estrictamente las normas de la Ley Sáenz Peña<sup>32</sup>. ¿Se avizoraba en el horizonte la candidatura de Perón? Sin duda, al comenzar el año 1945, el mencionado coronel era quien más notoriamente aparecía como beneficiario de un posible continuismo. Por una parte, Perón buscaba muy claramente apoyos en los sectores populares con su política social; por otra no dejaba, tampoco, de tratar de establecer buenos vínculos con el campo empresario. Lo primero le resultaba más fácil que lo segundo, y ambas metas se revelaron poco compatibles. En ese difícil equilibrio se insertó una alocución de Perón ante una asamblea de industriales, a comienzos de 1945, en la que en su carácter de vicepresidente, pidió la colaboración de las "fuerzas vivas" con el gobierno y formuló observaciones críticas sobre la llamada economía dirigida, diciendo que era mejor hablar de organización de la riqueza. *La Nación*, mostrando que no tenía especial inquina contra el mandatario, recogió positivamente esos juicios y reiteró su posición sobre el punto<sup>33</sup>. Pero el fantasma de un candidato oficial seguía sobrevolando. Con esa preocupación, el matutino reiteró un recurso utilizado muchas veces: aprovechó sus editoriales sobre las elecciones presidenciales del Brasil para recordar que no podía haber democracia con postulantes apadrinados desde el Estado. Movidó con el mismo afán de oponerse a maniobras con-

tinuistas, el diario se encargó de contestar a quienes, según decía, solían hablar de la necesidad de "renovar los miembros de la clase dirigente, sustituyendo a las figuras políticas que hayan actuado con anterioridad, otros elementos capaces de allegar ideas, propósitos y métodos nuevos, y de infundir nueva savia en la vida cívica y en las complejas funciones del Estado"<sup>34</sup>. No cabía confundir, sostuvo, la necesidad de cambios con un afán jacobino de transformarlo todo, ya que, en su opinión, había numerosas personas con actuación en épocas anteriores que aún podían dar mucho en política nacional.

El reclamo de autoridades políticamente neutras y ausencia de candidatos oficiales pareció satisfecho cuando Perón afirmó en un comunicado que no aspiraba a ningún cargo en las próximas elecciones. "Hay que congratularse de una definición tan categórica"<sup>35</sup>, escribió *La Nación*, porque la población necesitaba esas explicaciones claras, dado que la ambigüedad y las reservas mentales sólo conducían a situaciones incómodas y difíciles de salvar. Si la eventual candidatura de Perón había creado inquietudes, agregaba el análisis, había sido en razón de que la Constitución prohibía expresamente las reelecciones y, en consecuencia, el vicepresidente de la República estaba inhabilitado para postularse a la primera magistratura en el periodo siguiente.

La tranquilidad que despertó la mencionada declaración pública de Perón aventaba sólo parcialmente la inquietud de quienes habían criticado su accionar gubernamental y político en relación con la "cuestión social". Prácticamente ningún aspecto de la política social del gobierno militar dejó de ser objetado por los sectores empresarios. *La Nación* había reflejado y sintetizado muchas de las quejas patronales; evaluaba que en los primeros meses de 1945 el nivel salarial medio en la actividad industrial superaba en un 70% al de 1937, y que a los costos patronales se habían agregado otras cargas que dificultaban el desarrollo sectorial<sup>36</sup>. Pero a pesar de las mejoras acordadas a los sectores asalariados los reclamos y las situaciones de tensión no disminuían. Las huelgas, o sus amenazas, se multiplicaban, y el diario se hacía portavoz del anhelo, que decía captar en la comunidad, de evitar una mayor agudización de los conflictos sociales. Es más, trazaba una divisoria entre antes y después de 1943, y recordaba que en los decenios anteriores al golpe de Estado se habían sancionado numerosas leyes sociales votadas por todos los sectores parlamentarios, lo que revelaba, en su opinión, cómo "felizmente para nuestra Nación no ha sido posible señalar antagonismos de clase ni malquerencia de los ricos hacia los pobres"<sup>37</sup>. Por ello sugería, a quienes desde la titularidad de

puestos oficiales criticaban a los patrones, la indispensable necesidad de documentarse antes de formular arbitrarias apreciaciones. La defensa de los asalariados, inspirada por un equivocado criterio de justicia social, no podía, desde su óptica, basarse en el sacrificio de los intereses de otros sectores sociales. Tampoco era correcto, y aquí recogía una protesta de la Sociedad Rural Argentina, prorrogar los contratos de arrendamientos o que el Estado se dedicara a comercializar cosechas restándole al productor una parte de los precios de los cereales<sup>38</sup>. A la luz de todas esas críticas a la política gubernamental, no es sorprendente que al cumplirse el segundo aniversario del golpe de Estado de junio de 1943 el comentario editorial demandara el pronto reintegro de la Nación a la normalidad institucional.

La cuestión social y la evolución de la situación política seguían encontrando en la Secretaría de Trabajo y Previsión el punto clave de convergencia. Desde allí Perón parecía empeñado en construir frases que los editoriales de *La Nación* retomaban para criticarlo con una impronta crecientemente hostil. Así, por ejemplo, cuando en un acto celebrado por un grupo de empleados mercantiles Perón caracterizó a los patrones como movidos por la ambición de lucro y la avaricia, y al gobierno y a los empleados de comercio como quienes se hallaban en posiciones justas, el diario resaltó la contradicción entre esas palabras y la frecuente referencia del orador a la necesidad de conciliar el capital y el trabajo. Lo afirmado por Perón, argumentó, "es más adecuado para separar que para unir capitalistas y trabajadores"<sup>39</sup>. Pero el editorial esperaba, sin embargo, que los empleados de comercio examinaran desapasionada e imparcialmente la situación y se dieran cuenta de que la palabra exaltada se alejaba por lo común de la equidad y de la razón.

La confianza en la justa evaluación de los hechos del presente y del pasado por parte de los sectores populares a los cuales se dirigía la prédica de Perón, a su modo de ver equivocada, le daba al diario cierta tranquilidad. Aunque *La Nación* estuviera convencida, como sucede siempre con todo actor político, de haber abrazado la mejor causa, quedaba la duda acerca del grado en que sus ideas eran compartidas por la mayoría de la población. Ausente la inquietud sobre la calidad, cabía pues preguntarse por la cantidad. La convocatoria para realizar una manifestación de oposición al gobierno, la Marcha de la Constitución y de la Libertad, sirvió para hacer un primer recuento de audiencias. El diario adhirió al evento e invitó a concurrir desde su columna editorial, con el objeto de "llevar en una forma visible, a propios y extraños, la evidencia que el pueblo se encuentra

ansioso de volver a la regularidad gubernativa"<sup>40</sup>. Desde esa perspectiva, esperaba que el carácter multitudinario de la jornada se viera fortalecido por el apoyo de los establecimientos comerciales e industriales, que cerrarían sus puertas durante las horas del mitin para permitir la concurrencia del personal simpatizante con las ideas allí defendidas. Se debía poner fin lo antes posible, decía, al gobierno de facto que había carecido de programa y cuya incapacidad para encontrar una salida a la situación lo llevaba a favorecer alguna alternativa de tipo "continuista". Para el matutino, la marcha, de cuyo éxito no dudaba, debía mostrar a los militares la urgencia de fijar la fecha de las elecciones, sin candidaturas oficiales y bajo la dirección de una autoridad insospechable. Al día siguiente de la manifestación, la sensación de triunfo se sintetizaba en el título del editorial: "Un día de gloria"; la movilización en su opinión había sido un "impresionante desfile (donde) se confundían los representantes de todos los sectores sociales"<sup>41</sup>, y la importancia numérica parecía haber superado sus expectativas optimistas.

En la cada vez más tensa situación, saldada en principio con su destitución y breve encarcelamiento, Perón continuó arengando a las delegaciones sindicales que lo visitaban. Así, mientras el resultado de la marcha opositora fortalecía el ánimo de los adversarios del gobierno, y los incitaba a avanzar más en sus demandas, Perón crispaba aun en mayor grado sus palabras y éstas volvían a poblar textualmente los análisis de *La Nación*. El diario citaba al cuestionado funcionario quien había afirmado que planes como los que pretendía realizar el gobierno habían fracasado en oportunidades anteriores por la oposición de la oligarquía. El editorial reproducía juicios de Perón: "Todas nuestras reformas son atacadas por los terratenientes, por la oligarquía representada por las fuerzas vivas de la industria, del comercio y de una parte de la producción, sobre todo de la ganadería; frente a ellos nosotros estamos librando una verdadera guerra, que yo he clasificado claramente, el dilema se resuelve así: la oligarquía cede y cae o caemos nosotros"<sup>42</sup>. Según el matutino, esa caracterización no correspondía a la realidad; a su juicio, en el país se renovaba el choque entre dos regímenes, tal como había ocurrido en otras etapas de la historia. Construyendo del pasado una imagen distinta, y opuesta, a la enunciada por Perón, sostenía que en la historia nacional ya se había conocido la lucha entre quienes respetaban la Constitución y las leyes y los que sustituían las normas legales por la voluntad de los gobernantes.

El 17 de octubre de 1945 la gran manifestación realizada por los partidarios de Perón volvió a dar motivos a *La Nación* para

reflexionar sobre la naturaleza de la situación política del país. Pero en este caso ya no se remitió a ciclos o tendencias recurrentes de la historia nacional, sino que se colocó en una perspectiva analítica centrada en lo inmediato e invitó a meditar sobre las consecuencias negativas de lo acaecido para la imagen de la Argentina en el mundo. En tono medido, eludiendo las formas y los contenidos expositivos de connotaciones apocalípticas o despectivas hacia los participantes populares del evento adoptados por otros órganos de prensa, el matutino pareció buscar con la medida de los términos empleados una atenuación de la importancia de los sucesos, sin omitir por eso demostrar su desagrado ante los mismos. Posiblemente contribuyeran a esa actitud discursiva y al estilo del planteo los cuatro días transcurridos desde la movilización peronista hasta la publicación del editorial. Para el diario, los vecinos de la Capital y de otras ciudades importantes habían "presenciado con asombro y pesar el espectáculo dado por agrupaciones de elementos que, no obstante la categórica prohibición, de fecha reciente, de celebrar reuniones en la vía pública, han recorrido las calles dando vítores a ciertos ciudadanos y, en esta ciudad, acampando durante un día en la plaza principal, en la cual, a la noche, improvisaban antorchas sin ningún objeto, por el mero placer que les causaba ese procedimiento"<sup>43</sup>. Pero aclaraba que lo más grave no había sido lo que llamaba el "desfile vocinglero" o las leyendas estampadas en edificios y vehículos, sino el atentado contra diarios que sustentaban ideas opuestas a las de los manifestantes; la publicación agredida había sido *Crítica*. Consideraba que había sido un espectáculo lamentable, en especial porque durante muchos años varias generaciones se habían esforzado para dotar al país de una cultura de pueblos eminentemente civilizados. Los acontecimientos de esa naturaleza, concluía, debilitaban nuestro reconocimiento y respeto en el concierto internacional y sólo cabía esperar su no reproducción, para lo cual llamaba a la reflexión a los responsables de los destinos del país.

Ese mes de octubre dejó cambios importantes en la política nacional. Perón abandonó sus cargos oficiales y entró abiertamente en la lucha electoral. Se levantó la veda política y comenzó la reorganización de los partidos y designación de candidatos para las elecciones que se realizarían el 24 de febrero del año entrante. La idea de construir una coalición de todas las fuerzas políticas opuestas al gobierno militar y a la candidatura de Perón fue planteada desde el comienzo de la nueva etapa. Por su gravitación en el juego político, la Unión Cívica Radical quedó convertida en la pieza clave de un eventual frente. Fallecido Alvear en

1942, el predominio interno en el radicalismo había pasado a manos de algunos de sus principales seguidores. Los radicales reunieron su Convención partidaria para decidir si aceptaban realizar alianzas con otras fuerzas. *La Nación*, decididamente favorable a la formación de un frente político, advirtió a los convencionales radicales que la mayoría del pueblo aguardaba sus decisiones y que si bien "el país sabe que la Unión Cívica Radical puede conquistar la victoria con su propio caudal de sufragios sabe también que existe el peligro de que tal preponderancia numérica sea insuficiente para oponerse a influjos de otro orden, y que al amparo de la división popular podrían adquirir apariencia de verosimilitud desenlaces que en el caso contrario serían claramente absurdos"<sup>44</sup>. Parecía sospechar una posible anulación de las elecciones ante un triunfo radical, por lo cual llamaba a crear una coalición multipartidaria para hacer frente a tal eventualidad. Cuando la Convención radical aprobó la concertación con los partidos Socialista, Demócrata Progresista y Comunista, el matutino estimó acertada esa decisión, vista como un paso capaz de asegurar el éxito electoral. Pero para lograr esa meta, consideraba necesario sumar a los ciudadanos que no se interesaban por los partidos, pues "la indiferencia política es una actitud que debe proscribirse por antipatriótica"<sup>45</sup>. El mensaje a los indiferentes no se dirigía sólo al hombre común, poco atraído por las lides electorales, sino también a los conservadores, formalmente excluidos de la convocatoria a integrar la Unión Democrática. La fórmula presidencial de esa convergencia era la designada por la Unión Cívica Radical: Tamborini, ministro durante la gestión de Alvear, y Mosca, acompañante de dicho ex primer mandatario en el binomio derrotado en 1937. Pero la movilización política generada en su apoyo se proponía trascender los límites partidarios.

El primer acto público organizado conjuntamente por radicales, socialistas, demoprogresistas y comunistas fue analizado por el diario con marcado optimismo. Dato interesante a destacar, la participación en la alianza del Partido Comunista no generaba ningún resquemor en sus análisis. En cambio, lo intranquilizaban los posibles manejos tendientes a favorecer desde el gobierno la candidatura de Perón. En especial, veía como negativa la acción de los interventores federales, que proponía sustituir por miembros de la Justicia<sup>46</sup>. En ese contexto de desconfianza sobre el quehacer oficial y sus implicaciones en la lucha política, el gobierno dictó una serie de medidas para mejorar la situación económica de los asalariados, evidentemente en busca de beneficios electorales. *La Nación* expresó su total dis-

conformidad con dichas iniciativas, que establecieron el salario vital mínimo, el salario básico, un aumento de retribuciones y el sueldo anual complementario, y las criticó desde distintas perspectivas. Adujo que el gobierno no era representativo del pueblo por haber nacido de un movimiento militar, y que eso le quitaba legitimidad a sus decisiones. Por otra parte, argumentó que la economía no estaba en condiciones de absorber los costos de esas medidas de carácter social, cuyas consecuencias en última instancia las pagarían los sectores populares por la vía de los aumentos de precios<sup>47</sup>. Como era de prever, la "cuestión del aguinaldo" se convirtió en uno de los ejes del conflicto político y social de fines de 1945 e inicios del año siguiente.

Los discursos de Perón, denominado a veces en los editoriales simplemente "el candidato no democrático"<sup>48</sup>, ocuparon en numerosas oportunidades la atención de los análisis del matutino. La demagogia, la incitación a la violencia, la falta de criterios en las propuestas, las despectivas referencias a los sectores propietarios, fueron, entre otros, temas abordados en sus reflexiones con creciente indignación. Pero más allá de sumar objeciones a intervenciones puntuales, el diario buscó, como siempre lo había hecho, dar alguna clave interpretativa más global y abarcadora para comprender la naturaleza de la situación en presencia. ¿Qué era eso? La respuesta, de carácter esencialista, remitía al pasado: era "el vestigio de los tiempos del caudillaje. Cambian las modalidades y las divisas; el atuendo y los distintivos se han modificado, con la circunstancia de que a veces la comparación es ventajosa para las épocas pretéritas, pero el espíritu es el mismo, con la salvedad de que ahora falta la excusa derivada de la carencia de educación"<sup>49</sup>. Así, la política pensada como trágica regresión brindaba al diario una lente con la cual decodificar los sucesos que vivía el país e intentar que el análisis no quedara atrapado en las anécdotas del día. Desde esa peculiar mirada, cuatro meses después del 17 de octubre *La Nación* comentaba, sobre los acontecimientos de esa jornada, que al desaparecer todo vestigio de autoridad Farrell "actuó bajo la presión de las turbas que acampaban en la plaza histórica, en forma más lesiva quizá para la cultura, por lo menos dada la diferencia de épocas, que la de los caudillos del litoral en el año 20"<sup>50</sup>. Ésa había sido, decía, la "noche triste" de la democracia argentina. Pero a pesar de esa idea de recurrencia regresiva la opinión del matutino no se dejaba atrapar por el desaliento.

El diario confiaba en el éxito de las fuerzas que se habían unido para oponerse a Perón y a quienes lo apoyaban. Con el mismo encuadre analítico utilizado para tratar de interpretar el

peronismo, *La Nación* explicaba la Unión Democrática: "Es un movimiento, más que una ordinaria exhibición de esfuerzo proselitista (...) ese movimiento no se opone, si se mira bien, a partidos equivalentes, organizados y de concepción definida y permanente: su choque es con algo que viene de lejos y que tiene el valor de una crisis histórica, contraria al sentimiento y a la modalidad del país"<sup>51</sup>. En consecuencia, a su modo de ver, era equivocado considerar a la Unión Democrática como la expresión de una determinada fracción política, dado que por su vitalidad y expansión ya representaba la defensa de los derechos de toda la ciudadanía. En esa escena política tan tajantemente escindida el matutino alentó en todo momento la convicción de que el triunfo no podía sino corresponder a quienes definía como los portadores de la legalidad y la democracia. En la víspera de la elección fue terminante: "Mañana será el día de prueba. El pueblo sabe de lo que se trata. Tiene el convencimiento de que, como dijo el candidato de la Unión Democrática, el domingo se votará por la vigencia o la caducidad de la Constitución"<sup>52</sup>. El día en que se sufragó, el editorial repasó críticamente la obra del gobierno de facto y, aspecto interesante, resaltó la plena confianza en la pureza del acto electoral, en tanto se hallaba custodiado por las fuerzas armadas. La ausencia de incidentes que la opacaran hizo que *La Nación* juzgara a la jornada cívica del 24 de febrero de 1946 como ejemplar y memorable. Con inocultable satisfacción decía que ese éxito se debía al desempeño encomiable de la custodia militar: "El pueblo ha tenido la prueba de que el ejército, la marina y la aviación, cuyos componentes son carne de su propia carne, importan una garantía para el ejercicio de sus derechos (que) serán el firme apoyo de los mandatarios que surjan de las urnas"<sup>53</sup>. Dando por seguro que en un acto electoral formalmente tan correcto sólo podía ganar la Unión Democrática, el diario parecía únicamente preocupado por que los resultados fueran aceptados por los partidarios de Perón, cuya influencia en las filas castrenses era un factor nada desdeñable. El escrutinio fue lento y los cómputos contrariaron las expectativas del matutino.

"¿Dónde está la oligarquía?", fue el título del editorial de *La Nación* del 20 de marzo de 1946. El diario se inquietaba por lo que juzgaba el empleo abusivo y equivocado de esa palabra de origen helénico usada por los seguidores de Perón para designar a sus adversarios. Para ordenar ideas, invitaba a consultar el Diccionario de la Academia Española, según el cual oligarquía es la forma de gobierno en la cual el poder supremo es ejercido por un reducido grupo de personas que pertenecen a una misma clase social. Podía seguirse la evolución del sentido del vocablo,

desde Aristóteles a la segunda guerra de Roma contra Cartago, decía, pero prefería evitar la dispersión ilustrada y volver a las orillas del Plata para argumentar que de las expresiones poco coherentes habitualmente escuchadas podía deducirse que había quienes pensaban que "un capitalismo rapaz y despiadado ha estado gobernando al país, no desde posiciones oficiales, sino oculto entre bastidores"<sup>54</sup>. Nadie conseguiría demostrar con un mínimo de rigor, aseguraba, tal presunción. Por el contrario, se podía afirmar, según su opinión, que en las épocas ahora tildadas de oligárquicas casi todos los legisladores, ministros y presidentes habían vivido de la dieta proporcionada por su cargo. Llamaba al sentido de responsabilidad para no caer en la demagogia ni desorientar a los propensos a dejarse confundir. Completaba su reflexión con un doble desafío, uno de orden político y otro metodológico. En el primer aspecto, quienes hablaban de oligarquía debían revelar dónde estaba ese inmenso poder y concretar los casos de su influencia. En el segundo, se debía precisar cuáles eran las condiciones para incluir a alguien en esa categoría, sobre todo desde el punto de vista pecuniario. Ambos requisitos, concluía, permitirían dejar de discutir sobre palabras y referirse a lo empírico.

Por la época en que *La Nación* lanzaba ese desafío, Ángel Carrasco, hombre de militancia conservadora, bosquejaba con singular impresionismo, en un libro autobiográfico, su idea de la estructura social argentina de 1946, donde distinguía tres clases: "la gente", el "medio pelo" y la "chusma". Decía que la "gente" eran las familias tradicionales, hacendados y muchos profesionales liberales, en su mayoría con raigambre en la colonia; valía por la fortuna y también por el nombre y de allí salían los gobernantes, legisladores, jueces y principales funcionarios de la administración pública. Con referencia al otro extremo de la pirámide social, Carrasco sostenía que en todas partes del mundo "la chusma" constituía la mayoría y agregaba, con singular agudeza, que si ese sector social adquiría en la Argentina cohesión de cuerpo gracias al nombre común —"descarnisados"— que los comprendía a todos "y ejercitaba su fuerza en el comicio, adherida o no ostensiblemente a una candidatura repudiada por aquellos a quienes ya se sentía enfrentados en su fuero íntimo aunque otra cosa expresaran en el seno de los organismos políticos que los contaba como suyos, el resultado no podía ser dudoso para cualquiera que hubiera conservado su ánimo sereno y en condiciones de analizar acciones que tenían que provocar reacciones determinadas"<sup>55</sup>. La reflexión de Carrasco no había sido compartida, por cierto, por quienes no esperaban la victoria elec-

toral de Perón. *La Nación* se contó entre los sorprendidos. Pasado el primer impacto y a la luz de los guarismos, el diario señaló que no se trataba de un veredicto unánime y que las nuevas autoridades debían tener en cuenta la expresión disidente de una masa de ciudadanos, cercana a la mitad del electorado, con la candidatura triunfante<sup>56</sup>. Subrayaba, además, que las elecciones se habían realizado luego de una campaña proselitista en que la oposición careció de garantías y los actos de violencia contra ella no fueron reprimidos por las autoridades.

### La Nación: 1943-1946

*Durante el gobierno militar se produjeron nuevos e inesperados realineamientos de fuerzas políticas y sociales. Sobre algunas condiciones creadas en el decenio anterior, a las que se sumaron los efectos de la acción del régimen de facto, se articuló una nueva propuesta política destinada a modificar por largo tiempo la lógica de las disputas por el poder. Tal como hemos demostrado en otros trabajos de investigación<sup>57</sup> la emergencia del peronismo debe explicarse a partir de cuatro conjuntos de referencias conceptuales: 1) la crisis de la clase dominante, cuya fragmentación y conflictos internos acrecentaron la ilegitimidad del orden político instaurado en 1930; 2) la autonomía del aparato estatal intervencionista, cuya órbita se amplió entre 1943 y 1946 con la incorporación de legislaciones y reparticiones encargadas de regular cuestiones sociales, que en tanto soporte institucional material y objetivo posibilitó la organización y unificación de un nuevo tipo de actor político; 3) ese actor político coincidía con los proyectos económicos y sociales de la administración militar y se movilizó por la promoción de la candidatura de Perón con un discurso policlasista, pero dada su recepción fundamentalmente en los sectores obreros y populares se produjo un proceso de feed-back que llevó a los promotores del peronismo a obrerizar los contenidos y las formas de su mensaje; 4) esa situación había sido el resultado, y a la vez había provocado una intensa politización de los conflictos sociales; al asimilar su condición social con el antagonismo político entre peronismo y antiperonismo, se conformaron alrededor de esa línea de clivage las identidades político-sociales de la mayoría de las clases populares, que dieron su apoyo a la candidatura de Perón, y las de los sectores propietarios que se definieron en contra; entre ambos polos se distribuyeron las preferencias de las clases medias.*

*El desenlace de 1946 no fue, en absoluto, la consecuencia de una trayectoria lineal. Todos los actores se enfrentaron y*

desplazaron en un sistema de relaciones cuyas claves de inteligibilidad no conseguían remitir al pasado inmediato. En los sectores antiperonistas se multiplicaron los esfuerzos para clasificar a su adversario. La antinomia sarmientina del Facundo reveló ser atractiva para algunos, probablemente, por su eficacia histórica; a otros, la experiencia de Alemania e Italia les proveía paralelos para designar al emergente movimiento de masas y a su jefe; pero en la mayoría de los casos pareció prevalecer la perplejidad. Entre el momento de la instalación del gobierno militar y el del triunfo electoral del peronismo, La Nación recorrió un arco completo de interpretaciones, que abarcó desde la simpatía hasta el rechazo militante a Perón. Buena parte de la temática sostenida por el diario desde hacía varias décadas a propósito de la mejor forma de encarar el tratamiento de los problemas laborales fue enunciada por el entonces casi desconocido coronel, primero desde el Departamento de Trabajo y luego desde la Secretaría a su cargo. Partidario de la modernización de las instituciones, el matutino pudo reconocer sin esfuerzos en las palabras del activo funcionario, concepciones coincidentes con la propia y, más en general, con una tradición vigente en la Argentina en las épocas en que había existido una clase dirigente. Las ideas industrialistas y las preocupaciones por las previsibles consecuencias del fin de la guerra mundial sobre nuestra economía, eran sujetos sobre los cuales también entre el diario y Perón existían convergencias. Pero tanto el peronismo como el pensamiento político de La Nación tenían dimensiones que no se agotaban, o mejor dicho daban sentido diferente a esas perspectivas formalmente compartidas.

El crecimiento de la esfera de intervención del Estado situaba al matutino en una posición contraria al gobierno militar y, naturalmente, a quienes se postulaban como sus continuadores. El diario aceptaba las políticas estatales tendientes a orientar la economía y a regular los conflictos laborales, aunque se interrogaba sobre sus límites. Pero el modelo de intervencionismo aconsejado desde sus columnas entraba en franca contradicción con el aumento de la autonomía del Estado que el peronismo prefiguraba. En esta perspectiva, el diario coincidía con los principales sectores propietarios y con sus entidades corporativas. De todas maneras, el enfrentamiento con Perón y luego con los promotores del peronismo se precipitó por las actitudes que éstos asumían con respecto a los asalariados. La línea divisoria entre ordenar el mundo del trabajo y atizar la lucha de clases dio lugar a discusiones no demasiado sofisticadas cuando la politización de los conflictos sociales acordó una dinámica desconocida hasta entonces a la relación entre el Estado, los patrones y los asalariados. Más se aproximaban las

elecciones, mayor fue la cercanía del peronismo a los sindicatos y al conjunto de las clases populares. Posiblemente, los argumentos más fuertes del matutino contra los peronistas eran los referentes al tema de la democracia, y sobre ellos enfatizó más. En este aspecto, La Nación mantuvo estricta coherencia con sus ideas sobre la racionalidad de las mayorías electorales y esperó presenciar la derrota del peronismo en las urnas.

Vista en perspectiva, la actitud del diario frente a las elecciones de 1946 fue más militante que analítica. La distancia que había mantenido hasta 1943 con respecto a los políticos conservadores y la mirada crítica sobre los excesos de algunos sectores propietarios, se perdieron en la polarización suscitada por la aparición del peronismo. Tal como sostiene Lewis Coser, en situaciones de agudización de conflictos se conforman bloques y tienden a desaparecer los matices y diferencias que anteriormente podían dividir a los adherentes a cada una de las coaliciones de fuerzas en pugna<sup>58</sup>. Por sus posiciones anteriores, La Nación tenía pocas posibilidades de referirse a la década del 30 en términos encomiásticos. Pero el bloque antiperonista era mucho más complejo que la simple reivindicación del pasado inmediato; cubría desde el conservadorismo hasta la izquierda. Los candidatos presidenciales de la Unión Democrática pertenecían a la UCR, el partido que el matutino mejor había juzgado en los años precedentes. Para el diario no resultó difícil desempeñar el rol de analista comprometido con la coalición contraria al peronismo. Ocupó así un puesto de combate que influyó notoriamente sobre sus reflexiones, y reflejó la densidad social de una confrontación cuyos resultados modificaron de manera sustancial sus relaciones con el poder político.

#### NOTAS

<sup>1</sup> *La Nación*, 5-6-1943, pág. 4.

<sup>2</sup> "Su conformidad con lo ocurrido expresó la UCR" titulaba la información sobre el tema *La Nación* del 6-6-1943 en pág. 7.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> En un libro publicado dos años después del golpe, Rodolfo Moreno decía, en una posición muy similar a la de *La Nación*, que "el 4 de junio, cuando Campo de Mayo se lanzó sobre la Capital para desalojar al gobierno, pensé que la jornada sería beneficiosa. Entendí que los militares autores del movimiento se proponían terminar lealmente con los males del pasado mediato e inmediato y reconstruir la Nación rápida y eficazmente". Rodolfo Moreno: *De frente a la dictadura*, s/e, Buenos Aires, 1945, pág. 11.

- <sup>5</sup> *La Nación*, 6-6-1943, pág. 6.
- <sup>6</sup> *La Nación*, 8-6-1943, pág. 4.
- <sup>7</sup> *Ibid.*
- <sup>8</sup> *La Nación*, 9-6-1943, pág. 4.
- <sup>9</sup> *La Nación*, 3-7-1943, pág. 4. Destaquemos que, mientras *La Nación* aprobaba el desempeño de las autoridades económicas del gobierno de facto, en el GOU, la logia militar que había impulsado el golpe de Estado, circulaban críticas al ministro Santamarina por considerarlo ajeno a los propósitos del movimiento de junio y ligado a los hombres e intereses de la etapa anterior. Ver Robert Potash: *Perón y el GOU. Los documentos de una logia secreta*, Sudamericana, Buenos Aires, 1984, pág. 246.
- <sup>10</sup> *La Nación*, 17-6-1943, pág. 4.
- <sup>11</sup> *La Nación*, 18-6-1943, pág. 4.
- <sup>12</sup> *La Nación*, 9-8-1943, pág. 6.
- <sup>13</sup> *La Nación*, 9-9-1943, pág. 4.
- <sup>14</sup> La noticia se titulaba "Tiene un nuevo presidente el Departamento del Trabajo", y fue publicada en página 1 de *La Nación* el 28-10-1943.
- <sup>15</sup> *La Nación*, 31-10-1943, pág. 4.
- <sup>16</sup> *Ibid.*
- <sup>17</sup> *La Nación*, 27-1-1944, pág. 4.
- <sup>18</sup> *La Nación*, 30-3-1944, pág. 4. Entre las reglamentaciones a la prensa, el gobierno militar había establecido que los editoriales, artículos, comentarios y colaboraciones que publicaran los diarios debían llevar la firma de sus autores. *La Nación* publicó sus editoriales, entre el 6 de enero y el 28 de marzo de 1944, con la firma de su director, Luis Mitre, o de otros autores, pero bajo la responsabilidad de la dirección.
- <sup>19</sup> *La Nación*, 22-5-1944, pág. 6. El autor agradece al Ing. Enrique Oteiza por haberle llamado la atención sobre el artículo citado.
- <sup>20</sup> *La Nación* publicó la referida nota del director en página 1 el 23-5-1944.
- <sup>21</sup> *La Nación*, 4-6-1944, pág. 6.
- <sup>22</sup> *La Nación*, 8-6-1944, pág. 6.
- <sup>23</sup> *Ibid.*
- <sup>24</sup> *La Nación*, 12-6-1944, pág. 6. El texto completo de la conferencia del coronel Perón fue editado por la Universidad de La Plata: "Curso de cultura superior universitaria", Cátedra de Defensa Nacional, La Plata, 1945, págs. 50-57.
- <sup>25</sup> *La Nación*, 1-7-1944, pág. 4.
- <sup>26</sup> *Ibid.*
- <sup>27</sup> El texto de Perón, fechado el 3 de julio de 1944, decía que no podía "concebir, ni aceptar que el Departamento de Estado pueda prestarse a una tergiversación, presupongo que haya sido sorprendido por alguna fuente malintencionada, suministrándole así una base espuria que lo haya impulsado al error determinante de tan desagradable episodio". Reproducido en *Perón y las Fuerzas Armadas*, Peña Lillo Editor, Buenos Aires, 1982, pág. 51.
- <sup>28</sup> *La Nación*, 8-9-1944, pág. 4.
- <sup>29</sup> *La Nación*, 27-11-1944, pág. 6.

- <sup>30</sup> *La Nación*, 23-12-1944, pág. 4.
- <sup>31</sup> *Ibid.*
- <sup>32</sup> *La Nación*, 29-12-1944, pág. 8.
- <sup>33</sup> *La Nación*, 19-1-1945, pág. 4.
- <sup>34</sup> *La Nación*, 20-4-1945, pág. 4.
- <sup>35</sup> *La Nación*, 24-4-1945, pág. 4.
- <sup>36</sup> *La Nación*, 5-4-1945, pág. 6.
- <sup>37</sup> *La Nación*, 20-4-1945, pág. 4.
- <sup>38</sup> *La Nación*, 26-5-1945, pág. 4.
- <sup>39</sup> *La Nación*, 7-9-1945, pág. 6.
- <sup>40</sup> *La Nación*, 19-9-1945, pág. 4.
- <sup>41</sup> *La Nación*, 20-9-1945, pág. 8.
- <sup>42</sup> *La Nación*, 26-9-1945, pág. 4.
- <sup>43</sup> *La Nación*, 21-10-1945, pág. 6.
- <sup>44</sup> *La Nación*, 11-1-1945, pág. 6.
- <sup>45</sup> *La Nación*, 16-11-1945, pág. 4.
- <sup>46</sup> *La Nación*, 8-12-1945, pág. 4.
- <sup>47</sup> *La Nación*, 22-12-1945, pág. 6.
- <sup>48</sup> *La Nación*, 29-1-1946, pág. 4.
- <sup>49</sup> *La Nación*, 11-2-1946, pág. 4.
- <sup>50</sup> *La Nación*, 18-2-1946, pág. 4.
- <sup>51</sup> *La Nación*, 4-2-1946, pág. 4.
- <sup>52</sup> *La Nación*, 23-2-1946, pág. 4.
- <sup>53</sup> *La Nación*, 25-2-1946, pág. 4.
- <sup>54</sup> *La Nación*, 20-3-1946, pág. 4.
- <sup>55</sup> Ángel Carrasco: *Lo que yo vi desde el 80...*, Editorial Procmo, Buenos Aires, 1947, págs. 354-356.
- <sup>56</sup> *La Nación*, 9-4-1946, pág. 4.
- <sup>57</sup> Ricardo Sidicaro: "Consideraciones sociológicas sobre las relaciones entre el peronismo y la clase obrera en la Argentina 1943-1955", en *Boletín de Estudios Latinoamericanos*, publicación del Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos de Amsterdám, Holanda, N° 31, diciembre 1981, págs. 43-60, y Ricardo Sidicaro: "L'Etat peroniste. Etat et classes sociales en Argentine 1943-1955", Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Thèse pour le doctorat, Paris, Novembre 1977.
- <sup>58</sup> Lewis Coser: *The function of social conflict*, The Free Press, New York, 1956, cap. V.

## VIII

### El gobierno peronista: de la crítica al apoyo

El día de la asunción de Perón a la presidencia, el matutino trató de adoptar la posición de observador relativamente neutro y expresó sus votos en pro del acierto de la gestión de las nuevas autoridades constitucionales<sup>1</sup>. La etapa iniciada se iba a caracterizar por la multiplicación de sus críticas y objeciones contra las iniciativas políticas del gobierno. Lo que *La Nación* estimaba como buena gestión del Estado, subordinada a las leyes y respetuosa de la oposición, fue un modelo transgredido en numerosos aspectos por los peronistas. La poca aceptación de opiniones opositoras llevaría a las autoridades a aplicar sanciones contra sus adversarios. Esas iniciativas le resultarían al diario aún más condenables cuando se ejercían contra actores o entidades tradicionales. Posiblemente el primero y más importante de ese tipo de actos fue el retiro de la personería jurídica a la Unión Industrial Argentina, acción del nuevo gobierno que presentaba las características de un mensaje a las restantes corporaciones empresarias. *La Nación* juzgó totalmente arbitraria la sanción aplicada a la UIA, y tras recordar el papel de la entidad en el desarrollo fabril argentino, solicitó al Poder Ejecutivo su derogación<sup>2</sup>. Poco después, el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia fue otro indicador de la decisión peronista de enfrentar a personalidades e instituciones que gozaban del reconocimiento y apoyo de los sectores tradicionales de la sociedad argentina. El matutino estimó que se estaba ante una medida absolutamente injustificada, que atentaba contra los principios sobre los que se basaba el orden jurídico. Es más: consideró quebrada la continuidad del único poder del Estado que hasta entonces se había hallado a salvo de las peripecias conocidas por la vida política nacional<sup>3</sup>.

Hizo falta muy poco tiempo para que *La Nación* se declarara convencida de que la situación económica empeoraría por obra

del gobierno de Perón. La política intervencionista había ya alcanzado un extremo, decía el diario, con el ordenamiento financiero que acordaba al Banco Central facultades omnímodas, convirtiéndolo en virtual dictador económico del país, y luego, como última fase, "aparece ahora el monopolio que el Estado pretende ejercer sobre el comercio exterior mediante el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio"<sup>4</sup>. Relacionaba la iniciativa de crear el IAPI con experiencias totalitarias como la de los planificadores soviéticos o de la Alemania nazi. Sólo habían transcurrido tres meses del nuevo gobierno, y la columna editorial vislumbraba la inflación que resultaría de mejorar los ingresos de los asalariados sin el correspondiente aumento de la productividad y de la producción; argumentaba que la solución no era subsidiar los precios de los productos de mayor consumo popular, ya que eso traería inevitablemente un aumento del gasto público que demandaría más impuestos y la consiguiente cadena de quebrantos empresarios. Como para muchos otros temas, sugería aprender de las experiencias realizadas por otros países.

Tal como se ha visto, el apoyo oficial a la industrialización había sido planteado con frecuencia por el diario; ahora le había llegado el momento de reflexionar sobre los límites del fomento estatal a la industria. No era cuestión, objetaba, de impulsar indiscriminadamente cualquier actividad fabril. En ese sentido prevenía sobre los riesgos de limitar arbitrariamente la competencia de las importaciones industriales, mediante medidas tomadas por funcionarios que "por su calidad de burócratas, tal como ya ha acontecido, es lo más probable que carezcan de las condiciones indispensables para percibir las consecuencias de sus prohibiciones en el presente y futuro desarrollo del país"<sup>5</sup>. Si esto sucedía, decía, los industriales locales se encontrarían en libertad de acción para vender a precios elevados artículos de cualquier calidad. El sector industrial era también objeto de preocupación cuando se trataba de reflexionar sobre los conflictos sociales. Ya Perón había sido criticado en épocas anteriores por la parcialidad de sus políticas a favor de los asalariados. Según el diario esa tendencia continuó y se agravó en los primeros años de su presidencia. La multiplicación de huelgas que, en su opinión, eran toleradas, apoyadas y hasta fomentadas desde las altas esferas generaba no sólo efectos perturbadores sobre la economía, sino también de dislocación del orden social. Si en otros momentos los conflictos en el mundo del trabajo eran caracterizados por el matutino como parcialmente justificados, dadas las bajas remuneraciones o el incumplimiento de las reglamentaciones, esta perspectiva no le parecía adecuada en 1946, con los niveles

salariales mejorados y el Estado y los sindicatos haciendo respetar las normas laborales. Para destacar los cambios que se producían en la naturaleza de los conflictos daba como ejemplo negativo una huelga realizada en una empresa tucumana, donde los operarios y el sindicato demandaban el reemplazo de parte del personal de la administración<sup>6</sup>.

El problema de la libertad de expresión y del funcionamiento de los diarios fue otra cuestión que llevó a *La Nación* a criticar al gobierno peronista. Sin duda, los medios de prensa fueron vistos desde el poder como factores políticos en estos años de un modo mayor que en épocas anteriores. Probablemente eso se debiera a que, eclipsados los partidos conservadores por la polarización producida entre peronistas y radicales, ciertos diarios asumían para el gobierno y sus partidarios el carácter de representantes de los sectores de mayor poder económico y prestigio social. A la pregunta "¿dónde está la oligarquía?" formulada por *La Nación* hacía poco tiempo, es imaginable que muchos peronistas hubieran respondido: "detrás de los grandes diarios". Así, no sólo el gobierno de Perón se mostró especialmente poco tolerante con las críticas y objeciones periodísticas, sino que, además, para los sectores sociales que lo apoyaban y que seguramente no eran lectores de la prensa opositora, esos medios de comunicación aparecían como la manifestación más clara de la opinión del bloque político adversario. Apedrear sus edificios o intentar incendiarlos, se convirtió en una ceremonia ritual al finalizar las grandes movilizaciones de apoyo al gobierno. Es interesante señalar que ante una de las primeras ocasiones en que se produjeron ese género de hechos, luego de un acto organizado por la CGT en adhesión al Primer Plan Quinquenal, en un editorial *La Nación* buscó establecer la diferencia entre el "pueblo" y los "agitadores", atribuyendo a estos últimos la autoría de los desmanes. Era importante, en su opinión, que las autoridades tuvieran en cuenta esos riesgos para prevenirlos. Esa distinción entre la actitud de los obreros y la de los "infiltrados" no debía ignorarse, afirmaba, para no atribuir a los primeros la responsabilidad de los atentados contra la democracia perpetrados por los segundos. Pero la crítica caía sobre el gobierno cuando desde los poderes públicos se adoptaban iniciativas que por distintas vías afectaban a los medios de prensa. Entre los primeros casos que motivaron su protesta se encontró una decisión del gobierno tucumano de aplicar nuevos impuestos a diarios y revistas. Más allá de la significación económica del tributo, las objeciones se fundaron en que, sin necesidad de censura, se podía acotar la libertad de expresión mediante otros medios<sup>7</sup>. El matutino recordaba, tam-

bién, que durante los gobiernos de Castillo y de los militares se habían conocido restricciones en la materia, y alentaba cierto optimismo considerando que a la larga la libertad de expresión terminaría por predominar.

En las elecciones de 1946 en una sola provincia, Corrientes, habían triunfado los candidatos a la gobernación opuestos al peronismo. Corrientes se convirtió en un caso test al que se dirigieron múltiples observaciones. El mismo reveló, además, la escasa aceptación del gobierno nacional a una situación provincial controlada por la oposición. Para *La Nación*, la administración correntina era un ejemplo de democracia y de respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos. En especial en el plano electoral, la no injerencia de los funcionarios en las lides políticas era apreciada como la mejor prueba de su vocación democrática. La situación de la provincia con motivo de la preparación de unas elecciones parciales le sirvió al matutino para exponer sus ideas sobre la exacta dimensión de la libertad electoral. Más allá de las formalidades de los procedimientos comiciales, los periodos preelectorales debían caracterizarse, a su juicio, tal como ocurría en Corrientes, por la plena igualdad de los partidos en pugna. Si faltaban esos aspectos, decía, las instituciones democráticas tenían sólo vigencia parcialmente<sup>8</sup>. La intención de contrastar la dinámica política del resto del país con el proceso correntino era evidente. Pero, más allá de las referencias puntuales, en sus consideraciones sobre la libertad electoral el comentario apuntaba a relativizar la legitimidad que los peronistas entendían haber conquistado en las pasadas elecciones nacionales, así como la que podían pretender en futuros comicios si hacían jugar a su favor el peso del gobierno. La experiencia correntina se cerró, en septiembre de 1947, cuando el Congreso Nacional decidió la intervención de la provincia. El matutino fue extremadamente crítico de esa decisión.

En el curso de 1947 las previsiones y temores planteados por la oposición sobre los riesgos que corría la libertad de expresión comenzaron a convertirse en realidades. Ante la decisión del Banco Central de suspender los permisos de cambio para importar papel para diarios, *La Nación* manifestó su desacuerdo y denunció su trasfondo político. Desechaba el efecto económico de la medida, y decía que el papel para diario había representado en 1946 sólo el 2,8% de las importaciones del país, por lo cual no se justificaba un ahorro de divisas en ese rubro<sup>9</sup>. Para reforzar sus argumentos, afirmaba que si la demanda argentina se retiraba del mercado mundial de papel se corría el riesgo de quedar sin posibilidades de abastecimiento cuando, al normalizarse la

situación financiera local, se quisiera adquirir nuevamente esa materia prima. Con independencia de las fundamentaciones técnicas, en todo momento el matutino se preocupaba por mantener la definición del problema del papel en el plano político.

Las limitaciones a la libertad de expresión durante la gestión peronista, con la consiguiente clausura de medios de prensa, alcanzaron inicialmente a los periódicos de fuerzas políticas y afectaron luego a los independientes o de carácter comercial. En agosto de 1947 fueron cerrados el periódico *Provincias Unidas*, de la Unión Cívica Radical, y *La Vanguardia*, el órgano del Partido Socialista. Al mes siguiente, *Tribuna Democrática*, del Partido Demócrata, dejó de aparecer por no encontrar talleres dispuestos a imprimirlo. Por una causa similar cesó de publicarse, en Bahía Blanca, *Nuevos Tiempos*, del socialismo local. En San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, fue cerrada la imprenta del órgano conservador *Tribuna Demócrata*. Los motivos fueron diferentes en cada caso. El periódico radical fue sancionado por agraviar en un artículo a un país amigo, los Estados Unidos. *La Vanguardia*, por violación de normas municipales; según la resolución del intendente Siri, la descarga de las bobinas de papel para el semanario bloqueaba la circulación de vehículos y peatones, lo que se sumaba a las molestias ocasionadas a los vecinos con los ruidos y voces de los expedidores<sup>10</sup>. En la imprenta de *Tribuna Demócrata*, una inspección sobre cumplimiento de leyes laborales encontró publicaciones injuriosas para las autoridades nacionales; la Policía Federal inició un sumario por desacato y detuvo a su propietario, Vicente Solano Lima<sup>11</sup>. *La Nación* editorializó sobre el caso de *Provincias Unidas* y expresó su crítica al carácter totalmente arbitrario que había tenido esa clausura<sup>12</sup>. Además, como lo había hecho para otros temas en los que buscó plantear objeciones de un modo menos frontal, la referencia a cuestiones internacionales le permitió explayarse extensamente sobre la prensa controlada, para mostrar que ése era un manejo típico del totalitarismo soviético. A propósito de una reunión de las Naciones Unidas, el diario desarrolló conceptos expuestos por la representante norteamericana, Eleonora Roosevelt, donde diferenciaba la prensa libre de aquella sometida al Estado. Con términos inequívocos y nada diplomáticos concluía: "Únicamente la prensa controlada puede conferir a lo que es inexacto una estabilidad artificial, una estabilidad venenosa"<sup>13</sup>.

La preocupación del diario por los conflictos sociales aumentó en la medida que éstos no se limitaban al ámbito fabril, hasta entonces el más habitual, sino que se extendían a otros lugares de trabajo. Así, con pesar señalaba que "la inquietud que domina

en el campo proletario parece haber penetrado también en el espíritu de los gremios de servicio público y haberlos desviado de su antigua conducta<sup>14</sup>. Recalcaba que la conflictividad social llegaba a muchas ciudades de provincia de una manera desconocida anteriormente. El clima social, a su entender, se estaba exasperando excesiva e injustificadamente, por lo que pedía a las autoridades el uso de una racional energía para asegurar el mantenimiento del orden. Para ilustrar la gravedad de la situación social y el deterioro económico provocados por las huelgas, sintetizaba estadísticas oficiales al cumplirse el segundo año del gobierno peronista y mostraba que en 1947, solamente en la Capital Federal, se habían perdido casi tres millones y medio de jornadas de trabajo, un 70% más que el año anterior. Para hacer aún más contundentes sus argumentos, decía que por cada 100 huelguistas en 1935 hubo 1.038 en 1947<sup>15</sup>.

La otra fuente de constante inquietud del diario era la marcha de la economía rural. Allí, el IAPI se convirtió en frecuente blanco de las protestas de las corporaciones agrarias, cuyos argumentos y quejas retomaba editorialmente el matutino. A un año de iniciada la gestión peronista, la frustración de los productores agropecuarios le parecía lamentable; éstos habían esperado aprovechar las favorables condiciones internacionales, pero los precios que el IAPI pagaba por los granos eran muy inferiores a los del mercado mundial, lo que deterioraba los ingresos de todos los sectores relacionados con la producción rural. Señalaba también el aumento excesivo de los salarios rurales y, frente a un panorama portador de tantos signos desalentadores, aconsejaba a los empresarios del campo volcarse a la ganadería, disminuir la superficie sembrada y protegerse de la caída de los precios de los granos mediante explotaciones mixtas<sup>16</sup>.

Para *La Nación*, otro aspecto criticable de la gestión peronista eran las excesivas cargas fiscales que recaían sobre el agro. Además de los impuestos nacionales, veía como peligrosa la tendencia al aumento de los tributos de orden provincial. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, objetaba la existencia de gravámenes que apuntaban especialmente a las grandes explotaciones agropecuarias. En su opinión se trataba de medidas injustas y discriminatorias que, decía, so pretexto de aplicar tributos a los latifundios punían a grandes establecimientos agrícolas y ganaderos formados con muchos años de intensa labor y enormes sacrificios, y eso terminaría por llevarlos a la liquidación. Para aclarar sus objeciones a la política tributaria implementada por las autoridades bonaerenses, señalaba: "En economía se entiende por latifundio una vasta extensión de tierra

inexplotada de pertenencia de una misma persona"<sup>17</sup>. No correspondía, a su entender, aplicar ese término a las grandes estancias pobladas de numeroso ganado y cultivadas con variadas clases de granos. De allí que juzgara erróneo fijar los impuestos más altos a esas fincas. Además, le parecía aún más criticable que para aplicar el tributo al latifundio no se tomara en cuenta la extensión de cada explotación sino la superficie del conjunto de los establecimientos rurales que poseía cada persona. Como sucedía cuando analizaba la comercialización estatal de las cosechas, el problema de la mecanización agraria o el de los salarios agrícolas, en el caso de los impuestos llegaba a la misma conclusión general: todo conducía al desaliento de la producción agropecuaria.

La posibilidad de una reforma de la Constitución que permitiera la reelección de Perón se convirtió desde 1948 en tema central de la discusión política. Por ello, el diario comentó con satisfacción una exposición del presidente en desacuerdo con la idea de la reelección. Así pudo coincidir, después de mucho tiempo, con el primer magistrado. Perón había demostrado, en su opinión, ser un profundo conocedor de los riesgos de un sistema tendiente a perpetuar a los hombres en el poder<sup>18</sup>. El matutino no sólo estaba en contra de una eventual reelección del presidente, sino, más globalmente, de la reforma de la Constitución. Cuando la Cámara de Diputados votó la declaración sobre la necesidad de reformar el texto constitucional, el análisis editorial consideró que en el país no existían las condiciones de serenidad imprescindibles para llevar adelante esa tarea. Tampoco cabía pensar, decía, que la Constitución impidiera el desarrollo de la legislación social, ya que la evolución argentina mostraba cómo la Carta Magna había sido perfectamente compatible con todos los progresos en la materia. La "Biblia política", como la llamaba Mitre, no podía, tampoco, modificarse sin consultar los puntos de vista de las instituciones y las personalidades autorizadas y esos pasos previos, según *La Nación*, los legisladores no tenían ningún interés en darlos, por lo que sugería al Senado que al tratar el proyecto que le enviaría la cámara baja meditara antes de tomar una decisión<sup>19</sup>. Contrariando esas expectativas, los senadores aprobaron el proyecto de declaración iniciado en Diputados. El matutino lamentó esa resolución, y como postrera sugerencia pidió que al menos se sancionara una ley detallando los puntos sobre los cuales se deberían introducir reformas, pero eso tampoco sucedió <sup>20</sup>. Así, el día de las elecciones de los convencionales constituyentes, en un análisis totalmente pesimista, sostuvo que en tanto los puntos a reformar no

habían sido explicitados, quienes resultaran designados en esa jornada recibirían un mandato en blanco y “no cabía excluir de antemano ningún posible extremo de su espíritu innovador”<sup>21</sup>. Esas inquietudes se convirtieron en realidad, y el “espíritu de innovación” de los convencionales alcanzó en lo político, lo económico y lo social dimensiones que seguramente superaron todos los temores iniciales del diario. La reforma incluyó la reelección del presidente.

El peronismo contaba con un amplio espectro de medios gráficos para defender sus realizaciones y hacer frente a sus críticos. De todas esas publicaciones, *Argentina*, revista mensual cuyo primer número salió en enero de 1949, fue por su estilo, tipo de presentación y temáticas abordadas, una de las que pareció más claramente orientada a una franja de lectores cuyo origen social o nivel cultural podía suponerse similar al usualmente atribuido al de *La Nación*. En sus páginas, la revista reunía colaboraciones de intelectuales y escritores, no necesariamente peronistas, sobre temas ajenos a la política, y artículos apologéticos de la obra gubernamental. Reflexiones acerca de acontecimientos del pasado, poesía, notas de actualidad y comentarios sobre novedades provenientes de los centros mundiales de alta costura, conferían a *Argentina* un estilo distinto al de otros periódicos y revistas con los que compartía la adhesión al peronismo. Como era de prever, no podían faltar en sus páginas los ataques contra los diarios tradicionales. De una manera que denotaba la decisión de mantener el mismo plano de argumentaciones fundamentadas con que abordaba otras temáticas, *Argentina* puso singular perseverancia en criticar a *La Nación*. Para llevar a cabo su ofensiva, la revista recordaba los textos contra los malos procedimientos de la prensa escritos por Mitre, Alberdi, Sarmiento y Groussac<sup>22</sup>. Una a una, intentaba desmontar las acusaciones de falta de libertad de expresión, mientras aludía al carácter meramente comercial, tendencioso y, quizás, extranjero de la empresa editora de *La Nación*. Evocaba una versión difundida, afirmaba, un par de décadas antes, según la cual por aquella época un quinto de las acciones del matutino fundado por Mitre había sido caucionado a favor del consorcio internacional Bemberg, hecho revelador, en su opinión, de la dificultad de saber a ciencia cierta a quién pertenecían realmente los diarios<sup>23</sup>. Cabe, sin embargo, señalar que los nexos entre la beligerante revista peronista y *La Nación* no estaban totalmente cortados, si se atiende a la existencia de colaboradores que participaban en ambas publicaciones. Tal fue el caso del humorista Luis J. Medrano, que escribía y dibujaba en el aludido

mensuario peronista, pero que había comenzado desde 1941 a publicar sus "grafodramas" en las páginas de *La Nación*<sup>24</sup>.

El desenvolvimiento de las empresas de servicios públicos nacionalizadas fue otro tema abordado críticamente por el diario durante el gobierno peronista. Si bien, tal como se ha visto, en otros momentos había objetado el desempeño de las empresas concesionarias extranjeras de teléfonos o ferrocarriles, producida su transferencia al Estado, los análisis editoriales parecieron llegar a la convicción de que aquel tiempo pasado no había sido tan malo. Así, como parte de la argumentación general contra los efectos negativos de la intervención del Estado en la economía, se comenzó a objetar el encarecimiento y deterioro de los servicios prestados por las empresas públicas. Las tarifas telefónicas eran consideradas en 1949 más elevadas que cuando el servicio estaba en manos de concesionarios privados; y en cuanto a los ferrocarriles, no sólo los usuarios pagaban precios más altos para viajar o transportar carga, sino que, además, la calidad de las prestaciones se deterioraba. Todo indicaba, según el diario, que el déficit de explotación de las empresas que habían pasado a la gestión estatal ocasionaría cada vez mayores perjuicios a toda la sociedad, ya fuera por los aumentos de tarifas o por la transferencia de recursos oficiales indispensables para paliar sus desequilibrios presupuestarios<sup>25</sup>.

A mediados de 1949 *La Nación* denunció torturas infligidas por la policía a opositores al gobierno. En varias oportunidades se ocupó de recriminar a las instituciones policiales y, por elevación, a las autoridades nacionales, las violencias ilegales ejercidas contra detenidos por causas políticas. Dada la naturaleza del tema, es probable que esas acusaciones se encontraran en los límites de lo que el régimen peronista aceptaba de la prensa. El diario recordaba la prohibición constitucional de ejecutar vejámenes físicos, e intimaba a la conducción de la policía a informar sobre la eventual realización de sevicias en sus dependencias. Otorgaba veracidad al testimonio de un estudiante universitario que afirmaba haber sido interrogado con tormentos, sostenía que de ninguna manera se podía creer en simples iniciativas individuales de personal subalterno y trasladaba la responsabilidad a las autoridades de la institución<sup>26</sup>. Las acusaba de aplicar tratos de extrema crueldad a detenidos políticos sin pruebas ni fundamentos. Como consecuencia de las denuncias y protestas por las torturas policiales, el Poder Legislativo decidió crear una comisión investigadora. *La Nación* dijo entonces que la opinión pública esperaba el esclarecimiento total de las denuncias, la rigurosa sanción de los culpables y la eliminación definitiva de ese

tipo de prácticas represivas<sup>27</sup>. La comisión parlamentaria, presidida por el diputado peronista Emilio Visca, terminó entrando en la crónica histórica no ya por la depuración de la policía, sino en virtud de sus iniciativas contra diarios y entidades considerados poco afectos al gobierno de Perón.

La comisión Visca vio ampliados sus objetivos originarios a causa de una denuncia del diario oficialista *Democracia*, sobre el origen de los fondos utilizados tres años antes por la Unión Democrática y acerca de una presunta intervención extranjera en la política argentina. El organismo bicameral se dedicó a allanar diarios, entidades empresarias, políticas y culturales. Comenzó por intervenir, en la última semana de noviembre de 1949, la contabilidad de *La Nación*, *La Prensa*, *Crítica*, *El Mundo* y *La Razón*. Procedimientos análogos realizó en las agencias *United Press* y *The Associated Press*, esta última instalada en el edificio de *La Nación*. Frente a las actuaciones de la comisión Visca, el matutino, en lugar de publicar comentarios editoriales, reprodujo los juicios adversos de la prensa de otros países. Así, optó por lo que podría denominarse editoriales por interposiciones editoriales, que cumplieran la función adicional de mostrar los costos internacionales derivados de las medidas contra la libertad de prensa. Entre otros, reprodujo un editorial de *The New York Times*, donde el prestigioso diario norteamericano afirmaba, entre otras consideraciones: "Es posible que el presidente Perón y quienes lo rodean no puedan concebir que sus opositores tengan la temeridad de dar a conocer sus opiniones a menos que sean sobornados para hacerlo, preferiblemente por agentes extranjeros"<sup>28</sup>. Además de adoptar esa estrategia, siguió de cerca los procedimientos de la comisión Visca y su información sobre los mismos asumía objetivamente cierto carácter de denuncia. Por otra parte, la manera de presentar las crónicas del desempeño de Visca frente a sus ocasionales perseguidos o interpelados, o sobre sus prolongadas sobremesas, trasuntaba un matiz de ironía que mostraba al diputado peronista en actitudes lindantes con lo absurdo<sup>29</sup>.

La comisión Visca, además de intervenir la contabilidad de muchos diarios de la Capital y del interior, en algunos casos impuso clausuras. A *El Intransigente* de Salta, tras someterlo a la inspección contable, le intervino por tiempo indeterminado las existencias de papel, impidiendo así su publicación. *El Intransigente* había sido fundado en 1920, y su director y propietario era David Michel Torino, ex diputado en la legislatura salteña por el radicalismo en los años 1918-22 y 1932-36, y presidente de la Bolsa de Comercio de Salta por una década y media. *La Nación*

criticó editorialmente la medida adoptada por la comisión Visca contra *El Intransigente*, y asoció ese caso a la episódica clausura del diario católico *Los Principios* de Córdoba, por decisión de la Municipalidad. La reflexión afirmaba que ambas resoluciones, distintas por su origen y fundamentos, tenían una misma e inculcable consecuencia: la restricción de la libertad de prensa<sup>30</sup>. El aludido texto de *La Nación* fue reproducido por la edición clandestina que comenzó a publicar *El Intransigente* luego de su clausura oficial. En el mismo número de ese boletín, se incluía la declaración del Bloque Parlamentario Nacional de la Unión Cívica Radical, donde denunciaba la tergiversación de las funciones originariamente asignadas a la comisión Visca<sup>31</sup>.

Las protestas de los legisladores opositores no tuvieron influencia para modificar la actitud de la comisión. Más aún, ésta mostró una decidida voluntad de no cejar en su tarea de clausurar diarios. Al comenzar 1950 cerró *La Hora*, el periódico del Partido Comunista, y *La Nueva Provincia*, un tradicional diario de Bahía Blanca. En ambos casos, la resolución se fundaba en la ausencia, junto a la fecha de aparición, de la frase Año del Libertador General San Martín, obligación legalmente establecida con motivo de celebrarse el centenario de la muerte del prócer. La dirección de *La Hora* sostuvo en su descargo que eso había sucedido un solo día por un involuntario error, explicación desechada por la comisión Visca, cuyo argumento fue que esa falta revelaba el carácter de diario de la Unión Democrática de la publicación sancionada. Por su parte la CGT hizo pública una declaración de apoyo a la sanción impuesta al mencionado periódico de izquierda<sup>32</sup>. Cabe destacar que la comisión bicameral cerró también el semanario *Orientación*, órgano del Comité Central del Partido Comunista, definiéndolo como un medio de prensa dedicado a engañar a los trabajadores.

Durante 1950 *La Nación* abordó numerosos temas de indole abiertamente crítica del gobierno. Ese año adquirió mayor importancia el problema de las restricciones de papel para diarios, que, en su opinión, el Estado manejaba con la intención de perjudicar a los medios de prensa desfavorables a su acción. Para el matutino no había ninguna razón para limitar la importación de papel ya que, según sostenía, la producción mundial había aumentado notablemente, sus precios habían descendido y de todas partes, sobre todo de fuera de la inaccesible zona del dólar, llegaban constantes ofrecimientos convenientes y cabía, a su juicio, aceptarlos en tiempo<sup>33</sup>. Descartadas las explicaciones económicas sólo quedaba, en su opinión, imaginar inconfesables motivaciones políticas. En especial, si se tenía en cuenta que, a su entender, la

distribución del papel privilegiaba a los medios favorables a Perón.

*La Nación* también criticó múltiples aspectos de la política educativa. En especial, se opuso a lo que definía como la voluntad de las autoridades de ideologizar la enseñanza. Las experiencias totalitarias en educación, la soviética, las del fascismo italiano y la del nacionalsocialismo alemán, eran presentadas como ejemplos de los extremos negativos a que se podía llegar cuando se hacía propaganda política en el sistema escolar. A raíz del establecimiento de un sistema unificado de textos en la escuela primaria, el diario homologaba esa iniciativa de la Secretaría de Educación a cargo de Oscar Ivanissevich, con experiencias realizadas en la URSS por el comisario de Instrucción Pública Gregorie Zinoviev y en Italia por los ministros de Educación de Mussolini y recordaba, además, las ideas que sobre los jóvenes había formulado Baldur Von Schirach, jefe de las juventudes hitleristas<sup>34</sup>. Probablemente, fue en los comentarios sobre la política educativa y la seguida en materia de libertad de expresión, donde el diario caracterizó con más frecuencia las medidas oficiales como totalitarias.

Es interesante señalar que, durante el mismo mes en que el diario realizaba esas objeciones a la política educacional, el sacerdote Julio Meinvielle, ensayista del nacionalismo católico, sostenía en el periódico *Presencia* que *La Nación* defendía en sus editoriales ideas totalitarias en materia de educación. Meinvielle formulaba esta afirmación a propósito del editorial del 17-4-1950, donde el matutino defendía el monopolio del Estado en la formación de educadores de enseñanza media, que citaba: "La doctrina que sustenta la formación de educadores como una función exclusiva del Estado prevalece en la mayor parte de los países europeos y americanos y debiera ser indeclinable en un pueblo como el nuestro, donde la educación popular y la segunda enseñanza trabajan en primer término para asegurar la unidad espiritual de la Nación"; y añadía Meinvielle: "Si se hubiera propuesto *La Nación* dar una fórmula precisa y perfecta del totalitarismo, no la hubiera hallado más cumplida (...) *La Nación* acaba de documentar su totalitarismo"<sup>35</sup>. En el referido editorial, el diario criticaba al gobierno peronista por haber acordado a una institución católica el derecho de otorgar títulos de profesor de segunda enseñanza. Argumentaba que sólo en situaciones de extrema necesidad se había permitido en otras ocasiones a institutos católicos formar docentes primarios, pero la experiencia y los resultados podían considerarse discutibles. Mostraba resquemores sobre el tipo de preparación que podían brindar las insti-

tuciones privadas de raíz confesional, y reclamaba "que los educadores se formen bajo un sistema científico y pedagógico de intenso contenido y claros fines de cultura y nacionalidad"<sup>36</sup>. Señalaba, además, que al tener los títulos acordados por la institución católica carácter oficial, sus egresados estarían habilitados para ejercer la docencia en escuelas públicas, restando posibilidades ocupacionales a los graduados en las universidades e institutos estatales dedicados a formar profesores secundarios. Conceder el derecho de formar docentes, aseveraba *La Nación*, no era aceptable ni como regla general ni como excepción privilegiada. Estas posiciones reflejaban, para Meinvielle, un pensamiento totalitario, pero mostraban que el matutino prefería los "riesgos" de una educación peronista de los docentes antes que la desarticulación del monopolio estatal, al que continuaba considerando como el único garante para una formación de profesores ajustada a los requisitos básicos de un saber científico y de carácter universalista.

También el diario siguió con preocupación el funcionamiento de las universidades durante esa década, no sólo en el plano educacional, sino también en cuanto a algunos casos de persecución política verificados en dichas casas de altos estudios. El entrecruzamiento entre lo universitario y la política le dio motivo para editorializar sobre lo absurdo e inadecuado de las disposiciones de algunas universidades del país, incluida la de Buenos Aires, que exigían a los estudiantes para su inscripción, o para mantener su condición de alumnos regulares, la presentación de certificados policiales de buena conducta. El diario decía que, como esos certificados no se referían a delitos comunes sino a actividades políticas o de orden social, resultaba que el acceso a las universidades quedaba supeditado a los criterios de la policía. En el análisis abordaba la manera superficial y nociva de emplear la acusación de "comunista". Para ilustrar sobre los riesgos de esa actitud, citaba un diario de Nueva York que en esos días había afirmado: "Para ciertos gobiernos autoritarios del continente todos sus adversarios son comunistas"<sup>37</sup>. Ese uso indiscriminado de las acusaciones de comunismo hacía pender permanentemente, según el matutino, la amenaza de persecución sobre cualquier ciudadano, tanto más si se trataba de personas que no tenían notoriedad pública. Esto sucedía, a su juicio, con estudiantes y obreros<sup>38</sup>.

El enfrentamiento y la crítica directa no fueron la única manera de hacer oposición al gobierno en los editoriales. El ensayista Roberto F. Giusti, quien en la época colaboró en la sección editorial, escribió que la burla y la ironía fueron recursos

empleados para aludir un tanto crípticamente a la situación reinante <sup>39</sup>. El que puede considerarse como una declaración de principios de esa particular forma de elaborar editoriales en clave sardónica fue uno denominado "El derecho a sonreír", donde se explicaba que allí donde no había libertad de expresión existía siempre la alternativa de la mordacidad ante el poder <sup>40</sup>. Pero, posiblemente, el *nec plus ultra* en el género, al menos de los redactados por Giusti —y sin duda porque él lo estimó así lo reprodujo como ejemplo en uno de sus libros—, fue el titulado "Una hoja de apio", en el cual comentaba en tono burlón una reglamentación estatal que fijaba el precio del atado de verdura y prescribía que el mismo debía contener por lo menos una hoja de la umbelífera cuyo nombre llevaba el ingenioso editorial. Es difícil imaginar la reacción ante el texto de Giusti de un hipotético e inquisitorial *Big Brother*, pero, seguramente, ese defensor de la libertad de prensa que fue George Orwell hubiera sonreído al leerlo <sup>41</sup>.

El reconocimiento que la prédica de *La Nación* había conquistado en las filas de la Unión Cívica Radical durante los años del peronismo encontró, entre otros, un buen reflejo en el discurso que pronunció el diputado provincial Carlos H. Perette en la legislatura de Entre Ríos, al producirse, en noviembre de 1950, el deceso de Luis Mitre, director del diario desde 1932. Perette sostuvo que el fallecido hombre de prensa no había tenido militancia en su partido y que el matutino había criticado con severidad y rigor al radicalismo, pero ello no obstaba a su juicio para reconocerle grandes y fundamentales méritos a toda su trayectoria. En especial, resaltaba su lucha a favor de la libertad de expresión y el mantenimiento de una voz periodística independiente e insobornable <sup>42</sup>. Luis Mitre fue sucedido por su hijo Bartolomé, quien había cumplido funciones de subdirector durante los años precedentes.

A comienzos de 1951, *La Nación* comentó con satisfacción una declaración de una sección sindical ferroviaria a favor de la libertad de prensa. Más allá del carácter coyuntural y local que podía tener esa toma de posición, el hecho fue analizado como un indicio de cambios en el mundo obrero. Al respecto, el diario destacó que era la primera vez en mucho tiempo que una asociación sindical se preocupaba por la efectividad de las garantías constitucionales cuya vigencia interesaba a la generalidad de los ciudadanos. Eso había sido común, decía, en otras épocas, "cuando la defensa de las libertades públicas constituía uno de los signos del idealismo político que animaba a las masas trabajadoras"<sup>43</sup>. Pero más tarde, en su opinión, se había inculcado en

ese sector social el escepticismo con respecto al mérito y utilidad de los grandes principios institucionales, incitándolo a preocuparse sólo por sus beneficios materiales. De allí que la referida declaración, emitida por la seccional de Ingeniero White de La Fraternidad, el sindicato de los maquinistas y fogoneros ferroviarios, le pareciera una auspiciosa señal del retorno de una mayor conciencia cívica al seno del movimiento obrero. Paradójicamente, una serie de medidas gremiales iniciadas en esos meses, detrás de las cuales la oposición denunció la presencia del gobierno, marcaron el comienzo del conflicto que finalizó con la clausura periodística con mayores ecos de todo el período: la del diario *La Prensa*.

El conflicto de *La Prensa* empezó, en enero de 1951, con un reclamo del sindicato de vendedores de diarios, considerado por la empresa injustificado y discriminatorio. Primero, una huelga de distribuidores impidió la circulación, luego se paralizaron los talleres. La dirección de *La Prensa* denunció a los partidarios del gobierno por coaccionar a su personal, pero el conflicto continuó y alcanzó su punto culminante al cabo de un mes, con una refriega y el asesinato de uno de sus obreros. *La Nación* durante todo el diferendo expresó su solidaridad con su colega, mostró los riesgos que la situación entrañaba para la libertad de prensa y responsabilizó de los mismos al gobierno. Recordaba la historia de ambos diarios: habían nacido juntos y los habían separado en otras épocas disímiles orientaciones militantes, pero luego, "ya desvinculados de los partidos, pero consecuentes con el idealismo republicano de sus fundadores, quedaron al servicio exclusivo de los intereses nacionales y de los principios que tienen su tabla luminosa en la Constitución de 1853"<sup>44</sup>. En el editorial citado se traslucía la voluntad de mantener posiciones firmes, aunque corriera el riesgo de enfrentar una situación similar a la de *La Prensa*. Como corroborando esa presunción, en una asamblea realizada por la CGT, un miembro del Comité Central Confederal propuso enviar una nota a *La Nación* para sugerirle la modificación de su estilo de información, so pena de sufrir sanción del movimiento obrero<sup>45</sup>. Cuando el Poder Legislativo decidió intervenir *La Prensa*, la reflexión del editorial de *La Nación* sostenía, entre muchas otras consideraciones: "De los acontecimientos de estos críticos años, en los que a diario se sienten crujir los cimientos del orden jurídico, el proceso contra *La Prensa* es sin duda el que más ha conmovido al país, por lo que representa como síntoma extremo"<sup>46</sup>. A pesar de la gravedad de la situación, el comentario no perdía cierto optimismo; afirmaba que la experiencia había demostrado cómo las decisiones contra la libertad

de expresión no podían tener efectos duraderos, y profetizaba que el matutino clausurado, convertido en símbolo, volvería a aparecer con sus tradicionales principios y características.

En los debates parlamentarios sobre la expropiación del diario de la familia Paz, el diputado peronista John William Cooke hizo una encendida y meticulosa exposición de cargos y acusaciones para fundamentar la adopción de la medida. De fuerte contenido antiimperialista, el discurso de Cooke fue, posiblemente, una de las mayores condenas formuladas en el Parlamento argentino contra un diario tradicional. Sus argumentaciones lo colocaban más cerca de las meditaciones sobre la legitimidad de limitar la libertad de prensa expuestas en la época del terror por Maximillian Robespierre que de sus propios correligionarios. Emilio Visca, en cambio, prefirió un perfil más módico y se refirió al carácter antiperonista de la prédica del cuestionado medio de comunicación. Ambos diputados coincidieron en recordar la oposición de *La Prensa* al gobierno de Yrigoyen, con el nítido objetivo de mostrar a los legisladores radicales que no debían oponerse a la sanción. El vicepresidente del bloque radical, Arturo Frondizi, criticó la medida propuesta por los peronistas y señaló entre los diarios amenazados por la política oficial a *La Nación*. Las intervenciones de Cooke y de Visca fueron evocadas editorialmente por el matutino para mostrar que a partir de los debates quedaba totalmente fuera de controversia el carácter netamente político de la cuestión. La inusitada instancia parlamentaria, afirmaba, "habrá tenido el favorable efecto de situar los hechos en el verdadero terreno en el que se originaron aventando cualquier equívoco"<sup>47</sup>.

¿Después de *La Prensa* le tocaría a *La Nación* ser alcanzado por las persecuciones oficiales? El matutino había considerado que el proyecto de su clausura estaba en las intenciones de los gobernantes. El temor pareció convertirse en realidad cuando las autoridades de la Aduana, un tiempo antes de iniciado el litigio con *La Prensa*, dictaron un fallo administrativo que modificó la interpretación vigente de una reglamentación de 1939 que eximía de derechos de importación al papel utilizado para imprimir diarios, periódicos, libros, folletos y revistas, *excluidos los de carácter comercial*. La franquicia había beneficiado por igual a todas las publicaciones periodísticas del país durante más de una década. Pero en 1951 los funcionarios de la Aduana consideraron que debía distinguirse el uso del papel según se dedicara a noticias y comentarios o a imprimir avisos y publicidad comercial en el mismo ejemplar de un diario. Según ese criterio, la parte de papel empleada en espacios de publicidad debía gravarse con

impuestos similares a los aplicados a la importación de dicha materia prima cuando se utilizaba para imprimir folletos comerciales. Durante más de diez años no se había hecho esa particular diferenciación sobre el uso del papel de diarios, pero cabía según la Aduana solicitar a las empresas editoras de *La Nación* y de *La Prensa* que saldaran retroactivamente el total adeudado por los impuestos acumulados a lo largo del período en cuestión. El sumario se inició únicamente contra los dos diarios mencionados, lo que fue visto por *La Nación* como otro signo de discriminación. El matutino sostenía que el problema no era impositivo, sino que existía la voluntad política de atacar a la prensa independiente. El estrangulamiento económico que implicaba la medida era resumido diciendo: "Forzar a los diarios de la República a abonar derechos de una parte del papel utilizado en los últimos trece años, es ponerlos en situación de liquidarse en las peores condiciones imaginables"<sup>48</sup>. Si bien la resolución de la Aduana no se hizo plenamente efectiva, constituyó un elemento revelador de las condiciones de alta vulnerabilidad en que se hallaban los diarios desafectos al gobierno.

Al aproximarse las elecciones de renovación presidencial, el matutino criticó desde distintos ángulos los comportamientos del oficialismo. En esas elecciones, además, la elección de diputados pasaría del sistema de lista incompleta al de representación por circunscripción, modificación, en su opinión, orientada a reducir aún más la presencia de la oposición radical en la cámara baja. Destacaba de paso que los pocos diputados radicales habían "desarrollado una activa y provechosa acción fiscalizadora, que, sin impedir el cumplimiento de los fines oficialistas (...) ha ilustrado al pueblo sobre cuestiones de interés nacional y ha impedido que el silencio absoluto sea la regla de nuestra vida republicana"<sup>49</sup>. Sobre la modificación del sistema de designación de diputados, en el caso de la Capital Federal mediante el diseño de un nuevo mapa de circunscripciones, *La Nación* manifestaba sus objeciones sin hablar explícitamente de fraude, pero mostrando que se trataba de un manejo lindante con ese tipo de práctica. El recorte del nuevo mapa electoral violaba, a su entender, todo criterio de unidad sociológica, y las diferencias propias de cada barrio desaparecían al unirse zonas con poblaciones sumamente heterogéneas. Con ese artificio, suponía, como efectivamente sucedió, aumentaría el número de electos por el Partido Peronista. Señalaba, con cierta ironía, que esos arbitrarios diseños electorales no eran un invento argentino: hacía más de un siglo habían sido experimentados en Estados Unidos y debidamente criticados y rechazados<sup>50</sup>. Esos análisis predecían

que en el nuevo período presidencial el lugar de la oposición se encontraría más reducido.

El matutino oficialista *Democracia* atacaba con frecuencia a *La Nación*; como manera muy poco sutil de aludir a las sospechas sobre sus verdaderos propietarios, lo denominaba "el diario que fue de Mitre". A propósito de la reforma electoral y de las críticas desarrolladas por *La Nación*, *Democracia* publicó un editorial dedicado a refutar sus argumentos. Según el diario peronista, lo afirmado por el matutino carecía de consistencia; pasar del sistema de lista incompleta al de representación por circunscripción era un avance democrático, que corregía injusticias en la adjudicación de bancas parlamentarias. ¿Por qué *La Nación* se oponía a la reforma?, se preguntaba *Democracia*. Su respuesta era previsible: "El diario que fue de Mitre se inquieta teniendo en cuenta que los opositores radicales, conservadores y todos juntos no tendrán más representación que la que su escaso caudal electoral les dé (...) *La Nación* permanece apegada a un pasado de oprobio en que mediante la suplantación de la voluntad del pueblo en las urnas y en el gobierno fueron posibles las iniquidades que tuvieron término legal y definitivo el 24 de febrero de 1946"<sup>51</sup>. Así, con una combinación entre la caracterización política y la descalificación de las intenciones, el diario peronista entendía que podían explicarse las causas de la disconformidad de *La Nación* con el cambio del sistema electoral para designar legisladores.

La postulación de Perón a la reelección recibió el apoyo de entidades empresarias que seis años antes se habían alineado claramente en las filas de la Unión Democrática. La Sociedad Rural Argentina, las diversas secciones de la intervenida Unión Industrial, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y múltiples cámaras patronales emitieron declaraciones de adhesión a la candidatura de Perón. *Democracia* analizaba con inocultable satisfacción ese vuelco de los antiguos reductos de la "contra" y destacaba que *La Nación* seguía manteniendo su rechazo al régimen peronista. Al respecto decía: "Cabe preguntarse, sin malicia, lealmente, ¿qué y a quiénes defiende *La Nación* cuando lo más representativo de la economía de empresa se adhiere como una consagración expresa a la reelección de Perón...?"<sup>52</sup>. La respuesta de *Democracia* al interrogante era contundente: el matutino estaba al servicio de intereses extranjeros, de Wall Street y la City británica. A su juicio, *La Nación* ya no tenía coincidencias con las clases altas vernáculas ni con la UCR, partido que en esa campaña electoral, destacaba el diario peronista, estaba ensayando un discurso antiimperialista y crítico de la explotación del trabajo. Con ironía, el periódico oficialista se refería a la soledad en

que había quedado *La Nación*, uno de los últimos reductos de lo que apostrofaba textualmente como "repugnante extranjería".

En el contexto preelectoral de 1951 se registró el intento golpista encabezado por el general Benjamín Menéndez; la iniciativa de los rebeldes fue rápidamente controlada por el gobierno. *La Nación* expresó su total desacuerdo con la acción de los militares insurrectos. Condenó el hecho recordando que la oposición a la violencia había sido siempre el punto de vista expuesto por el diario. Con términos inequívocos, aseguraba que "los choques de ideas, inevitables en una democracia, no pueden llevar a intransigencias insostenibles fuera del cauce de la legalidad si se admite, como resulta simplemente cuerdo hacerlo, que nadie es dueño de la verdad plena, inatacable, absoluta, y que esos antagonismos sólo deben conducir al camino que para imponérseles, si ello es posible, indica la ley: el del comicio. Es sin duda lo que con el pueblo de Buenos Aires pensó ayer el del país al repudiar lo que por un instante puso en los espíritus una sensación de estupor"<sup>53</sup>. Cuando el texto hacía referencia al pueblo de Buenos Aires, aludía a la concentración masiva de apoyo al gobierno y de repudio a los golpistas. Es interesante destacar el tono de la reflexión editorial, que no sólo dejaba en claro el rechazo al movimiento insurreccional de Menéndez, sino también proponía una evaluación de la situación política imperante mucho menos rigurosa que la expuesta hasta entonces. Según Roberto F. Giusti, el editorial en cuestión motivó la renuncia del responsable de la sección, Alfonso de Laferrère, en desacuerdo con el tratamiento favorable al gobierno que el diario usó para abordar el tema<sup>54</sup>. Sin que necesariamente se deba definir como un hito decisivo, esa oposición total al propósito castrense de derrocar a las autoridades se inscribió, como se verá más adelante, en el inicio de una inflexión en la línea del diario frente al gobierno.

Las elecciones presidenciales de 1951 auguraban resultados sin sorpresas. En las vísperas, el matutino criticó los manejos oficiales por su parcialidad y favoritismo. Posiblemente, las mayores objeciones hayan sido motivadas por los actos de violencia perpetrados contra los radicales para trabar su acción proselitista. Quienes así operaban, en su opinión, manifestaban: "una peligrosa inclinación absolutista, es llevar en el alma la idea del partido único"<sup>55</sup>. Se preguntaba si quienes así actuaban no creían que los comicios eran superfluos y las campañas electorales suprimibles. A pesar de sus objeciones y recriminaciones ante proceder que estimaba reñidos con la democracia, el diario formuló luego de las elecciones una reflexión donde era notorio el

interés por morigerar la crítica. El matutino se interrogaba sobre la posibilidad de reconciliación entre el gobierno y la oposición. Sin dejar lugar a dudas sobre su pensamiento, decía: "¿Por qué, pues, constituir esas dos fases del quehacer político (gobierno y oposición) en elemento de encono, en fuentes de división insalvables entre los argentinos?"<sup>56</sup>. De allí en más, la idea de encontrar un nuevo nivel de convivencia entre peronismo y antiperonismo ya no sería abandonada por sus editoriales.

¿Tenía el mensaje de *La Nación* similar influencia que en épocas anteriores? ¿Podía ayudar a modificar los comportamientos de los principales actores políticos? Respecto de los gobernantes peronistas era notorio que no poseía mayor capacidad de actuar directamente sobre sus orientaciones. Justamente sobre esta situación ironizaba el ensayista Ramón Doll a fines de 1951: "*La Nación* es hoy una hoja igual que cualquier otra y añora las épocas en que los ministros le hacían la corte y los gobiernos le entregaban un Ministerio (el de Relaciones Exteriores generalmente)"<sup>57</sup>. Doll incursionaba, además, en las malas condiciones económicas que, suponía, atravesaba la empresa.

La primera gran señal de que la aspiración a una mejor relación entre gobierno y oposición podía convertirse en realidad, *La Nación* creyó percibirla en el acuerdo que a principios de 1952 estableció el veterano dirigente socialista Enrique Dickmann con el presidente Perón. En un editorial titulado "La convivencia democrática", el matutino consideraba un signo muy alentador que luego de una prolongada entrevista con el titular del Poder Ejecutivo, Dickmann hubiese logrado el indulto para un grupo de detenidos políticos y la reapertura de los talleres de *La Vanguardia*. El editorial señalaba que el comité ejecutivo del socialismo se había declarado ajeno a esa gestión, posiblemente, decía, por juzgarla poco formal y por requerir previos cambios de procedimiento en el gobierno. Pero, según el diario, no cabía de ninguna manera restar trascendencia al evento, que abría una esperanzada expectativa de modificación del rumbo de la política nacional; el país necesitaba "un desarme integral de los espíritus en esa especie de guerra fría que ha contemplado con desasosiego la opinión independiente"<sup>58</sup>. Reivindicaba luego una suerte de paternidad de la idea de convivencia, pregonada en sus editoriales antes y después de las elecciones del pasado noviembre, "cuando nuestras palabras podían no ser comprendidas en su cabal significación. Lo repetimos hoy con la misma convicción. Nada sólido se ha de edificar en un ambiente de recíproca suspicacia"<sup>59</sup>. Coherente con esa propuesta, instaba a Perón a levantar todas las sanciones aplicadas a los medios de prensa, partidarios

o independientes, y a liberalizar la vida política construyendo una auténtica democracia.

Con muy pocas modificaciones las críticas de *La Nación* a la política económica peronista se mantuvieron entre 1946 y 1952. En algunos momentos el diario pareció vislumbrar la posibilidad de cambios y los alentó con su prédica. Esto sucedió en especial a comienzos de 1949 cuando Miguel Miranda, principal figura económica de los tres primeros años del peronismo, fue alejado de su cargo. Algunas declaraciones oficiales emitidas entonces sobre la necesidad de reducir los gastos públicos fueron recibidas con beneplácito por el matutino, pues coincidían con sus permanentes puntos de vista. Pero recién cuando el gobierno adoptó el llamado Plan Económico de 1952 el optimismo se instaló en su columna editorial. Las coincidencias con las autoridades en el plano económico fueron desde ese momento tan amplias como antes lo habían sido las discrepancias. La satisfacción de ver cómo desde el poder se adoptaba una línea de pensamiento económico similar a la defendida desde sus páginas pareció contrarrestar, incluso, aquellos aspectos donde las disidencias no habían desaparecido. Era una época en que también se registraban cambios en las orientaciones de las restantes áreas de acción gubernamental; pero, posiblemente, en ninguna como en la economía, por sus implicaciones sociales, se abrían tantas posibilidades de coincidencias entre el Estado y *La Nación*.

Aumentar la producción y la productividad del trabajo; no acordar aumentos de salarios sin mejora previa de la productividad; limitar el gasto público e incrementar la eficiencia de las empresas estatales; disminuir la injerencia del Estado en la economía; fomentar la producción agropecuaria con precios más remunerativos; facilitar la importación de insumos y maquinaria para el agro; eliminar el exceso de ventajas sectoriales para la industria, que generaba escasez e inflación. Tales los principales objetivos, trazados por el gobierno en el inicio de la nueva etapa, a los cuales el diario dio su total acuerdo. No sólo apoyó las preocupaciones el presidente Perón y de sus ministros; también tuvo desde 1952 la oportunidad de recordar con frecuencia que las políticas propuestas eran las mismas que durante años había pregonado. *La Nación* adhería así, a comienzos de 1952, al proyecto gubernamental: "A todos, pues, hoy, como hace años, les diremos que la consigna general, desde el más encumbrado funcionario o director hasta el más pequeño engranaje del complejo mecanismo de la producción, ha de ser siempre la misma: producir y producir cada vez más, sin desmayo y sin vacilación de ninguna especie, para llegar a la baratura y abundancia, base

fundamental de una mayor prosperidad general y un auténtico bienestar general<sup>60</sup>. Producir, producir y producir era la nueva consigna de Perón. La política salarial, acorde con esa meta, se modificaba con miras a impedir los aumentos de sueldos que habían sido una característica de los primeros años de la gestión peronista. El diario comentaba la nueva política con satisfacción y llamaba la atención sobre la necesidad de aplicarla con rigor, para lo cual, decía, no sólo hacía falta controlar su implementación en el nivel de los salarios sino también en otras clases de ventajas: asuetos, subsidios, servicios sociales, etc. Todo dependía, en su opinión, del cumplimiento de los planes trazados para resolver los problemas inflacionarios y lograr el aumento de la producción. Signos de los nuevos tiempos había muchos, pero para quienes trabajaban en el nivel de las palabras éstas adquirían una especial significación. Con ese cierto toque de narcisismo común en quienes creen haber abierto senderos en el campo de las ideas, *La Nación* afirmaba que era "satisfactorio oír de los labios del secretario administrativo de la CGT estas palabras, que en nuestras columnas se han repetido una y otra vez: 'al aumentar la producción como medio de abaratar los precios, no se defienden los intereses patronales, sino los intereses de la patria'<sup>61</sup>. La citada frase del dirigente sindical cerraba el editorial sobre la nueva política salarial.

Las ideas anunciadas en el Plan de 1952 debían llevarse a la práctica, decía el matutino, para que "el pueblo satisfaga plenamente las esperanzas depositadas en él; que el gobierno demuestre en los hechos la firme decisión de convertir su plan en halagüeña realidad"<sup>62</sup>. Desde esa nueva perspectiva optimista, el diario no dejaba, sin embargo, de señalar que los problemas del país eran en gran medida el resultado de la anterior y equivocada política peronista. De esos errores, había uno que consideraba central: haber fomentado determinadas industrias manufactureras de carácter artificial, despojando para ello de gran parte de su rendimiento a la industria agropecuaria. Eso pertenecía, a su juicio, al pasado: "Hoy parece haberse entrado por el camino de las medidas que nos permitan sortear las crecientes dificultades de la hora. La acción oficial y la iniciativa particular han sido movilizadas para ello y se han vuelto los ojos al campo, gran abastecedor de energías físicas y espirituales"<sup>63</sup>. Las industrias artificialmente desarrolladas habían impulsado la carestía de la vida, cuestión que ahora se trataba de resolver aplicando medidas de austeridad, a su entender, correctas e imprescindibles. Criticaba las prácticas anteriores y apoyaba las nuevas medidas del gobierno, más aún cuando Perón anunciaba la necesidad de

lograr una rápida disminución del gasto público, cuya consecuencia, opinaba, sería la rebaja de los impuestos y la liberación de mano de obra y recursos que el Estado empleaba en actividades casi siempre improductivas<sup>64</sup>.

De la dinámica de esa "nueva" Nueva Argentina, aparentemente no se apartaba, para alegría del diario, ninguno de los actores que habían participado de la primera etapa del gobierno peronista. Las renovadas ideas sindicales eran, como se ha visto, saludadas como muestra de adecuada comprensión de los problemas nacionales. Conocedor de la influencia de los aparatos gremiales sobre el mundo obrero, el matutino expresaba su esperanza en que las nuevas concepciones de los dirigentes sindicales se convirtieran en una "conciencia (que) se difunda en las grandes masas y las determine a obrar de manera consecuente"<sup>65</sup>. Si esto ocurría, proseguía la reflexión, se habría liquidado el mito de que trabajar más intensamente beneficiaba exclusivamente a los patrones. Su anhelo mayor parecía ser que los dirigentes sindicales peronistas terminaran resolviendo definitivamente los equívocos que llevaban, en el pasado cercano, a innecesarios conflictos sociales.

En 1952 la palabra de Perón se convirtió, para el diario, en fuente casi inagotable de coincidencias en el plano de las ideas económicas. Especial objeto de reparación discursiva era el antes maltratado sector agropecuario. El anuncio de nuevas líneas de crédito a los productores rurales fue recibido como una elocuente muestra de que entre las palabras y las cosas las distancias podían franquearse sin dificultades. Buscando, sin duda, mantener el equilibrio en los términos, *La Nación* sostuvo: "Las recientes declaraciones del primer magistrado y la exposición del ministro de Finanzas sobre el plan de crédito agrario han despertado el optimismo, que tanta falta nos hace en una época en que la iniciativa privada, nervio y músculo de toda acción en nuestra actividad rural, se encuentra desalentada por la creciente injerencia del Estado en la empresa individual"<sup>66</sup>. El 4 de junio de 1952, Perón iniciaba su segundo mandato presidencial. Según *La Nación* comenzaba una nueva etapa para el país. El optimismo sobre las nuevas orientaciones económicas del peronismo parecía trasladarse, todavía con algunos reparos, al análisis de las relaciones políticas. Así como en el plano económico se buscaba armonizar realmente los intereses de todos los sectores, decía el matutino, también en el político se podían deponer antiguas actitudes. De allí que instara tanto al gobierno como a la oposición a hallar las vías del acuerdo democrático. Eso podía lograrse, aseveraba, sin que nadie abandonara sus propias convicciones y sus

aspiraciones a ejercer el poder, pero era preciso dejar de lado las actitudes ásperas y los enconos apasionados. En fin, colocándose ya no más como actor del conflicto sino en el rol de orientador y consejero de las partes, les señalaba que la democracia debía ser la pacífica convivencia en la diversidad de opiniones.

En ese contexto de confianza y expectativas favorables hacia el gobierno peronista, el diario no forzó su perspectiva para despedir, en una necrológica equilibrada y profundamente respetuosa, a Eva Duarte de Perón. *Esa mujer*, como la debieron nombrar tantas veces muchos lectores de *La Nación*, era evocada como esposa sumisa y tribuna de la plebe, *factotum* de aquel 17 de octubre cuyo recuerdo seguía desvelándolos, convertido por el matutino en una gesta susceptible de demostrar su vocación de lucha. Juana de Arco y Rosa Luxemburgo parecían disputar, en un combate de entrelíneas, un lugar justificado en una eventual comparación. La nota recordaba la devoción de muchos, sin omitir la mención de los igualmente numerosos que habían combatido la obra de Evita. Fruto de la pluma de Augusto Mario Delfino, el texto constituía una muestra ejemplar de oficio para escribir en ese género tan difícil donde es ineluctable encontrar el compromiso entre el pensamiento y la circunstancia <sup>67</sup>.

La modificación del enfoque analítico del diario se puso de manifiesto, también, cuando abordó arbitrariedades del gobierno en el campo de la libertad de expresión. Esas prácticas, que anteriormente habían sido caracterizadas como totalitarias, no dejaron de ser objeto de críticas, pero los términos empleados fueron mucho menos condenatorios y las objeciones se orientaron a sugerir a las autoridades que modificaran sus conductas para la mejor convivencia entre todos. De los ejemplos de esa actitud, pueden citarse las reflexiones editoriales publicadas a propósito de las acciones policiales que en la Capital y en distintas ciudades del interior fueron emprendidas para impedir la realización de actos culturales a los que se adjudicaba una intención política opositora. *La Nación* sostuvo al respecto que la mayoría de los casos "examinados objetivamente no se explican a la luz de las imperiosas razones de orden público que podrían motivar prudentes prohibiciones"<sup>68</sup>. Con una prosa más didáctica que enjuiciatoria, argumentaba que era muy encomiable que desde el seno de la sociedad se impulsaran iniciativas de carácter cultural e invitaba al Estado a estimularlas. Esas acciones culturales llevadas adelante por los ciudadanos no eran, a su entender, contrarias sino complementarias con la tarea del gobierno. Al respecto afirmaba: "La obra ponderable de difusión de los conocimientos mediante conferencias públicas que hoy realizan diversos orga-

nismos del Estado no excluye la de las instituciones particulares, sino que, por lo contrario, la completa<sup>69</sup>. Todo el enfoque revelaba, por cierto, una muy notoria búsqueda de apaciguamiento y de armonía, dato especialmente significativo dado que algunas de las instituciones cuyas actividades culturales se habían impedido se encontraban entre las más tradicionales del país.

En lo económico, el ministro de Comercio Exterior, Antonio Cafiero, impulsaba medidas tendientes a atenuar los efectos de la intervención del IAPI en la disminución de los precios recibidos por los productores. El diario reproducía textualmente en su editorial una frase de Cafiero: "La consigna ha de ser entonces no hacer negocios a costa de los productores, sino en su beneficio"; hacer realidad esa promesa, decía el análisis, sería dar un gran aliciente a los agricultores y ganaderos cuyos intereses habían sido postergados<sup>70</sup>. El ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Hogan, también mereció reconocimientos por haber confiado funciones y responsabilidades importantes de la cartera a su cargo a técnicos que, según el matutino, el ámbito agronómico consideraba serios e idóneos. Hogan debía continuar por esa vía, argumentaba, y conquistaría para su ministerio la popularidad en el medio agrario<sup>71</sup>. En esa línea de crecientes coincidencias con la política económica peronista, *La Nación* brindó buena acogida al denominado Segundo Plan Quinquenal que debía tener vigencia entre 1953 y 1958. Dicho Plan profundizaba las medidas de política económica implementadas en 1952. El período de cinco años para el que se había preparado esta propuesta de planificación indicativa debía aparecer para el diario como una muestra de la decisión gubernamental de consolidar la nueva orientación. Cuando Perón anunció el Segundo Plan Quinquenal el matutino hizo votos por su éxito y sugirió a las autoridades mantenerse abiertas a la colaboración de todas las opiniones; trabajando de ese modo, decía, se afianzaría el progreso de la República en fidelidad a las instituciones y en armoniosa convivencia democrática<sup>72</sup>. Coherente con la idea de que el Estado debía recibir consejos, en varios editoriales posteriores publicados a propósito del Plan subrayó la necesidad de asegurar el estricto cumplimiento de los anuncios de liberalización de la economía. En especial, ponía énfasis en los efectos benéficos que tendría la disminución de la intervención estatal en el sector agropecuario.

No toda la oposición al peronismo creía posible la reconciliación con el gobierno. Tampoco las actitudes de éste se hallaban inequívocamente encaminadas a buscar la distensión. Así, los esfuerzos de *La Nación* para proponer interpretaciones optimistas

sobre el curso que podían tomar las relaciones políticas se vieron, en ocasiones, conmovidos por acontecimientos de gran repercusión, reveladores de las dificultades para pasar a un nuevo estilo de convivencia. Sin duda, una situación límite que mostró la distancia existente entre los deseos de concordia y las prácticas efectivas de algunos de los actores en presencia, fue la jornada de abril de 1953 en que estalló una serie de artefactos explosivos en la Plaza de Mayo durante un acto en el que hablaba Perón. La acción terrorista provocó muertos y heridos, y como respuesta al atentado grupos de manifestantes peronistas incendiaron la Casa del Pueblo del socialismo, la Casa Radical y el Jockey Club. Según un documentado y tendencioso informe oficial preparado años después por decisión del gobierno *de facto* sucesor de los peronistas, esa noche de 1953 los partidarios de Perón habían decidido incendiar el edificio de *La Nación*, acción que fue impedida por expresa indicación del presidente, según la citada fuente<sup>73</sup>. También el matutino narró la mencionada situación en un editorial publicado años más tarde.

El atentado terrorista producido en la Plaza de Mayo por los opositores al gobierno de Perón provocó el repudio absoluto del diario. Los adjetivos condenatorios se acumularon al asegurar que se trataba de una iniciativa cuyos móviles no podían ser considerados políticos salvo por sujetos extraviados: "Hacer frente al adversario usando de la fuerza es siempre recurso deleznable; emplearla en forma anónima, por su origen y por sus posibles víctimas, tomadas al azar en una multitud inerme, es sencillamente criminal"<sup>74</sup>. Además, esperaba que con justicia y serenidad se sancionara a los culpables de ese hecho que, en su opinión, ya había recibido la repulsa de toda la sociedad, con independencia de las distintas sensibilidades políticas. Siempre existía el riesgo, argumentaba, de que las acciones de violencia generaran respuestas del mismo tenor. Sobre los actos de depredación cometidos contra los locales de partidos políticos y del Jockey Club, señalaba: "La ciudad ha sido anoche testigo impotente de otros episodios que no han de redundar en prestigio del honor nacional; se ha insurgido contra sectores que, sea cual fuere el criterio con que se encare su prédica, han tenido el hábito de la acción cívica concebida como una misión educadora"<sup>75</sup>. Cabe señalar que varias personas que habían ejercido responsabilidades importantes en el diario también habían participado en distintos momentos en la comisión directiva del Jockey Club. Eso sucedió con Emilio y Jorge A. Mitre, ex directores, y con Alberto Caprile, miembro del directorio y titular de la empresa editora en la época de los sucesos comentados<sup>76</sup>.

El 11 de junio de 1953 el presidente Perón dirigió un discurso a los productores agrarios en el Teatro Colón. El editorial de *La Nación* reprodujo muchos de los conceptos vertidos por el primer mandatario y señaló su similitud con los expuestos en distintas oportunidades en sus propias reflexiones sobre el tema. La definición propuesta por el presidente sobre el complejo tema del latifundio era citada con agrado: "Latifundio no se califica por el número de hectáreas o extensión que se hace producir, el latifundio se califica por la cantidad de hectáreas, aunque sean pocas, que son improductivas". Esa manera de ver la cuestión llevaba al jefe de Estado a afirmar: "Dios nos libre de que seamos tan cortos de entendimiento que nos lanzáramos a la destrucción de las grandes explotaciones, teniendo las inmensas extensiones que tenemos nosotros para que cada agricultor argentino pueda tener todo el campo que se le antoje. No queremos hacer el proletariado campesino; queremos hacer agricultores felices y abundantes". Y luego de la transcripción del párrafo de Perón, *La Nación* añadía: "Tales conceptos que coinciden en un todo con los que hemos sostenido siempre en estas columnas, deberán ser particularmente asumidos por ciertos gobiernos provinciales que suelen exhibir una idea opuesta del llamado latifundio"<sup>77</sup>. Señalaba, además, que las palabras del titular del Poder Ejecutivo llevarían tranquilidad a los poseedores de grandes establecimientos agropecuarios de alto rendimiento, quienes, a su parecer, se sentían un tanto inquietos ante la amenaza de un posible fraccionamiento de sus tierras y vacilaban en proseguir sus esfuerzos.

Las propuestas del gobierno peronista encaminadas a favorecer la radicación de capitales extranjeros fueron muy bien recibidas por *La Nación*, que vio en esas inversiones un componente necesario para continuar el proceso de desarrollo económico. El nuevo contexto de ideas y de condiciones materiales que se estaba creando le parecía adecuado para atraer inversiones extranjeras que necesitaban un ambiente propicio para programar sus actividades<sup>78</sup>. Esos capitales no los consideraba antagónicos, sino complementarios con los de origen nacional o extranjero ya existentes en el país. Especialmente aconsejaba a las autoridades perfeccionar bien los nuevos instrumentos legales para dar las mayores seguridades a los futuros inversores.

A pesar de los hechos de violencia de 1953, y quizás en buena medida preocupados por ellos, el gobierno y la oposición continuaron buscando una distensión de las relaciones políticas. Un nuevo paso en ese sentido fue dado por la dirección del Partido Demócrata, al concurrir a entrevistarse con el ministro del Interior, Ángel Borlenghi, con el propósito de contribuir a crear

un clima de pacífica convivencia política. La iniciativa de los dirigentes conservadores fue ampliamente elogiada por el matutino que volvió a recordar cómo, en más de una ocasión —y no siempre comprendido cabalmente—, había bregado por la adopción de actitudes orientadas a la reconciliación política. Como reflejo del aire de los nuevos tiempos, el diario sostenía que el país tenía desde hacía un siglo una Constitución libérrima, mención por cierto habitual, pero agregaba sugestivamente que la misma había sido “sólo completada más tarde por aquello que la evolución económica y social del mundo hizo juzgar indispensable”<sup>79</sup>. Ese reconocimiento de las modificaciones introducidas al texto constitucional por la Convención de 1949, en su momento tan criticada en sus columnas, era, sin duda, otra señal del nuevo *état d'esprit* que animaba sus análisis. Las respuestas del gobierno estimulaban esa orientación. Luego de la aludida reunión con los dirigentes del Partido Demócrata se procedió a liberar a algunos detenidos políticos de esa tendencia. Ésos eran datos alentadores para el matutino. El editorial de referencia también mencionaba con satisfacción unas cartas que el dirigente conservador Federico Pinedo, desde la cárcel, había enviado a las autoridades nacionales instando a la pacificación, a realizar, decía el diario, “una especie de ‘tregua de Dios’, una interrupción de la polémica enardecida, hasta un silencio de la crítica cuando sea necesario, a fin de llegar por esa vía al apaciguamiento de los ánimos, que, preludio de la convivencia necesitada de un nuevo espíritu en todos los sectores de la ciudadanía, no implica, entendemos, el olvido de las discrepancias, ni la desaparición de los grupos opuestos, sino una detención de su beligerancia que permita reanudar con mayor serenidad el diálogo inseparable de toda concepción democrática”<sup>80</sup>. Esa actitud de Pinedo, tan bien acogida por *La Nación*, despertó discrepancias y críticas en las filas del conservadorismo. Cuatro años después de la mencionada iniciativa de Pinedo y de algunos de sus conmlitones, José Aguirre Cámara, otro dirigente de la misma fuerza política, recordaba su oposición a los intentos de reconciliación que desde el conservadorismo se trataban de concretar con el gobierno peronista, sin comprender, argumentaba, que en ese momento éste ya se encontraba vencido<sup>81</sup>.

Todos los pedidos de moderación dirigidos por Perón al sindicalismo encontraban muy buenos ecos en los editoriales del matutino. La lucha contra la inflación, que en la estrategia del gobierno suponía poner coto a la puja distributiva entre precios y salarios, congelando los primeros por decreto y estabilizando los segundos mediante convenios paritarios había dado, en su

opinión, buenos resultados. El problema del posible desborde de las demandas sindicales aparecía relativamente controlado por la decisión de Perón de mantener esa línea económica, quien sostenía que la mejora del estándar de vida de los asalariados debía subordinarse al previo aumento de la productividad del trabajo, a fin de lograrla sin inflación. Como en muchos otros temas similares, *La Nación* entendía necesario destacar que todavía había demasiado dirigismo estatal pero, como las buenas metas se estaban logrando, no cabía, al respecto, plantear discusiones doctrinarias, ya que el intervencionismo se estaba aplicando en el caso de los precios y los salarios en favor de un equilibrio que beneficiaba a todos <sup>82</sup>.

La evolución del pensamiento de *La Nación* sobre el gobierno peronista era seguida con interés por *Democracia*. Si tal como hemos visto, dicha publicación oficialista se había especializado en criticar al matutino, sus cambios no podían dejarla indiferente. A principios de 1954, *Democracia* proponía una reclasificación de *La Nación*, porque consideraba que, quizás, ya no cabía definirlo como *enemigo*, sino como *adversario*. Pero esto no significaba olvidar los enfrentamientos de los años precedentes y de allí que invitaba a mantenerse alerta y no perder las prevenciones respecto al "diario que fue de Mitre", como seguía denominándolo. Los comentarios de *Democracia* reflejan ambivalencia ante las modificaciones de la línea editorial de *La Nación*: "Citan esos aciertos (de los discursos de Perón) según les conviene y aun llegan a declarar que 'eso' es lo que ellos siempre han sostenido desde sus encumbradas tribunas doctrinarias"<sup>83</sup>. La ironía y la duda sobre la sinceridad de los análisis editoriales del diario creado por Mitre fueron reiteradas con frecuencia por su ineluctablemente rival gráfico. En todo caso, si *Democracia* reconocía la posibilidad de la coincidencia ideológica en 1954, se negaba completamente a aceptar que las políticas anteriores del peronismo hubiesen sido equivocadas. Entre 1943 y 1952, aseveraba, no había sido necesario preocuparse por la moneda sana y la prioridad acertadamente había sido dada a la distribución de la riqueza. Con espíritu burlón, el análisis de *Democracia* señalaba que a una publicación "no peronista" le iba a resultar muy difícil producir comentarios editoriales "peronistas". Hacían falta, decía, muchos años de práctica. La notoria buena predisposición de *La Nación* hacia el gobierno peronista no impidió a *Democracia* volver a denunciarlo pocos días más tarde por estar al "servicio fiel de la oligarquía y de sus agentes electorales"<sup>84</sup>.

En 1954 se debían realizar elecciones para designar al reemplazante del fallecido vicepresidente Quijano. *La Nación* mantuvo

su posición favorable a la convivencia entre el gobierno y la oposición. Posiblemente como un aporte a la mejora del clima político, optó por no referirse en sus editoriales a nada que pudiera mostrar anormalidades en el proceso preelectoral. En sentido estricto, fue la primera campaña electoral realizada bajo el peronismo en la que no criticó la parcialidad de las autoridades. Es más, de hecho el tema de los comicios desapareció de su columna editorial hasta el día que se cerró la campaña proselitista, cuarenta y ocho horas antes del acto electoral. Entonces, formuló una reflexión global de carácter absolutamente neutro<sup>85</sup>. En términos comparados, puede afirmarse que el de 1954 fue el editorial precomicial más distante de la oposición de todos los del período peronista. En ese texto lamentaba que el Partido Socialista hubiese decidido no participar en las elecciones y que la misma actitud adoptaran sectores del conservadurismo. En ambos casos, se omitía mencionar las razones políticas que habían llevado a esas fuerzas a posiciones abstencionistas. Sin objetar ningún aspecto del desarrollo preelectoral, ya fuese situaciones de privilegio en el acceso a los medios de comunicación u otras formas de manejo de recursos por el oficialismo, temas recurrentes en los análisis de los comicios anteriores, el comentario editorial declaraba de antemano su congratulación previendo el alto porcentaje de ciudadanos que concurrirían a depositar sus sufragios.

Después de los comicios y una vez conocidos los resultados favorables al peronismo, *La Nación* volvió a editorializar sobre el evento desde la misma perspectiva adoptada en las vísperas. Si bien de manera secundaria mencionaba algunos hechos de violencia registrados en el curso de la campaña, para deplorarlos en tanto muestra de algo que debía desterrarse, las conclusiones sobre las elecciones eran marcadamente optimistas. En cuanto a los cómputos finales, decía, si bien todos los observadores habían considerado seguro el éxito del partido gobernante, resultaba sorprendente el gran caudal de votos obtenido en algunos distritos, fenómeno atribuido a la gravitación personal de Perón. A pesar de los actos de violencia, ante los cuales manifestaba su enérgico repudio, la reflexión finalizaba diciendo que el país podía "considerarse satisfecho por las características generales que han terminado por asumir sus grandes contiendas electorales. Los comicios del domingo son a este respecto la culminación de anteriores avances recientes: el orden que presidió la movilización de tan ingente masa electoral, la legalidad que fue el sello distintivo del imponente acto comicial —el más vasto y complejo jamás realizado en la República— deben halagarnos patrióticamente"<sup>86</sup>. Esa

laudatoria evaluación se cerraba con la opinión de que la eliminación de la violencia y la actuación metódica de los partidos para la formación de los ciudadanos se podrían lograr muy pronto con la colaboración de todos.

*La Nación* comentó con términos elogiosos la primera convención de la recién creada Confederación General Económica, en la que se reunieron los presidentes, secretarios y tesoreros de las distintas federaciones económicas provinciales y territoriales. Antigua aspiración de Perón, encaminada a crear lo que según la doctrina de su partido debía ser el componente empresario de la denominada Comunidad Organizada, la CGE se definió en esa reunión como interlocutor permanente de las autoridades nacionales. El matutino consideró muy acertada esa actitud y recalcó la necesidad de una fluida relación entre los responsables de la actividad económica privada y el gobierno; en su opinión, la CGE podría muy bien brindar a los organismos públicos la cooperación que necesitaban en múltiples tareas especializadas<sup>87</sup>.

¿Se había distanciado completamente *La Nación* del principal partido de oposición? La Unión Cívica Radical, cuya plataforma reclamaba la reforma agraria "inmediata y profunda", la nacionalización del petróleo, de los servicios públicos, de los frigoríficos, etc., había perdido atractivo para el diario que encontraba, en cambio, mayores coincidencias con las propuestas liberales impulsadas en lo económico por el gobierno peronista. Esto no significa que el matutino hubiese abandonado a los radicales. Según algunos testimonios escritos por dirigentes de esa fuerza política, en los últimos años del gobierno peronista fue el único medio de prensa que daba alguna cabida a noticias referentes a las actividades de la Unión Cívica Radical. Para Manuel Augusto Gondra, incluso en esos años en que los análisis del diario fueron mucho menos críticos del gobierno de Perón, sólo a través de sus páginas se conseguía dar una mínima trascendencia a la actuación parlamentaria de los radicales, silenciada en la cadena oficial. Por su parte, Nicolás Babini recuerda que el encargado de prensa del radicalismo en esa misma época trabajaba como periodista en *La Nación*, lo que facilitaba mayor inclusión de noticias concernientes al partido<sup>88</sup>. De todos modos, cabe recordar que en razón de las restricciones en materia de distribución de papel impuestas por el gobierno, la edición del diario contaba con sólo seis páginas los días hábiles y diez los domingos, lo cual reducía notablemente el caudal de información publicada. Cuando el peronismo había accedido al gobierno, la edición de los días hábiles contaba, en promedio, con unas treinta páginas.

En los últimos años de la gestión peronista con cierta frecuencia el diario editorializó sobre el proceso de descolonización que vivía el mundo, con una óptica en muchos aspectos coincidente con las ideas prototercermundistas formuladas por el gobierno. Consideraba que se estaba entrando irreversiblemente en la etapa del fin del colonialismo y destacaba la razón y la justicia de los pueblos que trataban de liberarse de los vínculos de sumisión a las metrópolis extranjeras. En 1954, a propósito de una iniciativa presentada por el representante del gobierno argentino en la Conferencia Interamericana de Caracas, condenatoria de la existencia de territorios sometidos a la soberanía de potencias extracontinentales, el matutino trazó un balance de la realidad mundial de ese momento y destacó los progresos habidos en materia de reacción anticolonialista. El criterio de legitimidad del colonialismo, decía, había entrado definitivamente en crisis y estaba siendo reemplazado por el derecho de autodeterminación de los pueblos y, aun cuando hubiera países propensos a demorar ese movimiento, era "innegable que el principio de colonización ha caducado ya en las conciencias y puede preverse que no tardará mucho en caducar también en el plano de la realidad"<sup>89</sup>. Desde esa perspectiva el diario estimaba que los principales países occidentales debían evitar que los conflictos en torno a la descolonización empujaran a quienes conducían las luchas de liberación nacional a buscar el apoyo de Moscú para lograr su cometido. Frente a la eventual evolución de los acontecimientos asiáticos en el decisivo año 1954, el de la caída de Dien Bien Phu que marcó el fin de la dominación francesa en Indochina, el comentario editorial sostenía que si de ese modo concluía el "régimen colonial, los planteos de los grupos comunistas de Laos y Camboya deberán modificarse, como ya se han modificado en India, Birmania, Pakistán y otras nuevas naciones de Asia. Una sólida protección de esos Estados, sin presión colonial, eliminaría no sólo el pretexto de la acción comunista, sino también la causa indudable del éxito de su propaganda"<sup>90</sup>. Cabe destacar que en sus editoriales sobre problemas internacionales, el diario avizoraba la posibilidad de un distanciamiento entre China y la Unión Soviética, y se hacía eco de ideas atribuidas a Nehru sobre la posibilidad de que Pekín fuese más nacionalista que comunista<sup>91</sup>. Teniendo en cuenta la importancia estratégica para las naciones occidentales de esa readequación de las alianzas internacionales, el matutino siguió con interés los preparativos de la Conferencia Afroasiática de Bandung, ya que en ella podían, a su entender, ponerse de manifiesto las nuevas opciones de política internacional de China. Pero, de todos modos, la reflexión advertía: "Cualquiera

sea el resultado de la conferencia, el Occidente deberá comprender que, tarde o temprano, el antiguo mundo colonial cobrará una importancia decisiva en los destinos de la humanidad"<sup>92</sup>. Es interesante destacar que en muchos de sus análisis editoriales sobre la temática de los países situados en el todavía no denominado Tercer Mundo, el diario tomaba como una de las referencias más significativas el pensamiento de Nehru, en ese momento presidente de la República de la India y próximo a convertirse, junto con el Mariscal Tito y el presidente egipcio Nasser, en uno de los principales líderes del emergente movimiento de naciones no alineadas. Cabe señalar que los mencionados análisis fueron redactados por José Luis Romero, intelectual de ideas de izquierda que se desempeñó en *La Nación* como editorialista sobre cuestiones internacionales entre 1954 y 1955<sup>93</sup>.

En abril de 1955 se realizó el Primer Congreso Nacional de la Productividad y Bienestar Social, otro paso significativo en la estrategia del gobierno para organizar y compatibilizar los distintos intereses sectoriales. El diario acordó al evento gran importancia y lo estimó muy positivo para el futuro del país. La coincidencia de opiniones entre representantes patronales, delegados obreros y funcionarios públicos en torno a las bases para lograr un crecimiento más armónico y sin inflación, decía, se había plasmado muy bien en los acuerdos suscriptos por la CGE y la CGT. Los esfuerzos de empresarios y asalariados debían acompañarse con una actitud del Estado de reducir gastos y achicar sus funciones y burocracia, metas sobre las que, según creía, había también pleno acuerdo<sup>94</sup>. Acerca de esa readequación de las orientaciones estatales para limitar su órbita de influencia y actividades, algunos días después el diario formulaba un análisis sumamente crítico de YPF, cuyo monopolio en la explotación del petróleo era puesto en cuestión en ese momento por los proyectos del gobierno peronista tendientes a acordar importantes concesiones a firmas extranjeras<sup>95</sup>. El editorial no ahorró expresiones de apoyo a esas iniciativas de las autoridades nacionales, que en la época, es interesante recordarlo, eran criticadas desde posiciones antiimperialistas por la Unión Cívica Radical. Especial relieve adquirieron las intervenciones públicas que al respecto formulaba uno de los principales dirigentes de ese partido: Arturo Frondizi.

El que sería el último discurso de Perón, inaugural de las sesiones del Congreso, fue motivo de numerosos y variados elogios en los análisis de *La Nación*. Lo formal: iniciar el año legislativo en el momento pautado por la Constitución, y los contenidos, en especial los económicos sobre la continuidad y profundización de

las orientaciones liberales, suscitaron el comentario positivo del matutino. La identificación con las ideas de Perón daba lugar a que el diario reiterara la ya entonces consabida fórmula de "como lo dijimos en estas columnas", que era, para el caso, la mejor manera de resaltar los puntos de coincidencia<sup>96</sup>. Distintos pasajes de la alocución del presidente, encaminados a subrayar la necesidad de aumentar la producción y la productividad, eran retomados con agrado. El apoyo a la política en materia de concesiones petroleras a empresas extranjeras expuesta por Perón en su mensaje era eje de particulares reflexiones encomiosas. Esa vía de solución del problema energético, que en ese momento levantaba la protesta de la mayoría de la oposición y las dudas de sectores del oficialismo, era aprobada sin cortapisas por el matutino. Cabe recordar que para los sectores antiperonistas dispuestos a estimular un golpe militar, los logros del gobierno en materia de política económica eran percibidos exactamente de modo inverso al de *La Nación*. Esos sectores temían que si el peronismo resolvía las dificultades económicas reforzara su capacidad para asegurar su permanencia en el poder. Como ejemplo de ese modo de combinar la economía y la política, Bonifacio del Carril, participante activo de los procesos que desembocaron en la caída del gobierno de Perón, subrayó que si éste llegaba a resolver la cuestión de la explotación del petróleo se abriría una época de abundancia, con implicaciones inmediatas en la consolidación de las autoridades nacionales<sup>97</sup>. Muy probablemente, planteos como los expresados en esa última época del peronismo por *La Nación* debían de ser los que inspiraban la reflexión de Del Carril cuando, con referencia a la oposición a Perón, la consideraba prácticamente pulverizada.

En la discordia entre el gobierno peronista y la Iglesia, el diario adoptó una posición de observador relativamente neutro. Como hemos visto, unos años antes, cuando aún tenía una actitud hostil hacia Perón, había criticado las concesiones oficiales a institutos católicos en materia de formación de docentes, en defensa del monopolio estatal y con una visión favorable a la mayor secularización de la sociedad argentina. Desde esa posición discrepaba con las ideas y los intereses de los partidarios de la influencia religiosa en la educación y, más en general, en la vida social. A propósito de esta cuestión aludimos a las acusaciones que se formularon contra *La Nación* desde un periódico católico. Cuatro años después, el gobierno peronista sostenía argumentos favorables a la modernización de las instituciones y proponía reformas de las leyes y de la Constitución que chocaban con las concepciones de los dignatarios eclesiásticos y de una

parte de la grey católica. Dos temas fueron centrales: la ley de divorcio y la separación de la Iglesia del Estado. En ambas cuestiones, las iniciativas adoptadas por los peronistas entrañaban un avance en la secularización de la vida social, lo cual coincidía con los puntos de vista doctrinarios históricamente asumidos por el diario. Las razones que los malquistaban con la Iglesia acercaban de hecho a los peronistas a los principios de la generación del 80 y los situaban como inesperados continuadores de otras modificaciones de las instituciones que otrora, también, habían despertado el descontento eclesiástico. Por su profundidad, el litigio de 1955 suponía, además, la reforma de la Constitución para establecer la separación entre el poder estatal y la Iglesia Católica. Hasta entonces, el matutino había sido, como se ha visto, contrario a la introducción de cambios en la Carta Magna. En más de una ocasión, con motivo de la reforma del 49, había citado el nombre dado por Mitre a dicho texto: la "Biblia política", que connotaba toda la idea de inmutabilidad. Sin embargo, sus reflexiones, en los que iban a ser los últimos meses del gobierno peronista, se orientaron hacia una visión del largo plazo y no fueron opuestas a la reforma. Tampoco se había manifestado contrario al establecimiento del divorcio vincular.

En las reflexiones del diario cuando se discutió y aprobó la ley de divorcio, el problema fue totalmente relativizado. Recuerdo que habían existido en tiempos de predominio conservador propuestas en igual sentido que no alcanzaron a sancionarse pero que contaron con alto apoyo legislativo. El proyecto Olivera de 1902 había dado lugar a un memorable debate en el Parlamento, decía el matutino, y no consiguió ser aprobado en la Cámara de Diputados; el de 1932, en cambio, obtuvo muy amplio apoyo en la cámara baja, pero quedó paralizado en el Senado. Ésos eran los principales antecedentes de la ley que sancionarían los peronistas, la cual, preveía el comentario editorial totalmente neutro, era muy posible que no dejara de acentuar viejas polémicas. Pero para *La Nación* se trataba de un conflicto que no justificaba mayor crispación de los ánimos de los opositores al divorcio vincular, e ironizaba: "La vida social de nuestro tiempo nos había mostrado al respecto caminos de atajo tal vez más costosos y desde luego menos congruentes con la ley argentina, que los interesados no tendrán ya la necesidad de recorrer"<sup>98</sup>. La mención del "atajo" —el divorcio en los países limítrofes—, más que una incursión en la sociología de la vida cotidiana, era un recurso para trivializar la reacción de quienes, combinando política y religión, acusaban a Perón de ser enemigo de los principios cristianos y de promover la disolución de la familia y, con ello, de la sociedad.

La separación de la Iglesia del Estado fue abordada por *La Nación* con total objetividad analítica, en contraste, también en este dominio, con la posición adoptada por una parte importante de los opositores al gobierno peronista. En el editorial del día en que se sancionó la ley que declaró la necesidad de reformar la Constitución para suprimir el artículo que establecía el sostenimiento del culto católico apostólico y romano, el diario planteó reflexiones sobre la historia nacional y acerca de las experiencias de otros países situándose en un campo de preocupaciones que remitía más allá de los conflictos coyunturales. Nuevamente, al asumir de modo coherente los principios ideológicos del liberalismo en materia de relación entre el Estado y la sociedad civil, quedó más cerca del gobierno que del movimiento de oposición encabezado en ese momento por las jerarquías eclesiásticas. Con un discurso neutro, afirmó que en otras ocasiones se habían planteado similares confrontaciones de orden político-sociológico y que en los debates de mediados de la década del 80 del siglo pasado, José Manuel Estrada y muchos otros católicos de su generación y de la siguiente fueron partidarios de la separación de la Iglesia del Estado porque juzgaban que eso convenía más a dicha institución religiosa. Agregaba en esa misma dirección que en muchos países de América Latina la herencia ibérica había dejado una relación entre Iglesia y Estado semejante a la estatuida en nuestra Constitución Nacional, pero que luego, en la mayoría de ellos, se habían establecido reformas como la que se estaba proyectando en la Argentina. Todo indicaba, desde esa perspectiva, que se seguía el curso normal de actualización de las instituciones, aunque con un cierto atraso. En realidad, las referencias históricas y comparativas del matutino no se diferenciaban de las propuestas por los diputados peronistas. De allí que en el editorial en cuestión aparecieran totalmente articuladas las reflexiones del diario con las argumentaciones del miembro informante que en la Cámara de Diputados había expuesto los puntos de vista del bloque mayoritario. El editorial sobre tan delicada y litigiosa cuestión finalizaba con la esperanza de que por su "honda repercusión en las conciencias no se prestara a actitudes que desnaturalicen las divergencias lógicas en toda comunidad democrática"<sup>99</sup>. Nada dejaba traslucir en el análisis la dramaticidad adquirida por la "cuestión religiosa" en los que fueron los últimos meses del gobierno peronista.

En el clima denso de conspiraciones militares y de movilizaciones civiles a favor y en contra del gobierno, se produjo el bombardeo a la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955. *La Nación* fue terminante en su repudio a ese acontecimiento. Le pareció inad-

misible que un sector de las fuerzas armadas considerara "licito resolver por la violencia una distinta apreciación acerca de los métodos con que es dable conducir la gobernación del Estado"<sup>100</sup>. Las divergencias políticas no se podían, en su opinión, resolver por la vía de la violencia; para tal fin existía la ley de las mayorías. La acción militar había constituido un acto que desprestigiaba al país, decía textualmente, ante las otras democracias del mundo. Sin duda, esa caracterización del régimen de Perón como una democracia ubicaba al diario en las antípodas del pensamiento de los sectores de oposición cuyas expectativas estaban cifradas en el derrocamiento del gobierno.

Con igual severidad que la empleada para reprobar el bombardeo realizado por los militares antiperonistas, días más tarde el matutino vituperó a quienes, en esa misma jornada, saquearon e incendiaron varios templos católicos. El editorial invitaba a reflexionar sobre lo sucedido el 16 de junio, y reiteraba que la violencia no podía tener cabida en la Argentina, que había alcanzado en el consenso universal el prestigio de país progresista, culto y respetuoso de las normas impuestas por la civilización. Además, estimaba que Perón había censurado con adecuada energía a quienes habían cometido los desmanes. Cabía esperar, en opinión del matutino, que pasados esos momentos de extrema tensión, todos los actores enfrentados se decidieran a coexistir democráticamente<sup>101</sup>. Esa expectativa en un reencuentro político, deponiendo los estilos más beligerantes de acción, fue reiterada pocos días después, esta vez a propósito de una alocución del primer magistrado en demanda de la reconciliación nacional. El diario consideraba que se hallaban dadas todas las condiciones para resolver democráticamente y sin violencia las discrepancias partidarias. Aseveraba, en coincidencia con Perón, que no había otra alternativa que el "primado de las mayorías, acatamiento de las minorías, respeto de unas y de otras por normas de convivencia civil"<sup>102</sup>. Los luctuosos sucesos de junio podían convertirse, según su óptica, en un estímulo para acelerar el proceso de unidad nacional dentro del marco de respeto a las instituciones democráticas. En los primeros días de julio de 1955, cuando el jefe del Estado volvió a expresar en un discurso público su deseo de establecer un diálogo abierto con la oposición, *La Nación* llamó a los adversarios del gobierno a escuchar ese pedido. Debían buscarse los acuerdos y para ello, decía, bien podían servir los documentos originados en la tentativa en igual sentido propuesta por el Partido Conservador en 1953. Era preciso borrar, agregaba, las huellas de las luchas de los años recientes<sup>103</sup>. Consciente del valor que tenían las palabras, tituló "Una nueva etapa" a un edi-

torial de mediados de julio, donde reproducía un fragmento de un significativo discurso de Perón: "Yo dejo de ser el jefe de una revolución para pasar a ser el presidente de todos los argentinos, amigos o adversarios". Esas expresiones abrían, según el diario, la posibilidad de retornar a las mejores tradiciones políticas argentinas. Se terminaban, según deducía, las preferencias capaces de sugerir la idea de partido único; todas las agrupaciones políticas estarían ahora colocadas en pie de igualdad<sup>104</sup>. Con marcado optimismo, el matutino esperaba la materialización de la nueva etapa en acciones concretas.

¿Eran excesivas e infundadas las expectativas depositadas en una posible reconciliación nacional? Aun cuando a poco de ponerse en marcha las primeras iniciativas gubernamentales no faltaron datos que revelaran las dificultades de tal emprendimiento, el diario no depuso su esperanzada opinión. La decisión oficial de no acordar nuevos permisos a los partidos de oposición para utilizar los medios radiofónicos, la noticia de la muerte bajo torturas de un detenido político en Rosario y la realización de atentados terroristas por parte de sectores críticos al gobierno fueron, entre otros, los hechos de distinta naturaleza que se sumaron para mostrar que la ansiada pacificación no sería tan fácil de alcanzar. El matutino se refirió a los diferentes signos de crisis del proyecto de reconciliación y se preguntó: "¿Pero es ello motivo suficiente para que el desánimo se generalice y miremos sin inquietud los días de angustia que aquel estado de cosas nos promete?"<sup>105</sup>. Su respuesta era continuar y perseverar, y decía al gobierno que los actos de violencia individuales cometidos o planeados por sectores opositores no justificaban el abandono de la búsqueda de un nuevo estilo de convivencia política. Trataba, además, de relativizar las expresiones del nuevo jefe del Partido Peronista, Alejandro Leloir, que daban por clausurada la tregua política, e invitaba a todos, gobierno y oposición, a proseguir los esfuerzos. Además, destacaba como una contribución pacificadora que las autoridades nacionales hubieran postergado la convocatoria de las elecciones de convencionales constituyentes que debían resolver el problema de la eventual separación de la Iglesia del Estado.

*La Nación* reiteró su voluntad de buscar signos alentadores en los comportamientos del gobierno y de Perón cuando analizó la jornada del 31 de agosto de 1955. Ese día el presidente presentó primero su renuncia y luego, frente a una movilización multitudinaria de sus seguidores, modificó su decisión. Del discurso pronunciado por el líder del peronismo, es muy probable que la belicosa ecuación, plena de incógnitas y presagios inquietantes,

en la que Perón dijo a sus partidarios: "Cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos", fuera la más difícil de las frases para someter a una interpretación pacifista de sus intenciones. El comentario del diario no eludió referirse a esa amenazadora y asimétrica proporción político-matemática y sostuvo: "Antes de anunciar al pueblo el consentimiento que se le pedía formuló el general Perón manifestaciones acerca de la actualidad argentina, que será preciso pesar con espíritu equilibrado e interpretar en función del momento y de hechos recientes que le dan su significación substancial. No podrá, en efecto, verse en ellas una incitación al empleo de la fuerza, por cuanto el propio orador no vaciló en hacer el elogio de la tranquilidad y la calma que el trabajo requiere para ser fecundo"<sup>106</sup>. Seguidamente la reflexión se bifurcaba hacia consideraciones de orden económico, y llamaba la atención de las autoridades sobre las consecuencias que en la esfera de la producción podían tener los hechos y los enunciados políticos. Al respecto argumentaba que las fuerzas que actuaban en la economía eran "de una sensibilidad tan fina que cualquier situación de inquietud, el más leve desasosiego, fruto a veces de una mala interpretación o de un rumor infundado, pueden actuar en su conducta creando difíciles estados de apremio para la vida total de un país"<sup>107</sup>. Con esa relación entre la política y la economía, no sólo se le quitaba dramaticidad al comentario de la beligerante ecuación de Perón, sino que, además, se le trataba de explicar al presidente el contrasentido de convocar al empresariado a invertir más y aumentar la producción y, a la vez, intranquilizarlo con discursos que podían ser mal interpretados.

Los sucesos militares que desembocaron en el derrocamiento del gobierno peronista fueron analizados por *La Nación* en un editorial totalmente desapasionado y sin plantear críticas a las autoridades depuestas. Si se compara el editorial del día siguiente a la caída de Yrigoyen con el de la primera jornada de la Argentina sin Perón, este último se destaca por su gran moderación. En el mismo sentido puede afirmarse que el primer comentario editorial acerca del golpe de las fuerzas armadas contra Castillo revelaba una satisfacción considerablemente mayor que el consagrado al fin de la administración peronista. El mismo día del triunfo de la insurrección militar que depuso a Perón, el matutino convocó a olvidar agravios y rencores y a realizar la reconciliación nacional que, a su entender, debía seguir "a una lucha entre hermanos como la que acaba de cerrarse felizmente"<sup>108</sup>. Creía que en torno a esa meta de superación de los enfrentamientos coincidían los partidos políticos y los sindicatos

peronistas, y recordaba que estos últimos habían dirigido a la opinión apremiantes llamamientos para evitar la alteración de la tranquilidad pública. La voluntad de no emplear términos que pudieran agraviar a los partidarios de Perón era ostensible en ese primer análisis del diario. Esa decisión se revelaba, además, en la ausencia de mayores referencias a lo sucedido en la etapa clausurada con la intervención castrense. Al expresar su preocupación por los riesgos que podían entrañar las actitudes vindicativas, el matutino decía: "Cualesquiera sean o hayan sido las divergencias ocasionales de los argentinos, esta dolorosa experiencia que acabamos de atravesar ha de ayudarnos a entendernos mejor, a ser mejores"<sup>109</sup>. Esa posición coincidía en lo sustancial con la del jefe del movimiento revolucionario, general Lonardi, sintetizada en la fórmula "ni vencedores ni vencidos". Es interesante destacar que tres años después del derrocamiento de Perón, el hijo de Lonardi publicó un libro en defensa de los puntos de vista conciliadores de su padre y entre los ejemplos para mostrar cómo en septiembre de 1955 había muchas opiniones favorables a la orientación pacificadora, incluyó el editorial comentado<sup>110</sup>. La perspectiva asumida por el diario en la densa coyuntura del día de la victoria del golpe de Estado se encontraba en estricta continuidad con las ideas que había defendido en los últimos años del gobierno peronista. Pero esa jornada sólo fue el preludeo de la nueva etapa que se inauguraba, otra vez, para el país y para *La Nación*.

#### La Nación: 1946-1955

*El gobierno peronista produjo importantes transformaciones en las relaciones entre el Estado y la sociedad. Nos interesa aquí destacar la modificación sustancial introducida en lo que Jürgen Habermas denomina la esfera pública de lo político, espacio en el cual se discute sobre las orientaciones de la praxis estatal<sup>111</sup>. En esos debates no participan todos los ciudadanos; lo hacen aquellos a quienes se reconoce palabra autorizada y los actores colectivos organizados para hacerse escuchar. Los diarios son protagonistas activos de la esfera pública de lo político, ya sea por transmitir los puntos de vista de otros actores o al expresar lo que consideran ideas, demandas o aun estados animicos de sectores de la población, sensibilidades que aseguran captar a pesar de no hallarse formalmente expuestas en un discurso estructurado. Esas dispares fuentes y dimensiones del conocimiento conforman una*

entidad abstracta que los diarios denominan opinión pública. Dicha opinión pública puede perfectamente divergir de los representantes parlamentarios de las mayorías electorales o de los titulares de un Poder Ejecutivo designado por vía democrática, dado que se trata de un artefacto conceptual donde se combina lo puntual con lo etéreo. Puntual, en tanto opina sobre temas de carácter específico o imprevisto, no necesariamente abordados en las contiendas electorales. Etéreo, por remitir en muchos casos el origen de su preocupación a un magma social no determinado con precisión. Esta función de oráculo asumida por la prensa puede considerarse una variante de lo que hace dos siglos Edmund Burke llamaba representación virtual, "en la que existe una comunión de intereses y simpatía en los sentimientos y deseos, entre quienes actúan en nombre de un determinado grupo y aquellos en cuyo nombre se actúa, aunque los depositarios de la confianza no hayan sido de hecho elegidos por ellos"<sup>112</sup>.

Walter Lippmann, en su célebre libro sobre el tema, alertó acerca del peligro que entrañaba convertir a la prensa en un decodificador de la opinión pública y creyó conveniente dejar a las ciencias sociales el rol de escrutador metódico y sistemático de los cambiantes puntos de vista de la sociedad<sup>113</sup>. Pierre Bourdieu, por su parte, se encargó de negar con argumentaciones sociológicas consistentes la existencia misma de la opinión pública, caracterizándola como una construcción arbitraria<sup>114</sup>. Pero ni los deseos de Lippmann ni las afirmaciones de Bourdieu impiden que, con su persistencia cotidiana, los medios de prensa asuman la representación virtual de eso que llaman opinión pública.

La tarea de los diarios opositores, como se ha visto, no fue fácil en el período comprendido entre 1946 y 1955. Hablar en nombre de la opinión pública, o tratar de construirla, proponiendo una visión de la realidad contraria a la del gobierno de Perón, era riesgoso. El cierre de medios de comunicación opositores, la creación de una cadena de prensa favorable a las autoridades, el manejo de las cuotas de papel, fueron, entre otros, aspectos frecuentemente destacados por los críticos de la gestión peronista. Pero quienes querían formular objeciones al gobierno en nombre de la opinión pública y trataban de expresar la visión de los sectores social y económicamente predominantes, enfrentaron otro problema aún más complejo. Los peronistas habían alcanzado el poder en un contexto de desorganización y crisis de dichos sectores sociales. Desde el Estado profundizaron su desorganización, al impedirles expresar sus objeciones, demandas e intereses mediante la limitación de las libertades públicas. Las entidades empresarias más representativas corrieron distinta suerte —intervención guber-

namental (Unión Industrial Argentina), presiones oficiales para silenciar sus críticas y dar luego el apoyo al peronismo (Sociedad Rural Argentina) o restricciones y disolución (confederaciones agrarias de las provincias de Buenos Aires y La Pampa)—. Esas acciones, ejecutadas desde el Estado, provocaron una casi total desaparición de importantes actores colectivos que desde hacía mucho estaban habituados a hacer escuchar sus requerimientos y puntos de vista. Las organizaciones sociales y culturales más directamente vinculadas a los sectores tradicionales vieron recortar su esfera de influencia y el reconocimiento societario que habían tenido en otros momentos. En los procesos de toma de decisiones de los primeros años del peronismo fue notoria la voluntad de acordar atención preferencial a las demandas de los sectores populares. Con independencia de la profundidad de los cambios efectivamente producidos, el discurso oficial construyó una representación imaginaria de las transformaciones en curso que enfatizaba la antinomia entre el “pueblo” y un adversario, nunca muy bien definido, designado con el término “oligarquía”. Acalladas total o parcialmente las protestas de las corporaciones empresarias; restringida la acción de las asociaciones sociales y culturales de los sectores de mayor prestigio tradicional; desclasificada en el discurso oficial la condición social de los opositores, la consecuencia directa fue la dificultad para enunciar objeciones al gobierno desde puntos de vista que se autoadjudicaran la voz de la opinión pública. Si bien la oposición no fue legalmente suprimida —como sucedió bajo el fascismo, el comunismo o algunas dictaduras latinoamericanas—, la reticencia del peronismo a aceptar críticas públicas convirtió en peligrosa la condición de disidente. En la exploración de los límites de una oposición aceptable cayó un amplio número de órganos de prensa.

La defensa de las libertades públicas, la crítica al autoritarismo de muchas decisiones oficiales, el reclamo de mayor respeto a la Constitución fueron, junto con las objeciones a la política económica intervencionista, los terrenos principales donde La Nación planteó sus diferencias con el gobierno peronista durante sus primeros años. Probablemente, la temática económica fue la menos urticante para las autoridades, dado que en ella se mencionaban principios y tendencias más que personas y funcionarios. Para el diario, ése debió ser el campo temático más fácil de abordar y donde gozó de mayor libertad. Aun así, la opacidad impuesta a las declaraciones de las organizaciones empresarias hacía que las objeciones a la política económica debieran formularse a nombre propio y no como eco de demandas expuestas por otros actores. Los cambios producidos en el radicalismo a partir del predominio logrado

por el sector intransigente, cuya orientación programática era estatista y antiagrarista, le quitaron también al matutino la posibilidad de expresarse en concordancia con el principal partido opositor. Prácticamente, hasta 1951 La Nación y La Prensa fueron las dos principales expresiones contrarias a Perón con presencia importante en la esfera pública de lo político. Los escasos folletos o medios periodísticos de los partidos antiiperonistas tenían poca difusión. En comparación con La Prensa, el estilo de La Nación era menos agresivo, aunque el contenido del mensaje era similar. Esa diferencia de estilo, reconocible a lo largo de la historia de ambos diarios, fue un factor que seguramente incidió en la decisión gubernamental de sancionar a uno y no al otro. A fines de 1951, en oportunidad de la reelección de Perón, como observara el periódico oficialista Democracia, sólo el diario fundado por Mitre persistía en oponerse públicamente al gobierno. En esa época, su posición cambió.

Es imposible aislar los factores que pudieron operar en esa reorientación de La Nación. La modificación de los planteos económicos del gobierno, con la aceptación de muchas ideas tradicionalmente defendidas por el liberalismo, debió ser un elemento muy importante. Conjugar masas electorales con una política económica de corte liberal, aun atenuada y más enunciada que puesta en práctica, era una novedad que el diario entendió pertinente apoyar. En esa actitud no estuvo solo: el giro liberal le deparó a Perón algunos nuevos aliados. El entusiasmo que se instaló en los editoriales de La Nación desbordó muy pronto lo estrictamente económico. Como se ha visto, esa visión optimista se mantuvo hasta el golpe militar, minimizando muchos datos que contrariaban la idea de un peronismo renovado y dispuesto a respetar las normas constitucionales y a sus adversarios. ¿Fue la orientación de La Nación, durante los tres últimos años del peronismo, una estrategia centrada en su propia autodefensa en tanto aparato o empresa? De no haberse registrado la modificación de los planteos económicos oficiales, dar una respuesta afirmativa sería relativamente simple. La estrategia de supervivencia de un actor nunca puede descartarse en el análisis de sus conductas. Probablemente, la contestación adecuada se encuentre en una combinación entre la influencia de los cambios a nivel de la gestión estatal y la búsqueda de una mejor relación con el poder. Si no hubiera modificado su línea, el matutino se habría convertido desde 1952 en el más visible de los opositores vinculados a la tradición liberal conservadora, en tanto una parte de las entidades empresarias de la misma sensibilidad ideológica ya no escatimaba expresiones de apoyo público a la reorientación del gobierno. En 1954, Arthur P. Whitaker publicaba un libro sobre las relaciones entre la Argentina y los Estados

Unidos; allí trazaba como muy probable un escenario prospectivo con una nueva reelección de Perón para el periodo 1957-1963, y descartaba la posibilidad de un golpe de Estado<sup>15</sup>. Para Whitaker, los radicales no conseguirían derrotar en las urnas al peronismo; además, juzgaba que su programa era más negativo que el de Perón para los intereses de las grandes empresas nacionales y extranjeras y para los Estados Unidos. En ese contexto, donde todo parecía indicar una larga vida para el gobierno peronista, tal vez las estrategias del diario buscaron en la política de coexistencia primero y de apoyo luego, si no la mejor alternativa, al menos la más adecuada. Uno de los políticos conservadores con mayor agudeza de análisis, Emilio Hardoy, evaluó así el desempeño de los medios periodísticos durante el peronismo: "Ha habido dos grandes diarios. La Prensa que fue confiscada en la época pasada, y La Nación que prestó inapreciables servicios subsistiendo"<sup>16</sup>.

Hardoy razonaba como si hubiera existido un dispositivo global, carente de articulaciones planificadas, del cual percibía los vínculos recíprocos a pesar de los disímiles comportamientos de sus integrantes. Para muchos antiperonistas de reflexión menos sutil, ese cambio de frente del matutino debió vivirse como un acto indigno, no perdonable ni siquiera a una anciana dama. Pero lo cierto fue que La Nación logró atravesar el periodo seguramente más difícil de su ya larga trayectoria. La Nueva Argentina había quedado atrás; se iniciaba la compleja tarea de borrar sus trazas.

## NOTAS

<sup>1</sup> La Nación, 4-6-1946, pág. 4.

<sup>2</sup> La Nación, 3-9-1946, pág. 4.

<sup>3</sup> La Nación, 20-9-1946, pág. 4.

<sup>4</sup> La Nación, 4-10-1946, pág. 4.

<sup>5</sup> La Nación, 8-10-1946, pág. 6.

<sup>6</sup> La Nación, 19-9-1946, pág. 6.

<sup>7</sup> La Nación, 15-12-1947, pág. 4.

<sup>8</sup> La Nación, 7-3-1947, pág. 4.

<sup>9</sup> La Nación, 15-6-1947, pág. 6.

<sup>10</sup> La Vanguardia. Edición de homenaje preparada por la Comisión de Prensa del Partido Socialista, 1948, pág. 14.

<sup>11</sup> La Nación, 22-9-1947, pág. 4.

<sup>12</sup> La Nación, 22-8-1947, pág. 4.

<sup>13</sup> La Nación, 8-10-1947, pág. 4.

<sup>14</sup> La Nación, 26-11-1947, pág. 4.

<sup>15</sup> La Nación, 13-6-1948, pág. 6.

<sup>16</sup> La Nación, 10-6-1947, pág. 6.

- <sup>17</sup> *La Nación*, 9-12-1947, pág. 6.
- <sup>18</sup> *La Nación*, 22-5-1948, pág. 6.
- <sup>19</sup> *La Nación*, 15-8-1948, pág. 6.
- <sup>20</sup> *La Nación*, 26-8-1948, pág. 6.
- <sup>21</sup> *La Nación*, 5-12-1948, pág. 4.
- <sup>22</sup> Carlos Dalmiro Viale: "El extranjerismo en la prensa". *Argentina*, Año 1, N° 9, octubre de 1949, pág. 8.
- <sup>23</sup> Carlos Dalmiro Viale: "La prensa sometida". *Argentina*, Año 1, N° 10, noviembre de 1949, pág. 10.
- <sup>24</sup> El 29 de agosto de 1949 Perón resumió, en una carta enviada al senador chileno Arturo Alessandri, su opinión sobre la situación del periodismo argentino: "Usted sabrá que mi gobierno sólo tiene influencia directa en el diario *Democracia*, que, habiendo sido de mi señora, obedece a su orientación y a la mía. Es el matutino 'peronista' de mayor tiraje (400.000 ejemplares). Los demás diarios no están sometidos a control alguno, pues la 'libertad de prensa' impera aquí merced al postulado constitucional que cumplimos ampliamente. A veces también me pegan fuertemente a mí, pero entiendo que es un inconveniente, y forma parte de la función de gobernar. *La Prensa* y *La Nación* son diarios de oposición en manos de la oligarquía argentina y pagos, en forma disimulada, por los intereses foráneos. En ellos no hay posible acción, como no sea la polémica por medio de los diarios que nos son afectos. *Crítica*, antiguo órgano de Botana, hoy propiedad de la esposa de éste, con tendencia comunoides (...) *Noticias Gráficas*, que pertenece a un consorcio financiero privado, hace sensacionalismo para vender más. *La Razón* es peronista (...) *El Líder*, órgano de la Asociación de Empleados de Comercio (...) *El Laborista*, diario clasista perteneciente a los obreros (...) *El Mundo* pertenece a un consorcio inglés. *La Época* pertenece al diputado Colom, que es de esos hombres difíciles de controlar y manejar y, a pesar de ser excelente amigo y correligionario, como periodista hace lo que quiere". Reproducida en *Diario secreto de Perón*. Anotado por Enrique Pavón Pereyra, Sudamericana-Planeta, Buenos Aires, 1985, pág. 102.
- <sup>25</sup> *La Nación*, 13-1-1949, pág. 4.
- <sup>26</sup> *La Nación*, 16-7-1949, pág. 4.
- <sup>27</sup> *La Nación*, 29-7-1949, pág. 4.
- <sup>28</sup> Cable publicado en *La Nación* el 26-11-1949, pág. 4.
- <sup>29</sup> Resulta ilustrativo al respecto el diálogo entre Visca y el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires con motivo de la intervención de la contabilidad de esta institución, transcripto por *La Nación* el 16-12-1949, pág. 4.
- <sup>30</sup> *La Nación*, 30-12-1949, pág. 4.
- <sup>31</sup> *El Intransigente*, facsímil reproducido en el libro *Hojas de lucha* (boletines del diario *El Intransigente*), Salta, 1965.
- <sup>32</sup> Noticia publicada por *La Nación*, 3-1-1950, pág. 4.
- <sup>33</sup> *La Nación*, 18-2-1950, pág. 4.
- <sup>34</sup> *La Nación*, 2-4-1950, pág. 4. Como nota marginal, cabe recordar que Oscar Ivanissevich manifestó su admiración y simpatía por el general Bartolomé Mitre en un breve artículo donde, en su carácter de investi-

gador científico, había estudiado la fractura frontal producida por una bala enemiga al entonces joven coronel en 1853. Mitre había sobrevivido, decía Ivanissevich, por uno de esos "milagros absolutos que vienen repitiéndose ante nuestra ceguera desde los más remotos días de la Historia Argentina". Oscar Ivanissevich: "La herida de Mitre", Boletín del Instituto de Clínica Quirúrgica, Buenos Aires, abril de 1945, pág. 202.

<sup>35</sup> Julio Meinvielle en *Presencia*, 28-4-1950. Reproducido en *Política argentina*, Editorial Trafac, Buenos Aires, 1956, págs. 130-131.

<sup>36</sup> *La Nación*, 17-4-1950, pág. 4.

<sup>37</sup> *La Nación*, 22-8-1950, pág. 4.

<sup>38</sup> *La Nación*, 8-9-1950, pág. 4.

<sup>39</sup> Roberto F. Giusti: *Visto y vivido*, Losada, Buenos Aires, 1965, pág. 220.

<sup>40</sup> *La Nación*, 29-4-1950, pág. 4.

<sup>41</sup> Giusti: Ob. cit., págs. 221-222.

<sup>42</sup> El discurso de Carlos H. Perette fue reproducido en *Luis Mitre (1869-1950)*, Alberto Caprile (1872-1951), publicación de homenaje de *La Nación*, 1951, págs. 34-36.

<sup>43</sup> *La Nación*, 20-1-1951, pág. 4.

<sup>44</sup> *La Nación*, 1-2-1951, pág. 4.

<sup>45</sup> *La Nación*, 10-3-1951, pág. 4.

<sup>46</sup> *La Nación*, 13-4-1951, pág. 4.

<sup>47</sup> *La Nación*, 8-3-1951, pág. 4.

<sup>48</sup> *La Nación*, 4-7-1951, pág. 4. Sobre la posición favorable a la política del peronismo en materia de prensa, ver *Cincuenta y tres periodistas argentinos: Libro azul y blanco de la prensa argentina*, Organización Nacional del Periodismo Argentino, Buenos Aires, 1951, págs. 196-260.

<sup>49</sup> *La Nación*, 10-7-1951, pág. 4.

<sup>50</sup> *La Nación*, 15-9-1951, pág. 4.

<sup>51</sup> "El diario que fue de Mitre quiere volver al gobierno de las minorías", en *Democracia*, 14-7-1951, pág. 1. El autor agradece a la licenciada Nora Charlin su colaboración con respecto a *Democracia*.

<sup>52</sup> "Acusadora soledad de la contra", en *Democracia*, 14-8-1951, pág. 1.

<sup>53</sup> *La Nación*, 20-9-1951, pág. 4.

<sup>54</sup> Roberto F. Giusti: Op. cit., pág. 220.

<sup>55</sup> *La Nación*, 9-11-1951, pág. 4.

<sup>56</sup> *La Nación*, 13-11-1951, pág. 4.

<sup>57</sup> Ramón Doll: "La Nación añora otros tiempos", en *Plumadas Naciona- listas*, Año 1, N° 26, 18 de diciembre de 1951, pág. 1.

<sup>58</sup> *La Nación*, 2-2-1952, pág. 2.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *La Nación*, 21-1-1952, pág. 2.

<sup>61</sup> *La Nación*, 18-2-1952, pág. 2.

<sup>62</sup> *La Nación*, 20-2-1952, pág. 2.

<sup>63</sup> *La Nación*, 5-3-1952, pág. 2.

<sup>64</sup> *La Nación*, 7-3-1952, pág. 2.

<sup>65</sup> *La Nación*, 18-3-1952, pág. 2.

<sup>66</sup> *La Nación*, 5-4-1952, pág. 2.

- 67 *La Nación*, 27-7-1952, pág. 1.
- 68 *La Nación*, 20-9-1952, pág. 2.
- 69 *Ibid.*
- 70 *La Nación*, 17-6-1952, pág. 2.
- 71 *La Nación*, 4-7-1952, pág. 2.
- 72 *La Nación*, 3-12-1952, pág. 2. La posición del Partido Demócrata era en esa época totalmente contraria al gobierno. El folleto titulado: "El Partido Demócrata hace el análisis crítico de algunos aspectos del mensaje presidencial al Congreso de la Nación (1-V-1952) y del estado general de la República" sistematizó sus objeciones a la política económica hasta esa fecha y expresó su desconfianza hacia los anuncios de liberalización formulados por Perón.
- 73 *Libro negro de la segunda tiranía*, texto completo y definitivo, Buenos Aires, 1958, pág. 186.
- 74 *La Nación*, 16-4-1953, pág. 2.
- 75 *Ibid.*
- 76 Jorge Newton y Lily de Newton: *Historia del Jockey Club de Buenos Aires*, Ediciones L. N., Buenos Aires, 1965.
- 77 *La Nación*, 13-6-1953, pág. 2.
- 78 *La Nación*, 19-7-1953, pág. 2.
- 79 *La Nación*, 2-7-1953, pág. 2.
- 80 *Ibid.*
- 81 Diario de sesiones de la Convención Nacional Constituyente, citado en Juan José Real: *30 años de Historia Argentina*, Ediciones Actualidad, Buenos Aires-Montevideo, 1962, pág. 153.
- 82 *La Nación*, 13-11-1953, pág. 2; 2-1-1954, pág. 2.
- 83 "Los elogios de los adversarios", *Democracia*, 7-1-1954, pág. 1.
- 84 *Democracia*, 25-1-1954, pág. 3.
- 85 *La Nación*, 23-4-1954, pág. 2.
- 86 *La Nación*, 27-9-1954, pág. 2.
- 87 *La Nación*, 5-7-1954, pág. 2.
- 88 Manuel Augusto Gondra: *Declinación del radicalismo y política del futuro*, Ediciones El Mirador, Buenos Aires, 1957, pág. 84. Nicolás Babiñi: *Frondizi. De la oposición al gobierno*, Celtia, Buenos Aires, 1984, pág. 112. La persona a la cual Babiñi hacía referencia era Haroldo Foulkes.
- 89 *La Nación*, 25-3-1954, pág. 2.
- 90 *La Nación*, 22-7-1954, pág. 2.
- 91 *La Nación*, 10-8-1954, pág. 2.
- 92 *La Nación*, 16-4-1955, pág. 2.
- 93 El autor agradece al profesor Luis Alberto Romero haberle indicado cuáles fueron los editoriales redactados por José Luis Romero.
- 94 *La Nación*, 5-4-1955, pág. 2.
- 95 *La Nación*, 28-4-1955, pág. 2.
- 96 *La Nación*, 2-5-1955, pág. 2.
- 97 Bonifacio del Carril: *Crónica interna de la Revolución Libertadora*, Emecé, Buenos Aires, 1959, pág. 38.
- 98 *La Nación*, 16-12-1954, pág. 2.
- 99 *La Nación*, 20-5-1955, pág. 2.

- <sup>100</sup> *La Nación*, 17-6-1955, pág. 2.
- <sup>101</sup> *La Nación*, 21-6-1955, pág. 2.
- <sup>102</sup> *La Nación*, 24-6-1955, pág. 2.
- <sup>103</sup> *La Nación*, 6-7-1955, pág. 2.
- <sup>104</sup> *La Nación*, 16-7-1955, pág. 2.
- <sup>105</sup> *La Nación*, 23-8-1955, pág. 2.
- <sup>106</sup> *La Nación*, 1-9-1955, pág. 4.
- <sup>107</sup> *Ibid.*
- <sup>108</sup> *La Nación*, 22-9-1955, pág. 2.
- <sup>109</sup> *Ibid.*
- <sup>110</sup> Luis Ernesto Lonardi: *Dios es justo*, Editorial Itinerarium-Francisco Colombo, Buenos Aires, 1958, págs. 189-191.
- <sup>111</sup> Jürgen Habermas: *Historia y crítica de la opinión pública. Las transformaciones estructurales de la vida pública*, Ediciones G. Gilli S.A., México, 1986.
- <sup>112</sup> Edmund Burke: "Letter to Sir Hercules Languishe, Bart. M. P., on the Subject of the Roman Catholics of Ireland (1792)", en Kurt Lenk y Franz Neumann (eds.): *Teoría y sociología críticas de los partidos políticos*, Editorial Anagrama, Barcelona, 1980, pág. 83.
- <sup>113</sup> Walter Lippmann: *La opinión pública*, Fabril Editora, Buenos Aires, 1964, pág. 31.
- <sup>114</sup> Pierre Bourdieu: *Questions de sociologie*, Minuit, Paris, 1980, págs. 222-235.
- <sup>115</sup> Arthur P. Whitaker: *La Argentina y los Estados Unidos*, Proceso, Buenos Aires, 1956, págs. 273-280.
- <sup>116</sup> Emilio Hardoy: *Defensa de la responsabilidad*, s/e, Buenos Aires, 1958, pág. 104.



TERCERA PARTE

DESCONCIERTO Y NOSTALGIA  
1955 - 1976



## IX

### Después de Perón: la búsqueda de nuevas claves para explicar la política

*La Nación* evaluó con expectativas muy favorables la etapa iniciada con la caída de Perón. Consideró posible proceder a una rápida reconstrucción de las instituciones democráticas y superar la etapa peronista en la cual, según afirmaba, bajo apariencias formalmente legales el país había vivido fuera de la ley. Fiel a las posiciones que había defendido en los últimos años de la administración recién derrocada, siguió postulando la necesidad de la reconciliación nacional. En sus reflexiones, la responsabilidad de lo sucedido en esa década debía adjudicarse a Perón y a los dirigentes que lo secundaron, no así a la gran masa de sus seguidores, a quienes suponía engañados por la demagogia. Las multitudes que concurrieron al acto de asunción de funciones del presidente Lonardi eran, desde su perspectiva, la demostración palmaria de la reserva cívica del país, no alcanzada por la acción gubernamental. Esperaba que en muy poco tiempo quienes habían apoyado a Perón comprenderían su equivocación y se reincorporarían a la senda de la democracia. Por eso opinaba que debía excluirse toda clase de persecución y revanchismo. Tampoco se podía fantasear con retrotraer la política a las prácticas anteriores al peronismo y al respecto era terminante: "No hemos de volver al terrible existir de los días en que se proclamaba el fraude patriótico y se anhelaba el triunfo de la autocracia en el mundo (...) ninguna transgresión de la democracia nos hallará renuentes"<sup>1</sup>.

La perspectiva del diario a favor de la pacificación nacional tenía estrechas coincidencias con la del presidente Lonardi. Pero esto no significaba una convergencia en todos los planteos y estrategias esbozados por los equipos gobernantes. Es más, el matutino manifestó muy pronto su resquemor, compartido por los sectores más liberales que acompañaban a la revolución de septiembre, ante lo que se presentaba como la excesiva influencia

sobre el presidente de grupos de ideología nacionalista de derecha. No había pasado una semana de la instalación de la administración de Lonardi cuando formuló un examen global del nuevo gobierno, donde destacó que había quienes se sentían un tanto desilusionados por el lento ritmo impreso a los cambios; no había que preocuparse por ello, advertía, siempre y cuando no se alterara la meta de restaurar la tradición liberal democrática. Con una fórmula indirecta sólo en apariencia, *La Nación* sostenía que esa necesidad de no desvirtuar los objetivos finales de la revolución debía ser tenida en cuenta por quienes en sus épocas de juventud, "en el triste periodo de los avances totalitarios —cualquiera fuese su nacionalidad y su tendencia— se dejaron seducir por las voces de sirena que proclamaban la quiebra de la democracia en el mundo"<sup>2</sup>. En el momento político de publicación de esas consideraciones, para cualquier mediano conocedor de la trayectoria anterior de los nuevos altos funcionarios, esa alusión a los cautivos de los cantos de las ninfas marinas del totalitarismo era prácticamente obvia: aludía al ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Mario Amadeo, y al secretario de Prensa y Actividades Culturales de la Presidencia, Juan Carlos Goyeneche. Que las ideas antiliberales de ambos no eran meros devaneos juveniles lo demostraba el hecho de que, cuando la llamada "Revolución Libertadora" los convocó a la función pública, aún se contaban entre los defensores del franquismo español. En especial, los mayores resquemores los suscitaba Goyeneche por sus funciones directamente vinculadas a los medios de comunicación y más en general a la cultura. De él dependían, en principio, muchos de los recursos que formaban parte de la cadena periodística todavía controlada por el Estado. Según afirma Eduardo A. García en su libro de testimonios políticos, tanto Goyeneche como otros miembros del equipo de asesores de Lonardi no tenían el más mínimo interés en devolver el diario *La Prensa* a sus anteriores propietarios<sup>3</sup>. Días antes de la destitución de Lonardi, Goyeneche presentó su renuncia y alegó una supuesta campaña de prensa en su contra organizada por sectores de ideología liberal, entre los que, naturalmente, no podía sino incluirse *La Nación*<sup>4</sup>.

Con referencia a la acción del gobierno militar en el plano económico, el matutino consideraba que no hacían falta mayores debates; sus ideas eran claras. Tal como había sostenido a lo largo de los años precedentes, reiteraba que el gran problema argentino era el excesivo intervencionismo estatal. Se debía, en consecuencia, desmontar los aparatos burocráticos juzgados demasiado costosos y parasitarios, cuyo mantenimiento suponía excesivas erogaciones de los contribuyentes. El intervencionismo

estatal se encontraba desde esa óptica en el origen de la inflación, los bajos índices de crecimiento y el desaliento de la innovación y las inversiones<sup>5</sup>. De todos los sectores de la producción, el agrario era considerado el más perjudicado por las políticas económicas implementadas por los peronistas y al que más se debía reparar. La supresión de los distintos mecanismos de regulación aparecía como la condición para el progreso de la producción rural, la que, a su vez, debía motorizar al resto de la economía. La intervención del Estado reducida al mínimo indispensable permitiría asegurar la mejor convivencia social mediante el cumplimiento de los deberes y el respeto de los derechos de cada individuo. El matutino creía que estaban dadas todas las condiciones para que el gobierno impulsara la liberalización de la economía y el país entrara por esa vía en un nuevo ciclo de crecimiento.

En la etapa abierta luego de la caída de Perón, uno de los principales criterios de autoridad que permitía hablar de política con solvencia y reconocimiento consistía en acreditar un pasado opositor. Muy probablemente a fin de contrarrestar el todavía fresco recuerdo de sus posiciones favorables a múltiples aspectos de la política de los tres últimos años del peronismo, el diario reprodujo a mediados de octubre de 1955 algunos fragmentos de los editoriales publicados en 1951, en los que se objetaban con singular dureza los manejos oficialistas en materia electoral<sup>6</sup>. ¿Había quedado el matutino en una situación relativamente vulnerable en virtud de su apoyo a la política económica peronista posterior a 1952 y de su prédica a favor de la pacificación iniciada en esa misma época? Sería difícil dar una respuesta a esa pregunta, pero es posible conjeturar que la evocación de los análisis de antes de 1952 puede haber sido un recurso empleado para reforzar la legitimidad de su palabra en las nuevas confrontaciones cuyas líneas divisorias quedaron establecidas al día siguiente del golpe de Estado.

Muchas personalidades con figuración política en la etapa anterior al peronismo volvieron a ocupar posiciones públicas con el gobierno militar. Objeto de especial elogio de *La Nación* fue la designación de Alfredo Palacios como titular de la embajada argentina en la República Oriental del Uruguay. El mismo dirigente socialista, muchos años antes encomiado con motivo de su actuación parlamentaria, era ahora saludado por su "conducta puesta al servicio de Argentina y de América"<sup>7</sup>. Con distinto género de méritos, pero con una trayectoria igualmente prestigiosa, Raúl Prebisch fue nombrado asesor económico y financiero de la Presidencia. Prebisch había participado en la creación del

Estado intervencionista; primero como subsecretario del Ministerio de Hacienda en el gobierno del general Uriburu y luego en la gerencia del Banco Central durante la gestión ministerial de Pinedo. El informe sobre la situación económica nacional que Prebisch elaboró a pedido del gobierno de Lonardi recomendaba el retorno a una mayor libertad de mercado y coincidía globalmente con las demandas formuladas en la época por los sectores de ideología liberal. El diario comentó el informe, en el que vio una confirmación más de lo acertado de sus propias posiciones en materia económica<sup>8</sup>. Por otra parte, se hizo eco de las más diversas demandas de las entidades corporativas empresarias, que también insistían en la necesidad perentoria de disminuir el intervencionismo estatal en las diferentes esferas de la actividad económica.

Junto con el tema económico cobraba importancia la discusión sobre las cuestiones relacionadas con el sindicalismo. Atento a su idea de no enfrentarse con los sindicatos peronistas, el gobierno de Lonardi los había dejado funcionar libremente. Por su parte, la actitud de la CGT frente a la revolución de septiembre había sido totalmente conciliadora y de aceptación, sin mayores protestas, de la nueva situación. El mismo Perón recordaría, años después de su caída, el comportamiento sindical en términos condenatorios harto elocuentes: "La huelga general estaba preparada y no salieron. Los dirigentes, con De Pietro a la cabeza y toda la CGT lista para parar el país... ¡y no pararon! Trataron de arreglarse con los que venían"<sup>9</sup>. Evidentemente, la actitud negociadora de los dirigentes sindicales fue decisiva para que Lonardi no interviniera la central obrera. Contribuyó, sin duda, a esa orientación contemporizadora la visión del problema sindical del nuevo ministro de Trabajo, Luis Cerruti Costa, quien hasta el momento del derrocamiento del peronismo se desempeñaba como asesor legal de la Unión Obrera Metalúrgica. *La Nación* no ocultó su disconformidad con la manera de encarar el tratamiento del problema sindical. En su opinión, la CGT había sido una pieza clave del dispositivo político montado por las autoridades depuestas. Si bien estimaba correcto que el presidente Lonardi cumpliera su promesa de mantener las conquistas obreras, y aun las ampliara, entendía igualmente importante devolver a la vida sindical las bases de libertad y de democracia por las cuales habían luchado, decía, miles de trabajadores en la década peronista, sufriendo persecuciones y cárcel, torturas y hasta la muerte. Como alternativa inmediata reclamaba colocar a los gremios en estado de asamblea y que luego de fijar normas adecuadas se realizaran elecciones sindicales bajo control de las fuerzas

armadas. No proceder así, estimaba, "significaría defraudar a la clase trabajadora, entregándola nuevamente a quienes la manejan con la única misión de servir a la tortuosa política del régimen caído"<sup>10</sup>. Las críticas a las orientaciones adoptadas frente a los sindicatos se hacían aún mayores por la emergencia de los primeros movimientos de huelga para protestar contra medidas del nuevo gobierno.

Cuando los sectores militares contrarios al general Lonardi decidieron sustituirlo por el general Aramburu, el matutino expresó su satisfacción. Según su punto de vista, el movimiento de septiembre había sido una obra mancomunada del pueblo y de las fuerzas armadas cuyo único fin era la restauración plena de la democracia. Al iniciarse el gobierno de Lonardi, aseveraba, la opinión pública había recibido con prevención y desconcierto algunas declaraciones y en especial determinados nombramientos poco congruentes con los cometidos originales de la revolución. La crisis culminada con la designación de Aramburu mostraba, según su opinión, que si se quería realmente volver a la democracia no se podía aceptar la participación en el gobierno provisional de quienes habían colaborado con la administración peronista ni tampoco de aquellos "que se lanzaron a empeñosas campañas de revisionismo histórico y que, por sus antecedentes ideológicos, suscitan reservas como colaboradores de la ardua tarea de recuperación nacional"<sup>11</sup>. Para el matutino, Lonardi y sus equipos de gobierno iban a encaminar a la revolución de septiembre a la frustración de todas las expectativas depositadas en ella por los sectores de pensamiento democrático; con Aramburu cabía esperar la apertura de una nueva etapa.

Entre las primeras medidas adoptadas por el presidente Aramburu se contó la intervención de la CGT. El detonante de esa decisión fue el paro general declarado por los dirigentes sindicales frente a la revolución de palacio que destituyó a Lonardi. La intervención de la central sindical debía permitir, según el diario, la realización de elecciones libres en todos los gremios, luego de lo cual la CGT "recuperará el prestigio que perdió sirviendo al régimen caído y tendrá autoridad para recurrir al gobierno, donde cabe esperar que encuentre comprensión y justicia para la solución de sus problemas"<sup>12</sup>. No era admisible, señalaba, aceptar so pretexto de la libertad sindical, la realización de paros que dañaban a la economía en su conjunto, incluyendo, naturalmente, los intereses de los asalariados.

El mismo día que analizaba la intervención de la CGT, el diario publicaba otro editorial referido a la defensa de los intereses de los productores agrarios. Esa densa coyuntura de redifini-

ción de la situación del movimiento sindical pareció estimular su imaginación llevándolo a incursionar en nuevos criterios de clasificación de los distintos actores sociales. Mostrando una particular inventiva taxonómica, asumió la defensa de los intereses de los empresarios rurales: "El primer trabajador argentino no es el obrero de la ciudad ni el peón de campo, sino el productor agrario, porque trabaja sin sueldo, sin horario, sin feriado ni vacaciones pagadas y corriendo el riesgo de perder el capital que confía al suelo. La única conquista social que considera indispensable para seguir trabajando su jardín es que lo dejen en paz, que la burocracia del Estado no se acuerde de él"<sup>13</sup>. Según el razonamiento del matutino, la experiencia del peronismo debía demostrar para siempre que las políticas económicas perjudiciales para los intereses de los productores rurales terminaban afectando negativamente a todas las restantes actividades. Por esas políticas, decía a los pocos días, en otro de sus editoriales, había mermado la producción rural y se había importado trigo y racionado el consumo de carne. El gobierno peronista había querido, argüía, desarrollar la industria a expensas de la agricultura y de la ganadería, en lugar de comprender que esa meta sólo era alcanzable mediante la utilización de materias primas obtenidas de la actividad agropecuaria<sup>14</sup>.

El decreto ley del gobierno militar que devolvió *La Prensa* a sus antiguos propietarios, tras quitársela a la CGT, fue motivo de júbilo para *La Nación*. El diario reproducía en parte su editorial del momento de la clausura a su colega, al que había despedido no con un adiós sino con un hasta luego, y al recibirlo celebraba lo que sería su reincorporación a las luchas comunes por la democracia. *La Prensa* reapareció en febrero de 1956.

La disolución del Partido Peronista y la confiscación de sus bienes, por resolución del gobierno militar, fue vista editorialmente como un acto justo, destinado sólo a afectar a los dirigentes de dicha fuerza política. No se trataba —y eso también estaba en los considerandos del decreto ley—, afirmaba el diario, de infligir ningún tipo de discriminación o castigo contra quienes habían apoyado al peronismo equivocadamente o movidos por el engaño. Desorganizar al Partido Peronista era, desde esa perspectiva, una necesidad para reconstruir la democracia. Con optimismo, se consideraba que haría falta muy poco tiempo para que renaciera "pujante y vigoroso el civismo nacional, libre de ataduras y superando el triste recuerdo del aciago decenio transcurrido"<sup>15</sup>.

¿Se avizoraba ya la completa desaparición del peronismo? Allí se encontraba, sin duda, una clave del futuro político del país

para quienes pensaban con ideas similares a las de *La Nación*. Caba, en lo inmediato, interrogarse sobre la actitud política de los millones de simpatizantes de Perón. Más allá de que la pasión tiñera en algunas ocasiones los análisis del diario, sobrecargando su prosa de adjetivos, la tradicional costumbre de sus editoriales de convocar a la fría reflexión para examinar los acontecimientos y procesos más dramáticos se reiteró en esos meses iniciales del primer posperonismo. Era evidente, afirmaba en uno de esos análisis, que las ideas peronistas habían penetrado con la fuerza de un mito en una parte considerable de la población. Su acción propagandística había sido eficaz. Recordaba los ejemplos de otros países, en los cuales amplios sectores sociales se habían resistido a aceptar los actos de barbarie cometidos por regímenes políticos a los que adherían. ¿En la situación argentina se podía confiar en una desperonización no muy lejana? Había signos, en su opinión, que parecían indicar esa evolución, y era importante no ahorrar medios y esfuerzos para acelerarla. De allí que invitara a la búsqueda de los instrumentos para lograr esa ansiada meta en el menor tiempo posible.

En un editorial de la segunda mitad de diciembre de 1955, el matutino se refirió al importante aporte que podían realizar las ciencias sociales en el proceso de democratización de aquellos a quienes caracterizaba como los nostálgicos del peronismo. El análisis hacía mención de una conferencia pronunciada días antes por "un ilustrado sociólogo italiano radicado en nuestro país (...) examinando los métodos técnicos empleados en otras naciones para indagar las ideologías políticas (y que) rozó el tema que aquí debatimos y sugirió a este propósito la realización de encuestas ilustrativas acerca de las direcciones de la opinión pública argentina"<sup>16</sup>. El sociólogo en cuestión era Gino Germani, que había dictado un ciclo de clases en el Colegio Libre de Estudios Superiores sobre el tema de las ideologías y las motivaciones políticas. La conclusión del diario era que se debían crear centros de estudios de la opinión pública y sus sondeos darían información para reencauzar luego las preferencias de los "nostálgicos". De proceder así, decía, se persuadiría de su error a los ciudadanos aún simpatizantes del peronismo. Parece significativo destacar estos planteos, colocados en las antipodas de la visión de quienes instaban a privilegiar el uso de la fuerza y la represión para resolver "la cuestión peronista".

Continuando la orientación esbozada bajo Lonardi, el gobierno presidido por Aramburu mantuvo las propuestas favorables a la liberalización de la economía y al retroceso del intervencionismo estatal. Hizo falta muy poco tiempo para que los defensores

de ese tipo de orientaciones, incluido el matutino, comenzaran a percatarse de la dificultad de la tarea emprendida. *La Nación* se preocupó por dar consejos a las autoridades sobre cuál podía ser el mejor modo de encarar, sin demasiados riesgos de error, ese retorno al liberalismo. Resumió con claridad el temor presente en sus análisis: "En el período de pase de un régimen de economía dirigida al de la economía libre debe cuidarse de no caer en actitudes que tiendan a presentar artificialmente situaciones que luego pretendan justificar la vuelta al dirigismo"<sup>17</sup>. Según ese razonamiento, cabía prever que los cambios del modo de regulación de la economía encontrarán resistencias en los más diversos actores. Las combinaciones entre las iniciativas de los *lobbies* empresarios, la acción de sectores de la burocracia estatal y las orientaciones de grupos políticos propensos a defender el poder de intervención del Estado fueron vistas muy tempranamente por el diario como un obstáculo para la liberalización de la economía. El anuncio del estudio de un proyecto para crear un ente oficial regulador de la producción y el comercio de lanas motivó uno de los primeros editoriales de reproche a la falta de coherencia gubernamental en materia económica.

Con similar inquietud, frente a lo que consideraba equivocadas orientaciones intervencionistas, en otro editorial criticó, a mediados de junio de 1956, el proyecto de creación de la Junta Nacional de Lechería. Luego de referirse a las atribuciones previsibles de ese organismo, lo equiparaba al ya disuelto IAPI. Hemos tenido, decía con ironía, el Estado industrial y comerciante y ahora tendríamos el Estado tambero. Para reforzar sus objeciones a la regulación de la actividad lechera, reproducía parte de una declaración de la Sociedad Rural Argentina, que cuestionaba la idea. Para demostrar su extrema oposición a esa iniciativa, *La Nación* sostenía que cuando se leía el proyecto era "necesario hacer un gran esfuerzo de voluntad para darse cuenta de que ya no se actúa en los meses que precedieron a la Revolución Libertadora"<sup>18</sup>, y recordaba a las autoridades nacionales que ese camino era muy distinto del prometido cuando asumieron el gobierno.

Durante todo el transcurso del régimen *de facto*, el matutino siguió elaborando de manera un tanto inorgánica, pero sin abandonar un mismo hilo conductor, un razonamiento sobre las causas de la dificultad para desarticular el intervencionismo estatal. La idea que más cobró fuerza en sus preocupadas cavilaciones fue de orden culturalista: la "mentalidad dirigista" subsistía a pesar del desalojo de los peronistas del poder. Un modo concreto de manifestación de esa mentalidad era, según creía, el comportamiento de las burocracias públicas, contrarias a

cualquier reforma que pudiera "afectar su omnipotencia, sin preocuparse de la incidencia de su actitud sobre la economía del país (pero, también), no pocos empresarios acostumbrados a que el Estado resuelva sus problemas no adoptan ninguna medida para mejorar su situación y hasta reclaman, en sus apuros, la intervención de aquél"<sup>19</sup>. Además de la burocracia y de determinados sectores empresarios, señalaba la existencia de grupos políticos que pretendían ganar el apoyo popular mediante una prédica que excluía cualquier clase de llamado al espíritu de sacrificio y formulaban promesas demagógicas. En su opinión, era urgente que burocracias, empresarios y políticos cambiaran su mentalidad y se adaptaran a los requerimientos de liberalización de la economía.

Los cambios propuestos por el gobierno militar encontraron múltiples resistencias. No faltaron quienes se volcaron a la acción violenta para reivindicar al peronismo y lograr el eventual retorno de Perón. *La Nación* optó por analizar las primeras manifestaciones de esas prácticas armadas como una expresión del desasosiego de quienes no se avenían a aceptar las transformaciones producidas en el país. Consideraba que quienes recurrieran a tales métodos debían cejar en su empeño de entorpecer los objetivos de la revolución y, de no ser así, hacía falta emplear el máximo rigor oficial para evitar la repetición de sus agresiones<sup>20</sup>. Según afirmaba, la revolución contaba, en general, con "el apoyo de los trabajadores, aunque haya, desgraciadamente, entre ellos algunos que se hallan desorientados"<sup>21</sup>, y era de esperar que los resquemores o incomprensiones se resolvieran si el gobierno mostraba que sabía encarar adecuadamente los problemas de dicho sector social.

Cuando se produjo el movimiento militar encabezado por el general Valle contra el gobierno de Aramburu, el diario estimó que el escaso eco encontrado por la sedición en la población civil probaba que los desengaños del peronismo eran ya muy numerosos. Esa apreciación sobre lo ocurrido a nivel de la sociedad se acompañaba con el elogio al vicepresidente Rojas por la decisión demostrada para reprimir el levantamiento<sup>22</sup>. Días después, refiriéndose al fusilamiento de varios participantes del frustrado intento revolucionario, opinaba que el gobierno no había tenido otra alternativa que recurrir a una "intensidad de la represión que todos han debido deplorar"<sup>23</sup>. Dicho análisis establecía la diferencia entre el reducido grupo de participantes en el evento armado y la gran mayoría de los peronistas considerados como recuperables para el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.

¿Se diluía numéricamente la fuerza del peronismo? La convocatoria a elecciones de constituyentes a fines de julio de 1957 apareció como una situación óptima para realizar el "recuento globular" del apoyo a los distintos partidos políticos. Se esperaba conocer, a la luz de esa compulsión, la influencia de los dos partidos formados a partir de la división del radicalismo y la gravitación del peronismo proscrito del juego electoral. Para *La Nación* era imperioso que los partidos políticos contrarios al peronismo se prepararan a participar en las elecciones de constituyentes con propuestas que permitieran crear un orden político apto para impedir la reproducción de condiciones como las "que en septiembre de 1955 forzaron a derrocar por la fuerza un régimen de oprobio"<sup>24</sup>. Desde su perspectiva, no era claramente comprensible la actitud de la Unión Cívica Radical Intransigente, el partido liderado por Arturo Frondizi, contraria a la reforma de la Constitución. El diario decía que no se podía pensar que esa actitud significara defender la derogada constitución peronista<sup>25</sup>. Recordaba al respecto la posición de los radicales en la convención constituyente de 1949 y a Moisés Lebensohn, figura muy reivindicada por los seguidores de Frondizi, quien más firme y decididamente había impugnado la convención que procedió a esa reforma de la Carta Magna. Le resultaba más entendible, en cambio, el rechazo a la constituyente de algunos nuevos partidos cuyos dirigentes habían participado en algún momento en el gobierno de Perón. Era, justamente, esa presencia en la arena electoral de 1957 de sectores políticos vinculados al peronismo, aun cuando no fueran estrictos seguidores del exiliado presidente, lo que permitía al matutino caracterizar a las elecciones como totalmente libres. Si bien era cierto que había peronistas proscritos, a su parecer, la participación de candidatos con pasado peronista revelaba una situación de pluralismo democrático. Al comentar una alocución del ministro del Interior del gobierno militar, Raúl Alconada Aramburú, el diario indicaba que los partidos de orientación peronista tenían órganos de prensa cuya labor no se obstaculizaba en lo más mínimo. Según ese análisis, tal libertad de expresión no había existido nunca en los años peronistas, y como ejemplo límite señalaba que la censura se había mantenido incluso en la etapa en que el Estado llamaba a la conciliación, circunstancia definida ahora como una "parodia pacificadora"<sup>26</sup>. Esa misma evaluación de la situación le hacía inexplicable que hubiese quienes se acogieran a la abstención o al voto en blanco<sup>27</sup>. El escrutinio determinó que el primer término correspondía al voto en blanco, actitud recomendada por el Partido Peronista, segundo lugar a la UCR del Pueblo y el tercero a la UCR

Intransigente. Un mes más tarde, cuando ya era notorio el fracaso de la Convención Constituyente por las discrepancias entre los partidos, *La Nación* lamentaba ese proceso, que impediría dar, decía, un sólido punto de arranque para el futuro devenir nacional<sup>28</sup>.

Las reflexiones del diario sobre la situación económica y acerca de una rápida transformación de los roles del Estado, se mantuvieron en una línea de creciente escepticismo a la luz de las dificultades con que a su modo de ver chocaban las iniciativas tendientes a un mayor liberalismo y a una reducción del poder de la burocracia. Refiriéndose a un discurso del ministro de Hacienda del gobierno del presidente Aramburu, Adalbert Krieger Vasena, reconocía las buenas intenciones que animaban sus proyectos, pero dudaba de que la burocracia estatal pudiera actuar con la eficacia y la eficiencia debidas. Le resultaba alentador que el ministro hubiese hablado de la reducción del gasto público, condición necesaria, decía, para equilibrar las finanzas oficiales, en un país abrumado por excesivas cargas fiscales. Como contribución al proceso de restablecimiento de la economía, el matutino entendía necesario que las entidades empresarias hicieran escuchar sus puntos de vista fundados en estudios serios y sistemáticos. Desde esa perspectiva, saludó la reapertura del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Unión Industrial Argentina, corporación que había recuperado su personería luego del derrocamiento de Perón<sup>29</sup>. En el editorial en cuestión se reproducía un conjunto de ideas expuestas por el ingeniero Roque Carranza, director del mencionado instituto, y se señalaba la importancia para la industria de poseer una información confiable sobre las tendencias operantes en la economía. El diario consideraba imprescindibles los estudios sobre el intervencionismo estatal, juzgado como factor de crisis, de escasez y de carestía. Un par de días después, con motivo del Día de la Industria, sus columnas volvían a ocuparse de la actividad manufacturera, cuyo origen remontaba a más de un siglo. Otra vez, el blanco de su crítica era el Estado, a quien recomendaba no poner vallas al desarrollo industrial, ni pretender dirigirlo o limitarlo mediante reglamentaciones e impuestos<sup>30</sup>. Pero no sólo se preocupaba por interpelar al Estado; también tomaba como interlocutores a quienes hacían ostentación desmedida de su riqueza con términos hartamente sugerentes: "Los que tienen de sobra deben evitar la exhibición de su abundancia, sino por solidaridad, al menos por buen gusto; sepamos ser pobres al menos durante el tiempo necesario para alejar presentes penurias económicas e impedir futuros malestares populares que pueden volver a lesionarnos

otra vez, tanto a los de arriba como a los de abajo —si todos no hacemos para evitarlo— con la renovada pérdida de la libertad”<sup>31</sup>.

*La Nación* vislumbraba amenazas sociales y políticas. A su entender había quienes trabajaban por instituir, mediante el caos, un “retorno imposible”. Como antaño, el diario admitía la existencia de un malestar social justificado por causas como el encarecimiento del costo de vida, pero advertía que esa inquietud colectiva era aprovechada por quienes buscaban enconar los ánimos o sugerir movimientos de fuerza. En su opinión, esas actividades terminarían perjudicando a los mismos trabajadores. La diferenciación entre los reclamos legítimos y su uso por los “agitadores”, le servía para invitar a los sectores populares a no dejarse utilizar por quienes perseguían fines distintos a los de ellos. En tanto el movimiento sindical estaba dividido y existían gremios que repudiaban las medidas de protesta impulsadas por los peronistas, el diario alentaba esas posiciones. Aplaudía al gobierno por mostrarse sensible a las demandas de los asalariados tratando de contener las alzas de precios y de mejorar, en la medida de lo posible, la situación social<sup>32</sup>.

Los “agitadores” aludidos por el diario no eran, en absoluto, personajes marginales de la estructura del peronismo. La reconstrucción y dirección local de dicho movimiento político estaba a cargo de John William Cooke, el mismo que siendo diputado había fundamentado con prosa revolucionaria la expropiación de *La Prensa* en 1951. Ahora Cooke pensaba las estrategias para alcanzar lo que el diario llamaba los “retornos imposibles”. En la nutrida correspondencia que intercambiaba con Perón, se entrecruzaban las tácticas más diversas, desde la huelga hasta los atentados y los contactos con militares, sin excluir el posible acuerdo con los radicales de Frondizi. Su exiliado jefe era favorable a los planteos menos negociadores y lo invitaba a pensar con analogías que remitían a la Revolución Rusa de octubre de 1917, evidenciando tener una imagen de aquel evento semejante al modelo difundido por Curzio Malaparte. Al referirse al asalto al Palacio de Invierno por los bolcheviques, Perón diferenciaba entre la prédica de millones de propagandistas y la del grupo de no más de mil hombres audaces que dieron el golpe final, y escribía a Cooke: “Nosotros debemos seguir esa misma técnica. Tenemos el estado insurreccional. Sólo nos falta extenderlo e intensificarlo, como asimismo organizarlo para poderlo aprovechar (...) y en esa situación esperar el momento que ha de presentarse, y no dentro de mucho, en que la dictadura se debilite en forma que permita intentar su aniquilamiento”<sup>33</sup>. Como alternativa más inmediata, vista la demora del estallido revolucionario, Cooke y Perón lle-

garon poco después a la conclusión de que lo más conveniente en la coyuntura de las elecciones de 1958 era firmar un pacto con Frondizi. Para Perón, Balbín y la Unión Cívica Radical del Pueblo representaban la continuidad de la denominada Revolución Libertadora.

Al comenzar el año 1958, el diario hizo un balance de los aspectos contradictorios de la gestión de los militares y de las dificultades aún por superar. Sin pronunciarse a favor de ninguno de los dos candidatos con más posibilidades de triunfar en las elecciones presidenciales convocadas para el ya muy cercano 23 de febrero, en su reflexión combinaba el elogio de la administración saliente con el llamado a la responsabilidad a quienes vendrían a sucederla. Pero lo que sin duda había quedado ya muy lejos era el optimismo de las jornadas siguientes a la caída de los peronistas. Donde existía continuidad era en el pedido generalizado a todos los actores de proceder con espíritu de pacificación y sensatez<sup>34</sup>. El clima electoral era tenso y complejo.

En torno a la candidatura de Frondizi se creó una polifacética convergencia electoral. Perón dio públicamente la orden de votarlo. El Partido Comunista adoptó una decisión similar. Desde el otro extremo del arco político, Mario Amadeo, ex canciller de Lonardi, invitaba a los nacionalistas de derecha a hacer lo propio. Frondizi se había convertido en el candidato de un heterogéneo frente, pero, en especial, su éxito aparecía prefigurado por el respaldo de los peronistas. El día anterior a las elecciones *La Nación* editorializó sobre la importante jornada que viviría el país. No se definió por ninguno de los postulantes. Prefirió dedicar su reflexión a criticar la experiencia vivida por el país durante los años del gobierno peronista. Desde esa preocupación por el pasado reciente otorgaba una significativa trascendencia al acto electoral, que esperaba inaugurara una etapa de prácticas democráticas lo suficientemente sólida como para impedir el retorno a regímenes como el derrocado en septiembre de 1955<sup>35</sup>. Cuando se supo que las preferencias de la ciudadanía habían favorecido a Frondizi, el diario reconoció total legitimidad a la victoria de la Unión Cívica Radical Intransigente. A su parecer, el electorado se había expresado con total libertad y no cabían reparos a los resultados comiciales. Al nuevo presidente le correspondía ahora poner en ejecución una política para veinte millones de argentinos, subrayaba el análisis, en alusión a su prédica proselitista. No debía, en consecuencia, inclinar su acción en beneficio de un determinado sector, clase o partido. Le sugería iniciativas tendientes a la mejora de la situación global, y para ello sintetizaba algunos de los principios básicos del liberalismo económico. En lo

político debía imperar plena libertad para todos sin limitar el derecho de crítica. Para mejor gobernar le sugería convocar la colaboración de los más honestos y de los más capaces. Si bien no mencionaba el pacto con Perón, no hacía falta demasiada perspicacia para advertir la transparente alusión a ese acuerdo cuando, para cerrar el editorial, citaba un discurso de Frondizi del día anterior, donde éste sostenía que el único compromiso contraído era el establecido con el pueblo. De esa afirmación del nuevo presidente, el diario remarcaba que era "dable anotar la fuerza con que marcó el adjetivo único"<sup>36</sup>. Efecto auditivo que, por cierto, no pareció impresionar a peronistas, comunistas y nacionalistas de derecha, que festejaron la victoria de Frondizi como propia. Semanas más tarde, desde su exilio en la República Dominicana, Perón hacía un balance y escribía a Cooke: "Me parece que Frondizi está en buena disposición de cumplir"<sup>37</sup>. El Partido Comunista esperaba asistir al comienzo de lo que denominaba la revolución democrático-burguesa. Mario Amadeo, más módico, se preparaba para ser embajador ante las Naciones Unidas.

#### La Nación: 1955-1958

*La expectativa de una rápida desaparición del peronismo se reveló ilusoria. Probablemente quienes habían definido a ese movimiento político como una variante del fascismo creyeron que, como las experiencias europeas, la vernácula también se disolvería una vez desalojada del poder. Igualmente errónea fue la visión de aquellos que consideraron al peronismo como un producto de la demagogia estatal de Perón y, por lo tanto, esperaron su disolución al perder éste la presidencia. Ante la continuidad de dicho movimiento político, el dilema fue claro: se lo dejaba actuar libremente y volver al gobierno, o se lo proscribía y eso provocaba la ilegitimidad de quien obtuviera la primacía en elecciones así distorsionadas. Entre esas dos alternativas no faltaron las opciones intermedias elaboradas por especialistas en ingeniería política o por improvisados cosmetólogos de instituciones. Los partidos políticos, cuyas tensiones internas se habían mantenido en un segundo plano durante la década precedente, comenzaron a dividirse. En el caso del radicalismo, la ruptura estuvo directamente relacionada con las discusiones sobre la estrategia a adoptar con respecto al gobierno militar y al peronismo proscripto. En escala menor, el socialismo y el conservadorismo conocieron parecidos debates y consecuencias. Las fuerzas armadas se escindieron en facciones y*

se convirtieron en un actor permanente de las luchas por el poder, y sobre sus pujas internas influyeron diferentes grupos políticos e ideológicos.

A los sectores social, política y económicamente predominantes de principios de siglo los hemos caracterizado, a partir del tipo de relación que mantenían con el resto de la sociedad, como una clase dirigente. A los que ocuparon las posiciones de predominio a partir de los años 30, también considerando las relaciones que establecían con los demás sectores sociales, los conceptualizamos como una clase dominante. La acción estatal del peronismo produjo efectos de desestructuración de esa clase dominante. Esto sucedió por dos causas principales: 1) en lo político e ideológico las trabas impuestas desde el poder a la libertad de expresión y de organización provocaron un debilitamiento de los flujos comunicacionales y de las estructuras institucionales que hasta entonces habían dotado de unidad a dicha clase; 2) en el plano económico, la política del gobierno peronista dio como resultado objetivo la aparición de nuevos sectores empresarios, un mayor fraccionamiento de los preexistentes y la creciente dependencia de todos de las decisiones del Estado. Los sectores social y económicamente predominantes del período que siguió al peronismo ya no podrían ser definidos como una clase dominante en virtud de la intensidad de los conflictos de intereses que los atravesaban y les impedían adoptar estrategias de conjunto en sus relaciones con otros actores sociales o con el Estado.

De los sectores social y económicamente predominantes posteriores a 1955, entendemos que en lugar del concepto de clase dominante, capta mejor su situación en las relaciones sociales y el sentido de su acción societaria el concepto de categorías dominantes. Mediante el mismo hacemos referencia a la fragmentación de la dominación social, consecuencia de la alta intensidad de los conflictos de intereses entre los distintos sectores social y económicamente predominantes, conflictividad que impide considerarlos como fracciones de una misma clase<sup>38</sup>. En el caso argentino las categorías dominantes se centraron a partir de 1955 en la defensa exclusiva de sus privilegios sectoriales, se enfrentaron entre sí y mostraron un total desinterés o incapacidad para proponer proyectos para el conjunto del país con metas de largo plazo. Si la clase dominante de los años 30 había tenido como nota característica su imposibilidad para dirigir consensualmente la sociedad, al menos consiguió construir un modelo coercitivo semidemocrático que dio estabilidad al sistema político por algo más de una década. Las categorías dominantes del 55 en adelante fueron incapaces de asegurar un orden político mínimamente organizado. La Argentina

no tuvo una democracia estable pero tampoco forjó regímenes autoritarios duraderos. Sin ser el único factor en presencia, el modo de actuar de las categorías dominantes fue decisivo para deteriorar todos los esquemas de poder, democráticos o dictatoriales, que se sucedieron después de la caída de Perón. Los conflictos entre las distintas categorías dominantes, sin que ninguna de ellas pudiera imponer su supremacía sobre las restantes, produjeron un juego político caracterizado por la imposibilidad de dotar de apoyos coherentes y prolongados a los elencos que se sucedieron en el control del Estado. Las alianzas más o menos coyunturales entre dichas categorías para oponerse a las iniciativas que lesionaban sus intereses no dieron lugar a la formación de bloques estables. El antiperonismo fue una ideología unificadora sobre un tema importante, pero sólo sirvió para dotar a las categorías dominantes de un proyecto definido por la negativa: enunciaba lo que no se quería. Algo similar ocurrió con su adhesión a la ideología del liberalismo económico: fue una manera general de rechazar la intervención estatal en las órbitas específicas en las que operaban, tuvo un carácter defensivo, pero no fue un proyecto estructurado para proponer orientaciones definidas a las políticas públicas. El antiperonismo y el liberalismo dieron una relativa unidad ideológica a las categorías dominantes, pero no resultó suficiente para contrarrestar los conflictos de intereses que las enfrentaban en lo económico y les impedían la adopción de metas compartidas de carácter afirmativo en la acción política.

Los sectores social y económicamente predominantes, sin un partido político que los representara con posibilidades de éxito en las lides electorales, iniciaron una larga travesía del desierto y en la arena política se acostumbraron a optar por el "mal menor". Las corporaciones empresarias se consolidaron en su rol de actor del sistema político con muchas dificultades para aunar criterios, lo que las convirtió en un significativo factor de crisis. La esfera de intervención de los aparatos estatales en la economía no sólo no se retrajo luego de la caída del peronismo, sino que se amplió. La imagen del Estado, en tanto garante del interés general, que se había desgastado durante el gobierno peronista en la opinión de los opositores, perdió reconocimiento a partir de 1955 para quienes adherían al peronismo. El lugar de unidad simbólica de la sociedad, que teóricamente debía ser el Estado, devino, para la percepción de casi todos los actores políticos y sociales, una entidad facciosa. El poderoso movimiento sindical que durante los años del gobierno peronista había depositado su confianza en el Estado y había sido respetuoso de sus instituciones, se comenzó a reconstruir durante el régimen militar mediante el despliegue de

estrategias de confrontación que deterioraron aún más la autoridad de los aparatos estatales. Así, en el período 1955-1958, quedaron planteados todos los elementos y los dilemas de la situación de ingobernabilidad política y social que de allí en más viviría la Argentina<sup>39</sup>.

Las distintas categorías dominantes no tenían iguales aptitudes para intervenir en las relaciones políticas e ideológicas. Si bien ninguna de ellas estaba en condiciones de imponer su predominio al resto, la conformada por los grandes propietarios rurales de la región pampeana era la que al salir del período peronista se hallaba mejor dotada para actuar políticamente. La gran burguesía agraria, como lo hemos mostrado en otro trabajo,<sup>40</sup> se distinguió por su poder de invalidación de aquellas iniciativas estatales que podían perjudicar sus intereses y, al mismo tiempo, por su incapacidad para proponer un proyecto susceptible de dirigir social y políticamente al resto de la sociedad y orientar con un mínimo de consenso las decisiones del Estado. Si bien lo mismo ocurría con las demás categorías dominantes, la gran burguesía agraria tenía a su favor el hecho de haber desempeñado en otros momentos históricos roles de clase dirigente. Su pasado se hallaba asociado a la fundación de las instituciones y de la cultura nacional; no sólo por la propiedad del suelo podía confundir, y hacer confundir, su existencia con la del país. En sentido estricto, la gran burguesía agraria era una clase en crisis, carecía de un modelo de sociedad viable para ofrecer, pero tenía un discurso cuantitativo y cualitativamente más amplio que el de las otras categorías sociales. Su propuesta ideológica abarcaba un arco de significaciones que iba desde los orígenes de la nacionalidad hasta la referencia a su rol estratégico para asegurar la reproducción de la estructura económica, es decir, tenía la ventaja de poder argumentar en nombre del espíritu y del pan y la carne. En fin, la gran burguesía agraria convirtió al liberalismo económico, del que en otras épocas, mostrando un alto grado de pragmatismo, se había alejado, en una propuesta identificada con un pasado de pujanza y esplendor, con un paraíso perdido al que postulaba retomar.

Para La Nación, actor especializado en el trabajo ideológico, que se consideraba idóneo para ayudar a reflexionar sobre la política a interlocutores ubicados en posiciones estratégicas de poder, con la caída de Perón se inició una época llena de desafíos. Ninguno de los actores más afines a las ideas defendidas por el diario tenía la fórmula política para pasar a una nueva etapa. Prácticamente, los conservadores habían desaparecido de la escena política y los radicales se habían convertido en una incógnita. Los sectores social y económicamente predominantes no con-

seguían delinear un proyecto y parecían más preocupados por tomarse una revancha social contra las clases populares. Antes de 1943, los editoriales de La Nación habían reclamado la acción estatal a favor de la industrialización, la creación de instituciones para armonizar las relaciones entre el capital y el trabajo, y habían exigido el pleno respeto a las preferencias electorales de la ciudadanía. Después del gobierno peronista, esas demandas cobraron un sentido totalmente nuevo y fueron agitadas por los que el matutino denominaba "nostálgicos de la dictadura". La política industrial y el proteccionismo estatal se habían transformado en una fuente permanente de conflictos y el diario se alineaba entre los defensores del liberalismo. Los sindicatos se habían constituido en un actor tan fuerte que podían volcar en su beneficio la institucionalización de negociaciones libres con la patronal. Todo hacía suponer que una dinámica electoral democrática y sin proscripciones les abriría a los peronistas el retorno al gobierno.

En la sociedad no se expresaban las ideas que el diario hubiera podido asumir como propias. Su mayor proximidad con la gran burguesía agraria se reflejó en la manera en que los editoriales se hicieron eco de las demandas de la Sociedad Rural Argentina. Pero la estrechez corporativa de esos mensajes servía sólo para inspirar reflexiones muy parciales sobre la política económica. Algo similar ocurría con las declaraciones de otras entidades empresarias que coincidían con los planteos liberales. De manera monocorde, la crítica al intervencionismo económico del Estado se convirtió en una referencia constante en las reflexiones del diario. Pero para proponer un camino político a seguir no había en sus páginas ninguna alternativa. Mantenía sus esperanzas puestas en la cercana pérdida de la popularidad del peronismo, pero en tanto no vislumbraba cómo alcanzar esa meta, el enunciado se asemejaba a una letanía. Entre 1955 y 1958 el desconcierto se instaló en el pensamiento político de La Nación. Retengamos el término. Desconcierto remite tanto a la descomposición de un orden como a la sorpresa de quien observa una situación sin alcanzar a captar la lógica que la hace inteligible. Sin que resulte posible ubicar el momento preciso en que esto ocurrió, el pensamiento del matutino pasó, durante el gobierno de facto, lenta pero persistentemente del optimismo intelectual y político a la perplejidad.

#### NOTAS

<sup>1</sup> La Nación, 24-9-1955, pág. 6.

<sup>2</sup> La Nación, 28-9-1955, pág. 6.

<sup>3</sup> Eduardo Augusto García: *Yo fui testigo. Antes, durante y después de la segunda tiranía. (Memorias)*, Segunda edición, Luis Lasserre y Cia. S.A. Editores, Buenos Aires, 1971, pág. 649.

<sup>4</sup> Juan Carlos Goyeneche: *Ensayos, artículos y discursos*, Ediciones Diccio, Buenos Aires, 1976, págs. 392-393. Goyeneche aclara que su renuncia del 11 de noviembre de 1955 fue publicada en un folleto con el siguiente encabezamiento: "Texto de la renuncia presentada por el secretario de Prensa de la Presidencia, doctor Juan Carlos Goyeneche, y que fuera ocultado en sus partes esenciales por la prensa 'liberada'".

<sup>5</sup> *La Nación*, 2-10-1955, pág. 6.

<sup>6</sup> *La Nación*, 18-10-1955, pág. 6.

<sup>7</sup> *La Nación*, 24-10-1955, pág. 4.

<sup>8</sup> *La Nación*, 28-10-1955, pág. 4.

<sup>9</sup> *Yo, Juan Domingo Perón*. Relato autobiográfico, Editorial Planeta, Barcelona, 1976, pág. 231.

<sup>10</sup> *La Nación*, 2-11-1955, pág. 4.

<sup>11</sup> *La Nación*, 14-11-1955, pág. 4.

<sup>12</sup> *La Nación*, 18-11-1955, pág. 4.

<sup>13</sup> *Ibid.*, pág. 4.

<sup>14</sup> *La Nación*, 23-11-1955, pág. 4.

<sup>15</sup> *La Nación*, 3-12-1955, pág. 4.

<sup>16</sup> *La Nación*, 19-12-1955, pág. 4.

<sup>17</sup> *La Nación*, 25-2-1956, pág. 4.

<sup>18</sup> *La Nación*, 17-6-1956, pág. 6.

<sup>19</sup> *La Nación*, 14-1-1957, pág. 6.

<sup>20</sup> *La Nación*, 23-2-1956, pág. 4.

<sup>21</sup> *La Nación*, 9-4-1956, pág. 6.

<sup>22</sup> *La Nación*, 11-6-1956, pág. 6.

<sup>23</sup> *La Nación*, 14-6-1956, pág. 6.

<sup>24</sup> *La Nación*, 1-4-1957, pág. 6.

<sup>25</sup> *La Nación*, 23-5-1957, pág. 6.

<sup>26</sup> *La Nación*, 2-6-1957, pág. 6.

<sup>27</sup> *La Nación*, 1-7-1957, pág. 6.

<sup>28</sup> *La Nación*, 29-8-1957, pág. 6.

<sup>29</sup> *La Nación*, 1-9-1957, pág. 6.

<sup>30</sup> *La Nación*, 3-9-1957, pág. 6.

<sup>31</sup> *La Nación*, 14-9-1957, pág. 4.

<sup>32</sup> *La Nación*, 23-10-1957, pág. 2.

<sup>33</sup> Carta de Perón a John William Cooke, fechada el 1° de septiembre de 1957, en *Correspondencia Perón-Cooke*, Granica Editor, Buenos Aires, 1972, págs. 319-320, Tomo I.

<sup>34</sup> *La Nación*, 2-1-1958, pág. 6.

<sup>35</sup> *La Nación*, 22-2-1958, pág. 6.

<sup>36</sup> *La Nación*, 25-2-1958, pág. 6.

<sup>37</sup> *Correspondencia Perón-Cooke*, ob. cit., Tomo II, pág. 52.

<sup>38</sup> En parte, la manera que planteamos el problema de las categorías dominantes se asocia conceptualmente al modo en que Raymond Aron introduce la discusión sobre clase dirigente y categorías dirigentes en su

artículo "Classe sociale, classe politique, classe dirigeante", en *Archives européennes de sociologie*, I, Paris, 1960, págs. 260-281.

<sup>39</sup> Sobre el concepto de ingobernabilidad ver Claus Offe: *Contradicciones en el Estado de bienestar*, Alianza, 1990, Madrid, cap. 6.

<sup>40</sup> Ricardo Sidicaro: "Poder y crisis de la gran burguesía argentina", en Alain Rouquié (Comp.): *Argentina, hoy, Siglo XXI*, Buenos Aires, 2ª edición, págs. 51-104.

## X

### Críticas y apoyos a Frondizi

En lo formal, las elecciones presidenciales de febrero de 1958 que dieron el triunfo a Frondizi podían considerarse como la culminación exitosa de la reorganización política emprendida por los militares. Sin embargo, muchos sectores solidarios con los principios de la denominada Revolución Libertadora debieron considerarla una victoria paradójica. Había conquistado la mayoría el candidato apoyado por los peronistas y todo hacía prever que éstos estaban lejos de desaparecer de la escena política. En los meses transcurridos entre la elección y la asunción del nuevo mandatario, *La Nación* enfatizó en varias oportunidades el reconocimiento al gobierno de Aramburu y a las fuerzas armadas por haber conducido de modo adecuado el proceso de restablecimiento de las instituciones democráticas. El diario reconocía a Frondizi aptitudes políticas para resolver los múltiples problemas que debería enfrentar tan pronto como se hiciera cargo del Poder Ejecutivo.

“¿Podrá el presidente constitucional lograr lo que no pudo conseguir la Revolución Libertadora?” Sólo una decena de días después de la asunción de Frondizi, el matutino planteaba esa acuciante pregunta en su análisis de la situación económica. El gobierno militar, según dicha reflexión, no había podido revertir los mecanismos dirigistas heredados del peronismo. Esa iniciativa había sido bloqueada por intereses burocráticos y por sectores de la actividad privada beneficiados por el intervencionismo del Estado. ¿Se repetiría esa experiencia? La inquietud surgía porque, decía, aunque el presidente había anunciado que no habría nuevas estatizaciones, los legisladores de su partido presentaban en el Parlamento “proyectos de leyes de expropiación de actividades diversas que sólo servían para alarmar aún más, si cabe, a los ya inquietos capitales foráneos y complicar el planteo de los complejos problemas económicos que debe afrontar el Gobierno”<sup>1</sup>. Esa contradicción entre la propuesta presidencial y las

orientaciones de importantes núcleos de dirigentes del partido oficialista fue señalada en repetidas ocasiones por el matutino, porque allí percibía un posible factor de desequilibrio de la etapa iniciada. Esto no significaba que *La Nación* coincidiera totalmente con las iniciativas adoptadas por Frondizi en los primeros meses de su administración, pero las ideas sostenidas por legisladores y dirigentes que propugnaban el estricto cumplimiento del programa partidario le provocaban mayor resquemor. Justamente, era la ruptura con las posiciones nacionalistas y dirigistas del programa originario lo que le granjeaba al presidente la simpatía del diario.

Articulada entre los acuerdos electorales —específicamente el pacto con Perón— y los principios programáticos enunciados por Frondizi se hallaba la decisión de promover una amplia y generosa ley de amnistía destinada, en teoría, a alcanzar la pacificación nacional. *La Nación* coincidía globalmente con el espíritu de esa legislación, pero no dejaba de manifestar su inquietud por el carácter demasiado abarcativo de la misma. Conforme a un razonamiento acorde con su modo de conceptualizar lo sucedido durante los años del peronismo, decía que la rehabilitación política debía evitar “envolver en el mismo olvido a los que pecaron por adhesión sincera a una causa, equivocada o no, y a los que se sirvieron de ella para deshonorarla”<sup>2</sup>. La amnistía traería paz siempre y cuando por su excesiva amplitud no terminara por favorecer, sin quererlo, la reincidencia en prácticas que habían sido antes castigadas. Pedía, en consecuencia, legislar con cautela para no provocar efectos contraproducentes; nadie debía pensar que la amnistía significaría el olvido de lo sucedido en el decenio de Perón, aunque se aceptara el reintegro a la política y al sindicalismo de quienes habían acompañado aquella administración.

Cuando se discutió la ley de amnistía, los legisladores dejaron en claro que la misma no ampararía a los procesados por ejecutar u ordenar la tortura de detenidos políticos durante el gobierno peronista. *La Nación* coincidía plenamente con ese criterio; por ello, al plantearse en 1958 la posibilidad de indultar a los policías condenados por participar en la tortura y asesinato de un dirigente comunista rosarino en las postrimerías del peronismo, la condenó editorialmente con conceptos terminantes. Sostuvo que indultar a esos policías significaría “destruir en las nuevas generaciones toda noción de moral y de derecho, daría para los tiempos venideros un anticipado *bill* de indemnidad a quienes tuvieran propensión a seguir el mismo camino (...) toda vida social, toda convivencia armónica en la libertad y el respeto mutuo, la patria misma, son imposibles cuando se socavan desde

la función pública ciertos principios elementales que son la base de la sociedad humana y se prevé que, llegado el caso, se olvidara el crimen"<sup>3</sup>. Para el diario, no había la menor duda acerca de la diferencia entre los delitos políticos y la acción de quienes, al someter a vejámenes o dar muerte a opositores, quedaban al margen de toda clemencia y no correspondía reintegrarlos a la sociedad que habían profanado con sus excesos.

El tratamiento de la legislación sobre asociaciones profesionales motivó severas críticas del matutino a las posiciones sostenidas por el gobierno y el bloque parlamentario oficialista. Especial objeto de cuestionamiento fue la idea de la central sindical única, que entendía opuesta al principio de libertad de agremiación. Recordaba que en Francia existían tres centrales obreras, y algo similar ocurría en Alemania, Italia y Bélgica. La ley recaía en el mismo abuso que llevó a la agremiación única y obligatoria durante el peronismo, decía, y que había obligado a pasar a la clandestinidad a la central anarquista (la FORA) y a los sindicatos dirigidos por los comunistas o por gremialistas apolíticos<sup>4</sup>. Según el criterio defendido por el diario, debía dejarse librado a la decisión de los trabajadores el modo de organizar "si lo quieren, la unidad en el sindicato o en la central obrera o prescindir de ello si lo juzgan mejor"<sup>5</sup>. Desde esa perspectiva, reiteró las críticas cuando se promulgó la Ley de Asociaciones Profesionales, y enfatizó los efectos negativos que podría provocar. Frente a quienes sostenían que la unidad sindical correspondía a la realidad argentina, afirmaba que tal unidad no había existido "en los años de auténticas luchas proletarias, auténticas por independientes de toda coerción oficial o política"<sup>6</sup>, y que era, por el contrario, un síntoma cabal de totalitarismo. El editorial preguntaba, asimismo, si la legislación en cuestión no se convertiría en fuente de nuevos conflictos.

Las políticas agrarias proyectadas en la Provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador era el radical intransigente Oscar Alende, fueron también tema de preocupación para el diario. Otra vez el fantasma de la expropiación y subdivisión de lo que el matutino rechazaba definir como latifundios amenazaba a la primera provincia argentina. Frente a esa amenaza, reiteró sus tradicionales argumentos contra las propuestas reformistas. En su opinión, en el gobierno y en el Parlamento bonaerense había dirigentes con ideas equivocadas sobre la real situación económica y social del campo. Aconsejaba a esos dirigentes imitar el ejemplo de Frondizi y revisar sus antiguas convicciones.

Fue sin duda el cambio de las ideas de Frondizi en materia petrolera lo que impresionó más gratamente a quienes com-

partían la visión ideológica defendida por *La Nación*. El *aggiornamento* en la cuestión energética fue total. Del razonamiento anti-imperialista de su libro *Petróleo y Política* de 1954 —hurtado a la izquierda, según sus críticos de derecha—, había pasado a defender posiciones radicalmente opuestas, cuyo eje se centraba en la supuesta posibilidad de alcanzar el autoabastecimiento petrolero mediante concesiones a las firmas que, apenas ayer, había caracterizado como imperialistas, agentes de la dependencia y causantes del subdesarrollo. Como consecuencia de esa modificación del enfoque sobre el tema energético, tan pronto como el nuevo presidente se instaló en el gobierno abrió negociaciones con empresas extranjeras dedicadas a la explotación de hidrocarburos. El diario apoyó esas iniciativas por considerarlas eficaces para impulsar la economía nacional y superar las dificultades económicas dejadas por el período peronista. A su juicio, el gobierno de Perón, al fomentar indiscriminadamente el desarrollo industrial, provocó una situación de déficit energético que era indispensable resolver. De allí el aplauso al coraje de Frondizi por dejar de lado sus *slogans* electorales<sup>7</sup>.

Pero no todos los actos e iniciativas del nuevo gobierno tenían un signo tan auspicioso para *La Nación*. Así, por ejemplo, cuando en la Cámara de Diputados algunos miembros del bloque oficialista propusieron la formación de un ente dedicado a intervenir estatalmente en el comercio exterior, el diario vio en el proyecto un remedo del IAPI peronista, al que tantas veces había atacado. En un editorial titulado “¡Otra vez el IAPI!”, donde los inhabituales signos de admiración denotaban la desagradable sorpresa, se recordaban las consecuencias negativas producidas por el organismo creado durante el régimen peronista, y se alertaba a la opinión pública y a las autoridades sobre los efectos nefastos de cualquier regulación del comercio exterior argentino, que asimilaba a las creaciones del sistema soviético<sup>8</sup>. No apuntó las objeciones sólo contra la propuesta de restablecer mecanismos de control del comercio exterior, sino también contra quienes, en muchos niveles del gobierno, seguían pensando con una lógica intervencionista cuya consecuencia sería la disminución de la producción, por la caída de las inversiones privadas<sup>9</sup>. A la crítica a la ambigüedad de la política oficial en materia de intervencionismo se agregaba con frecuencia la objeción a los impactos, igualmente desalentadores para el crecimiento económico, derivados de los conflictos sociales, otro ámbito donde reprochaba al gobierno no tener una orientación definida. Fue, justamente, en virtud de sus inquietudes por la multiplicación de huelgas y protestas sociales, que recibió con alivio la

instauración, a principios de noviembre de 1958, del estado de sitio. Al menos en lo social, argumentó cuando comentó esa importante decisión del Poder Ejecutivo, se comenzaban a aclarar las cosas y cabía esperar "que el gobierno y el partido que políticamente lo respalda se obliguen a un rumbo cuya derechura no esté amenazada por fuerzas equívocas"<sup>10</sup>. A fin de diciembre de 1958 Frondizi anunció un conjunto de medidas económicas reveladoras de la decisión de profundizar las orientaciones de corte liberal y de disminuir la importancia del Estado. Entre esas iniciativas se destacaba la liberalización del mercado cambiario, tradicional demanda del sector agropecuario. La reducción del gasto público y el achicamiento del aparato burocrático estatal eran otras de las propuestas del discurso-programa de la nueva etapa de la administración radical intransigente. *La Nación* expresó su total apoyo a los enunciados oficiales, y opinó que su estricto cumplimiento llevaría al país a la solución de los problemas que la gestión militar precedente no había encarado con el debido rigor. Para el diario, los proyectos de reducción del aparato estatal encontrarían obstáculos en las burocracias públicas, y estas resistencias debían afrontarse con decisión si no se quería malograr la reestructuración a emprender. Estimaba, además, que en lo inmediato las medidas de desregulación de la economía tendrían efectos negativos sobre la mayoría de la población, pero ése era el precio a pagar por el pronto retorno a la estabilidad y el crecimiento. Inequivocamente a favor del presidente Frondizi, el matutino elogiaba su rudo lenguaje y su crudeza conceptual, aspectos, decía, quizás antipáticos para algunos, pero que indicaban el camino de la prosperidad<sup>11</sup>. Con esa reflexión se aprestaba, con optimismo, a iniciar el año 1959.

Con el primer día del nuevo año, de Cuba llegó la noticia del triunfo de la guerrilla de Fidel Castro. El hecho motivó un editorial de *La Nación* pleno de alborozo y con los mejores augurios para los revolucionarios que se instalaban en el poder. Desde hacía ya varios meses el diario venía siguiendo con abierta simpatía la lucha para derrocar a Batista, y caracterizaba al déspota con términos que traslucían una inequívoca equiparación con Perón. Llamaba a Fidel Castro "el recio combatiente de la Sierra Maestra (opuesto) a Fulgencio Batista, el áspero dictador cubano"<sup>12</sup>, y parecía adjudicar al barbado guerrillero el mismo papel desempeñado en la Argentina por Aramburu y Rojas. Ese razonamiento por analogía se había expresado, también, en noviembre de 1958, cuando al fracasar la huelga general convocada por Castro para apresurar la caída de Batista, el matutino invitó a los revolucionarios a no desanimarse, y entender que la adhesión de

los sindicalistas al régimen era el resultado del miedo. Estos sindicalistas, argüía, compensaban a Batista el apoyo que Fidel Castro le quitaba en los sectores proletarios más evolucionados y en el grueso de la población universitaria. Al día siguiente del triunfo de los guerrilleros, el diario elogiaba sus sacrificios, recordaba con acento épico los atentados personales, los actos de sabotaje y los asaltos a los cuarteles, les deseaba el mayor de los éxitos en la tarea de restablecer la democracia y, no sin cierto profetismo, decía: "Forman sus huestes elementos de distinto origen, unidos para la lucha por la liberación, acaso separados pronto para la obra constructiva que les espera"<sup>13</sup>. Indudablemente, el paralelo con el movimiento de septiembre de 1955 inspiraba esas reflexiones sobre la fragilidad de las coaliciones formadas para derrocar gobiernos en nombre de la democracia.

A poco más de tres años de los sucesos de 1955, el conglomerado de fuerzas sociales y políticas que habían apoyado la caída de Perón o participado en ella se encontraba totalmente dividido. No faltaban, tampoco, quienes reflexionaban autocríticamente su antiperonismo de la vispera. En ese contexto, *La Nación* manifestó preocupación por las ideas políticas de una parte de la juventud, que parecía un tanto desencantada con la marcha de la situación nacional. Los jóvenes habían dado, decía un editorial de febrero de 1959, su apoyo desinteresado y valioso al derrocamiento de Perón y luego tomaron un papel aún más activo en la vida política. Pero a ese impulso, agregaba, siguió cierta frustración, justificable por el exceso de idealismo juvenil. Totalmente inexplicable, por el contrario, le parecía la propaganda de quienes querían hacer creer a la nueva generación que el peronismo podía ser vindicado en nombre de teorías que, entre comillas, el diario llamaba de "avanzada social". ¿Quiénes eran esos jóvenes plenos de idealismo y ahora frustrados? El matutino se refería a la actitud y no a los sujetos, pero notoriamente en el ya crispado escenario de comienzos de 1959, los aludidos jóvenes eran, en buena medida, los desilusionados del frondizismo y, en menor grado, de la todavía cercana revolución de septiembre. Eran, también, los miembros aún más noveles de esa clase etaria que había hecho su experiencia de lucha de calles en la querrela en torno a la cuestión de la enseñanza privada, en la segunda mitad de 1958. Desde la perspectiva del diario, captar lo que sucedía con la juventud era indispensable para corregir sus orientaciones, pero al mismo tiempo invitaba a no alarmarse excesivamente, ya que "ni aun al comprobarle desvíos creemos que haya nada inquietante en sus posturas rebeldes y en sus desbordes teóricos (...) peor sería no verla entregada en ninguna forma al servicio del

país y de su pueblo"<sup>14</sup>. En la misma tónica hubiese podido designar su objeto de preocupación con la fórmula "juventud maravillosa", que tiempo después emplearía Perón.

Lo que *La Nación* definía como intentos de reivindicar o justificar al peronismo desde supuestas "teorías avanzadas" se manifestó en distintos, y a veces inesperados, espacios de confrontación ideológica. Uno de ellos, que no pudo escapar a la aguda atención de quienes analizaban la política desde las columnas del diario, fue un debate realizado en el aula magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, pocos meses antes de la publicación del editorial mencionado. En ese debate, Juan José Hernández Arregui, profesor universitario cesanteado por la revolución de 1955, había defendido las realizaciones de la década de Perón, desde una perspectiva marxista, y el público estudiantil lo había aplaudido<sup>15</sup>. En su intervención, Hernández Arregui había incluido alguna referencia crítica a la "prensa oligárquica", género en el cual, en su opinión, ocupaba un lugar destacado el diario de la familia Mitre. En ese mismo debate, el escritor Ernesto Sabato, colaborador del matutino, recordó haber sido expulsado de la Universidad en 1945 por los peronistas y por ello se consideraba con derecho para defender determinados valores positivos del peronismo sin dar lugar a pensar en una actitud interesada de su parte. Para Sabato, cabía reconsiderar las ideas sobre el peronismo y reconocer la importancia y gravitación de los sectores populares movilizados en octubre de 1945, en tanto protagonistas de una revolución de profundas implicaciones sociales y políticas, más allá de los juicios o evaluaciones que pudiera suscitar Perón. Para muchos antiperonistas debió ser una desconcertante comparación la analogía establecida por Sabato entre los "descamisados" de 1945 y los *sans-coulottes* de la Revolución Francesa, imagen acogida con aplausos por la concurrencia<sup>16</sup>. En ese debate fue un alto dirigente del Partido Comunista, Rodolfo Ghioldi, quien expresó posiciones más críticas sobre el período peronista y defendió como una estrategia adecuada haber construido la Unión Democrática, experiencia denostada por los otros expositores. La composición pluralista del auditorio se reflejó en el hecho de que tampoco faltaron aplausos para Ghioldi<sup>17</sup>. Resulta pertinente recordar ese puntual evento político-universitario, porque allí se manifestaron con claridad los cambios que se estaban produciendo en las ideas del estudiantado, cuyo intranquilizante eco recogía el editorial citado.

El diario se ocupó poco después de lo que definía como la posible infiltración comunista en las casas de altos estudios. Si

bien consideraba al comunismo latinoamericano como un actor carente de una estrategia de lucha agresiva y frontal para conquistar el poder, al mismo tiempo no dejaba de llamar la atención sobre su trabajo ideológico en el medio universitario, a su entender, relativamente propicio. Ejemplificaba sobre las estrategias comunistas en otras latitudes, a fines de febrero de 1959, con una explicación de la expansión del marxismo en la China anterior al triunfo de Mao, donde adjudicaba un rol decisivo a la acción de los profesores universitarios y de los activistas estudiantiles que adherían a esa doctrina. Con su tradicional modo de argumentación, afirmaba que lo sucedido en otras regiones del mundo bien podía pasar en la Argentina, y alertaba sobre el peligro de la penetración, por la vía de los docentes y los militantes estudiantiles, de ideas marxistas en las universidades<sup>18</sup>. La mencionada reflexión sobre el eventual crecimiento de la influencia política del marxismo coincidía, en la época, con las preocupaciones de otros actores que comenzaban a crear entidades anticomunistas. En algunos casos esas agrupaciones acusaban al gobierno de Frondizi de favorecer al marxismo o, más aún, de tener en su seno a altos funcionarios de esa filiación ideológica.

Las campañas anticomunistas contra Frondizi encontraban cierto eco en sectores militares y en grupos civiles, donde no faltaban quienes incitaban al golpe de Estado. *La Nación* se colocó en una posición ambigua con respecto a la supuesta presencia de personas de ideas marxistas en el gobierno. Cuando se planteó el tema, lo relacionó con los sectores del oficialismo disidentes con la línea económica impulsada por Frondizi y estimó que esas conductas podían tener una raíz ideológica emparentada con el marxismo. Pero, de todos modos, en su análisis trató explícitamente de evitar las interpretaciones conspirativas y descartó la hipótesis de una fuerte infiltración comunista en las esferas oficiales<sup>19</sup>. Por otra parte, caracterizaba como descabellada la posibilidad de cualquier iniciativa golpista. Así, en una coyuntura plena de rumores sobre inminentes asonadas militares consideró inadmisibles pensar que por esa vía se hallarían soluciones a los problemas del país; por el contrario, decía, ese tipo de salida agravaría la situación política y económica. Opinaba que las orientaciones adoptadas por el gobierno de Frondizi no estaban mal encaminadas. Pero, aun cuando lo estuviesen, eso no podía justificar poner expectativas en los cuarteles. De allí que planteara la pregunta: "¿Qué buscan, qué se proponen, quienes toman contacto con militares o tratan de lanzar a los más irreflexivos a una aventura que entrañaría el descrédito y la ruina de la República?"<sup>20</sup>. Su respuesta era descalificar sus intenciones

golpistas e instarlos a sumarse a la lucha política por los carriles institucionales y canalizar allí sus discrepancias con las autoridades. En cuanto a los militares, les aconsejaba mantenerse al margen de la política y esperaba que permanecieran inmunes a las tentativas de captación por parte de quienes pensaban convertir la violencia en instrumento de acción cívica.

A propósito del posible crecimiento de las ideas marxistas en los medios estudiantiles, es pertinente destacar que el análisis del diario correspondía a un momento en el que esa eventualidad no se asociaba, en absoluto, con la Revolución Cubana, y menos aún con Fidel Castro. El gobierno revolucionario cubano todavía era visto por el matutino como denodado defensor de la democracia y ejemplo para el resto de América Latina. En sus editoriales, Castro y sus seguidores eran caracterizados con extrema admiración y simpatía: "Esos hombres que en Sierra Maestra fundaron un estilo latinoamericano de la esperanza (...) ese estilo (que) con barbas o sin ellas marca el final de los dictadores que no se apresuren a comprenderlo"<sup>21</sup>. En mayo de 1959 Fidel Castro viajó a la Argentina para participar de una reunión de representantes de los gobiernos de todo el continente. El matutino tuvo, entonces, oportunidad de trazar un perfil del mandatario cubano desbordante de alabanzas, cuyo título era "Un héroe de nuestro tiempo". Dificilmente se hubiese podido articular un texto más laudatorio. Verdadera oración de homenaje político y personal, la fascinación atravesaba ese suelto de carácter editorial. En clave celestial decía: "Si el rostro es el espejo del alma, el alma de Fidel Castro tiene la lealtad, la nobleza y la grandeza de los seres de excepción"<sup>22</sup>. La mirada de la "tribuna de doctrina" se revelaba casi hipnotizada por las manos del tribuno revolucionario: "Todo habla por sí mismo y toda su sensibilidad parece afluir, como una descarga, a las manos alargadas, de dedos inquietos. Esas manos podrán ser de artista, más nunca de duro guerrero. ¿Cómo serían las manos del Cid, un guerrero que también hablaba de dignidad y de honor en nombre de su pueblo? De su barba sabemos que 'nadie nunca se la mesó'. Y a este hombrón que acaba de ponerse de pie 'nadie nunca' le mesará la barba"<sup>23</sup>. Con ese estilo, en el que deslindar lo erótico de lo épico no es, sin duda, tarea fácil, la reflexión del matutino se identificaba con el discurso pronunciado por Fidel Castro. El jefe de Estado cubano había, según la nota de marras, hablado "de la fe de los pueblos y de cómo la pierden cuando de las conferencias no salen más que palabras (...) el drama de los pueblos latinoamericanos es muy sencillo: se necesita más dinero para crear fuentes de riqueza (...) la inestabilidad política que nos agobia, no es causa,

sino consecuencia de la falta de desarrollo económico (...) esa obra de cooperación no se puede hacer sin la colaboración de los Estados Unidos cuyo pueblo comprende nuestros problemas cuando se le exponen con lealtad y sinceridad"<sup>24</sup>. El enjundioso retrato de Castro y la encomiástica reseña de su alocución tenía como colofón una frase de Nietzsche: "Mi boca es la boca del pueblo". El homenaje de *La Nación* no podía ser mayor.

En la segunda mitad de junio de 1959, desde su exilio dominicano, Perón denunció el incumplimiento por parte de Frondizi del pacto suscripto para las pasadas elecciones presidenciales. Otra vez se expresó el malestar de los sectores militares más críticos de Frondizi, quienes le reprochaban tanto el "pacto" como las presuntas infiltraciones extremistas en el gobierno. Nuevamente *La Nación* llamó a la medida y a evitar salidas que pudieran ser irreparables desde el punto de vista institucional. En sus análisis el acuerdo secreto entre Frondizi y Perón aparecía relativamente trivializado. Además, veía como una reacción muy positiva la actitud del presidente, que negaba haber suscripto ese o cualquier otro compromiso con el derrocado mandatario. Para el matutino se debía evaluar con objetividad la acción del gobierno. Había aciertos y equivocaciones, decía, pero "sería deplorable que entre ellas se insistiera en incluir sin discriminación, en forma global, el plan económico del Poder Ejecutivo. Hállase éste en la clara línea de las medidas que corresponde adoptar cuando se ha llegado a la situación en que se debate nuestra economía"<sup>25</sup>. Lo malo, decía, no era el plan del gobierno, sino los funcionarios dirigistas que no lo ponían en marcha con la celeridad y eficiencia debidas. Por tal causa, consideró auspiciosa la renuncia de todos los equipos ministeriales como consecuencia de la crisis política. Nicolás Babini, hasta pocos días antes subsecretario del Ministerio del Interior, fue muy preciso para caracterizar esa crisis: "El gobierno cayó. Fue una caída a la europea, con mantenimiento del jefe del Estado, pero se materializó a la criolla, porque la renuncia del gabinete arrastró las de las planas mayores de la administración pública, de todos los organismos centralizados, autárquicos y descentralizados y de las empresas del Estado"<sup>26</sup>.

Cuando se hizo público que el nuevo gabinete tendría como figura central a Álvaro Alsogaray, en el Ministerio de Economía y Trabajo, el diario celebró la decisión presidencial y auguró que a partir de ese momento se alcanzaría al fin la unidad de dirección en la política. Pocos días más tarde, Alsogaray llamó a "pasar el invierno" y *La Nación* aseveró que se trataba de un mínimo sacrificio al que nadie podía negarse, hallándose en juego la rápida

recuperación de la economía nacional<sup>27</sup>. En su análisis de las condiciones para el éxito del plan del nuevo ministro, que profundizaba las medidas de corte liberal ya iniciadas por Frondizi, el diario recomendaba a los dirigentes sindicales tratar de comprender la nueva situación y limitar las demandas salariales; a los empresarios les sugería reducir costos mediante la racionalización de métodos de trabajo y la limitación voluntaria de sus utilidades. Dejaba planteada una pregunta cargada de dramatismo: "¿Triunfará el ministro Alsogaray en la lucha titánica que deberá emprender contra toda la burocracia, que se unirá para evitar su derrumbe, que permitiría liberar a la actividad privada de las ataduras que traban su expansión?"<sup>28</sup>. El diario miraba, también, con cierta preocupación la gestión de algunos gobiernos provinciales, como el de la Provincia de Buenos Aires, apegados a lo que definía como viejos y anticuados *slogans*. Sobre este tema, al mes del nombramiento de Alsogaray se hacía eco de expresiones de descontento emitidas por dirigentes de la Sociedad Rural Argentina<sup>29</sup>.

Mientras esperaba los buenos resultados de las nuevas medidas económicas y el mejoramiento del clima social, el diario no dejaba de seguir los posibles cambios en la gravitación de los distintos partidos políticos. En julio de 1959, las primeras elecciones locales desde la asunción de Frondizi, realizadas en la provincia de Santa Fe, mostraron el debilitamiento del partido oficialista, el peso del voto en blanco y cierto crecimiento de los sufragios comunistas y conservadores. En su reflexión no pareció intranquilizarse por el aumento de los votos comunistas y consideró globalmente las elecciones como una prueba de la reorientación de las preferencias de la ciudadanía. La conclusión más general de su análisis era la conveniencia de modificar la ley electoral nacional e incorporar la representación proporcional, y así no obligar a los ciudadanos a optar por el "mal menor"<sup>30</sup>. Más alarma por el avance de la izquierda manifestaba, en cambio, la sección Panorama Político, en esa época redactada por Mariano Grondona. Aquí el incremento de sufragios comunistas de Santa Fe, que del 2% en 1957 pasaron al 11% en 1959, era estimado como parte de un fenómeno destinado a profundizarse. El comunismo podía continuar creciendo, se decía, a expensas de la transferencia de votos peronistas. Desde su columna de análisis político, Grondona abordaba con frecuencia la cuestión de la eventual formación de un frente popular de izquierda, alternativa ante la cual no ocultaba su preocupación, en especial, por suponer que una parte del peronismo podía volcarse a esa opción<sup>31</sup>.

Mariano Grondona, que revelaba una particular aptitud para el análisis de los problemas políticos y militares, se había incorporado al diario en 1958. Un par de años más tarde, *Entre Nosotros*, el *house organ* editado para información interna del personal de *La Nación*, definía la sección redactada por Grondona como destinada a contribuir a que en el país prevaleciera la sensatez y se actuara con sentido común. Los textos de la columna Panorama Político, agregaba el artículo, "entran en la dialéctica de las ideas y elevan el debate entre las corrientes en pugna. Y el autor, en ese plano superior saca sus consecuencias y analiza posiciones y da —sin decirlo— fértiles orientaciones para quienes sepan ver"<sup>32</sup>. Específicamente a Grondona, esa nota de presentación en sociedad lo describía como un joven con futuro promisorio, con inclinaciones tanto periodísticas como políticas y de quien se podía pronosticar que predominarían las primeras.

En la segunda mitad de 1959, más que por un coyuntural, aumento de votos comunistas en alguna elección provincial, los análisis editoriales de *La Nación* se preocupaban por la acción de los partidarios de ideologías de extrema izquierda en las universidades y en los sindicatos. Tal como se señaló, el tema de la presencia de ideas marxistas en las casas de altos estudios era abordado con inquietud por ver allí un primer, y fácil, escalón del comienzo de una penetración mucho más global. Además, la reflexión sobre esa cuestión captaba como intranquilizante la diversificación de las ofertas ideológicas de extrema izquierda y la aparición de agrupamientos de inspiración trotskista y otros que, según decía, se "autocalificaban marxistas libres"<sup>33</sup>. Ese activismo estudiantil, aseveraba, trataba de apropiarse de las banderas de la Reforma Universitaria y realizaba una permanente propaganda antiimperialista, ocultando sus propósitos estratégicos más fundamentales. Algo parecido entendía detectar en el mundo sindical. Consideraba las huelgas contra la política económica del gobierno como impulsadas por pequeños "grupos de dirigentes, para mayor aberración manejados desde el extranjero o movidos por concepciones exóticas (que llevaban) a toda la clase trabajadora al hambre y a la desocupación"<sup>34</sup>. Desde esa perspectiva el diario aplaudió la decisión del Poder Ejecutivo de prohibir al Partido Comunista, así como la disolución de los distintos organismos considerados directa o indirectamente vinculados a él. Para justificar ese apoyo a una limitación de las libertades públicas, afirmaba que los comunistas ligados a sectores del peronismo procuraban, desde el ámbito gremial, impedir la recuperación económica del país. El Partido Comunista no actuaría con lógica, argumentaba, si invocaba la Constitución Nacional para defen-

derse, ya que su ideología consideraba que la Carta Magna era parte de la legalidad "burguesa"<sup>35</sup>. Como una demostración de su interés por las ideologías de izquierda en los países más avanzados del mundo en ese último año de la década del 50, comentó con satisfacción la decisión del Congreso de Bad Godesberd del Partido Socialdemócrata Alemán de abandonar el marxismo como doctrina oficial<sup>36</sup>. De esas modificaciones en las ideologías de izquierda de los países centrales se podía deducir, desde la óptica del matutino, que el marxismo y los supuestos de la lucha de clases se extinguían con el bienestar económico. Era entonces lógico que, en países como el nuestro, los marxistas tuvieran interés en bloquear el desarrollo económico.

Pero no sólo detectaba amenazas en la izquierda o en el peronismo: los pronunciamientos militares también podían precipitar al país en el caos. Por eso criticaba a los jefes castrenses que trataban de imponer su voluntad a las autoridades mediante repetidos despliegues de blindados. Acompañaba la condena con una explicación de las causas de esos comportamientos, que remitía a varios años de politización y de "logias" en el seno de las instituciones militares. La inquietud era mayor cuando quedaba en evidencia la acción de civiles que fomentaban golpes de Estado. Así, al producirse un conflicto entre un sector del Ejército y el gobierno, definido por el general Toranzo Montero, jefe del arma, como estrictamente motivado por razones de funcionamiento interno, el diario manifestó su desagrado por el comportamiento de los actores civiles "que se acercaron a él (Toranzo Montero) para inducirlo a una descabellada aventura"<sup>37</sup>. Al reflexionar sobre la mejor manera de apaciguar los ánimos de los uniformados, pocos días más tarde, empleó severos términos para recriminar a un grupo de legisladores oficialistas que había pedido la aplicación de máximas sanciones y la baja de los militares participantes de la recién superada crisis. El análisis estimaba que esas iniciativas, en lugar de tranquilizar a las fuerzas armadas iban a crear nuevos focos de tensión. Elogiaba, en cambio, la actitud más conciliadora con que Frondizi había encarado el conflicto<sup>38</sup>.

*La Nación* apoyaba la política económica del ministro Alsogaray, pero la adhesión no era incondicional. Por eso, cuando en una de sus entonces habituales disertaciones televisivas, el ministro criticó lo que denominó el "pasquinismo" e invitó a los empresarios a no contratar publicidad en el vespertino *La Razón* por sus cuestionamientos a la política económica, *La Nación* juzgó tal sugerencia inadmisible e incompatible con los principios democráticos<sup>39</sup>. Es de destacar que en esa época se solía afirmar

que *La Razón* se hallaba bajo control del Ejército, conjetura respaldada por una investigación periodística de Rodolfo Walsh sobre el modo violento con que se habían transferido sus títulos de propiedad luego de la revolución del 55<sup>40</sup>. Cabe aclarar que el ocasional exabrupto antidemocrático del ministro Alsogaray no afectó las buenas opiniones que el matutino tenía de su gestión económica.

La mirada auspiciosa sobre la marcha de la economía nacional contrastaba con las preocupaciones que le producían algunas iniciativas originadas en gobiernos provinciales donde había dirigentes políticos "nostálgicos" del programa original del radicalismo intransigente. Más aún, el diario creía percibir en ellos un pensamiento de izquierda de inspiración marxista. Entre fines de 1959 y comienzos de 1960, un proyecto de reforma agraria discutido en la legislatura bonaerense dio lugar a la reactualización de las críticas del matutino al gobierno provincial, encabezado por Oscar Alende y cuyo ministro de Economía era Aldo Ferrer. El proyecto, surgido de una iniciativa del Poder Ejecutivo, fue objetado con términos muy severos por las entidades de representación corporativa de los grandes propietarios rurales. Como un eco de algunas de esas posiciones, el diario decía que los promotores de la reforma revelaban "una acusada mentalidad marxista y una resuelta oposición al principio de la propiedad privada que está afirmado en nuestra Constitución"<sup>41</sup>. En cuanto a las metas más generales del denostado proyecto, decía que terminaría por someter al Estado la mayoría de las propiedades rurales provinciales con el pretexto de su deficiente aprovechamiento económico. Por todas esas razones, reclamaba al Senado provincial no convertir en ley el texto aprobado por los diputados, quienes, además, habían modificado en un sentido aún más drástico el proyecto original del Poder Ejecutivo. En el mismo momento, la Federación Agraria Argentina, en defensa del proyecto de reforma, publicaba en su periódico *La Tierra* un artículo sobre el tema, donde condenaba las presiones que realizaban sobre el Senado los terratenientes para impedir la sanción de la ley en cuestión. En dicho texto se mencionaban los editoriales de diarios donde "aparecieron grandes artículos bregando por el derecho de propiedad, en el 'estado de derecho'; reclamando contra el despojo y entonando loas a la gran empresa agropecuaria"<sup>42</sup>.

Cuando el Senado bonaerense suprimió algunos de los artículos más cuestionados por los grandes propietarios rurales, el matutino consideró que había actuado con sabiduría, pero que aun depurado el proyecto era motivo de desaliento y desconfianza

para los productores agropecuarios. Como comentario marginal, el editorial manifestaba cierta contrariedad por cuanto los legisladores que representaban a la oposición, es decir a la Unión Cívica Radical del Pueblo, defendieron puntos de vista favorables a las disposiciones más criticadas por los representantes de los grandes propietarios<sup>43</sup>. El diario explicaba esa actitud como un afán electoralista de la oposición, un medio para ampliar sus apoyos en la población, estrategia reprochable, decía, en tanto no tenía en cuenta los intereses más generales del país.

En el curso del año 1960 se produjeron múltiples y disímiles hechos de violencia política. En los últimos meses del año anterior la guerrilla del comandante Uturunco, de filiación peronista, había comenzado a explorar una estrategia de lucha rural finalizada muy pronto en el fracaso. Las huelgas y los atentados terroristas marcaron el primer trimestre de la década del 60. La respuesta del gobierno de Frondizi fue la aplicación del llamado Plan Conintes (Comoción Interna del Estado). El diario aplaudió la decisión de castigar con mayor severidad a los responsables e inspiradores de esos hechos, y consideraba que existía una "inmensa conspiración", cuya jefatura atribuía a Perón<sup>44</sup>. En ese contexto, el 27 de marzo de 1960 se realizaron elecciones generales para la renovación parcial de la Cámara de Diputados, primera confrontación electoral de tal alcance bajo la presidencia de Frondizi. La proscripción de los partidos Peronista y Comunista daba a ese acto electoral un carácter limitado y violatorio de las regulaciones de un régimen político democrático. Sin embargo, para el matutino, el problema de las proscripciones no alteraba el contenido democrático de la elección. Con un razonamiento similar al de la célebre, y discutida, fórmula de Saint Just, *La Nación* consideraba que no podía haber democracia para los enemigos de la democracia. Entendía que los partidos proscritos no eran democráticos: los comunistas, decía, recibían órdenes de un gobierno extranjero; de los peronistas argumentaba que habían sido la negación de un auténtico partido político cuando ejercieron el control del Estado y actuado como en otras tierras lo había hecho el fascismo<sup>45</sup>. Si bien no hacía la apología de la proscripción, la consideraba necesaria en esa coyuntura. La idea de la absorción de los peronistas por otras fuerzas políticas, expectativa optimista de la época inmediatamente posterior a la caída de Perón, ya no estaba presente un lustro más tarde. En las elecciones se impuso el voto en blanco, aconsejado por el peronismo, seguido por el radicalismo del pueblo; el tercer lugar correspondió al partido oficialista. El matutino ya había anunciado que las opciones electorales para muchos ciudadanos "moderados"

iban a ser complicadas; en la Capital Federal, votar por el oficialismo era respaldar el programa de Alsogaray, pero en la Provincia de Buenos Aires, un sufragio del mismo color implicaba apoyar un proyecto estatista. Por ello no mostró sorpresa ante los resultados electorales e, incluso, interpretó el módico tercer lugar del partido de Frondizi como una señal para no desalentarlo en la prosecución de sus planes de gobierno. El proyecto asumido por el gobierno en materia económica y social era, a su juicio, el único posible. El gobierno había perdido la mayoría en la Cámara de Diputados, lo cual anunciaba dificultades para hacer aprobar sus iniciativas en el Congreso. Frente a esa desventajosa situación, *La Nación* sugería a Frondizi no desanimarse y, para ello, le evocaba un casi inaudito ejemplo a emular: "Hipólito Yrigoyen gobernó sin inconvenientes con mayorías adversas varios años y hasta se resistió a seguir la orientación que en materia internacional quisieron marcarle las mayorías de ambas cámaras"<sup>46</sup>. La desconfianza del diario hacia la oposición radical del pueblo se combinaba con la preocupación por el comportamiento de los elencos provinciales alineados formalmente en el partido oficialista, pero todavía dispuestos a defender ideas dirigistas.

El balance globalmente positivo de *La Nación* sobre la gestión de Frondizi no era compartido por muchos sectores políticos que desde la derecha miraban al presidente y a sus equipos con creciente desconfianza. Para ellos, la presencia de Alsogaray en una posición clave de poder era, posiblemente, sólo una estrategia para engañar a quienes se dejaban convencer por las apariencias. Al general retirado Fortunato Giovanoni le tocó encabezar un frustrado intento para deponer a las autoridades a las cuales endilgaba, entre otras acusaciones, ser marxistas y trotskistas, y proponerse instaurar una república soviética. La revolución de Giovanoni tuvo por epicentro la capital de la Provincia de San Luis. Luego de tomar varios edificios públicos, uno de los principales mentores civiles del pronunciamiento, Adolfo Sánchez Zinny, leyó por radio la proclama del movimiento revolucionario y sus objetivos. Sánchez Zinny era una de las figuras más conocidas de los comandos civiles revolucionarios que habían participado en el golpe contra el peronismo cinco años antes. El diario manifestó su más profundo desacuerdo con la intentona golpista, por lo demás liquidada en pocas horas, y lamentó el daño de la imagen nacional en el exterior por esas acciones contra la legalidad y la Constitución. Cabía reconocer, decía, que en otros momentos de la historia algunas de las personas implicadas en la empresa golpista habían tenido una eficaz

intervención para reconquistar la democracia, pero el episodio le parecía totalmente carente de razones<sup>47</sup>. Por otra parte, no adjudicaba ninguna importancia a las denuncias de infiltración marxo-trotskista en las altas esferas del Estado formuladas por los insurrectos de San Luis.

No se habían apagado los ecos del conato puntano cuando estalló el llamado *affaire* de la "valija cubana". Se trataba de unos documentos llegados al país en una maleta diplomática enviada desde Cuba con directivas para sectores revolucionarios argentinos. Desde mediados de 1960 el matutino había seguido con creciente preocupación los cambios políticos de Cuba. La censura de la prensa y la confiscación de diarios cubanos fue uno de los temas que más indignación despertó en sus reflexiones sobre el régimen de Castro. En su opinión, Cuba se dirigía al totalitarismo y por eso acallaba voces que no estaban subordinadas a las directivas del gobierno. Así, *La Nación*, que con tanto encomio había hablado de Fidel Castro y de sus guerrilleros, expresaba su desacuerdo cargado de desazón por el rumbo que tomaban los acontecimientos en la isla caribeña<sup>48</sup>. Cuando en razón de los enfrentamientos que los revolucionarios cubanos mantenían con el gobierno norteamericano, Nikita Khrushchev expresó su eventual solidaridad militar con ellos, quedó planteada por primera vez la posibilidad de un acercamiento entre La Habana y Moscú, sorprendiendo incluso a quienes ya criticaban a la administración castrista. El matutino consideraba inadmisibles que el Kremlin hubiera amenazado a los norteamericanos con lanzar cohetes y proyectiles aéreos sobre su territorio si atacaban militarmente a Cuba. El análisis llamaba a Castro a la reflexión y le explicaba los riesgos de convertirse en instrumento del poder soviético; al mismo tiempo, advertía que si eso ocurría, toda América estaría en peligro<sup>49</sup>. Con la esperanza de ver solucionadas las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos, el matutino acogió con simpatía la decisión del gobierno de Frondizi de encomendar a su embajador en La Habana una gestión de mediación pacífica. A su parecer debían realizarse máximos esfuerzos para impedir la agudización de la crisis, en especial, teniendo en cuenta la amenaza de la intervención soviética en los asuntos del continente<sup>50</sup>. Fue, justamente en ese contexto, que apareció la "valija cubana", cuyo contenido iba a incorporar un nuevo elemento a la movida situación política nacional y facilitar renovados argumentos a los sectores anticomunistas opuestos al gobierno.

La maleta contenía folletos de publicidad con las realizaciones de la Revolución Cubana, explicó un comunicado de la

embajada de dicho país en Buenos Aires, cuyo destino era ayudar a comprender las transformaciones en curso poco difundidas por la prensa local. No había, decía la nota, ningún texto que pudiera considerarse subversivo, ni, menos aún, material de propaganda comunista. El desmentido diplomático solicitaba a la prensa argentina no prestarse a lo que entendía como una táctica para dividir a los pueblos de América<sup>51</sup>. En un editorial *La Nación* abordó el tema criticando duramente lo que definía como una intromisión cubana en la política argentina. En su opinión, Cuba se estaba convirtiendo en una cabeza de puente de la penetración comunista en América Latina. Además, como dentro de la "valija" se habían hallado también varias cartas dirigidas a miembros del peronismo para instarlos a organizarse y actuar, firmadas con el nombre *John*, el matutino estimó que había quedado "puesta de manifiesto la acción que desde La Habana se proponía desarrollar entre nosotros un grupo de nostálgicos de la dictadura"<sup>52</sup>. Por cierto, la firma de las cartas hacía pensar inmediatamente en John William Cooke, exiliado en La Habana y ferviente defensor de la Revolución Cubana. Esas cartas fueron denunciadas por Cooke como una vulgar provocación para llevar a un enfrentamiento entre el gobierno argentino y el de Castro.

Si bien *La Nación* expresaba su preocupación por lo que percibía como un intento de infiltración del comunismo en América Latina, su enfoque distaba de caer en interpretaciones conspirativas simples. Es importante destacar este aspecto de sus análisis, cercano a las posiciones defendidas por el gobierno de Frondizi. El avance del comunismo debía relacionarse con la situación de pobreza y subdesarrollo del continente, expresó en varias oportunidades en sus reflexiones editoriales. Era necesario, sostenía en uno de esos análisis, en coincidencia con un discurso pronunciado por el canciller Taboada en una reunión en Costa Rica, elevar "el nivel de vida de nuestros pueblos, dar una base positiva a la lucha contra la infiltración comunista, eliminar de los países latinoamericanos el subdesarrollo o el estancamiento en que yacen o que los amenaza"<sup>53</sup>. Esa visión estructural de la situación continental no era óbice para que en los momentos en que la escena social se tornaba más conflictiva el diario caracterizara las huelgas como parte de una estrategia insurreccional en la cual convergían peronistas y comunistas<sup>54</sup>. La irreversibilidad de la cuestión cubana quedó planteada en los editoriales del diario desde antes que el gobierno de Fidel Castro se declarara abiertamente marxista. A comienzos de 1961, con cierto tono autocrítico porque aún estaba fresco el recuerdo de sus ditirámicos elogios a Castro, decía: "La inmensa mayoría de los que

creyeron en el heroico paladín de la democracia defendida desde los vericuetos de Sierra Maestra —y nos contamos entre ellos— ha terminado por rendirse a la evidencia”<sup>55</sup>.

El problema castrista tuvo inesperada repercusión en la elección de senador por la Capital Federal, en febrero de 1961. En la misma triunfó Alfredo Palacios, candidato del Partido Socialista Argentino, quien había hecho buena parte de su campaña con lemas que lo identificaban con la Revolución Cubana. Algunos analistas se sobresaltaron, creyendo que el país podía encontrarse al borde de una nueva, y radicalizada, etapa política. Entre quienes así pensaron se incluyó el ya mencionado responsable de la sección Panorama Político del diario, Mariano Grondona. Según Grondona, Palacios había conquistado la victoria con el apoyo de un conglomerado electoral conformado por votos socialistas de izquierda, comunistas, peronistas de izquierda y sectores independientes. Con una prosa apta para colmar de intranquilidad a sus lectores, Grondona discurría sobre la aparición de un frente popular que primero había irrumpido electoralmente, decía, en la Capital Federal, con altas condiciones para crecer en el Gran Buenos Aires y, muy probablemente, para convertirse en “un nuevo aspirante al poder presidencial nacional”<sup>56</sup>. Versado en política internacional, el autor imaginaba el desarrollo del frente popular convertido en fuerza amenazante para el sistema democrático. Si el frente crecía, no se asistiría “a una competencia ordenada y respetuosa entre dos partidos democráticos, sino a la lucha sin cuartel entre dos concepciones del mundo, una de las cuales es democrática y la otra no”<sup>57</sup>.

Es interesante destacar que la voz de alarma propalada por Grondona no era totalmente compartida por los editoriales de *La Nación*. Así como en 1912 el diario había llamado a sus lectores a no asustarse por el éxito electoral de los candidatos socialistas, entre los que se encontraba el joven Palacios, en 1961 volvía a soslayar el dramatismo en sus reflexiones, e invitaba, otra vez, a no exagerar las reales dimensiones y supuestos peligros del triunfo del ya anciano dirigente de izquierda. Explicaba el triunfo de Palacios por su antigua y respetable trayectoria parlamentaria, y restaba importancia a los apoyos que pudo depararle la propaganda castrista de su acción proselitista<sup>58</sup>. Pero esta opinión mesurada sobre el éxito de Palacios no significaba que el matutino no manifestara inquietud ante una posible izquierdización del electorado. Una fracción del socialismo se había volcado a posiciones leninistas, que nada tenían que ver, decía, con el partido fundado por Juan B. Justo; esos sectores, más los comunistas, podían procurar apoyos “de los nostálgicos de nuestra más

reciente dictadura, cuyo horizonte permanece cerrado en razón de disposiciones legales<sup>59</sup>. La formación de un frente popular no sería, en opinión del diario, reprochable si su ideología no propendiera a reproducir un proyecto como el puesto en práctica por Cuba. ¿Si crecía la izquierda podía mantenerse el régimen democrático? Esta pregunta tácita atravesaba todo el editorial, y a ella daba una respuesta compleja. Argumentaba que si bien era cierto que desde la izquierda existían amenazas para la democracia, también debía tenerse en cuenta a quienes esgrimían ese peligro para tratar de imponer dictaduras de derecha. No sin cierto hermetismo, el mencionado análisis terminaba: "El acecho de una dictadura de derecha suele encontrar paralelo en el acecho de una dictadura de izquierda"<sup>60</sup>. Obviamente, quienes preparaban la instauración de una dictadura de derecha eran los militares y civiles golpistas criticados en reiteradas ocasiones por el diario.

En marzo y abril de 1961 el partido de Frondizi triunfó en varias elecciones provinciales —Catamarca, Misiones, Santiago del Estero, Santa Fe y San Luis—: eso pareció constituir un aval para el gobierno. Contra toda previsión, el presidente pidió el 24 de abril la renuncia de Alsogaray y sus equipos. Roberto Alemann fue designado titular del Ministerio de Economía. Alemann no gozaba en esa época del reconocimiento y apoyo que años más tarde conseguiría en los sectores económicamente más poderosos del país, y tampoco su trayectoria anterior resultaba tranquilizadora para quienes se identificaban con el esquema liberal impulsado por el ministro saliente. Alemann había sido subsecretario de Economía bajo la gestión del ministro Donato del Carril, primer responsable de esa cartera durante la administración de Frondizi, y dejó ese cargo cuando el ministerio pasó a manos de Alsogaray. Ante la decisión presidencial de poner fin a la gestión de Alsogaray, *La Nación* planteó dos interrogantes harto significativos: "¿Predominio de lo político mirando hacia las elecciones de 1962? ¿Apertura hacia lo popular?"<sup>61</sup>. A Alsogaray le reconocía el mérito de haber llevado adelante una "política impopular", propia de quien tenía que pedir sacrificios a la población. Con Alemann se abría, según el matutino, una etapa de incertidumbre, en especial en materia de política monetaria, situación perturbadora para el empresariado, a quien perjudicaría un rebrote de la inflación<sup>62</sup>. Es interesante destacar que la designación de Alemann fue vista por ensayistas afechos a Frondizi como el inicio de una modificación sustancial de la política del gobierno, encaminada a recuperar las orientaciones anteriores a los 22 meses de Alsogaray<sup>63</sup>. En el mismo sentido, se interpretó el mensaje de

Frondizi al abrir las sesiones ordinarias de la legislatura en 1961 como una autocrítica por la relativa demora que impuso el interludio de Alsogaray a los objetivos del gobierno. La etapa que se inició iba a estar signada por múltiples situaciones de crisis que culminaron con la destitución del presidente.

La política internacional irrumpió nuevamente en la escena local cuando Fidel Castro declaró el carácter socialista de su revolución. *La Nación*, desde hacía ya un tiempo preocupada por la influencia soviética en el continente, consideró que al fin todo equívoco se había disipado. La comunidad hemisférica debía prepararse, en consecuencia, para afrontar los nuevos desafíos. Estimó carente de fundamento la tesis sostenida por la Cancillería argentina y plasmada en algunos acuerdos regionales, como el suscripto con Brasil en Uruguayana, según la cual podía haber diferencias entre la manera de abordar el problema cubano según se lo viera desde la perspectiva de los Estados Unidos o de los gobiernos latinoamericanos. Cerrar los lazos de solidaridad de todo el continente sin distinciones entre la nación del Norte y el resto de los países era, en su opinión, la estrategia más adecuada<sup>64</sup>. Los cambios cubanos provocaron una ola de protestas contra el gobierno de Frondizi; exigían abandonar la política conciliadora hacia Castro y los intentos de diferenciarse de los países del continente más decididamente anticomunistas. Por ejemplo, en los mismos días en que se publicaba el análisis editorial recién citado se constituía el Movimiento Argentino contra el Comunismo, encargado de pedir reiteradamente la ruptura de relaciones con el régimen cubano.

Aun cuando a partir del desplazamiento de Alsogaray el diario adoptó una posición más crítica frente a la gestión de Frondizi, mantuvo en todo momento su condena a los intentos de militares y civiles golpistas tendientes a alterar la continuidad institucional. Así, cuando a mediados de agosto de 1961 se produjo un nuevo conato militar, no escatimó calificativos para caracterizar a sus jefes y a sus proyectos. Nada, afirmaba, podía justificar ese tipo de acciones contra las autoridades constitucionales, y quienes las habían emprendido se equivocaban porque no comprendían que la sociedad no estaba dispuesta a respaldar tales aventuras, dado que "la legalidad es un bien que ya pertenece al pueblo y nadie se lo quitará con su consentimiento"<sup>65</sup>. En esa misma escena política agitada por los golpistas de derecha, *La Nación* analizaba y reprobaba con igual o mayor severidad la acción de quienes amenazaban el orden social desde posiciones de extrema izquierda. Diferenciaba al revolucionario de ideas izquierdistas de los civiles democráticos que se armaron

para derrocar a Perón; decía que los primeros actuaban contra la libertad y los segundos para recuperarla. Para ubicarlos con relación al contexto mundial, agregaba: "En medio de la guerra fría que vivimos (el revolucionario de izquierda) resulta un quintacolumnista y su delito es el de traición"<sup>66</sup>. La inquietud ante el posible desarrollo de organizaciones revolucionarias de izquierda, motivaba también reflexiones sobre los límites de la represión a ese tipo de acciones políticas. En relación con ese tema el matutino consideraba fundamental no olvidar que la coacción democrática se diferenciaba de la coacción de las dictaduras, porque se ejercía desde "dos supuestos fundamentales: la supremacía de la ley y el respeto por los derechos humanos (y porque consideraba) que 'antes' que el Estado y 'sobre' el Estado, existen valores espirituales y derechos personales que no se pueden vulnerar sin que el poder pierda su legitimidad (la coacción democrática) no puede negar el sistema so pretexto de defenderlo: debe acatar la superioridad de la ley sobre la voluntad del gobernante y respetar los principios básicos del derecho natural"<sup>67</sup>. Parece importante destacar que en la época de publicación de estas consideraciones sobre los límites de la represión, frecuentemente se formulaban denuncias por malos tratos y torturas a detenidos políticos acusados de ser terroristas peronistas o de izquierda.

A *La Nación* le preocupaba el posible retorno de Frondizi al proyecto frigerista o integracionista de la etapa anterior a Alsogaray. Según el razonamiento del diario, el presidente se equivocaba por no comprender que los golpistas habían sido rechazados por la opinión pública que quería paz y ley, pero eso no suponía un apoyo incondicionado a su gestión. La reforma del gabinete luego de la salida de Alsogaray había implicado, decía, una vuelta "a puestos claves de representantes del equipo integracionista que, por otra parte, no disimuló ya su abierta influencia sobre el gobierno"<sup>68</sup>. El avance de ese grupo fortalecía, según el matutino, los argumentos del golpismo sobre un supuesto "gobierno paralelo", en un momento en que los defensores no oficialistas de la legalidad estaban, además, un poco desmoralizados por el curso de los acontecimientos. Obviamente, el diario se ubicaba entre esta última categoría de actores. Además, en su óptica, otro factor de discordia era la influencia de los "integracionistas" o frigeristas sobre la política internacional, que inclinaban a posiciones cercanas al neutralismo. En general, los adversarios de la política exterior de Frondizi seguían con recelo sus contactos con jefes o representantes de otros gobiernos; su entrevista con el "Che" Guevara fue el *summum* de lo inaceptable. La decisión del gobierno de mantener relaciones diplomáticas con Cuba después

que muchos países de la región las habían interrumpido se convirtió en uno de los principales temas de descontento de los mencionados sectores. Los militares presionaban para imponer la ruptura inmediata con Cuba.

En medio de todas las tensiones que despertaba su política, Frondizi pronunció el llamado discurso de Paraná, donde reafirmó el principio de no intervención y de pleno respeto a la autodeterminación de los países de América Latina y fustigó las campañas anticomunistas desarrolladas a escala continental. El presidente lamentaba que en la Argentina hubiera algunos políticos, a los que caracterizaba como minoría de ofuscados, que se hacían eco de la propaganda anticomunista. El primer mandatario denunció, además, una especie de conspiración de grupos monopólicos internacionales contra la emancipación y el desarrollo latinoamericanos, y dijo que esos intereses ya habían sido combatidos por el presidente Roosevelt y denunciados por Eisenhower. *La Nación* juzgó inoportuno el mensaje de Frondizi, y aunque le reconoció el derecho a expresar libremente sus opiniones, estimó inadecuadas denuncias de un tenor tan grave como las formuladas en Paraná. Como posible explicación de las causas de esa alocución sugirió las tensiones que soportaba el gobierno y la proximidad de elecciones provinciales y legislativas<sup>69</sup>. La ruptura con Cuba se produjo días más tarde, conforme a las resoluciones de la conferencia de la OEA realizada en Punta del Este, aun cuando el representante argentino en esa reunión se abstuvo de votar la drástica medida. El diario manifestó su satisfacción por la interrupción de relaciones diplomáticas con el gobierno cubano, lamentó la demora para adoptar esa decisión e instó a multiplicar los esfuerzos para combatir al comunismo<sup>70</sup>. En esa reflexión se volvían a poner en tela de juicio los aspectos más globales de la política exterior de Frondizi, de la cual la cuestión cubana constituía sólo un aspecto. Posiblemente interesado en aliviar las críticas contra su política internacional, el gobierno aceptó las renunciaciones del subsecretario de Relaciones Exteriores, Oscar Camilión, y de uno de sus ministros plenipotenciarios, el embajador Arnaldo Musich. La interpretación que de ambas dimisiones hizo Mariano Grondona remitía a presiones de las fuerzas armadas<sup>71</sup>. Más ideológico y contundente, Arnaldo Musich, en el texto de su renuncia, entendió conveniente explicar su alejamiento como una consecuencia de la acción de los "grupos de presión constituidos por agnósticos (que) responden a la masonería internacional y al liberalismo laicista, materialista y ateo"<sup>72</sup>, cuyos objetivos eran, según aseveraba, bloquear el desarrollo nacional y limitar la soberanía política. En ese

heteróclito conjunto, aun cuando no identificaba a ningún actor preciso, Musich debía, seguramente, incluir a *La Nación*.

En ese contexto política y discursivamente crispado se preparaban las elecciones del 18 de marzo de 1962 para designar varios gobernadores provinciales y diputados nacionales, las últimas de la etapa frondizista. El día que se llevaban a cabo esos comicios, el matutino hizo una evaluación global de las estrategias de los tres partidos con más probabilidades de prevalecer: el oficialista, el radical del pueblo y el peronista, que concurría por primera vez después de 1955. Se abstenía de expresar cualquier preferencia entre el radicalismo del pueblo y el partido de Frondizi, pero marcaba sus habituales distancias con los "nostálgicos" del peronismo, a los que no parecía adjudicar demasiadas probabilidades de lograr éxito en las urnas. Estimaba que los peronistas hubieran preferido la proscripción, para conservar una mayor y más amenazadora potencialidad política. Del oficialismo decía que convocaba a un comicio sin proscripciones para ampliar su legitimidad, pero que la prueba podía haberse planteado con menos riesgos si se establecía previamente la representación proporcional para amortiguar el posible avance del peronismo<sup>73</sup>. Conocidos los veredictos de las urnas, el país se precipitó en la crisis política.

Para *La Nación* los votos obtenidos por el peronismo revelaban su carácter de minoría, pero en tanto existía una división de quienes se oponían a él, terminaba por imponerse. A su modo de ver, lo sucedido se explicaba por la "inmadurez política que a la sombra del fanatismo respiran los nostálgicos de la dictadura y la miopía revelada por el oficialismo en el manejo de las relaciones con los nostálgicos que administran esa nostalgia"<sup>74</sup>. El diario estimaba acertadas las intervenciones federales dispuestas a las provincias donde el peronismo había triunfado, pero eso no solucionaba, decía, la situación de deterioro del gobierno.Cuál podía ser la suerte de la democracia, se preguntaba, si se imponían quienes caracterizaba como la prolongación del estilo político imperante antes de 1955. Los partidarios de Frondizi, argüía, habían contribuido a mantener un equilibrio de fuerzas favorable al peronismo por haber pactado con él en múltiples ámbitos. En esa primera reflexión aconsejaba prudencia a todos aquellos que poseían poder para determinar las decisiones<sup>75</sup>. En ese mismo contexto de crisis irresuelta, seis días más tarde en otro análisis editorial evaluaba las posibles salidas con un lenguaje sin subterfugios ni circunloquios. Sostenía que las alternativas parecían ser tres: la renuncia del presidente y el consiguiente funcionamiento de la ley de acefalía; la instalación de un gobierno de

*facto*; la permanencia del presidente basada en un condicionamiento impuesto mediante negociaciones. El diario definía su posición con notable claridad: "Tenemos la obligación de exponer nuestro pesimismo en cuanto a las consecuencias de un nuevo ensayo que confiera a las fuerzas armadas los atributos funcionales de un partido político"<sup>76</sup>. Junto con ese explícito rechazo a un eventual gobierno militar, desechara la posibilidad de que el presidente consiguiera rehabilitar su investidura luego de una crisis tan prolongada. Desde esa perspectiva, estimaba que la designación del presidente de la Cámara de Senadores, José María Guido, como titular del Poder Ejecutivo, se convertía en la salida más aceptable y mejor encuadrable en la precaria legalidad vigente. Cabe recordar que el vicepresidente Alejandro Gómez había renunciado a fin de 1958. El comentario veía con inocultable alivio el desenlace civil de la patética coyuntura abierta el 18 de marzo de 1962, y en tanto aún la estabilidad no estaba asegurada temía que "en los días, las semanas y los meses venideros la perspectiva de un gobierno crudamente *de facto* estará a la vuelta de cada jornada"<sup>77</sup>, razón por la cual exhortaba a los políticos y a los militares a trabajar para evitar tal ruptura del orden constitucional y por el mantenimiento del gobierno de Guido. Al nuevo equipo gobernante se incorporó, secundando al ministro Rodolfo Martínez, Mariano Grondona, para ocupar la Subsecretaría de Interior, que pasó así a otear el panorama político desde una posición menos distante que su homónima sección. En la época, además de su pertenencia al diario, el novel funcionario se desempeñaba como profesor en la Escuela Superior de Guerra<sup>78</sup>. En su renuncia al matutino, Grondona afirmaba haber sido arrastrado por el torbellino político que había tratado de comprender desde su columna periodística. Pero la conjetura de *Entre Nosotros*, el *house organ* que le presagiaba un futuro más periodístico que político, se revelaría acertada. En poco tiempo, las relaciones de fuerza, ese obsesionante tema de la teoría política, le resultarían empíricamente adversas.

#### La Nación: 1958-1962

*En los cuatro años de la presidencia de Frondizi, La Nación elaboró una serie de reflexiones sobre la problemática nacional cuyos ejes principales, desde allí en adelante, sólo modificaría parcialmente. La reducción del intervencionismo económico del Estado, demanda ya antigua, ocupó en sus consideraciones un lugar central. La necesidad de limitar la capacidad y politización del sindicalismo fue un tema recurrente que se articulaba con las*

estrategias para contener el posible retorno del peronismo al poder. La cuestión social se vio en esos años tan imbricada con la política que resultaba imposible delimitar las ideas sobre una y otra; para las clases populares, la identidad social y política continuó teniendo como crisol al peronismo. El avance de algunos políticos de ideas más radicalizadas y toda la simbología asociada al mundo obrero, en un momento en que los dirigentes más moderados se hallaban en un segundo plano por la proscripción, le daban al movimiento encabezado por Perón características muy distintas a las de períodos más pacíficos. Muchas de las argumentaciones de los antiperonistas se orientaron hacia la construcción de amalgamas ideológicas que homologaban al peronismo con el comunismo. El *matutino* fue moderado en ese sentido, pero en ciertas ocasiones razonó como si creyera que ésa era tendencialmente una evolución probable del importante movimiento de masas argentino. Con igual inquietud siguió el desenvolvimiento de otros partidos políticos tradicionales y del mundo universitario, incorporando el peligro del incremento de la influencia del marxismo como una de sus preocupaciones permanentes. Sin embargo, en la medida que el problema de la prevención del comunismo se asociaba directamente con la aceptación de una mayor participación de los militares en la política, *La Nación* se mostró cauteloso ante el riesgo de un eventual avance de los ya bastante agitados hombres de armas. Sin ser antimilitarista el diario desconfiaba de los militares y juzgaba su politización como un factor negativo para el futuro del país.

El *matutino* prácticamente no depositaba expectativas en la reconstrucción de un partido conservador. Alentó, en cambio, el giro hacia el liberalismo del gobierno de Frondizi, y evidenció en ese aspecto un singular realismo en su análisis. La corporativización de la vida política y la ampliación del espacio de representación ocupado por las entidades empresarias no pareció preocupar mayormente al diario, que les brindó sus páginas a sus declaraciones e hizo eco de las mismas en los editoriales. En lo esencial, el *matutino* entendía al régimen democrático como aquel que cumple con la Constitución y respeta el derecho de las minorías. Esa concepción estaba construida como el reverso de la experiencia de la década peronista. Así conceptualizada, la necesidad de la defensa de la democracia se compatibilizaba perfectamente con la proscripción de un partido capaz de poner en peligro, a su juicio, los fundamentos de dicho régimen político. Esta particular visión de la democracia no era exclusiva del *matutino*, sino que la compartía con otros actores, algunos mucho más extremistas en sus conclusiones y medios para garantizar aquello que preferían caracterizar como un modo de vida y no simplemente una manera

de regulación del sistema político. No es complejo percibir las dificultades para compatibilizar esa definición de la democracia con la idea de la exclusión de los militares de la vida política.

En el período de Frondizi, la estructura socioeconómica argentina inició una modernización notable en algunas áreas, lo que generó nuevos actores y nuevos conflictos. Ese proceso trunco de cambios, algunos de ellos muy profundos, sumó, a su vez, factores hasta entonces inexistentes a la situación de ingobernabilidad. Definir políticas económicas en la Argentina posterior a Frondizi resultó un problema mucho más complejo que en épocas anteriores. Los nuevos actores dispusieron de un considerable poder de veto, y asegurar la reproducción de la estructura económica supuso encontrar equilibrios entre más intereses divergentes entre sí. La intervención del Estado se hizo más necesaria y, al mismo tiempo, más cuestionadas fueron sus decisiones por quienes se consideraron perjudicados o postergados en sus demandas.

## NOTAS

<sup>1</sup> *La Nación*, 10-5-1958, pág. 4.

<sup>2</sup> *La Nación*, 30-5-1958, pág. 6.

<sup>3</sup> *La Nación*, 22-6-1958, pág. 6.

<sup>4</sup> *La Nación*, 24-6-1958, pág. 6.

<sup>5</sup> *La Nación*, 23-7-1958, pág. 6.

<sup>6</sup> *La Nación*, 28-8-1958, pág. 6.

<sup>7</sup> *La Nación*, 24-7-1958, pág. 6; 27-7-1958, pág. 6; 30-7-1958, pág. 6.

<sup>8</sup> *La Nación*, 8-10-1958, pág. 6.

<sup>9</sup> *La Nación*, 17-10-1958, pág. 6.

<sup>10</sup> *La Nación*, 13-11-1958, pág. 6.

<sup>11</sup> *La Nación*, 31-12-1958, pág. 6.

<sup>12</sup> *La Nación*, 21-10-1958, pág. 6.

<sup>13</sup> *La Nación*, 2-1-1959, pág. 4.

<sup>14</sup> *La Nación*, 24-2-1959, pág. 4.

<sup>15</sup> *Tres revoluciones (los últimos veinticinco años)*, Emilio Perrot, Buenos Aires, 1959, pág. 61.

<sup>16</sup> *Ibid.*, págs. 67-68.

<sup>17</sup> *Ibid.*, pág. 71.

<sup>18</sup> *La Nación*, 28-2-1959, pág. 4.

<sup>19</sup> *La Nación*, 21-4-1959, pág. 4.

<sup>20</sup> *La Nación*, 24-4-1959, pág. 4.

<sup>21</sup> *La Nación*, 24-3-1959, pág. 4.

<sup>22</sup> *La Nación*, 5-5-1959, pág. 4.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> *La Nación*, 23-6-1959, pág. 6.

<sup>26</sup> Nicolás Babini: Ob. cit., pág. 280.

<sup>27</sup> *La Nación*, 25-6-1959, pág. 6; 30-6-1959, pág. 6.

<sup>28</sup> *La Nación*, 10-7-1959, pág. 6; 20-6-1959, pág. 6.

<sup>29</sup> *La Nación*, 25-7-1959, pág. 4.

<sup>30</sup> *La Nación*, 29-7-1959, pág. 6.

<sup>31</sup> *La Nación*, 30-7-1959, pág. 6; 6-6-1959, pág. 6.

<sup>32</sup> *Entre Nosotros*, octubre de 1960. Año VI, N° 67, pág. 2.

<sup>33</sup> *La Nación*, 15-9-1959, pág. 6.

<sup>34</sup> *La Nación*, 25-9-1959, pág. 6.

<sup>35</sup> *La Nación*, 3-10-1959, pág. 6.

<sup>36</sup> *La Nación*, 21-11-1959, pág. 4.

<sup>37</sup> *La Nación*, 5-9-1959, pág. 4.

<sup>38</sup> *La Nación*, 8-9-1959, pág. 6.

<sup>39</sup> *La Nación*, 19-12-1959, pág. 6.

<sup>40</sup> Rodolfo Walsh: *Caso Satanowsky*, Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1986.

<sup>41</sup> *La Nación*, 28-10-1959, pág. 6.

<sup>42</sup> *La Tierra*, órgano de la Federación Agraria Argentina, 3-10-1959, reproducido por José Antonio Otero: *Los terratenientes derrotaron al gobernador Alende*, Instituto Amigos del Libro Argentino, Buenos Aires, 1965, pág. 275.

<sup>43</sup> *La Nación*, 6-1-1960, pág. 4. Una opinión exactamente inversa a la de *La Nación* era sostenida por quienes compartían las ideas de la Federación Agraria Argentina. José Antonio Otero, para sintetizar su visión de lo actuado por el Senado provincial, afirmó que con sus correcciones había "pulverizado" el proyecto. Otero: Ob. cit., págs. 284-286.

<sup>44</sup> *La Nación*, 15-3-1960, pág. 6.

<sup>45</sup> *La Nación*, 27-3-1960, pág. 6.

<sup>46</sup> *La Nación*, 29-3-1960, pág. 6.

<sup>47</sup> *La Nación*, 14-4-1960, pág. 6.

<sup>48</sup> *La Nación*, 3-6-1960, pág. 6.

<sup>49</sup> *La Nación*, 13-7-1960, pág. 6.

<sup>50</sup> *La Nación*, 16-7-1960, pág. 6.

<sup>51</sup> *La Nación*, 23-7-1960, pág. 2.

<sup>52</sup> *La Nación*, 26-7-60, pág. 6.

<sup>53</sup> *La Nación*, 29-8-1960, pág. 4.

<sup>54</sup> *La Nación*, 29-10-1960, pág. 6.

<sup>55</sup> *La Nación*, 5-1-1961, pág. 6.

<sup>56</sup> *La Nación*, 7-2-1961, Panorama Político, pág. 6.

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> *La Nación*, 7-2-1961, pág. 6.

<sup>59</sup> *La Nación*, 14-2-1961, pág. 6.

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> *La Nación*, 29-4-1961, pág. 6.

<sup>62</sup> *La Nación*, 16-5-1961, pág. 6.

<sup>63</sup> Nelly Casas: *Frondizi: una historia de política y soledad*, Editorial La Bastilla, Buenos Aires, 1973, pág. 93. Ramón Prieto: *Treinta años de vida argentina*, Sudamericana, Buenos Aires, 1977, pág. 217.

<sup>64</sup> *La Nación*, 9-5-1961, pág. 6.

<sup>65</sup> *La Nación*, 13-8-1961, pág. 6.

<sup>66</sup> *La Nación*, 30-9-1961, pág. 6.

<sup>67</sup> *La Nación*, 20-10-1961, pág. 6.

<sup>68</sup> *La Nación*, 26-10-1961, pág. 6.

<sup>69</sup> *La Nación*, 6-2-1962, pág. 6.

<sup>70</sup> *La Nación*, 10-2-1962, pág. 6.

<sup>71</sup> *La Nación*, 18-2-1962, Panorama Político, pág. 6.

<sup>72</sup> *La Nación*, 16-2-1962, "Texto de la renuncia del doctor Musich", pág. 2.

<sup>73</sup> *La Nación*, 18-3-1962, pág. 6.

<sup>74</sup> *La Nación*, 20-3-1962, pág. 6.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *La Nación*, 26-3-1962, pág. 6.

<sup>77</sup> *La Nación*, 30-3-1962, pág. 6.

<sup>78</sup> *La Nación*, 3-4-1962, pág. 4.

## XI

# Guido e Illia: gobiernos sin legitimidad e interpretaciones en clave trágica

Al comenzar la gestión de Guido el diario se mostró preocupado por todo lo que podía deteriorar aún más el fisurado andamiaje institucional. En reiteradas ocasiones llamó a la reflexión a los más diversos actores políticos, a fin de recordarles el riesgo de llevar al país a un "salto al vacío", eufemística expresión para aludir al peligro de control total del poder por los militares. Con el objeto de evitar esa alternativa requirió a las autoridades, a los políticos y a las personas que podían influir sobre el comportamiento de las fuerzas armadas, que recapacitaran sobre cada uno de sus pasos, pues la gravedad de la situación no daba para actitudes desatinadas. La opinión editorial coincidió durante las primeras semanas del gobierno de Guido con la línea impulsada por el ministro del Interior, Rodolfo Martínez, y el subsecretario de esa cartera, Mariano Grondona. La orientación de ambos altos funcionarios era favorable a mantener al máximo las formas de la continuidad institucional, resistiendo las presiones de los sectores más extremistas de las fuerzas armadas, que reclamaban la intervención de las provincias, la anulación de todos los resultados electorales y la disolución del Congreso. En esa misma etapa liminar, *La Nación* también expresó satisfacción por la designación de Federico Pinedo como ministro de Economía, aun cuando su paso por ese cargo fue fugaz y no llegó a proponer un programa para el área<sup>1</sup>. Como resultado de la creciente influencia de los sectores militares más propensos a imponer medidas autoritarias, Guido recompuso su gabinete; cambió, entre otros, los equipos responsables de Interior y de Economía. El matutino recomendaba mesura y recibió con beneplácito algunas de las nuevas designaciones ministeriales, especialmente la de Álvaro Alsogaray en Economía y la de Bonifacio del Carril en Relaciones Exteriores.

Cuando el gobierno de Guido declaró a los partidos en estado de asamblea y estableció la caducidad de sus respectivas autoridades, el diario consideró que esa medida atentaba contra la rápida democratización del país. Los partidos podían no haber cumplido adecuadamente su papel, opinaba, pero un régimen democrático suponía la existencia y el desarrollo de ese tipo de organizaciones, y las disposiciones que limitaban sus libertades repercutirían negativamente sobre la futura normalización de las instituciones. La creencia en la importancia para la democracia del sistema de partidos llevaba a *La Nación* a distanciarse de las medidas del gobierno, crecientemente condicionado por el sector que, pocos meses después, sería conocido con la denominación de "colorados"<sup>2</sup>.

Si bien el nombramiento de Alsogaray satisfizo en un primer momento a los sectores económicos más importantes y abrió en ellos una expectativa positiva, actitud compartida por el diario, a poco de iniciada su gestión el ministro tomó medidas que parecieron defraudarlos. Posiblemente, para esos sectores Alsogaray había sido, en oportunidad de su anterior paso por la cartera económica, un hombre en quien se podía confiar, comparado con los frondizistas y frigeristas, que tantas inquietudes generaban. En esos tiempos, en comparación con mediados de 1962, la situación económica era mejor. En esta segunda experiencia, Alsogaray debió actuar frente a un contexto de crisis de la producción y fiscal. Sus medidas le granjearon la oposición de los mismos sectores que antes lo habían apoyado. Así, si tal como había ocurrido en su precedente paso por el poder, su política despertó otra vez la protesta de los sindicatos y de los sectores de menores ingresos, ahora se sumó a ese descontento, aunque con fundamentaciones distintas, el del gran empresariado, y en particular el dedicado a actividades rurales. Frente a la implantación de retenciones a las exportaciones de origen agrario surgieron inmediatamente las quejas de los propietarios del sector, que veían en esa disposición el signo evidente de un política contraria a sus intereses y perjudicial para el país en su conjunto. El matutino coincidió con esa opinión: era "lamentable que se haya insistido una vez más en tratar de ajustar el presupuesto a expensas del productor agrario. Durante el largo período peronista el campo fue descapitalizado con las diferencias de cambio"<sup>3</sup>. El mayor reproche que hacía al gobierno era que adoptaba la vía fácil de extraer por ese medio una parte del excedente que pertenecía a los productores rurales, en lugar de disminuir sus gastos. Al mismo tiempo, el matutino explicaba el lugar que se atribuía a sí mismo: estando el Congreso clausurado, correspondía a la prensa asumir aún con más rigor su función de

analizar y comentar todo lo referido a política impositiva y al manejo de recursos públicos.

La situación de enfrentamiento armado entre azules y colorados marcó el punto de transición entre dos etapas diferentes en el gobierno de Guido. Con el triunfo de los azules en septiembre de 1962, volvió a avanzar la línea militar con mayor vocación negociadora hacia los diferentes actores del sistema político. Las ideas de ese sector quedaron resumidas en el denominado Comunicado 150, redactado por un equipo en el que participaba Mariano Grondona. Una de las consecuencias inmediatas de la victoria del bando azul fue la reestructuración del gabinete de Guido, con la salida de los ministros más próximos al sector derrotado. Álvaro Alsogaray no sólo conservó su cargo: en un primer momento amplió su influencia al ocupar interinamente el Ministerio del Interior. Desde esa doble investidura, a principios de octubre, empleó la cadena nacional de radio y televisión para pronunciar una alocución sobre las causas del reciente conflicto entre facciones castrenses. Con la ostensible intención de justificar su pertenencia al equipo gubernamental recién cuestionado por el sector militar triunfante, Alsogaray realizó una de sus más singulares incursiones en la reflexión política. Sostuvo que el gobierno estuvo condicionado hasta el momento de los enfrentamientos por el sector colorado, el cual había logrado imponer proyectos y medidas contrarios a las intenciones originarias. Aseveró, además, que entre los golpistas había militares y civiles. Entre estos últimos se hallaban, según el ministro, parte de los dirigentes de las organizaciones empresarias que cuestionaban su política económica, quienes usaban la prensa para incitar a la ruptura institucional a los militares de mentalidad autoritaria<sup>4</sup>. El juicio de *La Nación* sobre esta disertación fue totalmente desfavorable. El diario, que coincidía con los militares azules, decía que Alsogaray se había extralimitado en sus atribuciones al hacer el mencionado balance. Lo descalificaba para referirse a la situación autoritaria creada por la presión "colorada", ya que él se manejaba de ese mismo modo, aseveraba, cuando fijaba su política impositiva aprovechando la ausencia del contralor del Congreso. Destacaba lo que entendía como un guiño favorable al peronismo, contenido en juicios excesivamente benevolentes sobre algunos dirigentes de la conducción local de dicha fuerza política. En fin, a todas esas recriminaciones sumaba una observación sobre lo inoportuno de las palabras de Alsogaray, pronunciadas casi en el mismo momento de la designación del nuevo ministro del Interior, Rodolfo Martínez, quien volvía al cargo ocupado en las primeras semanas del gobierno de Guido.

del cual había sido desplazado por la presión de los "colorados"<sup>5</sup>. Por su parte, Mariano Grondona fue designado nuevamente subsecretario del Interior.

La política económica de Alsogaray siguió suscitando la disconformidad de los diversos medios empresarios y el matutino se encargó, en varias oportunidades, de reflejarlo. En el plano fiscal, llegó a caracterizar la situación como de "dictadura impositiva"<sup>6</sup>, y trató de convencer a las autoridades de modificar su política, so riesgo de empeorar aún más la crisis. La animadversión del matutino no se limitaba sólo a la política económica: expresaba, además, su disgusto por el estilo discursivo de Alsogaray. Con inocultable irritación, *La Nación* decía que "el ministro de Economía juzga siempre con favor el fruto de sus esfuerzos y no admite, sino por interferencia de la pasión política o por falta de seriedad o por ignorancia de la solidaridad social, que se opine de otro modo"<sup>7</sup>. Entre las tantas medidas del titular de la cartera económica que criticaba, se encontraba la emisión y colocación de los Bonos del Empréstito 9 de Julio. Al respecto, luego de formular un amplio y diferenciado cúmulo de objeciones, sostenía: "Para circunscribirnos a los bonos del Empréstito, es visible que están entregando a los empleados y a los jubilados a la usura"<sup>8</sup>. A las críticas al ministro provenientes de las mayores entidades de representación corporativa del empresariado y de las organizaciones sindicales, se habían sumado las expresiones de disconformidad de distintas personalidades políticas que adquirieron una cierta relevancia en la escena pública adhiriendo a los principios defendidos por el sector azul de las fuerzas armadas. Tal fue el caso, entre otros, de Juan José Güiraldes, comodoro en situación de retiro, que en la época exigía el alejamiento de Alsogaray como condición necesaria para no desvirtuar, en la política y en la economía, el significado del éxito de la facción militar azul de septiembre de 1962<sup>9</sup>. La conducción del Ejército, controlada por los azules, coincidía en objetar la línea del equipo alsogarayista. Especial repercusión alcanzó un radiograma firmado por el general Juan Carlos Onganía, originariamente de carácter interno del arma pero que trascendió a los medios de prensa, referente a las consecuencias sociales y políticas negativas que estaban derivando del manejo de la economía. En ese contexto extremadamente desfavorable, Alsogaray dimitió en los primeros días de diciembre de 1962. Su reemplazante, Eustaquio Méndez Delfino, era un hombre de empresa y economista de prolongada trayectoria en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Luego de la crisis militar de septiembre, y especialmente con el retorno de Martínez y Grondona al Ministerio del Interior, el

“azulismo” había comenzado a buscar su propia fórmula política para asegurar una transición sin riesgo a las regulaciones democráticas. La creación de un frente o coalición de partidos fue una estrategia encarada con singular audacia. Poco a poco se hizo notorio que la aspiración mayor del ministro Martínez y su equipo era restablecer la vida institucional tras la formación de un frente cuyo candidato a la presidencia de la República fuera el general Onganía. Los promotores de ese proyecto estimaban necesario el apoyo de Perón y de la dirigencia peronista y, también, el de las restantes fuerzas políticas. La estrategia del Ministerio del Interior implicaba un reconocimiento del peronismo que podía inquietar a los sectores que dudaban de la vocación democrática de dicha fuerza política. *La Nación* se contó entre quienes no ocultaron su preocupación cuando el ministro convocó a la unión de todos los partidos políticos, llamamiento equivalente a reintroducir en el juego democrático a los dirigentes peronistas. De ellos el matutino aseveraba que “aspiraban a recorrer por segunda vez el tramo 1945-1955 (y eran) el sector que menos esfuerzo realizó por conquistar el derecho a una inclusión rehabilitadora”<sup>10</sup>. Para el diario, el esquema de integración elaborado por Martínez y Grondona era excesivamente idealista, pero no lo suficientemente sólido. De todos modos, el derrumbe llegó antes de lo previsto, cuando Miguel Ángel Zavala Ortiz, una de las personalidades más conocidas de la Unión Cívica Radical del Pueblo, declaró que el ministro Martínez le había propuesto la candidatura de vicepresidente acompañando al general Onganía. Esa denuncia precipitó la caída de Martínez. El diario analizó la fallida experiencia, poniendo especial énfasis en la imposibilidad de buscar un acuerdo como el intentado con los peronistas. En su opinión la mejor salida para la situación del país era una coincidencia de todos los sectores de filiación contraria al peronismo<sup>11</sup>.

Su rechazo al peronismo no le impidió a *La Nación* manifestar su neta oposición a la sublevación colorada de abril de 1963, uno de cuyos jefes fue el almirante Rojas, figura consular de los partidarios de la denominada Revolución Libertadora. El diario llamaba a todos los actores de la vida política nacional a actuar con sinceridad. Los políticos no podían, a su entender, ignorar que las fuerzas armadas nunca dejarían volver a establecer un régimen como el peronista. Pero estimaba igualmente indispensable que aquéllas aclararan si habían “perdido confianza en la democracia, en la democracia que aquí puede hacerse”<sup>12</sup>. Sin ese sinceramiento, continuaba textualmente la argumentación, el país seguiría de golpe en golpe y enfermo de añoranzas. La idea

de que se estaba en presencia de sectores castrenses con vocación despótica, aun cuando hubieran sido momentáneamente derrotados, impulsaba al matutino a invitar a todos a la meditación política, recordándoles que esos experimentos autoritarios siempre terminaban conduciendo a una explosiva acumulación de conflictos y violencias. Sin embargo cabe destacar que junto a esas interpelaciones en demanda de cordura, el matutino no proponía ninguna alternativa concreta. Similar desorientación revelaban los comportamientos de los militares azules que, una vez alcanzada su victoria sobre los colorados, comenzaron, al decir de muchos analistas de la época, a tornarse violetas. El general Enrique Rauch, desde la conducción del Ministerio del Interior, limitaba las libertades públicas y lanzaba una persecución contra los frigeristas, caracterizándolos de "marxistas-leninistas". El diario criticó editorialmente al impetuoso ministro, destacando la necesidad de proceder de un modo más acorde con el orden jurídico<sup>13</sup>. Entre los perseguidos por "marxistas-leninistas" se hallaban figuras de actuación tan dispar como Arnaldo Musich, Rodolfo Puiggrós y Ernesto Sabato. Lejos de amilanarse por las objeciones a sus iniciativas, Rauch hizo público un informe donde incursionaba en la teoría económica, condenaba al liberalismo, y pedía la captura de varios hombres de negocios a quienes imputaba delitos económicos y peculados diversos. En muy pocos días renunció a su cargo y fue sustituido por el general Osiris Villegas, otro de los militares azules más caracterizados. Como para aventar cualquier duda sobre las modificaciones producidas en las ideas de la facción azul, el nuevo ministro limitó por decreto las posibilidades de los peronistas a aspirar electoralmente a posiciones ejecutivas, en el orden nacional o provincial; se los autorizaba, en cambio, a acceder a los poderes legislativos. La justificación de esa medida era de naturaleza pedagógica: en el juego parlamentario los peronistas aprenderían los usos propios del ejercicio de la democracia. Al reflexionar sobre esa particular decisión, el diario expresó su conformidad, pero señaló la dificultad para acordarle legitimidad teórica desde el punto de vista del pensamiento democrático. Al respecto sostuvo: "No podrá negarse la inadecuación del método elegido con un orden jurídico normal. Trátase, en efecto, de una medida estrictamente política en cuyo abono se vuelve a invocar la emergencia nacional. Pero júzgase que la subversión profunda introducida en el país por una década de totalitarismo y un lustro de 'integración', torna indispensable este paso que se considera transición inevitable"<sup>14</sup>. En nombre de la necesidad política cabía, a su juicio, aceptar un eclipse momentáneo del pleno imperio del derecho.

En la víspera del acto electoral *La Nación* pasó revista a todo lo sucedido desde la asunción de Guido y a las limitaciones impuestas al libre juego político y consideró que todo lo acontecido era suficiente para condenar las elecciones e impugnar sus posibles resultados. Sin embargo, estimaba que lo importante era el retorno a la Constitución y haber evitado el establecimiento de un gobierno de fuerza, eventualidad, en su opinión, por nadie deseada<sup>15</sup>. Los peronistas, los frondizistas y un sector del conservadorismo habían llamado a votar en blanco. El triunfo de la Unión Cívica Radical del Pueblo, con alrededor del 25% de los sufragios, auguraba el inicio de una etapa compleja. Al evaluar los resultados el matutino formuló una apreciación cuyos destinatarios eran los peronistas y los dirigentes del radicalismo del pueblo. Los votos en blanco, dijo, fueron lo suficientemente poco numerosos como para destruir "la absurda pretensión de confundir a un partido con el pueblo todo, como era absurda la de otro sector que pretendió alguna vez ser la Nación misma"<sup>16</sup>. Con esa afirmación, para nada hermética, el diario parecía celebrar la inexistencia de partidos susceptibles de arrogarse representaciones mayoritarias. Para consagrar su binomio Arturo Illia-Carlos H. Perette en el Colegio Electoral, el radicalismo del pueblo necesitó el apoyo de otras fuerzas políticas. *La Nación* consideró que posiblemente se abriría una nueva etapa en la vida del país. Para saldar la fase en curso, sugirió a las autoridades la sanción de una ley de amnistía para facilitar la acción de sus sucesores. En especial, se refirió a la necesidad de poner fin a las causas pendientes de los militares colorados<sup>17</sup>. Los problemas económicos que recibiría el nuevo gobierno fueron abordados en otro análisis donde se expresaba cierto pesar por los escasos frutos de la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz, último ministro de Guido responsable de tal área<sup>18</sup>. Pero el pesimismo no era excesivo en materia económica. Como siempre lo había hecho, el matutino recordaba las potencialidades argentinas y su posible movilización con una adecuada gestión gubernamental respetuosa de los intereses de los principales sectores propietarios. La oportunidad de exponer nuevamente ese tipo de propuestas le fue brindada en ocasión de la publicación de la memoria de la Sociedad Rural Argentina correspondiente al periodo 1962-1963. El editorial coincidía con la apreciación de la corporación representativa de la gran burguesía agraria, que caracterizaba como grave la situación económica. Resumía las principales estrategias y demandas formuladas por la entidad ruralista, y señalaba a Illia y sus equipos que del análisis de la Sociedad Rural Argentina surgía "una sana orientación para una futura empresa de gobier-

no, tan pronto como éste requiera colaboración de los organismos respectivos”<sup>19</sup>. La sugerencia no encontró mayores ecos en el radicalismo, y los conflictos con los intereses rurales marcaron buena parte de su gestión de gobierno.

La Nación consideró que con el advenimiento al gobierno del presidente Illia podía abrirse una etapa de normalización institucional y clausurar así el agitado período iniciado con la destitución de Frondizi. El día que asumió el nuevo mandatario, el diario, que caracterizaba a Guido como presidente *de facto*, expresó sus deseos favorables al éxito de la nueva administración radical. Para alcanzar esa meta, decía, las nuevas autoridades no debían seguir *slogans* o formular delaraciones genéricas. Expresamente los invitaba a abandonar las “teorías seductoras” que a la larga, aseveraba, impedían trabajar por el bien común<sup>20</sup>. Como algunos miembros del gabinete del presidente Illia habían participado en el gobierno de Aramburu, el matutino debió tener cierta confianza en ellos. Pero la trayectoria del radicalismo y sus propuestas electorales, así como el giro un tanto “antiimperialista” que tomó el discurso de la UCR del Pueblo en el período de oposición a Frondizi, debían ser factores aptos para provocar su recelo.

Las dudas motivadas por el radicalismo comenzaron a despejarse en los primeros meses de su gobierno. En realidad, transcurrido el primer semestre de la presidencia de Illia ya era claro el rumbo de sus políticas económicas, y éstas fueron sistemáticamente criticadas por el matutino. La anulación de los contratos petroleros suscritos durante el período de Frondizi había sido una de las propuestas más agitadas por el radicalismo del pueblo en la campaña electoral. Cuando esa medida fue adoptada, el diario objetó algunos aspectos formales de la misma, sin descalificarla totalmente. Con suma cautela, aconsejaba a las autoridades no proceder de modo que acarreará reclamos judiciales de las empresas afectadas y evitar acciones espectaculares motivadas por la búsqueda de réditos políticos. El matutino percibía el carácter simbólico dado por el gobierno a esa anulación de los contratos e ironizaba sobre todas las connotaciones ideológicas asociadas al tema petrolero en nuestro país, en tanto el mundo vivía, según decía, en la edad atómica, y nadie en otras latitudes le adjudicaba tanta significación política<sup>21</sup>. Pocos días más tarde, a propósito de la decisión del gobierno de restringir las importaciones de determinados productos para disponer internamente de más divisas y así tratar de estabilizar el valor del dólar, en el análisis editorial consideró que esa medida deterioraría la imagen de la Argentina frente a los empresarios de otros

países. Al respecto planteó la hipótesis de que ese tipo de disposiciones mostraría a los inversores extranjeros una falta de estabilidad jurídica, y equiparaba esa situación "a la carencia de estabilidad política predominante hasta el pasado 12 de octubre"<sup>22</sup>. Un nuevo motivo de crítica, y aún más importante, surgió con el proyecto de reforma del régimen tributario agrario, auspiciado desde la Secretaría de Agricultura, que proponía establecer un impuesto a la renta normal potencial de la tierra. Las objeciones remitían a diversos planos. En el dominio jurídico consideraba que tal innovación impositiva contrariaba la Constitución. En lo referente a la factibilidad de su aplicación práctica, la ponía abiertamente en duda. Los daños que implicaría para los propietarios rurales de tierras bajo el régimen de arrendamientos legalmente prorrogados le parecían innecesarios. Por otra parte, se preguntaba si la determinación de la renta potencial no significaba un retaceo de la libertad de trabajo, en tanto condicionaba desde el poder político el modo de trabajar con que los productores debían operar en sus propiedades. La reflexión finalizaba diciendo que el propósito buscado quizás fuera bueno, pero se podían buscar otros medios para alcanzarlo. De allí que sugiriera al Congreso una evaluación cautelosa del proyecto de marras "sin dejarse impresionar por la belleza teórica de (sus) ingeniosas construcciones"<sup>23</sup>. En la época, la Sociedad Rural Argentina se opuso abiertamente al proyecto de reforma tributaria, lo que generó una serie de conflictos con el gobierno radical que se extenderían, también, a otros aspectos de su política.

A los temas mencionados se sumaron muy pronto otros que despertaron idénticas o mayores disconformidades del diario. La denominada Ley de Abastecimiento fue considerada en sus análisis como la puesta en marcha de mecanismos que sólo beneficiarían a las burocracias encargadas de su aplicación, pero perjudicarían al conjunto de la sociedad. Era mejor, decía, confiar en la libertad de empresa, ya que las regulaciones de precios llevaban indefectiblemente al desabastecimiento, a los mercados negros y a la corrupción de los funcionarios<sup>24</sup>. Las medidas del Banco Central para controlar el cambio de divisas fueron vistas como una extrema intromisión de los poderes públicos en el movimiento de la economía. Pero, más allá de los aspectos puntuales objetados, comparaba la iniciativa con las del gobierno peronista y decía: "Muchos de los actuales orientadores de la política económica colaboraron con los regímenes de cambio anteriores a 1955 o comparten sus principios..."<sup>25</sup>. Esa estrategia analítica para oponerse a medidas o proyectos del gobierno de Illia mediante su equiparación con otras del período peronista fue, también,

empleada para criticar el establecimiento legal del salario mínimo, vital y móvil. Cuando el Poder Ejecutivo presentó dicho proyecto, *La Nación* recordó que en 1945 el gobierno militar había favorecido la campaña electoral de Perón con una disposición similar. Pero, agregaba, una vez instalado en el poder Perón no había aplicado ese decreto y con el tiempo se terminó preocupando por el aumento de la productividad del trabajo como condición para la mejora de los salarios. Para el matutino, la propuesta del gobierno radical iba a tener como consecuencia directa agudizar la inflación en perjuicio de los sectores de ingresos fijos <sup>26</sup>.

El deterioro del clima social fue una de las características del año 1964, marcado por el denominado "plan de lucha" de la CGT. El diario caracterizó en repetidas ocasiones las protestas sindicales como parte de una estrategia subversiva cuya finalidad iba más allá de la mera reivindicación gremial. Frente a esa situación, reprochaba a las autoridades nacionales no actuar con el debido rigor. Las ocupaciones de fábricas y la toma de los propietarios o ejecutivos como rehenes configuraban, en su opinión, la muestra más evidente de la dimensión subversiva de los acontecimientos y de la pérdida de autoridad del gobierno. El diario consideraba lógico esperar que las direcciones sindicales fueran desobedecidas por la "clase trabajadora, que ya está volviendo del engaño en que se ha pretendido mantenerla, y sabrá conservar la cordura necesaria en hora tan grave para la vida argentina"<sup>27</sup>. Como las movilizaciones sindicales continuaron y fueron apoyadas por los asalariados, el matutino reclamó al gobierno no dejarse sobrepasar por la agitación social y enfrentarla más decididamente. Para despejar dudas sobre posibles contradicciones en su pensamiento político en virtud de ese llamado a la intervención de los poderes públicos en la esfera de las relaciones sociales, el matutino aclaraba que no se trataba de esperar todo del Estado, sino de exigir a éste capacidad para asegurar el orden público y la tranquilidad. Los sindicatos peronistas, en su opinión, actuaban como apéndice de un partido político y propendían al derrocamiento del gobierno constitucional <sup>28</sup>. La situación así analizada le parecía aún más grave a causa de la dificultad del gobierno para implementar una política más enérgica en defensa de la legalidad.

Las ideas del matutino, a mediados de 1964, parecían encontrarse frente a un dilema: los peronistas amenazaban al gobierno y su estabilidad y éste realizaba políticas semejantes a las realizadas por Perón. Luego, defender a Illia era contribuir a mantener un estilo de política semejante al intervencionismo peronista. Los radicales eran, a juicio del diario, favorables al inter-

vencionismo estatal en la economía por diferentes causas. Por un lado, tenían interés en ganar sufragios, y consideraban a las empresas públicas como "un poderoso recurso para cumplir con los compromisos contraídos durante las campañas electorales, pues permite ubicar a los adherentes"<sup>29</sup>. A esta explicación de tipo *spoils system*, agregaba otra relacionada con la incoherencia de los equipos gubernamentales que, aun comprendiendo los perjuicios del estatismo, no podían desprenderse de antiguos *slogans*. En algunos casos, no faltó el razonamiento cáustico para criticar a los altos funcionarios de la administración de Illia que negaban adherir a concepciones intervencionistas. A propósito de un discurso del ministro de Economía, Eugenio Blanco, donde rechazaba las imputaciones de dirigismo, decía: "Cabe captar la sinceridad de su negativa, sin que ello implique lo bien fundado de ésta (...) es posible, que así como el personaje de Molière hablaba en prosa sin saberlo, haya en el gobierno quienes llevan una política dirigista sin advertir su verdadera índole"<sup>30</sup>. Pero más allá de toda ironía, aconsejaba al ministro escuchar los recientes consejos de la Sociedad Rural Argentina, en pro del retorno a la libertad de mercado.

Los "hombres del campo", como solía denominar el diario a los grandes propietarios representados por la Sociedad Rural Argentina, continuaban en esa época preocupados por las ideas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería sobre la conveniencia de establecer el ya aludido impuesto a la renta normal potencial de la tierra. El matutino también había manifestado su disconformidad con esa eventual nueva carga tributaria. Detrás de los cambios que se querían introducir en el régimen impositivo rural no era difícil discernir, decía, una visión negativa del modo en que los "hombres del campo" realizaban la explotación de sus establecimientos. En ese contexto, el matutino creyó conveniente formular una reflexión sobre el origen de la propiedad rural en el país con evidente intención encomiástica: "Debemos, pues, repetir que la riqueza argentina no se dio como un bíblico maná, y aclaramos que hubo, en lo que cabía en aquellos tiempos, una justa distribución de esos bienes sobre la base de estructuras sociales que no eran ni mejores ni peores que las de otras partes"<sup>31</sup>. Argumentaba que casi la totalidad de los propietarios rurales habían iniciado sus empresas carentes de toda fortuna y con el buen ánimo como único caudal. Casi simultáneamente con la publicación de esas consideraciones, la CGT, como parte de su "plan de lucha", editaba el libro *Jornadas Agrarias*, donde sistematizaba un nutrido conjunto de críticas a la estructura rural argentina. Dicho libro compilaba el resultado de las reuniones

realizadas por la CGT sobre el tema agrario con la participación de dirigentes políticos, sindicales, cooperativistas, intelectuales y expertos. En su prólogo, el secretario general de la entidad sindical, José Alonso, realizaba una apretada presentación de las jornadas y condenaba, por atribuirle un carácter injusto e improductivo, la estructura vigente de distribución de la tierra; reclamaba la realización de una reforma agraria, la planificación de la producción y comercialización del sector y el estímulo a la cooperativización<sup>32</sup>. En su participación en esas jornadas, Aldo Ferrer, posiblemente como resultado de su experiencia como ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Alende, señalaba la necesidad de tener en cuenta que cualquier reforma en el sector agrario sería atacada por los afectados como si fuera una revolución social<sup>33</sup>. La reacción que provocó en algunas entidades ruralistas el proyecto de crear el impuesto a la renta normal potencial de la tierra pareció confirmar esa hipótesis. Con menos beligerancia, *La Nación* aseveró que dicho proyecto era un "excelente trabajo de laboratorio (pero) no condice con la naturaleza de la República ni con las prácticas habituales de la burocracia"<sup>34</sup>. Luego de exponer todos los aspectos por los cuales a su juicio no sería conveniente para el país realizar esa reforma del régimen impositivo, aconsejaba a las autoridades no encerrarse en torres de marfil ni en especulaciones doctrinarias, y escuchar las opiniones de las entidades corporativas ruralistas.

Al cumplirse un año del inicio del gobierno de Illia, la Unión Cívica Radical del Pueblo hizo pública una evaluación de la gestión realizada para subrayar sus principales logros. Una frase del texto, donde afirmaba que estaban superadas las incertidumbres, fue retomada por *La Nación* para rebatir muchos de los puntos allí presentados como éxitos de la administración radical. Según esa perspectiva crítica, las incertidumbres sobre el futuro político o económico subsistían y tendían a agravarse. Entre otras cuestiones, reprochaba a las autoridades por no haber modificado la Ley de Asociaciones Profesionales, por el déficit presupuestario, por su mala política en materia de previsión social, por la debilidad de la moneda y por el exceso de preocupaciones partidistas para definir su orientación. Reconocía, en cambio, que podía existir un honesto manejo de la cosa pública, pero eso no le parecía suficiente en un país con tantos y tan graves problemas. Lapidario, el editorial sobre el primer aniversario del gobierno de Illia concluía que los radicales habían perdido en tan corto lapso aptitudes visuales y sólo veían el árbol en lugar del bosque<sup>35</sup>.

En el plano político, la insatisfacción que generaba el gobierno radical se fundaba en diversas y controvertidas razones. Así, por ejemplo, la Comisión Popular de Afirmación de la Revolución Libertadora reclamaba que los militares "colorados", excluidos de las fuerzas armadas, retornaran al servicio activo. Para la mencionada entidad, era incomprensible que los militares sancionados por su participación en los sucesos de septiembre de 1962 y abril de 1963 no hubieran sido rehabilitados, ya que numerosos ciudadanos que militaban en la UCR del Pueblo, algunos de los cuales desempeñaban importantes funciones en el gobierno de Illia, habían colaborado activamente y acordado ideológicamente con los "colorados"<sup>36</sup>. Desde el extremo opuesto del arco político, el peronismo impulsaba otro retorno: el de Perón. Cuando ese regreso fue frustrado por la decisión del gobierno militar brasileño, que detuvo el avión del ex presidente y lo obligó a volver a Madrid, los sectores antiperonistas expresaron su beneplácito. Perón asignó a ese acontecimiento una interpretación antiimperialista: caracterizó a los gobiernos argentino y brasileño como "democracias pentagonianas" y aseguró que la orden de obstaculizar su vuelta a su país había sido dada por el Departamento de Estado norteamericano<sup>37</sup>. *La Nación*, en cambio, estimó que Perón no tenía ningún interés por culminar exitosamente su viaje. Al diario, la decisión de las autoridades brasileñas le parecía digna de elogio. Combinaba apreciaciones negativas sobre la personalidad del exiliado jefe político con juicios igualmente descalificatorios para los dirigentes de su movimiento, y lamentaba que, a diez años de su derrocamiento, subsistieran sectores ingenuamente confundidos o engañados<sup>38</sup>. Desde esa perspectiva, un objeto especial de crítica eran los dirigentes sindicales. Se los acusaba de malversar los fondos gremiales en actividades políticas y llevar un tren de vida dispendioso. Esa manera de definir a la dirigencia gremial era acompañada invariablemente por la objeción a su accionar agitativo y huelguístico, perjudicial, argüía, para la clase trabajadora. Por elevación, las críticas recaían sobre el gobierno, por no ser más severo frente al sindicalismo<sup>39</sup>. En este último aspecto el diario solía hacerse eco de las protestas de las distintas centrales empresarias.

Probablemente con el fin de aumentar su influencia sobre las concepciones políticas y económicas vigentes en la sociedad de esa época, la Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Cámara Argentina de Comercio decidieron crear la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), cuyo objetivo oficial era promover estudios que contribuyeran al mejoramiento del

nivel de vida de la población y al progreso del país. El diario recibió esa iniciativa con simpatía, por juzgarla parte del necesario aporte de la ciencia para impulsar formas más altas de civilización y bienestar colectivo.<sup>40</sup> Desde entonces, los informes de FIEL se convirtieron en un insumo frecuentemente incorporado a sus reflexiones editoriales sobre la marcha de la economía.

Desde una óptica que asociaba el conocimiento de la economía con el avance civilizador, no pudo el matutino dejar de censurar con acres términos la agresión contra el profesor norteamericano Walt Whitman Rostow perpetrada por un grupo de estudiantes universitarios, con motivo de la realización de una conferencia en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. *La Nación* homologó el hecho ocurrido en el ámbito universitario, con el hallazgo de un depósito de armas y explosivos, descubierto el mismo día de la afrenta a Rostow. El editorial sobre el suceso tuvo por sugerente título "Política con gelinita"<sup>41</sup>. Entre otras consideraciones, sostenía que existían grupos de activistas marxistas ajenos a la genuina labor universitaria y lamentaba que a causa del incidente en Ciencias Económicas hubiera renunciado el rector Julio H. G. Olivera.

Las primeras elecciones legislativas realizadas durante la presidencia de Illia mostraron la distancia entre el diario y el gobierno. En las vísperas del acto electoral, aquél consideró innecesaria la polarización a favor de la UCR del Pueblo de los ciudadanos no peronistas. A su juicio, el gobierno intentaba crear un clima de opción entre el partido oficialista y el peronismo, pero esa alternativa era incorrecta. La elección según el sistema de representación proporcional daba posibilidad, argumentaba, de expresar libremente las preferencias de los votantes y romper los estrechos moldes del bipartidismo. En consecuencia, quienes no eran favorables al peronismo podían elegir entre varios partidos y no tenían por qué acordar su apoyo a las listas radicales. Sin embargo, el matutino preveía que, como resultado de la insuficiente información sobre el cambio introducido en la forma de designación de legisladores, la polarización subsistiría y eso beneficiaría tanto al gobierno como a los peronistas <sup>42</sup>. Esa previsión resultó acertada. La Unión Cívica Radical del Pueblo y la Unión Popular (peronismo) concentraron aproximadamente el 60% de los sufragios, con ligeras ventajas para la segunda. El resto de los partidos quedó a gran distancia detrás de las dos opciones principales. Al analizar las causas de su derrota, el Comité Nacional de la UCR adjudicó una alta responsabilidad a la campaña sincronizada contra el gobierno por las demás fuerzas políticas, las organizaciones empresarias, los sindicatos y

lo que denominaba los "grandes voceros de opinión", expresión poco específica en la cual, sin duda, incluía a *La Nación*<sup>43</sup>.

Luego de las elecciones el diario siguió criticando al gobierno de Illia tal como lo había hecho hasta entonces. Para algunos observadores políticos, con los resultados de esa compulsa electoral había comenzado la cuenta regresiva de la presidencia de Illia. Un golpe de Estado debía impedir que en las futuras elecciones de gobernadores se impusieran los peronistas. Para hacer su contribución desde el campo periodístico a la creación del clima favorable a la intervención militar, Jacobo Timerman comenzó a publicar la revista *Confirmado* desde mayo de 1965. En la época el general Onganía, comandante en jefe del Ejército, se dedicaba a hacer profesión de fe anticomunista y alertaba contra los peligros que, suponía, acosaban al país. Los militares preparaban el golpe y habían establecido, según el general Alejandro A. Lanusse<sup>44</sup>, contactos con el gremialismo peronista para sumarlo a sus proyectos de transformación de la sociedad y del Estado. Así, un tanto paradójicamente, los mismos sindicalistas acusados de subversivos por el diario en razón de su acción agitativa se habían convertido, al mismo tiempo, en interlocutores válidos de quienes desde las fuerzas armadas preparaban el derrocamiento del gobierno radical, entre otras razones, por su incapacidad para asegurar el orden social.

Quizás al tanto de esas relaciones entre militares y dirigentes gremiales, el matutino criticó editorialmente el folleto publicado por la central sindical titulado "La CGT en marcha hacia el cambio de estructuras analiza el presente y proyecta el futuro"<sup>45</sup>. En ese texto creyó reconocer una inquietante problemática. A su modo de ver, detrás de las ideas en demanda de cambios de estructuras era fácil detectar concepciones revolucionarias de corte autoritario cuya meta era restringir la libertad en lo político, lo económico y lo social. Hablar del cambio de estructuras era construir mitos semánticos, práctica que atraía, decía textualmente, a una difusa *intelligentzia* fascinada por las formulaciones tecnológicas de la economía y las ciencias sociales en general. La "difusa *intelligentzia*" eran intelectuales que mantenían buenas relaciones tanto con los sindicatos como con la alta oficialidad de las fuerzas armadas. El folleto de la CGT, cuyo secretario general era José Alonso, ejemplificaba bien esas fluidas vinculaciones. El sociólogo José Luis de Imaz reveló, en un libro de memorias publicado años después, que él había dirigido al grupo encargado de preparar la primera versión de ese texto; según un estudio sobre el sindicalismo del período, Nicanor Saleño integraba también dicho equipo<sup>46</sup>. Imaz actuó luego como asesor del gobierno de

Onganía y Saleño fue subsecretario de Trabajo de Levingston. Por interpósita institución, al criticar a la CGT el matutino objetaba ideas que ganaban aceptación en las fuerzas armadas.

Una nueva reflexión sobre la naturaleza "incorregible" de Perón y de los dirigentes peronistas hizo el diario con motivo de los actos de violencia producidos en oportunidad de la estada en el país de María Estela "Isabel" Martínez de Perón en octubre de 1965. Según el matutino, era un error imaginar un peronismo dispuesto a aceptar propuestas conciliadoras. Para lograr una superación de las antiguas divisiones, aseveraba, los peronistas debían dejar de exaltar su década de gobierno, pero si "rechazaban el olvido de ese pasado ¿por qué razón habrían de olvidarlo, unilateralmente, los que fueron víctimas de la persecución, la tortura y el vejamen?"<sup>47</sup>. Esa pregunta, con una meditación sobre las condiciones del olvido, llevaba a una reactualización de los aspectos más negativos del peronismo conservado en la memoria de los sectores menos proclives a pactar con él. La supuesta cobardía de Perón, su propensión a encargar a sus esposas las tareas políticas que no quería asumir directamente, la anteposición de sus propios intereses personales a los del país, fueron, entre otras, las argumentaciones expuestas, reveladoras de la vigencia en el pensamiento del diario de las formas de caracterización del exiliado caudillo acuñadas hacia ya diez años. Acompañaba la crítica al peronismo con acusaciones al gobierno de Illia, por no haber reprimido debidamente los hechos de violencia protagonizados por los partidarios del ex mandatario. Reconocía, en cambio, a las autoridades el acierto de haber prohibido una concentración para festejar el vigésimo aniversario del 17 de octubre. Algunos desmanes producidos como reacción a esa medida eran vistos por el diario como acciones insurreccionales confirmatorias de sus argumentaciones sobre la naturaleza del peronismo.

Quienes creían que entre el peronismo y las izquierdas insurreccionales de inspiración castrista existían fluidos vasos comunicantes entendieron confirmar sus presunciones cuando se realizó en La Habana, a principios de 1966, la reunión de la llamada Conferencia Tricontinental. Su objeto era coordinar la solidaridad de sectores revolucionarios de Asia, África y América Latina. Allí concurrió una delegación integrada por representantes de diversos partidos y grupos de izquierda argentinos y, también, por sectores peronistas revolucionarios. John William Cooke tuvo activa participación en esa asamblea. *La Nación* llamó la atención sobre el significado de esa reunión y vio en ella la conjunción de estrategias orientadas por Moscú y Cuba a la que

adherían sectores del peronismo. Caracterizaba a Cooke de oscilante ideólogo y lo percibía tratando de coonestar con explosiones nacionalistas su identificación de fondo con procedimientos comunistas<sup>48</sup>. En la época, el gobierno de Illia expresó, por medio del canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz, su disgusto por lo que consideraba intervenciones subversivas estimuladas o dirigidas desde La Habana, y esto fue recibido con comentarios elogiosos por el diario. Esas expresiones oficiales eran tomadas como signo de mayor conciencia de la situación del continente<sup>49</sup>.

Pero el matutino no sólo veía peligros provenientes de la izquierda; lo inquietaba, además, la posibilidad de un golpe de Estado de ideología exactamente inversa. En el primer trimestre de 1966, cuando ya era un secreto a voces la inminencia de un movimiento militar para deponer a Illia y llevar al poder a Onganía, el diario hizo una reflexión sobre los peligros de una eventual ruptura del orden institucional. Para marcar distancias tanto del gobierno como de los golpistas, decía: "La situación actual pareciera protagonizada, primordialmente, por dos conjuntos negativos. Por un lado, el gobierno nacional, que no acierta a hacer de la democracia una herramienta, si no de bienestar, al menos de confianza. Por el otro, los sectores que son incapaces de sentir la democracia como un destino nacional"<sup>50</sup>. *La Nación* descartaba la utilidad de cualquier estilo de régimen dictatorial, fuese de tipo latinoamericano o de factura fascista. Entre los primeros encuadraba a Rosas, y entre los segundos a Perón; a ambas experiencias las consideraba de inviable repetición por el espíritu democrático, según estimaba, propio de la Argentina. En tanto que los ideólogos del golpe prometían un rápido progreso económico y social para la mayoría de la población, el diario les sugería irónicamente que transmitieran la fórmula para lograr esos éxitos a las autoridades constitucionales. Al mismo tiempo, aconsejaba a estas últimas actuar con celeridad y sin parcialidades para consolidar el amenazado orden institucional. Volviendo al mismo tema, un par de semanas más tarde, reiteraba sus simétricas críticas a los golpistas y a las autoridades en otro editorial que culminaba: "Los que sueñan con convertir a la Argentina en teatro de aventuras absolutistas alimentan sus conspiraciones con el pasto que les sirve el estilo de pasividad oficial"<sup>51</sup>. La metáfora hípica no desalentó a los hombres de caballería ni, tampoco, azuzó las reacciones del gobierno. A fin de junio de 1966 se produjo el golpe de Estado.

## La Nación: 1962-1966

Quienes habían encumbrado a Guido en la presidencia y pensaban cerrar así el paso a la dominación plena de las fuerzas armadas sobre el poder político, se equivocaron. Bordaberrización avant la lettre, detrás de un primer mandatario vestido con lo que en la jerga del soldado se llama "atuendos de paisano" se instaló, en realidad, un gobierno militar a tiempo compartido. Los uniformados libraron la sucesión de predomios con una violencia inusual en ese tipo de vernáculos disputas. Más que un régimen autoritario, el de Guido fue una pulverización de la autoridad. La solución Illia demostró ser igualmente carente de viabilidad. La democracia con proscrición engendraba un gobierno de legitimidad limitada, incapaz de imponer su voluntad a los hombres de armas que habían pergeñado el sistema restrictivo. La Argentina corporativa y militar había crecido y de los meandros de su accidentado curso surgió el general Onganía. A La Nación le cupo analizar esos años de singular conmoción con un estilo marcadamente trágico: todos sabían lo que iba a suceder, lo lamentaban, pero nada podía cambiar el desarrollo de los hechos; las fuerzas del sino llevaban a las fuerzas armadas al control despótico del Estado. En 1966 ya era patente el fracaso de los distintos proyectos políticos posperonistas. El diario pareció desistir de formular una alternativa y se redujo, por momentos, a llamar a la cordura, al menos para evitar mayores males.

La cuestión democrática, indisolublemente ligada al problema peronista, siguió siendo abordada por La Nación en los mismos términos del período precedente. No se podía abrir el sistema si esto suponía la entrada en sus puestos de control de quienes querían repetir una experiencia como la protagonizada en los años de Perón. Tampoco cabía instaurar una dictadura militar prolongada. La segunda opción era resistida no solamente por la valoración positiva de las instituciones democráticas sino, además, por una especie de saber histórico que recordaba al matutino la peligrosidad de un Estado concentrador de demasiado poder. Una razón suplementaria, pero importante, del rechazo del diario a la sustitución de Illia por un régimen militar debió ser su temor a la influencia notoria que ejercían las posiciones del catolicismo nacionalista sobre Onganía. Era común en quienes adscribían a esa tendencia ideológica la animadversión hacia La Nación, por juzgarlo una especie de templo del liberalismo laicista. La actitud contraria a la salida militar distanciaba objetivamente al matutino de los principales sectores propietarios y de sus organizaciones corporativas. El proyecto de un gobierno fuerte y capaz de limitar la acción sindi-

cal despertaba la simpatía de los primeros. La dirigencia corporativa, por su parte, veía con interés la posibilidad del establecimiento de un régimen autoritario que la considerara como interlocutor válido; paradójicamente, los jefes de los principales sindicatos tenían similar optimismo acerca del cambio de regulación del sistema político. La actitud de estos últimos contribuía a acrecentar las dudas del diario sobre la conveniencia de un golpe tal como éste se prefiguraba. No es exagerado afirmar que en los primeros meses de 1966 la reflexión política del matutino fue más civilista que la de buena parte de la población, aun cuando esto no significó la adopción de una actitud de defensa a ultranza de las instituciones. Desde su perspectiva, los radicales no eran capaces de superar los estrechos límites del interés partidario y electoral y favorecían, sin quererlo, la irresistible quiebra de la continuidad constitucional. En ese aspecto se reiteraba una percepción del radicalismo cuyos orígenes remitían a la primera experiencia de poder de dicha fuerza política. Estas ideas daban al pensamiento del diario un sesgo antipartido, elemento conceptual asociado, en general, a la desvalorización del sistema democrático formulado en la época por los ideólogos proclives al golpe militar. También el amplio eco acordado en sus editoriales a las opiniones económicas de las corporaciones producía, de hecho, un efecto contrario a la estabilidad de las instituciones democráticas. Los aspectos señalados constituían una clara manifestación de las dificultades del diario para posicionarse en el juego político en la situación de desconcierto reinante.

## NOTAS

<sup>1</sup> *La Nación*, 10-4-1962, pág. 6.

<sup>2</sup> *La Nación*, 24-5-1962, pág. 6, 4-6-1962, pág. 6.

<sup>3</sup> *La Nación*, 4-8-1962, pág. 4.

<sup>4</sup> Discurso de Alsogaray en *La Nación*, 4-10-1962.

<sup>5</sup> *La Nación*, 6-10-1962, pág. 6.

<sup>6</sup> *La Nación*, 15-10-1962, pág. 6. El editorial citado tenía un sugerente título: "La opresión fiscal".

<sup>7</sup> *La Nación*, 11-11-1962, pág. 6.

<sup>8</sup> *La Nación*, 22-11-1962, pág. 6.

<sup>9</sup> Güiraldes sostenía: "El 'coloradismo' perdió en el terreno de las armas. Tiene que perder también en lo económico y en lo político. En lo económico, a través del alejamiento de Alsogaray; en lo político, con la presencia unificada en el comicio de todas las fuerzas nacionales y populares de inspiración cristiana". Juan José Güiraldes: *El Frente Nacional*

(Coincidencia para lograr una gran Argentina), folleto, s/e, Buenos Aires, 1963, pág. 39.

<sup>10</sup> *La Nación*, 13-3-1963, pág. 6.

<sup>11</sup> *La Nación*, 29-3-1963, pág. 6.

<sup>12</sup> *La Nación*, 3-4-1963, pág. 6.

<sup>13</sup> *La Nación*, 20-4-1963, pág. 4.

<sup>14</sup> *La Nación*, 19-5-1963, pág. 6.

<sup>15</sup> *La Nación*, 6-7-1963, pág. 6.

<sup>16</sup> *La Nación*, 8-7-1963, pág. 6.

<sup>17</sup> *La Nación*, 4-9-1963, pág. 6.

<sup>18</sup> *La Nación*, 22-9-1963, pág. 6.

<sup>19</sup> *La Nación*, 26-9-1963, pág. 6.

<sup>20</sup> *La Nación*, 12-10-1963, pág. 6.

<sup>21</sup> *La Nación*, 18-11-1963, pág. 6.

<sup>22</sup> *La Nación*, 21-11-1963, pág. 6.

<sup>23</sup> *La Nación*, 7-1-1964, pág. 6.

<sup>24</sup> *La Nación*, 29-1-1964, pág. 4.

<sup>25</sup> *La Nación*, 20-4-1964, pág. 6.

<sup>26</sup> *La Nación*, 22-4-1964, pág. 6.

<sup>27</sup> *La Nación*, 18-5-1964, pág. 6.

<sup>28</sup> *La Nación*, 24-6-1964, pág. 6. Otro editorial con los mismos argumentos fue publicado el 26-8-1964, pág. 6, con el título "El brazo de un partido político". En ese texto sostenía, entre otras consideraciones: "El partido político escudado tras la CGT lanzó a ésta a la violación de la ley, y no se preocupa ahora de la contradicción en que incurre al aducir que la violencia es un pretexto del oficialismo para mantener las leyes represivas. Tampoco se preocupó antes, la misma CGT, de analizar la desautorización popular a su orden de votar en blanco en las últimas elecciones. Una sobrevaloración desmedida de las fuerzas que supone representar hace que el puñado de políticos adueñados del comando de la CGT rechace una discusión franca y abierta con cuantos han enjuiciado, desde dentro, el rumbo impreso al organismo, así como se desentiende del riesgo significado por dejar de ser un 'grupo de presión' para transformarse en una maquinaria de intimidación".

<sup>29</sup> *La Nación*, 14-6-1964, pág. 6.

<sup>30</sup> *La Nación*, 5-8-1964, pág. 6.

<sup>31</sup> *La Nación*, 15-6-1964, pág. 6.

<sup>32</sup> Jornadas agrarias realizadas por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina durante los días 26, 27, 28 y 29 de noviembre y 2 de diciembre de 1963, CGT, Buenos Aires, 1964. Introducción del secretario general José Alonso: "La reforma agraria en la Argentina", págs. 3-9.

<sup>33</sup> *Ibid.*, pág. 173.

<sup>34</sup> *La Nación*, 7-10-1964, pág. 6.

<sup>35</sup> *La Nación*, 15-10-1964, pág. 6.

<sup>36</sup> *La Nación*, 30-10-1964, "Reclaman el retorno de militares en actividad", pág. 7.

<sup>37</sup> Yo, Juan Domingo Perón, ob. cit., pág. 275.

- <sup>38</sup> *La Nación*, 4-12-1964, pág. 6.
- <sup>39</sup> *La Nación*, 13-12-1964, pág. 6; 17-12-1964, pág. 6.
- <sup>40</sup> *La Nación*, 2-1-1965, pág. 6.
- <sup>41</sup> *La Nación*, 28-2-1965, pág. 6; 9-3-1965, pág. 6.
- <sup>42</sup> *La Nación*, 12-3-1965, pág. 6.
- <sup>43</sup> Gobierno partidario. Memoria del Comité Nacional de la UCR del Pueblo. Período Enero 1964-Enero 1966, Buenos Aires, 1966, pág. 70.
- <sup>44</sup> Alejandro Agustín Lanusse: *Mi testimonio*, Lasserre Editores, Buenos Aires, 1977, pág. 93.
- <sup>45</sup> Confederación General del Trabajo, Buenos Aires, 1965.
- <sup>46</sup> José Luis de Imaz: *Promediando los cuarenta*, Sudamericana, Buenos Aires, 1977, pág. 156. Santiago Senén González: *El sindicalismo después de Perón*, Galerna, Buenos Aires, 1971, pág. 65.
- <sup>47</sup> *La Nación*, 9-10-1965, pág. 6. El título del citado editorial era: "Eclipse de la esperanza conciliadora".
- <sup>48</sup> *La Nación*, 16-1-1966, pág. 6.
- <sup>49</sup> *La Nación*, 5-2-1966, pág. 6.
- <sup>50</sup> *La Nación*, 22-3-1966, pág. 6.
- <sup>51</sup> *La Nación*, 5-4-1966, pág. 6.

## XII

# *La Nación* y el fracaso de la “Revolución Argentina”

El día de la deposición del presidente Illia, el diario publicó un editorial cuyo sentido era evaluar el hecho inminente y adjudicar al gobierno radical la responsabilidad de lo que ocurría. Destacaba la existencia de un consenso en la opinión pública a favor de la intervención militar, desligado de la influencia de los medios de prensa que, a su entender, sólo habían reflejado el estado de espíritu reinante en la población. A lo largo de muchos meses, argumentaba, se habían sumado episodios que llevaron a una situación de zozobra, de intranquilidad, y paralizaron muchos aspectos del quehacer nacional, mientras las autoridades tomaban decisiones de inocultable inspiración demagógica. En un contexto así caracterizado, se debía aceptar la intervención de las fuerzas armadas, cuya misión específica era distinta en condiciones normales, pero ahora les cabía asumir un rol político protagónico, ya que no les estaba “permitido desprenderse de una realidad en la que sus miembros se hallan inmersos como ciudadanos y sobre la cual su mismo estado les crea una alta responsabilidad”<sup>1</sup>.

El mencionado editorial coincidía en lo sustancial con las explicaciones que los comandantes en jefe de las tres armas proponían en la introducción del acta de la denominada Revolución Argentina, donde justificaban su decisión de interrumpir la continuidad institucional y entregar la primera magistratura al general Onganía. Pero esa convergencia en los enunciados globales no pareció suficiente para calmar en lo inmediato las dudas del diario sobre los rumbos que seguirían los nuevos dueños del poder. Al día siguiente del golpe analizó la incertidumbre ante la futura gestión, que comparaba de modo nada inocente con la inaugurada después de la caída del peronismo. En 1955, decía *La Nación*, por el carácter dictatorial del gobierno desalojado la revolución se hallaba definida doctrinariamente antes de triunfar.

En cambio, los revolucionarios de 1966 llegaban para resolver un "vacío de poder"; en consecuencia, no era simplemente por revertir la situación precedente que el gobierno militar encontraría su perfil y su proyecto. La proclama publicada en la víspera tendía a crear expectativa pero no a ubicar a los protagonistas, y la claridad sólo llegaría cuando se conocieran los nombres de los nuevos equipos encargados de la dirección del Estado, por lo cual recomendaba a los comandantes la realización de una selección atinada y acorde con los grandes problemas a resolver<sup>2</sup>. Probablemente la desconfianza en Onganía de los sectores coincidentes con las ideas de *La Nación* se viese objetivamente incentivada por el auspicioso recibimiento que le brindaron el peronismo y la dirigencia sindical. Perón fundaba su aceptación de Onganía a partir de dos condiciones distintas pero complementarias: que el nuevo gobierno apoyara los intereses populares y que en un plazo menor de dos años realizara elecciones limpias y sin proscriciones<sup>3</sup>. La Confederación General del Trabajo saludaba lo que creía podía convertirse en una nueva etapa de la historia nacional y expresaba su deseo de una pronta recuperación del país, meta que, a su parecer, sólo podría alcanzarse mediante un programa económico y social similar al realizado por el peronismo entre 1946 y 1955 y recientemente impulsado como propuesta durante las luchas sindicales contra Illia<sup>4</sup>. Quizás en la algarabía propia de su instalación en el poder, Onganía y sus equipos hayan relativizado las declaraciones de quienes desde el peronismo y desde los sindicatos abrían un crédito a su gestión. Como nota marginal, cabe señalar que Onganía y sus colaboradores directos habían demostrado, días antes del golpe, su creencia en el valor de la palabra escrita, al suprimir del capítulo "Objetivos políticos" del Acta de la Revolución Argentina la frase referente al objetivo de alcanzar en el ámbito de la política interna "la realización de una auténtica democracia representativa sin proscriciones de ninguna clase"<sup>5</sup>. En el enunciado de reemplazo, se prefirió omitir la comprometedor idea de una democracia exenta de proscriciones. En la fuente citada se adjudica la autoría de los documentos de base de la revolución del 28 de junio de 1966 al general Julio Alsogaray, a su hermano Álvaro, a Manuel Díaz Colodrero y al entonces coronel retirado Juan Francisco Guevara. En grados diversos, todos cumplirían roles políticos en los años del régimen autoritario y sus nombres quedarían asociados a algunas de las líneas de fractura de su frente interno. De todos modos, mucho más profundas resultarían las consecuencias de las disidencias de los sectores sindicales y del peronismo. Necesitaron poco tiempo para comprobar que el gobierno militar no

cumpliría con las esperanzas depositadas por ellos en su hora liminar.

*La Nación*, por el contrario, no se sintió defraudada por Onganía, porque desde un primer momento tomó distancia de su gobierno. Si antes del golpe había visto con recelo a quienes lo preparaban, una vez instalados éstos en las funciones de poder sus resquemores comenzaron a confirmarse. ¿Qué querían los nuevos gobernantes? ¿Cuál era el sentido de su proyecto? ¿Eran democráticas sus metas? Esos interrogantes, con énfasis creciente, surcaron los editoriales del diario prácticamente durante toda la gestión de Onganía. No habían pasado dos semanas del comienzo de la nueva etapa militar y ya el matutino planteaba todos los temas críticos que mantendría de allí en más: "Ya desde el llamado Estatuto de la Revolución Argentina percibióse que se estaba en presencia de un movimiento que agitaba conceptos extraños a todos los de análogo carácter producidos antes en el país (...) Y si bien no se lo dijo expresamente, creemos, quedó así establecido que no se siente éste un 'gobierno *de facto*', como los antes aludidos, sino pura y simplemente un 'gobierno revolucionario', que 'reasume la soberanía' (...) Las alusiones a los 'cambios de estructuras' que no se definen o a reformas profundas que tardan en precisarse suscitan interrogantes que perjudican la comunidad de anhelos que cabe desear para el éxito de la obra entrevista (...) En suma, lo que se teme es el influjo de métodos que pueden haber dado resultado en otras latitudes pero que no se avendrían con el espíritu argentino. Lo que se desea es tener la certeza de que las ideologías, por bien intencionadas que sean, no pretenden someter la realidad a su imperio, en lugar de sujetarse ellas mismas a una realidad insoslayable"<sup>6</sup>. Cuando expresaba su rechazo al empleo de métodos utilizados en otros países, el diario se refería a la dictadura española de Francisco Franco; según observaciones y testimonios de la época, ese ejemplo inspiraba a Onganía. En términos generales, esa inquietud no era sólo el resultado de la falta de explicitación clara de las ideas de los equipos gubernamentales; contribuía a que el diario los percibiera como partidarios de experimentos antidemocráticos el apoyo que les brindaban las tendencias y personalidades más reconocidas de la extrema derecha argentina, algunos de cuyos miembros fueron, incluso, designados en cargos oficiales. Con la distancia del tiempo transcurrido, a dos décadas de la instauración del régimen militar, Marcelo Sánchez Sorondo rememoró aquellos faustos días del nacionalismo de derecha: "Nunca para algunos parecieron estar más cerca de convalidarse los ideales de *La Hora de la Espada*. Y aunque probablemente el jefe ungido

con los santos óleos de sus pares conjurados ignoraba todo o casi todo acerca del pensamiento de Lugones, el caso es que se hizo prosa sin saberlo aplicando al pie de la letra, de la letra que mata, el breviario apologético de tan ilustre autor<sup>7</sup>. Sólo habían pasado un par de meses de iniciado el gobierno de Onganía, y una parte considerable del nacionalismo de derecha, entre ellos Sánchez Sorondo y su periódico *Azul y Blanco*, manifestaban su desilusión por el rumbo de los acontecimientos. Los defraudados por el onganiano argumentaron con frecuencia que éste había cedido a las presiones de los "liberales", actor colectivo en el cual incluían a *La Nación*. Sin embargo, el matutino no dejó en ningún momento de criticar lo que percibía como la negativa influencia de los nacionalistas de derecha sobre las altas esferas del poder. Contribuía a alimentar estas objeciones la propensión de Onganía y sus colaboradores a emplear nociones claramente provenientes de fuentes ideológicas antidemocráticas. Esto no les granjeaba el apoyo de los sectores más doctrinarios del nacionalismo de derecha, pero irritaba a quienes se identificaban con la tradición política del liberalismo.

El rechazo que podían generar las ideas y las prácticas del régimen militar si se apartaban de la filiación liberal había sido previsto por Mariano Grondona en un artículo incorporado a un libro colectivo patrocinado por el Instituto de Ciencia Política de la Universidad del Salvador de Buenos Aires. La mayoría de los autores participantes no ocultaba su deseo de aportar consejos al "Príncipe" para ayudarlo intelectualmente a conducir con éxito su despótica experiencia de poder. En su *paper*, Grondona exploraba las fuentes probables de la futura oposición y preveía que el liberalismo sería, en el plano ideológico, el principal impugnador de Onganía si éste tomaba iniciativas reñidas con esa cosmovisión de la política y la sociedad<sup>8</sup>. Cuando enumeraba dónde anidaría la oposición liberal, Grondona comenzaba por nombrar a "los grandes diarios", entre los cuales, obviamente, ocupaba un lugar preponderante *La Nación*. Grondona había dejado de pertenecer a la redacción del matutino en 1962 y en el momento de escribir estas reflexiones se desempeñaba como columnista político del semanario *Primera Plana*, desde cuyas páginas había ensalzado con una prosa más deslumbrada que analítica el advenimiento de la dictadura y la persona del nuevo mandatario. En la introducción del mencionado libro, el prologuista Raúl Puigbó sostenía que, si bien la revolución del 28 de junio parecía introducir un corte definitivo entre épocas, no tenía una línea ideológica dominante, aunque se perfilaban en ella una *Weltanschauung* y una clara voluntad de cambio<sup>9</sup>. Por ello resaltaba la importancia de

los textos de Carlos Floria, Mariano Grondona y José Luis de Imaz incluidos en el libro; en su opinión, los mismos contribuirían a avizorar mejor el futuro. Floria alertaba a los gobernantes militares sobre los riesgos de resolver la ausencia de una ideología clara y precisa mediante la aceptación de fórmulas pragmáticas impulsadas por lo que denominaba el liberalismo economicista, cuya aspiración era reemplazar la política por la tecnología<sup>10</sup>. Aun cuando no lo mentara, era simple entrever detrás del "riesgo" aludido por Floria la "oferta" de los sectores económicos liberales que en poco tiempo accederían al gobierno con Adalbert Krieger Vasena, designación recibida con satisfacción por el matutino. La visión del futuro sistematizada por Imaz incluía, también, una cuestión destinada a cobrar luego total consistencia empírica. En su texto aconsejaba al gobierno sobre la necesidad de buscar formas de integración y participación de los sectores populares, y en especial de los urbanos organizados sindicalmente. La otra alternativa, decía Imaz, sería el empleo de la fuerza mediante el ejercicio de una auténtica dictadura, y profetizaba: en ese caso, "la etapa subsiguiente a la dictadura será la del levantamiento popular"<sup>11</sup>. Destaquemos que la prospectiva de Grondona sobre la eventual oposición del liberalismo político ya se había concretado cuando su artículo salía de imprenta; la de Floria necesitó un semestre para convertirse a medias en realidad, cuando el gobierno se hizo ideológicamente bifronte: antiliberal en lo político y liberal en lo económico; el pronóstico de Imaz, que seguramente debió parecer una hipótesis un tanto fantásica y de valor polémico y no prospectivo, asumió una tangible y estruendosa actualidad antes de cumplirse el tercer aniversario de la entronización de Onganía.

Las inquietudes suscitadas por el nuevo gobierno al matutino sólo fueron parcialmente atenuadas cuando éste comenzó a hacer públicos algunos aspectos de sus orientaciones futuras. El occidentalismo en la política exterior fue, naturalmente, bien recibido. Al respecto, el diario subrayaba la importancia de no confundir las relaciones políticas con las económicas y, por lo tanto, no dejar de comerciar con todos los países más allá de sus ideologías contrarias a los principios occidentales. Si bien con respecto a la política económica todavía el gobierno militar no había definido claramente sus ideas, una serie de referencias iniciales a la libre empresa también fueron interpretadas por el editorialista como signo alentador. En ese primer semestre del régimen autoritario el ministro de Economía era Néstor Salimei y había en los elencos oficiales un debate no resuelto sobre las políticas a seguir en esa estratégica área. La intención de man-

tener buenas relaciones con los sindicatos era vista por algunos sectores como difícilmente compatible con un proyecto económico de corte liberal. *La Nación*, tranquilizada con los anuncios de medidas tendientes a asegurar la libertad de mercado, no dejaba al mismo tiempo de destacar la tensión de esos objetivos con la anunciada amistad con los sindicatos. Al respecto, decía: "Deseamos muy fervorosamente que la dirección fijada a nuestra economía no promueva conflictos abruptos con las tendencias durante largos años predominantes en los grupos políticos enquistados en la conducción sindical"<sup>12</sup>. El gobierno no había intervenido los sindicatos, y seguía recibiendo de sus máximos dirigentes señales que le hacían pensar en la posibilidad de encontrar una armoniosa convivencia. Todo esto ocurría mientras Álvaro Alsogaray partía en misión oficial a los Estados Unidos para explicar el proyecto del gobierno y de allí llegaban noticias de la buena acogida de sus ideas por parte de un viejo conocido de los sindicalistas y de los peronistas: Spruille Braden, el embajador americano que en 1945 se había esforzado para impedir la llegada de Perón al poder. En fin, en otro entrecruzamiento de la política con el periodismo se prohibía en la Argentina la venta del semanario uruguayo *Marcha*, que traía en su número de la última semana de julio de 1966 un reportaje a Perón donde este replanteaba su inicial buena acogida a Onganía. El exiliado jefe del movimiento peronista afirmaba: "Creo que de este mozo (Onganía) habrá que decir lo que decía Agustín Álvarez de Lavalle: ¿Quién lo metió al general Lavalle a reformador institucional, asunto que no era del arma de caballería?"<sup>13</sup>.

En el ámbito local, la primera víctima de la censura a la prensa fue el semanario satírico *Tía Vicenta*, suprimido por orden del gobierno, dispuesto a impedir la desacralización de la imagen de sus funcionarios por la vía de la caricatura y el humor. Si bien el hecho no motivó un editorial del matutino, lo provocó, en cambio, la interpretación que del mismo hizo el *New York Times*. Según el corresponsal del importante diario norteamericano, la censura había caído sobre *Tía Vicenta* debido a que sus editores no habían acatado el acuerdo de caballeros entre el gobierno y la prensa respecto a no atacar al nuevo régimen, pacto establecido, afirmaba la mencionada publicación neoyorquina, cuando producido el golpe de Estado los responsables de los diarios fueron convocados a la Casa Rosada. *La Nación* rechazó en todos sus términos esa interpretación que la involucraba. Negó la existencia de esa convocatoria oficial a los directores de diarios para fijarles líneas de conducta, y afirmó que cualquier intento de interferir el libre desenvolvimiento de la prensa hubiera constituido una

acción igualmente desdolorosa para quien la impartiera y para quien la recibiera sin protestar. En cuanto al caso *Tía Vicenta*, lo caracterizaba escuetamente como un inexplicable error del gobierno, pero no le adjudicaba mayor significación ni lo interpretaba como parte de una política de limitación de la libertad de expresión<sup>14</sup>.

El mes de julio terminó con un hecho de gran significación en el sistema de efemérides valorado por *La Nación*: la Sociedad Rural Argentina cumplía 100 años. El presidente Onganía, quizás por colocarse a la altura de las circunstancias, llegó al predio ferial de Palermo donde se realizaba la exposición anual de la entidad en la carretela que la Infanta Isabel había empleado en ocasión de su visita al país en 1910. Al utilizar dicho vehículo de tracción animal en lugar de un automóvil, el primer mandatario retomaba, decía el diario en un suelto, una tradición quebrada en las dos décadas precedentes<sup>15</sup>. El uso del simbólico carruaje debió operar como un disparador de múltiples remembranzas para una parte del público. La alocución del secretario de Estado de Agricultura y Ganadería, Lorenzo Raggio, no fue, en cambio, portadora de nuevas halagüeñas. El comentario editorial sobre ese discurso fue mesurado. Advertía que se volvían a pedir sacrificios al agro, aun cuando esperaba que se tratara sólo de hacer frente a la coyuntura global adversa y luego las autoridades del área no se desentenderían de los problemas de los productores rurales. Era de esperar, agregaba, que no se malograran los esfuerzos del campo mediante el fiscalismo voraz de los técnicos en impuestos cuya acción había predominado en otros momentos<sup>16</sup>. Parece interesante destacar que, entre las colaboraciones de especialistas publicadas en el suplemento dedicado a la celebración del centenario de la Rural, se incluía un exhaustivo artículo donde el ingeniero Horacio Giberti proponía, con abundantes fundamentaciones, establecer el impuesto a la renta normal potencial de la tierra para incentivar un aumento sustancial de la productividad del sector agrario argentino. El autor presentaba informaciones empíricas para demostrar que las grandes explotaciones rurales daban un empleo poco eficiente a la tierra y perjudicaban objetivamente al conjunto de la economía. La solución de ese problema debía buscarse, a su entender, mediante sanciones impositivas a los propietarios que no alcanzaran los niveles de producción estimados como normales o apropiados para las regiones y condiciones agronómicas en las cuales operaban<sup>17</sup>. Esas tesis habían sido criticadas por el matutino durante la presidencia de Illia y volvieron a ser objetadas cuando, bajo el gobierno de Onganía, se supuso podían convertirse en el basa-

mento teórico de una posible reforma del sistema impositivo agrario.

El gobierno militar necesitó un mes para decidirse a poner las universidades nacionales bajo su control. Durante ese breve período las casas de altos estudios siguieron funcionando autónomamente, conforme a la legislación vigente. *La Nación* había criticado muchos aspectos de la dinámica universitaria durante los gobiernos de Frondizi y de Illia, y en especial, se había referido a una supuesta "infiltración marxista" en los claustros, aunque en ningún momento su prédica alcanzó el nivel de *macartismo* desarrollado en la época por otros actores. Cuando las universidades fueron intervenidas el diario objetó, por una parte, la violencia policial contra grupos de estudiantes y de profesores, y, por otra, alertó contra el error de llevar adelante una política autoritaria en dichas casas de altos estudios. No se podía, decía, desconocer la meritoria labor desarrollada durante muchos años en las universidades, con el pretexto de la existencia de minorías estudiantiles politizadas con ideas extremistas<sup>18</sup>. Recordaba al respecto que el país había tenido una vida universitaria dificultosa, pero no era cuestión de perder todo lo construido. Se debía, afirmaba, lograr el orden en las universidades, pero eso no significaba someter su desenvolvimiento al poder político. En su opinión, la ciencia y la cultura necesitaban un clima de libertad académica y de tolerancia intelectual para desarrollarse. Así, el diario se colocó desde un principio en actitud expectante con respecto a la tarea de las nuevas autoridades universitarias, e instó al gobierno a restablecer lo más rápido posible el normal funcionamiento de las casas de estudio.

Cuando Onganía y sus ministros comenzaron a hacer públicos algunos lineamientos de su proyecto político, el matutino expresó de modo inequívoco su desacuerdo. Las declaraciones oficiales le dieron frecuentes motivos para plantear la duda sobre si se trataba de alterar de manera permanente el régimen democrático y sustituirlo por otro de carácter corporativista. El presidente dejaba traslucir marcada ambigüedad al respecto, y aun cuando en ningún caso hablaba de la supresión definitiva de los partidos políticos, no parecía disgustarle el ensayo de otros mecanismos para representar los intereses de los distintos sectores sociales. En una de las primeras ocasiones en que Onganía declaró, en conferencia de prensa, que pensaba consultar a la ciudadanía a través de "organizaciones básicas de la comunidad", el matutino se preguntó si debería verse en esa idea alguna alusión implícita a cualquier forma de corporativismo, y marcó su rechazo a innovaciones de ese carácter<sup>19</sup>. Para el diario, el régi-

men democrático y la expresión de la ciudadanía por medio de partidos políticos pudieron haber sido imperfectos, pero esas carencias debían adjudicarse a errores de los hombres y no correspondía imputarlas a las instituciones de representación. Es más, aseveraba que la democracia era "la verdadera imagen del espíritu argentino"<sup>20</sup>. Las que podían parecer reflexiones de teoría o de filosofía política se convertían en cuestiones de actualidad acuciante, cuando el gobierno revelaba su decisión de mantener relaciones directas y cordiales con las corporaciones sindicales y empresarias. Así, cuando el presidente Onganía participó en el acto de homologación de un convenio entre el gremio metalúrgico y su patronal, y en su discurso mencionó la necesidad de mancomunar los intereses de uno y otro actores de la actividad fabril, *La Nación* se preguntó si eso significaba pensar que podían crearse "agrupaciones únicas", en abierta alusión a las de los regímenes fascistas<sup>21</sup>. Además, agregaba, si bien correspondía reconocer el encomiable espíritu de acuerdo del gremio metalúrgico, no se debía olvidar que hacía escasos meses ocupaba fábricas con toma de rehenes.

La inquietud provocada por altos funcionarios del gobierno militar al emplear nociones de carácter equívoco y multívoco, tales como *comunidad*, *cambio de estructuras* o *participación*, pareció en algunos casos colocar a los editorialistas en el límite del ofuscamiento. Requerían mayor claridad de lenguaje, ya que la confusión llevaba, decían, al desasosiego cívico y a sospechar "que algo excesivamente alambicado venga a pretender el reemplazo del sistema de partidos políticos"<sup>22</sup>. Quizás en procura de ser más claro y preciso, el ministro del Interior, Enrique Martínez Paz, optó por explicar el proyecto del gobierno: "No hay revolución sin cambios profundos de estructuras políticas y económicas, sin modificaciones trascendentes de la filosofía inspiradora de la organización social y de la conducta gubernativa. Por eso las revoluciones deben vencer siempre grandes resistencias. Todo cambio auténtico afecta poderosos intereses creados, rompe la inercia del viejo orden que viene a sustituir y choca con la mentalidad de funcionarios y ciudadanos que no se adecuan a las nuevas realidades"<sup>23</sup>. Aun cuando la mayor parte de las grandes revoluciones habían sido violentas y cruentas, decía Martínez Paz, la conducida por Onganía se proponía evitar esos altos costos pero, de todos modos, como cualquier otra revolución debía comenzar por demoler las estructuras del sistema antiguo, tarea ya iniciada y que se pensaba profundizar. Ese catilinario discurso del ministro del Interior fue pronunciado con motivo de una reunión nacional de gobernadores, donde se impartieron directivas para encauzar

y promover la *participación de la comunidad* abriéndole cauces en los municipios, destinados a ser, decía textualmente Martínez Paz, el nivel donde se iniciaría la reestructuración social, política y espiritual del país. El ministro se encargó días más tarde de explicar que confiaba en los "grupos intermedios", cuyo rol sería organizar la participación en el plano comunitario de todo el pueblo, para dar una forma más auténtica de democracia en comparación con las modalidades del funcionamiento político de los años precedentes<sup>24</sup>. Obviamente, en ese planteo el monopolio de la expresión política de la sociedad correspondía al Estado. Con la visible intención de referirse a las concepciones antidemocráticas instaladas en el poder, pero sin enfocar el tema como una confrontación abierta con el gobierno, *La Nación* dedicó una extensa reflexión al *modus operandi* del totalitarismo en el mundo moderno. Defender la civilización occidental, afirmaba, significaba tener claridad sobre la amenaza siempre presente de que el Estado aplastara la autonomía de la sociedad en lugar de actuar como un órgano al servicio de ella; eso desembocaba, a su juicio, inevitablemente en la tiranía de un hombre o de un grupo<sup>25</sup>.

El temor a un *Big Brother* en versión vernáculo-castrense pareció tomar aún más consistencia cuando trascendió que se estudiaba la sanción de una ley para regular las actividades de la prensa. El rechazo del diario a la sola idea de una legislación especial fue total; lo comparó con una espada de Damocles que pendería sobre el periodismo independiente para obstaculizar su libre desenvolvimiento. El presidente Onganía había elogiado en su momento la función de los medios de prensa, comparándola con la del Congreso, y con ironía se preguntaba el matutino si ahora se planeaba tratarlos de la misma manera que a aquél, silenciar su opinión y clausurar las libertades que los protegían<sup>26</sup>. No es sorprendente que en ese contexto cargado de incertidumbres y desconfianza hacia el gobierno, *La Nación* hiciera en su último editorial de 1966 una valoración positiva de la legalidad vigente durante la presidencia de Illia, más allá de todas las críticas que a su entender pudiera merecer esa gestión. Señalaba, además, que muchos sectores de la vida nacional habían acogido con esperanzas al gobierno militar, pero éste todavía, y ésa era la expresión empleada, acusaba *oscuridades incómodas*. En esos días se estaba procediendo a una reorganización del gabinete ministerial: Martínez Paz dejaba Interior y Salimei se alejaba de Economía. El diario hacía votos para que 1967 trajera más claridad y se evitara que el cansancio moral aplastara al país<sup>27</sup>.

Las designaciones de Guillermo Borda como ministro del Interior y de Adalberto Krieger Vasena al frente de Economía marcaron el comienzo de una nueva etapa del gobierno militar. Krieger Vasena aportaría tranquilidad a los defensores del liberalismo económico. Las principales entidades empresarias lo recibieron con beneplácito. El avance liberal sobre el área económica del gobierno sosegó las inquietudes de quienes veían al anterior equipo ministerial un tanto propenso a adoptar políticas dirigistas. El nombramiento en la cartera de Interior de Guillermo Borda disgustaría, en cambio, a quienes durante los meses precedentes se habían manifestado preocupados por el sesgo antidemocrático de muchas posiciones públicas del gobierno. Antiguo funcionario político del peronismo, hombre vinculado a las estructuras eclesiásticas, Borda reunía varias de las características atribuidas usualmente a los "corporativistas" de Onganía. La designación de Raúl Puigbó como secretario de Promoción y Asistencia de la Comunidad generaba similares resquemores. Puigbó había sido funcionario del efímero equipo del presidente Lonardi en el ámbito laboral y, luego de su alejamiento de ese cargo, se convirtió en uno de los más severos críticos del gobierno de Aramburu desde las páginas del periódico nacionalista *Azul y Blanco*; allí escribió una serie de artículos luego recopilados en un libro<sup>28</sup>. Esa combinación de liberales en lo económico con nacionalistas de derecha en lo político dio ocasión a Raúl Alfonsín para ironizar desde las columnas de la revista *Inédito*, bajo el seudónimo Alfonso Carrido Luro, sobre los "olvidos" en que ambos sectores aparentemente opuestos incurrieran para poder coexistir en el seno de la conducción del Estado. Los nacionalistas, decía Alfonsín, habían olvidado las ideas favorables a la justicia distributiva y a la defensa del patrimonio nacional pregonadas otrora, a la espera de tiempos mejores; los liberales sólo se preocupaban por defender los intereses económicos con que estaban vinculados y optaban por ignorar los principios políticos asociados a las visiones del mundo a las que afirmaban adherir<sup>29</sup>.

*La Nación* inauguró a partir del cambio de gabinete de fines de 1966 la que sería su posición hasta el fin el gobierno de Onganía: apoyo a los principios inspiradores de la gestión económica y rechazo de las ideas explícitas o implícitas en las propuestas desarrolladas en el plano político. Cuando Krieger Vasena anunció su programa económico, a mediados de marzo de 1967, el diario lo consideró acertado y estimuló a las autoridades a aplicarlo sin vacilaciones ni contemplaciones. Una liberalización de distintos aspectos de la economía, similar a la pro-

pugnada por el ministro, había tenido éxito en otras latitudes, y no había razón para creer que lo mismo no sucedería aquí<sup>30</sup>. Krieger Vasena había anunciado los problemas y esbozado las soluciones en términos muy similares a los usualmente utilizados por el matutino. Las coincidencias no eran, para nada, forzadas. La modernización económica, la mejora de la eficiencia, el saneamiento del gasto público, la reestructuración de las empresas estatales y el control de la inflación habían sido temas abordados con frecuencia en sus columnas. Pero la naturaleza de gobierno "compartido" se ponía en evidencia en todos y cada uno de los aspectos en que incursionaban los equipos de Onganía. Así, para demostrar la polisemia de la palabra "modernización", la Secretaría de Estado de Cultura y Educación firmó un convenio con una universidad provincial para realizar cursos de "promotores comunitarios (líderes naturales)" y de "técnicos prácticos en capacitación de agentes de cambio". La iniciativa fue objetada por el matutino, que adujo el dudoso contenido intelectual de ambas carreras, e intuyó una preocupación más "comunitarista" que académica<sup>31</sup>. Consecuente con el estilo puesto en práctica en otras oportunidades, las noticias internacionales le volvieron a servir para editorializar de modo muy poco subrepticio sobre la realidad local. El golpe de los coroneles griegos le suscitó una reflexión por demás elocuente: "Los militares que asumen el poder porque dicen amar la democracia tienen, en Grecia como en cualquier sitio civilizado del globo, la obligación de no conducirse como una elite de iluminados puesta al frente de un pueblo mudo"<sup>32</sup>. La idea de "modernizar" la política por la vía de la municipalización de las representaciones no había, tampoco, sido abandonada por algunos sectores del gobierno y ocasionaba disgustados comentarios editoriales. Recordando el principio de Alexis de Tocqueville, el diario decía que el municipio era escuela de democracia porque se había encontrado en los orígenes del proceso de desarrollo que condujo a ella, debía, por lo tanto, estar en la base de la formación cívica del pueblo, pero no podía, de ninguna manera, sustituir las formas superiores de la democracia representativa articuladas con vista a las más altas funciones del Estado, reemplazo buscado, aseveraba textualmente, por ciertas tendencias menos modernas de lo que parecen<sup>33</sup>.

Los empresarios rurales veían con desconfianza la propensión de Krieger Vasena a enfatizar la importancia de la industria. El error de generar una antinomia entre agro e industria había sido analizado y criticado en diversas oportunidades por el matutino. En esa sensible problemática, el presidente de la Nación hizo un inesperado aporte al pronunciar una alocución

destinada a tener amplios y discutidos ecos. La citada antinomia quedó planteada de manera clara por Onganía cuando dijo: "Veneramos las tradiciones que forjaron los varones que hicieron nuestra patria, pero sabemos que la Argentina campestre, la Argentina fácil, el país de las vacas y del trigo ha quedado atrás. Constituimos hoy un país industrial, altamente diversificado y en extremo complejo que no puede continuar dando tumbos sin rumbo"<sup>34</sup>. El primer magistrado explicaba, además, la significación que acordaba al planeamiento estatal para llevar adelante la consolidación de los objetivos de la revolución e incluía las ya acostumbradas referencias críticas a los anteriores modos de acción de la política y de los partidos. A ningún observador atento del debate político escapó que lo realmente *nuevo* en lo dicho por el presidente era, valga la paradoja, la condena del país *viejo*. *La Nación* evaluó que el discurso en cuestión no esclarecía a la opinión pública sobre los objetivos del gobierno y señaló su desagrado por la reiteración de expresiones que traslucían ideas contrarias a la tradición democrática. No eludió, naturalmente, la conflictiva frase sobre "el país de las vacas y el trigo que quedó atrás" y se preguntó qué pensarían al respecto los productores rurales, responsables del 90 por ciento de las divisas que ingresaban al país, sin las cuales el proceso industrial no podría avanzar un paso<sup>35</sup>. Percibía las palabras de Onganía como un injustificado ataque al agro, y volvió con cierta frecuencia a referirse al tema con alusiones a aquella extralimitación discursiva relativamente fáciles de captar. Pero así como la controvertida expresión pudo contrariar a los hombres de campo, es interesante destacar que fue asumida positivamente por algunos de los miembros del *entourage* de Onganía. Tal fue el caso de Roberto Roth, subsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, quien al poco tiempo publicó un libro con ideas similares, cuyo epígrafe era la frase de Onganía que relegaba al pasado a la Argentina campestre<sup>36</sup>.

Como ejemplo de los variados motivos de crítica del diario al gobierno de Onganía, parece interesante mencionar las objeciones a la ley de represión al comunismo sancionada en la segunda mitad de 1967. Si bien consideraba necesario proteger la sociedad de la acción de los comunistas, el matutino estimaba que el texto legal en cuestión adolecía de fallas tales que, en realidad, resultaba un verdadero peligro para los "demócratas fervientes". Una aplicación arbitraria de esa ley, decía, podía permitir a autoridades aviesas servirse de ella para contrarrestar cualquier tipo de actitud anticonformista, ahogar una afirmación polémica de contenido social o evitar protestas contra la demasia del ánimo policial. Esa ley, decía *La Nación*, pondría en manos de

la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) un poder totalmente discrecional, y todo dependería de los humores, las simpatías, las aversiones, los prejuicios, los intereses y las reacciones emotivas de dichos agentes calificadores. Recordaba, además, que el régimen de Perón se había valido de instrumentos similares para punir a sus adversarios políticos. Sin duda, los argumentos apuntaban más contra el autoritarismo instalado en el gobierno que a la discusión sobre el modo de prever una eventual amenaza comunista. El citado editorial fue reproducido por Gregorio Selser, periodista de ideas de izquierda, en un artículo dedicado a criticar la ley anticomunista<sup>37</sup>.

Si bien el matutino apoyaba los lineamientos generales de la política económica de Krieger Vasena, no dejaba de rechazar los aspectos que juzgaba perjudiciales o equivocados. El estímulo a la radicación de capitales extranjeros habitualmente había sido reclamado por el diario, pero cuando éstos llegaron al país para comprar empresas de propiedad local, la crítica al gobierno no se hizo esperar. Así, con una prosa y un razonamiento que no eran usuales en sus reflexiones editoriales sostuvo: "Si sustituye a los capitales existentes el capital foráneo no contribuye al progreso del país; al contrario, crea problemas sin compensación alguna, por las remesas de las ganancias obtenidas que gravitan en el mercado cambiario. En la actualidad es muy frecuente la adquisición del paquete de acciones mayoritario de las empresas que cotizan en Bolsa, y en esa forma se adquiere el dominio de la empresa"<sup>38</sup>. Así, reconociendo el rol positivo de las inversiones extranjeras, terminaba sumando su voz a las de quienes acusaban al gobierno de no defender debidamente los intereses del país. Al fijar esas posiciones situaba el centro de su preocupación en la necesidad de preservar a los propietarios locales, que aparecían desmunidos ante el poder del capital extranjero. El Estado, decía, no podía aceptar un proceso de pérdida del control nacional de empresas como el que estaba ocurriendo. Una opinión similar fue expresada casi simultáneamente por la Confederación General Económica, central que nucleaba a los sectores empresarios más opuestos al programa de Krieger Vasena. Dardo Cúneo, en un libro donde se identificaba con los puntos de vista de la CGE, creyó significativo reproducir el citado editorial, coincidente con sus posiciones en defensa de las empresas de capital nacional<sup>39</sup>.

El año 1968 resultó decisivo en el proceso de debilitamiento del régimen de Onganía. Desde el gobierno se intentó dar mayor concreción a las ideas "comunitaristas y corporativistas", en tanto la oposición tomaba fuerza desde los más diversos ángulos.

En los sindicatos surgió la CGT de los Argentinos, liderada por Raimundo Ongaro, con un programa de abierto enfrentamiento a las autoridades nacionales y no sólo a su política salarial o económica. En el Ejército se hicieron públicas las disidencias con la línea seguida por el poder político. Las movilizaciones estudiantiles realizadas en distintas ciudades del interior y en la Capital se multiplicaron y tendieron a coordinarse con las protestas sindicales. En los dirigentes de los disueltos partidos políticos pareció emerger la idea de que el gobierno no era tan fuerte como se había supuesto y de que detrás de una fachada de seriedad sus propuestas eran poco consistentes y relativamente improvisadas. Junto con todos los signos anunciadores de la crisis del autoritarismo, el diario insistió en reiterar sus críticas y en algunos casos las acompañó de una inocultable intención de ridiculizarlo. Así, a propósito de una alocución de Onganía de principios de marzo de 1968, decía que sus palabras aparecían "envueltas en una niebla expresiva demasiado persistente"<sup>40</sup>. La falta de precisión conceptual parecía irritar a los editorialistas, pero si algún alto funcionario planteaba claramente ideas contrarias al liberalismo político, descargaban sobre él sus habituales reprobaciones, invocando la tradición ideológica e institucional del país. Esto sucedió, por ejemplo, cuando en abril de 1968 el ministro del Interior, Borda, sostuvo que su concepción de la política era opuesta al individualismo, doctrina, decía, centrada en la relación Estado-ciudadano y que reducía la participación política al acto de depositar el voto el día de las elecciones. Como alternativa, Borda, proponía crear entre gobernantes y gobernados asociaciones, corporaciones y centros culturales que abarcaran todos los aspectos de la vida nacional y permitieran una participación más fecunda de la comunidad. Consciente de que sus palabras disgustarían a los sectores políticamente liberales, el ministro cerró así su disertación: "Hoy he suministrado una buena cantidad de argumentos a quienes nos tildan de corporativos. He hablado de cambio de estructuras, de participación de la comunidad, de conducción enérgica del proceso de desarrollo (...) este proceso está en marcha con tal fuerza, que no podríamos detenerlo aunque quisiéramos (...) los que no lo sientan así quedarán aplastados por los hechos o simplemente marginados del país"<sup>41</sup>. *La Nación* recogió la alusión y consideró que Borda no había dicho nada nuevo, sólo había reiterado nociones preocupantes para la opinión pública. Con ironía, afirmaba: "No sería inoportuno agregar que el liberalismo que rechaza el ministro del Interior está en el fondo de la política económica de la Revolución, tan eficazmente conducida por el doctor Krieger Vasena"<sup>42</sup>. Desde

las páginas de la revista pro-radical *Inédito*, también Raúl Alfonsín criticó a Borda. Objetaba el carácter antidemocrático de sus ideas y sostenía que con la política llevada adelante en el orden económico, que definía como liberalismo trasnochado, "se empobrecía al país y se lo sometía a las grandes metrópolis del capital"<sup>43</sup>. El conflictivo discurso de Borda fue objeto, además, de severas recriminaciones formuladas por el Instituto de Economía Social de Mercado, entidad de propaganda ideológica favorable al liberalismo económico bajo la conducción política e intelectual de Álvaro Alsogaray. Esa asociación sostenía que las expresiones del ministro implicaban una tergiversación de los objetivos originarios de la revolución del 28 de junio de 1966<sup>44</sup>. Como para demostrar la complejidad del panorama ideológico, terció en el debate el semanario nacionalista de derecha *Azul y Blanco*, para quien todo el espacio dedicado por los grandes diarios al corporativismo y los argumentos antiliberales de los altos funcionarios políticos constituían una gran comedia de equivocaciones. Los funcionarios acusados de "corporativistas" que participaban en el gobierno, decía el semanario nacionalista, en realidad aportaban una cortina de humo y de confusión a la entrega de la soberanía política y económica a favor de los grandes centros de las finanzas internacionales<sup>45</sup>. En fin, en medio de los resquemores desatados por sus proyectos, el general Onganía negó en un discurso posibles desviaciones antidemocráticas. Al analizar esa exposición del presidente, el matutino le reconoció un avance y, como quien evalúa a un alumno en un examen, afirmó: "Su pensamiento ha sido esta vez nítido y estimulante, pero (estimaba que cabían igual las reservas) en el espacio que media entre las palabras del discurso y las evidencias de la realidad"<sup>46</sup>; y, en estricta armonía con esa observación propia del campo de la pedagogía, recordaba que en el ámbito de la educación el gobierno persistía en la aplicación de malas políticas a pesar de anunciar con frecuencia buenas intenciones.

La afinidad de *La Nación* con las opiniones de los grandes propietarios rurales lo llevó, a partir de mediados de 1968, a reproducir a menudo las objeciones de éstos a la política económica dirigida por Krieger Vasena. Asumía como diagnóstico adecuado de la situación vigente las protestas de las entidades agropecuarias contra la política oficial hacia el sector: retenciones a las exportaciones, falta de créditos, precios máximos para algunos productos, aumentos de impuesto inmobiliario. Y aportaba nuevos argumentos para alertar sobre las peligrosas consecuencias de esas condiciones adversas<sup>47</sup>. Cuando coyunturalmente el Estado satisfacía alguna de esas demandas o al menos

acordaba ciertas respuestas para mejorar los ingresos rurales, invariablemente el matutino evaluaba esas iniciativas como positivas y estimulantes para el conjunto de la economía nacional. De todas maneras, en tanto la tendencia principal de la política de Krieger Vasena priorizaba la Argentina "industrial" sobre la "campestre", el tema de la insatisfacción de los requerimientos del agro se mantuvo en las reflexiones editoriales. Por momentos las requisitorias de las corporaciones rurales contra el gobierno alcanzaron gran intensidad. La CARBAP denunció las posibles vinculaciones entre la política económica lesiva de los ingresos del agro y el interés del capital financiero nacional e internacional por comprar tierras a precios artificialmente bajos. Pero las críticas del diario a Krieger Vasena no llegaban a puntos extremos cuando abordaban las cuestiones concernientes al sector rural, y revelaban el deseo de buscar cierto equilibrio, sin negar legitimidad al descontento de los productores agropecuarios. Trataba de hacer comprender al gobierno los reclamos agrarios y a los propietarios rurales les pedía más tolerancia con las políticas oficiales. Para *La Nación*, el proceso económico se hallaba globalmente bien encaminado, pero debía mejorarse con respuestas a las demandas agrarias. Así, frente a las protestas de una coalición de corporaciones agropecuarias para exigir la mejora del ingreso rural, el análisis editorial consideraba justa la preocupación pero al mismo tiempo decía: "Nadie negará que se está ahora en el principio de una rectificación saludable, de una tendencia más comprensiva de los intereses descuidados durante tantos años por la desaprensión oficial, pero esto no supone que vayan a corregirse inmediatamente los efectos perturbadores que siguen agobiando a los productores"<sup>48</sup>.

Así como había denunciado en otras épocas los abusos policiales, el matutino volvió a hacerlo durante la presidencia de Onganía cuando trascendió que en la Provincia de Buenos Aires se habían infligido torturas físicas a detenidos. La ley suprema, recordaba, había establecido hacía más de un siglo que nadie podía ser obligado a declarar contra sí mismo y desde antes aún se habían prohibido los tormentos. Era inadmisibles, afirmaba el diario, que tales hechos se hubieran producido en el país, y vinculaba esos delitos con un clima global de desprecio por los principios legales fundamentales<sup>49</sup>. En un plano distinto, la idea de que la sociedad podía retroceder, con abandono de principios y logros alcanzados en otros momentos, llevó a *La Nación* a formular fuertes objeciones a un anteproyecto de ley de educación dado a conocer por el gobierno a fines de 1968. En ese texto había dos artículos que le parecían inaceptables. En uno se violaba el

espíritu de la Ley 1.420 al admitir la existencia de zonas del país donde no hubiese escuelas y, en consecuencia, exceptuar a los niños allí residentes de la obligación de instrucción elemental. Era un deber del Estado crear escuelas, aseveraba el comentario editorial, y no cabía convertir en legal una situación inadmisiblemente de atraso educacional. Otro artículo del anteproyecto preveía la supresión de la gratuidad de la enseñanza en el nivel secundario. Con indignación, el matutino resumía su juicio: "Quiénes éramos a fines del siglo XIX un modelo de democracia volveríamos ahora a formas que son contrarias a la esencia de los criterios republicanos"<sup>50</sup>. A su entender, era inadmisiblemente reducir el papel del Estado en la tarea educativa e instaba a rechazar ambas innovaciones por su carácter regresivo.

El deterioro de la aceptación pública del gobierno de Onganía alcanzó su cenit en el año 1969. Los movimientos populares de protesta irrumpieron en la escena política con un estilo y una frecuencia que sorprendió a sus mismos protagonistas. Con un sentido muy distinto del imaginado por los ideólogos del régimen militar, los municipios y los vecinos cobraron una inesperada dimensión política. Con el sufijo aumentativo *azo* se construyeron algunos neologismos que desvelaron a los funcionarios oficiales. Cuando todavía esos estallidos no habían adquirido sus mayores magnitudes, *La Nación* los abordó editorialmente con un sesgo ligeramente jovial, aunque no carente de preocupación. Evocaba en un editorial que para las "viejas" teorías la vida cívica de carácter local constituía el peldaño inicial de la participación ciudadana. No habían faltado, aseveraba, quienes creyeron que en la Argentina no existía una efectiva voluntad popular interesada en intervenir en los asuntos de orden municipal. Sin embargo, numerosos episodios producidos en distintas localidades del país, donde el vecindario se movilizaba para oponerse a decisiones tomadas por el intendente hasta hacerle dar marcha atrás y aun obligarlo a dimitir, parecían demostrar, decía, el error de suponer esa indiferencia. Las movilizaciones populares revelaban, según el matutino, que "no se ha perdido en el pueblo argentino la conciencia de que integra una comunidad democrática, en la cual la soberanía pertenece al pueblo, y que éste tampoco ha perdido la voluntad de labrar su destino por sí mismo"<sup>51</sup>. A su entender, era imprescindible observar los estados de ánimo populares, que no entendía como resultado de la acción de ningún grupo o facción orientado ideológicamente sino como expresión de la exigencia de una ciudadanía dispuesta a ocupar su lugar en la sociedad y a ejercer sus derechos. En ese contexto de multiplicación de tensiones a nivel local, en la provincia de Córdoba el gobernador

Caballero creyó conveniente instituir por decreto un Consejo Asesor, para viabilizar la "participación de la comunidad". El diario no ahorró términos para criticar la iniciativa. La descalificó por su neta inspiración corporativista como un falso mecanismo de participación. Sus objeciones desbordaban el caso cordobés. Existía la sospecha, aseveraba, de estar ante el primer paso de un plan mucho más ambicioso y, posiblemente, la medida adoptada por Caballero fuese sólo una etapa preliminar del aún confusamente anunciado "tiempo político" prometido como muy próximo desde las altas esferas del gobierno nacional<sup>52</sup>.

*La Nación* seguía con atención el descontento generado en la comunidad universitaria por la política del gobierno militar. En ella veía una total falta de proyectos de mediano y largo plazo, y una simplificación de los problemas al buscar como única meta la tranquilidad y la ausencia de agitación estudiantil. Auguraba, en marzo de 1969, que con miras tan estrechas las autoridades no conseguirían, tampoco, mantener esa ansiada calma en las aulas<sup>53</sup>. Es más, la reflexión revelaba cierta alarma y hacía notar que profesores de las más diversas tendencias de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, incluso aquellos opuestos a la orientación imperante en las casas de altos estudios antes de la intervención de 1966, manifestaban abiertamente su descontento con las medidas discriminatorias y contrarias a la libertad de cátedra adoptadas por las autoridades. La poca importancia acordada por el gobierno a esos signos de disconformidad les provocaba asombro<sup>54</sup>.

En un clima social y político caracterizado por el aumento de los conflictos y tensiones, el presidente Onganía enunció, al evaluar el camino transitado por su administración, una metáfora por demás elocuente: "Estamos en el nivel más alto de la escalera, próximos a llegar a la plataforma, fatigados porque hemos dejado mucho en el recorrido (...) tenemos que tener cuidado, no nos vayamos a caer, porque el golpe va a ser serio y tendremos muchas dificultades para tomar el ritmo ascendente"<sup>55</sup>. En su alocución, el presidente volvía a recordar su teoría de los tres tiempos, señalaba la proximidad del fin del "tiempo económico", estimado por Onganía como una etapa *coyuntural* previa al "tiempo social", al que definía como *estructural*, y omitía toda referencia al "tiempo político", dejado para un futuro no definido. A *La Nación* la imagen de escalera, si no brillante, al menos le parecía exacta. Ironizaba sobre el tiempo social, pero tomaba al pie de la letra el riesgo de la caída, que consideraba probable si se cambiaba la política económica, en especial, en su aspecto monetario. Aunque los hombres del go-

bierno creyeran que lo realizado en lo económico no era una revolución sino una mera tarea coyuntural, decía, debían entender que se trataba del único dominio de su acción donde habían alcanzado efectivos logros y se encontraban “las únicas luces plenamente favorables que hasta ahora han alumbrado la labor oficial”<sup>56</sup>. El hecho de localizar los riesgos mayores en la economía, no le hacía desatender otros fenómenos susceptibles de crear problemas en el futuro. Así, el asalto a algunos puestos militares, el robo de armas en un polígono del Tiro Federal en Córdoba y el intento de copamiento de la planta transmisora de Radio El Mundo, llevaron al matutino a llamar la atención en un editorial secundario sobre la aparición de actos de violencia cuya autoría se adjudicaba a sectores radicalizados del peronismo y a lo que, a falta de mejor término, podía denominarse el “comunismo de tipo nacionalista”. El gobierno debía, en su opinión, reprimir a los grupos terroristas, si bien el diario desechaba su eventual crecimiento dado el rechazo generalizado de la población<sup>57</sup>.

En la variada agenda temática de los editoriales de principios de mayo de 1969, el matutino abordó el problema presupuestario de las universidades y criticó la equivocada política oficial generadora de nuevos conflictos al no atender debidamente sus requerimientos económicos. Comentaba la cuestión a raíz de que el gobierno, según había trascendido, estaba analizando la posibilidad de otorgar subsidios a las universidades privadas, alternativa rechazada por *La Nación* con términos enérgicos: veía la idea como un despropósito, en especial, a la luz del pésimo estado financiero de las universidades públicas<sup>58</sup>.

El tema económico volvió a ocupar al editorialista a propósito de los aumentos de los precios del transporte ferroviario y de los combustibles. El alza de esos costos, decía, determinaría el aumento de todos los precios en cadena, como una reacción química. Las consecuencias psicológicas y económicas eran, en su opinión, impredecibles. Daba un alcance sociológico a la reflexión al agregar que las medidas adoptadas lesionaban particularmente a las clases medias que constituían “como se ha dicho muchas veces la columna vertebral de la sociedad moderna”<sup>59</sup>. Con inocultable dramatismo, el texto terminaba deseando que no se abriera un proceso inflacionario capaz de malograr todo lo alcanzado durante los dos años precedentes. Sin nombrarla, la “escalera” en cuyos peldaños superiores, según Onganía, se hallaba el gobierno, estaba presente en esas líneas cargadas de incertidumbre. Tampoco se aludía allí a ninguno de los “tiempos” mencionados desde el poder político. Pero en esos días ya comenzaba otro “tiempo”, no incluido en la recurrente trilogía oficial: el

"tiempo de tragedia", como lo denominaría el periodista inglés Andrew Graham-Yooll en un libro prologado por Rodolfo Terragno, en cuyas páginas sistematizaba la cronología de los años de Onganía. Es interesante destacar que en su prólogo, Terragno sostenía que la "Revolución Argentina" había comenzado como un intento de industrializar el país y hacerlo más independiente económicamente, proyecto frustrado por la ofensiva desatada por los sectores económica, política y culturalmente dominantes que, además, "detentaban la propiedad de los más valiosos medios de difusión"<sup>60</sup>.

El anuncio de Onganía con respecto al interés del gobierno por promover la fabricación de papel para diario dio nuevo motivo a *La Nación* para criticar a las autoridades nacionales. El papel para diario era un insumo cuyas implicaciones políticas resultaban muy claras. La época en que el Estado había utilizado su distribución preferencial como modo de incidir sobre el libre desenvolvimiento de la prensa, recordaba el matutino, con mención específica del IAPI durante el peronismo, estaba aún fresca en la memoria. La iniciativa estudiada por el gobierno suponía la eventual creación de una empresa mixta en la cual el Estado tendría el 49% de las acciones y los sectores privados el 51%. Proporción peligrosa, según el editorialista, ya que le resultaría muy fácil al gobierno asegurar su voluntad frente a una multiplicidad de accionistas privados dispersos. El capital de la empresa proyectada se formaría a partir de un impuesto a la importación de papel y de una contribución estatal. *La Nación* rechazaba totalmente la idea de imponer un tributo a la importación de papel, cuyo efecto sería, afirmaba, encarecer las publicaciones en perjuicio de la sociedad en su conjunto. El comentario editorial definía los gravámenes al papel de diario como impuestos a la cultura. La tirantez de las relaciones con el gobierno y la desconfianza hacia el mismo surcaban todo el análisis, que culminaba con un alerta sobre las imprevisibles consecuencias de un monopolio estatal sobre tan estratégico insumo<sup>61</sup>.

La sensibilidad de *La Nación* ante los riesgos de la difusión de interpretaciones del pasado argentino distintas de las oficialmente consagradas, lo llevó a editorializar sobre la creciente audiencia ganada por un nuevo revisionismo de inequívoco signo de izquierda. Había, decía, quienes estaban trabajando los temas históricos desde la óptica de la "lucha de clases" y las "dominaciones imperialistas". Lo preocupante no era la aparición de nuevos aportes, argumentaba, sino que éstos se hallaran totalmente inspirados en motivaciones políticas, y si bien no había por qué cerrarse a las innovaciones teóricas y metodológicas, algo

muy distinto era aceptar la validez de trabajos carentes de los requisitos básicos de una labor académica y de investigación. Pero para poner en claro que la inquietud no emergía sólo del debate historiográfico, el diario señalaba "la presencia de los abundantes medios de difusión, en forma de revistas o historietas, que atraían principalmente a la juventud y a los sectores populares menos ilustrados"<sup>62</sup>, que proponían su nueva versión de lo sucedido en el pasado. Convocaba a responder a ese revisionismo de cuño izquierdista, pero no terminaba en ningún momento de aclarar quién y cómo debía dar la respuesta al problema.

El 29 de mayo de 1969 ardió Córdoba. Ese día el gobernador Caballero no hizo ningún discurso sobre ingeniería institucional y las formas de crear canales de participación popular distintos de los establecidos por la democracia liberal. Sus preocupaciones en esa jornada tuvieron un objeto mucho más práctico: enfrentar la rebelión popular. El general Lanusse, en ese momento comandante en jefe del Ejército, caracterizó el evento con dimensiones múltiples: "Con el cordobazo, saltaron a la mesa desde la presencia de Dios y de su Iglesia en los problemas temporales hasta la crisis del autoritarismo, la resistencia a Buenos Aires, la protesta de los radicales, la explosión de los barrios peronistas, la repugnancia al corporativismo, la vocación protagónica de los argentinos y, por supuesto, la actividad de los núcleos subversivos que encontraron allí óptimas condiciones para salir a escena"<sup>63</sup>. Desde el otro lado de las barricadas, Agustín Tosco reconstruyó la secuencia de una movilización sindical y estudiantil de protesta contra el gobierno, convertida en estallido popular cuando la represión cobró la vida del obrero Máximo Mena del Sindicato de Mecánicos. Fue, escribió Tosco, "la rebeldía contra tantas injusticias, contra los asesinatos, contra los atropellos"<sup>64</sup>. El general Onganía y sus ministros atribuyeron los sucesos a los grupos subversivos. El gobernador Caballero incursionó en las causas sociales del fenómeno y señaló que sin ellas el activismo más extremista no hubiese tenido eco. Con una singular referencia clasista a la estructura urbana, Caballero afirmaba: "Los barrios burgueses colaboraron en forma espontánea y entusiasta en la acción, dando material combustible a los revoltosos"<sup>65</sup>. *La Nación* se colocó frente al Cordobazo en una actitud reflexiva, e intentó incorporar todos los componentes significativos de la situación. El descontento de la población y las acciones de los grupos subversivos eran relacionados con las condiciones favorables para el desorden generadas por el modo de actuar del gobierno. Acerca de los grupos extremistas, aseveraba que su influencia crecía en

razón del "vacío de líderes naturales" generado por la veda política impuesta por la dictadura. Recordaba a las autoridades que la prensa democrática había previsto la aparición de crisis como las ocurridas. Decía que en la emergencia el gobierno debía actuar con la severidad del caso para contrarrestar las acciones subversivas, pero esto no le impedía destacar los sucesos de Córdoba como el cierre de una etapa de tanteos y experimentos para las autoridades surgidas del golpe militar de 1966. De allí en más, aseveraba, la situación política y social del país imponía clarificar cuáles serían los rumbos a seguir por el gobierno<sup>66</sup>.

La certeza, generalizada en muchos ámbitos, acerca del crecimiento de organizaciones extremistas dispuestas a llevar adelante acciones armadas para tomar el poder, planteó muy pronto la discusión sobre los métodos apropiados para combatir- las. Quizás consciente de los peligros de la represión cuando ésta transgredía límites, *La Nación* abordó el problema de la tortura. A raíz de la denuncia de tormentos infligidos a un estudiante universitario de izquierda en dependencias de Coordinación Federal, el matutino expresó durísimas críticas a esos procedimientos definidos como ominosos y practicados desde hacía un tiempo en el país. Había que poner coto a esas prácticas, decía, y encarar una campaña de educación sobre la misión represiva. Con términos lapidarios aseveraba: "Es tanto o más delincuente quien cobardemente mata o hiere o veja moralmente amparado en la fuerza que se le ha confiado que quien desprecia la vida ajena en un artero atentado político"<sup>67</sup>. E involucraba a las más altas autoridades nacionales al sostener que éstas ya no podían mantenerse indiferentes ante lo sucedido. Con el mismo espíritu de justicia, en esos días, el editorialista había saludado con satisfacción la decisión del Parlamento alemán sobre la imprescriptibilidad de los crímenes nazis; de aceptarse la tesis del perdón, decía, se hubieran convalidado delitos cometidos contra el género humano<sup>68</sup>. Cuatro meses después el matutino se ocupaba de Rudolf Hess, adláter de Hitler que cumplía su condena a perpetuidad en la prisión de Spandau, y de él afirmaba: "La magnanimidad le podrá franquear las puertas de la celda, pero no lo salvará del desprecio que le perseguirá más allá de la muerte"<sup>69</sup>. Para satisfacción del diario el pedido de libertad interpuesto por los representantes legales de Hess fue denegado.

Con el Cordobazo se hizo notorio para muchos actores políticos, tanto afines como opositores al régimen militar, que había comenzado la cuenta regresiva de la experiencia de poder instaurada tres años antes. Era evidente, sin embargo, que quienes podían decidir un cambio inmediato de situación eran las fuerzas

armadas. Desde su columna de la revista *Inédito*, Alfonsín reflexionaba a la luz de la crisis cordobesa sobre las responsabilidades del Ejército, y lo estimulaba abiertamente a terminar la experiencia autoritaria<sup>70</sup>. En lo inmediato, la consecuencia de lo ocurrido en Córdoba fue la renuncia del gabinete nacional, con el alejamiento de Krieger Vasena y de Borda. Se iba así el miembro del equipo gubernamental más elogiado por *La Nación*, pero también partía el ministro criticado frecuentemente por su corporativismo. Se abrió entonces un compás de espera, durante el cual Onganía pronunció un discurso cuyo análisis suscitó un comentario relativamente neutro por parte del diario, donde se señalaba que lo realmente decisivo no podían ser las palabras sino los hechos y las designaciones en reemplazo de los renunciantes<sup>71</sup>. Cuando Lorenzo Dagnino Pastore fue nombrado ministro de Economía y Trabajo el matutino le señaló que su mejor alternativa consistía en continuar la obra de Krieger Vasena. Al general Francisco Imaz, nuevo titular de la cartera de Interior, le aconsejó calmar la incertidumbre existente hablando pronto de los objetivos finales por alcanzar, y le sugirió abandonar las ideas y el estilo de su antecesor<sup>72</sup>. Pero Onganía no parecía dispuesto a producir modificaciones de fondo en su gestión de gobierno. Actor y testigo interesado, Roberto Roth narró los entretelones de ese agitado periodo. Onganía, según Roth, debió enfrentar los mismos intereses que derrocaron a Illia, sumados a la oposición al marcharse el ministro Krieger Vasena<sup>73</sup>. Como prueba de que seguramente intuía el cambio en su posición de poder, Onganía concurreó a fin de julio a inaugurar la exposición de la Sociedad Rural Argentina en un automóvil normal de ceremonial, en lugar de hacerlo, como en los años anteriores, en la carretela de la Infanta Isabel. El comentario editorial de la muestra de Palermo aludía a la complementariedad entre el campo y la industria y con cierto desdén se refería a los "espíritus estrechos" que se esforzaron sin éxito en crear antinomias<sup>74</sup>. La alusión al pensamiento presidencial sobre el fin de la Argentina campestre era transparente.

*La Nación* mantuvo su oposición a Onganía hasta que las fuerzas armadas decidieron deponerlo. Las clausuras de medios de prensa, entre ellos la revista *Primera Plana* a principios de agosto de 1969, y la ley que estableció la creación de la industria nacional de papel de diario, con intervención del Estado, medidas que afectaban directamente al campo periodístico, fueron objeto de múltiples objeciones y reservas<sup>75</sup>. La defensa de la universidad nacional y de la escuela pública, desatendidas a su juicio por el gobierno, y la posibilidad del otorgamiento de subsidios a las uni-

versidades privadas, llevaron al matutino a reiterar sus críticas a las autoridades. Como ejemplo de la difícil situación de las universidades nacionales el editorialista se ocupaba, con una pluma para nada neutra, de lamentar la situación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y describía con puntilloso realismo los inconvenientes vividos por profesores y alumnos en locales totalmente inadecuados para las funciones docentes<sup>76</sup>. En esas reflexiones, el malestar universitario aparecía relativamente justificado. Los nexos entre los errores de gestión de los mandatarios provinciales y el marco global de ilegitimidad política fueron motivo, a raíz de las protestas vecinales registradas en Cipolletti, para insistir sobre los riesgos de mantener prácticas institucionales ajenas a la tradición nacional<sup>77</sup>. Además, en la mencionada localidad rionegrina, las protestas no podían asociarse en absoluto a iniciativas extremistas como se había hecho en otros casos análogos. En fin, en tanto el gobierno revelaba no haber abandonado sus ideas favorables a encontrar apoyos sindicales y periódicamente hacía alusiones o tomaba iniciativas susceptibles de ser interpretadas como "comunitaristas" o "corporativistas", el matutino lo criticaba con las ya habituales referencias a su carácter antidemocrático. Si las afirmaciones gubernamentales no eran claras y dejaban lugar a dudas sobre sus intenciones, se las descalificaba, además, por confusas<sup>78</sup>. Así, en un arco complejo y contradictorio, iban prefigurándose cada vez con mayor fuerza en las consideraciones expuestas por el diario los distintos actores establecidos en la escena política en una franca actitud de oposición al régimen autoritario. Lo interesante de destacar es que de esos textos editoriales se desprendía la legitimidad de las protestas de una manera muy clara.

Los ataques provenientes de algunos órganos periodísticos debieron estimular a los hombres del gobierno a pensar sobre la libertad de prensa. Onganía tuvo la posibilidad de explayarse sobre el tema en la celebración del octogésimo aniversario del Círculo de la Prensa. El presidente discurrió sobre los medios de comunicación, convertidos, a su criterio, en grandes empresas comerciales movidas exclusivamente con fines económicos y financieros. Para lograr su cometido, la prensa condicionaba las ideas de sus lectores sin preocuparse por los principios éticos. Frente a esas conductas negativas, el Estado debía, según el general Onganía, proteger a la comunidad evitándole una situación de indefensión y, además, con cierto hermetismo, sostuvo que la libertad no podía ser el privilegio de unos pocos. El diario comentó editorialmente el mencionado discurso; señaló, con estilo pedagógico, que cuando se hablaba de temas tan importantes se

debía tener en cuenta la repercusión nacional e internacional de lo expresado, en especial si las autoridades en cuestión ya habían afectado negativamente la libertad de prensa. Naturalmente, *La Nación* no concordaba con la visión presidencial sobre el tema. Hacían falta, afirmaba, empresas fuertes económicamente para brindar un buen servicio a lectores exigentes, y sólo el éxito en las ventas podía asegurar la autonomía de sus opiniones; de lo contrario, se debía depender de intereses sectoriales. Así explicaba las bases de la independencia de su pensamiento editorial. La revista *El Político*, defensora de Onganía, se encargó de darle respuesta en términos por demás contundentes. Dicha publicación caracterizó al diario como un vocero de la vieja Argentina y sostuvo: "Los órganos de prensa del liberalismo, que prácticamente salvo honrosas excepciones, monopolizan el periodismo argentino, sólo aseguran la libertad de expresión de los monopolios internacionales y de sus aliados internos o idiotas útiles nativos"<sup>79</sup>. El tema de la libertad de prensa también concitaba la preocupación del coronel retirado Juan Francisco Guevara, quien como hemos señalado anteriormente había sido uno de los redactores de los documentos de base de la llamada Revolución Argentina en junio de 1966; en 1970 era embajador en Venezuela, y alternaba esa tarea con la redacción de meditaciones sobre el ocaso de la experiencia autoritaria. Desde una óptica identificada con las ideas políticas defendidas por el nacionalismo de derecha, el coronel Guevara escribía: "La libertad de prensa ha llegado a ser privilegio de unos pocos, sostenidos por sólidas situaciones económicas, internas e internacionales; han obtenido la habilidad de crear un *status* de magnitud mediante el cual convocan a rendir cuentas ante sus tribunales a cualquier persona por alta y respetable que sea su investidura y aun a las naciones y a sus gobiernos"<sup>80</sup>. La conclusión de Guevara sobre el problema de la prensa era que se debía encontrar un camino intermedio entre la confiscación estatal y la total libertad, para sanear la comunicación social y hacerla operar dentro de normas políticas y éticas claras. Mientras tanto, la política del gobierno militar con respecto a la libertad de prensa siguió revelando su carácter errático, aun cuando tendencialmente mantuviera su orientación restrictiva. A fines de mayo de 1970, el Poder Ejecutivo dispuso la clausura del diario *Crónica*, medida derogada días después.

En los últimos días de mayo de 1970 fue secuestrado el general Aramburu. El ex presidente era considerado por diversos sectores políticos como posible reemplazante de Onganía para encabezar un proceso de rápida reconstrucción de las instituciones democráticas. Esa opinión no era generalizada. Así, por

ejemplo, la revista *Extra*, dirigida por Bernardo Neustadt, favorable a la continuidad de Onganía, resaltaba en su edición del mes anterior al luctuoso suceso un título que resumía su punto de vista sobre el general Aramburu: "Inhábil para acceder nuevamente al sillón de Rivadavia"<sup>81</sup>. En un clima cargado con las más controvertidas presunciones no faltaron quienes adjudicaron responsabilidades en el rapto al gobierno; otros creyeron que se estaba ante un autosequestro. En un principio se excluía la idea de atribuir la autoría del suceso a grupos extremistas. Desde todas las perspectivas contrarias al gobierno se coincidía en que éste ya tocaba a su fin. Como resumen de un estado de ánimo posiblemente común a los dirigentes políticos más próximos a Aramburu, Pablo González Bergez, según declaraciones recogidas por *Periscopio*, revista que había sustituido a la clausurada *Primera Plana*, decía: "Es el momento para una decisión militar; ahora, ya... Hace cuatro años derrocaron un gobierno constitucional alegando vacío de poder. ¿Me quieren decir qué es esto?"<sup>82</sup>. Probablemente para mostrar que no permanecía impasible, el gobierno de Onganía instituyó la pena de muerte para castigar acciones terroristas y secuestros. Aunque reconoció la dramaticidad de las circunstancias, *La Nación* no dejó de ser parca en el comentario de esa decisión. Consideró que en la arquitectura del texto legal parecía haberse tenido más en cuenta los efectos psicológicos que los resultados jurídicos y, al mismo tiempo, apremió a las autoridades a identificar y detener a la brevedad a los responsables del delito<sup>83</sup>.

Onganía cayó. La Junta de Comandantes decidió poner término al ejercicio del general-presidente que había considerado poder gobernar con independencia de ella. Para el matutino esa destitución era necesaria. Cabía abrir una nueva etapa para lo cual era imprescindible, aseveraba, formular objetivos políticos claros y dejar atrás la incertidumbre mantenida durante la gestión de Onganía<sup>84</sup>. Pero el diario se cuidaba de no confundir los distintos aspectos del problema. Por ello llamaba la atención sobre la necesidad de preservar los lineamientos de la política económica iniciada por Krieger Vasena, cuyos resultados le parecían muy positivos. A su entender, correspondía trazar con claridad el futuro del desenvolvimiento político dentro de los carriles de las instituciones democráticas, sin minimizar los riesgos y debilidades propios de un sistema cuya característica habían sido las crisis recurrentes. Ya sin Onganía, el interlocutor eran los "apresurados" por las elecciones. Con nitidez meridiana, argumentaba: "La magnitud de nuestros reiterados fracasos entraña una lección, dirigida, especialmente, a los apresurados que creen

factible transformar un desequilibrio de fondo en un paisaje edénico por el simple mecanismo de un raudo proceso electoral. La realidad es más difícil, porque lo que debe ser asegurado no es el triunfo de un partido sino el sostenimiento de la democracia<sup>85</sup>. El razonamiento evitaba subterfugios y señalaba la posibilidad de que el cincuenta por ciento de los futuros electores decidiera convertirse en sostén de una dictadura civil. En consecuencia, sugería evitar la premura en materia de calendarios electorales. No era difícil intuir en el horizonte la preocupación por un retorno peronista. En realidad *La Nación* había enunciado el dilema que le iba a tocar enfrentar al general Roberto Marcelo Levingston, sucesor de Onganía.

### *Esperando a Perón*

Con satisfacción, el diario evaluó la primera alocución del nuevo presidente. De ella destacaba el mantenimiento de la política económica, las aspiraciones a restituir en el futuro la vida plenamente democrática de las instituciones y a preservar la libertad de expresión. Fiel a su estilo, aconsejaba a las autoridades no apartarse de esos lineamientos y no incurrir en precipitaciones susceptibles de conducir luego a nuevos fracasos. En lo inmediato, sugería al nuevo presidente preocuparse por hallar los hombres adecuados para integrar un gabinete confiable para la opinión pública<sup>86</sup>. La designación de Carlos Moyano Llerena en el estratégico Ministerio de Economía y Trabajo, satisfizo al diario; el funcionario anunció la continuidad de la política seguida en el área desde marzo de 1967. La Unión Industrial Argentina, en cambio, manifestó inmediatamente su disconformidad con los planteos del nuevo titular de la cartera económica, cuya decisión de disminuir los aranceles proteccionistas era criticada por entrañar, decía dicha entidad, riesgo de desaparición para una parte de la industria local. Sobre un tema que preocupaba en esa época, la UIA objetaba la orientación oficial porque terminaría transfiriendo muchas empresas nacionales a capitales extranjeros<sup>87</sup>.

La discusión sobre los aranceles proteccionistas también se daba en las actividades directamente ligadas a la prensa. La posición de las cámaras que representaban a las empresas periodísticas era exactamente contraria a la expresada por los industriales. El primero de agosto de 1970 debía entrar en vigencia un gravamen del 10% a la importación de papel para diario cuya finalidad era crear las condiciones para el desarrollo de una industria

nacional del mencionado insumo. *La Nación* coincidía con la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) en objetar la aplicación del tributo. Ya no rechazaba de plano la idea de estimular la fabricación de papel, vistas las modificaciones que en su momento se habían introducido en las primeras iniciativas más "estatistas". Pero, de todos modos, el diario continuaba pensando que no se debía gravar la importación de papel. Aconsejaba estudiar mejor la forma de solucionar el problema y en lo inmediato no tomar decisiones cuyas consecuencias perjudicarían al periodismo en su conjunto y, naturalmente, a los lectores<sup>88</sup>. Difícilmente el editorialista hubiese podido intuir que había incursionado en uno de los temas que años después más dividirían a los medios de prensa del país. En un futuro cercano, en aspérrimos debates a *La Nación* le tocaría defender el proteccionismo y lo que muchas veces había denominado el "impuesto a la cultura".

Las ideas del matutino favorables a la continuidad de la política económica iniciada con Krieger Vasena, estaban lejos de ser compartidas por otros actores políticos y sociales. Desde las organizaciones sindicales se multiplicaban las críticas al gobierno. La CGT culminaba un proceso de reunificación superador de las divisiones de años anteriores. Sin duda para tratar de encontrar mejores vínculos con el sindicalismo, Levingston había designado secretario de Trabajo a Juan Alejandro Luco, de filiación peronista. Pero el entendimiento resultaba difícil de lograr. La principal demanda cegetista era el aumento de los salarios en una proporción resistida por autoridades y empresarios. *La Nación* se hacía eco de las objeciones de la Unión Industrial Argentina ante los pedidos de mejora de los salarios, que consideraba no podían acordarse sin poner en peligro la estabilidad económica alcanzada<sup>89</sup>. La CGT, en busca de mayor protagonismo político, había elaborado un programa de gobierno alternativo y convocaba, en setiembre de 1970, a todos los sectores sociales a sumar sus coincidencias. La declaración sindical rechazaba el destino, decía, de convertir al país en una "factoría próspera". y reivindicaba la propuesta que desde hacía años defendía el peronismo. Con energía, el matutino negó a los dirigentes sindicales autoridad moral para hablar en nombre del movimiento obrero, en razón de su subordinación a estructuras partidarias. Les recordaba, además, que con un programa parecido habían contribuido a socavar metódicamente al gobierno constitucional de Illia. En fin, descalificaba los objetivos buscados con el argumento de que sólo se quería someter la economía al poder omnimodo del Estado<sup>90</sup>. Días después, el diario comentaba con preocu-

pación la decisión del gobierno de mantener la veda impuesta a los partidos políticos, y la relacionaba con el crecimiento del poder de los sindicatos. Con una situación como la existente se daba, en su opinión, a las organizaciones sindicales la oportunidad de poseer locales y fondos para gravitar sobre las actividades partidarias que, si bien no estaban legalmente reconocidas, seguían existiendo en la práctica<sup>91</sup>. Así, después de haber aconsejado al general Levingston cuando se instaló en el poder no ceder a la presión de los "apresurados" por los calendarios electorales, cien días más tarde le explicaba cuáles eran las consecuencias de mantener excluidos a los partidos de la vida política. Quizás convencido de haber encontrado su propia solución al dilema, el presidente optó por modificar la política económica y buscar nuevas alianzas. Según escribió Oscar Alende, quien tuvo influencia sobre las orientaciones del gobierno, mediante un golpe palaciego Levingston decidió cortar la continuidad de las conducciones económicas iniciadas desde Krieger Vasena<sup>92</sup>. Coincidencia sugerente, Aldo Ferrer, ministro bonaerense de Alende en 1958, fue designado titular de Economía por el general Levingston. El nuevo ministro adoptó medidas favorables a las empresas de capital nacional y al desarrollo industrial, y mantuvo orientaciones en el ámbito agrario globalmente criticadas por los empresarios del sector.

Para *La Nación*, lo más inquietante de los cambios registrados en la cúpula del Estado era si con ellos se intentaría "ganar adhesiones masivas y preparar el terreno a fin de encontrar vasta resonancia electoral"<sup>93</sup> para un eventual movimiento político creado al amparo del poder. Según su reflexión, esa vía podía llevar a las fuerzas armadas al estado deliberativo y abrirlas a tentaciones banderizas. Para completar el análisis de la situación, el diario recordaba que la amenaza de los grupos extremistas exigía la unidad militar si se quería preservar el tradicional estilo de vida del país. La invalidación ideológica de los cambios no podía presentarse en términos más catastróficos. El contexto latinoamericano debía contribuir al desasosiego del editorialista. En Perú, desde hacía dos años el general Velazco Alvarado llevaba adelante un intento de transformación revolucionaria de la economía y de la sociedad. En la vecina Bolivia se terminaba de instalar en el poder el general Juan José Torres, con aliados y propuestas más radicalizados que los de la experiencia peruana. En Chile, Salvador Allende, al frente de una coalición marxista-leninista, se aprestaba a ser investido presidente.

*La Nación* reflejó editorialmente el malestar creciente de los sectores empresarios disconformes con la política económica del

ministro Ferrer. Para contrarrestar las críticas que recibía de los diarios, Levingston reunió a los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno y expuso su pensamiento sobre la función de los medios de comunicación, con lo que abrió, como si tuviera pocos, un nuevo frente de conflicto. Condenó, como lo había hecho Onganía un año antes, el carácter mercantil de la prensa, al equipararla con los mercaderes que en las ferias vendían baratijas. En opinión del presidente, los medios de comunicación eran un arma de formación intelectual para plasmar el alma nacional y no debían apartarse de esa misión. Al editorialista del matutino le pareció imperdonable que un presidente de la República hubiera hablado de ese modo de la prensa. Uno a uno, el texto desestimaba con rigor e ironía los argumentos expuestos por Levingston. La publicidad, decía, no podía considerarse un negocio, sino la fuente de independencia de juicio y, allí donde no había ingresos legítimos, los medios se alimentaban económicamente de lo que suele llamarse "el fondo de los reptiles". El aviso publicitario, argumentaba, no creaba ataduras hacia la empresa contratante, al contrario, aseguraba la mayor independencia de un diario <sup>94</sup>.

En esos mismos días, el matutino abordaba el otro gran tema de preocupación de la prensa local: la fabricación nacional de papel. El gobierno ya había realizado los estudios previos y había distribuido el anteproyecto del pliego de condiciones para licitar la futura empresa de papel prensa. En un editorial se sintetizaban todas las condiciones favorables ofrecidas por el régimen de promoción industrial para el desarrollo de la actividad y se explicaban las ventajas del negocio para el futuro adjudicatario. Desgravaciones de importaciones de maquinarias e insumos, exenciones de impuestos internos, créditos privilegiados eran, entre otros, los aspectos reveladores de las excepcionales condiciones ofrecidas por el Estado. El diario criticaba a la Asociación de Fabricantes de Papel por haber solicitado al gobierno la creación de un arancel protector del 30% para gravar el papel de diario importado una vez que la planta nacional entrara en funciones. La demanda era totalmente injustificada, había dicho la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), y el matutino coincidía plenamente con esa opinión. El 10% de impuesto ya aplicado a la importación de dicho insumo, afirmaba *La Nación*, era suficiente y no podía de ningún modo ser aumentado a los límites arbitrarios pedidos por la cámara de fabricantes de papel<sup>95</sup>.

Mientras gobernó el general Levingston, el diario reiteró con asiduidad las críticas a su gestión, con una visión crecientemente

pesimista sobre su futuro. La previsible sustitución de Levingston por Lanusse inició la tercera etapa del régimen autoritario. Poco antes de realizarse el recambio, el general Lanusse expuso algunas de sus ideas sobre la necesidad de lograr una conciliación entre sectores políticos hasta entonces opuestos y superar prejuicios y antinomias, según dijo, ya pertenecientes al pasado. Para todos los observadores de la escena política, era claro que el entonces influyente militar se refería a la incorporación legal del peronismo a las luchas electorales. El diario reflexionó sobre la conveniencia de alcanzar el referido acuerdo, señalando que ello suponía un dilatado y honesto intercambio de juicios entre todos los participantes de la vida política nacional<sup>96</sup>. Una vez desplazado Levingston, el matutino se encargó de recordar a su sucesor que era necesario aclarar muy bien cuáles serían las metas de su gobierno y, especialmente, debía hacer ver a la sociedad la posibilidad del inicio de un ciclo de tranquilidad pública. Lo fundamental era evitar la reproducción de frustraciones, decía, como las provocadas por la confusión introducida por el gobierno de Levingston<sup>97</sup>. Por su parte el general-presidente recién derrocado declaraba que había caído por querer hacer una verdadera revolución ante la cual se habían coaligado todos los sectores defensores de los privilegios económicos y sociales. Naturalmente, los medios de comunicación que lo habían criticado durante su gestión estaban incluidos entre esos poderosos enemigos. La decisión de Lanusse de mantener a Ferrer al frente del Ministerio de Economía y Trabajo debió, por cierto, desconcertar a quienes esperaban modificaciones sustanciales en la conducción del área. La señal del comienzo del tiempo político, por cierto muy distinto del fantaseado por Onganía, la dio la designación de Arturo Mor Roig como ministro del Interior. Se trataba de un dirigente radical, presidente de la Cámara de Diputados en el momento de producirse el golpe de 1966. Una de las primeras decisiones del nuevo ministro del Interior fue permitir la actividad de los partidos políticos.

Cuando el presidente Lanusse convocó al país a realizar el Gran Acuerdo Nacional el diario consideró que se había cerrado una etapa en la historia del país. La idea se había planteado antes, reflexionaba, pero nadie había avanzado tan lejos y con tanta franqueza. Si con Lanusse esto podía ocurrir era, en opinión del matutino, porque él concentraba el mando político y militar; además, su trayectoria antiperonista le permitía brindar confianza a los sectores de esa sensibilidad política. Desde una perspectiva analítica que buscaba evaluar la situación con cierta objetividad, pero sin olvidar sus propios valores, *La Nación* decía:

"La incorporación de lo que se ha dado en llamar el justicialismo a la vida política activa, sin más restricciones que las surgidas de su propia sensatez, supone la existencia de garantías convincentes acerca de que tal incorporación contribuirá a consolidar una democracia cabal. La experiencia indica que no se puede tomar como un verdadero compromiso la sola palabra del jefe de ese movimiento. Para que un acuerdo sea efectivo debe tenerse la seguridad de que todas las partes comprometidas procedan con igual sinceridad y similar estimación del honor"<sup>98</sup>. Recaudos al margen, el editorial deseaba el éxito de la propuesta presidencial. El matutino se declaraba dispuesto a brindar su apoyo a ese proceso sin renunciar a sus ideas y a su tradición liberal.

Los partidos políticos comenzaron muy rápido a reorganizarse. Desde su columna editorial, el diario siguió esas actividades y opinó sobre las ideas y prácticas de los distintos partidos. El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical del Pueblo se reunió en Avellaneda para definir su futura estrategia y allí, decía *La Nación*, no habían faltado los discursos fogosos, el fervor de la barra y el pugilismo, para recomponer un cuadro familiar en dicho partido, al que reconocía su vocación democrática. El diario percibía en el discurso de los dirigentes radicales cierta vocación "socializante", susceptible de alejar el "voto independiente que más de una victoria ha contribuido a dar a ese partido"<sup>99</sup>. La otra fuerza política de origen radical, la Unión Cívica Radical Intransigente, dirigida por Oscar Alende, fue igualmente evaluada por el matutino cuando emitió sus primeras declaraciones de *rentrée*. El análisis reconocía en la UCRI una posición democrática y la evaluaba con buenas perspectivas. Si bien decía que esa fuerza política se había debilitado por sus divisiones, el editorialista la consideraba fuerte en la Provincia de Buenos Aires por haber realizado en ella una gobernación progresista, bajo la dirección de Alende, como lo reconocía "la opinión general por encima de los pleitos banderizos"<sup>100</sup>. Al retorno a la vida partidaria se sumaban los socialistas, y también para ellos el matutino tenía su expresión de buenos augurios y de aliento. La posibilidad de reunificación de los dos partidos socialistas surgidos de la división de 1958 le parecía muy importante para "sentar las bases de la reconstrucción de una fuerza expresiva de la izquierda democrática, cuyo aporte en favor del esclarecimiento de las prácticas políticas en la Argentina es bien conocido"<sup>101</sup>.

Para completar ese cuadro general de reconciliación que parecía ganar a los más distintos sectores políticos, es interesante mencionar la novedad que en esos días producía *La Prensa*, el otro tradicional diario porteño, al volver a imprimir el nombre

del presidente derrocado en 1955. A partir de la recuperación por sus anteriores propietarios en 1956, *La Prensa* había decidido eliminar el vocablo *Perón* de sus páginas, y sustituirlo por un limitado número de eufemismos, de los cuales los más recurrentes eran "tirano prófugo" y "ex dictador". Así, con los nuevos tiempos del Gran Acuerdo Nacional llegaba el *imprimatur* al proscrito apellido del ex presidente.

En el contexto de distensión de la antinomia peronismo-antiperonismo, se hacía más patente el problema de la radicalización de las ideas políticas y la aparición de propuestas de carácter anticapitalista. *La Nación* comentaba con inocultable preocupación la evolución ideológica de algunos sectores de la Iglesia que, en su búsqueda de mayor compromiso social, se definían políticamente en términos muy cercanos a los de sectores que en el país y en América Latina impulsaban salidas de izquierda o socialistas. El diario planteaba que esas nuevas corrientes religiosas jugaban objetivamente a favor de la implantación de sistemas de tipo comunista<sup>102</sup>. No menor alarma le produjo la división registrada en la misma época en otra institución, dedicada no ya al alma, sino al inconsciente: la Asociación Psicoanalítica Argentina. Un grupo disidente se alejaba de la entidad porque el psicoanálisis había sido "distorsionado por su inserción en el sistema, necesitando, para retomar su línea transformadora, un explícito compromiso con las ideologías que cuestionan el orden constituido e impulsan el poder de liberación nacional, luchando por el advenimiento de una patria socialista"<sup>103</sup>. Luego de reproducir este párrafo de la proclama de los psicoanalistas cismáticos, el editorial continuaba reflexionando sobre el peligro que suponía adherir a tales ideas cuando se trataba de profesionales cuya misión era curar a los pacientes para adaptarlos a la vida social en todas sus dimensiones.

La realización de un gran acuerdo entre todos los actores de la vida política argentina suponía un interrogante: ¿Qué pasaba con Perón y con los peronistas? ¿Se adaptarían a los usos y reglas democráticas de la nueva etapa? *La Nación* lo ponía en duda a partir de signos provenientes de las prácticas cotidianas de dicha fuerza política. Al comparar a peronistas y radicales, que realizaban elecciones internas para elegir candidatos, señalaba que los primeros se sometían a los dictados de la voluntad de su jefe y se proponían ignorar todas las reglamentaciones del Estatuto de los Partidos Políticos<sup>104</sup>. El matutino extendía la incertidumbre a las ideas defendidas por Perón en esa época, intranquilizadoras, seguramente, para buena parte de sus lectores. Eso debió suceder con el contenido de un cable publicado

en esos días, según el cual Perón estaba "trabajando en la estructura doctrinal socialista que deberá tener el futuro régimen argentino"<sup>105</sup>. El citado comentario procedía de un dirigente justicialista luego de una entrevista con Perón. El conductor del movimiento peronista hablaba con frecuencia del "siglo del socialismo", y decía que cada país debía adaptar ese sistema socioeconómico a sus propias particularidades históricas. En esa época, Perón elogiaba al "Gran Mao", y afirmaba que si en 1955 los rusos hubieran estado en condiciones de apoyarlo él se habría convertido en el primer Fidel Castro del continente.

En un clima político cargado de incertidumbres, el gobierno decidió establecer que sólo podrían ser candidatos presidenciales quienes habitaran sin interrupción en el territorio nacional a partir del 25 de agosto de 1972. Obviamente, la medida apuntaba a obligar a Perón a definir su situación no ya residencial sino política. El editorialista consideró muy importante esa decisión, que servía para aclarar el panorama político<sup>106</sup>. Igualmente positiva fue la evaluación de la resolución de Lanusse de autoexcluir su propia candidatura. Cuando estaba por expirar el plazo del 25 de agosto, Héctor J. Cámpora, delegado personal de Perón, comunicó que éste retornaría al país hacia fines de año. Ya sobre el filo de la por muchos tan esperada fecha, *La Nación* publicó un editorial titulado "El viaje que se anuncia". En ese texto, de lejos uno de los más medulares del período, planteaba con extremo realismo tres posibilidades, basadas en conjeturas que conducían a conclusiones diferentes, pero todas estrictamente focalizadas en la práctica política. La primera exploraba la eventual voluntad de Perón de reimplantar un régimen similar al depuesto en 1955. En ese caso, decía, era necesario dar "una respuesta tan clara que llegue a equivaler a una convocatoria al reagrupamiento combativo"<sup>107</sup>. La segunda posibilidad era que Perón intentara desestructurar lo realizado en materia de avance hacia la democratización, para provocar una crisis política; en tal caso, la opinión del diario era favorable a esforzarse por mantener el proyecto de reconciliación nacional ya en marcha. La tercera alternativa era que Perón efectivamente creyera en el diálogo y estuviera dispuesto a poner su influencia a favor de los dirigentes de su partido más propensos a establecer compromisos con otras fuerzas políticas, incluso con el gobierno, a fin de alcanzar la estabilidad institucional. Más allá de las tres alternativas, el matutino no dejaba de recordar que el factor clave era el comportamiento de un hombre cuyos antecedentes no inducían a confiar en él, y por ello invitaba a mantener una voluntad vigilante.

“Valorización de una etapa” fue el título del editorial donde se evaluó lo sucedido luego de que Perón llegó y desplegó una amplia actividad política, encarrilada aparentemente en la tercera de las posibilidades sistematizadas en las conjeturas del diario. Sin bajar todas las prevenciones, ya estaban allí presentes los signos que permitían pensar en Perón convertido en un viejo patriarca deseoso de buscar amigos en las filas de los adversarios de ayer. *La Nación* no recataba su alivio y satisfacción por el giro tomado por los acontecimientos. Si bien justificaba las dudas que en amplios sectores de tradición antiperonista podía generar el pasado del caudillo justicialista, como lo denominaba en esa oportunidad con una cierta neutralidad, ello no era óbice, decía, para mantener abiertas las expectativas. Entre esperanzado y con visible anhelo constructivo, aseveraba: “Aspiramos a que una nueva realidad disipe las desconfianzas subsistentes y alguna forma de acuerdo honesto y sincero revista los caracteres de una fuerza más poderosa que la proveniente de antiguas frustraciones”<sup>108</sup>. Por cierto, la etapa iniciada estaba cargada de incertidumbres, y el matutino no podía dejar de mencionarlas. Así, a la hora del balance del viaje, cuando Perón ya había retornado a España, estimó editorialmente los pro y los contra dejados por la experiencia y reconoció la dificultad para saber cuál había sido el objetivo de ese fugaz paso de 26 días y medio por el país. Luego de señalar que se podían haber esperado más resultados concretos de esa visita, fuese en la relación de los peronistas con el gobierno o con los demás partidos, negaba, sin embargo, que todo estuviera como antes de la llegada del ex presidente. El evento había trazado, en su opinión, una línea divisoria entre dos ciclos del desenvolvimiento político del país; por una parte, todos habían asumido la certeza de que, si así lo quería, Perón podía vivir en el país y, por otra, la declaración de acuerdo firmada con los demás partidos le daba al peronismo responsabilidades para el futuro<sup>109</sup>.

Mientras se registraban los mencionados cambios en la escena política nacional, ocurrían también algunas novedades significativas en el orden más doméstico del campo periodístico. El 21 de diciembre de 1972, Lanusse inauguraba en la Provincia de Buenos Aires las obras de la empresa Papel Prensa S.A. Culminaba así la primera fase del proceso sobre el cual repetidas veces se había ocupado la columna editorial. Luego de una licitación un tanto accidentada, la realización del importante emprendimiento había quedado a cargo de una sociedad cuyo presidente era César Civita, de la editorial Abril. La adjudicación de la licitación al grupo de Civita había sido impugnada por

ADEPA, la asociación que nucleaba a la prensa argentina. Dicha entidad patrocinó, además, la creación de la denominada Cooperativa de la Prensa Argentina que presentó un proyecto alternativo de fábrica de papel, pidiendo la anulación del otorgado a Civita. En esa iniciativa participaba la empresa editora de *La Nación*, que revelaba así su interés por la controvertida industria. Civita rechazó en una beligerante solicitada las impugnaciones a su ya adjudicado emprendimiento y caracterizó a sus oponentes como antinacionales y defensores de un "proyecto tapón", cuya real finalidad era bloquear el autoabastecimiento del país en papel para diario. Desafiándolos, el editor-empresario invitaba a sus oponentes a presentarse a próximas licitaciones<sup>110</sup>. Con Papel Prensa S.A. una pieza nueva había quedado incorporada a los conflictos del ámbito periodístico y a sus relaciones con el poder político.

Al iniciarse 1973 en varios análisis editoriales el matutino abordó de un modo optimista las perspectivas económicas del país. La inserción de las exportaciones agropecuarias en el mercado mundial se presentaba auspiciosa. Aumentarían los saldos exportables y mejorarían los precios. La buena situación del agro debía tener un impacto beneficioso sobre las restantes actividades<sup>111</sup>. Varias entidades empresarias exhibían una visión igualmente halagüeña de la situación económica, aun cuando no dejaban de mencionar los aspectos juzgados negativos. Como lo hacía con frecuencia, el diario recogió y comentó declaraciones de la Cámara Argentina de Comercio, de la UIA y de ACIEL. Señaló distintos puntos contenidos en las mismas y enfatizó las buenas condiciones en que globalmente se hallaba la economía argentina. La única amenaza podía, a su juicio, provenir de los errores de las políticas gubernamentales de los equipos de Lanusse o de sus sucesores luego de las elecciones<sup>112</sup>. La creación de nuevos impuestos al sector agrario, en el último tramo del gobierno militar, había generado protestas de las entidades ruralistas. El matutino se había hecho eco de esas opiniones, y señaló el carácter discriminatorio y perjudicial de esas medidas. Los derechos a la exportación y el impuesto a la tierra eran presentados como una muestra paradigmática de una política tributaria equivocada y tendenciosamente orientada<sup>113</sup>. Es interesante destacar que en todos estos comentarios se hacía evidente el interés por mostrar la existencia de condiciones objetivas favorables para la economía, en peligro de ser malogradas por equivocados manejos políticos o, en ciertos casos, por conflictos sociales. Un buen ejemplo de esto último lo brindaba una evaluación del sector automotriz, cuya producción y exportaciones habían crecido y

contaba con un previsible incremento de la demanda interna, pero la agitación política y las huelgas abundantes en Córdoba, lugar donde se hallaba localizada la mayoría de las plantas fabriles, introducían riesgos difíciles de calcular en sus efectos<sup>114</sup>.

Respecto al presente y al futuro político, el diario asumía una posición comprometida en algunos temas, pero buscaba, al mismo tiempo, mantener su neutralidad en otros. Desde una perspectiva humanista, que estimaba imposible disociar de la tradición filosófica y jurídica de nuestro país, saludaba la derogación de la pena de muerte establecida por Onganía a raíz del secuestro y asesinato de Aramburu, y recordaba su oposición a dicha medida. Se debía reprimir la subversión, afirmaba, pero no se podía aceptar la condena capital como castigo ya que eso implicaba retroceder desde el punto de vista de la civilización: "La sociedad argentina jurídicamente organizada no violará el mandato milenario y no matará"<sup>115</sup>.

Las prácticas políticas de los partidos revelaban signos que provocaban las recriminaciones del matutino, y si bien éstas no desembocaban en el escepticismo con respecto a la democracia dejaban abiertos interrogantes. El internismo en las luchas por puestos y candidaturas, librado de un modo desprovisto de ideas y con el único argumento de hacer gravitar el número de incondicionales disponibles por cada aspirante, era un rasgo de ciertos partidos que disgustaba al editorialista. Igual sentimiento de animadversión le provocaba la verticalidad incondicional abiertamente confesada en otros. También le desagradaba la formación de uniones o coaliciones compuestas por fuerzas mal definidas y siempre dispuestas a modificar sus alianzas. Aun cuando por discreción y estilo se evitaban las precisiones, no era difícil adivinar, detrás de las tres prácticas mencionadas, la alusión específica, aunque no exclusiva, al radicalismo, al peronismo y a las convergencias conservadoras. El matutino cifraba sus esperanzas en un mejor y más doctrinario comportamiento de los partidos en la lid electoral y les solicitaba decir la verdad y asumir sólo aquellos compromisos que podrían cumplir. Por si lo habían olvidado, recordaba a los candidatos el ejemplo de los hombres del pasado histórico, quienes habían vivido "sus pasiones políticas con ardor pero supieron contenerlas para bien de la patria"<sup>116</sup>. Pero corrían tiempos densos y, como analizaría días más tarde la misma columna, ni los "hombres del pasado" quedaban indemnes en la lucha política que se estaba librando en el presente. La Academia Nacional de la Historia expresaba su voz de alarma, y su inquietud era recogida por el matutino, ante la creciente utilización política e ideológica de las interpretaciones del pasado argentino.

Con una neta intención recriminatoria, la Academia sostenía en una declaración pública, citada luego en el editorial de *La Nación*: "De cara a la verdad ya no es posible ocultar por más tiempo que la historia se ha politizado y se ha comercializado. Se ha convertido a la fecha en un medio de catequización política, en un papel de negocios y en una mercancía. Se escribe historia por entregas, a pedido y a la medida requerida por la necesidad de promocionar determinada ideología"<sup>117</sup>. La reflexión se refería luego a las dificultades de quienes querían realizar investigaciones objetivas, de alto nivel científico, y recibían los denuos públicos de aquellos que sólo admitían el llamado compromiso político y social. El comentario se cerraba, en coincidencia con la posición de la Academia, con un llamado a velar para impedir el avance en la disciplina histórica de las ideas destructoras de la nacionalidad.

El diario incursionaba poco después en la sociología política comparada para quitar fundamentos a la idea que muchos, y entre ellos Perón, habían utilizado con frecuencia como *slogan*: la "violencia de arriba provoca la violencia de abajo". Venezuela y Colombia, dos democracias, habían sido acosadas, aseveraba, por la guerrilla, y algo similar había ocurrido en el Perú de Belaúnde Terry. El ejemplo inverso lo brindaba, a su entender, la Unión Soviética, país donde a pesar de la total privación de libertad no se registraba esa forma de resistencia armada. La conclusión explícita invitaba a abandonar el uso de un *slogan* carente, en su opinión, de la más mínima fundamentación histórica ni sociológica<sup>118</sup>. La pregunta no estaba planteada, pero se desprendía del mencionado texto: ¿Qué pasaría con la guerrilla una vez restablecida la democracia?

Como antaño, el editorial de la víspera de las elecciones se ocupó en trazar el cuadro de situación. Pero a diferencia de lo sucedido en otras oportunidades con opciones igualmente cruciales, no tomaba partido por ninguno de los candidatos. Sólo llamaba a todos, postulantes y ciudadanos, a meditar sobre la significación del evento. Se estaba ante la posibilidad, decía, de lograr la estabilidad gubernativa mediante elecciones totalmente libres. La crisis argentina era, a su entender, esencialmente política, y por derivación se reflejaba en la economía. Si se lograba coherencia en el manejo gubernamental buena parte de los problemas económicos estarían resueltos. De allí que invitaba a los ciudadanos a pensar en el bien común en el momento de disponer de su voto<sup>119</sup>. Luego del escrutinio, con el mismo estilo mesurado formuló la reflexión sobre el triunfo de la fórmula Cámpora-Lima, del Frente Justicialista de Liberación, con el 49,6% de

los sufragios; los radicales obtenían el 21,3% para sus candidatos Balbin-Gamond; el tercero en votos resultaba el binomio conservador Manrique-Martínez Raymonda con el 14,9%, y cuarta la Alianza Popular Revolucionaria, cuyos postulantes eran Alende-Sueldo, con el 7,4%. El justicialismo había revelado ser mayoría, decía el análisis, pero aun con los partidos pequeños que lo secundaban, no había obtenido tantos sufragios como esperaba. La mitad del país había expresado sus preferencias por otras fórmulas y eso, a su modo de ver, necesariamente debía ser tenido en cuenta por los ganadores. En consecuencia, no había lugar a ejecutar sólo el programa peronista. A los radicales, el diario les señalaba que sus votos se habían reducido numéricamente por la estrategia de adoptar una propuesta muy similar a la de los seguidores de Perón. *La Nación* prefería no considerar que los planteos favorables al intervencionismo estatal y a la distribución de ingresos defendidos por ambos partidos habían conseguido, sumando los respectivos porcentajes electorales, algo más del 71% de los votos, a los cuales cabía adicionar, según el mismo criterio programático, el 7,4% logrado por Alende-Sueldo, de la Alianza Popular Revolucionaria, cuyas orientaciones correspondían a una sensibilidad ideológica igualmente reformista en lo económico y lo social. En cambio, la reflexión destacaba como un dato nuevo en la escena política el atractivo demostrado por la fórmula encabezada por Manrique. Eso evidenciaba, según su punto de vista, el interés de la ciudadanía por la renovación de la dirigencia. Sin excesivo énfasis, argumentaba que había cierta dispersión de sufragios pasibles de converger en una fuerza centrista. El texto concluía que se había conformado un nuevo juego político entre los actores civiles y que era necesario tener en cuenta a las fuerzas armadas, cuya porción de poder no estimaba nada desdeñable<sup>120</sup>. Tal vez cierta satisfacción secundaria le fue dada al matutino por la elección complementaria de senadores de la Capital Federal, realizada a mediados de abril, con la derrota del candidato justicialista Marcelo Sánchez Sorondo, el mismo que tantas veces desde sus hojas nacionalistas había criticado al liberalismo y a *La Nación*. En el cotejo senatorial se impuso el radical Fernando de la Rúa, quien en la propaganda electoral se había comprometido, entre otros aspectos, a luchar "por la emancipación económica del país: hay que romper la cadena de los imperialismos y monopolios. Debe nacionalizarse el comercio exterior de carnes y granos. Queremos que sean nuestras las fuentes de energía"<sup>121</sup>. Por cierto, una plataforma que tampoco coincidía con las posiciones tradicionalmente defendidas por el diario. La opción "Liberación o Dependencia" había, sin duda, hecho carrera.

Sobre la hora del cambio de autoridades no faltaban signos para inquietar a quienes compartían la visión política del matutino. Rodolfo Galimberti, dirigente de la Juventud Peronista, llamaba a crear milicias populares armadas. Eso sería, sostuvo el diario, como aceptar la institucionalización del terrorismo. Alertaba, al mismo tiempo, sobre procesos similares ocurridos en otras latitudes, la Italia fascista, la Alemania nazi, la Rumania de preguerra. Todos esos casos revelaban la gravedad de una propuesta que, a su juicio, no debía trivializarse suponiéndola ideas alocadas de jóvenes<sup>122</sup>. Disgustado por la propuesta, Perón destituyó de su cargo partidario a Galimberti días más tarde. La incógnita sobre cuáles serían concretamente las orientaciones políticas y económicas del futuro gobierno persistían en virtud de lo heterogéneo de sus equipos y apoyos.

En los días previos al cambio de gobierno, con su habitual estrategia pedagógica, *La Nación* abordó el tema de la estructura de tenencia de la tierra; enfatizó el aumento del número de propietarios y la disminución de arrendatarios, así como los avances en tecnología. Consciente de que era un tópico especialmente conflictivo, el editorialista invitaba a quienes asumirían responsabilidades en el área a desechar "ideas anacrónicas que tal vez pudieran tener asidero en otros tiempos pero que no se compaginan con la situación actual del sector agropecuario del país"<sup>123</sup>. Era evidente que el programa de transformaciones de la estructura agraria propuesto por el justicialismo y respaldado por el acuerdo entre la CGT y la CGE, motivaba esa reflexión.

En su último análisis sobre el gobierno militar saliente destacaba que difícilmente alguien hubiera podido imaginar en 1966 que la experiencia finalizaría así. Aquel movimiento militar tenía entre sus objetivos no confesados pero notorios para todos, decía, la intención de cerrar las puertas de una modesta participación del peronismo en el poder civil, y concluía dejando a uno de sus hombres en la presidencia de la República, con el control de todas las provincias, y un Poder Legislativo en el que disponía de la mayoría. Volvía a reconocer a los militares lo acertado de la gestión económica de los cuatro primeros años y a objetarles las opciones posteriores. La salida política en principio era estimada correcta, pero, profético, el texto editorial terminaba por afirmar que el juicio definitivo sobre la misma sólo podría hacerse al finalizar el mandato de cuatro años de las nuevas autoridades, es decir, en mayo de 1977<sup>124</sup>. Con clara percepción de dónde se hallaba el punto débil de la experiencia que comenzaba, en la víspera del traspaso del mando, *La Nación* publicó un escueto editorial titulado sugerentemente: "Gobierno y poder". Creer en la

posibilidad de una disociación entre gobierno y poder, era, según su perspectiva, pensar fuera de la lógica del régimen republicano. El poder del Estado, aseveraba, lo encarnaban los magistrados elegidos por la ciudadanía; imaginar un gobierno sin poder, o simplemente condicionado de modo extralegal, implicaba admitir que la autocracia reemplace a la república<sup>125</sup>. En esos días, y desde hacía meses, el lema más difundido por la mayoría de las fracciones juveniles del peronismo era *Cámpora al gobierno, Perón al poder*.

### La Nación: 1966-1973

*En problemas macrosociológicos es imposible realizar experimentos para ponderar la influencia de cada una de las variables en juego. El régimen autoritario impuesto entre 1966 y 1973 hizo del país un laboratorio singular. Neutralizó la presencia de los políticos civiles y el problema electoral del peronismo; con ello permitió observar en un cuadro simplificado las condiciones de la ingobernabilidad argentina. Si bajo Frondizi e Illia cabía adjudicar a los partidos políticos, que accedían al gobierno con una legitimidad de origen limitada, incapacidad para disciplinar las tensiones sociales y corporativas, así como para contener la politización de las fuerzas armadas, luego de la experiencia dirigida por Onganía esa idea debió complejizarse. La dictadura militar no impidió la agudización de los conflictos sociales ni la multiplicación de las protestas corporativas. Tampoco consiguió subordinar y despolitizar las conductas de los miembros de las instituciones castrenses. En su punto de partida, el modelo de dominación implantado por los militares suponía viable encontrar, en una legitimidad derivada de la eficiencia económica y administrativa, al ersatz de su carencia de legitimidad democrática de origen. El prejuicio antipartido, rasgo fuerte de la tendencia encabezada por Onganía, descripta y llamada por Guillermo O'Donnell paternalista<sup>126</sup>, lo llevaba a pensar en la alternativa de generar una comunicación por vía corporativa entre el Estado y la sociedad. Las entidades empresarias y sindicales debían, según el esquema del gobierno, convertirse en canales de transmisión de demandas despolitizadas y de contenido estrictamente sectorial. En teoría, al excluir a los partidos de las relaciones de mediación que les son propias, se despejaría el factor de crisis. Para los impulsores del régimen autoritario, la ficción jurídica del ciudadano podía ser sustituida con ventajas por agentes mucho más sustantivos: el productor, el usuario o el vecino. Como era de esperar, eliminar la política sin suprimir el poder se reveló muy pronto como una utopía. La imposibilidad de com-*

patibilizar las demandas contradictorias de los diferentes sectores empresarios y de los asalariados produjo un rápido proceso de frustración y descontento en muchos de los que habían cifrado expectativas positivas en el advenimiento del gobierno de facto. Los logros alcanzados por la política económica no se traducían en una superación de las tensiones. La disconformidad de la gran burguesía agraria fue una constante del período. Los sectores industriales, de capital nacional o extranjero, beneficiados durante esos años, no otorgaron mayor solidez al régimen. El pequeño y mediano empresariado expresó su disconformidad. El sindicalismo se desplazó del compromiso a la oposición, y emergió en sus filas un nivel de combatividad desconocido desde hacía mucho. El buen vecino se incorporó a las puebladas. Los estudiantes, quebrado el sistema objetivo de aislamiento que había supuesto el mantenimiento de la democracia universitaria hasta 1966 en un contexto global signado por la proscripción política, buscaron solidarizarse con las clases populares. Sobre el fin del Onganía, el valor de la crítica de las armas se había instalado en el imaginario de una nueva generación, movilizadora multitudinariamente tras la realización de una revolución, poco definida en sus metas, pero cuya referencia más directa al juego político inmediato era la identificación con Perón, quien había radicalizado su discurso.

Juan Linz, en su conceptualización sobre los regímenes autoritarios, señala que carecen de una ideología elaborada, aun cuando en quienes los gobiernan se puede reconocer un tipo de mentalidad característica<sup>127</sup>. Linz toma la diferenciación entre ideologías y mentalidades, del sociólogo alemán Theodore Geiger, quien define a las primeras como sistemas de pensamientos elaborados y codificados con la participación de intelectuales o pseudo-intelectuales, en tanto las mentalidades serían formas de pensamiento y sentimiento de fuerte carga emocional, menos organizadas explícitamente en sus articulaciones internas. Esta ausencia de ideología oficial es una dimensión clave para distinguir los regímenes autoritarios en comparación con los totalitarios.

En América Latina, un aspecto relativamente paradójico de esa falta de ideología de los regímenes autoritarios se manifiesta en que quienes los gobiernan cubren el vacío ideológico justificando su acción en nombre de la defensa de la democracia. A este estilo de regímenes controlados por las fuerzas armadas pareció corresponder en principio el de Onganía; sin embargo, en el desarrollo de su gestión el presidente y los equipos que lo secundaban expresaron posiciones abiertamente contrarias al pleno restablecimiento de las instituciones democráticas. La sustitución de los partidos políticos por la representación de entidades corporativas de empre-

sarios y asalariados, los esbozos de participacionismo, difusa pero persistentemente planteados, fueron esquemas de posibles reformas del entramado institucional que no se llevaron adelante con decisión, aun cuando en ningún momento parecieron totalmente descartados. El fascismo en sus formas puras influía el pensamiento de Onganía escribió el General Lanusse: "Un fascismo desapasionado y burocrático, un corporativismo desangrado y estéril"<sup>128</sup>. Juicio de actor, más político que analítico, el testimonio tiene valor por provenir de un participante y observador privilegiado del régimen militar. Lanusse revelaba compartir un rechazo similar al de La Nación por los experimentos corporativos.

Si se emplea el concepto de Geiger, puede afirmarse que en la Argentina de la época existía un amplio conjunto de sectores sociales con mentalidad autoritaria, contrarios al ejercicio libre y sin proscripciones del sufragio universal por temor al retorno del peronismo al gobierno, pero ideológicamente divididos entre quienes se oponían a cualquier modificación de las instituciones democráticas y quienes patrocinaban o aceptaban esos cambios. La Nación se alineaba entre los primeros, y tanto sus análisis como su prédica contribuyeron a debilitar a la dictadura de Onganía. Al definirse contra las reformas corporativistas, el matutino mantuvo la misma posición adoptada algo más de tres décadas antes, cuando el gobierno de Uriburu impulsó una iniciativa de inspiración parecida. La tradición democrática liberal en la que se inscribía su pensamiento político, enfrentaba a La Nación con quienes trataban de establecer un modelo de gobernabilidad capaz de superar las dificultades encontradas desde 1955 por los distintos intentos de recuperar el normal funcionamiento del régimen democrático. El diario había criticado a los principales partidos políticos hasta 1966, no se identificaba con ninguno de los más pequeños, y descreía de la mayoría de los dirigentes; rechazaba las propuestas programáticas peronistas y radicales para la economía, veía la tentación demagógica por doquier y explicaba el fenómeno por los vicios del electoralismo. Sin embargo, excluía la alternativa corporativista, que en tantos aspectos coincidía con su diagnóstico negativo de la vida política, sin siquiera discutir sobre su posible eficacia para resolver los problemas de la aparentemente crónica inestabilidad argentina. Esto ocurría al mismo tiempo que en sus reflexiones elogiaba la política económica del gobierno de Onganía. Sin plantear con urgencia la restauración de la democracia, pero impugnando las innovaciones en materia de búsqueda de otro sistema para dotar de legitimidad a la autoridad del Estado, el matutino hizo, objetivamente, una importante contribución a la crisis del régimen autoritario. Además, al oscilar

entre el tratamiento dramático y el estilo irrisorio, sometió a la ideología corporativista de Onganía y de sus equipos a críticas extremadamente deteriorantes. Para hacer inteligible esa posición tan intransigente frente al corporativismo, es necesario remitir a dos explicaciones diferentes, aunque complementarias.

La identidad ideológica de La Nación estaba construida en torno a los principios democráticos, y esto era así con independencia de las mayores o menores probabilidades que por momentos adjudicara a la plena vigencia de ese tipo de régimen. Podía aceptar la supresión temporaria de la democracia, pero fundaba esa opción en una necesidad circunstancial. En tanto depositaba la antidemocracia en Perón y en el peronismo, las trabas impuestas al juego pluralista para impedir su retorno al gobierno le resultaban recursos legítimos para defender la democracia. Por su parte, los peronistas objetaban las proscripciones que los marginaban, pero no colocaban la construcción de un régimen político democrático en el centro de sus preocupaciones; en sus filas no faltaban sectores de ideología fascista o los partidarios de reproducir algo próximo a la experiencia cubana. Para el diario, el proyecto corporativista entraba en flagrante contradicción con los principios fundadores de las instituciones nacionales para cuya defensa y preservación se había autoadjudicado el rol de "tribuna de doctrina". Al tener su identidad consustanciada con la democracia, el problema del régimen político se convertía en algo no discutible. La identificación entre La Nación y la Nación, entendida esta última como sus instituciones y la primera como un permanente vigía para velar por la inalterabilidad de las mismas, colocaba el debate entre el diario y los corporativistas en una situación de negociación imposible.

La segunda explicación, ligada con la precedente, remite al problema de la libertad de expresión. La concepción de las funciones de los medios de comunicación en el régimen democrático es totalmente distinta de la imaginable bajo un sistema de gobierno con legitimidad corporativa. La defensa de la democracia como forma de representación política implica un modo de organizar lo que, siguiendo a Habermas, hemos denominado la esfera pública de lo político, espacio en el cual La Nación tenía un rol destacado. En consecuencia, la existencia misma de una actividad periodística como la desarrollada por el matutino suponía una separación entre el Estado y la sociedad mejor asegurada por la democracia que por cualquier otro tipo de régimen político de mediación. También en este aspecto, la identidad que el diario se había forjado lo asociaba funcionalmente con la democracia. En fin, las posiciones de Onganía y sus equipos, contrarias a la libertad de prensa, ali-

mentaban los temores sobre los riesgos de una modificación permanente de las instituciones. El corporativismo no auguraba un futuro tranquilizador para los intereses propios del diario en tanto aparato o empresa.

Cuando la crisis social y política reveló la imposibilidad de mantener una dictadura prolongada, el retorno a la democracia se convirtió en la única salida. Los militares dejaban condiciones de desarticulación política y social más agudas que las existentes siete años antes. El Estado había perdido aún más su autoridad frente a la sociedad. Las tensiones entre las distintas categorías dominantes se habían incrementado. Las clases populares habían desarrollado un alto nivel de movilización. Sectores de clase media se habían radicalizado. Los grupos armados disputaban el monopolio de los medios de violencia al Estado. El peronismo era ideológicamente más heterogéneo y había extendido su atractivo electoral a sectores que años antes no lo habían seguido. Los radicales se habían desplazado hacia posiciones programáticas "nacionales y populares". Con el fracaso del autoritarismo habían vuelto a aflorar las divisiones en las fuerzas armadas. Todo anunciaba una agudización de la ingobernabilidad.

#### NOTAS

<sup>1</sup> *La Nación*, 28-6-1966, pág. 6.

<sup>2</sup> *La Nación*, 29-6-1966, pág. 6.

<sup>3</sup> *Revista Primera Plana*, 30-6-1966, pág. 7.

<sup>4</sup> Senén González: *Op. cit.*, págs. 95-98.

<sup>5</sup> *Revista Panorama*, Suplemento publicado el 7-7-1970, págs. 10-12.

<sup>6</sup> *La Nación*, 12-7-1966, pág. 6.

<sup>7</sup> Marcelo Sánchez Sorondo: *La Argentina por dentro*, Sudamericana, Buenos Aires, 1987, pág. 515.

<sup>8</sup> Mariano Grondona: "El futuro de la oposición", en Instituto de Ciencia Política de la Universidad del Salvador: *La "Revolución Argentina". Análisis y prospectiva*, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1966, págs. 165-175.

<sup>9</sup> Raúl Puigbó: Prólogo a *La "Revolución Argentina"...*, *op. cit.*, pág. 11.

<sup>10</sup> Carlos Alberto Floria: "Ideología y modernización", en *La "Revolución Argentina"...*, *op. cit.*, págs. 147-163.

<sup>11</sup> José Luis de Imaz: "Una hipotética elite política", en *La "Revolución Argentina"...*, *op. cit.*, pág. 190.

<sup>12</sup> *La Nación*, 16-7-1966, pág. 6.

<sup>13</sup> *Marcha*, Montevideo, 29-7-1966. Reportaje a Juan Domingo Perón, págs. 20-21.

<sup>14</sup> *La Nación*, 30-7-1966, pág. 6.

- 15 *La Nación*, 31-7-1966, pág. 12.
- 16 *La Nación*, 1-8-1966, pág. 6.
- 17 Horacio Giberti, en *La Nación*, 30-6-1966, segunda sección, pág. 23.
- 18 *La Nación*, 5-8-1966, pág. 6.
- 19 *La Nación*, 7-8-1966, pág. 6.
- 20 *La Nación*, 11-8-1966, pág. 6.
- 21 *La Nación*, 12-9-1966, pág. 6.
- 22 *La Nación*, 1-11-1966, pág. 6.
- 23 *La Nación*, 9-11-1966, pág. 6.
- 24 *La Nación*, 27-11-1966, pág. 13.
- 25 *La Nación*, 7-12-1966, pág. 6.
- 26 *La Nación*, 11-12-1966, pág. 6.
- 27 *La Nación*, 31-12-1966, pág. 6.
- 28 Raúl Puigbó: *La revancha oligárquica y el porvenir del movimiento obrero*, Ediciones Siglo, Buenos Aires, 1957.
- 29 Raúl Alfonsín: *Inédito. Una batalla contra la dictadura*, Legasa, Buenos Aires, 1986, pág. 38. El artículo, con el título "Falangistas y liberales", se publicó el 15 de febrero de 1967.
- 30 *La Nación*, 16-3-1967, pág. 6.
- 31 *La Nación*, 21-4-1967, pág. 6.
- 32 *La Nación*, 4-5-1967, pág. 6.
- 33 *La Nación*, 5-6-1967, pág. 6.
- 34 *La Nación*, 7-7-1967. Discurso del presidente Onganía, pág. 16.
- 35 *La Nación*, 8-7-1967, pág. 6.
- 36 Roberto Roth: *El país que quedó atrás*, Emecé, Buenos Aires, 1967.
- 37 *La Nación*, 10-9-1967, pág. 6. El artículo de Selser está reproducido en Gregorio Selser: *El onganiano*, Carlos Samonta Editor, Buenos Aires, 1973, págs. 288-289.
- 38 *La Nación*, 23-9-1967, pág. 6.
- 39 Dardo Cúneo: *Comportamiento y crisis de la clase empresaria argentina*, Buenos Aires, 1967, págs. 282-283.
- 40 *La Nación*, 8-3-1968, pág. 6.
- 41 Guillermo Borda y otros: *Cinco discursos y una revolución*, publicación del Movimiento Humanista de Derecho, Buenos Aires, 1968, pág. 11.
- 42 *La Nación*, 27-4-1968, pág. 6.
- 43 Raúl Alfonsín: Op. cit., pág. 133. Artículo "El país entiende", publicado en *Inédito* el 1-5-1968.
- 44 Solicitada en *La Nación*, 30-4-1968, pág. 2, titulada "¿Cambié de rumbo la Revolución Argentina?".
- 45 "Las grandes perplejidades", en *Azul y Blanco*, 13-5-1968, pág. 4.
- 46 *La Nación*, 7-7-1968, pág. 6.
- 47 *La Nación*, 3-8-1968, pág. 6.
- 48 *La Nación*, 21-11-1968, pág. 6.
- 49 *La Nación*, 26-10-1968, pág. 6.
- 50 *La Nación*, 30-11-1968, pág. 6.
- 51 *La Nación*, 23-2-1969, pág. 6.
- 52 *La Nación*, 13-3-1969, pág. 6.
- 53 *La Nación*, 12-3-1969, pág. 6.

- <sup>54</sup> *La Nación*, 31-3-1969, pág. 6.
- <sup>55</sup> *La Nación*, 13-4-1969, pág. 6.
- <sup>56</sup> *Ibid.*
- <sup>57</sup> *La Nación*, 26-4-1969, pág. 6.
- <sup>58</sup> *La Nación*, 2-5-1969, pág. 6.
- <sup>59</sup> *La Nación*, 14-5-1969, pág. 6.
- <sup>60</sup> Rodolfo H. Terragno: "Prólogo N° 2" a Andrew Graham-Yooll: *Tiempo de tragedia. Cronología de la Revolución Argentina*, Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1972, pág. 19.
- <sup>61</sup> *La Nación*, 16-5-1969, pág. 6. Dos meses después, el tema del papel era abordado por ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas); el informe del presidente del consejo de dirección de la entidad, Juan S. Valmaggia, fue totalmente adverso a la iniciativa del gobierno. En *La Nación*, 28-7-1969, pág. 10.
- <sup>62</sup> *La Nación*, 25-5-1969, pág. 8.
- <sup>63</sup> Alejandro A. Lanusse: *Op. cit.*, pág. 3.
- <sup>64</sup> Agustín Tosco: *Presente en las luchas obreras*, s/e, 1984. Publicado originalmente en revista *Enfoque*, Córdoba, junio de 1970.
- <sup>65</sup> Informe del gobernador Caballero al PEN, citado por Lanusse: *Op. cit.*, pág. 18.
- <sup>66</sup> *La Nación*, 30-5-1969, pág. 8; 1-6-1969, pág. 8.
- <sup>67</sup> *La Nación*, 26-6-1969, pág. 8.
- <sup>68</sup> *La Nación*, 24-6-1969, pág. 8.
- <sup>69</sup> *La Nación*, 20-10-1969, pág. 8.
- <sup>70</sup> Raúl Alfonsín: *Op. cit.*, pág. 190-191. El artículo, con el título "La responsabilidad del Ejército", se publicó en *Inédito* de junio de 1969.
- <sup>71</sup> *La Nación*, 6-6-1969, pág. 8.
- <sup>72</sup> *La Nación*, 13-6-1969, pág. 8.
- <sup>73</sup> Roberto Roth: *Los años de Onganía. Relato de un testigo*, Ediciones La Campana, Buenos Aires, 1980, pág. 359.
- <sup>74</sup> *La Nación*, 29-7-1969, pág. 6.
- <sup>75</sup> *La Nación*, 10-8-1969, pág. 8; 13-8-1969, pág. 8; 16-8-1969, pág. 8.
- <sup>76</sup> *La Nación*, 30-8-1969, pág. 8; 11-9-1969, pág. 8; 13-9-1969, pág. 8.
- <sup>77</sup> *La Nación*, 27-9-1969, pág. 8.
- <sup>78</sup> *La Nación*, 17-9-1969, pág. 8; 20-11-1969, pág. 8; 22-11-1969, pág. 8.
- <sup>79</sup> Revista *El Político*, Buenos Aires, 30-4-1970, págs. 4-5.
- <sup>80</sup> Juan Francisco Guevara: *Argentina y su sombra*, edición del autor, Buenos Aires, 1970, págs. 321-322.
- <sup>81</sup> Revista *Extra* N° 57, abril de 1970. Citada en Próspero Germán Fernández Alvarino: *Z Argentina. El crimen del siglo*, edición del autor, Buenos Aires, 1973, pág. 58.
- <sup>82</sup> Revista *Periscopio* N° 37, 2-6-1970, pág. 14.
- <sup>83</sup> *La Nación*, 4-6-1970, pág. 8.
- <sup>84</sup> *La Nación*, 9-6-1970, pág. 8.
- <sup>85</sup> *La Nación*, 10-6-1970, pág. 8.
- <sup>86</sup> *La Nación*, 25-6-1970, pág. 8.
- <sup>87</sup> Declaración de la Unión Industrial Argentina, *La Nación*, 4-7-1970, pág. 9.

- <sup>88</sup> *La Nación*, 21-7-1970, pág. 8.
- <sup>89</sup> *La Nación*, 8-9-1970, pág. 8.
- <sup>90</sup> *La Nación*, 16-9-1970, pág. 8.
- <sup>91</sup> *La Nación*, 1-10-1970, pág. 8.
- <sup>92</sup> Oscar Alende: *Los que mueven las palancas*, A. Peña Lillo Editor, Buenos Aires, 1973, pág. 103.
- <sup>93</sup> *La Nación*, 16-10-1970, pág. 8.
- <sup>94</sup> *La Nación*, 24-12-1970, pág. 8.
- <sup>95</sup> *La Nación*, 26-12-1970, pág. 8.
- <sup>96</sup> *La Nación*, 4-3-1971, pág. 8.
- <sup>97</sup> *La Nación*, 24-3-1971, pág. 8.
- <sup>98</sup> *La Nación*, 2-5-1971, pág. 8.
- <sup>99</sup> *La Nación*, 18-6-1971, pág. 8.
- <sup>100</sup> *La Nación*, 7-7-1971, pág. 8.
- <sup>101</sup> *La Nación*, 9-7-1971, pág. 8.
- <sup>102</sup> *La Nación*, 3-8-1971, pág. 8.
- <sup>103</sup> *La Nación*, 17-11-1971, pág. 8.
- <sup>104</sup> *La Nación*, 30-3-1972, pág. 6.
- <sup>105</sup> *La Nación*, 1-7-1972, pág. 6.
- <sup>106</sup> *La Nación*, 7-7-1972, pág. 8.
- <sup>107</sup> *La Nación*, 9-11-1972, pág. 8.
- <sup>108</sup> *La Nación*, 25-11-1972, pág. 8.
- <sup>109</sup> *La Nación*, 17-12-1972, pág. 8.
- <sup>110</sup> "Papel Prensa a la opinión pública", solicitada en *La Nación*, 19-9-1972, pág. 17. "Papel Prensa a la opinión pública. El proyecto tapón", solicitada en *La Nación*, 27-9-1972, pág. 6. Sobre el inicio de las obras de la planta de Papel Prensa, ver revista *Panorama*, 28-12-1972, pág. 24.
- <sup>111</sup> *La Nación*, 10-1-1973, pág. 8.
- <sup>112</sup> *La Nación*, 14-1-1973, pág. 8. Un mes después, editorializaba sobre la situación económica: "Las cifras (de balances empresarios) nos hacen ver que sería impropio el pecar de excesivo optimismo, pero tampoco será acertado pintar el ambiente económico con tintes acusadamente sombríos". *La Nación*, 9-2-1973, pág. 8.
- <sup>113</sup> *La Nación*, 26-1-1973, pág. 6.
- <sup>114</sup> *La Nación*, 3-2-1973, pág. 6.
- <sup>115</sup> *La Nación*, 9-1-1973, pág. 8.
- <sup>116</sup> *La Nación*, 18-1-1973, pág. 8.
- <sup>117</sup> *La Nación*, 29-1-1973, pág. 6.
- <sup>118</sup> *La Nación*, 31-1-1973, pág. 6.
- <sup>119</sup> *La Nación*, 10-3-1973, pág. 8.
- <sup>120</sup> *La Nación*, 13-3-1973, pág. 8.
- <sup>121</sup> UCR: solicitada en *La Nación*, 11-4-1973, pág. 11.
- <sup>122</sup> *La Nación*, 29-4-1973, pág. 8.
- <sup>123</sup> *La Nación*, 15-5-1973, pág. 8.
- <sup>124</sup> *La Nación*, 23-5-1973, pág. 8.
- <sup>125</sup> *La Nación*, 24-5-1973, pág. 8.
- <sup>126</sup> Guillermo O'Donnell: *1966-1973. El Estado Burocrático Autoritario. Triunfos, derrotas y crisis*, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1982, pág. 89.

<sup>127</sup> Juan Linz: "Una interpretación de los regímenes autoritarios", en *Papers (Revista de Sociología publicada por la Universidad Autónoma de Barcelona)*, N° 8, Editorial Península, Barcelona, 1978, pág. 13.

<sup>128</sup> Alejandro A. Lanusse: *Ob. cit.*, pág. 91.

## XIII

### El tercer peronismo, consejos y desesperanzas

Flanqueado por Salvador Allende y por Osvaldo Dorticós Torrado, Héctor Cámpora prestó juramento presidencial. El mandatario chileno, que encabezaba una transición pacífica al socialismo, y el presidente cubano, colocado en el gobierno por la revolución marxista-leninista de Fidel Castro, encarnaban ese día en el plano simbólico los temores de ciertos sectores sociales y políticos y las esperanzas de otros. Los cantos de guerra que identificaban a los segundos, en su estridencia, debieron estimular la inquieta meditación de los primeros. De los hechos del 25 de mayo de 1973 los relatos son múltiples y teñidos, naturalmente, por las ópticas de los testigos. *La Nación* los narró con una prosa no carente de realismo literario, al informar a sus lectores sobre el evento. Las ruidosas manifestaciones de apoyo a Cámpora, los enfrentamientos entre sectores del peronismo, los ataques contra las fuerzas armadas impedidas por la multitud de desfilar, los agravios contra Lanusse al partir de la Casa Rosada fueron, entre otros, los hechos de una jornada más tranquila en el editorial que en las páginas de noticias.

En su columna editorial, *La Nación* trató de encontrar los aspectos positivos del mensaje del presidente Cámpora, relativizando las reivindicaciones del período 1946-55 formuladas por el nuevo mandatario. Si bien éstas eran previsibles, decía, en cambio debía tomarse con satisfacción la explícita referencia de Cámpora a la necesidad de llevar adelante las tareas de gobierno con más respaldo político que el de la coalición mayoritaria. Allí sí, afirmaba el diario, se introducía una ruptura con prácticas anteriores. De todos modos, subrayaba, más allá de las palabras se debía esperar la prueba de los hechos. En un tema más cercano al campo periodístico, saludaba las referencias al mantenimiento pleno de la libertad de prensa incluidas en aquella alocución liminar<sup>1</sup>. El diario se esmeraba por no incentivar la

incertidumbre ya instalada en diversos medios sociales. A ese estado de ánimo, en cambio, se refería a los pocos días el director del matutino *La Opinión*, Jacobo Timerman, en términos por demás elocuentes: "Para quienes desde el 25 de mayo de 1973 viven con el miedo a que sus vidas se vean amenazadas por grupos provocadores, y que sus empresas sean expropiadas, les digo que no tengo miedo, que no hay ningún motivo para tener miedo, y que me acompañen en esta batalla"<sup>2</sup>. La convocatoria de Timerman tenía como causa inmediata la amenaza que, según afirmaba, pesaba sobre su diario a causa de un grupo de periodistas de izquierda que quería convertirlo en cooperativa. El clima generalizado de miedo mentado por la denuncia estuvo acompañado por los enfrentamientos entre sectores adversos del peronismo. El gobierno de Cámpora parecía incapaz de asegurar una situación política más tranquila y no faltaban quienes lo creían cercado o "infiltrado" por los sectores de la izquierda peronista.

A mediados de 1973, para muchos Perón era el único que podía asegurar el orden en la nueva etapa. En él se depositaron múltiples expectativas de paz, pero el día de su segundo retorno se produjo la llamada masacre de Ezeiza. Del mensaje emitido por el gobierno en la víspera de la llegada del anciano jefe partidario, *La Nación* resaltaba una frase: "Todos hemos comprendido que es menester superar falsas y odiosas antinomias que en el pasado consumieron nuestras fuerzas"<sup>3</sup>. Ese espíritu, en el cual se incluía, llevaba al editorialista a destacar la responsabilidad que, en los actos de violencia acaecidos en Ezeiza, habían tenido grupos de izquierda subversiva, cuyas ideas poco tenían en común con la línea clásica del peronismo. Había que aguardar, concluía, la respuesta de Perón. Ésta llegó en un discurso satisfactorio para las expectativas del matutino. El jefe del justicialismo condenó a los extremistas infiltrados en las filas de su propio partido, dijo que querían desnaturalizar su doctrina y llamó a todos los sectores, incluso las fuerzas armadas y los adversarios de otrora, a contribuir a la pacificación. Al comentar las palabras de Perón, el diario invitó a darse cuenta de que "el hombre que es dueño del más vasto poder político en la Argentina de hoy ha contribuido ya a crear condiciones capaces de hacer inadecuadas las analogías críticas entre el peronismo de 1973 y el de la época más abrupta"<sup>4</sup>. La "mano férrea", recordaba textualmente, con que Perón siempre había dirigido su movimiento podía garantizar el éxito de la propuesta ahora encarada por él. Como pocas veces, parecía justificado suponer que el país estaba frente a un cambio sustancial en su dinámica política: Perón encabezaba el partido del orden. Pero, ¿podía el "hombre que era dueño del más vasto

poder político", no ser el titular del gobierno? La solución no tardó en arribar. Cárpora renunció. Su alejamiento fue evaluado con alivio: en opinión del diario, no había ejercido realmente la autoridad presidencial, y el vacío de poder generado era aprovechado por "grupos con máscara fanática, cuyo epicentro estuvo en las universidades y se expandieron a otras áreas y patrocinaron el desorden constante (...) caldo de cultivo de un tipo de aventura más afín con la insurrección que con la consolidación gubernativa"<sup>5</sup>. Sin nombrarla, la candidatura de Perón era aceptada como vía para solucionar una situación política tan gravemente evaluada. A Lastiri le tocaría presidir el interregno.

Una bomba incendiaria que destruyó 25.000 ejemplares de la obra *El Marxismo*, de Henri Lefebvre, publicada por la Editorial Universitaria de Buenos Aires, motivó la indignación del matutino. Cabía condenar esa acción, decía, en razón del fanatismo revelado por los pirómanos. Se podía discrepar con las tesis de Lefebvre, rechazar sus concepciones izquierdistas, pero, para el diario, nada justificaba actos de barbarie de ese género. Ligando la quema de libros con la existencia de la guerrilla, afirmaba: "La violencia hecha en nombre de la izquierda totalitaria debe ser combatida con la fuerza de la ley. Pero las ideas de esa izquierda deben ser reargüidas con los instrumentos de la razón"<sup>6</sup>. El editorial se mostraba igualmente preocupado por la intolerancia que en el plano de las ideas desarrollaban sectores de izquierda en las universidades. Daba como ejemplo ilustrativo el caso de una facultad de la Universidad de Buenos Aires, donde las autoridades realizaban, decía, una "caza de brujas" y cesantearon a un docente, acusado, entre otras cosas, de ser "un personero de la dependencia"<sup>7</sup>. Es de señalar que la crítica a la política universitaria tocaba directamente al gobierno, en tanto las casas de altos estudios se hallaban intervenidas por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, el interinato de Lastiri no introdujo ninguna modificación. El ministro de Educación, Jorge Taiana, designado por Cárpora, había continuado en sus funciones.

El triunfo electoral de la fórmula Perón-Perón fue analizado por el diario desde una óptica cruzada por un problema central: la cuestión del orden. Invitaba a Perón a preguntarse sobre las causas que habían conducido a seis de cada diez ciudadanos a votarlo y le sugería la respuesta: la necesidad de paz. El contradictorio conjunto de expectativas depositadas en Perón por los distintos sectores sociales desde hacía décadas resultaba ignorado por dicha interpretación. Como la propuesta de sus derrotados rivales, Balbín y Manrique, también era la pacificación, la totalidad del cuerpo electoral coincidía en la mencionada demanda.

creía *La Nación*. Sólo quedaban afuera los partidarios de la violencia<sup>8</sup>. El asesinato del secretario general de la Confederación General del Trabajo, José Ignacio Rucci, le dio ocasión de dirigirse a Perón y al peronismo desde un ángulo distinto, aunque complementario, del anterior. Era imprescindible, afirmaba, que el partido gobernante definiera claramente su posición y excluyera de sus filas a quienes de modo más o menos directo justificaban la violencia. Esa alusión podía incluir a varios gobernadores de provincia y a algunos legisladores y ministros nacionales y provinciales. La referencia no apuntaba sólo a la izquierda; mencionaba también el asesinato de un dirigente juvenil enrolado en la denominada "tendencia revolucionaria". En la base del razonamiento se hallaba una idea simple: si el peronismo quería ser el partido del orden debía comenzar por ordenarse internamente. En el plano de la dirección del Estado planteaba una disyuntiva esencial: "El justicialismo puede ser un modo de gobernar para todos o una forma de gobierno a gusto de la ideología de algunas sectas bien definidas"<sup>9</sup>. El día en que Perón asumió por tercera vez la presidencia de la República, los mismos argumentos fueron reiterados al abordar el análisis del acontecimiento. Todo estaba dado, decía, para alcanzar el éxito de la empresa de conciliación. Perón valoraba la paz como meta principal, los mayores partidos opositores se declaraban dispuestos a colaborar y sólo se avizoraba como dificultad la existencia de "núcleos ideológicos infiltrados en el cuerpo partidario desde hace bastante tiempo, y en las posiciones de gobierno, desde el pasado 25 de mayo"<sup>10</sup>. El editorial indicaba, como otro aspecto fundamental para el éxito del gobierno, preservar la prescindencia de las fuerzas armadas en la política partidaria.

Las expectativas puestas en Perón en tanto restaurador del orden no fueron defraudadas. El anciano caudillo pronto mostró su voluntad de enfrentar a los sectores de su propio movimiento que, por acción u omisión, favorecían a los grupos más extremistas. *La Nación* aplaudió esas iniciativas y destacó la decisión del primer magistrado para encarar la depuración. Atento a los símbolos, remarcó en ocasión de una convocatoria presidencial a la defensa de las instituciones, luego del ataque contra cuarteles en la ciudad bonaerense de Azul, que Perón apareciera vestido con su uniforme de teniente general<sup>11</sup>. El atuendo castrense indicaba, en su opinión, la identificación con las fuerzas armadas. Le solicitaba, además, a Perón no malgastar el tiempo y limpiar las filas de su gobierno, excluyendo a quienes simpatizaban con la subversión. La consecuencia directa de los acontecimientos de violencia de Azul fue la renuncia del gobernador bonaerense Oscar

Bidegain. Poco después se producía un golpe de Estado a escala provincial en Córdoba, por el cual la policía local depuso al gobernador Ricardo Obregón Cano. Frente a ese acontecimiento la reacción del diario fue de tono muy moderado. El centro de su reflexión estaba colocado, en principio, en la dimensión formal: "Si se hace estallar las formas bajo la presión obsesionante del logro de los objetivos estratégicos jamás se alcanzan esos objetivos en las condiciones favorables para una posterior eficacia gubernativa genuina"<sup>12</sup>. Sin introducir el problema de la legitimidad de origen de las autoridades destituidas, el análisis se preocupaba fundamentalmente por la cuestión de cómo se reconstruiría a partir de ese momento la situación provincial.

La buena predisposición del diario hacia el gobierno de Perón volvió a ponerse de relieve cuando comentó el discurso pronunciado por el presidente el 12 de junio de 1974. Ese día, el presidente empleó un desusado estilo beligerante contra quienes criticaban u obstaculizaban la acción del Estado desde el campo empresarial y periodístico. Perón sostuvo que no desconocía la existencia de problemas económicos objetivos y preguntó: "¿Cómo evitarlos cuando estamos cambiando drásticamente las estructuras de la dependencia, montadas por los empleados de los poderes coloniales?"<sup>13</sup>. Pero esas dificultades, según el primer magistrado, eran mucho menores y distintas de las inventadas por quienes designaba como "profesionales de la acción psicológica (...) algunos diarios oligarcas están insistiendo, por ejemplo, con el problema de la escasez y el mercado negro"<sup>14</sup>. La iniciativa inmediata de la CGT en el sentido de denunciar al matutino *Clarín* y pedir a los sindicatos y a la CGE que dejaran de publicar publicidad en sus páginas, indicó coyunturalmente quién podía ser el destinatario de la no explicitada condición de "diario oligárquico". De esa pieza oratoria, posiblemente el último discurso peronista de Perón, el matutino formuló un análisis ostensiblemente inclinado a destacar coincidencias y minimizar discrepancias. Consideraba que la política de concertación seguida por el gobierno era correcta y que, si había algunos aspectos factibles de ser corregidos, eso no invalidaba el conjunto. Daba por sentada la existencia de cierta "avidez fiscal", pero con mucho mayor énfasis señalaba que detrás de ella "rápidamente empezaron a marchar los que especulan con el dinero y los que especulan contra el proceso político de estabilización dentro de la democracia"<sup>15</sup>. El texto resaltaba, además, algunas referencias de Perón condenatorias del terrorismo, y reiteraba en su conclusión el carácter constructivo de la alocución presidencial. Muy distinta fue la posición adoptada por *La Prensa*. Demoledor, burlón y ape-

sadumbrado, ese diario, que había conocido las consecuencias de su mala relación con el anterior gobierno de Perón, no ahorró adjetivos para descalificar la seriedad y la pertinencia de su discurso. El presidente, decía *La Prensa*, "en sus arrebatos llegó a emitir juicios tan desorbitados como el de llamar traidores a la patria a quienes no aprueban su política internacional, olvidándose de indicar cómo deberían ser clasificados entonces los que se empeñan en agraviar a la Nación ante el mundo al afirmar que ella ha sido hasta hoy colonia extranjera"<sup>16</sup>. Para la centenaria publicación fundada por Paz, el acto y el discurso de Perón habían tenido una espontaneidad teatral encaminada a buscar apoyos para su debilitado gobierno, y como al pasar, le recordaba los estímulos dados en su momento por él a la acción de los guerrilleros que ahora desaprobaba. En fin, *La Prensa* indicaba que luego de su discurso Perón había recibido la adhesión de una delegación del Partido Comunista, nota paradójica, a su juicio, ya que la verdadera amenaza al gobierno se encontraba "más cerca del comunismo, confusionista e intrigante, que de todos los fantasmas oligárquicos levantados para impresionar al auditorio que saltaba y vitoreaba a coro en la plaza, precedido por una bien alineada delegación de los tradicionales bombos del sistema"<sup>17</sup>. Las diferencias de lenguaje y contenido entre los editoriales de las dos tradicionales instituciones del periodismo porteño difícilmente hubiesen podido ser mayores.

A *La Nación* le tocó de nuevo hacer gala de recato y moderación cuando abordó el ríspido tema de la libertad de prensa a propósito de la decisión de la CGT y la CGE de boicotear al diario *Clarín*. No se podía, dijo acerca de la orden dada por ambas entidades corporativas a sus adherentes de no publicar publicidad en dicho matutino, requerir tal conducta sin comprender que se estaba contradiciendo el espíritu abierto y favorable a la libertad de opinión pregonado por Perón y por el gobierno. Y preguntaba si no se consideraban la CGT y la CGE parte de ese proyecto gubernamental. Señalaba, además, la existencia de expresiones oficiales que podían entenderse como atentatorias contra la libertad de prensa y expresaba su deseo de una pronta solución de la situación planteada, para lo cual cifraba sus esperanzas en una entrevista entre la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas y el primer magistrado<sup>18</sup>. El texto de la declaración emitida por la CGE contra *Clarín* había sido por demás elocuente. Sostenía, entre otras fundamentaciones, que la CGT había declarado a ese diario enemigo de la clase trabajadora y, en tanto existía un acuerdo entre la central sindical y la empresaria, esta última se hacía solidaria con la medida propuesta. Para *La*

*Nación*, según afirmaba el editorial antes citado, era incomprendible que una corporación patronal sancionara a una empresa editorial atacada por la central obrera.

Desde el 25 de mayo de 1973 la figura más conocida de la CGE, el empresario José B. Gelbard, ejercía el cargo de ministro de Economía. Por distintos aspectos, la política económica del nuevo gobierno fue criticada por *La Nación*. La agudización del intervencionismo estuvo en el centro de sus inquietudes. El avance de las regulaciones estatales sobre salarios, precios, crédito, comercio exterior y política cambiaria, fueron temas abordados en diferentes momentos con creciente preocupación. El denominado Plan Trienal, conjunto de metas y planificación indicativo propuesto por el gobierno, le despertaba dudas, entre otros aspectos, por no contemplar debidamente la rentabilidad empresaria. Decía que "en determinadas contingencias coyunturales puede llegar a ser realista un esquema o programa que frene hasta límites mínimos esa rentabilidad. Deja de ser realista dicho esquema o programa cuando esa situación generada coyunturalmente se prolonga en el tiempo y afecta estructuralmente el desenvolvimiento de la empresa privada"<sup>19</sup>.

Las moderadas observaciones del matutino sobre la política económica subieron de tono cuando se ocuparon del proyecto estructural más conflictivo del periodo de Gelbard: el impuesto a la renta normal potencial de la tierra. La recurrente idea de gravar la hipotética renta que los establecimientos rurales podían alcanzar si optimizaban el empleo de la tierra a su disposición ya había sido, como se recordará, objeto de duras críticas al plantearse bajo administraciones precedentes. Con Gelbard, bajo la inspiración del secretario de Agricultura Horacio Giberti volvió a estudiarse la posibilidad de implementar esa reforma del régimen tributario rural. La Sociedad Rural Argentina y la mayoría de las entidades corporativas del sector multiplicaron sus protestas ante lo que consideraban el intento de establecer una discriminación impositiva, perjudicial no sólo para los afectados directos sino para el país en su conjunto. En cierto sentido, puede afirmarse que el matutino realizó un verdadero *scoop* al publicar como primicia un proyecto de ley agraria que no había todavía salido de la esfera de estudio gubernamental. Pero, en realidad, al dar tan peculiar primicia realizó un aporte importante a un debate político que al propio diario no le era para nada indiferente. En las críticas editoriales del proyecto de ley agraria, una vez enviado al Congreso, objetó sus posibles consecuencias perjudiciales para la economía, y lo descalificó por su "inspiración colectivista"<sup>20</sup>. A pesar de esa manera de plantear el

tema de la Ley Agraria, parece interesante destacar que mientras vivió el presidente Perón, las críticas a la gestión económica formuladas por los editoriales del matutino no alcanzaron mayor agresividad y virulencia.

La muerte de Perón dio lugar a una reflexión editorial que revelaba el alto grado de acuerdo del diario con los principales lineamientos propuestos por el desaparecido mandatario. Diferenciaba allí varios ángulos distintos para analizar la trayectoria de Perón. Uno era el que podían adoptar, decía, quienes experimentaban placer al someterse a su magnetismo personal. Otro, el de aquellos que lo "enfrentaron hasta 1955 y, después de un largo interregno de fundado recelo, confiaron en que la sensibilidad política de Perón habría de advertirle la necesidad de encabezar un proceso de unidad nacional"<sup>21</sup>. Existían también las perspectivas sensatas, argüía, de cuantos alzaron su independencia de criterio como una contribución al examen de la realidad sin ataduras banderizas. Sin duda, el lugar donde se autoubicaba el matutino era en el límite de unión entre las dos últimas posiciones enumeradas. Con un giro inteligente y diplomático, el mencionado texto caracterizaba indirectamente al Perón de antes de 1955: su evolución podía trazarse a partir de la identidad humana y cívica de quienes en cada momento lo enfrentaron: "Hasta 1955 sus adversarios pelearon bajo la bandera de la libertad. Desde 1973 sus adversarios se agrupan preferentemente en las trincheras en las cuales los sectarismos ideológicos aparecen teñidos por la misma tonalidad en el lenguaje de desprecio hacia la libertad y en los métodos de lucha"<sup>22</sup>. Por último, saludaba la voluntad común de fortalecer las instituciones puesta de manifiesto por los más disímiles actores políticos ante la sucesión presidencial a favor de la compañera de binomio, y viuda, del extinto. Es de destacar que, al aceptar una decisión de la Federación Gráfica Bonaerense, dedicó todo el espacio de ese día a publicar sólo noticias y comentarios relacionados con el deceso de Perón. Distinta fue la actitud de *La Prensa*, lo que le ocasionó una intimación del mencionado sindicato<sup>23</sup>. *La Nación*, incluso, se abstuvo de publicar editoriales, en adhesión al duelo, el día indicado por el Sindicato Gráfico. Disímil espíritu mostraron, asimismo, las notas necrológicas de *La Nación* y *La Prensa*. La circunspección y el respeto surcaron el fúnebre balance del matutino creado por Mitre, en tanto su colega convertía la luctuosa página en un análisis de crítica política, sin preocuparse por aligerarlo con fórmulas de compromiso.

El terrorismo y las divisiones del oficialismo eran los dos problemas que debía resolver la presidente Perón, afirmaba *La*

*Nación*. Así como había considerado bien encaminada la acción de Perón en esas cuestiones, muy pronto el diario comenzó a dudar de las aptitudes de su sucesora. El asesinato del ex ministro del Interior de Lanusse, Arturo Mor Roig, primero, y luego el del diputado peronista de izquierda Rodolfo Ortega Peña mostraron, entre otros acontecimientos similares, el nivel de violencia alcanzado por la política argentina. Hasta cuándo, se preguntaba el editorial sobre la muerte de Mor Roig, seguirían actuando en el país organizaciones con armamentos que deberían estar reservados a las fuerzas armadas y a la policía. El gobierno debía detener la ola de crímenes, afirmaba a propósito del atentado que costó la vida a Ortega Peña, y alertaba sobre el riesgo de la destrucción de las instituciones<sup>24</sup>. El asesinato del diputado peronista fue reivindicado días más tarde por la Alianza Anticomunista Argentina, organización por entonces denunciada como una creación del ministro de Bienestar Social, José López Rega. La manifiesta y confesa existencia de ese nuevo terrorismo no motivó la ocupación de espacios editoriales en el diario, aun cuando aquél aparecía, a todas luces, apañado desde altas esferas del poder público. Su preocupación central continuó focalizada en los grupos guerrilleros peronistas y de izquierda.

La renuncia del ministro de Educación, Jorge Taiana, y su reemplazo por Oscar Ivanissevich, el mismo que había despertado las críticas del matutino en la época de la anterior gestión peronista, marcó el inicio de una nueva etapa en el área educativa. Con escasa predisposición para diferenciar matices, Ivanissevich sostuvo en una de sus primeras alocuciones la existencia de penetración marxista en la enseñanza y denunció a quienes querían "transformar a los jóvenes justicialistas en marxistas". Tras reproducir esa frase del ministro, el diario expresó una airada reacción; a su entender, la Argentina no podía ser conducida a un dilema de esa naturaleza. Subrayaba la presencia de muchas alternativas distintas de las enunciadas por Ivanissevich, y con espíritu docente le recordaba que desde el punto de vista de sus mejores ideales el país había nacido en 1810 y no en 1945, y se hallaba nutrido en la savia de una civilización de veinticinco siglos de existencia. Por otra parte, ponía en duda las apreciaciones formuladas por el ministro sobre el incorrecto desempeño de la Secretaría de Ciencia y Tecnología durante la gestión de Taiana, uno de los pocos aspectos de la misma defendidos en su momento desde sus editoriales, y minimizaba la seriedad de las ideas de Ivanissevich sobre la conveniencia de pasar la investigación científica de la órbita estatal a la privada, temas, a su entender, imposibles de abordar con tan poco detenimiento y pro-

fundidad<sup>25</sup>. La política universitaria motivó, días después, otra reflexión del diario igualmente crítica. Se estaba ante el riesgo, en su opinión, de pasar el control de las casas de altos estudios de unos grupos facciosos a otros, manteniendo la indiferencia y el desconocimiento sobre el carácter y tareas específicas de las mismas. Para lograr la normalización de los claustros proponía realizar una convocatoria amplia, con omisión de rótulos y banderías<sup>26</sup>. El rector-interventor de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Ottalagano, aparecía como un símbolo de este desplazamiento hacia posiciones extremistas de derecha en el manejo de la educación superior.

La Ley Agraria, aun no tratada cuando asumió el gobierno "Isabel" Perón, siguió suscitando las preocupaciones de *La Nación*. Como hemos visto, el término "colectivista" era usado con cierta soltura para caracterizar al proyecto. Hacía una generalización sobre las concepciones favorables al reformismo agrario cuando sostenía que su objetivo básico era "la destrucción de la espina dorsal de un tipo de sociedad que se quiere sustituir por otro, y el sector rural está compuesto por empresarios difíciles de doblegar, que están en condiciones de esperar y de expresar sus ideas sin mayores ataduras políticas"<sup>27</sup>. No se trataba, decía, de calificar de "colectivistas" a quienes apoyaban el proyecto, pero éstos, sin saberlo o por conveniencias políticas circunstanciales, podían llegar a conducir la situación a un terreno muy difícil de abandonar luego. A los pocos días, otro editorial se refería a la idea de crear "cooperativas de producción", contenida en el proyecto, a su modo de ver encaminada a incorporar sistemas de propiedad colectiva totalmente extraños a "la idiosincrasia, al sistema de trabajo y a las condiciones generales de nuestra realidad agraria"<sup>28</sup>. El verdadero problema, aseveraba, era el excesivo parcelamiento de la tierra, y la ley lo agravaría. Con el mismo espíritu negaba, cinco días después, la existencia en la Argentina de rigidez en la propiedad de la tierra y, en consecuencia, insistía con la pregunta sobre la motivación ideológica del controvertido proyecto. Coincidió la fecha de este último comentario editorial con la renuncia de Gelbard.

El nuevo ministro de Economía, Alfredo Gómez Morales, era el mismo que había sucedido a Miranda en la gestión económica del anterior gobierno peronista, y entonces muchas de sus iniciativas habían contado con el apoyo de *La Nación*. Ahora el diario lo recibía con un balance de la realidad dejada por Gelbard y le indicaba cuáles eran a su juicio los principales problemas a resolver: fuerte y expansivo mercado negro; rentabilidad empresarial baja, nula o negativa; desequilibrio entre una oferta estan-

cada y una demanda superior alentada por presiones especulativas; creciente influencia de las inversiones especulativas y deterioro de las de tipo productivo. Una de las claves para recomponer el buen funcionamiento de la economía se encontraba, en su opinión, en mejorar globalmente los ingresos empresarios, aun cuando esto implicara una disminución de los salarios reales<sup>29</sup>. Los ajustes para alcanzar el equilibrio presupuestario, mediante la modificación de la política de comercio exterior y de las tarifas de las empresas públicas, podían facilitar, agregaba, una rápida normalización de la economía. La época posgelbardiana no iba a resultar, sin embargo, tan apacible como parecía creerlo esa reflexión editorial.

“La hora de la espada”, el controvertido discurso de Leopoldo Lugones en la celebración de Ayacucho, cumplía en diciembre de 1974 su quincuagésimo aniversario. El evento fue recordado por la revista nacionalista *Cabildo*, que reprodujo la alocución dirigida expresamente a los militares, víctimas, en su opinión, de la artera violencia marxista<sup>30</sup>. El extinto bardo, ya entonces periódicamente homenajeado por *La Nación*, era así convocado desde una de las publicaciones más opuestas al gobierno peronista para hacer llegar su mensaje a los hombres de armas. Para *Cabildo*, sólo una revolución profundamente antiliberal podía cambiar la realidad del país. La revista descartaba toda posibilidad de éxito del gobierno de “Isabel” Perón, y al referirse concretamente a Gómez Morales, lo colocaba en estricta continuidad con las ideas de Alsogaray, Krieger Vasena y Gelbard, a todos los cuales definía como liberales<sup>31</sup>. También se preguntaba sobre las causas por las cuales hombres de ideas nacionalistas y antimarxistas, como el rector-interventor Ottalagano de la Universidad de Buenos Aires, despertaban tantas críticas del liberalismo; y su respuesta era que, en última instancia, los liberales estaban manipulados hábilmente por el comunismo<sup>32</sup>. Así, aun sin nombrarlo, por ese paradójico razonamiento, el diario fundado por Mitre terminaba calificado por *Cabildo* como marxista *malgré lui*, algo similar a lo que *La Nación* hacía con los reformistas agrarios. En fin, para completar esta acotación secundaria sobre el entrecruzamiento tan peculiar que revelaban las meditaciones sobre la escena política de ese agitado final de 1974, parece pertinente citar el punto de vista de Mariano Grondona, quien desde la revista *Carta Política* divergía del juicio del matutino sobre la función que cumplían hombres como el interventor de la universidad porteña. Grondona lo incluía en una referencia a López Rega, el no menos polémico y criticado ministro de Bienestar Social: “De la estirpe de los Ottalagano, los Lacabanne, José López Rega es

uno de esos luchadores que recogen, por lo general, la ingratitud del sistema al que protegen"<sup>33</sup>.

*La Nación* se ocupaba, cada vez que lo creía conveniente, de los avances de las tesis del llamado "revisonismo histórico", al cual adjudicaba más peligrosidad política que idoneidad conceptual. A su juicio, los cultores del revisionismo trataban de "poner el pasado al servicio de mezquinas estrategias del presente en materia de penetración ideológica (para) obtener de los sectores populares un abandono de los ideales democráticos y liberales creadores de la nación en la cual hemos nacido"<sup>34</sup>. Pero sus inquietudes se acrecentaron cuando se hizo evidente el atractivo de las concepciones revisionistas sobre altos funcionarios del gobierno peronista. Como muestra de su temprana propensión a realizar actos impactantes para la sensibilidad de los medios de comunicación, el entonces gobernador de la provincia de La Rioja, Carlos Saúl Menem, recibió críticas del matutino por sustituir el nombre del general Bartolomé Mitre de una plaza provincial con el justificativo de que se trataba de un "traidor". Nadie podría, sentenció el diario, borrar a Mitre del justo lugar que ocupaba en la historia, y eso sería así, "a pesar de las oscuras pasiones de los hombres a los que el poder transitorio les hace suponer condiciones para trastornar la dignidad del pasado"<sup>35</sup>. El desagrado marcó, también, el tono de la respuesta al gobernador riojano del Instituto Sanmartiniano. De ese modo, la iniciativa de cambiar los nombres de lugares públicos, Sarmiento por Quiroga o Mitre por Chumbita, hizo de Menem uno de los propagandistas antiliberales de ese accidentado período. No es inverosímil que muchos hayan pensado en esos días que nunca más el liberalismo perdonaría al entonces joven gobernador.

En el transcurso de la primera mitad de 1975 el gobierno de "Isabel" Perón entró en una pendiente que ya no conseguiría remontar. *La Nación* reflexionó sobre esa declinación, ya sin su habitual estilo pedagógico, como si hubiera llegado a la convicción de la imposibilidad de hallar receptores para sus ideas en los ocupantes del aparato estatal. Aun cuando recibió con beneplácito algunas medidas afines con sus tradicionales enfoques, de todas maneras ya no recuperó el optimismo demostrado durante el corto período de la presidencia de Perón. Al diario le pareció totalmente acertada la decisión del gobierno de hacer participar a las fuerzas armadas en la lucha contra la guerrilla. Si bien la decisión causó cierta sorpresa, decía, se encuadraba perfectamente en las disposiciones legales vigentes, y la comprobación fáctica de que "nos hallamos en un inequívoco estado de guerra debería bastar para aventar dudas al respecto"<sup>36</sup>. De todas maneras eran

muchos más los motivos de discrepancia con las autoridades. No sólo los miembros del gobierno, sino también las estructuras corporativas que les daban apoyo fueron objeto de frecuentes recriminaciones. Así, cuando a pedido de la CGT y la CGE el gobierno decidió establecer una contribución económica forzosa de asalariados y empresarios, destinada a alimentar las respectivas arcas institucionales, el matutino denunció la arbitrariedad de tal iniciativa, la concepción corporativa del Estado de ambas entidades y la falta de representatividad del sector agropecuario de la CGE<sup>37</sup>. Su balance sobre la libertad de prensa fue, en 1975, totalmente negativo y sin eludir la mención de los acontecimientos más trágicos ocurridos en el periodo. El monopolio estatal de la mayoría de las radios y emisoras de televisión le parecía un signo de restricción de la libertad de opinión; enfatizaba las persecuciones desatadas contra determinados periodistas, los atentados cometidos contra algunos medios de prensa y las clausuras impuestas por el Poder Ejecutivo en virtud del estado de sitio<sup>38</sup>.

El denominado "Plan Rodrigo" no modificó la desconfianza del diario en la capacidad de las autoridades para revertir la situación. Sin mostrar convicción por las medidas propuestas por quien pasaría tan efímeramente por la conducción económica, pero cuya gestión bautizaría por derivación de su apellido un hito de fractura en el desenvolvimiento del país, *La Nación* editorializó, entre irónico y cansino, sobre lo que podía hacerse, sin mostrar mayor esperanza en la puesta en práctica del plan<sup>39</sup>. La respuesta sindical contra el Ministerio de Economía generó una intensa agitación, que apuntó tanto a la renuncia de López Rega, juzgado inspirador y sostén político de Rodrigo, como a la de este último. En medio de esa crisis social, en un análisis titulado "El agobio del país", el matutino estimó inaceptable que las luchas entre sectores internos del gobierno hubiesen llevado a un desorden de tal magnitud. Pasaba revista a las estrategias de los distintos actores para descubrir que todos habían calculado mal su propia capacidad. Hacía una mención específica sobre las fuerzas armadas y elogiaba su actitud de no compromiso con las partes en conflicto<sup>40</sup>. Luego de la renuncia de Rodrigo y sus equipos el diario publicó un suelto donde narraba algunos entretelones del hecho. Allí recogía declaraciones de Ricardo Zinn, uno de los principales colaboradores de Rodrigo, quien con orgullo comparaba al ministro y a quienes como él lo habían secundado en su gestión con "los 300 espartanos que lucharon en Las Termópilas"<sup>41</sup> y defendieron posiciones hasta último momento. La despedida de Rodrigo seguía inspirando mordacidad y sus "guerreros" no despertaban reverencias.

El ya politizado tema de la fabricación de papel para diarios había conocido en esos convulsionados años una novedad importante que con el tiempo tendría consecuencias para *La Nación*. Según una nota publicada en la revista *Dinamis*, patrocinada por el Sindicato de Luz y Fuerza, las acciones de Papel Prensa S.A., que originariamente pertenecieron al grupo Civita, habían cambiado de propietario por presiones ejercidas desde el Ministerio de Economía durante la gestión de Gelbard. La transferencia se había realizado a favor de un grupo financiero vinculado, decía la nota, al ex ministro<sup>42</sup>. Por otra parte, en 1974 *La Nación*, *Clarín* y *La Razón* habían creado una sociedad, denominada FAPEL, cuya aspiración era acceder a la adjudicación de otra licitación oficial para instalar una nueva planta dedicada a la fabricación de papel de diario, dentro del régimen de promoción industrial establecido por el Estado. Tres años después, *La Nación* dijo que había participado de esa iniciativa para "oponerse de alguna manera a la política de control de los diarios que alentaba especialmente el gobierno de entonces. El control se procuraba en forma directa en aquellos diarios más vulnerables económicamente y en forma indirecta, a través de la manipulación de la futura fabricación de papel, en los diarios empresarialmente más sólidos"<sup>43</sup>. FAPEL, como se verá más adelante, terminó cumpliendo un rol empresarial distinto del originario.

El reemplazo de "Isabel" Perón por Ítalo Luder pareció un intento de salvar la continuidad institucional y encarar de manera más eficiente los problemas del país. El interinato de Luder duró un mes. El diario se ubicó entre quienes cifraron expectativas positivas en ese cambio. Aconsejaba al presidente interino tomar distancia de las pujas internas de su partido y gobernar para el conjunto de la sociedad, idea coincidente con lo enunciado por Luder<sup>44</sup>. Pero más allá de las expresiones de buena voluntad, la dinámica de los conflictos sociales y políticos presentaba un cuadro muy difícil de solucionar. Los paros de protesta de los ganaderos fueron totalmente justificados por el diario, que hizo eco a las protestas del sector. Los precios del ganado, decía, se encuentran entre un tercio y un quinto de los vigentes tres años antes. Corregir la política ganadera era urgente, le indicaba al gobierno, si se querían evitar situaciones conflictivas sin retorno<sup>45</sup>. La lucha contra la guerrilla registró algunos avances en el plano institucional en ese breve período de ejercicio gubernamental de Luder, que merecieron el elogio de la columna editorial. Así, la creación del Consejo de Seguridad Interna con la participación de los comandantes de las fuerzas armadas, el presidente y los ministros, fue una decisión bien acogida, aun

cuando no dejó de recordar que en otros tiempos el mismo partido oficialista había alentado el terrorismo. En sentido estricto, el diario ya no pensaba la guerrilla como un fenómeno aislado, la definía como parte de algo más general, la "subversión", cuya raíz veía en el descalabro de las instituciones, una de cuyas consecuencias era la existencia de la violencia armada<sup>46</sup>. Esta percepción del problema del terrorismo implicaba objetivamente depositar muy pocas esperanzas en una alternativa de salida por vía de Luder. Pero esto no significaba que el diario propiciara la quiebra del orden institucional. Cuando monseñor Bonamín, provicario castrense, caracterizó la situación imperante como el "festín de los corruptos", contexto de inmoralidad ante el cual, decía el prelado, perdía sentido el sacrificio de los militares en su lucha contra la guerrilla, *La Nación* alertó sobre el peligroso significado de esas palabras, rechazó las posibles intenciones golpistas del clérigo y aseguró que la población quería el mantenimiento de las instituciones y su normal funcionamiento, si bien eso no significaba, aclaraba, conformarse con meras formalidades<sup>47</sup>.

En un clima político crecientemente tenso, algunos dirigentes del peronismo se refirieron a los medios de prensa en términos extremadamente críticos. Carlos Saúl Menem, entonces gobernador de La Rioja, afirmaba a comienzos de diciembre de 1975: "No es un secreto que existe una prensa rastrera, que los espurios intereses manejados a través de ciertas empresas periodísticas juegan diariamente a la distorsión y al caos con el objeto de conducir imperceptiblemente al pueblo argentino hacia su propio sometimiento (...) es obvio nombrarlos porque el pueblo ya los conoce perfectamente"<sup>48</sup>. Según afirmaba Menem en la mencionada alocución, pronunciada en un congreso nacional de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, así como la tierra debía ser para quien la trabaja, los diarios debían pertenecer a los asalariados que los producían. El gobernador denunciaba, además, lo que denominaba oscurantismo liberal de las empresas autoconsideradas propietarias de la opinión pública. No es arriesgado suponer que, para Menem, *La Nación* se encontraba entre ese tipo de órganos de prensa.

Con el intento golpista de la Aeronáutica encabezado por el brigadier Capellini comenzaron los últimos tres meses del gobierno de "Isabel" Perón. Desquicio económico, crisis moral, disolución social, amenaza de la subversión fueron, entre otros, los motivos esgrimidos por los sublevados para justificar su iniciativa. Las reflexiones del matutino habían abordado en muchas ocasiones esos mismos temas, razón por la cual no podían parecerle fuera de lugar. De allí que su análisis sobre el hecho de armas se

centrara en la nueva situación política planteada. A su entender, el conjunto de los hombres de las fuerzas armadas compartían las preocupaciones de los sublevados. Así podía interpretarse, decía, el mensaje del general Jorge Rafael Videla, comandante en jefe del Ejército, cuando pedía "soluciones profundas y patrióticas" a todos aquellos que debían hacer su aporte para producir cambios. Pero el diario veía a los dirigentes del partido oficialista y a la mayoría de sus legisladores como poco sensibles ante la dramaticidad de la hora. Estos habían descartado por el momento la posibilidad de imponer por vía institucional el reemplazo de "Isabel" Perón. El análisis editorial argumentaba que, sin embargo, todavía podía existir tiempo para encontrar una salida sin quebrar la continuidad institucional e incitaba, aunque con poca convicción, a hallar esa alternativa<sup>49</sup>. En fin, otro aspecto interesante es que, desde la perspectiva analítica de *La Nación*, las organizaciones guerrilleras se encontraban, a fines de 1975, muy desgastadas por derrotas militares. Esta percepción se hizo patente en el editorial con motivo de una de las mayores operaciones de esas organizaciones, cuyo escenario fue Monte Chingolo, acerca de la cual subrayaba la carencia total de adhesión en la población de la zona. Por otra parte, afirmaba, las fuerzas armadas mostraban gran idoneidad para combatir a "ese enemigo pequeño pero temible por la capacidad de dispersión"<sup>50</sup>. Resulta interesante este modo de ver la guerrilla, con la consiguiente relativización de su peligro y, sobre todo, de su eventual desarrollo.

Durante los últimos meses del gobierno de "Isabel" Perón se multiplicaron las movilizaciones y paros, y las protestas de las corporaciones empresarias. Las principales organizaciones patronales convergieron en la creación de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias. Esa coalición tuvo un rol de fundamental importancia en la escena política, porque su acción se proyectó más allá de la reivindicación de intereses sectoriales. Así lo entendía y explicaba *La Nación* al comentar una de las más beligerantes declaraciones emitidas por la flamante convergencia. El diario destacaba que la APEGE no se movilizaba contra ningún otro sector social, sino contra un estado de cosas perjudiciales para el país en su conjunto. Nadie podía decir, enfatizaba, que la política gubernamental negativa para el desenvolvimiento de la actividad empresarial favorecía a los trabajadores; por el contrario, empobrecía al país y, naturalmente, a los asalariados. A su juicio, cuando la APEGE criticaba "el desorden laboral, la falta de seguridad física y jurídica, la inflación endémica, el descenso del salario real y de la productividad, la sumisión del poder estatal a dirigentes sindicales y la necesidad de

respetar las libertades y derechos consagrados en la Constitución, hace algo más que defender derechos propios y legítimos: brega por intereses del pueblo, cuyo conjunto integra más allá de las deformaciones semánticas empecinadamente difundidas<sup>51</sup>. Esas reflexiones revelaban una vocación de construcción de un discurso con pretensiones hegemónicas mucho mejor articulado que el formulado por las entidades corporativas. Además, no es aventurado suponer que más de un empresario haya descubierto, al leer el citado editorial, que era participante de una lucha semántica.

Las 62 Organizaciones, entidad gremial del peronismo, se encargó poco después, con motivo de un paro convocado por la APEGE, de hacer una caracterización muy distinta a la del matutino sobre dicha coalición empresaria. La declaración de las 62 Organizaciones comenzaba, paradójicamente, con una disquisición semántica: "El término 'paro', sinónimo de huelga, siempre ha sido parte esencial del patrimonio obrero, en más de ochenta años de luchas por el salario justo, la jornada máxima y demás reivindicaciones que hicieron y hacen a la existencia misma de nuestra CGT. Las interrupciones, breves o prolongadas, de la actividad patronal, siempre fueron denominadas *lock-out*. Así, en extranjero, nunca traducido al argentino. Porque jamás logró definitiva carta de ciudadanía en nuestra Patria"<sup>52</sup>. Los sindicatos peronistas afirmaban que el cuadro de la situación del país no era tan dramático como lo planteaban los empresarios en sus manifiestos "tan destacados por la prensa", decía, y con ellos no conseguirían amedrentar al gobierno ni a sus apoyos populares. Negaba, por otra parte, representatividad a la APEGE, señalaba su reciente creación, y la caracterizaba como "las formaciones especiales del gorilismo de extracción patronal (...) integrado por fabricantes de vacas, actividad que por respetable que pueda ser en general suelen confiar a la naturaleza tan pródiga en nuestra tierra. Ese dato define, mejor que cualquier otro, la composición social del comando huelguístico de la oligarquía"<sup>53</sup>. La declaración sindical consideraba que la falta de adhesión de la CGE y de la Confederación Industrial Argentina (CINA) al "paro" revelaba la ausencia de apoyos al mismo de una franja importante del empresariado. Según el documento gremial, el verdadero factor efectivamente unificante de los participantes de la APEGE era la creencia en el advenimiento de una dictadura apta para resolver todos sus problemas.

Para *La Nación* el "paro" empresario tuvo múltiples significados. En su opinión, había revelado el poder de convocatoria de la nueva coalición ya que incluso sectores no adheridos a ella

habían cesado sus actividades. También había mostrado, argüía, que cuando los caminos de la ley, de la razón y del diálogo quedaban cerrados “un grupo social pacífico por esencia y tradición, como el empresariado argentino, se cohesionaba fuertemente en defensa de sus intereses, que son en definitiva los de la comunidad”<sup>54</sup>. Las consecuencias del “paro” volvieron a ser analizadas una decena de días más tarde, pero con una visión estratégica de los intereses del empresariado que superaba ampliamente los límites de la situación coyuntural. En virtud del dinamismo de la APEGE, observaba, había entrado en crisis la CINA, muchos de cuyos miembros cuestionaban las orientaciones políticas de la conducción de la CGE. En ese contexto, afirmaba el diario, la “posibilidad de que surja una central empresaria que sintetice un modo distinto de pensar y de actuar podría inscribirse en la necesidad, urgente, sin duda, de buscar mayor equilibrio que el presente en el campo de las relaciones sociales para restituir a éstas la armonía y la equidad que se han ido deteriorando paulatinamente en los últimos años”<sup>55</sup>. Esa idea de la recomposición del equilibrio entre los distintos sectores sociales era dada como una precondition para la resolución de los problemas económicos, sociales y políticos del país.

En los primeros días de marzo, *La Nación* veló las armas de la crítica en la espera de la crítica de las armas. Otra vez era la crónica de un golpe anunciado que acompañaban, como había sucedido con otros anteriores, las expectativas positivas de parte considerable de la población. Para el diario había un responsable principal de la situación: el gobierno. Consideraba inútil cualquier esfuerzo de las autoridades, porque su futuro era limitado; por ello, aun cuando le resultaban acertados algunos diagnósticos del último ministro de Economía del peronismo, Emilio Mondelli, como la necesidad de disminuir los salarios reales, el matutino estimaba que un gobierno que había provocado el caos en la producción ya no podía realizar ese programa<sup>56</sup>. Con respecto a la guerrilla, mantenía su convicción acerca de su extrema debilidad. Pero al recordar que no hacía tanto tiempo los dirigentes del partido oficialista habían llamado a las organizaciones armadas “la juventud maravillosa”, se preguntaba si no había todavía figuras en dicha fuerza política propensas a apañar a los guerrilleros o a hacer acuerdos con ellos con miras a futuras campañas proselitistas<sup>57</sup>. Con esos razonamientos, en los que detrás del diagnóstico de la crisis se perfilaban las posibilidades de iniciar un cambio político de fondo, llegó al 23 de marzo de 1976. Ese día las 62 Organizaciones gremiales del peronismo aludieron con términos muy críticos a la prensa: “Casi todos los

más importantes medios periodísticos, desde hace más de una semana, se hallan empeñados en una desenfrenada competencia por anticipar pronunciamientos, definiciones y cambios, alentando desembozada y desprejuiciadamente la ruptura del orden constitucional<sup>58</sup>. El matutino publicaba un editorial dedicado a las dificultades de todo tipo que conocía la prensa por la acción del gobierno, de los sindicatos, y por la situación económica. Producido el golpe de Estado, formuló su previsible reflexión: "En la madrugada de ayer concluyó el desmoronamiento de un gobierno cuya única fortaleza consistía, en los últimos seis meses, en el empeño que para sostenerlo pusieron quienes no compartían sus propósitos"<sup>59</sup>. Ubicaba dos responsables de la etapa clausurada: el peronismo y los sindicatos. A las fuerzas armadas les tocaba, finalizaba el análisis, mantener la cohesión con la cual habían actuado hasta entonces: les señalaba, asimismo, que en el país existían valiosas reservas de confianza, pero, también, las amenazas del terrorismo. No se trataba, en absoluto, de un soliloquio. Tampoco era un mero mensaje explicativo y pedagógico a un imaginario lector instalado en el poder. Para la ocasión, los interlocutores tenían una existencia y demandas bien concretas. Ramiro Casasbellas, de *La Opinión*, narró meses después del pronunciamiento que "en la mañana del 24 de marzo, delegados militares del nuevo gobierno citaron en el Comando del ejército a los dirigentes de los medios de difusión para acordar el aporte que el régimen castrense aguardaba de ellos. Se entregaron, entonces, las normas generales elaboradas por el gobierno para una mejor intermediación de la prensa hacia el público en el relato del proceso que venía de abrirse. La guerra antisubversiva ocupaba, es obvio, un lugar eminente"<sup>60</sup>. Otro hombre de prensa, Félix H. Laiño, de *La Razón*, escribió sobre los lectores de uniforme verde oliva al referirse a esa primera jornada del "proceso": "El 24 de marzo de 1976, día de la revolución, había que llevar página por página del diario para que la sellara la censura, sin cuyo requisito no podía salir a la calle la edición. Cuando cesó la censura previa fue reemplazada por la autocensura"<sup>61</sup>. Así, a diferencia de lo sucedido en ocasión de golpes de Estado anteriores, el control de la prensa se incorporó como un dato desde el momento inicial de la nueva experiencia de ejercicio blindado del poder.

#### La Nación: 1973-1976

*La ingobernabilidad argentina alcanzó un nuevo y mayor pelotazo en los años analizados. Las condiciones de crisis del Estado, heredadas del régimen precedente, fueron el punto de partida de*

la nueva etapa. Muy pronto el peronismo demostró que no estaba en condiciones de transferir a las instituciones estatales la legitimidad política de la cual era depositario. Durante mucho tiempo habían madurado en su seno las orientaciones enfrentadas, que pasaron a librar sus combates atrincheradas, ahora, en los distintos aparatos estatales. Esto profundizó en la sociedad la pérdida de reconocimiento de la autoridad del Estado.

Emilio Durkheim definió al Estado como un órgano de racionalidad capaz de contraponer sus iniciativas a las ideas difusas y contradictorias que podían existir en una sociedad acerca de las metas y orientaciones más adecuadas para servir a los intereses colectivos<sup>62</sup>. Esa caracterización, seguramente, no le hubiera disgustado a Perón, cultor del pensamiento organicista. Pero la crisis del peronismo no pudo ser resuelta ni por el mismo Perón. Convertido en jefe del partido del orden, el anciano caudillo fue visto por sus enemigos de otros tiempos como la última posibilidad de recomposición del equilibrio social y político. Sin embargo, el sistema producido, precisamente, por las iniciativas interpuestas durante casi dos décadas para bloquear su retorno al poder, había dejado consecuencias que no serían fáciles de suprimir. La anterior experiencia de gobierno peronista había contado con una clave: la solidez del aparato estatal. La validez del orden político, en sentido weberiano, había sido entonces objetivamente aceptada tanto por los apoyos como por los adversarios del gobierno, aun cuando estos últimos juzgaran arbitrarios muchos de los procedimientos de las autoridades. No por casualidad en 1973 Perón hizo de la "reconstrucción del Estado" el eje central de su prédica cuando retornó al control del mismo. De hecho, la debilidad del Estado impidió que Perón volviera a ser Perón. También del lado de la sociedad los cambios habían sido profundos, en comparación con la experiencia anterior. En 1946 la autonomía corporativa de los sindicatos era mínima, frente a un poder político que los tutelaba y sancionaba sus disidencias. Las entidades empresarias de los inicios del primer peronismo vieron inmediatamente restringida su libertad de acción. En cambio, en 1973 el Estado débil estableció un pacto político con corporaciones que no estaban dispuestas a subordinarse a sus directivas. Es más, los aparatos estatales fueron capturados por las organizaciones sindicales y empresarias, siguiendo una lógica en la que el interés corporativo predominó netamente sobre la centralidad del poder estatal. Los sindicalistas al frente del Ministerio de Trabajo y los empresarios del de Economía simbolizaron una singular forma de abdicación del Estado frente a la sociedad. Al mismo tiempo, las pugnas internas del peronismo provocaban la fragmentación de las restantes instancias estatales.

Si en 1946 el Estado había sido el lugar de unificación de quienes convergían desde horizontes muy distintos, y aun antagónicos, en la formación del nuevo movimiento político, en la experiencia de 1973 ocurriría algo muy diferente. Cada aparato estatal se hizo faccioso y fue colonizado por tendencias enfrentadas dispuestas a recurrir a la violencia para dirimir las luchas por el predominio. El Estado, en tanto garante del interés general, ya no existía en la Argentina desde hacía mucho tiempo. Con los peronistas se quebró su unidad formal. La acelerada pérdida de valor de la moneda fue otra dimensión del agudo proceso de crisis del Estado.

La lucha contra la guerrilla ofrecía a ese Estado deteriorado la posibilidad, al menos, de aparentar un principio de reconstrucción. Asumida esa tarea por la vía paramilitar con una violencia que no se reconocía como oficial, el gobierno de Isabel Perón profundizó la disolución de la esfera estatal. La crisis económica, la acción del terrorismo y la influencia ganada por los sindicatos sobre el poder político fueron los ejes del discurso de unificación del empresariado. Las corporaciones patronales lanzaron una ofensiva general contra el debilitado gobierno peronista. En ese dispositivo, La Nación ocupó su puesto de combate. Al diario le correspondió, otra vez, encontrar los puntos de convergencia dispersos en el escenario político y social para dotar de una visión más homogénea al bloque unido coyunturalmente sólo en el común rechazo a la gestión gubernamental. Lo que para cada categoría dominante era una reivindicación sectorial, en los editoriales del matutino podía convertirse en un elemento aparentemente integrado a un programa compartido. En realidad, se trataba de una mera yuxtaposición y no de una articulación efectiva, pero la función política de ese remedo de programa fue dotar a las categorías dominantes de la ilusión de haber recuperado, quizás en parte, la unidad perdida desde hacía ya largo tiempo. El diario no fue el único que contribuyó a ese equívoco. La confluencia de las categorías dominantes conformó la base social del golpe de marzo de 1976.

Alain Rouquié destacó en un estudio sobre las fuerzas armadas argentinas el rol político que las mismas jugaban en virtud de ser el grupo con mayor consistencia y unidad interna que existía en el país, siendo ésa una condición que las colocaba en una posición ventajosa frente a una sociedad y un sistema político muy divididos<sup>63</sup>. Los militares se hicieron cargo en 1976 de un Estado fragmentado y desacreditado frente a la sociedad. La toma del poder por la parte uniformada de la burocracia pública era en sí mismo un acto que revelaba la intensidad de la crisis del Estado. ¿Podría la unidad de las fuerzas armadas contrarrestar exitosamente la crisis de los aparatos estatales o esta última terminaría

por dividir las a ellas? ¿Podrían los políticos blindados resolver la ingobernabilidad argentina o se convertirían en reproductores del mismo problema que proclamaban querer resolver? La Nación recibió con satisfacción y alivio la instalación de los comandantes en la conducción del Estado. El matutino estaba, por cierto, muy lejos de imaginar cómo despediría a los militares siete años después. Las fuerzas armadas habían ocupado un Estado en crisis; devolvieron hasta los oropeles del poder hechos añicos.

## NOTAS

<sup>1</sup> *La Nación*, 26-5-1973, pág. 8.

<sup>2</sup> Jacobo Timerman: solicitada en *La Nación*, 2-6-1973, pág. 8. "La respuesta del personal de *La Opinión* para negar las imputaciones", en *La Nación*, 6-6-1973, pág. 18.

<sup>3</sup> *La Nación*, 21-6-1973, pág. 8.

<sup>4</sup> *La Nación*, 23-6-1973, pág. 8.

<sup>5</sup> *La Nación*, 14-7-1973, pág. 6.

<sup>6</sup> *La Nación*, 26-7-1973, pág. 8.

<sup>7</sup> *La Nación*, 21-8-1973, pág. 8.

<sup>8</sup> *La Nación*, 25-9-1973, pág. 8.

<sup>9</sup> *La Nación*, 27-9-1973, pág. 8.

<sup>10</sup> *La Nación*, 12-10-1973, pág. 4.

<sup>11</sup> *La Nación*, 22-1-1974, pág. 8.

<sup>12</sup> *La Nación*, 5-3-1974, pág. 8.

<sup>13</sup> Discurso de Perón, *La Nación*, 13-6-1974, pág. 12.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *La Nación*, 13-6-1974, pág. 6.

<sup>16</sup> *La Prensa*, 15-6-1974, pág. 4, editorial titulado "Una convulsión inútil pero sugerente".

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *La Nación*, 19-6-1974, pág. 8.

<sup>19</sup> *La Nación*, 29-12-1973, pág. 4. En esa época, Alberto J. B. Caprile, miembro de una de las familias propietarias del diario y colaborador sobre temas económicos, publicó un libro con ideas similares a las expuestas en el editorial citado. Alberto J. B. Caprile: *La libertad crucificada. Análisis de la economía argentina*, Ediciones Ambassador, Buenos Aires, 1974.

<sup>20</sup> *La Nación*, 24-6-1974, pág. 6.

<sup>21</sup> *La Nación*, 2-7-1974, pág. 6.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *La Prensa*, 3-7-1974, pág. 5, en la solicitada "El personal del diario *La Prensa*".

<sup>24</sup> *La Nación*, 17-7-1974, pág. 8; 2-8-1974, pág. 6.

<sup>25</sup> *La Nación*, 14-9-1974, pág. 6.

- 26 *La Nación*, 22-9-1974, pág. 8. El título del citado editorial era "La universidad que el país espera".
- 27 *La Nación*, 5-9-1974, pág. 8.
- 28 *La Nación*, 16-9-1974, pág. 8.
- 29 *La Nación*, 24-10-1974, pág. 8.
- 30 *Revista Cabildo*, 10-12-1974, pág. 22.
- 31 *Ibid.*, pág. 4.
- 32 *Ibid.*, pág. 6.
- 33 *Revista Carta Política*, N° 13, 3ª semana de diciembre de 1974, pág. 13.
- 34 *La Nación*, 24-11-1974, pág. 8.
- 35 *La Nación*, 2-2-1975, pág. 8.
- 36 *La Nación*, 13-12-1975, pág. 6.
- 37 *La Nación*, 9-3-1975, pág. 8.
- 38 *La Nación*, 7-6-1975, pág. 8.
- 39 *La Nación*, 6-7-1975, pág. 8.
- 40 *Ibid.*, pág. 8.
- 41 *La Nación*, 20-7-1975, pág. 20.
- 42 "El fin de un largo camino", en revista *Dinamis*, N° 84, septiembre de 1975, págs. 18-22.
- 43 "A la opinión pública", solicitada en *La Nación*, 19-5-1977.
- 44 *La Nación*, 17-9-1975, pág. 6.
- 45 *La Nación*, 27-9-1975, pág. 6.
- 46 *La Nación*, 7-10-1975, pág. 6.
- 47 *La Nación*, 12-10-1975, pág. 8.
- 48 "Carlos Menem es partidario de la expropiación de la prensa", tituló el artículo sobre ese discurso *El Cronista Comercial* del 8-12-1975.
- 49 *La Nación*, 23-12-1975, pág. 8.
- 50 *La Nación*, 26-12-1975, pág. 6. El título del citado editorial guardaba estricta relación con su espíritu no alarmista: "Otro fracaso".
- 51 *La Nación*, 27-12-1975, pág. 4. Es interesante señalar que la actitud del diario a favor de las movilizaciones empresarias lo había llevado a publicar, a mediados de 1975, informaciones desfavorables a la posición de la Sociedad Rural Argentina por considerarla poco combativa, lo cual, decía, disgustaba a sus asociados. La entidad reprochó por nota al director de *La Nación* ese comentario, que juzgó malevolente, y señaló, además, su buena predisposición hacia el matutino: "La entidad que representamos siempre ha tenido las mejores relaciones con ese diario y ha reconocido de múltiples formas su lugar de primera línea en la prensa argentina y la importante acción que lleva a cabo en la información y orientación de sus lectores, que en considerable número pertenecen al sector agropecuario y en especial a esta entidad". Reproducida en *Anales de la Sociedad Rural Argentina*, Suplemento de la revista *Anales*, año 1975, pág. 92.
- 52 "No al lock-out patronal", solicitada en *La Nación*, 15-2-1976, pág. 15.
- 53 *Ibid.*
- 54 *La Nación*, 18-2-1976, pág. 6.
- 55 *La Nación*, 28-2-1976, pág. 4.

<sup>56</sup> *La Nación*, 7-3-1976, pág. 8; 10-3-1976, pág. 4.

<sup>57</sup> *La Nación*, 16-3-1976, pág. 6.

<sup>58</sup> Declaración reproducida por Pablo Kandel y Mario Monteverde: *Entorno y caída*, Editorial Planeta Argentina, Colección Textos, Buenos Aires, 1976, pág. 212.

<sup>59</sup> *La Nación*, 25-3-1976, pág. 4.

<sup>60</sup> Revista de *La Opinión*, N° 23, 5 al 11 de diciembre de 1976, pág. 34.

<sup>61</sup> Félix Laiño: *Secretos del periodismo*, Plus Ultra, Buenos Aires, 1987, págs. 200-201.

<sup>62</sup> Emilio Durkheim: *Lecciones de Sociología. Física de las costumbres y del derecho*, Editorial Schapire, Buenos Aires, 1966, pág. 51.

<sup>63</sup> Alain Rouquié: *Poder Militar y Sociedad Política en la Argentina*, Emecé, Buenos Aires, 1985, Tomo 2, pág. 419.

CUARTA PARTE

DESHOJANDO EL AUTORITARISMO  
1976 - 1983



## XIV

### La tipografía en frío de los años de plomo

Al adherir a la iniciativa militar que puso fin al gobierno peronista, *La Nación* coincidió con un amplio conjunto de sectores sociales y actores políticos que vieron esa decisión como un paso necesario para recuperar el normal funcionamiento del sistema institucional. Incluso desde el seno del movimiento peronista se formularon opiniones que justificaban la intervención de las fuerzas armadas. Tal como había ocurrido con golpes anteriores, inmediatamente después de producido el derrocamiento de las autoridades el diario consideró adecuada la decisión castrense, pero dejó abierto el interrogante sobre las orientaciones que, de allí en más, tomarían los nuevos encargados de conducir los asuntos públicos. Del acta donde los militares fijaron los objetivos básicos del Proceso de Reorganización Nacional, el matutino subrayaba con cierta satisfacción el párrafo que indicaba la intención de promover el desarrollo económico basado en el equilibrio y la participación responsable de los distintos sectores a fin de asegurar la posterior instauración de una democracia republicana, representativa y federal. Era notorio, decía, que esos lineamientos generales se prestaban a interpretaciones subjetivas diferentes, pero en su opinión existía en el país una conciencia histórica que aclaraba el sentido de esas expresiones y marcaba de por sí el rumbo para una adecuada puesta en ejecución de las políticas para alcanzar esas metas<sup>1</sup>. Pero aun cuando el futuro inmediato pudiera suscitar sus dudas, quizás alimentadas por el todavía fresco recuerdo del régimen de Onganía, el matutino no dejaba de expresar las expectativas positivas que depositaba en la nueva etapa. "La edad de la razón" fue el título del editorial publicado el día en que el general Videla prestó juramento como presidente de la República. En la tradición intelectual de los países de habla inglesa, *Age of Reason* fue el modo de designar la época abierta desde el siglo XVIII, que debía dejar atrás, se espe-

raba, las supersticiones y los errores del pasado; era el equivalente al *Siècle des lumières* de sus contemporáneos franceses. La intención del mencionado editorial no era, sin embargo, atribuir a Videla y a sus compañeros de la junta militar cualidades de filósofos políticos portadores de un saber capaz de iluminar la nueva época; más modesto en sus referencias, el título remitía a las etapas de crecimiento del hombre proponiendo una analogía con la maduración de las sociedades. El texto invitaba a los gobernantes a tratar a la ciudadanía de manera adulta<sup>2</sup>. Entre filosófico y literario, ese editorial, que debió recordarle a algún lector el nombre del primer volumen de la célebre trilogía de Jean-Paul Sartre, finalizaba invocando la conocida incitación de Ortega y Gasset: "Argentinos, a las cosas mismas", sin duda, con la correcta presunción de que en esas circunstancias era más adecuado citar al ensayista español y no al pensador francés.

El primer discurso del general Videla fue evaluado con inocultable satisfacción por el diario, complacido por la moderación de las ideas expresadas por el mandatario. Un aspecto interesante para destacar: el matutino pasaba por alto todas las dimensiones de tipo refundacional explícitamente planteadas por Videla en el mensaje, y prefería leerlo en una clave sensiblemente atemperada. Así, incluso llegaba a formular una idea que no se desprendía del texto presidencial, pleno de promesas de cambios profundos e irreversibles y de anuncios de una nueva época; el comentario veía como muy significativa la omisión de la palabra "revolución" en el léxico de los equipos recién instalados en el poder. Adjudicaba esa ausencia al hecho de no haber derrocado los militares, decía, a ninguna autoridad existente, sino cubierto un "vacío de poder". Aunque esta última explicación era dada con frecuencia por los jefes castrenses, no era menos notorio que la idea de "revolución" estaba presente en todos los planteos del gobierno; la no utilización del término se debía, probablemente, a la devaluación de su significado por los magros resultados de anteriores experiencias protagonizadas por la institución, y no reflejaba, por cierto, una voluntad de impulsar en 1976 un proyecto de aspiraciones módicas. Desde su óptica, el diario señalaba un dato objetivo para fortalecer su interpretación: "No hubo proclama porque no hubo revolución. En cambio, hay una convocatoria a la ciudadanía para que apoye al nuevo gobierno por la vía de la comprensión de las causas determinantes del cambio y de la magnitud de los problemas que han paralizado al país"<sup>3</sup>. Rescataba, además, en el mencionado análisis, la referencia en el discurso presidencial al futuro renacimiento de los partidos políticos y la reinstalación de los mecanismos fundamen-

tales de la democracia, sujetos a un tiempo de maduración, afirmaba, y no a una urgencia de plazos. Tanto en los fines como en los medios, el nuevo gobierno debía, en su opinión, ganarse la confianza de la sociedad y ésta, conjeturaba, no se mostraría remisa a acordársela si veía seriedad y esfuerzo sostenido en las autoridades. Fiel a esa perspectiva, el matutino evaluó positivamente la exposición del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, y expresó su conformidad con sus propuestas. Ese apoyo no le impidió, sin embargo, aseverar: "Aplaudimos la didáctica exposición del ministro de Economía, pero insistimos que un país moderno de la importancia mundial de la Argentina, requiere mucha más información que la proporcionada, si se quiere que comience de una vez el proceso dinámico de creciente producción de bienes que corresponde a nuestros recursos y a nuestra capacidad humana"<sup>4</sup>. De ese modo, en nombre de la opinión pública, el diario mantenía su posición de interlocutor del poder sin dejarse confundir con quienes lo ejercían, aun cuando éstos proponían proyectos dignos de movilizar su esperanzada adhesión. Así, desde su inicio, quedaba planteada una relación cuyo desarrollo todos estaban aún lejos de imaginar. Pero en principio, en la medida que el gobierno militar se proponía liberalizar la economía, el matutino estimuló esa orientación, y señaló aquellos aspectos sobre los cuales se debía actuar con rapidez para lograr dichas metas. El desmantelamiento de los controles y de las disposiciones impuestas por la anterior administración, criticados por las corporaciones rurales, era destacado como una tarea prioritaria<sup>5</sup>. Allí se concretaría, a su modo de ver, la consistencia de los anuncios hechos por el nuevo ministro de Economía.

Las preocupaciones del diario por lo material no marchaban separadas de otras de orden espiritual. En ese dominio invitaba a las autoridades del área educativa a revisar los programas de la escuela secundaria, donde a su entender se habían introducido durante la gestión precedente contenidos ajenos a la función docente. Para resumir lo ocurrido con algunas materias dedicadas al estudio de la realidad social argentina, argumentaba que mediante el uso de conceptos tales como "dependencia extranjera", "grupos sociales opresores" o "minorías dirigentes", se había construido "un razonamiento ideológico donde todo se presentaba exactamente del revés, y la verdad y la mentira se confundían inextricablemente en las mentes ingenuas de niños y adolescentes"<sup>6</sup>. Los procesos educativos volvieron a ocupar la atención del editorialista pocos días más tarde, pero esta vez como parte de una larga disquisición sobre su importancia para

construir una nueva visión de la sociedad. Contrapuesto a quienes creían que los cambios impulsados por el régimen militar se lograrían básicamente mediante la eficiencia económica, el matutino resaltaba el rol de la educación en la elaboración del nuevo ordenamiento social<sup>7</sup>. Con la clara intención de contribuir a indicar a los gobernantes militares nuevos campos de acción en su lucha contra la subversión, el matutino incursionaba en temas culturales y sugería aguzar la vigilancia sobre prácticas aparentemente alejadas de la política. Hacia gala de una sensibilidad inquisitorial que hubiese conmovido a Tomás de Torquemada: "Desde un teatro de títeres a una campaña por una supuesta educación sexual; desde un estudio con pretensión científica a una promoción del deporte, todo puede instrumentarse al propósito del deterioro (...) Es indispensable que se afirme una acción mentalizadora capaz de resistir y deshacer las formas sutiles de penetración que nos atacan (...) En este aspecto una batalla de honda resonancia es la que se cumple en el área de las palabras (...) Tenemos que apuntar a una vigorosa cohesión lingüística que exprese la peculiaridad de la gran concepción del mundo y de la vida que hemos asumido por obra del cristianismo y de los fundadores de nuestra nacionalidad"<sup>8</sup>. El estilo discursivo, distinto en múltiples aspectos del utilizado usualmente por el diario, debió reconfortar a los militares del Regimiento de Infantería Aerotransportada XIV de Córdoba en cuyos predios, pocos días antes, habían quemado publicaciones consideradas de carácter subversivo, acto al cual fue invitada la prensa. El comunicado castrense que explicó el significado del evento sostenía la necesidad de hacer desaparecer una "documentación perniciosa que afecta el intelecto y a nuestra manera de ser cristiana. A fin que no quede ninguna parte de estos libros, folletos y revistas, se tomó esta resolución para que se evite con este material continuar engañando a nuestra juventud sobre el verdadero bien que representan nuestros símbolos nacionales, nuestra familia, nuestra Iglesia, y en fin, nuestro más tradicional acervo espiritual sintetizado en Dios, patria y hogar"<sup>9</sup>. *Mutatis mutandis*, la iniciativa "cultural" llevada a cabo en Córdoba recordaba la noche del 10 de mayo de 1933, cuando en la plaza *Unter den Linden*, frente a la Universidad de Berlín, el nacionalsocialismo recién instalado en el poder arrojó a las llamas alrededor de 20.000 libros de autores alemanes y extranjeros, decisión justificada con una declaración donde se afirmaba la necesidad de destruir todo libro "que tenga una acción subversiva sobre nuestro futuro o afecte las raíces del pensamiento alemán, del hogar alemán y las fuerzas motrices del pueblo"<sup>10</sup>.

La libertad de prensa fue uno de los temas abordados por el presidente Videla en una reunión con los representantes de los medios del interior; el tema motivó, como era de prever, la reflexión del matutino. El primer mandatario había pedido una prensa objetiva y no complaciente, pues a través de los medios esperaba conocer la voz del pueblo, de quien en una primera etapa demandaba comprensión frente a las tareas inmediatas requeridas para el restablecimiento futuro de las instituciones democráticas. *La Nación* comentó con satisfacción las ideas del presidente, que estimó correctas y adecuadas para el momento que afrontaba el país<sup>11</sup>. Probablemente no tan convencido de la libertad de expresión prometida, el director de la revista humorística *Satiricón* había publicado en esos días una solicitada para comunicar a sus lectores que por razones de fuerza mayor la empresa se veía en la necesidad de suspender la publicación.

Sólo de una manera tangencial y para ser leída entre líneas, el terrorismo de Estado impuesto por el gobierno militar comenzó a ser aludido en los editoriales de *La Nación* luego de dos meses de instalado el nuevo poder. "El imperio de la muerte" fue el título de un editorial dedicado fundamentalmente al asesinato del general Juan José Torres, quien luego de ser desalojado de la presidencia de Bolivia había buscado asilo en nuestro país. Pocos días antes, recordaba el matutino, habían sido igualmente víctimas de anónimos criminales los ex legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, refugiados en Buenos Aires por la situación imperante en la vecina república. De una forma un tanto confusa, el texto reflexionaba sobre esas muertes de inocultable autoría parapolicial y oscilaba entre atribuir la responsabilidad a una conspiración internacional, como sostenía el gobierno, o a la guerrilla, pero el análisis terminaba: "Sólo la voluntad férrea de retornar a la obediencia a la ley, al respeto por los derechos ajenos y al acatamiento a los principios de humanidad, nos evitará momentos más aciagos que los que estamos viviendo. Si persistimos en no defendernos con los recursos legítimos a nuestro alcance, nos aproximaremos cada día más al abismo"<sup>12</sup>. Dificilmente ese tipo de invocación podía tener como destinatarios a los "conspiradores internacionales" o a la guerrilla. Esta última, por cierto, se mostraba activa en la comisión de atentados severamente condenados por el matutino, que al mismo tiempo le auguraba un muy próximo fin gracias a la eficacia de la represión estatal. En ese contexto, dada por segura, ineludible y pronta la derrota de la subversión, la reflexión editorial pareció exasperarse y prefirió evitar eufemismos cuando abordó lo que caracterizó como "el asesinato —alevoso, como todos los

que perpetra el extremismo— de tres sacerdotes católicos y dos seminaristas en una iglesia de la metrópoli (que) revela en toda su descarnada realidad a cuánto llega la saña criminal de ciertos grupos —no identificados en cuanto a los componentes pero reconocibles en su conjunto por sus métodos y por sus propósitos— en su afán vesánico de desencadenar el caos, sembrar el terror y sumir a la sociedad en la confusión trágica para que no tenga otra alternativa que la del sufrimiento de su corazón sacudido de continuo por la imagen siniestra de la irrealidad que sólo procura exterminar y destruir”<sup>13</sup>. El luctuoso suceso en que habían sido asesinados los cinco religiosos, pertenecientes a la congregación de origen irlandés de los palotinos, no dejaba ya lugar al empleo de términos equivocados, y probablemente el matutino trató de influir con su análisis en las discusiones que pudieron producirse en algunas esferas del gobierno acerca de la conveniencia de continuar con la acción represiva extralegal. Los hechos posteriores indicaron que si ese supuesto debate existió, se laudó a favor de los sectores partidarios de mantener el *modus operandi* rechazado por el diario. El Episcopado remitió una quincena de días después del asesinato de los sacerdotes palotinos un documento condenatorio del hecho a la junta militar, y aunque los términos usados por las autoridades eclesiásticas eran cautelosos, dieron pie al matutino para volver a referirse al tema y pedir, en lenguaje igualmente medido, el monopolio del control de la violencia represiva por parte del Estado<sup>14</sup>. Cuarenta y ocho horas antes de la declaración episcopal, en La Rioja habían sido secuestrados dos sacerdotes, uno de ellos de nacionalidad francesa, quienes aparecieron muertos cuatro días después. Como ejemplo de la ambigüedad de sus posiciones editoriales frente a la violencia paraestatal, el análisis de *La Nación* atribuyó el asesinato de los clérigos, tanto de La Rioja como los palotinos, a “una conjura que desde algunos centros internacionales se ensaya para crear en el exterior la imagen del caos en la Argentina, con inclusión, claro está, de la falta total de garantías sobre la seguridad de las personas (y el) designio avieso de originar situaciones enojosas con los gobiernos de los países de que eran oriundas las víctimas de los crímenes mencionados”<sup>15</sup>. En fin, por una vía un tanto paradójica, el diario volvió a ocuparse del tema eclesiástico muy pocos días después, en oportunidad de formular una crítica a la decisión del gobierno de Santiago del Estero de establecer la enseñanza religiosa en la provincia. Unos de los argumentos para objetar la medida se encuadraba perfectamente en su larga tradición laicista, pero el segundo era más coyuntural y se situaba en un terreno muy distinto. Según sostenía, la Iglesia Católica atra-

vesaba en América Latina circunstancias difíciles para evitar que las posiciones emanadas del Concilio Vaticano II y de la convocatoria de Medellín provocaran radicalizaciones ideológicas en sus filas y sirvieran "de excusa o de ocasión para filtraciones marxistas o para estimulaciones subversivas de las cuales se ha nutrido con sagacidad el movimiento terrorista"<sup>16</sup>. El razonamiento concluía que allí donde se instituyera la enseñanza religiosa la Iglesia tendría dificultades para encontrar sacerdotes políticamente confiables para impartir docencia, problema, según agregaba, ya presente en sus propias instituciones escolares.

La acción del terrorismo de Estado en el secuestro de personas cuyo paradero sería luego desconocido llegó antes que a los editoriales a la sección dedicada a las noticias de Tribunales. Con encomiable economía de lenguaje, que sin embargo decía todo, dicha sección, habitualmente dedicada a una información más especializada, comenzó a poblarse con el detalle de los *habeas corpus* presentados para reclamar por los desaparecidos. Cual una letanía, los procedimientos del terror dejaron allí su testimonio. Unos desaparecidos de su domicilio, otros de su lugar de trabajo o en la vía pública; algunos llevados por personal de civil, otros de uniforme; individualmente o con su grupo familiar; en ciertos casos, la información agregaba algunos datos más, pero más allá del laconismo quedaba anulado el margen del eventual "yo no sabía". En ese contexto de evidencias de delitos protagonizados por personal militar y policial, el matutino publicó un editorial titulado "Derechos Humanos" donde, después de señalar cómo la guerrilla había iniciado su violación, abordaba explícitamente las modalidades de la represión: "No deja de sorprender la persistencia de algunos acontecimientos ante los cuales las autoridades parecieran revelar impotencia para llegar a su esclarecimiento final, como si la conducción de la lucha contra la guerrilla y la subversión provocara canales de algún modo no suficientemente controlados"<sup>17</sup>. El llamado a poner fin a lo que designaba como la "contra guerrilla" fue reiterado una semana más tarde, con motivo de la aparición de un elevado número de cadáveres, decía textualmente, en un virtual cementerio de emergencia, hecho que asociaba directamente a una represalia por el asesinato del general Omar Actis<sup>18</sup>. Preocupaba, además, al diario, que los integrantes de la "contra guerrilla" conformaran bandas de delincuentes dedicados a realizar secuestros para obtener rescates pecuniarios.

Cuando trascendió que el gobierno militar se proponía crear un Ministerio de Planeamiento, *La Nación* manifestó serias dudas acerca de la conveniencia de tal iniciativa. ¿Se trataba de imple-

mentar un nuevo aparato burocrático? ¿No era el planeamiento parte de una filosofía totalitaria opuesta al liberalismo? ¿Se abría sin quererlo una nueva vía para el intervencionismo estatal? ¿No terminaría el de Planeamiento hostigando la labor de otros ministerios? Éstos fueron, muy apretadamente, los interrogantes de los primeros editoriales sobre el tema<sup>19</sup>. Por su parte, Álvaro Alsogaray expresaba opiniones mucho más contundentes sobre el nuevo ministerio: "La creación del Ministerio de Planeamiento implica un contrasentido total porque el gobierno, al querer implantar el sistema de libre empresa privada a través del Ministerio de Economía, estaría siguiendo un rumbo determinado y al orientarse hacia la economía planificada al crear el Ministerio de Planeamiento estaría siguiendo un rumbo totalmente opuesto"<sup>20</sup>.

Al comenzar el último trimestre de 1976 la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas expresó su preocupación por las persecuciones registradas contra la prensa. Como lo había hecho en otras ocasiones, *La Nación* recogió esa protesta editorialmente y manifestó su acuerdo. Hacía especial mención de la clausura impuesta en Córdoba al diario *Los Principios*, fundada, decía, en una resolución de las autoridades provinciales que sancionó al órgano de prensa por lo que había dejado de decir. El criterio, afirmaba, era peligroso y abría la puerta a toda clase de subjetivismos. Se preguntaba, por otra parte, si ese accionar del Ejecutivo provincial no estaba en contradicción con lo expresado por el gobierno nacional cuando sostenía su voluntad de respetar la libertad de expresión<sup>21</sup>. Poco después se comenzaba a debatir en la Sociedad Interamericana de Prensa, institución que agrupaba a la mayoría de la prensa del continente, el caso argentino, y en ese foro los representantes de *La Nación* y *La Prensa* coincidieron en que los problemas en materia de libertad de prensa existentes en el país debían explicarse básicamente por la situación de lucha contra la subversión. En ese sentido, sostuvieron que se trataba de un momento de transición. Al renovarse las autoridades de la SIP, Juan Valmaggia, de *La Nación*, fue designado presidente.

Un acontecimiento imprevisto actualizó el tema de Papel Prensa S. A. A mediados de 1976 fallecía en un accidente aéreo el financiero David Graiver, propietario de un importante paquete de acciones de dicha empresa. Por sugerencia del gobierno militar, sus herederos pusieron en venta esas acciones. Así, el Estado pasaría a compartir con nuevos socios el manejo de la empresa. Los adquirentes de las acciones fueron tres diarios porteños: *La Nación*, *Clarín* y *La Razón*. Desde ese momento, *La Nación* no sólo se asoció al Estado en un emprendimiento industrial, sino que se

convirtió en beneficiario de una promoción sectorial que en otros momentos había criticado acremente desde sus editoriales. En el campo periodístico se registraron desde entonces nuevos debates y conflictos a propósito de la controvertida empresa y de los estímulos acordados por el Estado a su desarrollo. Las facilidades y preferencias otorgadas por el gobierno militar a los tres diarios convertidos en copropietarios de Papel Prensa S.A. fueron, también, objeto de denuncias y recriminaciones por parte de otros órganos de prensa, que resultaron perjudicados. No faltaron, tampoco, quienes vieron en la asociación entre el Estado y los mencionados diarios un mecanismo potencialmente capaz de limitar la libertad de opinión de los mismos.

La evolución política argentina era seguida con inquietud por distintos gobiernos de los principales países occidentales. En especial, la violación de los derechos humanos despertaba sensibilidad. Las audiencias celebradas por el Subcomité de Organizaciones Internacionales del Congreso de los Estados Unidos constituyeron una instancia que preocupó al gobierno militar y a quienes lo apoyaban. La posibilidad de que en el ámbito legislativo de la nación del Norte se escucharan denuncias tendenciosas favorables a la guerrilla y faltara una visión equilibrada del proceso político argentino movió a Jacobo Timerman, director de *La Opinión*, a ofrecerse como testigo ecuaníme. Su diario, aseguraba, había condenado todas las formas de violencia y eso le otorgaba autoridad<sup>22</sup>. La publicación dirigida por Timerman ensayaba en la época los límites de lo permitido en materia de difusión de noticias y declaraciones que pudieran desagradar a las autoridades militares. Entre esas actitudes se contó la publicación de un documento del sindicalismo peronista en el cual se hacían duras críticas a la conducción económica del "proceso" y a las orientaciones del gobierno en su conjunto, incluida la violencia paraestatal. La decisión de *La Opinión* de publicar el texto gremial motivó un comentario de *La Nación* que desagradó y alarmó al diario de Timerman. Con el elocuente y expresivo título "Sobre epigramas y anhelos", *La Opinión* afirmó: "En su edición del domingo 9, el epigramático columnista del diario *La Nación* señalaba que había resultado más grave la publicación del documento gremial que la existencia del documento mismo. En ediciones anteriores, había sugerido que sería sancionado el periodismo responsable de esa difusión, es decir, *La Opinión*. Bajo esa faz aparentemente noticiosa, la información sobre las sanciones se parecía más bien a un anhelo"<sup>23</sup>. *La Opinión* sostenía que, al igual que *La Prensa*, donde también se publicó la declaración gremial, tenía una concepción del periodismo cuya característica

era asumir los riesgos en función de las convicciones. De acuerdo con eso, el diario de Timerman mantuvo una posición vigilante sobre los derechos humanos que muy pronto le ocasionó una sanción del gobierno. Esto sucedió cuando publicó un artículo del sacerdote jesuita Vicente Pellegrini, cuyo contenido debió conmovir de tal modo al poder militar que secuestró la edición del diario. Al comentar la decisión del Poder Ejecutivo, la revista semanal de *La Opinión* reproducía *in extenso* los juicios críticos frente a esa medida de los tres diarios que expresaron más vigorosamente su desagrado y disconformidad: *The Buenos Aires Herald*, *La Prensa* y *La Voz del Interior*<sup>24</sup>. La ADEPA también había condenado la sanción. Con referencia al comunicado dado por dicha entidad, *La Nación* editorializó sobre el tema de manera notoriamente más suave que sus tres colegas antes mencionados<sup>25</sup>.

Al cumplirse el primer aniversario del golpe de Estado *La Nación* formuló un balance donde dosificó apoyos y objeciones. Así como no cabía poner en duda la legitimidad y justificación de la iniciativa tomada por los militares un año antes, argumentaba, tampoco correspondía minimizar las dificultades encontradas por las nuevas autoridades. La acción sobre los dos objetivos principales: la liquidación de la guerrilla y la resolución de los problemas económicos, era evaluada con cierta neutralidad, aunque con una visión más crítica sobre las *performances* en el segundo de los mencionados ámbitos. Entre las graves cuestiones pendientes relacionadas con la seguridad de la ciudadanía, señalaba la imperiosa necesidad de que el Estado se convirtiera en responsable exclusivo del control de la represión. En lo económico, el sacrificio realizado por la mayoría de la población cuyos ingresos se habían reducido, según estimaba, en alrededor de un cincuenta por ciento en comparación con el valor del salario de marzo de 1976, imponía la inmediata disminución del gasto público y la modificación de las políticas que llevaban a un fortalecimiento de la especulación en desmedro de la producción. Si esto no se hacía, sentenciaba, volverían ahondados los viejos problemas sociales. La falta de claridad sobre los futuros pasos a dar por el gobierno en materia de metas políticas podía generar, argüía, un malestar en la ciudadanía solidaria con el "proceso", ya que ésta no era incondicional<sup>26</sup>. El aniversario de la instauración del régimen autoritario coincidía con la reunión de la ADEPA. Más libertad de expresión fue la demanda de dicha entidad, de la cual se hizo eco el diario, que reconocía las características del momento como una traba objetiva pero, al mismo tiempo, recordaba la conveniencia de dejar a los medios "reflejar la realidad sin otras

restricciones que las que aconsejan la prudencia o los requerimientos éticos”<sup>27</sup>. El problema de la libertad de información fue abordado desde un ángulo complementario días después en relación con la cuestión de la imagen del país en el exterior, que preocupaba a las autoridades y las llevaba a dar explicaciones de tipo conspirativo. Es cierto, decía el editorial, que había quienes hacían campaña de descrédito contra el país por la violación de los derechos humanos, pero debía tomarse en cuenta “que las noticias vinculadas con la subversión y el terrorismo carecían de esclarecimiento en los propios medios de la información nacional, con lo cual en buena medida los errores que se transmiten al exterior se originan aquí”<sup>28</sup>. Dicha reflexión se cerraba con una frase de Mariano Moreno: “La verdad y la justicia llevan en sí mismas su más incontrastable demostración”. Parece importante señalar que detrás de la prohibición establecida por el gobierno de informar libremente sobre los hechos de violencia vinculados a la guerrilla se encontraba, sin embargo, un tema mucho más trascendente que la simple intención de limitar la circulación de noticias. Durante ese año inicial del régimen militar, los secuestros, ejecuciones, saqueos de domicilios, aplicación de la *ley de la fuga*, falsos enfrentamientos con guerrilleros, se habían convertido en moneda corriente, y de esos hechos no se podía dejar a los medios realizar la más mínima crónica. La falta de libertad de prensa era, en realidad, una condición necesaria para el terrorismo de Estado.

Tal como había sucedido en tiempos mejores, algunos escritores y periodistas extranjeros dejaron su testimonio de esa época. Lo que no salía en la prensa argentina le iba a llamar la atención a V.S. Naipaul, quien en su libro *The Return of Eva Perón* narraría cómo, en marzo de 1977, las calles eran surcadas por automóviles Ford Falcon sin chapa, que llamaría *the killer Falcons*, y de cuyos crímenes, decía, el periodismo local sólo estaba autorizado a publicar los distorsionados comunicados oficiales<sup>29</sup>. Jean-Pierre Bousquet, corresponsal de *France-Press*, fue quien dejó, en su libro *Les folles de la place de mai*, el testimonio no ya del horror sino de la dignidad: “Cuando un jueves de abril de 1977 a las cinco de la tarde catorce mujeres entre los 40 y 60 años de edad, madres de desaparecidos, desafían la prohibición del derecho a reunión promulgada por la todopoderosa junta militar y manifiestan en la Plaza de Mayo su dolor y su rechazo a ser despedidas sin respuesta de tribunal en ministerio, los generales pierden su primera batalla”<sup>30</sup>. En la Argentina la noticia no fue publicada, pero recorrió el mundo. La imagen internacional seguía preocupando al gobierno. *La Nación* le aconsejaba edito-

rialmente resolver aquellos aspectos más irritantes para la opinión externa, aun cuando no dejaba de señalar la posible existencia de una campaña de los partidarios de la guerrilla en el exilio. La independencia del Poder Judicial fue abordada con cierta frecuencia como un factor necesario para el mejoramiento de la situación jurídica del país e, indirectamente, de su proyección en el exterior<sup>31</sup>. Cuando la XXXV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina hizo público un documento sobre la situación que vivía el país, el matutino apoyó las consideraciones allí expuestas contra la tortura, las detenciones prolongadas y cualquier clase de violación de los derechos humanos. Pero su reflexión se alejaba parcialmente de la palabra episcopal, por percibir en ella cierta oscuridad con respecto a dónde se encontraba el origen del problema, lo que llevaba, decía, al riesgo de confundirse y creer que todos eran culpables por igual, cuando la violencia había sido comenzada por la guerrilla<sup>32</sup>.

Política, negocios, subversión y prensa se combinaron, imprevistamente, en lo que dio en llamarse el "caso Graiver". El financista fallecido meses antes había manejado, según el gobierno, fondos provenientes de los guerrilleros. Sus empresas cayeron bajo sospecha no sólo económica, sino también ideológica. ¿Era *La Opinión* de propiedad de Graiver? Los expeditivos métodos empleados para combatir la guerrilla fueron utilizados ahora contra Timerman, cuya detención fue anunciada oficialmente una decena de días después de su "desaparición". El gobierno se defendió de acusaciones de atacar la libertad de prensa con el argumento de que no pretendía clausurar el diario, sino investigar los vínculos de la empresa editora con la subversión y con el ex ministro de Economía José B. Gelbard. El *affaire* Graiver daría, así, lugar al "caso Timerman", quien ya no volvería a dirigir el matutino por él creado, que pasó, poco después, a control del Estado. ¿La transferencia de las acciones de Papel Prensa S.A. del grupo Graiver a *La Nación*, *La Razón* y *Clarín* había sido una cuestión jurídicamente en regla? Posiblemente ante la necesidad de disipar dudas, los tres diarios emitieron una declaración para explicar que habían comprado las acciones "previa consulta y posterior conformidad de la Junta de Comandantes en Jefe"<sup>33</sup>. La trascendencia pública alcanzada por el caso Graiver terminó por imponer al gobierno la designación de un veedor en Papel Prensa S.A. a mediados de agosto de 1977, lo que abrió un interrogante sobre la eventual revisión de la operación. ¿Se tomó esa iniciativa como un medio objetivo de presión sobre los tres diarios? La respuesta afirmativa parece muy probable, ya que el régimen dictatorial no mostraba mayor preocupación por las transparencias

administrativas o el cumplimiento de la ley. ¿Condicionó esa medida la opinión de *La Nación*? Es imposible aislar dicha variable de todas las que intervenían en ese momento especialmente complejo.

Como estimaba insuficiente lo realizado en el ámbito económico, *La Nación* mantuvo sus objeciones al desempeño del ministro del ramo. Algunas declaraciones de entidades corporativas empresarias le dieron ocasión de referirse al tema. El achicamiento del Estado, promesa oficial juzgada incumplida, fue abordado con frecuencia. Cuando el ministro Martínez de Hoz resolvió restringir por 120 días la libertad de los empresarios de fijar precios para tratar así de contener la inflación, el matutino manifestó su desacuerdo con tal metodología, sólo aceptable, decía, por motivos muy coyunturales. Eran medidas, a su parecer, de "economía-ficción"; la verdadera solución pasaba por el estricto cumplimiento de los enunciados originales del programa de abril de 1976; aunque a un año de formulado la economía continuaba funcionando mal, los problemas podían resolverse aplicando aquel proyecto<sup>34</sup>. De esas dificultades económicas eran víctimas, a su juicio, los sectores de la clase media, especialmente los más modestos. Argumentaba que la población de menores recursos económicos no era tan afectada por la crisis porque tenía acceso a más ayuda y debía cumplir menos exigencias sociales. En cambio, la clase media "procuraba sostener con dignidad formas de vida que incluyen aspectos educativos y culturales sobre los cuales se asientan valores básicos de orden moral y representan, además, cuantitativamente hablando, el más vasto espectro de la población"<sup>35</sup>. Como indicio de poca inquietud por la coherencia conceptual, un mes más tarde de su reflexión sobre la "agobiada clase media", *La Nación* editorializó con airada indignación ante una declaración emanada de una reunión sindical, en la cual se insistía, afirmaba, "en una de las peores desviaciones ideológicas soportadas por el país: la existencia de una clase social netamente diferenciada, según parece, de otras clases y caracterizada por ser trabajadora (...) El concepto de clase —es ocioso reiterarlo— constituye el nervio motor de la interpretación de la Historia y de los fenómenos sociales del marxismo"<sup>36</sup>. El matutino aseveraba que el concepto de clase había sido introducido en los sectores populares argentinos por el peronismo, movimiento político que, sin embargo, continuaba el razonamiento, se presentaba como un antídoto contra el marxismo. La reflexión destacaba la "desviación peligrosísima" de quienes admitían el materialismo dialéctico al definir como "trabajadores" a una parte de la sociedad e identificaban a éstos con

quienes se nucleaban en las entidades gremiales. Con independencia de los motivos ideológicos que pudieron haber provocado sus disquisiciones sobre el tema de las clases sociales, el comentario apuntaba, en especial, a alertar a las autoridades sobre la necesidad de mayor control sobre el movimiento sindical.

Siempre reiterando sus puntos de vista acerca de los problemas económicos, *La Nación* se hizo eco, a lo largo de 1977, de las críticas a la política oficial formuladas por las entidades corporativas empresarias. Menos gastos estatales, limitar las cargas tributarias, evitar los impuestos de emergencia, suprimir aquellos que gravaban las exportaciones agrarias fueron temas una y otra vez evocados. El diario objetó, asimismo, el endeudamiento externo, facilitado, decía, por la confianza lograda en el exterior por el ministro de Economía; esta vía de obtener fondos debía, a su juicio, ser sólo un recurso excepcional para cubrir la brecha causada por la destrucción del ahorro nacional producida en los años recientes<sup>37</sup>. Una correcta política económica, ajustada realmente al proyecto original enunciado por Martínez de Hoz, permitiría, según esta perspectiva, lograr en un plazo no muy lejano una reactivación fundada sobre bases genuinas y, a partir de allí, cabría esperar una recuperación de los salarios reales, considerados bajos.

En el plano político el diario mantenía una posición expectante frente a la administración militar, y a mediados de 1977 manifestaba ciertas dudas sobre la claridad de sus metas. El malestar, en buena medida, surgía de ciertas referencias a un proyecto político que los militares no terminaban de precisar en sus alcances y modalidad. La promesa de una democratización, si bien colocada en un horizonte indefinido, hacía que la relación del matutino con quienes gobernaban fuese distinta a la mantenida una década antes con Onganía. El presidente Videla y sus ministros gozaban en ese sentido de una credibilidad democrática que en los editoriales no se ponía en duda en lo sustancial. Al mismo tiempo, en el difuso debate que se realizaba en los círculos de poder acerca de eventuales modificaciones del régimen democrático, el diario buscaba explícitamente terciar a favor de quienes defendían el mantenimiento de las instituciones sin introducir ningún tipo de innovaciones. Si se luchaba contra la guerrilla de inspiración totalitaria, aseveraba textualmente, no era sólo para defender banderas pertenecientes al campo económico y, por lo tanto, a lo material, sino para preservar la tradición de libertades que estaban inscriptas en la Constitución Nacional, y al desestimar ideas que le resultaban inadmisibles sostenía: "La democracia no puede nunca ser autoritaria como

sostienen exégetas del pensamiento moderno”<sup>38</sup>. Desde la óptica mencionada, el comentario editorial recibió con satisfacción un discurso del almirante Massera donde sostenía que el objetivo del “proceso” era restaurar la democracia para todos los sectores sin discriminaciones. Massera había colocado, según *La Nación*, el pensamiento de las fuerzas armadas por encima de las corrientes totalitarias. A estas últimas las ubicaba tanto en el extremo izquierdo como en el derecho. La alocución del marino le pareció propia de “un estilo republicano”, título del editorial que la comentaba. En dicho texto se afirmaba que ninguna fuerza política pedía comicios inmediatos y todas entendían la emergencia en que se hallaba el país, pero “si bien las circunstancias impedirán seguramente por largo tiempo aquí el asentamiento de una democracia como forma de gobierno, nada debe obstaculizar para que rijan convenientemente en todo el territorio nacional los hábitos republicanos”<sup>39</sup>. Por tales hábitos entendía la austeridad de las autoridades, el respeto por las ideas, la vida y la propiedad de los ciudadanos. En el futuro, concluía, debía lograrse el retorno pleno a las regulaciones democráticas del sistema político.

El secuestro del embajador en Venezuela, Héctor Hidalgo Solá, producido en la Argentina, llevó al diario a una reflexión que articulaba la cuestión de la democracia con el uso abusivo del aparato represivo estatal. Recordaba que Hidalgo Solá era un “hombre representativo” de la Unión Cívica Radical y que, primero en Caracas y luego en el país, había declarado públicamente la necesidad de un retorno relativamente próximo al pleno funcionamiento del sistema democrático, y establecía nexos entre esa toma de posición política y su desaparición. Con términos claros para la época decía: “La coincidencia entre esas declaraciones conflictivas y la desaparición del embajador contribuirá —dado que el monopolio del uso de la fuerza debiera pertenecer a las autoridades— a empeorar la imagen en el exterior de la Argentina (...) Por todo ello urge un rápido hallazgo de los autores de la tropelia”<sup>40</sup>.

Las relaciones del diario con el gobierno no estuvieron exentas de tensiones durante la segunda mitad de 1977. Dos hechos ocurridos en octubre de ese año mostraron que los años de plomo también pesaban sobre *La Nación*. El primero de ellos surgió a raíz de la publicación de un cable de una agencia norteamericana con la versión de Moscú sobre una acción de la Armada Argentina de intercepción de pesqueros soviéticos en aguas jurisdiccionales, información que difería del relato oficial. Un comunicado de la Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la

Nación expresó el desagrado producido en el seno de la junta militar por la noticia difundida por *La Nación*, y con estilo castrense decía que la objetividad informativa “no debiera dar lugar a que un diario argentino pueda comportarse como un mero y pasivo espectador en cuestiones que afectan los intereses de la República”<sup>41</sup>. El matutino respondió que el gobierno podía no estar de acuerdo con la noticia en cuestión, pero se trataba del ejercicio de la libertad de prensa que sostenía pública y reiteradamente respetar. La referencia, en clave de filípica, sobre lo que podía hacer un diario argentino no fue evitada; afirmaba el mismo comentario de carácter editorial: “En sus 107 años de vida *La Nación* —diario fundado por un argentino y propiedad de argentinos— no ha hecho otra cosa que ocuparse cotidianamente de la defensa de los derechos e intereses nacionales”<sup>42</sup>. A renglón seguido, explicaba que, además de la versión extranjera, había publicado un editorial titulado “La hipocresía soviética”, de rechazo a la actitud de la URSS; las noticias no tenían por qué coincidir, decía, con su propio punto de vista. Años más tarde, el director del diario reflexionaba sobre lo sucedido con términos elocuentes: “Sólo una suspicacia endémica puede haber llevado a las autoridades del momento a manifestar su desagrado por algo inexistente y creado por su propia distracción, al no leer textos que, al parecer, juzgaba importantes para la defensa de los intereses nacionales”<sup>43</sup>.

Todavía no se debía haber disipado el malestar motivado por la noticia de los pesqueros soviéticos, cuando un editorial del matutino volvió a suscitar la disconformidad de la junta militar. El Ministerio de Planeamiento había dado a luz el documento de trabajo denominado Proyecto Nacional, que fue aprobado por la junta y así se convirtió en la primera explicitación teórica de las metas políticas del “proceso”, aun cuando se aclaraba en el mismo su carácter provisorio y en elaboración. De Aristóteles a Huntington, era fácil reconocer en dicho texto las lecturas apresuradas de quienes se proponían dotar de fundamento doctrinario a una Nueva República. No faltaban en el documento las referencias al liberalismo político considerado superado, ni los anuncios de inspiración corporativista; explícitamente se colocaba contra las ideas económicas liberales y destacaba el rol necesario del Estado para orientar la producción; construía en visión prospectiva la agenda mundial hasta el año 2000 y situaba los desafíos para el país. Por mucho menos que este “documento de trabajo”, Onganía y aus adláteres habían sido tachados de totalitarios y sometidos a la crítica burlona desde la misma columna editorial. Consciente, sin duda, de la sensibilidad de los lectores

instalados en la cumbre del poder, el matutino objetó con términos extremadamente cuidadosos el texto en cuestión, pero por la naturaleza misma de dicho *corpus* no le debió resultar posible evitar la ironía: "Ahora se sabe que el Gobierno —o si se prefiere la Junta Militar, por ser una cuestión de su competencia— no ha estado en uno de sus días más felices al convertir 'en general' en documento de Estado a un trabajo en el cual campean muchos conceptos rutinarios y otros expuestos confusamente, sin contar con los que son políticamente riesgosos y, por añadidura, no pocos de ellos audaces"<sup>44</sup>. Al repasar luego el esfuerzo "prospectológico" hecho por la junta y con referencia a una de las más curiosas menciones del documento, *La Nación* preguntaba cómo habrían hecho para incluir en un texto de raíz oficial la predicción de que en China se acrecentarían los problemas en el año 2000. Desestimaba totalmente la necesidad de redactar un proyecto nacional, y cerraba su reflexión con una invitación al gobierno a trabajar seriamente, en la seguridad de que luego vendrían los teóricos para registrar lo hecho y dirían: hubo un proyecto aunque nadie lo haya escrito. La respuesta del gobierno no fue pública, pero según las Actas Secretas de la reunión de la junta militar del 18 de octubre de 1977, resolvió "que el Secretario General de turno de la Junta Militar conversará con el Director del Diario y le expresará el desagrado de la Junta Militar por los términos con que se refiere a ese Órgano Supremo del Estado en el editorial de referencia. El señor ministro de Planeamiento invitará al señor Director del Diario para esclarecer el contenido del Editorial, en lo que hace al Proyecto Nacional"<sup>45</sup>. Estilo *cosa nostra*, ajeno a la transparencia de la tradición republicana, el *tête-a-tête* no debía, naturalmente, dejar traza pública significativa.

¿Sería 1977 el último año del régimen autoritario? El matutino no afirmaba tal cosa, pero en su reflexión de fin de diciembre, con una combinación equilibrada entre la referencia a las expectativas de la opinión pública, la invocación de la tradición de Mayo y de la Constitución, y la alusión al peligro terrorista derrotado, trazaba un balance que sugería no el fin de la experiencia castrense de poder, pero sí, al menos, el deseo de la sociedad de conocer cuáles serían los ritmos de los cambios que debían desembocar en un día no muy lejano en las instituciones democráticas. Sin aventurar mayor precisión en la caracterización de un imaginario sujeto del cual no se terminaba de aclarar si el diario le prestaba su voz o bien traducía su esperanza, sostenía que en vastos sectores de la población existía la impresión de que con 1977 se había terminado una etapa. Fundaba

esta idea no sólo en un anhelo captable en la sociedad, sino, además, en las múltiples declaraciones formuladas desde las altas esferas en el sentido de cuál sería la salida del "proceso". El único problema, según su opinión, era que todavía nada se había hecho en materia de anuncios efectivos. Repetía que esto no significaba la necesidad de establecer "plazos perentorios", pero sí, al menos, de marcar con más precisión el desarrollo de las etapas por transitar<sup>46</sup>. Tres meses más tarde, al cumplirse el segundo aniversario de la instauración del gobierno militar, el comentario editorial trasuntaba menos optimismo sobre la proximidad de anuncios capaces de calmar las expectativas de la ciudadanía. La marcha seguía a paso lento y si bien el mensaje dado en la oportunidad por la junta hablaba de la democratización, nada afirmaba en concreto sobre su implementación. Sólo la mención a una probable mayor participación civil en las tareas de gobierno aparecía como único y leve indicio de cambio cercano. El matutino creía que ese segundo aniversario sería la última oportunidad en que las autoridades se remitieran hasta antes del 24 de marzo de 1976 para atribuir al pasado la legitimación de su presencia en el gobierno: "En adelante, el Proceso de Reorganización también tendrá un pasado y a él deberán remitirse sus voceros como lo hará, sin duda, la opinión pública"<sup>47</sup>. Especialista en construir tradiciones legítimas, el comentario aludía al terrorismo con términos no menos sugerentes, como el viejo fenómeno de la violencia derrotada en la Argentina, manera muy poco sutil de decir que el tema de la guerrilla ya no podía justificar el presente.

Las sanciones impuestas contra algunos diarios en el primer trimestre de 1978 —*La Razón*, *La Opinión* y *Crónica*—, en ciertos casos mediante una legislación promulgada en los años 1973-75, suscitaron la moderada pero firme protesta de *La Nación*. Con particular énfasis, criticó la vigencia de las normas que impedían a los medios de prensa locales reproducir noticias referentes al país suministradas por agencias extranjeras, y pidió su pronta derogación<sup>48</sup>. El gobierno militar también castigaba a los órganos de prensa por publicar "trascendidos" estimados como portadores de confusión en la población o en las filas castrenses. Los "trascendidos", decía el matutino, eran un uso propio de una época caracterizada por la falta de información estatal; clausurar diarios a causa de ello constituía una situación, a su juicio, que podría debilitar a las autoridades, y les aconsejaba no hacerlo más<sup>49</sup>. En ese enrarecido y arbitrario clima, la libertad de opinión fue un ejercicio difícil y hasta algunas publicaciones amigas del régimen conocieron su intemperancia. Tal fue el caso de la revista *Creer*, dirigida por Bernardo Neustadt, cuyo número 34 fue pro-

hibido por difundir, rezaba la resolución oficial, rumores de contenido falaz y temerario capaces de lesionar la unidad y disciplina de las fuerzas armadas. Parece interesante señalar que ese atentado contra la libertad de prensa no desalentó la fe de Neustadt en el gobierno. En el editorial del N° 35 de *Creer* sostuvo: "Estamos convencidos que la coherencia de las fuerzas armadas nos permitirá dar con el país que queremos, y ésta es una regla del juego que llamaríamos regla de oro indestructible, esencialmente para los que manejamos opinión pública (...) Rogamos que no se confunda al aliado con el enemigo"<sup>50</sup>. Unos meses más tarde, cuando el gobierno derogó la legislación limitativa de la publicación de información proveniente del exterior, *La Nación* saludó el hecho como un avance en el terreno de la libertad de prensa y recordó que desde sus páginas había pedido en varias oportunidades esa medida.

La política de defensa de los derechos humanos y de desarrollo de democracias constitucionales en el continente llevaba al presidente Carter y a su administración a enfrentarse con los militares argentinos. La estrategia sintetizada entre otras oportunidades en el célebre discurso pronunciado por Carter en la Universidad de Notre-Dame, en mayo de 1977, donde citando a Thomas Paine sostuvo *words are action*, se convertiría a lo largo de su cuatrienio en una fuente de dificultades para los regímenes autoritarios latinoamericanos. Esas palabras, destinadas a convertirse en acción, apuntaban primordialmente a desatar tras la bandera de los derechos humanos la batalla ideológica más importante que los Estados Unidos se propusieron librar contra los países comunistas. La coherencia de la iniciativa tuvo como efecto que los blindados heraldos del Sur que habían impuesto dictaduras anticomunistas en América Latina se vieran seriamente criticados por los gobernantes del Norte. El régimen de Videla no podía ser una excepción. Fue en ese contexto, cuando se discutía en Washington con qué intensidad aplicar sanciones contra países que violaban los derechos humanos como en el caso de la Argentina, que trascendió la versión del alejamiento del secretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, Terence Todman, identificado como partidario de una línea más blanda y comprensiva con las dictaduras de la región. La sustitución de dicho alto funcionario parecía mostrar, decía *La Nación*, el avance de la orientación más opuesta a la convivencia con los autoritarismos. Resumía lo que a su juicio habían sido las virtudes de quien dejaba el importante cargo en la Casa Blanca en la afirmación de que Todman había "demostrado una aptitud manifiesta para percibir la complejidad de los problemas de nues-

tra región, una sensibilidad elocuente para comprender la psicología de los gobernantes y una actitud respetuosa frente a quienes han luchado con denuedo a fin de enfrentar situaciones políticas complicadas por la acción subversiva y terrorista<sup>51</sup>.

Concluía la reflexión que no sólo cabía deplorar el alejamiento de Todman sino, además, el fortalecimiento de una línea en la política exterior norteamericana cuyas características no eran la prudencia y la ponderación de juicio. Si leyó ese editorial, quizás Todman pensó, con la letra de una ópera rock que por entonces se difundía en el mundo anglosajón, *Don't cry for me Argentina*; pero sin duda no imaginó que podía anunciar, como el personaje inspirador de dicha ópera, "un día volveré y seré millones", aunque en su caso, de diplomáticos reclamos de deuda externa. Por el momento, y tal como lo presentía el matutino, con su renuncia se agravaron los problemas para la junta. En ocasión de hacerse pública la decisión del gobierno norteamericano de trabar un crédito del Eximbank a una empresa que quería invertir en la Argentina, el comentario editorial se reveló preocupado por esa decisión, pero al mismo tiempo buscó apaciguar la inquietud de los militares, a quienes explicaba que "los funcionarios y asesores (norteamericanos) eran más permeables a los datos fragmentarios e inmediatos que a las manifestaciones profundas de la realidad"<sup>52</sup>. En el primer orden de fenómenos se hallaban las denuncias de violación de los derechos humanos. En el segundo, su incomprensión, decía textualmente, de las medidas rigurosas a las cuales hubo que acudir en la Argentina para evitar que la subversión llegara a concretar un nuevo Vietnam. Aconsejaba a los gobernantes castrenses ser pacientes y no exasperarse ante los "errores e incomprensión" de un país tradicionalmente amigo, que en un tiempo, decía, atravesaría la etapa Carter.

En el curso de la segunda mitad de 1978, el diario mantuvo editorialmente su posición ambivalente con respecto al gobierno militar. Desde el Estado, ya modificado el esquema de poder y designado Videla presidente de la República, por un periodo limitado y sin ejercicio simultáneo de la comandancia del Ejército, se dieron algunas señales de voluntad institucionalizadora, bien recibidas por *La Nación*. En la medida que la violencia paraestatal había disminuido, los editoriales hicieron menos mención a ese tipo de hechos represivos. La idea de una violencia cuya autoría no correspondía únicamente a la guerrilla fue evocada, con propósitos indudablemente aleccionadores, cuando se cumplió el primer aniversario de los secuestros del embajador Héctor Hidalgo Solá y del periodista Rodolfo Fernández Pondal<sup>53</sup>. De un signo igualmente equívoco, y con la sospecha de que no era obra de la

subversión de izquierda, fue el asesinato, en agosto de 1978, del abogado y periodista Horacio Agulla, director de la revista *Confirmando*. Sobre ese hecho, el matutino expresó una severa condena y pidió al gobierno celeridad para esclarecerlo y castigar a los culpables<sup>54</sup>.

El desplazamiento hacia posiciones relativamente más críticas, no sólo del diario fundado por Mitre sino también de otros órganos de prensa, era seguido con atención desde el gobierno. Al menos, así lo sugiere un informe sobre la situación nacional preparado para la junta militar en noviembre de 1978, cuyo autor, se ha afirmado, fue Ricardo Yofre, quien en la época se desempeñaba como funcionario y asesor del gobierno militar. En el apartado correspondiente al tema medios de comunicación el informe afirmaba que a partir de la publicación, en junio de 1978, de una solicitada en el diario *La Prensa*, donde se transcribía una lista de 2.500 desaparecidos, se podía percibir que los medios comenzaban a abandonar en forma progresiva y paulatina la autocensura existente desde el 24 de marzo de 1976. El mencionado informe señalaba también el cambio de actitud de *La Nación*, diario al que caracterizaba de "moderado y conservador", y mencionaba ataques editoriales al presidente Videla y la publicación de informaciones contrarias al equipo económico<sup>55</sup>. Es de señalar que el matutino *La Prensa* publicó en esa época numerosas solicitadas de organizaciones de defensa de los derechos humanos, en tanto *La Nación* lo hizo sólo excepcionalmente. Sus páginas informativas reflejaron el reclamo y accionar de dichas entidades de un modo muy limitado. Ese silencio quedaría recordado en una poesía titulada "¿Quién llora en Plaza de Mayo?", donde el diario era interpelado por las Madres de desaparecidos con una pregunta por demás elocuente: "¿Por qué *La Nación* no habla casi nunca de mi duelo?"<sup>56</sup>. Sobre la libertad de opinión, el general Videla expresó libremente la suya el 26 de septiembre de 1978: "Es menester que quien informa goce de entera libertad (...) Lo esencial es formar opinión con valor y para decir todo lo que haya que decir, sin callar nada y sin faltar a la verdad. Pero a veces es indispensable callar y mantener un prudente silencio, cuando está en juego el bienestar común"<sup>57</sup>. Probablemente, de la autocensura no se podía haber encontrado una definición mejor.

Cuando fue inaugurada la planta de Papel Prensa S.A., el editorial de *La Nación* se centró en la significación económica de la sustitución de importaciones que ahorraría divisas al país y le permitiría ser menos dependiente del mercado mundial. Recordaba, además, los manejos de los gobiernos dictatoriales que

habían intentado coartar la libertad de expresión racionando cuotas de importación de papel. Señalaba, en fin, la satisfacción expresada por la Asociación de Empresas Periodísticas Argentinas, deseosa de que el país lograra el autoabastecimiento de papel<sup>58</sup>. No se había aún atenuado el eco de la memorable inauguración, cuando ya Papel Prensa S.A. se vio obligada a comenzar a publicar largas solicitadas explicando las ventajas que la Argentina encontraría con la fabricación nacional de papel, luego, claro está, de un periodo convenientemente largo de protección arancelaria, indispensable para asegurar el desarrollo de la nueva y frágil industria. Las razones técnicas se combinaban con argumentos ideológicos de resonancia paradójica para quienes recordaran las objeciones tantas veces formuladas por *La Nación* a propósito de las industrias "artificiales" creadas al amparo de la protección estatal. Para refutar a sus críticos, en una solicitada de diciembre de 1978 Papel Prensa S.A. decía que nadie tenía derecho a afirmar, salvo si quería hablar con meros *slogans*, que poner un gravamen proteccionista a la importación de papel era un "impuesto a la cultura"<sup>59</sup>. Con argumento del mismo tenor, una decena de días más tarde el tema era abordado por el matutino en la columna editorial. Beligerante, salía al cruce de quienes en defensa de intereses menores querían trabar una empresa cuya acción beneficiaría al país en su conjunto. Ni el Leopoldo Lugones industrialista de los años 20 hubiera construido mejor una frase para refutar los argumentos de quienes aducían que el papel nacional sería caro: "Como no todos los valores pueden ser medidos en términos de precios habrá, pues, que considerar cuánto supone fabricar papel en la Argentina de hoy, con la perspectiva de una independencia que pasa por el hecho industrial, pero lo trasciende en su significado"<sup>60</sup>. A *La Nación* no le agradaba la fijación de un impuesto a la importación de papel, y decía textualmente que no lo había querido ayer y tampoco lo celebraba hoy. Pero, *dura lex, sed lex*, el gravamen era una regulación establecida antes de la compra de la empresa por los tres diarios. Con un toque aristocrático, el comentario demostraba desdén por el argumento de los adversarios: en una cuestión tan vital para el país las objeciones no podían reducirse, afirmaba, a las dimensiones de una factura. Desde aquellas primeras impugnaciones, los diarios argentinos ya no se reconciliarían en torno al significado político, económico e ideológico de Papel Prensa S.A. El diferendo llegaría, incluso, a los foros internacionales.

¿La subversión derrotada no trataría de volver por la vía de la matemática moderna? Como para demostrar que su sutil inteligencia no se anquilosaba después de la batalla, algunos de

los *think tanks* más oscurantistas del régimen autoritario, se plantearon la pregunta y la respondieron afirmativamente. El paso a lo atroz se había dado hacia tiempo; ahora, parecía culminarse la larga marcha a lo ridículo. *La Nación* lanzó un llamado a la cordura con argumentos que correspondían más al dominio de lo estético que de lo científico. Luego de reseñar el asombro con que la opinión pública había recibido la discusión desarrollada en ámbitos oficiales acerca de la peligrosidad de la matemática moderna, afirmaba: "Cuesta imaginar cómo los intentos por obtener que los niños de escuela primaria superen un aprendizaje basado sólo en mecanismos o adiestramientos y lo reemplacen por la comprensión integral de la operatoria, por ejemplo, haya de resultar en una infiltración de doctrinas marxistas (...) Una discusión de este tipo difundida en el exterior (...) nos pintaría como un país que en una caza de brujas insensata no teme ponerse aun al borde del ridículo"<sup>61</sup>. Así, el diario que, como se recordará, dos años antes desde esa misma columna editorial había invitado a las autoridades educativas a preguntarse por los efectos ideológicos subversivos que podían esconderse detrás de prácticas aparentemente inocuas como los teatros de títeres o los cursos de educación sexual, se mostró ahora sorprendido con las disparatadas lucubraciones de los funcionarios oficiales. Algún memorioso e imparcial observador debió meditar sobre el peligro de sembrar vientos en las abonadas mentalidades autoritarias. Días después, el diario volvía a comentar la extravagante "teoría" y luego de burlarse de ella decía: "El disparate nos retrotrae a los tiempos de Galileo", y más adelante ironizaba: "No alimentemos fueguitos inquisitoriales"<sup>62</sup>. Probablemente para tratar de diferenciar a los extremistas antimatemáticos con respecto al resto del gobierno, el editorial en cuestión comenzaba con la referencia a una frase de Videla en la cual éste explicaba su intención de construir un país moderno, y el comentario del matutino terminaba diciendo que esa meta sólo podía lograrse con libertad de pensamiento para los filósofos, los científicos y los artistas.

En el primer trimestre de 1979 el régimen autoritario se acercaba al cumplimiento de su tercer aniversario. Ya estaban, entonces, considerablemente agotadas las expectativas de quienes lo habían acogido con esperanzas y simpatías. *La Nación* mantenía su desconfianza ante la falta de un proyecto político claramente enunciado. Los exabruptos de algunos altos funcionarios provocaban su episódica indignación, y las orientaciones económicas despertaban alternativamente su crítica o rechazo, pero ninguna de ambas posiciones era sostenida con excesivo empecinamiento. Para el diario, la experiencia autori-

taria de poder había perdido su credibilidad liminar pero no se estaba frente a una situación irrecuperable. Cuando sobrevenia un acontecimiento que desbordaba los límites juzgados aceptables, su reflexión combinaba siempre la condena con el consejo. El asesinato de Elena Holmberg, secretaria de embajada del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, fue uno de los casos reveladores del extremo al cual podía llegar el uso de la violencia en tanto recurso para dirimir conflictos entre facciones rivales del gobierno. El diario fue directo en su análisis del crimen. Consideró que no podía ser obra de la subversión ya derrotada, cuya capacidad operacional era, en su opinión, mínima. Sin enunciarlo explícitamente, por descarte, dejaba entrever que los responsables del hecho debían hallarse en las esferas militares<sup>63</sup>. Días más tarde, el tema de la "seguridad individual" de los ciudadanos era nuevamente abordado a propósito de una presentación hecha por la Corte Suprema de Justicia al Poder Ejecutivo donde reclamaba por la anómala situación creada con los *habeas corpus* por personas desaparecidas que obtenían como respuesta que los individuos a favor de quienes se interponía el recurso no se encontraban detenidos. Para el matutino, el reclamo de la Corte debía ser atendido por las autoridades, actitud que mostraría la voluntad de afianzar la paz conquistada en la etapa de la lucha contra la guerrilla. La reflexión editorial estimulaba a los jueces a adoptar una posición firme y, recordando la biografía de Antonio Bermejo escrita por Octavio Amadeo, decía que lo esencial de la función de la Corte debía consistir en la actitud del centinela de la ley, cuya razón de ser se encontraba en la consigna "De aquí no se pasa"<sup>64</sup>. Sin duda, la imagen, de bélica y republicana reminiscencia, se adecuaba más a la Corte de la época de Bermejo que a la de fines de los años 70.

El 24 de marzo de 1979 el "proceso" cumplió el tercer aniversario de su instalación; *La Nación* no dedicó un editorial a recordar el suceso. La columna se ocupó días más tarde, al comentar el mensaje presidencial de balance de lo realizado en los tres años de dictadura, de esbozar algunas reflexiones sobre lo actuado cuyo tono distaba mucho del optimismo de la primera hora. Colocaba en el haber del gobierno lo logrado en la lucha contra la subversión y en el debe señalaba lo faltante en materia económica, en especial, la ausencia de logros en cuanto a detener la inflación. El presidente también había reconocido que en lo económico aún no se habían alcanzado las metas deseadas y había fijado como objetivo primordial de esa segunda etapa superar el fenómeno inflacionario. Para el diario no cabía, sin embargo, hacer tampoco de lo económico algo tan absorbente en

la preocupación de las autoridades como para olvidar la necesidad de enunciar con precisión cuáles serían los próximos pasos políticos a dar. Esa ausencia de referencias creaba "una sensación de reiteración ante el conjunto del mensaje presidencial"<sup>65</sup>. Las repeticiones podían justificarse, decía, en el deseo de refrescar la memoria, pero, de todos modos, eran temas conocidos desde los documentos básicos de marzo de 1976. En síntesis, recordaba a las autoridades el deseo de la ciudadanía de saber más acerca de la dirección política a seguir. Al día siguiente, como para cerrar el ciclo del ya devaluado festejo, el matutino dedicaba su editorial al análisis de la noción de pluralismo, y recordaba que más allá de todo juego retórico, el sentido de la misma se encontraba perfectamente definido por quienes habían fundado nuestra tradición republicana. Para ridiculizar las ideas totalitarias, el texto aludía al califa Omar, quien al incendiar la biblioteca de Alejandría sostuvo que si los libros incendiados coincidían con el Corán estaban de más y si lo contradecían la pirosis era su destino justo e inevitable. Esa mentalidad, argüía, aún persistía y había quienes querían imponer una visión unidireccional e incuestionable de la sociedad y de la política. Contra dicha manera de pensar, argumentaba que "sólo los Estados capaces de entender los significados profundos del pluralismo podrán desarrollar una cultura distintiva y propia"<sup>66</sup>.

En el mismo mes en que se cumplía el aniversario del "proceso" volvía a la palestra el tema de Papel Prensa S. A. Las críticas contra la empresa y los altos aranceles aduaneros implantados para proteger su producción llevaron a *La Nación* a explicar nuevamente que su participación en el cuestionado emprendimiento se debía a su interés en asegurar la provisión nacional del estratégico insumo. Sostenía, por otra parte, que la producción de Papel Prensa S.A. era adquirida en un 70% por los tres diarios integrantes de la sociedad anónima junto con el Estado y, en consecuencia, ellos también hubieran preferido un precio más bajo. Pero, se lamentaba, allí estaba el "costo argentino" incidiendo en los precios locales; ejemplificaba con el caso de la electricidad: el gasto en energía suponía un desembolso por tonelada de papel tres veces superior al de otros países. En fin, el matutino defendía el mantenimiento de los aranceles con igual empeño: había empresas y ramas de actividad protegidas desde su creación mediante impuestos elevados y otras cuyos mercados estaban cerrados totalmente a la competencia de importaciones<sup>67</sup>. Los argumentos del diario fueron, tres semanas más tarde, puestos en duda por Juan Alemann, secretario de Hacienda del gobierno militar. Este alto funcionario sostuvo que

los requerimientos de protección de Papel Prensa S.A. eran inaceptables; se trataba, juzgó, de un caso de ineficiencia empresarial combinado con deseos de obtener beneficios a costa de toda la comunidad. Con espíritu polémico, Alemann afirmó: "No es posible que hagan la cuenta del Gran Capitán y digan 'Bueno, a este costo' (...) Con ese estilo, yo también hago buenos negocios, todos haríamos buenos negocios"<sup>68</sup>. La coherencia liberal del secretario de Hacienda pareció sacar de sus casillas a los responsables de Papel Prensa S.A., quienes en una solicitada le negaron el derecho de opinar en temas ajenos a su competencia, lo acusaron de subjetividad y se preguntaban si había opinado "como simple ciudadano o como propietario de un diario"<sup>69</sup>. Por lo menos un aspecto resulta interesante destacar de esa réplica: Papel Prensa S.A., empresa con participación del Estado, contestaba públicamente al secretario de Hacienda del mismo Estado y ponía en duda en representación de qué intereses había opinado. A tal punto llegaba la confusión de roles en la época, que poco después Alemann reiteró sus objeciones sobre las generosas desgravaciones impositivas en beneficio de Papel Prensa S. A., y aclaró, además, que su condición no era de propietario de un diario, sino, simplemente, de socio de una firma dedicada, entre otras actividades, a editarlo. La división creada en el campo de la prensa por los conflictos producidos en torno al funcionamiento de la controvertida empresa papelera seguiría profundizándose.

Como lo había hecho el año anterior, en 1979 el matutino mantuvo su demanda de mayor precisión en los proyectos del gobierno. En ese sentido comentó con satisfacción la iniciativa anunciada por las autoridades de incorporar más civiles en puestos de altas responsabilidades. Ésa podía ser una vía, en su opinión, para contribuir a una futura consolidación de la democracia<sup>70</sup>. Pero la democracia necesitaba, a su juicio, de la existencia de partidos políticos. A la defensa de sus dirigentes el diario dedicó algunas reflexiones editoriales. Éstas fueron motivadas por las críticas que hacían voceros del gobierno autoritario por la falta de renovación del personal de dirección de los partidos. *La Nación* instó a los militares a no confundirse y entender que los mecanismos de renovación de los cargos de conducción de las fuerzas armadas eran distintos de los de las organizaciones partidarias, en razón de la disímil naturaleza y finalidad de ambos tipos de instituciones. Con realismo y trasluciendo la intención de justificar los prolongados lapsos durante los cuales los dirigentes políticos ejercían sus cargos y preservaban sus liderazgos, recordaba que lo mismo sucedía en entidades empresarias, sindicatos, colegios profesionales y clubes o entidades culturales. La

reflexión aceptaba que podía haber entre los dirigentes de los partidos "hombres sin futuro, pero sería tal vez caprichoso y mal-sano desconocerles la oportunidad de un presente con el que podrían cerrar ciclos de los cuales la Historia hará un balance sin duda más ecuánime que el de los contemporáneos"<sup>71</sup>. Desde esa perspectiva favorable a una normalización cívica cercana criticó, días más tarde, la actitud de un grupo de personas que con vestimenta policial y armas largas habían retirado de una empresa de capital alemán un busto de Perón y otro de Eva Perón, sin mediar una demanda en tal sentido de los propietarios del establecimiento. El carácter no oficial de la intervención policial llevaba al editorialista a plantear la imperiosa necesidad de poner fin a procedimientos ilegales, carentes de justificación y reflejo de que todavía no se había controlado la violencia ilegítima<sup>72</sup>. Días después, ante las vacilaciones reveladas por los equipos gubernamentales para dar forma a un plan político coherente, con claridad sobre las etapas a seguir en la progresiva apertura del sistema de participación de la ciudadanía, desde la columna editorial se ironizaba acerca de algunas declaraciones emanadas de esferas oficiales sobre el carácter "potencialmente reversible" de los pasos a dar en el camino a la democratización. Esa manera de encarar la cuestión, aseveraba, sería un tremendo error: "Quizá sea (la reversibilidad) una fórmula destinada a satisfacer algún requerimiento militar pero no se compadece con lo que enseña la experiencia, los procesos políticos puestos en marcha difícilmente retroceden"<sup>73</sup>. Y como si la prevención castrense no debiera ser tomada muy en serio, la reflexión finalizaba con la sugerencia, a los encargados de pensar el nuevo plan político, de consultar a quienes habían emprendido similar tarea a principios de la década del 70, para recoger algunos testimonios prácticos en materia de reversibilidades de calendarios políticos.

La posición del diario acerca de la necesidad de quitar influencia a los sindicatos volvió a ser reiterada cuando el gobierno comenzó a estudiar la creación de una nueva legislación en esa esfera. Consciente, probablemente, de las posibles coincidencias entre dirigentes sindicales y militares en torno al antimarxismo, los argumentos propuestos enfocaron directamente el tema. Muchas veces se había sostenido que el debilitamiento de las grandes organizaciones gremiales podía favorecer el avance de la izquierda radicalizada, pero ésa era, a su juicio, la visión equívoca e interesada propalada por los propios dirigentes sindicales. Por el contrario, argüía el matutino, la experiencia mostraba cómo el marxismo había avanzado hasta marzo de 1976 y cabía preguntarse cuánto lo había hecho dentro de esas grandes orga-

nizaciones sindicales. No negaba la importancia de los sindicatos para representar a los trabajadores de cada actividad, pero se oponía a la continuidad de una legislación que los había convertido en actores con un poder decisivo en la vida política y social<sup>74</sup>. Cuando a fines de abril de 1979 uno de los sectores en que se hallaba dividido el movimiento obrero decidió realizar un paro de actividades para protestar por la política salarial, el matutino instó a las autoridades a no ceder ante las presiones. En realidad, afirmaba, esa lucha gremial tenía como principal objetivo bloquear la reforma de las leyes sindicales. Increpaba, además, a los dirigentes de la Unión Cívica Radical por haber justificado el paro con una declaración condenatoria de la política económica. Le resultaba incomprensible ver a un partido de prolongada tradición democrática, y en su momento víctima de la acción política de los gremialistas, dar dicho tipo de opiniones; no era ésa, afirmaba, "la ubicación que debía corresponderles (a los radicales) en el escenario político"<sup>75</sup>. Invitaba a la UCR, definida como fuerza política moderada, a comprender que el cambio de la legislación sindical sería beneficioso para la democracia. Meses más tarde se constituía la Conducción Única de Trabajadores Argentinos (CUTA) que, más allá de los impedimentos legales, trataría de organizar al conjunto de los sindicatos. El diario recordó algunos de los aspectos que juzgaba más negativos de la historia sindical de los lustros recientes y llamó a evitar repeticiones históricas. Naturalmente, el mensaje tenía por principal destinatario a las autoridades nacionales<sup>76</sup>. La sanción de las nuevas leyes sindicales, que limitaban el alcance de las organizaciones gremiales, sus derechos a crear entidades confederales y a participar en la vida política, fue considerada por el diario como "uno de los actos de más resonancia, de más auténtica necesidad de cuantos ocurrieron en 1979"<sup>77</sup>. Convencido, posiblemente, de enunciar un réquiem, caracterizaba textualmente a los sindicatos como la asociación política de los grandes caciques de un gremialismo desdeñoso de la democracia interna —y poco entusiasta de la democracia en general— erigido en bastión inexpugnable de la prepotencia. Difícilmente la satisfacción del matutino se hubiese podido expresar con términos más contundentes.

Como para revelar la complejidad de la escena política nacional e internacional de los momentos en que se libraban conflictos en torno al futuro de los sindicatos, es interesante señalar que al producirse la detención de dirigentes gremiales acusados de haber conducido la huelga de abril, el Departamento de Estado norteamericano condenó, en una declaración oficial, la decisión del gobierno argentino por transgredir los derechos

mundialmente reconocidos de los trabajadores. Pero no todos los altos funcionarios del gobierno norteamericano compartían la política del presidente Carter hacia las dictaduras militares occidentales. Tal era el caso del general Alexander Haig, comandante supremo de las fuerzas militares de la Organización del Atlántico Norte, quien formuló una distinción entre Estados totalitarios y Estados autoritarios que le sirvió a *La Nación* como materia prima para elaborar una reflexión editorial. El general Haig probablemente conocía las ideas de Jeane J. Kirkpatrick difundidas en su artículo "Dictatorship and Double Standards", pero difícilmente hubiera imaginado que su carrera política se desgastaría tres años más tarde en su relación con el régimen autoritario argentino. Haig juzgaba las orientaciones de la administración Carter excesivamente puntillosas con respecto a las dictaduras amigas de Occidente. El diario entendía que el razonamiento del general norteamericano apuntaba a ser comprensivo con los dictadores que habían llegado al poder para salvar a los países del caos, diferenciándolos de aquellos motivados sólo por la apetencia desenfrenada de poder. Estas ideas, decía, eran doblemente importantes: primero porque podían indicar cambios en las actitudes americanas y, segundo, porque Haig se postulaba como uno de los precandidatos a la presidencia por el Partido Republicano. Cabía preguntarse, concluía el análisis, si militares como los argentinos, que habían llegado al control del Estado con la voluntad de restablecer la democracia, podrían encontrar más comprensión del país del Norte en un futuro cercano<sup>78</sup>. La conjetura se reveló acertada cuando Ronald Reagan accedió a la presidencia de los EE.UU. en representación del Partido Republicano.

En noviembre de 1979 llegó a la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos para recoger información sobre la situación del país. En muchos aspectos, ése fue el test más importante que en ese momento podía pasar la junta militar denunciada internacionalmente por la violación de los derechos humanos. *La Nación*, en un editorial publicado el día que llegaba la Comisión, tomó a sus miembros como interlocutores. El texto se esmeraba en explicar que si dicha Comisión estaba en el país y podía desarrollar libremente sus actividades, eso mostraba la buena voluntad del gobierno, deseoso del esclarecimiento internacional de nuestra situación. Proponía un sintético relato de los acontecimientos anteriores al 24 de marzo de 1976: se había llegado a una situación extrema de disolución, en la cual el Estado había perdido totalmente el monopolio del uso de la fuerza, contexto donde hubiese sido ilusorio hablar de derechos humanos; luego, con-

tinuaba, se había entablado una lucha violenta, y al final de ella el monopolio de los medios de coerción "sólo ahora parece comenzar a ser ejercido enteramente por el Estado, es decir, después de más de tres años del pronunciamiento de marzo de 1976"<sup>79</sup>. El texto era hartamente sugerente por la forma de plantear la existencia de una especie de tiempo de nadie del cual se estaba saliendo, por cuyo motivo proponía a los miembros de la Comisión que al realizar su tarea no olvidaran las condiciones señaladas. Las ideas allí expuestas no hubiesen podido articularse con otras publicadas en la misma columna poco tiempo antes, que habían condenado las diversas expresiones del terrorismo de Estado. El editorial correspondiente al final de la visita de la Comisión, trece días más tarde, era aún más solidario con las autoridades nacionales y comprensivo con los métodos empleados para asegurar el orden social y político. Este segundo texto debió resultarle tan correcto y justo al general Ramón Genaro Díaz Bessone que decidió reproducirlo íntegramente en su libro *Guerra revolucionaria en la Argentina (1975-1978)*, dedicado a justificar la represión realizada por el "proceso"<sup>80</sup>. *Noblesse oblige*, el general Díaz Bessone, tan criticado desde esa página editorial cuando le tocó ejercer el Ministerio de Planeamiento, encontraba ahora en ella lo que definió en el prólogo de su libro como "el testimonio objetivo de la prensa independiente". Pero no todos los testimonios recogidos por la Comisión de la OEA coincidirían con el matutino. Por el justicialismo emitieron una declaración pública los dirigentes Deolindo Bittel y Herminio Iglesias, donde entre otras consideraciones denunciaban el encarcelamiento, vejación, confiscación, muerte y/o desaparición de miles de ciudadanos. A esa declaración se refirió el matutino en el mencionado editorial publicado al culminar la estada de la Comisión; allí desautorizó a sus firmantes por provenir "de una fuerza política responsable como la que más del origen de la violencia en la Argentina"<sup>81</sup>. El informe elaborado por la Comisión de la OEA dedicó uno de sus capítulos a la censura y autocensura que dificultaron el funcionamiento de la prensa en los primeros años de la dictadura, y la llevaron a omitir noticias susceptibles de molestar al gobierno y "negándose con frecuencia a publicar, en inserciones pagadas, listas de personas desaparecidas, evidentemente para evitar problemas con las autoridades"<sup>82</sup>.

El problema de la libertad de prensa volvió a ocupar la atención del matutino en 1979. Ese año también se agudizaron las discusiones a propósito de la empresa Papel Prensa S.A., y *La Nación*, *La Razón* y *Clarín* fueron cuestionados por otros diarios por su participación junto con el Estado en dicho emprendimien-

to industrial. En cuanto a la acción del gobierno militar en el campo de la prensa, las intervenciones tuvieron características distintas y como tales fueron abordadas en los análisis editoriales del matutino. La decisión gubernamental de transferir al patrimonio del Estado el paquete accionario de la empresa editora de *La Opinión* motivó apenas una reflexión de tipo jurídico en la cual no se objetaba la medida y sólo se hacía referencia a la posibilidad de su eventual apelación ante la Justicia <sup>83</sup>. Así, el caso más resonante de expropiación de un diario durante el "proceso" no fue considerado un atentado a la libertad de expresión, sino un procedimiento judicial encuadrado en la legislación concerniente a los bienes de personas afectadas por las actas de la junta militar. Muy distinta fue la posición adoptada desde la columna editorial cuando fue detenido el director del diario *El Litoral*, de Santa Fe, acusado de haber publicado informaciones referentes a las organizaciones guerrilleras. Al comentar ese arresto, estimaba que el gobierno debía cesar de aplicar la legislación establecida especialmente para sancionar ese tipo de noticias, y así como había dejado de ser estricto con respecto a la actividad de los partidos, los sindicatos o las entidades empresarias, debía también ejercer mayor elasticidad de criterios con relación a la prensa. Probablemente, lo más novedoso del texto comentado fuera la manera de justificar el pedido de mejor trato para los diarios a partir de reivindicar su papel en la lucha contra el terrorismo: "El periodismo de nuestro país puede exhibir con orgullo de un combatiente triunfador las heridas, los sacrificios y las dificultades que tributó como partícipe de una lucha en la cual tempranamente vio claro lo que otros tardaron en descubrir"<sup>84</sup>. Desde esta particular toma de posición, el matutino se sentía con derecho a reivindicar la libertad de prensa luego de la derrota de los guerrilleros, a quienes en ese mismo texto definía como agentes de un imperialismo decidido a extender sus fronteras ideológicas a través de emisarios y grupos afines. No fue de la transgresión de una pluma, sino de la espada del general Luciano Benjamín Menéndez, que salió otro hecho descollante vinculado indirectamente al mundo de la prensa. La Corte Suprema de Justicia había dispuesto la libertad de Timerman, resolución aceptada por Videla y la junta militar, pero resistida por el general Menéndez, quien se sublevó durante treinta y seis horas y depuso su actitud sin mediar, como dijo el matutino, una sola baja. En el análisis del motín, el editorialista aseveraba: "Por más de una razón son comprensibles las emociones que sacudieron el espíritu militar frente al hecho que, después de todo, concluyó con la exclusión y pérdida de la ciudadanía de Timerman, ahora ciudadano israelí"<sup>85</sup>. Continuaba

la reflexión afirmando que en tanto la Corte Suprema y el Consejo de Guerra no habían hallado motivo de sanción, no había razón para oponerse a la liberación del ex director de *La Opinión*. En última instancia, concluía, lo sucedido mostraba el predominio de las orientaciones tendientes a restablecer el estado de derecho. Esa óptica relativamente optimista pareció desmentida, nuevamente en el dominio de la libertad de expresión, muy poco tiempo después, cuando el director del *Buenos Aires Herald* anunció su decisión de dejar el país luego de recibir varias amenazas de muerte. Al destacar la gravedad del hecho, *La Nación* condenaba "la subsistencia de los métodos de las organizaciones terroristas a las cuales enfáticamente el gobierno militar asegura haber eliminado luego de cuatro años de acción de guerra"<sup>86</sup>. Además, calificaba de "muy poco feliz" la invitación que había formulado el ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, a que las personas civiles objeto de amenazas se resignaran a ellas. Para el diario, el gobierno tenía la obligación de garantizar la seguridad individual de todos los habitantes y debía impedir cualquier clase de acción intimidatoria sobre la libertad de expresión.

En diciembre de 1979 la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) se ocupó de la libertad de prensa pero desde un ángulo que, por cierto, no podía ser compartido por *La Nación*. El Consejo Ejecutivo de la ADEPA sostuvo en una declaración pública: "En el mundo occidental no existe un solo ejemplo de integración económica equiparable al logrado por la empresa Papel Prensa S.A., integrada y conducida, fundamentalmente, por tres diarios metropolitanos juntamente con la participación protagónica del Estado (...) Consciente o no, este proceso de proseguir llevará fatalmente a la supresión de la libertad de prensa (...) no es difícil imaginar lo que un gobierno autoritario podría lograr actuando con los múltiples resortes del Estado, a través de esa concentración de poder"<sup>87</sup>. La entidad representativa de la prensa argentina criticaba los nuevos privilegios acordados a Papel Prensa S.A. en la renegociación del contrato con la Secretaría de Desarrollo Industrial. Especial objeción planteaba a propósito de la fijación de un gravamen del 45% a la importación de papel, para proteger la producción local. Le resultaba fácil a la mencionada asociación contrastar los argumentos liberales utilizados por el gobierno con relación a las demás actividades industriales, con los "proteccionistas" empleados para justificar las iniciativas favorables a Papel Prensa S. A. El caso trascendió las fronteras y fue planteado poco después en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa por el director del diario *La Voz del Interior*, de Córdoba, Jorge Remonda Ruibal. Privilegios

económicos oficiales y asociación con el Estado, dos prácticas condenadas por la SIP en su concepción sobre el periodismo libre, fueron los argumentos con que los delegados argentinos Máximo Gainza de *La Prensa*, Ovidio Lagos de *La Capital* de Rosario y Raúl Kraiselburd de *El Día* de La Plata, coincidieron en condenar la participación de los diarios copropietarios de la empresa papelera. En su declaración sobre la situación de la prensa en el continente, la SIP se hizo cargo de las denuncias sobre el peligro que significaba para los medios escritos de comunicación la existencia de una empresa como Papel Prensa S.A. y pidió al gobierno la eliminación de "todo gravamen sobre el papel de acuerdo con la tradición argentina". La defensa del matutino y de su participación en la controvertida actividad manufacturera fue realizada por su representante en la reunión, José Claudio Escribano. A los argumentos usualmente empleados por el diario para justificar su presencia en la empresa, Escribano agregó otro por demás elocuente: en su opinión, lo que se estaba discutiendo era, en realidad, un problema de intereses y no de principios. En esa actitud involucró a la ADEPA e invitó a la SIP a no implicarse, sin desearlo, en un conflicto ajeno a las finalidades de la institución<sup>88</sup>.

Los críticos de Papel Prensa S.A. suponían que había un interés del gobierno militar en fomentar la empresa, y creyeron ver confirmada esa conjetura cuando Juan Alemann, hasta hacía poco impugnador del proyecto, cambió de posición públicamente y le acordó un benevolente apoyo. *La Prensa* tituló un artículo sobre la mutación del parecer de Alemann: "El caso del secretario de Hacienda, que hace medio año no entendía y ahora entiende"<sup>89</sup>. Con la intención evidente de mostrar el cambio de opinión de Alemann como algo muy distinto de una mera modificación de ideas, el artículo de *La Prensa* sostenía que el ministro Martínez de Hoz había hecho entender a su secretario que no correspondía criticar a Papel Prensa S.A.; más aún: debía defenderla mediante una argumentación que el tradicional diario de los Paz se encargaba ahora de refutar con indisimulada sorna. A la demoledora crítica no escapaba, tampoco, el producto final de la empresa que era, decía textualmente *La Prensa*, cualquier cosa menos genuino papel para diarios. Juan Alemann negó en una carta enviada a Máximo Gainza, director de *La Prensa*, haber sido anteriormente tan crítico de Papel Prensa S.A.; expresó su confianza en el futuro desenvolvimiento de la firma y estimó que el papel producido era de buena calidad<sup>90</sup>. La misiva reivindicaba la coherencia de toda la acción del gobierno. Papel Prensa S.A. probablemente vio con satisfacción la defensa técnica realizada

por el secretario de Hacienda, pero para sus adversarios esa actitud debió constituir una prueba más del *connubium* entre el Estado, *La Nación*, *La Razón* y *Clarín*.

La ambigüedad que advertía *La Nación* en la política económica llevada adelante por el ministro Martínez de Hoz marcó los editoriales de todo el año 1979. Al comentar críticas de entidades corporativas, en especial del sector agrario, o bien en general la marcha de la economía, el diario mantuvo un doble modo de reflexionar sobre la situación: por una parte, apoyaba los principios en los cuales la misma se inspiraba y, por otra, criticaba las falencias percibidas en su aplicación. Como lo había hecho en épocas anteriores, cuando gobernaron funcionarios de ideología antiintervencionista que practicaban, sin embargo, políticas dirigistas, una clave propuesta por el matutino para explicar esa contradicción consistió en atribuirle a una supuesta cultura estatista, que habría penetrado a toda la sociedad, incluso a los sectores liberales: "El prolongado reinado del Estado empresario, por más que indiscutiblemente pernicioso, no pasó en vano sobre nuestra sociedad (...) Hasta quienes lo han combatido pueden carecer hoy de la energía suficiente para desmantelarlo"<sup>91</sup>. El recurso conceptual era, por cierto, necesario; desde la óptica donde se situaba el análisis resultaba incomprendible que funcionarios de reconocida prédica antiestatista no tomaran mayores y más profundas medidas para desarticular al Leviatán anteriormente tan criticado por ellos. En especial, cuando abordaba el problema inflacionario, volvía a recordar la imposibilidad de resolverlo sin adoptar la decisión de reducir el gasto público, eliminar personal innecesario y privatizar empresas estatales. Pero no sólo objetaba desde esa perspectiva la ausencia de medidas para solucionar cuestiones heredadas de gobiernos anteriores; señalaba, además, a las autoridades del área económica, que actuaban en flagrante violación de los principios liberales al haber creado un mercado financiero "en el cual uno de los contratantes carece de riesgo (...) los depositantes cuyos depósitos, más sus intereses, se encuentran garantizados por el Banco Central en caso de insolvencia de la entidad financiera depositaria"<sup>92</sup>. Tampoco escapaba a las objeciones de la columna editorial la política cambiaria implementada por el gobierno militar. El mecanismo de regulación mediante anuncio previo de la cotización de las divisas introducía un atraso de la paridad cambiaria y provocaba, a su juicio, una situación altamente perjudicial para los exportadores y, más globalmente, una amenaza de recesión para la economía en su conjunto<sup>93</sup>. En relación con ese tema, el diario solía destacar la situación difícil de los produc-

tores agropecuarios. Así, en oportunidad de comentar las quejas provenientes de los "hombres de campo" frente a la política económica, destacaba que en ese sector social habían existido grandes expectativas con respecto al "proceso", y a pesar de sus sinsabores aún eran solidarios con la dictadura militar. Con particular interés en diferenciar aspectos, según el editorial los propietarios agrarios podían estar disconformes con las medidas económicas pero daban su "apoyo al proceso político asentado sobre principios por los cuales el sector rural luchó denodadamente hasta constituirse en el baluarte de oposición a la administración anterior"<sup>94</sup>. Como solía suceder cuando reproducía opiniones referentes al agro, en el texto citado era muy tenue la línea demarcatoria entre las argumentaciones atribuidas a los propietarios de dicho sector y las asumidas como propias por el diario.

En los temas de educación, en los relacionados con los medios de comunicación manejados por el Estado y en los concernientes a la censura, *La Nación* expresó, desde un primer momento, una posición crítica que se fue acentuando con el transcurso del "proceso". Con cierta frecuencia reprochaba a las autoridades una notoria incompetencia para mejorar el funcionamiento de los distintos sistemas educacionales. En especial, el caso de las universidades fue abordado con duras críticas, y reveló decepción ante lo realizado. A las objeciones no escapó el sistema de cupos o *numerus clausus* establecido en las universidades para limitar la cantidad de ingresantes. El diario rechazaba esa forma de restringir la entrada en las casas de altos estudios por considerarla reñida con los principios esenciales de la democracia y con el sentido de futuro necesario para el país<sup>95</sup>. En el límite de la ironía se situaban las críticas a la censura en el ámbito cinematográfico. Era absurdo, consideraba, que los entes estatales se arrogaran el derecho de impedir la difusión de filmes a partir de criterios no expuestos públicamente con claridad, mezclando al parecer razones de orden ideológico con justificaciones del más diverso carácter. Pero en última instancia, señalaba en una de las reflexiones editoriales planteadas a propósito de las trabas originariamente impuestas al estreno de la película *Manhattan*, de Woody Allen, el gobierno debía comprender que la censura actuaba como un *boomerang* que despertaba mayor atracción en el público por los filmes prohibidos.

A comienzos de 1980 la política internacional le dio motivos al matutino para reflexionar sobre la particular amistad del gobierno militar con la Unión Soviética. La invasión de Afganistán por las tropas de la URSS puso al mundo en una situación de

extrema tensión. Washington invitó a sus aliados a plegarse al embargo de alimentos impuesto a los soviéticos. La Argentina se negó a sumarse a esa decisión. *La Nación* manifestó su satisfacción con esa actitud, que estimó como la más adecuada para defender los intereses del país y una demostración del creciente poder adquirido en el juego económico y político internacional. Pero a pocas semanas de apoyar la decisión del gobierno, le pareció conveniente llamar la atención sobre opiniones emitidas en medios oficiales y castrenses a propósito de la no participación en el boicot cerealero. Había altos funcionarios que parecían no comprender, decía, el carácter coyuntural de la iniciativa y la tomaban como un enfrentamiento de fondo con los Estados Unidos. Con términos no exentos de dramatismo, aseveraba que la Argentina había librado una batalla contra la subversión marxista y mal podía ignorar dónde estaban sus verdaderos enemigos. Convenía, en consecuencia, saber que tarde o temprano se debían mejorar las relaciones con los amigos tradicionales. El razonamiento se cerraba recordando que el país no participaba del bloqueo por una cuestión de intereses, y de ninguna manera esto implicaba una modificación de los principios tradicionales de su política exterior<sup>96</sup>.

Al cumplirse el cuarto año del golpe de Estado de 1976, las autoridades fueron, según *La Nación*, discretas en declaraciones y en autoelogios. Igualmente módico fue el comentario hecho por el diario sobre ese aniversario. Pero del editorial publicado con ese motivo se destacaba una idea formulada a propósito del "diálogo" al cual querían llamar los militares para comenzar a estudiar la futura normalización institucional. El texto los invitaba a no olvidar que no se trataba de hacer "un país ideal para hombres ideales, sino un país en que convivan hombres comunes que se mueven generalmente por sus afectos y sus intereses"<sup>97</sup>. Sin duda, el realismo del consejo se colocaba lejos de las marciales e indefinidas fórmulas emitidas desde lo alto del poder; tampoco tenía mucho de homenaje o festejo.

El que sería el último año de gobierno de Videla se caracterizó por la profundización de algunos de los problemas más importantes que, desde hacía tiempo, enfrentaba el régimen autoritario. En términos generales, puede afirmarse que la legitimidad del "proceso" se encontraba agotada frente a buena parte de quienes le habían brindado inicialmente su apoyo. El "diálogo político" encarado por las autoridades para dar nuevo aliento al proyecto militar cubrió parcialmente el transcurso de ese año. La sucesión del presidente Videla y la designación de Viola dieron lugar a un trámite y negociación prolongados en las esferas cas-

trenses, que mostraron las fisuras del poder y lo debilitaron aún más. En el plano internacional, la imagen del gobierno continuó deteriorándose. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos emanado de la observación *in loco* realizada meses antes se hizo público en abril de 1980. Ese primer breviarío del terrorismo de Estado condensaba en apretada síntesis las persecuciones y atropellos a la libertad realizados desde marzo de 1976. Allí se incluía, como se señaló anteriormente, un capítulo acerca de los problemas de la libertad de información y de expresión. La reacción editorial de *La Nación* frente al informe de la Comisión de la OEA fue de airado rechazo: "No hay en su informe, agresivo, desleal y carente de equidad para con la Argentina, el menor rastro de haber tenido los ojos abiertos y los oídos atentos para la verdad. Prefirieron mantenerse en la postura de los acusadores y dejaron de lado el honor de ser jueces"<sup>98</sup>. Desde esa tónica, el diario sostenía que la ciudadanía era solidaria con el gobierno, porque comprendía lo sucedido en la lucha contra la subversión. La actitud tomada ante el informe por el matutino no hubiera podido, sin duda, articularse conceptualmente sin cierta tensión con algunos de los editoriales por él publicados condenando al terrorismo de Estado, pero en la coyuntura planteada a partir del texto de la OEA prefirió cerrar filas junto a los militares. El mismo argumento de asemejar el informe más al alegato de un fiscal que a la reflexión de un juez fue parte del arsenal discursivo empleado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para tratar de invalidar las graves denuncias formuladas. Entre los principales temas incluidos en el informe se encontraba el de los desaparecidos. En la época, el gobierno intentaba minimizar la cuestión y construía fórmulas huidizas y poco convincentes. Contra esa ausencia de explicación adecuada a uno de los más graves problemas del momento, escribió con vigoroso y lacerante estilo Manfred Schönfeld desde las columnas de *La Prensa*, en artículos donde, incluso, reverenciaba a las Madres de Plaza de Mayo: "Esas mujeres que, así no sea más que por su coraje, tienen un lugar asegurado en la historia del país"<sup>99</sup>. Schönfeld, en posición exactamente opuesta a la de *La Nación* cuando sostenía que la ciudadanía comprendía lo sucedido con la represión, estimaba impropio considerar válido el *vox populi, vox Dei* y, desde la rigurosa lógica antipopulista del pensamiento de *La Prensa*, aseveraba que sólo a la Justicia le cabía juzgar y, en cuanto al pueblo, relativizaba su veredicto con el recuerdo de su apoyo a Hitler o a Perón. Parece pertinente recordar los artículos y editoriales publicados en la época y sobre esos temas por el

diario creado por los Paz, porque revelan los límites amplios por los que podía discurrir la crítica al autoritarismo cuando se formulaba desde un medio tradicional y centenario. El tema de la libertad de prensa preocupaba a la ADEPA. La entidad publicaba a fines de abril de 1980, en su informe semestral, que en el plano de la difusión de noticias e ideas se habían realizado ciertos avances y había más liberalidad, pero, en lo económico, a su juicio, se vivía una situación inaceptable por los beneficios otorgados por el Estado a la empresa Papel Prensa S. A.

A propósito del denominado "diálogo político", nombre genérico dado a una serie de reuniones mantenidas por el ministro del Interior de la dictadura con personalidades actuantes en distintos planos de la vida pública, *La Nación* formuló una larga reflexión donde sistematizó sus opiniones y temores. Combinación de sugerencias y de afirmaciones sobre la realidad y el futuro, el texto era un llamado a la democratización pero, también, a la prudencia. Con una metáfora acorde con el momento, el editorial afirmaba: "A menos que se cierren los ojos a lo que está a la vista del común de los hombres, debe admitirse que la organización democrática futura no podrá resistir a sus atacantes si no se ha pactado previamente la alzada de una fortificación en cuyas torres haya centinelas permanentes. En una época en que la perversidad ideológica se recubre con piel de cordero a fin de que la abyección criminal sea llamada 'liberación nacional', sería ingenuo suponer que el mosaico político, social y económico de la República sea capaz de afianzar la democracia con la exclusiva fuerza de las convicciones subjetivas de los ciudadanos. Durante muchos años aún, la democracia vivirá en estado de guerra con el ideologismo dictatorial y es obvio que para sobrellevarla victoriosamente, la voluntad civil habrá de estar asociada con la aptitud militar"<sup>100</sup>. De esta apreciación deducía la necesidad de acordar un pacto entre civiles y militares, sin subordinar los primeros a los segundos. La democracia, aclaraba, no debía entenderla como el reinado del número sino del derecho. La argumentación volvía sobre el tema de la lucha contra la guerrilla; reiteraba que el pueblo había acompañado a las fuerzas armadas y agregaba, para reforzar esa afirmación, que los militares no tenían un origen social privilegiado ni conformaban una casta. La etapa del enfrentamiento contra el terrorismo, aseveraba, ya había sido cerrada, y correspondía encontrar una solución para los reclamos de las familias de los "desaparecidos" y así suturar heridas. A manera de prevención, el texto advertía a los militares que la ciudadanía los había apoyado en la lucha contra la subversión, pero "no acompañará a nada ni nadie que pretenda uti-

lizar los métodos de la guerra para resolver las diferencias políticas internas. Esto exige que no haya ningún grupo armado —paramilitar o lo que fuere— en libertad de utilizar ilegítima e imprudentemente la fuerza<sup>101</sup>. Esta implícita desconfianza hacia los militares podía abrir interrogantes sobre quiénes serían los “centinelas de la fortaleza” antes evocados como necesarios vigías de la democracia, pero *La Nación* prefería evitar el tema. Hacía, por otra parte, un elogio de la necesaria función de los partidos políticos sin los cuales, indicaba, la democracia sería una caricatura. En el terreno de lo inmediato, y como condición para afianzar el camino hacia la normalización institucional, el matutino reclamaba el estricto cumplimiento del programa económico anunciado al inicio del “proceso”, y repetía los objetivos como si muy poco hubiese sido lo realizado en ese dominio. Algo similar hacía con respecto a la política educativa. En fin, sobre la política exterior recordaba que la única inscripción válida para el país era la de Occidente y carecía de justificación seguir perteneciendo al grupo de los No Alineados, el cual, decía textualmente, estaba en ese momento presidido por el déspota cubano. En cuanto al comercio exterior, se debía, en su opinión, mantener buenos nexos mercantiles con todos los países sin por ello renunciar a principios y normas políticas superiores e indeclinables, cuya permanencia debía preservarse. Tomada en su conjunto, la visión del diario sobre el “diálogo político” mantenía un equilibrio total entre el estímulo a la democratización y los temores a lo que ésta podía deparar. De allí que instara al gobierno a llevar adelante las reformas aún no realizadas, como si éstas pudieran ser un reaseguro para evitar peligros mayores en un futuro cuyas líneas directrices no se vislumbraban con claridad.

En ese contexto de definiciones sobre los rumbos de la normalización institucional, la marcha de la economía originaba periódicos reclamos de las principales entidades empresarias disconformes con aspectos de la política de Martínez de Hoz. Con motivo del anuncio de medidas económicas para encarar los problemas del área, *La Nación* reiteró, a principios de julio de 1980, sus objeciones a lo mínimo hecho en materia de reducción del gasto público y de repliegue del intervencionismo estatal. A las críticas sobre el funcionamiento de la economía, agregaba esta vez una preocupación de orden ideológico: procediendo como lo hacía, el gobierno desacreditaba las doctrinas favorables a la libertad de mercado<sup>102</sup>.

La realidad no daba, por cierto, para el optimismo económico, pero favorecía el desarrollo de una imaginación literaria apta para reflejar el estado de ánimo reinante entre quienes actuaban

en esa esfera de la práctica social. Una colaboradora asidua del suplemento literario, Silvina Bullrich, dejó un testimonio novelado de esos días, cuyo título fue *Escándalo bancario*, y un protagonista derrotado en las lides financiero-políticas, Raúl Piñero Pacheco, narró sus tribulaciones con dramatismo teatral en un libro: *La De Generación del 80*. Consciente de la insuficiencia del análisis frío, propio de la época de la producción, para abordar el afiebrado quehacer de los operadores de esa nueva Argentina, nacidos al calor de la política de Videla y Martínez de Hoz, *La Nación* inauguró un nuevo estilo de tratamiento de la economía en notas dominicales por donde desfilaría el funambulesco mundo de la *city* vernácula. Así, casi exactamente a 91 años del día en que comenzó a publicar, en folletín, *La Bolsa*, de Julián Martel, el matutino dio a luz a D. Hume, quien luego prefirió transformar su seudónimo en D. Home, en un pase de la alusión filosófica a otra más casera. A Martel le cupo escribir en el ambiente del colapso del gobierno de Juárez Celman; en su novela se mezclaron financistas, *sportmen*, falsos influyentes, *cocottes* y altos funcionarios. Ricardo Rojas caracterizó a *La Bolsa* como obra sociológica y Julio Piquet como el documento literario que reflejaba con verdad un periodo singular de la vida bonaerense<sup>103</sup>. El texto de Martel tenía una clara dimensión ética y *La Nación* lo publicaba como parte de la crítica política y moral a una práctica más que a un sector social. Los artículos de Home, en cambio, apuntaron a la lucha por la defensa del mercado. Una serie anterior escrita por el mismo autor, firmada con el nombre de Ulises Izakerri, mostraba la clave de la exterioridad de su mirada en la volanta que luego daría título al libro de recopilación de esos textos: *Impresiones de un repatriado*<sup>104</sup>. Martel, en su pesimismo, traslucía la desazón que le provocaba la inmoralidad en una crisis coyuntural de un periodo globalmente floreciente. D. Home sería un repatriado en la "patria financiera" en la cual, con el tiempo, hasta la Bolsa perdería su lugar para ser parcialmente reemplazada por el mercado abierto. Las conversaciones y meditaciones de los personajes de D. Home introducirían en el diario un mundo de deseos y de cuerpos que *aggiornaba* su universo discursivo. Sin duda, no fue por azar que el primer texto de Hume-Home, aún sin firma, tuviera por objeto el comentario, todavía sólo ligeramente irónico, de un discurso de "Joe" Martínez de Hoz en el que entre otras cosas se anunciaba la liberación de la entrada de préstamos del exterior, medida destinada a alimentar la especulación<sup>105</sup>.

"Dialéctica" fue una de las palabras que decidió al Ministerio de Cultura y Educación a disponer la no utilización en las escue-

las de una enciclopedia que incluía dicho concepto. Esa decisión motivó un editorial del diario, donde se recorría la historia de la filosofía de Platón a Croce, pasando por Aristóteles y Hegel, para tratar de explicarles a los desaprensivos funcionarios que el término no era patrimonio de los marxistas y estaba indisolublemente ligado a la tradición del pensamiento occidental. Paciente y didáctica, la reflexión parecía destinada a un género de interlocutores que irritaba con su ignorancia al editorialista: "No podemos pelearnos con palabras cargándolas con contenidos ajenos a su esencia"<sup>106</sup>. En su pertinaz deslizamiento al absurdo el autoritarismo parecía tener tan pocos límites como los que había demostrado para ejercer el terrorismo de Estado. Fue, justamente, a propósito del pedido de publicación de la lista de "desaparecidos" que convergieron en una "solicitada" importantes y reconocidas figuras de la política y la cultura. La "solicitada", publicada en *Clarín*<sup>107</sup>, incluía la firma de tres de los escritores argentinos más reconocidos y elogiados por *La Nación*: Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Ernesto Sabato. No resulta difícil imaginar que la lectura de las mencionadas firmas debió suscitar intensas cavilaciones en el Ministerio de Cultura y Educación. Algunas semanas más tarde el mencionado ministerio volvía a preocupar al matutino, esta vez con motivo de la eventual prohibición en los establecimientos bajo su jurisdicción del famoso libro de Antoine de Saint Exupéry, *El Principito*. La noticia no resultaba demasiado inverosímil, pues poco antes se había prohibido la obra de Pablo Neruda en las escuelas de la Provincia de Buenos Aires. La desmentida del ministro Juan Rafael Llerena Amadeo en cuanto a la caída de la oscurantista censura sobre *El Principito* no tranquilizó de todas maneras al editorialista, quien objetó el derecho del gobierno a crear una denominada Comisión de Asesoramiento de Textos, destinada a "sugerir" a los docentes aquellos libros que no debían emplear<sup>108</sup>.

*La Nación* aprovechó la realización del plebiscito propuesto por Augusto Pinochet en el país trasandino para rechazar editorialmente la posibilidad de un sistema democrático sin los partidos políticos como principales protagonistas. El partido como mecanismo imprescindible de la democracia no debía confundirse, en su opinión, con los excesos, falencias o vicios en que pudieran incurrir las estructuras políticas partidarias. Si cierto período de hibernación de los partidos podía ser aceptado, decía, no era imaginable en cambio renunciar definitivamente a ellos<sup>109</sup>. Desde las páginas del diario, Bonifacio del Carril tuvo oportunidad de reflexionar no ya sobre el futuro de los partidos, sino sobre las salidas de los autoritarismos militares locales. La

ocasión se la dio el quincuagésimo aniversario de la destitución de Yrigoyen. Ante la previsible finalización del "proceso", tema todavía ausente de la agenda pública del gobierno, Del Carril repasaba las condiciones de los golpes de Estado y de las frustradas institucionalizaciones posteriores, proseguidas, en plazos cada vez menores, por nuevas intervenciones militares. Si bien el autor no ofrecía una alternativa, planteaba a quienes participaran en el "diálogo político" la necesidad de meditar sobre las causas de ese recurrente ciclo<sup>110</sup>. Lo más sugerente del artículo era que centraba totalmente su problemática en cómo construir inteligentemente la situación después de los militares, dando por supuesto el agotamiento del "proceso". Otro aniversario, el vigésimo quinto del derrocamiento de Perón, permitió al matutino reflexionar sobre la naturaleza del gobierno entonces depuesto y acerca de la gestión de las fuerzas armadas que lo sucedieron. Previsible en sus referencias a la administración peronista, el diario elogiaba el desprendimiento generoso de los militares triunfantes en 1955 y evocaba, con indudable interés por el presente: "Le bastaron muy poco más de treinta meses a la Revolución Libertadora para realizar una vasta obra de restauración y reparación, que permitió colocar otra vez al país en los carriles de la legalidad (...) restituir la vigencia de la Constitución y, en una palabra, limpiar la atmósfera política y social de las contaminaciones que la habían tornado agobiante durante casi dos décadas" <sup>111</sup>. Muchos lectores debieron recordar que el "proceso" ya llevaba cuatro años y medio; en la comparación con aquella otra normalización institucional no salían aventajados, por cierto, Videla y sus equipos.

Los atentados contra la libertad de prensa, esta vez a propósito de las amenazas recibidas por la dirección del *Buenos Aires Herald*, dieron lugar al diario a reclamar el pronto y necesario esclarecimiento de ese tipo de hechos, y sugerir que si eso no ocurría cabía sospechar la existencia de vinculaciones entre los autores de las intimidaciones y el gobierno<sup>112</sup>. Días más tarde, al formular su evaluación anual, la ADEPA mencionaba actos lesivos de la libertad de expresión, y dedicaba especial atención a Papel Prensa S.A., la empresa de propiedad compartida entre *La Nación*, *Clarín*, *La Razón* y el Estado. Dicha empresa se encontraba aun más favorecida, decía la entidad, por la fijación de un nuevo arancel del 45% a la importación de papel de diario<sup>113</sup>. Ese año, la presidencia del Consejo Ejecutivo de ADEPA siguió ocupada por Carlos Ovidio Lagos, de *La Capital*, de Rosario, el diario más antiguo del país. A propósito de la declaración de la ADEPA, *La Prensa* editorializaba con el título "La libertad de prensa con-

culcada", donde criticaba extensamente la implantación del gravamen antes mencionado, calificado como contrario a los preceptos constitucionales, argumentación que respaldaba con una referencia al pensamiento de "preclaros hombres públicos", entre los cuales incluía al general Bartolomé Mitre.

*La Prensa* sostenía una posición de abierto enfrentamiento con el gobierno y en sus páginas columnistas como Manfred Schönfeld no escatimaban adjetivos para caracterizar a las autoridades militares. Cuando el mecanismo de recambio presidencial, que debía asegurar una transición pacífica de un titular del Ejecutivo a otro, planeado idealmente para evitar los golpes de palacio tan comunes en anteriores regímenes *de facto*, reveló en su primera puesta a prueba que no servía realmente para garantizar el aceitado paso del mando, Schönfeld escribió una de sus más acres reflexiones sobre el poder militar y los signos de su crisis. Lo único que podía justificar un gobierno *de facto* en la Argentina, decía el articulista, era su estabilidad garantizada por la cohesión interna de las fuerzas armadas y el espíritu de cuerpo de quienes tenían el poder público en sus manos. Las dificultades de la junta para elegir al sucesor de Videla mostraban, continuaba el razonamiento, la ausencia de esa condición justificatoria elemental de un régimen como el implantado a partir de 1976. A los ciudadanos civiles, concluía Schönfeld, sólo les quedaba la posibilidad de contemplar las pujas entre jefes militares, como los indios presenciaban las luchas entre Almagro y Pizarro<sup>114</sup>. Un par de días después *La Nación* abordó el tema de la designación del teniente general Roberto E. Viola como sucesor de Videla y centró su análisis en la necesidad de evitar el resquebrajamiento interno de las fuerzas armadas, condición esencial, argumentaba, para encontrar un desemboque armonioso de la normalización institucional futura, aún débilmente esbozada. Colocándose en una perspectiva mucho menos crítica que la expuesta por el articulista de *La Prensa* antes citado, el matutino decía que la demora en la designación del presidente no había sido "una decisión feliz", y recordaba a los militares la necesidad de otorgar a Viola "las facultades propias de un Presidente. Ello no implica desconocer las características singulares de un gobierno en el cual el poder está en manos de las tres fuerzas"<sup>115</sup>. La distancia entre las perspectivas planteadas desde los dos diarios difícilmente pudiera ser mayor. *La Prensa* atacaba frontalmente al régimen militar; *La Nación* se preocupaba por indicar el camino hacia una salida ordenada.

La libertad de prensa, los derechos humanos y Papel Prensa S.A. fueron temas nuevamente abordados en la reunión de la

Sociedad Interamericana de Prensa realizada en San Diego, y otra vez las acusaciones cayeron sobre la Argentina. La crítica sobre violación de los derechos humanos estuvo a cargo de Jacobo Timerman, quien narró el asesinato del periodista Rafael Perrota, ex director de *El Cronista Comercial*, entre otras denuncias sobre el terror reinante en la Argentina. Los representantes de *La Prensa* y *La Nación*, sin defender expresamente al gobierno, trataron de poner en evidencia los puntos débiles en las declaraciones del antiguo director de *La Opinión*<sup>116</sup>. La presencia de Timerman en la reunión de la SIP motivó un extenso editorial del matutino en refutación de algunas de sus denuncias. Además, *La Nación* sugería al gobierno, para evitar nuevas denuncias en los foros internacionales, derivar al Poder Judicial a los detenidos sin proceso y a quienes se hallaban a disposición del PEN. Así, sin solución de continuidad, se pasaba de Timerman a la imagen externa del régimen y a los pasos aconsejables para mejorarla<sup>117</sup>. Agreguemos que en la mencionada reunión de la SIP Bartolomé Mitre (h), subdirector del diario, alegó su total disconformidad con las denuncias sobre el caso Papel Prensa S. A. Se remitió a la tradición de 111 años de defensa de la libertad de expresión para rechazar los argumentos de favoritismo económico en beneficio de la controvertida empresa, desvinculó la cuestión de los aranceles aplicados a la importación de papel de una eventual violación de la Constitución y anunció la posibilidad de retirarse de la SIP si ésta continuaba colocando a *La Nación* en el banquillo de acusados<sup>118</sup>. Los vientos de fronda siguieron atravesando el campo periodístico argentino: días más tarde, al comentar la reunión de la SIP en un editorial, *La Prensa* reiteró las objeciones al ataque global a la libertad de prensa en la Argentina por medios económicos; señaló que el precio mundial del papel oscilaba entre 345 y 419 dólares la tonelada y que aquí costaba, impuestos mediante, 845 dólares la tonelada para favorecer a Papel Prensa S. A.<sup>119</sup>.

Al acercarse la finalización del período de Videla, *La Nación* había mostrado preocupación por los problemas económicos que a su juicio debía corregir o mejorar su sucesor. El tema del gasto público lo llevó a polemizar con Juan Alemann, secretario de Hacienda de Martínez de Hoz, quien había afirmado que dicho gasto no era excesivo y desestimado por carencia de conocimientos específicos a quienes pedían tal reducción. Las posiciones del diario, para refutar al secretario, no difirieron de las habitualmente planteadas sobre la cuestión, y señaló que el alto funcionario no se había expresado con términos propios de su investidura. La respuesta de Alemann fue terminante: "El tenor del editorial confirma mi idea sobre el carácter mágico que se

atribuye al gasto público, que es, de acuerdo a la opinión corriente, la causa última de todos los males que aquejan a los distintos sectores de la economía"<sup>120</sup>. Abordaba seguidamente en su carta las dificultades para disminuir el gasto público y las consecuencias que podían derivar de soluciones improvisadas o simplistas. Esta polémica entre el matutino y el funcionario no tuvo mayores efectos sobre la prédica del primero, que siguió sosteniendo los mismos argumentos para criticar la labor del gobierno en el área. La sobrevaluación de la moneda local fue otra de las objeciones a la política económica vigente. Nada positivo, afirmaba, había sido logrado por esa vía, y así se distorsionaba la posibilidad de apertura externa, se originaban recesiones sectoriales y se desalentaban las exportaciones<sup>121</sup>.

"Cinco años después": con este título, de matriz dumasiana, *La Nación* abordó el balance del lustro de gobierno militar. El mayor logro consistió, decía, en el triunfo de la lucha contra la subversión. Había como consecuencia un saldo: el orden y la seguridad. En cambio, las realizaciones de la gestión económica eran consideradas desacertadas y quedaban pendientes los problemas de la magnitud e ineficiencia del aparato estatal. Por ello invitaba al sucesor de Videla a corregir la orientación de la economía. Tampoco consideraba solucionados los problemas políticos. En esas condiciones subrayaba la importancia de preservar la homogeneidad de las fuerzas armadas y a ellas les sugería evitar la expansión de sus gastos para incidir menos sobre el presupuesto nacional. Al presidente saliente le rendía un elocuente homenaje: "Vuelve a su hogar acompañado por el respeto y la consideración de cuantos han reconocido su honestidad y su patriotismo"<sup>122</sup>. Al día siguiente, el de la asunción de Viola, la columna editorial glosaba con tono menos diplomático las responsabilidades que tenía ante sí el nuevo gobierno. Hacía una especie de listado de las cuestiones pendientes y expresaba su esperanza de que éstas se fueran concretando. La mayor participación de la ciudadanía y la construcción de un consenso en torno a la anunciada meta de la normalización institucional eran ubicadas en primer plano. Coherente con esa idea, sugería levantar el estado de sitio, garantizar plenamente derechos individuales y no dejar más atentados sin esclarecer. Las esperanzas en la nueva etapa, afirmaba, debían entenderse a partir de la insatisfacción con respecto de la actualidad<sup>123</sup>.

## La Nación: 1976-1981

Vladimir Propp construyó hace varias décadas una brillante tipología de la morfología del cuento de hadas ruso; Umberto Eco sometió al análisis estructural las novelas de Ian Fleming, cuyo personaje central era James Bond; ambos trabajos son ejemplos de la posibilidad de descubrir los elementos invariantes de los distintos géneros literarios. Se podría hacer igual ejercicio con las proclamas militares argentinas que han justificado los golpes de Estado. Los autores de cada una de ellas parecían haberse despreocupado de la, quizás, tediosa tarea de consultar los textos precedentes emitidos en circunstancias similares y su trabajo, por pereza intelectual o convicción ideológica, orilló el plagio. No podría afirmarse lo mismo de los editoriales de La Nación dedicados a recibir los marciales eventos. En el 30, su reflexión tuvo mucho de autocelebración; en el 43, de saludo al fin de una época muy criticada desde esa misma columna; en 1955, con cierto pudor, aplaudió el cambio, pero mantuvo una actitud mesurada, acorde con su posición favorable a los últimos años del gobierno peronista; ante el desplazamiento de Frondizi, prevaleció el temor a los desbordes cuarteleros y su prédica fue civilista; en 1966, recibió la ruptura institucional con pesimismo, aun cuando no había escatimado críticas a la administración entonces depuesta. En 1976, el matutino acogió el hecho de armas con muestras de una adhesión superior a la dispensada en anteriores ocasiones de alternancia cívico-militar. La naturaleza de la situación a la que se ponía fin y la definición liberal-conservadora de los nuevos ocupantes del poder constituyeron, sin duda, factores decisivos para la adopción de esa orientación. El diario reflejó entonces no sólo a la "opinión pública", a la cual se hallaba directamente vinculado, sino también el *état d'esprit* de una parte considerable de la población; aunque, para esta última, el motivo de la aceptación del cambio producido por las fuerzas armadas era el deseo del restablecimiento del orden más que el apoyo al modelo societario liberal-conservador. Los años de Videla fueron más ambiguos para La Nación que para muchos de los restantes componentes de esa heteróclita convergencia de apoyo activo y pasivo a la quiebra de la maltrecha institucionalidad.

Las categorías dominantes hicieron de la dictadura su opción estratégica, más allá de las disconformidades que pudieran expresar frente a algunas orientaciones gubernamentales específicas. La idea de que el país sólo podría tener un régimen democrático luego de una prolongada "cura" autoritaria fue compartida por las corporaciones patronales. Parte importante del empresariado

razonó en términos de revancha de clases contra el movimiento obrero. Los dirigentes de los principales partidos prefirieron hacer mutis a la espera de tiempos mejores, aunque no faltaron aquellos que pusieron su experiencia política al servicio de los militares. En un espacio político-cultural vigilado por la represión y la censura, en el cual pareció consumarse la venganza completa de Patoruzú contra Mafalda, se multiplicaron las iniciativas de los intelectuales de derecha, prestos a acercarse a quienes percibían como los protagonistas del más consistente de los pretorianismos habidos en estas tierras, tan fértiles en tales ensayos. No existe aún ningún trabajo sistemático de investigación que haya indagado el proceso de deterioro del "proceso" y el paulatino y persistente desgranamiento de los apoyos que había concitado en sus inicios. Cuando Videla dejó el mando, hacía tiempo que el experimento había fracasado, pero era tan profundo el efecto de desestructuración que había provocado en la sociedad y en la escena política, que los militares conservaban la iniciativa para proponer soluciones a la crisis por ellos agudizada. Esas "soluciones" profundizaron la crisis. La desintegración del Estado corrió paralela con la fragmentación de la sociedad. La Nación osciló, como en otras épocas confusas, entre interpelar en nombre del deber ser y aconsejar con llamados al realismo, pero su problema mayor fue la casi imposibilidad de determinar, con precisión y continuidad, quién era el interlocutor de su mensaje.

Empleando conceptos elaborados por Barrington Moore para el análisis de procesos de transformaciones societarias mucho más significativos, puede afirmarse que el proyecto autoritario implantado en 1976 presentó ciertas características iniciales de una "revolución desde arriba"<sup>124</sup>. Las fuerzas armadas se hacían cargo de comenzar, así lo afirmaron entonces, una política de transformación del Estado, la sociedad y el sistema político, para clausurar la endémica situación de crisis argentina. Desde el poder, según se anunciaba, se crearían las condiciones para la emergencia de una nueva clase dirigente. La reiterada mención del deseo de ver aparecer una nueva generación del 80 era la manera publicitaria, y por demás ambiciosa, de expresar esa meta. El discurso del "proceso" fue el lugar de articulación de múltiples mitos característicos del imaginario político: había un "tiempo pasado que había sido mejor", pero el país tenía delante "un futuro esplendoroso", que sería alcanzado gracias a la oportuna mediación del "salvador" castrense, capaz de arrancar a la comunidad de la "decadencia" y librarla de la peligrosa acechanza de los "poderes extranjeros". Pero más allá de sus rasgos míticos, en la definición de los objetivos del "proceso" se halló la idea central de realizar

una mutación total de la dinámica política, económica y cultural, y cerrar así una etapa histórica. En un artículo publicado en 1983, con Alain Rouquié propusimos la imagen, a nuestro modo de ver *harto sugerente*, de que los militares tenían como fantasía ideológica la estructuración de una "burguesía de mármol", no muy distinta del hipotético "proletariado de mármol", proclamado por las doctrinas oficiales que justificaron en su época las dictaduras burocráticas de los países comunistas<sup>125</sup>. En ambos casos se chocaba con la realidad de los actores, que distaban mucho de las esperadas e ilusorias configuraciones ideológicas. Al finalizar el gobierno de Videla, era notorio que no había ningún indicio de la emergencia de una clase dirigente. En lo económico, en un contexto de estancamiento de la producción, se habían multiplicado las prácticas especulativas; en la esfera de las ideas no se había registrado el anunciado cambio de mentalidad, que debía ser el cemento unificador de los actores comprometidos en la transformación societaria; tampoco habían aparecido los esperados reemplazantes de los anteriores dirigentes políticos, capaces de fundar nuevas estructuras partidarias. El fracaso del proyecto autoritario podría explicarse en función de los múltiples y disímiles elementos del mismo. Pero la clave conceptual que permite comprender los aspectos fundamentales de lo ocurrido durante esos años fue la destrucción del Estado. Hacer una "revolución desde arriba", suponía la existencia de un "arriba", es decir, una autoridad de la institución estatal, dimensión de lo político que fue sistemáticamente desestructurada por la acción de los militares, aun cuando la violencia represiva pudo hacer pensar, en un primer momento, en el restablecimiento de la autoridad. Pero muy pronto los Ford Falcon verde sin chapa, los mismos que vio no sólo V. S. Naipaul, se convirtieron en el símbolo viviente, valga la paradoja, de la disolución del Estado.

Como sostuvo Max Weber: "Por Estado debe entenderse un instituto político de actividad continuada, cuando y en la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente" <sup>126</sup>. El empleo de los medios de coacción física del Estado, no reconocido oficialmente; la feudalización de los distintos aparatos estatales desintegrando su cuadro de unidad administrativa; la desaparición de la previsibilidad racional estatuida en la legalidad formal fueron las dimensiones que revelaron que la crisis del Estado había alcanzado un nivel hasta entonces desconocido. En tanto la política económica se caracterizó por la toma de decisiones arbitrarias, dictadas por presiones particularistas e intereses de las facciones militares, la nueva clase de empre-

sarios capitalistas modernos no podía constituirse en esa sociedad. La racionalidad burocrática es la condición, como señaló Weber, para la conformación de una clase empresarial igualmente volcada hacia el cálculo racional. Lo que Weber denominaba la justicia del Cadi, propia de Oriente, con su arbitrariedad y sus funcionarios venales, conformaba el clima más propicio para la emergencia de lo que el gran sociólogo alemán definió como un "capitalismo de aventureros y de rapiña enraizado sobre todo como tal en la política, el ejército y la administración"<sup>127</sup>.

El formato de dominación política impuesto por el "proceso" supuso lo que en términos weberianos se aproxima a una regulación del tipo patrimonialista de la esfera estatal, signada por una lógica prebendaria en la que de manera arbitraria se distribuían premios y sanciones económicas. El favoritismo fue un recurso para incrementar el poder de los distintos sectores que se disputaban el predominio en el gobierno, o bien, para tratar de ampliar sus apoyos o neutralizar adversarios. La adjudicación de Papel Prensa S.A. a La Nación, Clarín y La Razón puede tomarse como un ejemplo, entre otros, de un *modus operandi* teñido de particularismo. El caso sirve, también, para mostrar cómo un Estado que privilegió a determinados actores y fue percibido por los restantes como injusto, introdujo efectos de desarticulación de las solidaridades corporativas existentes en el campo periodístico. El otorgamiento de Papel Prensa S.A. a los tres diarios y, más aún, su asociación con el Estado, hubiese sido caracterizada por Weber como una manifestación de la justicia del Cadi.

La evolución de las posiciones de La Nación con respecto a la dictadura militar durante la presidencia de Videla no puede analizarse sin tener en cuenta lo que sucedía con los sectores sociales más próximos al diario. Como expresión de esos sectores, los editoriales criticaron aspectos parciales de la política económica, sin dejar de adherir a los principios liberales inspiradores de la misma. Además, el control del conflicto social y el debilitamiento de los sindicatos, el otro gran punto de convergencia entre empresarios y gobierno, correspondía a un tipo de iniciativa muchas veces reclamado desde sus columnas. Pero La Nación no dejó de definirse ante muchos problemas de orden jurídico y ético, sobre los cuales los aliados o apoyos sociales del gobierno no tenían necesidad de pronunciarse o, directamente, nada que objetar. La vocación del matutino por articular un discurso con aspiraciones doctrinarias más globales que las del mero corporativismo de las categorías dominantes pudo llevarlo a un mayor enfrentamiento con los militares, pero otra vez mostró su singular capacidad de moderación y de aceptación de los límites impuestos por la

situación política. Así, muchas de sus críticas a la gestión de Videla fueron, básicamente, para ser leídas entre líneas, salvo cuando la represión alcanzaba a personas insospechables de actividades subversivas. Que el "proceso" usara la violencia represiva contra opositores muy moderados, o aun para arreglar cuentas entre tendencias internas, fue una novedad que debió amedrentar al conjunto de los responsables de los medios de comunicación. La autocensura fue la regla. La diferencia con el período de Onganía fue notable y el matutino estuvo muy lejos de formular las críticas y emplear las formas utilizadas entonces. Frente al riesgo que podía implicar una actitud más beligerante para la continuidad de la empresa, la opción fue morigerar las objeciones a la política estatal. La cuestión de Papel Prensa S.A. agregó, sin duda, otro elemento al ya complejo problema de los intereses empresariales del diario y el modo en que éstos se reflejarían en su pensamiento político. Con conceptos de Gian Enrico Rusconi, la decisión de la dictadura de otorgar el control del emprendimiento industrial celulósico a dos de los mayores diarios argentinos puede caracterizarse como una situación de cambio político <sup>128</sup>, cuya consecuencia inmediata debía ser, en las expectativas de las autoridades, encontrar algún tipo de contraprestación. Cabe, sin embargo, preguntarse hasta qué punto un juego de estas características colocaba a los beneficiarios de la operación en una posición muy ambigua frente al gobierno, ya que mientras éste durara no era descartable la adopción de medidas arbitrarias, incluida la revisión del negocio.

El agotamiento de la legitimidad acordada al "proceso" se podía leer en los editoriales de La Nación, sin codificación de entre líneas, cuando Videla cedió el poder a su sucesor. La crisis del régimen todavía no había tocado fondo. Faltaban aún las presidencias de los generales Viola y Galtieri. Se acercaba, parafraseando a Raymond Chandler, el momento en que las categorías dominantes y el diario creado por Mitre darían un largo adiós a los imprevisibles políticos blindados con quienes habían recorrido un prolongado camino juntos.

#### NOTAS

<sup>1</sup> La Nación, 26-3-1976, pág. 6.

<sup>2</sup> La Nación, 29-3-1976, pág. 4.

<sup>3</sup> La Nación, 1-4-1976, pág. 6.

<sup>4</sup> La Nación, 7-4-1976, pág. 6.

<sup>5</sup> La Nación, 9-4-1976, pág. 4.

- 6 *La Nación*, 19-4-1976, pág. 6.
- 7 *La Nación*, 2-5-1976, pág. 8.
- 8 *La Nación*, 6-5-1976, pág. 8.
- 9 *La Prensa*, 30-4-1976, pág. 6.
- 10 William L. Shirer: *Le Troisième Reich. Des origines à la chute*, Stock, Paris, 1979, pág. 317.
- 11 *La Nación*, 18-5-1976, pág. 8.
- 12 *La Nación*, 4-6-1976, pág. 6.
- 13 *La Nación*, 6-7-1976, pág. 6.
- 14 *La Nación*, 21-7-1976, pág. 6.
- 15 *La Nación*, 24-7-1976, pág. 4.
- 16 *La Nación*, 28-7-1976, pág. 6.
- 17 *La Nación*, 17-8-1976, pág. 6. Con tono mucho más crítico, *La Prensa* publicó una protesta editorial sobre el mismo tema el 15-8-1976, pág. 4.
- 18 *La Nación*, 22-8-1976, pág. 8.
- 19 *La Nación*, 2-9-1976, pág. 6; 30-9-1976, pág. 8.
- 20 Álvaro Alsogaray: conferencia pronunciada en la Academia de Ciencias Económicas el 10-11-1976, publicada en *La Opinión* del 2-11-1976, pág. 14. El 9-12-1976, *La Nación*, con un estilo literario desusado, editorializaba: "La ansiedad se despierta por la creación de un ministerio, que siempre nace con los pecados originales de su entraña burocrática y su voluntad de poder", pág. 8.
- 21 *La Nación*, 17-9-1976, pág. 6.
- 22 Revista semanal de *La Opinión*, 14 al 20 de noviembre de 1976, pág. 14.
- 23 Revista semanal de *La Opinión*, 23 al 29 de enero de 1977, pág. 43.
- 24 Revista semanal de *La Opinión*, 6 al 12 de febrero de 1977, págs. 12-13.
- 25 *La Nación*, 3-2-1977, pág. 6.
- 26 *La Nación*, 24-3-1977, pág. 8.
- 27 *La Nación*, 29-3-1977, pág. 8.
- 28 *La Nación*, 1-4-1977, pág. 8.
- 29 V. S. Naipaul: *The return of Eva Perón*, Penguin Books, New York, 1974, pág. 152.
- 30 Jean-Pierre Bousquet: *Las locas de la Plaza de Mayo*, Cid Editor, Buenos Aires, 1982, pág. 43.
- 31 *La Nación*, 24-4-1977, pág. 8; 30-4-1977, pág. 8; 21-5-1977, pág. 8.
- 32 *La Nación*, 10-5-1977, pág. 8.
- 33 "A la opinión pública", solicitada en *La Nación*, 19-5-1977.
- 34 *La Nación*, 15-4-1977, pág. 6.
- 35 *La Nación*, 19-4-1977, pág. 8.
- 36 *La Nación*, 24-5-1977, pág. 8.
- 37 *La Nación*, 26-6-1977, pág. 8.
- 38 *La Nación*, 7-7-1977, pág. 8.
- 39 *La Nación*, 12-7-1977, pág. 8.
- 40 *La Nación*, 2-7-1977, pág. 8.
- 41 *La Nación*, 10-10-1977, pág. 1.
- 42 *Ibid.*

- 43 Bartolomé Mitre: *Sin libertad de prensa no hay libertad*, Fundación Banco de Boston, Buenos Aires, 1990, pág. 125.
- 44 *La Nación*, 22-9-1977, pág. 8.
- 45 Acta reproducida en el Apéndice Documental de Enrique Vázquez: *La última. Origen, apogeo y caída de la dictadura militar*, EUDEBA, Buenos Aires, 1985, pág. 271.
- 46 *La Nación*, 31-12-1977, pág. 8.
- 47 *La Nación*, 29-3-1978, pág. 8.
- 48 *La Nación*, 15-3-1978, pág. 8.
- 49 *La Nación*, 23-4-1978, pág. 8.
- 50 Revista *Creer*, N° 35. Reproducido en revista *Papiro*, julio-diciembre de 1982, pág. 40.
- 51 *La Nación*, 14-4-1978, pág. 8.
- 52 *La Nación*, 22-7-1978, pág. 8.
- 53 *La Nación*, 18-7-1978, pág. 8; 9-8-1978, pág. 6.
- 54 *La Nación*, 31-8-1978, pág. 8.
- 55 Reproducido en Enrique Vázquez: Ob., cit., pág. 97.
- 56 Publicada en Jean-Pierre Bousquet: Ob. cit., págs. 8-9.
- 57 Discurso del presidente Videla en *La Nación*, 26-9-1978.
- 58 *La Nación*, 27-9-1978, pág. 8.
- 59 *La Nación*, 1-12-1978, pág. 4.
- 60 *La Nación*, 13-12-1978, pág. 6.
- 61 *La Nación*, 10-12-1978, pág. 8.
- 62 *La Nación*, 20-12-1978, pág. 8.
- 63 *La Nación*, 15-1-1979, pág. 6.
- 64 *La Nación*, 4-2-1979, pág. 8.
- 65 *La Nación*, 30-3-1979, pág. 8.
- 66 *La Nación*, 31-3-1979, pág. 6.
- 67 "Por qué *La Nación* participa de Papel Prensa", *La Nación*, 4-3-1979.
- 68 Juan Alemann: declaraciones a un diario de Río Negro, reproducidas por el semanario *El Economista*, 30-3-1979.
- 69 Solicitada de Papel Prensa S.A., en *La Nación*, 28-3-1979.
- 70 *La Nación*, 15-4-1979, pág. 8.
- 71 *La Nación*, 10-6-1979, pág. 8.
- 72 *La Nación*, 14-6-1979, pág. 8.
- 73 *La Nación*, 25-6-1979, pág. 8.
- 74 *La Nación*, 18-4-1979, pág. 8.
- 75 *La Nación*, 26-4-1979, pág. 8.
- 76 *La Nación*, 13-10-1979, pág. 8.
- 77 *La Nación*, 27-10-1979, pág. 8.
- 78 *La Nación*, 2-6-1979, pág. 8.
- 79 *La Nación*, 6-9-1979, pág. 8.
- 80 *La Nación*, 19-9-1979, pág. 8. El libro de Díaz Bessone fue editado por Fraterna, Buenos Aires, 1986.
- 81 *Ibid.*
- 82 Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos: *Informe sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina*, Secretaria General, Washington. Reproducido en la

Argentina, con prólogo de Emilio Fermín Mignone y Augusto Conte, por Editorial La Constitución, Buenos Aires, 1984, pág. 261.

<sup>83</sup> *La Nación*, 4-5-1979, pág. 8.

<sup>84</sup> *La Nación*, 26-7-1979, pág. 8.

<sup>85</sup> *La Nación*, 2-10-1979, pág. 8.

<sup>86</sup> *La Nación*, 7-12-1979, pág. 8.

<sup>87</sup> Declaración de la ADEPA sobre Papel Prensa S.A., publicada en *La Nación*, 18-12-1979.

<sup>88</sup> Reparos a la posición de la SIP sobre la Argentina, en *La Nación*, 22-3-1980.

<sup>89</sup> *La Prensa*, 21-3-1980.

<sup>90</sup> "Difundióse una nota del doctor Juan E. Alemann", en *La Nación*, 27-3-1980.

<sup>91</sup> *La Nación*, 3-7-1979, pág. 8.

<sup>92</sup> *La Nación*, 4-9-1979, pág. 8.

<sup>93</sup> *La Nación*, 7-10-1979, pág. 8.

<sup>94</sup> *La Nación*, 23-2-1980, pág. 6.

<sup>95</sup> *La Nación*, 14-1-1980, pág. 8.

<sup>96</sup> *La Nación*, 24-1-1980, pág. 8; 26-1-1980, pág. 6; 5-2-1980, pág. 6.

<sup>97</sup> *La Nación*, 26-3-1980, pág. 8.

<sup>98</sup> *La Nación*, 20-4-1980, pág. 8.

<sup>99</sup> Manfred Schönfeld: "Los desaparecidos: la voz de la conciencia sigue hablando, aun cuando el telón haya descendido", en *La Prensa*, 25-4-1980, pág. 9.

<sup>100</sup> *La Nación*, 26-4-1980, pág. 8.

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *La Nación*, 9-7-1980, pág. 10.

<sup>103</sup> Adolfo Mitre: prólogo a Julián Martel: *La Bolsa*, edición de Editorial Estrada, Buenos Aires, 1946, págs. XVIII y XIX.

<sup>104</sup> Juan Carlos Casas: *Impresiones del repatriado Ulises Izakerri*, Emecé, Buenos Aires, 1982.

<sup>105</sup> *La Nación*, 13-7-1980, 3<sup>a</sup>. Secc., págs. 1 y 6.

<sup>106</sup> *La Nación*, 7-8-1980, pág. 8.

<sup>107</sup> *Clarín*, 12-8-1980, pág. 28.

<sup>108</sup> *La Nación*, 26-9-1980, pág. 8.

<sup>109</sup> *La Nación*, 29-8-1980, pág. 6.

<sup>110</sup> Bonifacio del Carril: "Cincuenta años después", *La Nación*, 30-8-1980, pág. 9.

<sup>111</sup> *La Nación*, 16-9-1980, pág. 8.

<sup>112</sup> *La Nación*, 10-9-1980, pág. 8.

<sup>113</sup> *La Prensa*, 30-9-1980, pág. 16.

<sup>114</sup> *La Prensa*, 1-10-1980, pág. 11.

<sup>115</sup> *La Nación*, 4-10-1980, pág. 8.

<sup>116</sup> *La Nación*, 15-10-1980, pág. 5.

<sup>117</sup> *La Nación*, 17-10-1980, pág. 8.

<sup>118</sup> "Conceptos formulados por el director de *La Nación*", *La Nación*, 18-10-1980, pág. 3.

<sup>119</sup> *La Prensa*, 11-11-1980, pág. 6.

<sup>120</sup> *La Nación*, 26-11-1980, pág. 8. Respuesta de Alemann en *La Nación*, 27-11-1980, pág. 16.

<sup>121</sup> *La Nación*, 4-2-1981, pág. 8; 8-2-1981, pág. 8. La época de publicación de los citados editoriales coincidió con la de varios artículos de Juan B. Caprile con argumentaciones muy similares.

<sup>122</sup> *La Nación*, 28-3-1981, pág. 6.

<sup>123</sup> *La Nación*, 29-3-1981, pág. 8.

<sup>124</sup> Sobre esta modalidad de cambio social ver Barrington Moore (Jr): *Social Origins of Dictatorship and Democracy*, Beacon Press, Boston, 1966, caps. V y VIII.

<sup>125</sup> Alain Rouquié y Ricardo Sidicaro: "Etats autoritaires et libéralisme économique en Amérique Latine: Une approche hétérodoxe", en *Revue Tiers Monde*, N° 93, París.

<sup>126</sup> Max Weber: *Economía y Sociedad. Esbozo de una Sociología Comprensiva*, Fondo de Cultura Económica, México, 1969, Tomo 1, pág. 43.

<sup>127</sup> Max Weber: *Escritos Políticos*, Ediciones Folios, México, 1982, Tomo 1, pág. 77.

<sup>128</sup> Gian Enrico Rusconi: *Scambio, minaccia, decisione. Elementi di sociologia politica*. Il Mulino, Bologna, 1984, cap. II.

## XV

### Despidiendo a los políticos blindados

Las expectativas depositadas en posibles cambios a introducir por el gobierno del presidente Viola se revelaron rápidamente infundadas. *La Nación* observó su gestión con marcado escepticismo, aun cuando no por ello dejó de proponer consejos para cambiar el curso de los acontecimientos. Apenas instalado el equipo económico de Viola, integrado por representantes o voceros de entidades corporativas empresarias, quienes expresaban el deseo de modificar las orientaciones de la etapa de Martínez de Hoz, el diario pareció abrir poco crédito a lo que designaba "la nueva conducción policéfala de la economía nacional"<sup>1</sup>. Desde el momento inicial recordó a los nuevos equipos gubernamentales que el problema no era de discursos y declaración de principios, sino de su efectiva aplicación. A los funcionarios del área educativa les señaló la necesidad pasar de la preocupación por el orden y la disciplina, ya alcanzados en los claustros universitarios, a metas más dinámicas y modernas, acordes con los modelos puestos en ejecución en países más avanzados. La decisión de aumentar el número de vacantes universitarias le resultó una medida acertada de las nuevas autoridades, pero, de todos modos, juzgó el sistema de ingreso demasiado restrictivo frente a la cantidad de aspirantes a ingresar en las casas de altos estudios<sup>2</sup>. La falta de anuncios en materia de reducción del gasto público llevó al matutino a reiterar sus habituales puntos de vista. Sostenía que no se trataba de tomar medidas menores, sino de afrontar decididamente la gran opción política de "eliminar la exagerada presencia del Estado en la vida del país, sin lo cual no será posible el fortalecimiento de las iniciativas privadas"<sup>3</sup>. De allí en más, retomaría el reclamo bajo formas prácticamente idénticas hasta el fin de la gestión de la "policéfala" conducción económica.

Atento a las ideas de los militares, el diario no pasó por alto un discurso pronunciado a fines de mayo de 1981 por el coman-

dante en jefe del Ejército, general Leopoldo Fortunato Galtieri. Una frase del todavía poco conocido hombre de armas: "Consolidar una firme política exterior cuyos lineamientos nos lleven a ser la gran nación deseada", mereció su reflexión, y sobre ese aparente ejercicio de retórica el editorialista señalaba que podía "inducir a una confusión de objetivos (ya que) a la grandeza nacional conduce una política global, sustentada primordialmente en los factores internos, la política exterior sólo la proyecta"<sup>4</sup>. La lucha librada por las distintas facciones militares comenzaba a tomar estado público; al poco tiempo, la frase de Galtieri cobró nueva y rigurosa actualidad. En un clima de creciente deterioro de la unidad de las fuerzas armadas, tema al cual el matutino se había referido desde un principio como la mayor amenaza para la continuidad del "proceso", a muchos lectores debió resultarles particularmente instructivo un artículo de Carlos A. Wilkinson titulado "La revolución devora a sus hijos", donde con vocación universalista hacía una aproximación a la historia natural de las revoluciones y sugería corregir el viejo adagio, ya que, en realidad, los fagocitados eran los padres<sup>5</sup>. Los partidos políticos también debieron avizorar tiempos importantes: peronistas, radicales, desarrollistas, demócratas cristianos e intransigentes decidieron emitir una convocatoria multipartidaria para reclamar un plan político de "restitución institucional", un nuevo plan económico y la plena vigencia del estado de derecho.

La situación de los medios de prensa se tornó, bajo algunos aspectos, más difícil durante el gobierno de Viola. La ya clásica discusión sobre Papel Prensa S. A. volvió a plantearse en la reunión anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde se denunció la "superprotección" arancelaria en beneficio de la empresa. Nuevamente un representante de *La Nación*, José Claudio Escribano, fue el encargado de defenderla; señaló, entre otros argumentos, que otras ramas manufactureras gozaban de mayores niveles de protección<sup>6</sup>. Poco después de esa reunión internacional, el diario reafirmó su tradicional posición crítica sobre la utilización de aranceles proteccionistas como mecanismo para fomentar la industria. El referido editorial dio motivo a Manfred Schönfeld para desarrollar, desde las columnas de *La Prensa*, una nueva tanda de cuestionamientos a *La Nación* por su participación en el controvertido emprendimiento en asociación con el Estado. Burlón y poético, el artículo de Schönfeld se centraba en la contradicción flagrante de un "órgano periodístico de larga existencia, no sujeto a cambios esenciales en cuanto a sus dueños y a los que orientan su línea de conducta", que podía, por una parte, realizar un correcto análisis editorial de los perjuicios

ocasionados al país por las protecciones arancelarias a industrias no rentables y no competitivas y, por otra, ser participe de una empresa como Papel Prensa S. A., un vivo ejemplo de ese tipo de negativas situaciones. Schönfeld terminaba preguntándose si los herederos del general Mitre no estarían aún en condiciones de "enmendar una pasajera actitud errada" y volver a las mejores tradiciones<sup>7</sup>. Un par de días después, le tocó a la ADEPA mencionar a Papel Prensa S.A. al caracterizar la protección arancelaria como una discriminación contraria a la libertad de prensa, "sin otro justificativo que el de proteger una industria deficitaria, montada sobre bases espurias, de la que el propio Estado es socio"<sup>8</sup>.

Las críticas de *La Prensa* al gobierno militar terminaron por llevar a éste a retirarle la publicidad oficial que, teóricamente, debía distribuir entre todos los diarios sin discriminación alguna. La medida adoptada contra *La Prensa*, escribió Schönfeld, no hacía sino revelar la debilidad del régimen, y, profético, decía para cerrar su texto que si los militares no querían rendir cuentas ante el "cuarto poder" tendrían que rendirlas frente a sus sucesores en el gobierno. *La Nación* editorializó a favor de su centenario colega y condenó la discriminación del gobierno. Descalificaba las justificaciones de la medida y recordaba que Occidente había adquirido su identidad gracias a los pensamientos diversos y a las opiniones reacias a la uniformidad<sup>9</sup>. Señal de los tiempos que corrian, Manfred Schönfeld fue atacado físicamente días más tarde; el atentado fue de autoría anónima, pero las acusaciones cayeron sobre la esfera gubernamental. *La Nación* señaló que quienes así actuaban lo hacían seguros de su impunidad: "Lo incuestionable es el convencimiento afirmado en la opinión pública de que el patoterismo se encuentra alimentado desde alguna sórdida franja actuante, en los repliegues del Estado"<sup>10</sup>. Una semana más tarde, la ADEPA se entrevistaba con el presidente Viola para entregarle un pliego con quejas sobre violaciones de la libertad de expresión, donde, naturalmente, se incluía el caso Papel Prensa S. A.

En el último trimestre de 1981, el diario alternó sus críticas a la evolución de los asuntos públicos con algunas sugerencias sobre la necesaria tarea de reconstruir las instituciones democráticas. Desde las alturas del poder se precipitaban la caída de Viola y el aparentemente irresistible ascenso del tercer presidente del "proceso". La mirada pesimista cubría un editorial en octubre de 1981: "La opinión pública refleja en la actualidad, en algunos aspectos fundamentales, un grado de decepción en contraste con la esperanzadora voluntad y confianza observada

hace un lustro"<sup>11</sup>. Sólo quedaba aconsejar el retorno a la vida institucional ceñida a los preceptos de la Constitución, texto básico cuya enseñanza en todas las casas de estudio del país, incluidas las de formación de militares, decía, sería conveniente impartir. Como un signo más de los abusos del poder, el matutino comentaba poco después la prohibición oficial de propalar por radio y televisión los versos del tango "Cambalache". Medida similar, decía, había adoptado años antes "lo que dio en llamarse *Revolución Argentina* (...) ofreciendo la supuesta explicación de que el tono escéptico de las estrofas introducía una suerte de desaliento en el espíritu colectivo"<sup>12</sup>. Definía la decisión como desprovista de fundamento racional y expresaba su preocupación por la creación de un *index* melódico. Pero la escena política estaba aún más movida que la artística: el presidente Viola, enfermo, dejaba la primera magistratura. Las pugnas por el poder entre facciones militares fueron caracterizadas por el diario como "una verdadera crisis del contenido moral del Proceso de Reorganización Nacional"<sup>13</sup>. La reflexión pasaba revista al modo en que el régimen militar se había deteriorado sin cumplir la mayoría de sus objetivos. Se había llegado así, argüía, a un decaimiento total de la confianza de la ciudadanía. El comentario dejaba abierta la posibilidad de una recuperación de esa confianza, a condición de ofrecer hechos, ideas y programas capaces de reanimar la moral colectiva. El fracaso de Viola era relacionado con las dificultades previsibles que debía encontrar un gobierno cuyo gabinete reunía personas con individualidades y trayectorias poco compatibles entre sí. En especial, aseveraba, esto había ocurrido en el área económica. Con relación a los conflictos militares, lamentaba el desgaste proyectado sobre el conjunto del "proceso" y empleaba una imagen de reminiscencia poética: "El contacto de la espada ha rasgado la tela que protegía una empresa valiosísima"<sup>14</sup>. Luego, el texto salía de esa virginal imagen e incursionaba en la sociología política para preguntarse si todo lo sucedido no reactualizaría la idea de la ingobernabilidad de la Argentina, conjetura frustrante, agregaba, a la que no eran ajenos los militares ni los civiles. La etapa Viola había terminado; difícilmente el editorialista haya imaginado cómo finalizaría la de Galtieri.

"Sé que el tiempo de las palabras y de las promesas se ha agotado, incluso sé que las palabras han perdido su fuerza y su poder de convocatoria." Con ese expresivo reconocimiento de la situación del "proceso", Galtieri se hizo cargo del gobierno. La forma del discurso presidencial le pareció al editorialista impregnada por el acento típico de las arengas en la plaza de armas, pero al buscar el lado positivo destacó en esa modalidad oratoria

el propósito de ejercer una autoridad efectiva. Galtieri no había cultivado la sutileza en su alocución inicial y esto era valorado por el diario como una correcta percepción de lo que correspondía hacer frente a la depresión del cuerpo social, ante la cual, decía, no cabía la retórica euforizante. La reflexión aludida terminaba: "Aún no está claro lo que viene detrás de las palabras del miércoles, pero sí se dice que esas palabras han agrietado la barrera de la apatía popular"<sup>15</sup>. La confianza en las primeras medidas del nuevo ministro de Economía, Roberto Alemann, y la satisfacción ante los anuncios oficiales de reducción de la esfera de intervención del Estado, parecieron justificar la moderada recuperación del optimismo que el matutino creía percibir en la opinión pública<sup>16</sup>. A fin de 1981, una sesión de la Cámara de los Lores de Gran Bretaña llevó a *La Nación* a ocuparse, con tono sarcástico y anticolonialista, del problema de las Islas Malvinas. Un parlamentario inglés había pedido a su primer ministro informaciones sobre una misión científica argentina destacada en las vecindades de los insulares y lejanos dominios, y aseguraba que los derechos sobre los mismos debían defenderse a ultranza, incluso con el recurso de las armas del Imperio. El diario reaccionó con acritud frente a esas afirmaciones, y dejó de lado su medida característica: "Al parecer, para algunos miembros de la Cámara de los Lores el anacronismo no es una mera cuestión formal, asentada en la tradición, sino más bien una actitud mental tan desasida de la cronología como de la realidad"<sup>17</sup>. Mencionó luego los derechos históricos, geográficos, geológicos, políticos y jurídicos de nuestro país sobre las islas del Atlántico Sur, para nada tenidos en consideración por el a su juicio desafuero verbal pronunciado en el recinto de los Lores.

La posición del diario ante el comienzo de la gestión de Galtieri fue cauta y expectante, ajustada al seguimiento de los hechos y con sugerencia de sus tradicionales líneas de acción, tal como había procedido con los gobiernos anteriores. En las antípodas de esa actitud en el campo periodístico se ubicaba Bernardo Neustadt, quien sintetizaba su visión con términos que sugerentemente incluían la metáfora bancaria: "Galtieri es un cheque que se renueva. Es una fe que vuelve a nacer"<sup>18</sup>. Para *La Nación* había buenos indicios de cambios, entre ellos, la incorporación de civiles en la dirección de gobiernos provinciales. Esa podía ser, en su opinión, una vía para comenzar a vislumbrar la salida del "proceso" y contribuir a alcanzar la ansiada solución constitucional. Esa participación civil, afirmaba, había provocado cierta aprensión en quienes temían que en las provincias se produjera una sectorización del gobierno o se favoreciera a determi-

nados partidos, pero tal desviación debía imperiosamente evitarse<sup>19</sup>. Desde esa perspectiva, orientada a alentar los mecanismos de una posible y no demasiado lejana restauración de las instituciones democráticas, la labor de la incipiente articulación de partidos políticos denominada Multipartidaria era observada con atención y con cierta simpatía. El espíritu de conciliación expresado por los cinco partidos que la integraban le parecía al diario un signo positivo, capaz de contribuir a la distensión política. La presencia del peronismo en la convergencia no inquietaba al editorialista, quien la consideraba parte de un aprendizaje democrático. Los análisis sobre la Multipartidaria resultaban reveladores de la buena voluntad puesta por el matutino para pensar con optimismo su eventual evolución. Desde esa óptica, todo inducía a imaginar un país casi normalizado, con actores políticos confiables, donde sólo faltaban las adecuadas leyes electorales<sup>20</sup>.

En ese contexto signado por las expectativas de una relativamente rápida apertura del juego político, el diario reaccionó con argumentos contundentes ante el asesinato de una militante de un partido de izquierda, cuya autoría atribuyó a grupos parapoliciales de un modo muy poco velado. El Estado no podía permitir que eso volviera a ocurrir, sentenció editorialmente, y debía descubrir a los responsables del crimen<sup>21</sup>. La idea de una regresión del esperado proceso de reinstitucionalización no era la única preocupación expresada por el matutino. ¿Buscaba Galtieri liderar un nuevo movimiento populista? Algunos gestos del presidente permitían suponer que ese objetivo, quizás, se estuviera pergeñando en las altas esferas oficiales. Así, una visita de Galtieri a la concentración del seleccionado nacional de fútbol y un abrazo a su director técnico, ocasionaron una reflexión editorial sobre las tentaciones populistas en las que podía deslizarse el todavía poco definido jefe de Estado<sup>22</sup>. El mensaje de las fuerzas armadas al cumplirse el sexto aniversario del golpe reafirmaba la decisión de transitar hacia una plena normalización política e institucional de la República, y anunciaba la pronta promulgación de un estatuto para los partidos políticos. Ése fue un nuevo aporte a la presunción de que el fin del "proceso" ya no se hallaba lejos y de que las autoridades eran conscientes de la necesidad de lograr un acabamiento ordenado, posición realista e inteligente según la perspectiva del diario. Pero en tanto se acercaba el momento de una salida, también se aproximaba una cuestión mucho más compleja: la de la justicia respecto a la violencia y los crímenes cometidos durante la dictadura. Sin ambages, el tema fue abordado en la columna editorial.

En el tratamiento del delicado problema *La Nación* definió su posición de un modo claro. Los familiares de "desaparecidos" debían tener una respuesta para calmar así su comprensible desasosiego. Las autoridades debían contribuir a ello, agregaba, con todos los medios a su alcance. Pero como había muchos sectores que solicitaban investigaciones exhaustivas, el diario pareció entender pertinente formular una posición de principios totalmente coincidente con la sostenida en ese momento por las fuerzas armadas. Al respecto afirmó: "De ninguna manera está en juego la revisión de la guerra contra la subversión que ciertas omisiones o deliberadas suspicacias parecerían plantear como un remedio político. Y no está en juego ese revisionismo por la misma causa que tampoco lo está el de nuestras guerras de la Independencia, ya que sus victorias —ayer como hoy— son la causa de que la Nación viva. Existe pues una clara línea divisoria que no puede cruzarse —salvo con intención suicida..."<sup>23</sup>. Para el matutino, la aceptación de ese límite a la investigación sobre el pasado reciente era algo tácitamente acordado con la dirigencia de los principales partidos políticos. Además, señalaba, eran esos partidos quienes iban a usufructuar el sistema democrático asegurado por las pasadas acciones militares. Taxativo, el análisis aseveraba que la Nación no podía aceptar que se pusiera en tela de juicio su derecho a la existencia. Esa manera de convertir el terrorismo de Estado en una gesta homologable a las luchas por la Independencia debió sonar como acordes celestiales en los oídos de los gobernantes militares, preocupados en preparar otra guerra, la de Malvinas. El *res, non verba* del día inicial de Galtieri iba a adquirir ahora toda su verdadera, y dramática, significación.

El 2 de abril de 1982 se produjo el desembarco en las Malvinas. Los directores de los diarios fueron invitados a concurrir al Estado Mayor Conjunto. Allí se les explicó, escribió Félix Laiño de *La Razón*, que Inglaterra se limitaría a enviar una pequeña fuerza para "dar el mordisco del león herido" y luego retirarse; la opinión periodística quedaría bajo censura<sup>24</sup>. Ese día *La Nación* editorIALIZABA sobre el preocupado estado de ánimo de la población ante el giro de los acontecimientos y reivindicaba la soberanía y el derecho sobre las islas cuya usurpación cumplía un sesquicentenario. También se ocupaba de la movilización obrera realizada un par de jornadas antes. Condenaba a los organizadores de la protesta bajo "el nostálgico sello de la CGT", pero al mismo tiempo criticaba al gobierno por haber elogiado, en vísperas de la acción del Atlántico Sur, al sindicalismo para calmarlo y ganarlo a su causa. Para el matutino, las autoridades habían mostrado

ingenuidad, puesto que revelaron ignorancia sobre la naturaleza de esa dirigencia gremial. Como en épocas que se hubieran supuesto totalmente superadas, caracterizaba a los sindicalistas peronistas de totalitarios, incendiarios de templos y de locales de partidos opositores, y no dejaba, tampoco, de recordar la posición favorable de los peronistas hacia la guerrilla cuando ésta comenzaba<sup>25</sup>. Difícilmente se podría, en opinión del matutino, encontrar un punto de contacto entre ese sindicalismo y la democracia deseada por la mayoría de la población. Días más tarde, el comentario editorial volvía a ocuparse de una movilización popular, esta vez, la realizada en apoyo del esfuerzo bélico mientras en la Casa de Gobierno se discutía con el enviado de los EE.UU. sobre posibles soluciones para el conflicto del Atlántico Sur. Lamentaba el texto la presencia en la Plaza de Mayo de algunos núcleos "prosoviéticos", pero la gran mayoría, decía, había concurrido a reafirmar la causa común, por encima de pasiones partidarias. La reflexión se cerraba sugiriendo que quizás ésa había sido la primera gran movilización de una nueva esperanza política, susceptible de convocar a millones de jóvenes, necesitados de banderas ejemplares<sup>26</sup>. La posición de Francia a favor de Gran Bretaña indignó días más tarde al editorialista, y su irritación pareció colmarse al comentar que el presidente François Mitterrand había enviado como emisario a América Central y a México a Régis Debray, antiguo compañero de guerrilla del Che Guevara y teórico de la guerra revolucionaria, para explicar a las izquierdas locales las razones de su adhesión al "colonialismo inglés"<sup>27</sup>. En el apoyo a la acción del gobierno militar coincidían casi todos los dirigentes políticos y sindicales y, también, muchos intelectuales críticos del "proceso". Ernesto Sabato tocó un punto muy sensible al rechazar como un burdo sofisma de un ministro inglés que se tratara de la lucha entre una democracia y una dictadura militar. Para el escritor, era la guerra de un imperio contra un pueblo, perseguido hasta la víspera, y con honda vocación anticolonialista<sup>28</sup>. A medida que la dinámica de la situación prenunciaba la creciente posibilidad de enfrentamientos bélicos mayores, *La Nación* invitó en sus reflexiones a todas las partes a meditar sobre las consecuencias de un conflicto cuyo manejo escaparía de las manos de todos. ¿No sería la Unión Soviética la más beneficiada con una guerra en ese inesperado frente austral? El apoyo de los Estados Unidos a Gran Bretaña quebraba, en su opinión, la unidad continental, y dejaba a América Latina más vulnerable al avance soviético<sup>29</sup>. Sin duda, ese planteo buscaba un interlocutor tanto en la escena internacional como en el propio gobierno militar. Desde la tercera semana de abril de 1982, el

tema de las consecuencias propicias al comunismo derivadas de la guerra se instaló definitivamente en los editoriales. La negociación aparecía como la única alternativa ventajosa para todos. Ora anticolonialistas, ora analíticos, en todos los textos era notoria la percepción del cariz trágico de los acontecimientos, difícilmente solucionable sin costos mayores. La negociación como horizonte siguió planteándose, pero con marcado escepticismo. La responsabilidad de los Estados Unidos fue invocada repetidamente, en unos casos con recurrencia a la ética y en otros a la conveniencia geopolítica. Se había quebrado la solidaridad continental, afirmaba uno de los tantos editoriales dedicados al tema; "esto puede ser secundario para Gran Bretaña, pero de ninguna manera lo es para Washington, pues las fronteras de tensión de los Estados Unidos y la Unión Soviética están ahora tanto en la Europa occidental como en las ramificaciones tácticas perceptibles en el continente americano"<sup>30</sup>. Lo que podía parecer un ejercicio de imaginación geopolítica no era tal. ¿La "traición" de Washington llevaba a los militares argentinos a mirar hacia el Este? Ya en los comienzos del conflicto el general (R) Alcides López Aufranc había declarado públicamente que en la guerra sólo valía triunfar, aun cuando para ello fuese necesario hacer una alianza con los soviéticos<sup>31</sup>. La fotografía del canciller Nicanor Costa Méndez, abrazado en La Habana con Fidel Castro, fue el símbolo de los peligrosos equilibrios que desvelaban al matutino. La retórica nacionalista, las movilizaciones callejeras, la relativización de la inscripción en el mundo occidental, el alejamiento de los Estados Unidos fueron cuestiones que ocuparon la meditación política mientras se libraba el conflicto austral. Probablemente, Raúl Alfonsín pensaba en todos los actores de orientación conservadora cuando, a comienzos de junio de 1982, escribió: "¿Cómo reaccionarían los intereses imperiales y oligopólicos si vieran delinearse en el futuro cercano un proyecto que resumiera las demandas de amplios sectores populares y que consolidara las banderas nacionalistas que se han levantado en estos días?"<sup>32</sup>. Alarmado por la extraña simbiosis deparada por la guerra, un editorial creyó conveniente recordar a los militares que los aliados buscados en las reuniones de los No Alineados habían, poco tiempo antes, armado a la guerrilla local. Con el mismo ánimo didáctico, les indicaba que los aliados tradicionales de la Argentina podían estar equivocados en la coyuntura de Malvinas, pero la inserción occidental de nuestro país correspondía a raíces históricas irrenunciables, eran una cultura, es decir, algo imposible de abandonar<sup>33</sup>. Luego, llegó la derrota, el retiro de las tropas de las Malvinas y la caída de Galtieri.

“Lo que ha concluido no es el gobierno organizado por el Teniente General Galtieri, sino un sistema establecido en 1976 por las Fuerzas Armadas (...) que, en sus aspectos funcionales, pudo considerarse como una República Militar”<sup>34</sup>. La experiencia autoritaria había presentado características similares, según *La Nación*, a las de una coalición de partidos, donde cada arma había pensado y actuado como una fuerza política autónoma. Un poder establecido de ese modo había revelado, en su opinión, la mayor debilidad cuando creyó posible asumir separadamente la responsabilidad de llevar adelante el conflicto bélico en el Atlántico Sur. Ese *modus operandi* había resultado funcional para combatir la guerrilla, agregaba, pero se mostró inviable frente a una confrontación de otra magnitud. El “proceso” se terminaba con la disolución de la coalición y el gobierno pasaba al control exclusivo de uno de sus “partidos”: el Ejército. El matutino aconsejaba a los hombres de armas medir bien sus próximos pasos; podía sobrevenir una crisis más aguda si se fracturaba totalmente la disciplina castrense y entonces los enfrentamientos pasarían al campo de los hechos. Así, como si nunca hubiese cifrado sus esperanzas en los ahora atribulados y vencidos pretores, la tribuna de doctrina meditaba sobre “El fin del Proceso”, título por demás elocuente del editorial comentado. Al general Reynaldo Benito Bignone, encargado de organizar el repliegue, el diario lo percibió muy pronto poco dotado para la política y le sugirió actuar con cautela, dado que las negociaciones con los partidos suponían fijar con claridad los tipos de contraprestaciones<sup>35</sup>. Por cierto, en el nuevo contexto no faltaban en las filas de los partidos posiciones extremas deseosas de hacer pagar muy caro a los militares su usurpación del poder. Así, en jacobino, Carlos Saúl Menem sostenía: “Ha llegado la hora de marcar a los culpables y enjuiciarlos, porque no es posible que cuando se baja a un gobierno civil vayamos todos a parar a la cárcel y luego de un gobierno militar se opte por el perdón y el olvido. No podemos seguir viviendo entre delincuentes”<sup>36</sup>. Roberto Roth, quien había integrado años antes los elencos de Onganía, meditaba sobre el fin del proceso en un libro publicado en esos días. Sobre los generales, Roth decía que habían mandado a capitanes y tenientes a matar, torturar, secuestrar, en tanto ellos se guardaban en sus despachos, desde donde daban órdenes pero evitaban firmarlas, y que una vez normalizadas las instituciones temían asumir sus responsabilidades. Quienes los habían apoyado desde el campo civil, continuaba Roth —empresarios, colegios de abogados, asociaciones profesionales, intelectuales, hombres de bien—, se esfumarían a la hora de pagar las cuentas<sup>37</sup>. En esas condiciones no

fue sorprendente la difusión de múltiples rumores sobre eventuales golpes de Estado para detener las iniciativas encaminadas hacia la reconstrucción del sistema democrático. Un colaborador permanente de *La Nación*, Martín Alberto Noel, escribió un largo artículo sobre los riesgos de una regresión en las metas ya trazadas. Con pluma ágil, Noel ironizaba sobre la cultura golpista, sus promotores y sus estilos característicos. En una especie de sociología espontánea de los usos y costumbres del poder militar, el autor recordaba el periplo varias veces recorrido por los sistemas *de facto* instaurados para llenar "vacíos de poder", y que irremediablemente habían terminado mal. La más sintomática de las frases de su texto no hacía referencia a los comportamientos militares sino a los padecimientos de la intelectualidad civil, que incluía, naturalmente, a los periodistas y escritores de la "prensa seria": "Hemos vivido cívicamente en estado de infantilismo. Cuidarse al hablar, cuidarse al escribir, cuidarse en los diversos aspectos de la vida de relación han sido pautas de conducta nacidas del golpismo y de su clima social"<sup>38</sup>. Difícilmente se hubiesen podido encontrar mejores términos para expresar la autoconciencia de todo lo perdido, en virtud de los despotismos castrenses, aun en aquellos ámbitos en que se habían mostrado complacientes con varias de sus instauraciones. Por los días en que publicaba el citado artículo civilista, el diario registraba una novedad interna importante: Bartolomé Mitre, tataranieta del fundador, asumía la dirección.

*La Nación* continuó su reflexión sobre el "proceso" hasta su finalización, hostigándolo en determinados aspectos y aconsejándolo en otros. Empleó un estilo que parecía destinado a consolar a un irrecuperable, pero sin dejar de recordarle la existencia de límites y sus culpas pasadas. Los ataques gubernamentales a la libertad de prensa fueron tema de varios editoriales. Las restricciones impuestas a los medios oficiales de radio y televisión para difundir noticias acerca de los "desaparecidos", las actividades de las Madres de Plaza de Mayo o de la Logia P2 suscitaron sus críticas y su indicación a las autoridades de que no eran ésas las mejores orientaciones en un periodo de tránsito hacia la democracia<sup>39</sup>. En un tono aún más terminante, condenó la desaparición y muerte del diplomático Marcelo Dupont, asociadas directamente a la acción de sectores militares. Si no se aclaraba lo ocurrido, sostuvo, las fuerzas armadas perderían el reconocimiento conseguido en la lucha contra la subversión. Riguroso, afirmaba: "Basta de amenazas, basta de crímenes, basta de impunidad"<sup>40</sup>. Días más tarde, se descubría en el cementerio de Grand Bourg un alto número de cadáveres no

identificados, presumiblemente de víctimas de la represión de años anteriores. El diario pedía una solución para el problema de los "desaparecidos", y reprochaba a las autoridades el error cometido al no haber dado en su momento una lista definitiva de aquellos cuyas muertes estuvieran verificadas. Es interesante señalar que el editorialista no atinaba, tampoco, a sugerir una salida o al menos algunas opciones viables<sup>41</sup>. Cuando un par de semanas más tarde, la junta militar publicó en un texto su concepción sobre la futura "concertación" con la dirigencia política, el comentario editorial recibió ese documento con cierta satisfacción, si bien no dejó de señalar sus insuficiencias. Saludaba el avance realizado por los jefes castrenses al comenzar a hablar con "coraje para enfrentar la realidad inclemente y vocación para abandonar el estéril universalismo abstracto que caracterizó algunos tramos del Proceso de Reorganización Nacional"<sup>42</sup>. Parafraseando a Ortega y Gasset, el editorialista hubiera podido escribir: "Al fin militares, habéis llegado a las cosas mismas", pero era notorio que todavía faltaba definir varias cuestiones fundamentales. En el centro de las inquietudes se hallaba el problema de la delimitación de la injerencia de las fuerzas armadas en la futura gestión civil. En la perspectiva del documento hecho público por la junta, quienes lo sucediesen nada deberían investigar sobre lo ocurrido durante el periodo iniciado en marzo de 1976. Si se aceptaba esa idea, decía el matutino, quedaría profundamente debilitada la autoridad del gobierno surgido del próximo acto electoral. En especial los delitos económicos cometidos por los militares, en ese entonces eufemísticamente llamados "ilícitos", no podían dejar de ser juzgados por la Justicia. Sobre la represión ejercida mediante el terrorismo de Estado, la reflexión parecía ser más benévola, sin formular ninguna consideración terminante, aunque recordaba que esa práctica había sido una respuesta a la agresión terrorista. El editorial de fin de diciembre de 1982 fue un verdadero llamado a no dejarse ganar por el desaliento, el derrotismo y el escepticismo. *La Nación* ubicaba el comienzo de la época de infortunios y desaciertos casi cuatro décadas atrás, es decir, en el golpe de Estado de 1943. Las elecciones de 1983 debían ser, en su opinión, el paso decisivo para reencontrar al país con la Constitución Nacional. Con una visión preocupante, ante un futuro caracterizado como incierto, llamaba a extremar los esfuerzos para alcanzar el predominio permanente de la democracia pluralista<sup>43</sup>. Poco después saludaba el llamado a elecciones nacionales para el 30 de octubre de 1983, que cerraba definitivamente, decía, el proceso abierto el 24 de marzo de

1976. No era el momento para hacer balances, agregaba, pero sí de expresar la complacencia republicana ante el anuncio del calendario electoral<sup>44</sup>.

Como preparándose para la nueva época, varios jueces comenzaron procesos contra altos responsables de la política gubernamental. Muy significativo resultó el comentario del matutino acerca del rol del Poder Judicial en un sistema republicano, cuando se inició esa nueva práctica de los hombres de leyes: "La justicia debe investigar, y sancionar si cabe, hechos concretos. De todos modos, su tarea debe desenvolverse siempre dentro de carriles de absoluta independencia y sobre todo por encima de las pasiones del momento"<sup>45</sup>. Comentaba las iniciativas de algunos jueces que se interrogaban sobre si correspondía aplicar a los presidentes militares y a las juntas similares sanciones legales a las que querían imponer a los funcionarios del área económica por el endeudamiento externo del país. La duda planteada por los jueces era si los altos oficiales sólo habían refrendado las disposiciones presentadas por sus funcionarios civiles, ignorantes de todo sobre los complejos temas de la economía, y en consecuencia no eran responsables por lo ocurrido. El matutino prefirió no definirse al respecto. *La Nación* ya estaba muy lejos de los militares y esto se reflejó en su reflexión sobre el séptimo aniversario del golpe: "La incoherencia política e ideológica y la impotencia para la toma de decisiones concretas han sido una de las modalidades permanentes del gobierno en estos siete años. Ello se acentuó progresivamente (...) la mayor parte de los principios y objetivos expresamente declarados por el gobierno militar surgido el 24 de marzo de 1976 no fueron probablemente asumidos como tales por la totalidad de sus miembros"<sup>46</sup>. Sólo parecía faltar en ese texto una frase del general Mitre de repudio al militarismo.

Cinco semanas antes de las elecciones presidenciales, Bonifacio del Carril, posiblemente el más antiguo de los colaboradores del diario y que en muchas otras situaciones críticas había planteado sus posiciones desde esas columnas, escribió un artículo titulado sugestivamente: "Vote por el mal menor". Agudo en su razonamiento, se dirigía al electorado independiente de sensibilidad centrista o conservadora, y le explicaba que necesariamente debía optar entre Luder y Alfonsín. Consistente y bien estructurada, la reflexión evitaba tanto el antiperonismo manifiesto como el apoyo explícito al candidato radical, pero todas las líneas de pensamiento planteadas no dejaban duda sobre quién era el "mal menor": Raúl Alfonsín. Primero correspondía votarlo, creía Del Carril, y luego reservarse el derecho de luchar en el

futuro para corregir su acción de gobierno si se estaba en desacuerdo con ella<sup>47</sup>. La proximidad de las elecciones motivó no sólo actos agitados, escritos del más variado tenor y discursos maratónicos de los candidatos, sino también un filme que, a su vez, iba a ocupar la reflexión de otro colaborador permanente del matutino. Juan Carlos Casas se encargó en un largo artículo de analizar *La república perdida*, película destinada a aportar sustento a la candidatura de Alfonsín. Casas comenzaba su análisis con una observación propia de D. Home: el filme ya era un éxito de taquilla. Luego incursionaba en la intencionalidad de la obra y hacía notar que el objetivo de la misma era volcar a favor del postulante radical una parte de los votos peronistas. La observación, por cierto interesante, revelaba la complejidad de la opción electoral, ya que un filme radical buscaba sufragios peronistas para el mismo candidato por quien otros invitaban a votar a los electores de sensibilidad centrista o conservadora. Casas, en cambio, no se preocupaba por el voto sino por el mensaje transmitido a través del celuloide. Se falseaba, a su modo de ver, el desarrollo histórico del país mediante una estrategia expositiva que mimetizaba radicales y peronistas. Para contrarrestar esa versión, el autor reconstruía el panteón político de la Argentina anterior al año 30, reconocía méritos a todos los gobernantes, Yrigoyen incluido, y los situaba en un contexto de floreciente economía liberal, sociedad abierta, ascenso social posible y, en fin, democratización electoral asociada al nombre del presidente Sáenz Peña. Esos elementos, en su conjunto, habían conformado "La república que perdimos y que no se vio en el filme", tesis que daba título a su artículo. Esa república no había caído por ninguna conjura oligárquica, como sostenía la obra, sino por una concepción ideológica que Casas definía como favorable al Estado omnipotente y centralizado y, por ende, necesariamente portador de un intervencionismo económico que anulaba las hasta entonces benéficas autorregulaciones del mercado. La ideología antiliberal, en su opinión, había llegado desde Europa e inficionado a los sectores de pensamiento autoritario que participaron en el golpe de 1930. Allí estaba la base, según el articulista, de lo que vino después<sup>48</sup>. Puesto a historiador, Casas se hubiera sorprendido si hubiese revisado los editoriales a favor de la *economía dirigida* publicados por *La Nación* durante las décadas del 20 y del 30. Pero en esa coyuntura densa de octubre de 1983, sus inquietudes más bien debieron orientarse hacia el discurso del "mal menor", empeñado en defender los mismos principios que, de acuerdo con el referido análisis, habían perdido a la República.

*La Nación* editorializó un par de días antes de las elecciones sobre la posibilidad de que en el acto electoral no se elucidara quién sería el próximo presidente. No cabía sorprenderse si ello ocurría, decía, y al mismo tiempo se preocupaba por la agudización de la imagen de "vacío de poder" en que ya se hallaba el país. La indefinición podía durar, en su opinión, treinta o cuarenta días, hasta ser resuelta en los colegios electorales. El día de la elección el diario no se definió editorialmente a favor de ninguno de los candidatos en pugna. El acto electoral debía, a su juicio, ser el inicio de la marcha "Hacia la República verdadera", expresión formulada por Mitre un siglo antes para referirse a las condiciones del buen funcionamiento del sistema democrático. El énfasis era puesto en el rol reservado a la opinión pública en el proceso de reconstrucción de la vida institucional y de control del futuro gobierno<sup>49</sup>. Texto equilibrado, que contrastaba, por ejemplo, con el dramatismo de la reflexión de Manfred Schönfeld, publicada esa misma jornada en *La Prensa*. Para Schönfeld el dilema volvía a ser "una vez más civilización o barbarie", antinomia cuyo segundo término era ocupado por la posibilidad del retorno peronista al poder<sup>50</sup>. El estado psicológico de una parte de los lectores de ambos matutinos lo reveló posiblemente muy bien la revista *Anales de la Sociedad Rural Argentina*: "La del 29 de octubre fue la noche que los argentinos durmieron más angustiados antes del feliz insomnio de la noche siguiente. Aquella fue la noche del miedo, de un miedo enorme que tal vez no había sido sentido en toda la historia del país"<sup>51</sup>. Firmaba esa nota editorial de la publicación ruralista el director de la revista y vicepresidente segundo de la entidad, Guillermo Alchouron.

"La Argentina abrió anteayer un nuevo capítulo de su historia política. Después de casi cuarenta años, el peronismo fue derrotado limpiamente en las urnas."<sup>52</sup> Así comenzaba *La Nación* su análisis editorial del triunfo de Alfonsín. Dirigía su principal reconocimiento a la capacidad cívica de los electores, cuya madurez, en su opinión, había quedado demostrada. "El pueblo pensó", aseveraba al elogiar la disposición a cortar boletas y dar como síntesis la mayoría a la fórmula presidencial radical, aun cuando las preferencias de la ciudadanía se distribuyeran, también, a favor de los candidatos a legisladores o intendentes de otros partidos. Esto le servía al matutino para señalar a Alfonsín que llegaba al poder con apoyos extrapartidarios; sus votos no podían, en consecuencia, entenderse como un "cheque en blanco", decía textualmente. Más efusivo y pasional, Manfred Schönfeld, desde las páginas de *La Prensa* saludaba una "nueva aurora" y despedía "la noche de cuarenta años que quedó atrás".

Para Schönfeld, Alfonsín ya tenía un lugar de honor en la historia, incluso si su presidencia fuera mediocre o un fracaso; el mérito del nuevo presidente era haber destruido el mito del peronismo<sup>53</sup>. El editorial de *La Prensa* era más moderado: atribuía el éxito, en lo sustancial, a la opinión pública, cuya capacidad de discernimiento no se había manifestado en la elección entre dos programas casi igualmente estatistas en lo económico e indefinidos en muchos otros aspectos, sino en haber sabido percibir el peligro que entrañaba un triunfo de los candidatos justicialistas<sup>54</sup>. Jaime Potenze, de *La Nación*, escribía un artículo de evaluación de las elecciones y llamaba a la claridad conceptual. La victoria debía tomarse con modestia, afirmaba, pero eso no significaba disimularla. La fórmula de Urquiza al día siguiente de Caseros podía parecer cortés, pero no era, a su juicio, aplicable a las elecciones recién finalizadas: ahora, había vencedores y vencidos<sup>55</sup>. Bonifacio del Carril formulaba, también, su reflexión poscomicial. La reconciliación con las mayorías electorales cruzaba todo su análisis; el bipartidismo y la polarización de las preferencias de la ciudadanía eran vistas por el autor como un rasgo requerido por los sistemas representativos para funcionar adecuadamente. También Del Carril invocaba a Mitre y con fe en el futuro afirmaba que a la Argentina había que tomarla tal como Dios y los hombres la habían hecho, y ambos ayudándose mutuamente la irían mejorando<sup>56</sup>. El optimismo recorría todo el texto.

#### La Nación: 1981-1983

*Con Videla se había agotado casi totalmente la legitimidad del "proceso" frente a las categorías dominantes. Con Galtieri se cerró un ciclo, iniciado en 1955, en que dichos sectores sociales propiciaron, en unos casos, y aceptaron, en otros, la politización del actor militar, y apoyaron la instauración de regímenes autoritarios. Por ese medio buscaron preservar sus intereses económicos y sus posiciones sociales, afectados por los gobiernos civiles destituidos o posibles de serlo por sus eventuales sucesores en caso de realizarse elecciones libres. Para sus apoyos civiles, el juego tenía un supuesto básico: los límites de la autonomía del actor militar para tomar iniciativas exclusivamente orientadas a defender sus intereses corporativos o políticos. La salida del golpe de 1943 había dejado, en los sectores de pensamiento liberal-conservador, un fantasma nunca totalmente disipado, cuya eventual repetición debía desvelarlos. Pero, sin mayor capacidad para generar propuestas políticas con probabilidades de éxito electoral en las lides*

democráticas, esos sectores encontraron en la alternativa militar la vía reggia para acrecentar su influencia sobre las decisiones del Estado. La imposibilidad para satisfacer y compatibilizar demandas contradictorias y conflictivas entre diferentes sectores sociales se reflejaba, pasado un tiempo de la instalación de los militares en el control del poder, en situaciones de ingobernabilidad cuyo efecto inmediato era el descrédito de los marciales ocupantes del Estado. Resolver la ingobernabilidad mediante el fortalecimiento del aparato estatal, idea que en su momento cultivó Onganía, desembocó invariablemente en las protestas de quienes resultaban perjudicados por el experimento, sin recoger en cambio mayores apoyos de los inmediatos o futuros beneficiados. El "proceso" no fue la excepción, y recorrió las consabidas crisis emergentes de la situación de ingobernabilidad. En su afán por encontrar una solución, Viola profundizó el problema al colocar representantes de sectores con intereses opuestos en la conducción del gobierno. Galtieri no fue muy original. La opción de recuperar la legitimidad perdida ante la sociedad mediante un conflicto bélico externo siempre fue una salida para gobiernos en coyunturas críticas, de la que sobran ejemplos en los manuales de historia. En caída libre, los responsables del "proceso" debieron pensar que un triunfo en las Malvinas les daría el reconocimiento necesario para seguir en el poder. La operación, en caso de éxito, parecía granjear a los militares una legitimidad de masas difícilmente conciliable con una buena relación con las categorías dominantes. Significaba, además, un conflicto con los principales países occidentales y el anudamiento de nuevas, y hasta entonces impensables, alianzas internacionales. Nunca los militares en el poder habían alcanzado tal grado de autonomía en sus decisiones. La audacia de Galtieri superó con creces la de Perón. Éste había estudiado y enseñado estrategia militar, pero se redujo a aplicar sus conocimientos sobre las grandes batallas de la historia universal a la más doméstica tarea de la conducción política. Lectores apresurados de von Clausewitz, Galtieri y sus generales debieron interpretar equivocadamente que la política interna era la continuación de las guerras internacionales, y, poco atentos al sistema mundial de relaciones de fuerza, debieron suponer que el Atlántico Sur no estaba comprendido en los pactos del Atlántico Norte. Seguramente los principales sectores sociales y económicos hubieran llegado a disculpar a los militares por el asesinato de algunos de sus miembros o el secuestro crapuloso de acaudalados empresarios, pero desatar una guerra para conquistar una legitimidad de masas era demasiado y despertaba intranquilizadoras asociaciones de ideas. El fantasma de un populismo militar respaldado por los soviéticos,

por remoto que parezca, debió alentar en las categorías dominantes su reconciliación con la tradición civilista, varias veces extraviada, pero nunca totalmente abandonada en ese largo período iniciado a mediados de la década del cincuenta.

La Nación se había colocado muchas veces ante sus lectores para indicarles, con distintos grados de convicción según los casos, cómo pensar las situaciones difíciles. En ocasiones, había combinado sus puntos de vista con los que creía percibir en la "opinión pública". La estrategia discursiva del diario había consistido casi invariablemente en imaginar que interlocutores racionales ocupaban posiciones en el sistema político o en el aparato militar. A esos actores con influencia o poder de decisión les hacía llegar las inquietudes que decía detectar en la sociedad. Pero los últimos años del "proceso" se convirtieron en el reino del vacío. La improvisación y el aventurerismo se instalaron en los puestos de comando del Estado. Desazón, fátiga moral, descreimiento, fueron términos que sirvieron para caracterizar el estado anímico de la sociedad. En otras oportunidades, el matutino había visto disminuir sensiblemente su capacidad como mediador; sin embargo, había percibido mejor a los destinatarios de su mensaje y a los supuestos emisores de inquietudes sociales. Ahora, Estado y sociedad presentaban tales signos de disolución, que en la columna editorial prevaleció el síndrome del abismo. Un peronismo más amenazante por su desorganización que por sus propuestas se preparaba para ganar las elecciones. El garante militar ya no era portador de tranquilidad y en sus filas acampaba el desorden. La reflexión de muchos, no sólo de La Nación, se orientó entonces a la posibilidad, quizás remota, de un triunfo del "mal menor". Un testimonio de Jorge Luis Borges revela cómo el diario, bordeando lo mágico, depositó sus expectativas en Alfonsín. Decía Borges en septiembre de 1983: "Yo estuve en La Nación hace poco y me di cuenta que todos eran partidarios de Raúl Alfonsín; por ejemplo, no se admitía que alguien disintiera. A alguien que hizo una observación le dijeron que no había que decir eso, porque decir que Alfonsín no iba a ganar era obrar para que no ganara; como una especie de magia: si uno repite una cosa, eso va a ser profético... wishfull thinking"<sup>57</sup>. En los razonamientos del matutino se manifestaban todos los temores, captados de un modo tan agudo por quien había hecho de la ironía un estilo punzante de intervención política.

## NOTAS

- <sup>1</sup> *La Nación*, 4-4-1981, pág. 6.
- <sup>2</sup> *La Nación*, 14-4-1981, pág. 8; 26-4-1981, pág. 8.
- <sup>3</sup> *La Nación*, 6-5-1981, pág. 8.
- <sup>4</sup> *La Nación*, 31-5-1981, pág. 8.
- <sup>5</sup> Carlos A. Wilkinson: "La revolución devora a sus hijos", *La Nación*, 10-7-1981, pág. 7.
- <sup>6</sup> *La Nación*, 1-4-1981, pág. 6.
- <sup>7</sup> Manfred Schönfeld: "Papel Prensa: una alusión crítica formulada desde dentro de la empresa", *La Prensa*, 24-4-1981.
- <sup>8</sup> *La Prensa*, 27-4-1981, pág. 1.
- <sup>9</sup> *La Nación*, 18-6-1981, pág. 8. *La Prensa* reprodujo el editorial de *La Nación* como muestra de solidaridad el 19-6-1981; por esos días comenzó a publicar pequeños anuncios de lectores que testimoniaban adhesión al diario y rechazo a las medidas del "proceso".
- <sup>10</sup> *La Nación*, 24-6-1981, pág. 6.
- <sup>11</sup> *La Nación*, 18-10-1981, pág. 8.
- <sup>12</sup> *La Nación*, 25-10-1981, pág. 8.
- <sup>13</sup> *La Nación*, 10-12-1981, pág. 8.
- <sup>14</sup> *Ibid.*
- <sup>15</sup> *La Nación*, 26-12-1981, pág. 6.
- <sup>16</sup> *La Nación*, 28-12-1981, pág. 8.
- <sup>17</sup> *La Nación*, 29-12-1981, pág. 8.
- <sup>18</sup> Revista *Creer*, diciembre de 1981-enero de 1982. Reproducido en revista *Papiro*, julio-diciembre de 1982, pág. 40.
- <sup>19</sup> *La Nación*, 17-1-1982, pág. 8.
- <sup>20</sup> *La Nación*, 20-1-1982, pág. 8.
- <sup>21</sup> *La Nación*, 19-2-1982, pág. 6.
- <sup>22</sup> *La Nación*, 26-2-1982, pág. 6.
- <sup>23</sup> *La Nación*, 28-3-1982, pág. 8.
- <sup>24</sup> Félix Laiño: *De Yrigoyen a Alfonsín. Relato de un testigo del drama*, Plus Ultra, Buenos Aires, 1985, pág. 184.
- <sup>25</sup> *La Nación*, 2-4-1982, pág. 8.
- <sup>26</sup> *La Nación*, 11-4-1982, pág. 6.
- <sup>27</sup> *La Nación*, 17-4-1982, pág. 6.
- <sup>28</sup> "Sabato: imperio contra pueblo", revista *Búsqueda*, año 1, N° 12, mayo de 1982, pág. 40.
- <sup>29</sup> *La Nación*, 21-4-1981, pág. 6.
- <sup>30</sup> *La Nación*, 4-5-1982, pág. 8.
- <sup>31</sup> Rogelio García Lupo: *Diplomacia secreta y rendición incondicional*, Buenos Aires, Legasa, 1983, pág. 53.
- <sup>32</sup> *Clarín*, 4-6-1982, pág. 15.
- <sup>33</sup> *La Nación*, 8-6-1982, pág. 6; 15-6-1982, pág. 8.
- <sup>34</sup> *La Nación*, 23-6-1982, pág. 4.
- <sup>35</sup> *La Nación*, 3-7-1982, pág. 6.
- <sup>36</sup> "Discursos en una reunión política partidaria", *La Nación*, 21-7-1982, pág. 16.

- 37 Roberto Roth: *Después de las Malvinas ¿qué...?*, Ediciones La Campana, Buenos Aires, 1982, pág. 35.
- 38 Martín Alberto Noel: "¿Hasta cuándo Catilina?", *La Nación*, 5-9-1982, pág. 9. En la misma época, el autor publicaba el libro *El tema de la revolución en la literatura hispanoamericana*, Corregidor, Buenos Aires, 1982.
- 39 *La Nación*, 3-10-1982, pág. 8.
- 40 *La Nación*, 10-10-1982, pág. 8; 14-10-1982, pág. 8.
- 41 *La Nación*, 29-10-1982, pág. 8.
- 42 *La Nación*, 3-11-1982, pág. 8; 14-11-1982, pág. 8.
- 43 *La Nación*, 31-12-1982, pág. 6.
- 44 *La Nación*, 3-3-1983, pág. 6.
- 45 *La Nación*, 9-3-1983, pág. 6.
- 46 *La Nación*, 24-3-1983, pág. 8.
- 47 Bonifacio del Carril: "Vote por el mal menor", *La Nación*, 25-9-1983, pág. 9. Con el mismo título, el autor publicó una recopilación de cuatro artículos aparecidos en el diario entre el 23-7 y el 25-9-1983, Emecé, Buenos Aires, 1983.
- 48 Juan Carlos Casas: "La república que perdimos y que no se vio en el filme", *La Nación*, 22-10-1983, pág. 9.
- 49 *La Nación*, 30-10-1983, pág. 8.
- 50 *La Prensa*, 30-10-1983, 2ª sección, pág. 3.
- 51 *Anales de la Sociedad Rural Argentina*, Año CXVIII, N° 11, noviembre de 1983, pág. 5.
- 52 *La Nación*, 1-11-1983, pág. 6.
- 53 *La Prensa*, 1-11-1983, pág. 10.
- 54 *La Prensa*, 2-11-1983, 2ª sección, pág. 1.
- 55 Jaime Potenze: "La inevitable obligación de aceptar la derrota", *La Nación*, 5-11-1983, pág. 7.
- 56 Bonifacio del Carril: "Los partidos y la verdad electoral", *La Nación*, 6-12-1983, pág. 9.
- 57 "Borges: La bomba y otros delitos", reportaje realizado por Gabriel Levinas en revista *El Porteño*, año II, N° 21, setiembre de 1983, págs. 10-11.

QUINTA PARTE

EN BUSCA DE LA REPÚBLICA PERDIDA  
1983 - 1989



## XVI

### La reconstrucción de la democracia

El comienzo de la gestión de Alfonsín fue visto por *La Nación* como el inicio de una etapa histórica portadora de un auspicioso futuro. Si bien el diario había expresado invariablemente su aliento a todos los presidentes constitucionales al principio de su mandato, el que asumía el 10 de diciembre de 1983 reunía ciertas características distintas. Había triunfado sobre el hasta entonces imbatible peronismo y se instalaba en el gobierno en un contexto de total descrédito de las fuerzas armadas. El apoyo del matutino a la reconstrucción de las instituciones democráticas se expresaba tan decidido como su rechazo a cualquier forma de retorno a autoritarismos castrenses. "El viejo sueño iluminista del despotismo ilustrado se transformó una y otra vez en la historia, nada más que en tiranías que hicieron el drama de las naciones que las soportaron"<sup>1</sup>, afirmaba, entre otras consideraciones, en el editorial dedicado a comentar la significación del nuevo periodo y los discursos pronunciados por Alfonsín el día de su investidura. El énfasis puesto por el novel magistrado en el respeto a la Constitución Nacional era evaluado como un signo de su decisión democrática. El Preámbulo constitucional invocado por Alfonsín para cerrar su alocución desde los balcones del Cabildo, llevaba al editorialista a recordar al presidente la larga tradición que acordaba sentido a la Carta Magna; era, decía, un programa de acción, fijaba rumbos y tareas a realizar, y "no tendría sentido recitar ese texto si se dejara de entenderlo de esta forma (...) Somos herederos del ayer y debemos aceptarlo con todas sus virtudes y sus errores para cumplir una misión que excede la obra de un hombre o de una generación"<sup>2</sup>. No había, pues, nada que inventar en materia de acción política. También ese día publicó un extenso artículo de Álvaro Alsogaray sobre los problemas económicos nacionales y las vías ineludibles para resolverlos. Los pocos sufragios obtenidos en las recientes elecciones presidenciales no desanimaban a Alsogaray para ofrecer

las ventajas de su programa al flamante gobierno. En su opinión, el resultado del acto electoral del 30 de octubre había revelado la gran madurez alcanzada por la ciudadanía y abierto una nueva esperanza. Para evitar frustrarla, aconsejaba a Alfonsín cambiar la política exterior y resolver la cuestión de las Malvinas, sin persistir en orientaciones, decía, que llevaban al país a la órbita socialista. Según Alsogaray, se debía terminar con las secuelas de la represión antisubversiva y no poner en un mismo plano a los guerrilleros y a quienes para combatirlos incurrieron en lo que textualmente denominaba excesos. Pero fiel a su concepción economicista, el articulista dedicaba tres cuartas partes de su nota a volver a sistematizar sus soluciones estructurales. Crudamente materialista, afirmaba: "El orden económico, inseparablemente ligado al orden social, está regido por leyes naturales que el hombre puede llegar a comprender y a utilizar en su provecho, pero no puede violar sin sufrir las consecuencias"<sup>3</sup>. Pagar la deuda externa, terminar con el déficit fiscal, sanear el sistema previsional, poner fin a las tarifas y precios políticos de las empresas públicas, reformar el sistema financiero, eran necesidades perentorias a las cuales se debía dar respuesta con estrategias liberales ortodoxas. Consciente de la cercanía del fracaso de Martínez de Hoz durante los cinco primeros años del autoritarismo, Alsogaray aseguraba que el ex ministro había malversado las ideas liberales y mantenido las reglamentaciones propias de la ineficiencia socialista (sic). Pero ahora, aseveraba, "las elecciones del 30 de octubre de 1983, y su notable resultado, abren una nueva y excepcional oportunidad. Se han creado las condiciones políticas para llevar a cabo las grandes reformas necesarias"<sup>4</sup>. Así, desde el momento mismo de la instalación de las nuevas autoridades, tanto la columna editorial como el colaborador invitado se esmeraban por indicarles el buen rumbo.

En términos comparados, la posición de *La Nación* con respecto a los "excesos" de los militares del "proceso" fue menos comprensiva que la de Alsogaray. Al comentar la decisión del gobierno de derogar la ley de autoamnistía y someter a juicio a los responsables de la represión, el diario se esforzó por mostrar coincidencias entre su punto de vista y las medidas adoptadas. A su modo de ver, no podía dejar de justificarse la necesidad de la represión a la guerrilla, pero esa iniciativa "desató luego otro tipo de inseguridad y los éxitos logrados en la lucha determinaron un precio muy alto y dejaron nuevas secuelas de dolor, de injusticia y de odios entre los argentinos. La ruptura de las normas constitucionales derivó al fin en un esquema simplemente autoritario y de poder ilimitado que provocó justificadas reacciones"<sup>5</sup>. Coro-

lario: era correcto enjuiciar a los principales responsables de la guerrilla y a los integrantes de las tres juntas militares; no podía quedar en la impunidad nada que exigiera sanción. Luego del veredicto de la Justicia, sostenía, los espíritus debían serenarse; aun cuando no se abandonaran "en la intimidad de la conciencia el dolor o el recuerdo por los padecimientos sufridos, deberemos comenzar una etapa nueva que no se agote por mirar atrás"<sup>6</sup>. El mismo editorial señalaba como un avance en la legislación positiva la iniciativa del gobierno de establecer el delito de atentado contra el orden constitucional y de legislar sobre el derecho a la rebelión contra la ley injusta o contra la tiranía. Además, aplaudía sin reservas, como entendía que lo hacía todo el país, el proyecto de ley que establecía severísimas penas para los torturadores y para quienes por omisión o complicidad admitieron la tortura. El derecho a la rebelión era parte, recordaba, de las ideas del liberalismo y de la civilización cristiana; el uso de tormentos estaba muy extendido en el mundo y en la Argentina y debía desaparecer para siempre, asegurando el respeto absoluto por la dignidad de la persona.

Desbordante de espíritu civilista, un suplemento del diario, publicado a comienzos de enero de 1984 con motivo de una exposición de trabajos de sus reporteros gráficos y del caricaturista Leonardo Villarreal, se abría con un homenaje a su fotógrafo de los años 20, Juan Di Sandro, y reproducía dos fotografías de la época de indudable valor simbólico para esos días radicales. En una, de 1928, Hipólito Yrigoyen y Elpidio González, ambos con cierto descuido en el vestir, se hallaban rodeados de simpatizantes. En la otra, Marcelo T. de Alvear, con aire distinguido y bastón en mano, se paseaba con el príncipe Umberto de Saboya en 1924. La cámara de Di Sandro había captado el estilo de dos radicalismos y, probablemente, no habrán faltado lectores que, al observar esas fotografías en 1984, se hayan preguntado de cuál pasado se reclamaria continuador Raúl Alfonsín. Si de contrastes se trataba, tampoco ese hipotético lector habrá dejado de trasuntar cierto alivio si comparaba las tranquilizadoras fotografías del nuevo presidente con otra de un palco con la plana mayor de la campaña electoral peronista, cuyo sugestivo nombre era "Rostros". Los mensajes gráficos del suplemento comunicaban el mismo espíritu optimista de los editoriales inmediatamente posteriores a las elecciones. Todo parecía indicar en esas jornadas liminares el comienzo de una armoniosa relación entre *La Nación* y el gobierno radical.

La posición editorial del diario con respecto a las orientaciones del primer año del gobierno de Alfonsín no fue uniforme; lo

apoyó en algunos dominios y lo criticó en otros. A diferencia de lo ocurrido con administraciones civiles anteriores, los radicales llegaban al control del Estado en un contexto de total descrédito militar. *La Nación*, como hemos visto, no escatimaba acres reflexiones sobre el reciente periodo autoritario. De allí que la política militar del nuevo gobierno, aun en sus aspectos más irritativos para los hombres de las fuerzas armadas, recibiera la adhesión del matutino. Ese apoyo podía, en algunos casos, estar acompañado por la sugerencia de pautar la política militar y evitar la crispación de los conflictos, pero en coincidencia con la línea planteada desde el poder. Que fuera la Justicia la encargada de investigar lo ocurrido bajo la dictadura era una modalidad de acción totalmente acorde con las ideas defendidas desde sus páginas. La autonomía del Poder Judicial y el respeto de la Constitución Nacional habían llevado a Alfonsín a tomar una vía en principio inobjetable desde la óptica de *La Nación*. Algo similar ocurrió con todas las iniciativas oficiales encaminadas a asegurar el respeto de las libertades públicas y la supresión de las diversas formas de censura. Así, el andamiaje institucional democrático y republicano, del cual el lenguaje radical enunciaba bien las claves, se comenzaría a reconstruir, para satisfacción de una parte muy amplia de la sociedad, de la cual se hallaban naturalmente excluidos los defensores de la dictadura.

El diario se distanciaba del gobierno en lo referente a la política económica. En esa estratégica esfera del quehacer estatal constataba la voluntad de las autoridades de mantener opciones intervencionistas y, en especial durante el periodo en que Bernardo Grinspun tuvo la titularidad del Ministerio de Economía, la columna editorial multiplicó sus críticas. También fue tema de objeciones la indefinición que percibía frente a los problemas sindicales y los reclamos salariales. En fin, durante el primer año de la gestión radical un elemento un tanto aleatorio mostró, también, inquietar las reflexiones editoriales: un estilo presidencial propenso al desborde discursivo y, por momentos, a la convocatoria neopopulista.

“Debe lamentarse que durante cuatro meses se haya insistido en métodos policiales, controles fantasiosos y pautas arbitrarias que no han hecho más que inhibir la iniciativa creadora”<sup>7</sup>. Esta evaluación del primer cuatrimestre de Alfonsín en materia económica correspondía a un editorial cuyo título era “Las inevitables medidas de ajuste”, publicado a propósito del acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Aun cuando estimaba que el entendimiento con el FMI carecía de precisiones cuantitativas, al menos lo consideraba un paso adelante en lo

concerniente a la elaboración de los lineamientos de una política general. Durante esos primeros cuatro meses prácticamente todas las iniciativas económicas del gobierno fueron criticadas por el matutino. Los proyectos de modificación del régimen tributario recibieron objeciones desde las más diversas ópticas. En última instancia, decía, se castigaba la acumulación de capital, sin advertir que la posibilidad de reactivar el conjunto de la economía sólo podía tener una base valedera si no se perjudicaba a las inversiones, factor fundamental del desarrollo. Los gravámenes a la hacienda vacuna, muy onerosos a su juicio, obligarían a los propietarios a liquidar rodeos. Sobre el tema impositivo se hacía notar que las medidas impulsadas no estaban entre los principios incluidos en la plataforma del partido radical<sup>8</sup>. Los cambios propuestos por el gobierno en la legislación sobre impuestos a la herencia fueron considerados como lindantes con la transgresión del espíritu de la Constitución que resguardaba la propiedad privada. Por esa vía, decía, el Estado podía absorber en el curso de una o dos generaciones el esfuerzo del trabajo de los habitantes del país. Esto contradecía, en su opinión, los cimientos sobre los cuales se basaban las sociedades libres, aun cuando se respetaran las libertades y derechos esenciales de la democracia<sup>9</sup>. La voracidad de un Estado incapaz de reducir sus gastos y funciones volvía a colocarse en el centro de las explicaciones dadas por el diario cuando abordaba los problemas globales de la economía o los impactos fiscales de las medidas tomadas por el gobierno. En un alarde de imaginación, Alberto J. B. Caprile, en ese momento síndico titular del directorio de la empresa editora de *La Nación*, escribió un artículo titulado "Deuda externa e inflación, un solo corazón"<sup>10</sup>. El autor explicaba cómo el Estado sobredimensionado vivía a expensas del aumento de los impuestos, el endeudamiento externo y la emisión de moneda, lo que provocaba inflación crónica; su solución consistía en aplicar un plan de neto corte liberal. El mismo espíritu llevaba días más tarde al matutino a aconsejar un acuerdo, mediante la ayuda del Fondo Monetario Internacional, susceptible de producir los ajustes necesarios para la buena marcha de la economía<sup>11</sup>. Pero como los tiempos no daban para el optimismo, dos días después eran las inquietudes del agro las que aseveraba expresar en una columna editorial dedicada a criticar la expropiación por parte del gobierno de la Provincia de Buenos Aires del establecimiento El Albardón. ¿Cómo no percatarse de que alarmar a los propietarios rurales con la amenaza de posibles reformas agrarias terminaría por deprimir la producción? Por esa vía se instalaría la inseguridad y se debilitaría aún más la economía argentina, afirmaba, y

recordaba que las "viejas banderas de la reforma agraria" habían sido, incluso, sustituidas en los países de orientación marxista<sup>12</sup>. Los riesgos y consecuencias del intervencionismo estatal aparecían definidos en el citado editorial de una manera que conducía a sacar las conclusiones más extremas sobre el eventual desenvolvimiento de la política económica en curso. En contraste con las opiniones de los articulistas más liberales, una colaboración firmada por Raúl Prebisch, asesor económico del presidente Alfonsín, encaraba dos semanas después los mismos problemas con un enfoque mucho más mesurado. En él, Prebisch se colocaba en una perspectiva afín con la del gobierno y trataba de pensar la solución del "caso" argentino con un esquema mucho más flexible que el propuesto desde la crítica liberal. Según su razonamiento, la reconstrucción de la estructura productiva debía pasar por una articulación entre la acción del Estado y de las fuerzas del mercado. En estos últimos, afirmaba, se podía confiar cuando reflejaban una estructura social donde el poder, la riqueza y el ingreso estaban distribuidos de manera democrática y equitativa. Situación que, decía Prebisch, no era la de la Argentina<sup>13</sup>.

Al comienzo de la gestión de Alfonsín el diario dio su apoyo a la decisión del gobierno de retirar el control de las empresas militares del área de las fuerzas armadas y pasarlas al del Ministerio de Defensa: ése debía ser el primer paso para luego privatizarlas, sostenía en un editorial dedicado al tema<sup>14</sup>. Como hemos visto, *La Nación* había coincidido con la necesidad de juzgar a los miembros de las juntas militares. En el mismo sentido apoyó la decisión de reformar el Código de Justicia Militar para posibilitar el paso a la Justicia civil de las causas sustanciadas en los tribunales castrenses contra los militares acusados de cometer violaciones de los derechos humanos. Sólo lamentaba que se fijara el 24 de marzo de 1976 como momento a partir del cual se juzgarían los delitos cuando en realidad, según su opinión, éstos habían comenzado en 1975<sup>15</sup>. La solidez de la respuesta del gobierno frente a las primeras muestras de descontento castrense merecieron comentarios editoriales laudatorios. Correspondía reconstruir, afirmaba, el principio de autoridad. Creía que las autoridades nacionales habían actuado inteligentemente al dar a las propias fuerzas armadas la posibilidad de realizar juicios que pudieran salvaguardar sus instituciones, pero era imprescindible que el Consejo Supremo acelerara sus actuaciones e hiciera conocer pronto la resolución de las causas sometidas a su estudio<sup>16</sup>. Por otra parte, el matutino volvía a insistir en la conveniencia de privatizar las empresas creadas bajo la esfera de influencia

militar, lo que, a su juicio, no afectaría la seguridad nacional. Con un singular razonamiento basado en la analogía económica, en el mismo editorial sostenía que en la lucha contra la guerrilla los militares habían demostrado que algo no funcionaba bien en sus instituciones, habían sido eficaces pero no eficientes: "Sólo pudieron desempeñar su papel y cumplir su objetivo al muy alto costo de echar por la borda principios elementales" <sup>17</sup>.

Son mínimas, casi inexistentes, las erratas que pueden encontrarse en los editoriales de *La Nación*. Seguramente deben pasar bajo la atenta mirada de varios lectores de pruebas. Quizás el tema, la desmesura del horror, haya sido la causa de que el dedicado a la presentación del informe elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, contuviera en su título —"El informe de la Conadep"— una equívocación de imprenta: EL estaba escrito con ambas letras en mayúscula, transgresión sin duda involuntaria de la norma de presentación en los encabezamientos editoriales. Esa especie de *lapsus calami* podría interpretarse como una invocación a Dios antes de descender a una reflexión sobre el infierno. El texto evocaba aspectos del documento elaborado por la Comisión presidida por Ernesto Sabato y, aun cuando trataba de mantener un equilibrio, el espanto terminaba por imponer su primacía: "El informe de la Conadep nos fuerza a aceptar que en la Argentina pudieron vivirse episodios propios de los más siniestros regímenes y alerta sobre la inutilidad y los riesgos de pretender seguir ocultando esa realidad" <sup>18</sup>. Repetía palabras pronunciadas por Sabato en ocasión de la entrega del informe al presidente de la República para pedir que el Poder Judicial sancionara a los culpables. El mecanismo discursivo que en su momento había servido a los militares para justificar la intensidad de la violencia empleada, apoyado en que se trataba de luchar contra un enemigo definido como la prolongación de un agresor foráneo, era desmontado por el diario con términos por demás contundentes: "Ni siquiera la extranjería, que no vale como excusa moral en ninguna ocasión pero permite explicar a veces reacciones instintivas de las sociedades menos evolucionadas culturalmente, puede servir de atenuante, y el carácter fratricida de este repertorio de violencia sólo exacerba la conmoción moral de quien lo recorre" <sup>19</sup>. El editorial se cerraba con otra apelación a la acción de la Justicia y reproducía un fragmento de la alocución de Alfonsín al agradecer la labor de la Conadep.

Cinco días después, otro informe, el del Consejo Supremo de las fuerzas armadas, ocupaba la reflexión del matutino. El alto tribunal militar había excedido el tiempo acordado por la ley para

emitir su sentencia en la causa contra los nueve comandantes de las tres juntas y se había dirigido a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal para explicar los motivos de ese incumplimiento. Preocupado por la resonancia política del evento, *La Nación* sintetizaba el estado de la situación. El Consejo Supremo justificaba su demora en el exceso de causas en ese momento sometidas a su atención. Además, aducía dificultades emergentes de la naturaleza de procesos iniciados a partir de denuncias cuya claridad, en muchos casos, se le escapaba ya que, por ejemplo, se omitía mencionar las causas de las detenciones, se decía ignorarlas o se las vinculaba con posiciones políticas o ideológicas. Por otra parte, el Consejo aseguraba que por lo estudiado hasta ese momento, los decretos, directivas y órdenes de operaciones que concretaron el accionar militar contra la subversión podían considerarse inobjetables en contenido y forma. En consecuencia, sólo podía responsabilizarse indirectamente a los miembros de las juntas por falta de contralor suficiente y oportuno para evitar los ilícitos eventualmente cometidos por las fuerzas a sus órdenes. El editorial que abordaba la cuestión reproducía los argumentos del tribunal castrense sin emitir ninguna opinión propia sobre su validez. Introducía una breve reflexión sobre la necesidad de juzgar a quienes habían cometido "ilícitos" —neologismo usado por el Consejo—, que difícilmente podría compatibilizarse con el medular contenido del comentario sobre la entrega del informe de la Conadep, y se refería con un grado mayor de precisión que en esa ocasión a la guerrilla, elemento indispensable, decía, para comprender la "etiología del mal", y para hacer justicia con equidad<sup>20</sup>. Cuando dos semanas después la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal resolvió continuar el proceso no realizado por el alto tribunal militar, el matutino formuló una breve reflexión editorial. Básicamente, llamaba la atención sobre la pesada tarea que ahora abordarían los jueces civiles, importante no sólo por la magnitud de las piezas procesales, sino además por el contexto de apasionadas expectativas suscitadas en algunos sectores de la sociedad del cual no podrían sustraerse. Recomendaba a los nuevos jueces una acción consciente de su magnitud y trascendencia histórica, por su importancia para la consolidación de las instituciones, decía, tan vapuleadas durante el último medio siglo<sup>21</sup>. En lo medido de las consideraciones se podía intuir perfectamente la inquietud por la etapa iniciada.

El diario fue solidario con distintas medidas tomadas por el gobierno para asegurar mayor secularización de la educación y la cultura. A propósito de la derogación por el Congreso de la ley

que instituía la censura en el cine, Jaime Potenze publicó, a fines de febrero de 1984, un artículo con sus plácemes; la reflexión contenía una crítica al clericalismo y a la intromisión de la Iglesia Católica en cuestiones culturales. El autor recordaba que la Iglesia había mantenido buenas relaciones con el peronismo durante su primera etapa; que en ceremonia aplaudida por la jerarquía eclesial había aceptado que el general Onganía consagrara el país a la Virgen de Luján y que durante el "proceso" había desoído el pedido de una parte de la ciudadanía para que intercediera en defensa de los derechos humanos. Desde esa óptica, Potenze comentaba con satisfacción que el gobierno de Alfonsín no se hubiese preocupado de pedir el *placet* a la Curia para designar a los altos funcionarios encargados de educación y cultura<sup>22</sup>. Con el retorno a la democracia volverían, también, algunos problemas ya conocidos sobre las interpretaciones de la historia. En la provincia de La Rioja, comentaba con cierta alarma un editorial de comienzos de abril de 1984, se había intentado sacar el nombre de Mitre a una calle. A quienes habían tomado esa iniciativa los caracterizaba de "grupos minoritarios empeñados en desvirtuar la historia. Con visión reaccionaria..."<sup>23</sup>. El gobernador de la mencionada provincia era Carlos Menem, quien, por haber propiciado iniciativas parecidas durante el período 1973-76, había sido duramente criticado desde esa misma columna.

Con preocupación por lo que caracterizaba como resabios de autoritarismo, el diario objetó el uso abusivo que a su juicio hacían el partido gobernante y los altos funcionarios del Estado de la noción de desestabilizadores. Llamaba la atención sobre los peligros asociados a la eventual confusión entre la acción contra las instituciones y las críticas a las medidas oficiales. Lo propio de la democracia, argumentaba, era el disenso y la libertad de pensamiento. Como ejemplo de esas actitudes señalaba: "En un discurso sobre la coyuntura económica el presidente de la Nación aludió a 'quienes nos vienen a hablar del sinceramiento de la economía' a través de una política de mercado, como irresponsables por 'pretender ponerle una bomba de tiempo a la democracia' "<sup>24</sup>. El estilo oratorio de Alfonsín volvió a suscitar reparos del matutino, cuando el primer magistrado aludió a los riesgos de entrar en un proceso de libanización. En esa oportunidad, editorialmente desaconsejó al presidente el uso de un recurso político ya practicado por otros gobernantes, consistente en presentar al pueblo imágenes de un futuro aterrador, originado en oscuras e indeterminadas fuerzas externas, decía textualmente, como estrategia para forzarlo a aceptar o tolerar las decisiones oficiales. Además, y colocado por encima de la situación, *La Nación* sugería

a Alfonsín evitar hablar en tantas ocasiones, con motivos tan diversos y ante públicos tan heterogéneos <sup>25</sup>. El mencionado tipo de observaciones fue, desde entonces, un tema recurrente en los análisis del matutino.

Más sustantivas fueron las críticas del diario al gobierno cuando creyó percibir que las autoridades tenían la voluntad de pactar con los peronistas. Calificó la llamada Ley de Reparación Histórica, referida a la figura de "Isabel" Perón, como contraria al espíritu de la Constitución Nacional. Si reparación cabía, aseveraba, ésta sería de incumbencia exclusiva de las generaciones futuras. El deseo del gobierno de mantener un diálogo con la oposición le parecía oportuno y un requisito de la democracia, pero le sugería buscar un interlocutor de real representatividad y autoridad, cosa, afirmaba, muy dudosa en la señora Martínez de Perón<sup>26</sup>. La apertura de eventuales negociaciones del gobierno con los sindicalistas recibió también acres comentarios. El matutino reprochó a los radicales su decisión de renunciar a una auténtica democratización sindical, prometida durante la campaña electoral y abandonada luego del fracaso de su proyecto de ley en el Senado. En su opinión, el gobierno podía tener problemas y necesitar apoyos, pero no debía olvidar que existía el límite de lo razonable, lo lícito y lo ético para negociar <sup>27</sup>. En un contexto en el que entendía percibir el avance de la intolerancia hacia las "minorías políticas" en nombre de las "grandes mayorías nacionales", el análisis editorial recordó que lo fundamental de la democracia era, justamente, el respeto a las minorías. Éstas no estaban destinadas a decidir, afirmaba, pero debían ser escuchadas y ninguna opinión podía ser descartada según un criterio meramente cuantitativo. En una situación inquietante para el matutino debido a los pasos dados por el gobierno al buscar acuerdos con la oposición, y por los reclamos y movilizaciones sindicales, las reflexiones sobre la naturaleza de la democracia no eran un problema teórico, sino de política inmediata<sup>28</sup>. ¿Había olvidado Alfonsín que una parte de la ciudadanía lo había apoyado considerándolo el "mal menor"? La pregunta flotó en el texto de un editorial expresamente dedicado a invitar al primer magistrado a meditar sobre la compleja cuestión de las alianzas: "Es probable que el Presidente se equivoque al buscar aliados en sectores que, muchos de ellos, están acostumbrados, desde hace varias décadas, a imponer su voluntad y sus banderas de manera absoluta. Ha dejado de hacerlo, en cambio, en sectores de la ciudadanía que el 30 de octubre último dieron su voto si no a la Unión Cívica Radical al candidato presidencial de ese partido"<sup>29</sup>. De este modo, en un verdadero *mix* entre el género literario de la

carta de amor despechado, pero digno, y el de la disertación política sobre los costos y beneficios de las posibles alianzas de Alfonsín con quienes hasta ayer eran sus rivales, el citado texto trasuntaba un parcial, pero no por ello menos notorio, escepticismo sobre la manera en que se encaminaban los asuntos públicos.

Desde una perspectiva muy distinta a la de *La Nación*, Manfred Schönfeld analizó la situación política y las alianzas en un artículo publicado a mediados de agosto de 1984 en *La Prensa*. Con referencia a una denuncia hecha por el diario *El Día*, de La Plata, el mencionado articulista sostenía que la empresa Papel Prensa S. A. restringía la entrega del estratégico producto celulósico al periódico bonaerense en razón de sus críticas al gobierno. Schönfeld caracterizaba a la firma fabricante de papel como una forma más sofisticada que el mecanismo manejado por Raúl Apold en la época del primer peronismo para restringir la libertad de prensa. De su reflexión resultaba que *La Nación*, *Clarín* y *La Razón*, junto con el Estado, so pretexto de no dar abasto con la producción de papel, imponían condicionamientos a aquellos medios disconformes con la acción gubernamental. Para ofrecer una prueba irrefutable de la conexión entre el diario de los Mitre y el gobierno de Alfonsín, Schönfeld señalaba que Julio César Saguier, miembro prominente del directorio de Papel Prensa S. A. y vinculado a *La Nación*, había sido designado intendente de la ciudad de Buenos Aires por los radicales. Para cerrar su artículo, el autor lamentaba que el periodismo independiente organizado en la ADEPA hubiese aceptado la readmisión en la entidad de los tres diarios asociados al Estado, lo cual podía debilitar, aducía, la lucha por la libertad de expresión<sup>30</sup>.

La sustitución de Bernardo Grinspun por Juan Vital Sourrouille al frente del Ministerio de Economía fue bien recibida por *La Nación*. El diario creyó encontrar en el primer mensaje del nuevo alto funcionario los indicios de un saludable cambio en las concepciones del gobierno. Combatir la inflación, reducir el gasto público, fomentar las exportaciones fueron, entre otros, los temas pregonados tradicionalmente desde sus columnas y coincidentes con las prioridades de los nuevos responsables del área económica. Hacía falta, señalaba el diario, en posición de observador objetivo, que esas ideas se convirtieran en medidas concretas y se demostrara una verdadera vocación rectificadora<sup>31</sup>. Pocos días más tarde las principales corporaciones de representación de los intereses rurales se movilizaban reclamando cambios en la política seguida hacia el sector. La policía impidió el acceso a la Plaza de Mayo de la manifestación agrarista, y el editorialista del

diario vio en esto un signo de discriminación; se había procedido, dijo, de manera distinta con otras expresiones masivas de protesta. Subrayaba, también, su desagrado por los términos descalificatorios utilizados por el presidente, quien había hecho referencia a la simpatía por la dictadura de una parte de los empresarios movilizados<sup>32</sup>. La defensa de los intereses agrarios volvía a ocupar poco después el comentario editorial, esta vez para criticar las retenciones a las exportaciones, vistas como un mecanismo de desaliento de la producción y de la inversión. Como lo había sostenido en otras oportunidades, el matutino se dirigió a las autoridades para señalarles que, de persistir con las políticas objetadas, seguiría retrocediendo la producción rural y se desmoronaría el esfuerzo realizado años antes<sup>33</sup>. La persistencia del problema inflacionario y los riesgos de desembocar en una hiperinflación fueron el núcleo básico en torno al cual el matutino armó sus consideraciones favorables a la decisión presidencial de tomar medidas drásticas, una economía de guerra según los términos de Alfonsín, para reencauzar la estructura productiva y devolver el valor a la moneda. La decisión presidencial era saludada en tanto significara, "abandonar recetas fáciles y equívocas, tan usadas el año pasado y hasta ahora, y gobernar, en consecuencia, con la energía y la disciplina que el momento exige"<sup>34</sup>. Los nuevos rumbos anunciados en el mensaje del primer magistrado podían impedir, continuaba el comentario, que la economía argentina se despeñara hacia la hiperinflación.

El gobierno radical había sido criticado con mucha frecuencia desde su instalación por los más diversos medios periodísticos. Probablemente como expresión de un estado de ánimo generalizado en la dirigencia oficialista, el diputado radical Guillermo Tello Rosas afirmó en el transcurso de una reunión de su partido que era preciso "implementar una política en materia de comunicación social para que los Neustadt y Grondona se vayan a cuarteles de invierno, así como los diarios *Ámbito Financiero* y *La Nación*, que juegan para grupos minoritarios"<sup>35</sup>. El carácter francamente contrario a la libertad de expresión de las palabras del mencionado legislador tuvo rápida repercusión pública. El lenguaje del fascismo campeaba entre los radicales que se ensañaban con el diario fundado por Mitre, aseveraría el dirigente demócrata progresista Alberto Natale. La Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires se encargó de expresar, también, su repudio a las amenazas contra los órganos de prensa críticos de las orientaciones del gobierno. A *La Nación* le pareció conveniente iniciar su reflexión editorial con una cita de quien había sido implacable en la persecución de las ideas de sus oponentes.

sitores: Lenin. "¿Por qué debe ser permitida la libertad de expresión y la de prensa? ¿Por qué un gobierno que está actuando en forma correcta debe consentir que lo critiquen? Estamos de acuerdo en que no debe permitirse el uso de las armas letales. Y las ideas son mucho más mortíferas que los cañones. ¿Por qué debe permitirse a cualquier persona que pueda comprar una imprenta que disemine opiniones perniciosas tendientes a obstaculizar al Estado?"<sup>36</sup>. Así, invocando la óptica liberticida del fundador del poder soviético, el diario se preguntaba cómo era posible que en un partido con una larga lucha a favor de los derechos y libertades del hombre hubiese dirigentes que querían silenciar a quienes no compartían los criterios oficiales. Ese mismo día, se publicaba la crónica de otro acto radical; Juan Manuel Casella había caracterizado a *La Nación* y a *La Prensa* como representantes de la derecha liberal y de la derecha conservadora e ironizado sobre la inocencia de quienes creían que se trataba de prensa independiente. La columna editorial volvió a ocuparse a los pocos días de la mala predisposición de los dirigentes del partido del gobierno hacia las críticas del periodismo, que estimaba carente de consistencia lógica, pero no por ello menos peligrosa. Al mismo tiempo, hacía notar su satisfacción por las muestras de adhesión y solidaridad provenientes de los más diversos sectores de la comunidad, como respuesta a las declaraciones que la habían tomado como blanco de ataque<sup>37</sup>. Las tensiones provocadas por las ideas de los radicales sobre el rol de la prensa tuvieron eco nuevamente en la columna editorial un par de semanas más tarde. Esta vez el motivo fue una declaración del gobernador de Río Negro, Osvaldo Álvarez Guerrero, quien había sostenido que "un Estado democrático propietario de medios de difusión es la mejor garantía para que haya una auténtica libertad de prensa. (Los medios estatales) suelen ser más abiertos a la expresión libre y al acceso a todos los sectores que algunos medios de propiedad privada que practican una rígida censura o que no dan acceso a la opinión de quienes no piensan como sus propietarios"<sup>38</sup>. Para contestar al mandatario, el editorialista argüía que la libertad de expresión no residía en la existencia de medios carentes de ideología sino, por el contrario, de órganos de prensa adheridos a líneas de pensamiento claras y definidas, en tanto que, para refutar las afirmaciones de Casella, aseguraba que no era inocente creer en la existencia de la prensa independiente y, por el contrario, la muestra de inocencia sería pensar en la independencia de medios controlados por el Estado.

La atención de la sociedad argentina se encontraba centrada desde fines de abril de 1984 en el juicio a las juntas militares

seguido por los tribunales civiles. El editorial dedicado al inicio de dichos juicios era un llamado a la mesura y una invitación a no perder de vista el carácter histórico de esos acontecimientos. Había que cerrar una etapa de la vida política nacional y evitar, decía el texto, que el pasado siguiera pesando como un maleficio irreductible. Ejemplo de equilibrio, la reflexión veía como imprescindible “que errores o culpas efectivamente probados reciban la sanción que las leyes señalan (...) este juicio no debe ser visto como una revancha mezquina ni entendido como una venganza disfrazada de justicia”<sup>39</sup>. El hipotético interlocutor al cual se dirigía el mensaje parecía ser esta vez tanto los jueces como los reos. Desde una perspectiva independiente de las partes, sugería a todos los sectores políticos y sociales trabajar para convertir en realidad “el anhelo de ‘nunca más’ que late en los espíritus mejores; ése que incluye tanto a los excesos cometidos para vencer al terrorismo como al terrorismo mismo”<sup>40</sup>. Alertaba, además, contra quienes desde posiciones afines a las de la vencida guerrilla intentarían hacer de los juicios un hecho favorable para sus propuestas. En el transcurso de las jornadas judiciales el campo de la prensa y las persecuciones en él registradas ocuparon un lugar de singular significación. En las intervenciones de algunos testigos quedaron expuestos los laberintos por los cuales circularon la represión y la censura a los medios durante el “proceso”. Roberto Cox se refirió, entre otras cosas, al enojo del almirante Massera por un editorial publicado por el *Buenos Aires Herald*; Jacobo Timerman, de *La Opinión*, relató las torturas y los interrogatorios a que fue sometido, y esclareció aspectos relacionados con la desaparición o asesinato de Edgardo Sajón, Zelmario Michelini y Rafael Perrota, este último director-propietario de *El Cronista Comercial*. Máximo Gainza, director de *La Prensa*, recordó el boicot publicitario impuesto por el gobierno a su diario, las amenazas recibidas, la irascibilidad de las altas esferas ante algunos dibujos humorísticos publicados en 1978. Gainza estimó, por otra parte, que *La Prensa* había perdido aproximadamente entre diez y veinte mil lectores porque no estaban de acuerdo con su prédica a favor del respeto a la Constitución y de condenar el *modus operandi* del terrorismo de Estado. Mariano Grondona evocó las presiones y censuras a las que lo sometió la televisión en un programa que compartía con Bernardo Neustadt y mencionó los casos de dos directores de revistas víctimas de la represión: Julián Delgado, de *Competencia*, y Horacio Agulla, de *Confirmado*. Magdalena Ruiz Guíñazú narró las amenazas que recibió por su labor en el periodismo radial. *La Nación* dedicó un amplio espacio a la cobertura del juicio y destacó todos aquellos

testimonios que se referían a la persecución al periodismo. En comparación con las tribulaciones que conociera el resto de la prensa, era notorio que el matutino fundado por Mitre se encontraba entre los menos afectados por los años de plomo.

Con el denominado Plan Austral comenzó un rápido proceso de reconciliación del diario con el gobierno de Alfonsín. Editorialmente comentó en términos muy positivos la decisión de las autoridades de encarar el tratamiento de los problemas del país con medidas más próximas a las estrategias económicas liberales. Las ideas propuestas para resolver la situación inflacionaria dieron lugar a que varios economistas liberales, colaboradores en sus páginas con cierta frecuencia, entre ellos Roberto Alemann y Luis García Martínez, vertieran sus puntos de vista favorables a la decisión de aplicar un shock monetario y abrir un nuevo rumbo, distinto al seguido hasta ese momento<sup>41</sup>. La idea de que el Plan Austral mostraba resabios dirigistas, según los términos textuales empleados en otro editorial días más tarde, no le impedía al diario señalar al mismo tiempo que la sociedad depositaba su confianza en esa propuesta del gobierno y recomendaba evitar se defraudaran sus expectativas. De esos "resabios dirigistas", sin duda el ahorro forzoso establecido por las autoridades era una de las mayores muestras, tema del que se ocupó críticamente Jorge Oria en un artículo que llevaba su firma<sup>42</sup>. Otra figura enrolada en las filas del liberalismo económico, Arnaldo Musich, presidente del Consejo Directivo de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), publicaba días después una colaboración donde sintetizaba las posibilidades abiertas a la economía con el nuevo plan y señalaba la necesidad de que el gobierno fuera coherente en su aplicación y profundización. A su parecer, globalmente se había emprendido un camino acertado, y alentaba a los empresarios a aprovechar las ventajas surgidas de las nuevas orientaciones oficiales. El giro dado por la política económica del gobierno llevó a otro colaborador del matutino, Alberto Benegas Lynch (h), a caracterizar con júbilo el cambio operado bajo la dirección del presidente Alfonsín, en su opinión, un retorno a las mejores fuentes del radicalismo, acorde con el pensamiento de Leandro Alem y la tradición alvearista, y en ruptura con la influencia de la denominada Declaración o programa de Avellaneda, influida por la visión socialista de la economía<sup>43</sup>. El ex ministro de Economía de Onganía, Adalberto Krieger Vasena, ocupó las páginas del diario un par de días más tarde para elogiar la audacia y valentía del gobierno por las medidas adoptadas. Krieger Vasena instaba a las autoridades a mantener esa perspectiva e intuía un futuro

promisorio con un rápido incremento de las inversiones y de las exportaciones<sup>44</sup>. En ese contexto de marcado optimismo, un comentario editorial analizaba las perspectivas de una cosecha récord, razón por la cual sugería a las autoridades la adopción de medidas para alentar las tareas de los productores rurales, a quienes la estabilidad económica iba de por sí, decía, a favorecer e incentivar. Pero como para demostrar las características aún contradictorias de la política del gobierno, un par de días más tarde, otro editorial expresaba la preocupación de los propietarios agrarios por haberse declarado de utilidad pública un establecimiento rural de la Provincia de Buenos Aires, haciendo caso omiso, señalaba el texto, de las objeciones al proyecto de expropiación, incluso desde esa misma columna. Quizás para compensar las críticas, otro editorial aparecido en la misma fecha manifestaba su satisfacción por que en las altas esferas oficiales se estaba considerando incorporar al sector privado en la expansión de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel), actitud en la cual se percibía la decisión de eliminar los monopolios en los servicios públicos controlados por el Estado<sup>45</sup>.

La satisfacción con el gobierno de Alfonsín duró poco para los editorialistas de *La Nación*. Las realizaciones concretas de las autoridades parecieron demostrarles que los cambios de rumbos esperados en lo económico no eran tales o se llevaban a cabo de un modo excesivamente lento. No faltaban, tampoco, disposiciones contrarias a la inspiración liberal que se creyó percibir al iniciarse la gestión de Sourrouille. El ahorro forzoso fue una iniciativa juzgada como totalmente opuesta a las orientaciones aconsejadas. La voracidad fiscalista, según la fórmula empleada para criticar la aludida medida, terminaría, en su opinión, destruyendo las buenas condiciones existentes para llevar adelante procesos de inversión y, en lo más sustancial, significaba amenazar un sistema de vida fundado sobre la libertad personal y la propiedad privada<sup>46</sup>. ¿Estaban realmente convencidos los hombres del partido gobernante de que se debía, según la frase empleada por Alfonsín, "privatizar el crecimiento"? ¿Eran realmente conscientes el presidente y los altos funcionarios de los riesgos que entrañaba mezclar las funciones públicas con las actividades partidarias? ¿Qué se esperaba para convertir en realidad el anunciado achicamiento del Estado? Como para colmar las inquietudes, los radicales parecían embarcados en generar en la población falsas expectativas y, más aún, el primer mandatario declaraba: "Lo más grave ha pasado"; eso era una actitud muy equivocada, le señalaba el diario, ya que estaba bien alentar a la ciudadanía pero se corría el riesgo de alimentar las tendencias al

“facilismo”<sup>47</sup>. Así, el reconocimiento de los valores positivos del plan de Sourrouille y las objeciones a los ritmos de su puesta en práctica o a eventuales tergiversaciones, coexistieron en los comentarios del matutino durante los primeros meses de instalados los nuevos equipos en el Ministerio de Economía.

El gobierno, por su parte, tenía un diario amigo, *La Razón*, para contrarrestar las críticas que le formulaban, en especial, *La Nación*, *Clarín* y *La Prensa*. Según un artículo periodístico de Jorge Asís, publicado a comienzos de 1985, el Ejército había cedido las acciones del tradicional vespertino a los dirigentes del alfonsinismo poco después del triunfo de éstos en las elecciones<sup>48</sup>. Jacobo Timerman retornó de su exilio, se hizo cargo de la conducción de *La Razón* y lo convirtió en matutino. A mediados de 1985, *Ámbito Financiero* sostenía que el gobierno radical trataba de presionar sobre las opiniones de *La Nación* y *Clarín* a partir de la relación privilegiada derivada de su asociación en Papel Prensa S.A. Además, a *La Razón*, según el mismo artículo, la favorecía otorgándole una gran proporción de publicidad oficial, para nada acorde con su escaso tiraje<sup>49</sup>. Este comentario era publicado a raíz de la investigación sobre Papel Prensa S. A., poco antes iniciada por el fiscal general Ricardo Molinas. *La Nación*, por su parte, se ocupó editorialmente de objetar, como un manejo contrario a la democracia, cualquier acción del gobierno que mediante una desigual distribución de la publicidad oficial beneficiara a un determinado medio de prensa, todo ello en un contexto en el que era obvia la alusión a *La Razón*<sup>50</sup>. El mismo día en que aparecía el mencionado comentario, el diario publicaba un reportaje de Juan Carlos Casas al ensayista francés Guy Sorman, donde éste realizaba una cerrada defensa de las virtudes de la economía de mercado, indisociables a su modo de ver de las libertades políticas democráticas. Esas reflexiones de Sorman fueron analizadas críticamente desde *La Razón* por Pablo Giussani, un columnista permanentemente favorable al gobierno. Al respecto, Giussani se preguntaba sobre la consistencia de la combinación entre liberalismo económico y democracia política en el pensamiento de los sectores liberales y conservadores argentinos, y formulaba una afirmación que muy probablemente incluía a *La Nación*, aun cuando no la nombrara de forma explícita: “Los más tradicionales portavoces periodísticos del liberalismo argentino no han renunciado a la defensa verbal de la democracia, pero la remiten a un plano abstracto, platónico y puramente académico mientras que en el orden práctico y concreto viven pegados a las fuerzas armadas”<sup>51</sup>.

Un discurso de Alfonsín en la cena de las fuerzas armadas, en el cual se convocaba a la reconciliación de civiles y militares

motivó un editorial de *La Nación* francamente favorable a la posición presidencial. El comentario contraponía las ideas expuestas por el primer magistrado con declaraciones e iniciativas formuladas por hombres de su partido, legisladores y colaboradores directos del Poder Ejecutivo, mucho más críticos con respecto a los militares. En su opinión, era necesario que el llamado a la integración hecho por Alfonsín fuera realmente asumido por sus seguidores<sup>52</sup>. Para el matutino, y en esto coincidía con Alfonsín, la consolidación de la democracia suponía trazar una línea divisoria con el pasado inmediato. Debe recordarse que en ese momento se realizaban los juicios a las juntas y el malestar en las filas castrenses trascendía a la sociedad. Desde una óptica con vocación de neutralidad, la columna editorial se ocupó de analizar la jornada vivida en los tribunales el día en que los fiscales hicieron la acusación a los comandantes y pidieron las respectivas penas. Deploraba que parte del público allí presente hubiese atacado de viva voz a los acusados; esa acción, decía, mancillaba la justicia; reiteraba la necesidad de ecuanimidad, para no afectar "la esperanza con que la inmensa mayoría de los ciudadanos argentinos recibió la decisión del gobierno de someter a juicio a los integrantes de las tres juntas militares"<sup>53</sup>. No se trataba de revanchas ni de odios, agregaba, sino de hacer justicia. Cuando llegó el fallo, la argumentación del diario mantuvo el mismo estilo discursivo. Derrotar a la guerrilla había sido una acción, aseveraba, apoyada por la mayoría de la población, pero los excesos cometidos —asesinatos, torturas, privaciones de libertad, robos— debían ser justamente sancionados. Sin comentar las penas, afirmaba: "El país siente como un acierto de los jueces, más allá de cualquier valoración fundada en términos de técnica procesal y jurídica, que en ningún caso se haya llegado a la degradación. Ello hubiera constituido un agravio innecesario del cual, al menos, deben quedar protegidos los hombres que, pese a las razones que puedan justificar otros cargos, evitaron que el caos y el terrorismo se enseñorearan en el país"<sup>54</sup>. Guardaba distancias con respecto a todas las opiniones en pugna, y estimaba que toda la ciudadanía debía aceptar la decisión de la Justicia, más allá de los sentimientos que el fallo pudiera suscitarle. Si bien se nombraba explícitamente a los "revanchistas" que hubiesen querido penas mayores y ninguna absolución, era notorio que el mensaje tenía también como destinatarios a los partidarios civiles de las juntas, presumiblemente descontentos con el fallo. Al aludir a los resultados del juicio, el escritor Ernesto Sabato sostuvo que, más allá de ciertas limitaciones, presentaban dimensiones susceptibles de caracterizar como

ejemplares a nivel universal. Los genocidios no habían sido castigados, decía, en Vietnam, ni tampoco en Afganistán; los crímenes cometidos por Francia en Argelia habían quedado impunes; comparativamente, la democracia argentina daba un ejemplo al mundo. Sabato señalaba, además, que había quedado abierto el camino para seguir juzgando a los demás responsables de la represión<sup>55</sup>. *La Prensa* se ocupó editorialmente del fallo; recordaba haber criticado la manera de operar de la represión a la guerrilla mientras, decía textualmente, otros callaban o estimulaban, y ello le había valido amenazas, persecuciones y atentados. Pero a diferencia de la opinión de *La Nación*, el diario creado por Paz daba por descontado que el fallo no sería aceptado, y sólo profundizaría las divisiones entre los argentinos. Por esa razón, sin desconocer la culpabilidad de los militares, *La Prensa* planteaba como única alternativa la sanción de una ley de amnistía<sup>56</sup>.

El equilibrio revelado por *La Nación* en su reflexión sobre los castigos a los militares contrastó con el alarmado cariz que tomaron sus comentarios cuando la Justicia dispuso la prisión preventiva de José Alfredo Martínez de Hoz, ex ministro de Economía del gobierno de Videla. Con dramatismo, el diario alertaba sobre el peligro de mezclar el plano político con el judicial, sendero, en su opinión, conducente a la llamada "justicia revolucionaria", a los "tribunales populares" o a los "paredones". Era preciso, afirmaba, distinguir las actuaciones políticas de los hombres de gobierno de los hechos judiciales. Los resultados de cualquier gestión estatal siempre podían ser descalificados desde ideologías opuestas, y juzgados moralmente, pero no convertidos en materia propia de los tribunales judiciales, argüía, para luego introducir un razonamiento de tipo social muy sugerente por todas sus connotaciones: "En muchos comentarios late, a veces disimuladamente y a veces en forma explícita, una voluntad de enfrentamiento clasista entre las elites dirigentes del ayer argentino y masas populares presuntamente oprimidas por aquéllas. Pareciera advertirse la voluntad de sancionar a representantes de esas elites por ese solo hecho, por haberlas integrado. Pareciera también que hay un pasado histórico que debe ser sancionado, hoy, en la Argentina, y que el esquema materialista-dialéctico de la lucha de clases como motor de la historia, de acuerdo con la ortodoxia marxista-leninista, ha de encontrar entre nosotros al menos un cordero pascual para ser sacrificado como ejemplo para la sociedad entera"<sup>57</sup>. Era válido, proseguía el análisis, esperar que la Justicia se expidiese, y si el ex ministro había cometido un delito se lo castigara, pero por el momento era importante, según la óptica del diario, poner de relieve la existen-

cia de quienes utilizaban el episodio por apetencias políticas, ideológicas, o para fomentar enfrentamientos de clase. Posiblemente, en esa categoría tipológica, el editorialista debió situar a Giussani, que desde el matutino *La Razón* aplaudía la iniciativa judicial tomada contra Martínez de Hoz, en la cual veía un acertado y necesario complemento de los procesos a los miembros de las juntas. Para Giussani, la represión por la que se había condenado a los comandantes había tenido como función asegurar las bases del modelo económico favorable a la especulación, cuyo mentor era Martínez de Hoz. Llevando al extremo su particular visión de la responsabilidad de los equipos económicos del "proceso", el mencionado periodista estimaba injusto castigar a la vertiente militar represiva y dejar impune a quien había dirigido el Palacio de Hacienda<sup>58</sup>.

La posición de *La Nación* de denunciar a quienes desde el marxismo-leninismo podían buscar agudizar los conflictos sociales, fue coincidente con la que poco después enunció Alfonsín en un acto realizado en Río Negro. El presidente se refirió en esa oportunidad al desplazamiento hacia la izquierda del Partido Comunista, materializado entre otros aspectos en una alianza con una agrupación de origen trotskista, y reprochó a los primeros el abandono de su estrategia tradicional de apoyo a las denominadas burguesías nacionales y democráticas. Probablemente convencido de que muchos de sus lectores no comprenderían las referencias del primer magistrado, el diario acompañó el mencionado discurso con una nota explicativa titulada "Alfonsín denunció la alianza que no hubieran soñado Stalin ni Trotsky". Allí rememoraba la participación de los comunistas en la Unión Democrática en 1945, el asesinato del fundador del Ejército Rojo, las vinculaciones internacionales de los marxistas locales y sus cambios de alianzas. Difícilmente de esa breve y un tanto jovial narración podía surgir la imagen de una amenaza para el orden social vigente<sup>59</sup>. Esa certeza acerca de la estabilidad de las instituciones fundamentales de la sociedad, le pudo permitir al editorialista comentar poco después con humor un acto sindical en el que Saúl Ubaldini, secretario general de la CGT, se había quitado la camisa para dirigirse al público: "No es sencillo entender la relación que podría establecerse entre la exhibición del cuerpo desnudo —o al menos, por el momento, de una parte del cuerpo— y las ideas políticas. Hasta ahora, los más radicalizados líderes políticos del mundo, los más encendidos defensores de los cambios sociales profundos, los más fervorosos enemigos del orden establecido, no consideraron necesario recurrir a ese simbolismo"<sup>60</sup>. Esta manera de abordar el tema de las movilizaciones

sindicales, se completaba poco después con una dura crítica a la realización de un paro general y a lo que se caracterizaba como los contenidos totalitarios presentes en el movimiento obrero. Las huelgas se habían convertido, según el matutino, en una rutina peligrosa, y aconsejaba al gobierno que no se dejara presionar por las movilizaciones gremiales, a la vez que oponía las instituciones democráticas a las de corte corporativo<sup>61</sup>. Tal como había sucedido en otros dominios, la actitud tomada por las autoridades nacionales frente a los sindicatos terminó por despertar el descontento del diario. Un conjunto de leyes laborales enviadas al Congreso por el Poder Ejecutivo motivó sus objeciones, por entender que la iniciativa legislativa abriría otro avance del sindicalismo y agregaría más dificultades a la empresa privada. Intuía que el proyecto buscaba crear condiciones para una negociación con los dirigentes gremiales, por medio de la cual los radicales aspiraban a mejorar el clima social; el editorial preveía el fracaso de esa meta y la creación de nuevas fuentes de conflicto<sup>62</sup>. Contra las referidas leyes se elevaron las protestas de la Unión Industrial Argentina, quien, entre otras consideraciones, las definió como socializantes. Al mismo tiempo, la CGT expresó su disconformidad con múltiples aspectos de las mismas, por considerarlas atentatorias contra algunas de las conquistas básicas logradas en otros momentos por el movimiento obrero.

La caracterización política e ideológica de *La Nación* había sido en más de una ocasión tema de polémica, invariablemente iniciada por alguna clasificación de sus adversarios que no resultaba del agrado del propio diario. Como es lógico, las connotaciones políticas de esas discusiones, nunca muy profundas, estaban ineludiblemente presentes. A comienzos de la segunda mitad de 1986 la cuestión volvió a plantearse a partir de un libro del entonces embajador itinerante del gobierno de Alfonsín, Hipólito Solari Yrigoyen. Se trataba de un texto que contenía varios artículos, uno de los cuales analizaba un viaje a la Patagonia realizado por el presidente Yrigoyen en 1918, donde al autor aludía varias veces al diario fundado por Mitre como el "matutino conservador", al recordar las críticas que desde sus páginas se habían formulado a dicho magistrado. En otro de los artículos incluido en la obra la mención del diario era neutra, y en ella se citaban dos textos escritos por el intelectual radical Ricardo Rojas sobre tópicos australes y que fueran publicados por *La Nación*. La tercera alusión era aún más neutra: consistía en la referencia a un artículo sobre la colonización galesa en Chubut, escrito por Solari Yrigoyen y publicado en *La Nación* en julio de 1962<sup>63</sup>. José S. Campobassi, colaborador permanente de la sección literaria,

se encargó de oponerse a la caracterización del matutino como conservador. A su juicio, se trataba "de un matutino independiente, que no está enrolado en tendencia política alguna, y si correspondiera asignarle una, sería la liberal, republicana y democrática de su fundador y de sus seguidores"<sup>64</sup>. Campobassi rendía, además, homenaje al talento de Ricardo Rojas, y mencionaba también los textos que en su momento habían aparecido en *La Nación*. Implícitamente, era otra alusión al pluralismo y amplitud del diario.

Desde mediados de 1986, los aspectos considerados negativos de la política económica seguida por el equipo dirigido por el ministro Sourrouille, fueron ocupando progresivamente la atención de los editoriales de *La Nación*. A un año de su inicio no se habían logrado, al parecer del diario, los resultados esperados en un primer momento. En lo sustancial, reprochaba al gobierno falta de decisión para producir los cambios tantas veces demandados desde esa misma columna. Esto no significaba, sin embargo, la existencia de enfrentamientos totales con las autoridades. Cada vez que el presidente o su ministro de Economía hacían anuncios o esbozaban orientaciones generales, el matutino se declaraba coincidente con lo expresado. En el dominio de los problemas relacionados con la política agropecuaria la situación se hizo más tensa en razón de las iniciativas de protesta convocadas por los propietarios rurales, disgustados con las medidas que perjudicaban sus intereses. *La Nación* se hacía eco de esas quejas y estimó justificada la realización de paros agrarios organizados por la Sociedad Rural Argentina y otras entidades corporativas del sector<sup>65</sup>. De todos modos, cualquier signo que el gobierno daba de estar estudiando medidas económicas o la introducción de reformas de orientación liberal, fuese en el ámbito bursátil, agrario, industrial o del comercio exterior, revelaba desde los editoriales la subsistencia de expectativas sobre un eventual cambio de rumbo. Ése fue el caso de las negociaciones materializadas a partir de los anuncios formulados en Houston en materia de petróleo por el presidente Alfonsín. Más allá de algunos reparos secundarios, se reconocían los avances realizados: "El hecho sustancial es, de todas maneras, que se haya emprendido por fin el camino de una saludable participación del capital privado, nacional y extranjero, en una actividad innecesariamente reservada al Estado"<sup>66</sup>. Los datos referidos al deterioro de la situación económica, y en especial al aumento de las tasas de inflación, eran presentados argumentalmente como una muestra de un futuro amenazador para el país si no se profundizaban las reformas prometidas en el inicio del plan de

Sourrouille. Hacía suyas las observaciones críticas del presidente de la Unión Industrial Argentina, Roberto Favelevic, en su alocución del Día de la Industria de 1986, y las reproducía: "Frecuentemente se ha convivido con objetivos declarados, en abierto conflicto con las normas aplicadas, las que entre sí tampoco guardaban mayor coherencia"<sup>67</sup>. La inquietud por postulados que no se convertían efectivamente en políticas públicas acordes con las expectativas creadas se combinaba, además, con la sospecha de que los radicales no habían realmente abandonado sus antiguas ideas más reformistas. Así, un documento del Poder Ejecutivo referente a la necesidad de terminar con la explotación pasiva de las ventajas agrícolas naturales fue tomado editorialmente como un indicador de la persistencia de "los falsos mitos de la década del 50, que presentaban un cuadro pastoril de la empresa rural, o los de la del 70, que procuraban inculcar la idea del terrateniente ocioso para incurrir en una anacrónica reforma agraria"<sup>68</sup>. Poco después, el problema de la apertura de la economía, muchas veces pregonado por el diario, asumió una derivación paradójica: las autoridades nacionales anunciaron tener en estudio la posibilidad de importar carne para contener el aumento local de precios. El rechazo de tal medida fue inmediato por parte de *La Nación*. Estimó carentes de consistencia las explicaciones de la inflación basadas en el incremento de los precios de la carne, cosa que le hacía pensar, decía, en la búsqueda de un "chivo expiatorio" para dispersar la atención de la opinión pública de las verdaderas causas del fenómeno. Previsiblemente, mencionaba el excesivo gasto público, las tarifas de las empresas estatales y la presión tributaria. Concluía la reflexión que, así como en la década del 50 las políticas estatistas habían dado como consecuencia comer pan negro, las de los 80 podían llevar a consumir en el país carne importada de Europa<sup>69</sup>.

En el transcurso de 1986 el tema de Papel Prensa S. A. volvió a crispar los debates en el seno del campo periodístico. Algunos diarios del interior y de la Capital denunciaron a la mencionada empresa por desabastecerlos del estratégico insumo o cobrarlo a precios abusivos. La eventual combinación entre el gobierno radical y los comportamientos de Papel Prensa S. A. cobraba especial significado en algunas de esas denuncias. *El Día*, de La Plata, estimaba que se le retaceaba la entrega de papel para favorecer la expansión en dicha ciudad de las ventas de *La Razón*, que editaba una edición bonaerense. La Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina se hizo eco de dicha denuncia en una declaración emitida a mediados de abril de 1986. Igual disconformidad con el modo de actuar de la firma papelerá mani-

festó *La Prensa*, cuya planta había dejado de ser aprovisionada por la empresa en la que se hallaban asociados *La Nación*, *Clarín*, *La Razón* y el Estado. Para negar toda posible discriminación, Papel Prensa S.A. hizo público un comunicado que desmentía las acusaciones; justificaba el cese del aprovisionamiento al matutino creado por Paz por la falta de pago de sus obligaciones<sup>70</sup>. La respuesta de *La Prensa* fue contundente. Argumentó que los tres diarios socios del Estado compraban el papel a un precio 129% por debajo del que debía pagar el periodismo independiente; recordó, además, las críticas de *La Nación* en 1969 contra el proyecto de Onganía de crear una industria papelera con participación estatal, y subrayó que los riesgos de manipulación gubernamental autoritaria imaginados entonces desde sus columnas ahora se habían cumplido, pero con el diario de los Mitre entre los beneficiados. Según *La Prensa*, *La Nación* obtenía la materia prima a menor costo y tenía una deuda con la fábrica semiestatal diez veces superior a la propia<sup>71</sup>. El 6 de julio de 1986, Papel Prensa S.A. publicó una extensa solicitada en los tres diarios asociados cuyo objetivo principal era desmentir las argumentaciones de *La Prensa*. Nuevamente toda la historia del emprendimiento industrial fue recordada en el texto y no se ahorraron términos para descalificar a *La Prensa*. Al día siguiente, otro crítico de Papel Prensa S. A., *Ámbito Financiero*, inició una serie de tres notas dedicadas a criticar lo que denominaba la "despiadada y cruel solicitada" publicada contra *La Prensa*. En la primera nota, *Ámbito Financiero* señalaba al gobierno de Alfonsín como copartícipe de ese ataque, ya que contaba con el 45% del paquete accionario de la empresa y tenía en su directorio dos representantes: Ricardo Yofre y Enrique García Vázquez. El segundo de los mencionados era una figura del radicalismo de vieja data, en tanto que Yofre, incorporado a la UCR desde 1983, había sido, recordaba *Ámbito Financiero*, subsecretario general de la Presidencia durante el gobierno del general Videla entre 1976 y 1978<sup>72</sup>. En la nota del día siguiente, *Ámbito Financiero* sostenía que el gobierno radical estaba interesado en provocar el monopolio de la información de prensa desde el Estado o desde los diarios asociados con él. Además, rememoraba los padecimientos sufridos por *La Prensa* bajo el primer peronismo, y de cuya clausura, decía, se había beneficiado *Clarín*, ampliando sus lectores y su publicidad, mientras *La Nación* había eludido los problemas y evitado las persecuciones manteniéndose callada mientras clausuraban a su colega. La nota incluía, también, una caracterización lapidaria: "El diario de los Mitre es presa de sus propias contradicciones que le han significado una permanente e

imparable pérdida de prestigio y de penetración en el mercado, al extremo que ha caído últimamente en sistemas de sorteo para tratar de recuperar popularidad que su línea editorial zig-zagueante le hizo perder<sup>73</sup>. De la tercera nota de *Ámbito Financiero*, resulta interesante destacar uno de los argumentos centrales: como los tres diarios pagaban el papel a menor precio que el vigente en el mercado, el Estado dejaba de recibir ganancias, es decir que subsidiaba a *La Nación*, *Clarín* y *La Razón*. En ese mismo orden de temas, se evocaba la electricidad a tarifa preferencial provista por la empresa pública de energía de la Provincia de Buenos Aires a Papel Prensa S. A., objetivamente un subsidio de varias decenas de millones de dólares, suma con la que, decía *Ámbito Financiero*, se hubieran podido construir escuelas u hospitales<sup>74</sup>. Entre el 8 y el 10 de julio de 1986, *La Prensa* dedicó tres largos artículos a contestar punto por punto la solicitada de Papel Prensa S.A. Los textos volvieron sobre las distintas argumentaciones en su momento expuestas por el diario. En clave bélica, la primera nota se iniciaba así: "El domingo pasado se publicó en varios diarios asociados al gobierno de turno una solicitada firmada por Papel Prensa, empresa que sirve de barricada a los tres diarios, *Clarín*, *La Nación* y *La Razón*, beneficiarios directos de los privilegios acordados por los hoy vilipendiados gobiernos militares"<sup>75</sup>. La tercera, en cambio, comenzaba con una caracterización de la empresa papelera que combinaba tango, política y denuncia: "Papel Prensa, rara mezcla de Museta y de Mimí, contubernio confuso de 'periodistas', fabricantes de papel y funcionarios gubernamentales de turno, ha utilizado en la elaboración intelectual de la solicitada en discusión la técnica de partir de premisas falsas, imponerlas como dogma y luego tejer un 'ñanduty' de falsedades para feliz engaño de lectores incautos"<sup>76</sup>. El artículo terminaba con la estrofa de los consejos de Martín Fierro a sus hijos, donde dice que la vergüenza es lo único que una vez perdido no se puede volver a encontrar. Así, a muchos años de su muerte, la pluma de José Hernández era convocada para participar en un combate contra el diario fundado por Mitre.

En el período comprendido entre principios de 1987 y mediados de 1989, *La Nación* mantuvo una caracterización crecientemente crítica de la gestión de Alfonsín. Esto no significa una actitud cerrada y sistemática de oposición, pero en contraste con lo ocurrido en los tres años precedentes fue notoria la paulatina desaparición de expectativas favorables y de la esperanza en una rectificación de las políticas gubernamentales. Invariablemente, en la base de las reflexiones sobre la acción de las autoridades se expresaba el descontento por la falta de vocación para encarar

con mayor profundidad la solución de los problemas nacionales; en lugar de buscar soluciones definitivas, se optaba por alternativas de compromiso, inconducentes en lo inmediato y, más grave aún, susceptibles de crear nuevos conflictos o inconvenientes en un futuro cercano. Con esta óptica analizaba los temas económicos, sindicales y militares y el funcionamiento de la burocracia estatal. Pero dado el juego de fuerzas políticas en presencia, el matutino tenía dificultades para expresar en forma afirmativa su coincidencia con alguna propuesta bien elaborada que compitiera con posibilidades de éxito con el gobierno. Sólo en el plano económico encontraba puntos de convergencia con las quejas de las corporaciones empresarias. En cambio, en las confrontaciones entre partidos políticos, o en los debates legislativos, parecía resultarle imposible hallar actores mínimamente importantes con los cuales coincidir. Desde 1987 el peronismo recuperó espacio en la escena política y, aun cuando presentaba ciertos aires de renovación, su revitalización volvió a inquietar a quienes siempre habían tomado partido en su contra. El desenvolvimiento notoriamente caótico de las relaciones entre algunos sectores de las fuerzas armadas y el gobierno radical y los signos de desintegración fáciles de visualizar en las primeras fueron una realidad que no dejó de alarmar al matutino. En este ríspido tema, en un primer momento se colocó en posiciones cercanas a las de los equipos gobernantes, y les aconsejó sobre la manera más adecuada de tratarlo. Pero en tanto las crisis militares continuaban, multiplicó sus críticas a las autoridades y les reprochó la falta de decisiones claras, inequívocas y definitivas para resolver la cuestión. Tal como había sucedido en años anteriores, en esta segunda etapa volvieron a surgir tensiones en torno a la libertad de expresión cuyos ecos ocuparon la columna editorial.

Cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó por unanimidad la sentencia dictada a los miembros de las tres primeras juntas militares, *La Nación* abordó el tema editorialmente y expresó su conformidad con el mantenimiento de las sanciones. Reiteraba la necesidad de superar el pasado, sostenía que los crímenes cometidos durante la dictadura debían tener su justo castigo, y si bien, decía textualmente, en la población había un sentimiento de gratitud hacia los hombres que habían derrotado la subversión, esto no justificaba la "soberbia armada de los represores"<sup>77</sup>. En el texto era notoria la voluntad de colocar el tema en un contexto teórico de carácter más jurídico que político, vía por la cual se reforzaba conceptualmente la legitimidad de la actuación de la Justicia. Poco después, a propósito de un conjunto de iniciativas de la oficialidad de la Marina reveladoras de un estado de discon-

formidad con la prosecución de juicios a personal de distintos rangos por el rol desempeñado durante la represión del período 1976-83, el comentario editorial se ocupó nuevamente de la temática militar. En el análisis se rechazaba la posibilidad de que los uniformados se inmiscuyeran en la política. Al mismo tiempo, observaba la existencia de problemas no resueltos, que dejaban abiertas alternativas inquietantes, y planteaba la necesidad de realizar más esfuerzos para lograr la esperada convivencia entre todos los sectores. Un par de semanas más tarde, Alfonsín se refirió en un acto realizado en la localidad bonaerense de Las Perdices al malestar reinante en las filas castrenses y rechazó la eventual reivindicación de la "metodología perversa" con la cual se había combatido a la guerrilla. El diario le señaló al presidente que, en realidad, los militares no querían el reconocimiento del *modus operandi* sino del sentido último de la lucha librada en los años del "proceso"<sup>78</sup>. La sublevación encabezada por el teniente coronel Aldo Rico, en Semana Santa de 1987, reflejó la gravedad del descontento militar. *La Nación* valoró positivamente las movilizaciones sociales realizadas en defensa del orden constitucional, y dio nuevamente su respaldo al mismo. Pero trataba de explicar la naturaleza de la situación planteada e instaba a quienes tenían poder de decisión a no cejar en la búsqueda de una superación de las tensiones, tarea para la cual hacía falta, decía, en coincidencia con palabras pronunciadas por el presidente, asegurar hechos concretos que permitieran la definitiva reconciliación de los argentinos. Dos días después, en un ambiente poblado de versiones contradictorias acerca de negociaciones con los sublevados para que depusieran su actitud, por las cuales el gobierno debería establecer una legislación que pusiera fin a las actuaciones judiciales por la represión procesista, la columna editorial volvía a solicitar la solución política del problema: "Había llegado la hora de la mayor grandeza posible por parte de quienes tenían en sus manos la responsabilidad principal del orden constitucional (...) La hora exige la visión de los estadistas (...) El Dr. Alfonsín, que supo ejercer la autoridad conferida por la voluntad popular con decisión y prudencia, podrá proponer, ahora, la superación de los desentendimientos con las fuerzas armadas, integralmente subordinadas al orden constitucional"<sup>79</sup>. El diario invitaba a todos los sectores que habían acompañado al presidente durante el golpe pascual a apoyarlo en la tarea de reconciliación con los militares.

La llamada Ley de Obediencia Debida fue el corolario, si no lógico, al menos secuencial de las presiones desatadas desde las filas castrenses para cerrar los procedimientos judiciales contra

sus miembros. *La Nación* caracterizó esa ley como necesaria, aun cuando consideraba que los debates de corte jurídico o filosófico en torno a su pertinencia conducían desde el punto de vista doctrinario a callejones sin salida. Si cabía sancionarla, argüía, era porque creía que aliviaría las tensiones políticas. Lamentaba, por otra parte, que ese paso no se hubiera dado antes. La ley establecía la ausencia de responsabilidad de los militares que en cumplimiento de órdenes de sus superiores hubieran cometido actos violatorios de los derechos humanos, y permitió que muchos miembros de las fuerzas armadas acusados formalmente de gravísimos crímenes quedaran exentos de castigo. *La Nación*, que estimó necesaria la adopción de una iniciativa de ese género, había reflexionado editorialmente en otras épocas sobre el discutible tema de la obediencia debida en las instituciones militares<sup>80</sup>. Muchos años antes, en 1961, el caso de Adolf Eichmann, juzgado por tribunales israelíes por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, llevó al diario a plantear en un editorial el mismo problema. El texto expresaba desprecio hacia la actitud de Eichmann, quien para defenderse alegaba la obediencia a un mandato: "Halla más cómodo negar su personalidad que su delito, y más viable la posibilidad de un perdón de los jueces por la dilución de su culpa en el anónimo de una orden superior que el respeto de sí mismo ante el mantenimiento de su propia responsabilidad"<sup>81</sup>. Eichmann no encontró ningún atenuante para sus delitos por el hecho de haber cumplido órdenes. Proponiase a sí mismo como un pequeño burócrata de una máquina letal de cuya estructura de mandos dependía, lo que hizo reflexionar a Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, pero Eichmann no consiguió la clemencia de sus jueces, quienes entendieron que para el genocidio no había obediencia debida; como aseveró entonces el diario fundado por Mitre, negar la personalidad no absolvió a un criminal de guerra de su delito.

Pasó muy poco tiempo para que se hiciera evidente que los problemas militares no se habían solucionado con la legislación sobre la obediencia debida. A fines de 1987, el teniente coronel Aldo Rico volvía a encabezar un movimiento castrense contra las autoridades. Una fotografía que mostraba a un oficial del Ejército apuntando a periodistas de la agencia *Noticias Argentinas*, en la cual *La Nación* participaba en carácter de copropietario, sirvió para ilustrar un artículo de Jaime Potenze, sugerentemente titulado "El malestar de las fuerzas civiles". Potenze lamentaba la sanción de la ley que permitió a militares responsables de violaciones de derechos humanos quedar sin el correspondiente castigo, y consideraba una ingenuidad haber pensado que de ese

modo se aquietarían los ánimos castrenses. Los militares, en su opinión, buscaban cobrar una revancha a la civilidad y no se resignaban a aceptar disciplinadamente a las autoridades constitucionales. El problema se hallaba, a su parecer, en que aun cuando lo que denominaba la "dictadura iletrada" no podía volver a establecerse, los gobernantes civiles mostraban una alarmante ineptitud para defender a la sociedad de la amenaza; si bien cabía esperar las elecciones para cambiar a las autoridades, lo inquietante era, continuaba Potenze, la complicidad establecida entre todos los partidos y su despreocupación por los grandes asuntos públicos<sup>82</sup>. El razonamiento revelaba un desconsuelo muy distinto al de otras épocas: ya no había garante militar frente a la inoperancia de los partidos y, peor aún, eran los uniformados quienes se habían convertido en amenaza. Días más tarde, en la columna editorial se expresaba la condena a los hechos militares cuyo epicentro se halló en el cuartel de Monte Caseros; se decía, entre otras cosas, que los anteriores episodios de Semana Santa, inaceptables en sí mismos desde el punto de vista constitucional, podían, sin embargo, encontrar alguna explicación en el temor a la prosecución de juicios a oficiales, pero una vez resuelto ese tema, nada podía justificar las conductas de los rebeldes y, en consecuencia, la alternativa era emplear contra ellos todo el rigor de la ley<sup>83</sup>. La sublevación dirigida por el coronel Mohamed Ali Seineldín, a comienzos de diciembre de 1988, dio nueva oportunidad al diario para criticar a los militares y al gobierno. Éste vivía, según uno de los editoriales, excesivamente preocupado por problemas electorales y partidarios, sin poner el debido empeño en la tarea de gobernar. Recordaba a las autoridades su legitimidad constitucional y su raigambre democrática, y les pedía mayor ejercicio del poder institucional a su cargo. Además de traslucir su poca confianza en la capacidad de reacción del gobierno, el texto tomaba como interlocutor a la opinión pública, a quien señalaba que ella debía asegurar el mantenimiento del orden constitucional y del régimen democrático: la voz de las armas debía acallarse para siempre, afirmaba textualmente, y la ciudadanía expresarse a través de las urnas. El editorial señalaba finalmente que la responsabilidad de la crisis militar no era sólo de las fuerzas armadas, sino también del gobierno y de la oposición por no haber sabido encontrar soluciones luego de cinco años de retorno al libre funcionamiento de las instituciones democráticas<sup>84</sup>.

A mediados de 1987, el tema de la libertad de prensa se cruzó imprevistamente con las secuelas de la dictadura a propósito de la discusión en torno a la decisión judicial de

impedir la publicación de una solicitada, firmada por un conjunto de ciudadanos, de agradecimiento al teniente general Videla y a las fuerzas armadas, de seguridad y policiales por haber vencido a la guerrilla. La medida se había adoptado a raíz de la denuncia realizada por periodistas y dirigentes de distintos gremios vinculados a la producción y distribución de la prensa gráfica. El juez interviniente fundaba la resolución en la necesidad de impedir la consumación de la apología de un delito o de un condenado (Jorge Rafael Videla). La mencionada, y frustrada, solicitada debía publicarse en *La Nación* y otros cuatro medios metropolitanos. La reacción editorial no se hizo esperar. La Constitución protegía, dijo, la libertad de expresión, y de ninguna manera se debía aceptar que autoridad alguna se arrogara la facultad de conocer el contenido de un texto previamente a su publicación, y si en él se incurría en un delito se lo debía castigar *a posteriori*. La mecánica de la denuncia, formulada por dirigentes de los gremios de prensa y de canillitas, aparecía en la mencionada reflexión como un motivo mayor de alarma: el poder sindical había llegado a un límite no alcanzado hasta entonces. El conflicto social, tantas veces analizado extramuros, se presentaba en la propia casa. Con un dramatismo revelador de su gran preocupación, el diario desarrollaba deductivamente su pensamiento con olvido de la elegancia de estilo: "No hay democracia sin libertad; no hay libertad sin libertad de prensa; no hay libertad de prensa sin propiedad privada de los medios de difusión y no habrá propiedad privada de los medios de difusión si se instalaran en su seno verdaderos *soviets* que pretendieran conducirlos y dictarles lo que deben informar, lo que deben opinar y lo que pueden publicar"<sup>85</sup>. Luego de prolongadas tramitaciones judiciales la solicitada en cuestión apareció dos años más tarde. En el interin, otra cuestión vinculada con la libertad de expresión, pero que involucraba de distinto modo al matutino, volvía a agitarse: la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas hacía conocer su informe sobre el ya tantas veces mentado caso de Papel Prensa S.A. Como en un folletín por entregas, *Ámbito Financiero* publicó íntegras sus 322 carillas, y dijo en su introducción, entre otras cosas, que los procedimientos del régimen militar para favorecer a *La Nación*, *Clarín* y *La Razón* eran una muestra de cómo se denigraba "al capitalismo y a la verdadera y honesta empresa libre y privada"<sup>86</sup>. Desde una sensibilidad ideológica muy distinta a la de *Ámbito Financiero*, tiempo después *Página/12* se encargó de criticar a los que llamaba los tres diarios que cohabitaban con el Estado en la empresa Papel Prensa S.A. por encarecer el precio del imprescindible insumo. Sin

medias tintas, *Página/12* afirmaba: "La trampa del papel barato que los militares necesitaban para lograr una prensa favorable, se ha convertido ahora en un método de presión para regular el aire de la prensa independiente"<sup>87</sup>. En la época, *La Razón* perdía su participación en la cuestionada empresa y *La Nación* y *Clarín* veían crecer la suya.

Durante esta segunda etapa del gobierno de Alfonsín, la opinión del matutino sobre el desempeño de su equipo económico sólo varió para hacerse más crítica. Los pocos aspectos que pudo considerar positivos no alcanzaron para compensar todas sus objeciones. El malestar existente en las corporaciones rurales tuvo eco, como era habitual, en sus editoriales: presión impositiva, orientaciones oficiales contradictorias, amenazas provinciales de expropiaciones fueron, entre otros, los temas recurrentes. La disconformidad de los industriales con el gobierno también se reflejó en dicha columna. Así, en el año del centenario de la Unión Industrial Argentina, el diario hacía un repaso de todos los padecimientos sufridos por la actividad manufacturera como resultado de las políticas intervencionistas y señalaba la necesidad de proceder a una rápida desregulación de la economía. Los intentos de detener la inflación mediante controles de precios fueron criticados con la dureza habitual, cuando a comienzos de 1987 el diario entendió percibir claros signos del fracaso de la política en su momento conocida con el nombre de Plan Austral, y del intento de poner en marcha medidas de corte más dirigista<sup>88</sup>. Otra cuestión que motivó su comentario alarmado fue el proyecto de traslado de la Capital Federal, tema en el cual veía manifestarse con singular transparencia la falta de reflexión seria en la toma de decisiones oficiales. La iniciativa le resultaba sin justificación e improcedente en una situación económica y presupuestaria tan difícil. Además, se trataba, decía, de una resolución unilateral del Poder Ejecutivo, carente de la imprescindible discusión nacional, minuciosa y profunda<sup>89</sup>. También las inundaciones que afectaron una parte del noroeste de la Provincia de Buenos Aires le dieron otra razón para criticar al gobierno por su incapacidad, aducía, para realizar una adecuada política de prevención y de reparación de los damnificados<sup>90</sup>.

¿Había sido acertado optar por Alfonsín considerándolo el "mal menor"? A la luz de su actuación presidencial, muchos de quienes pensaban como *La Nación* debían hacerse esa pregunta. El interrogante aparecía como tanto más pertinente si se tiene en cuenta que uno de los motivos, no el único por cierto, que había llevado a ese "electorado independiente" a volcarse en 1983 a favor del candidato radical fue el temor que provocaba un eventual

avance del sindicalismo peronista en caso de imponerse Luder. El anticorporativismo de los alfonsinistas había tenido entonces el carácter de una valla para contener la entrada de los dirigentes sindicales en puestos claves del Estado. Cuando en abril de 1987 el diario comentó el nombramiento del dirigente gremial peronista Carlos Alderete para ocupar el cargo de ministro de Trabajo, era clara su decepción y más nítidos aún sus presagios negativos. ¿De quién sería representante Alderete? ¿De los sindicatos ante el gobierno o de éste ante aquéllos? La causa de la designación se buscaba, además, en las preocupaciones electorales del radicalismo, a las que, según intuía, se acordaba primacía sobre la buena marcha de la economía o el ordenamiento de la sociedad<sup>91</sup>. La entrada de Alderete en el Poder Ejecutivo movió a Juan Alemann a escribir en el matutino un interesante artículo para explicar desde la óptica de la lucha de clases la política económica y sindical de la dictadura militar. El logro principal del "proceso" había sido, de acuerdo con su punto de vista, deteriorar el protagonismo del movimiento sindical y reducir su capacidad de participar en los conflictos por la distribución del ingreso. Consecuente con su razonamiento, Alemann aseveraba que en 1983 Alfonsín había recibido una fracción de sus apoyos electorales de quienes no querían un sindicalismo capaz de desempeñar roles relevantes en la política y, menos aún, en la conducción del Estado. Por ello, el ex funcionario del régimen militar expresaba su sorpresa: "En lugar de considerar el debilitamiento sindical como una bendición para el país, procurando construir sobre esa base una democracia moderna y una economía próspera y no inflacionaria, el propio gobierno se empeña en fortalecer el poder sindical"<sup>92</sup>. Tanto el matutino como Alemann debieron sentir confirmadas sus conjeturas más pesimistas al ver en poco tiempo progresar muchas demandas sindicales inocultablemente derivadas del espacio institucional cedido a los gremialistas peronistas. La iniciativa de designación de directores obreros en las empresas públicas, la formulación de nuevas leyes con más ventajas para el sector laboral, las políticas salariales más sensibles a los reclamos sindicales fueron, entre otras, las consecuencias inmediatas de las nuevas relaciones entre el gobierno y las organizaciones de representación de los asalariados. En todos los casos, los análisis editoriales se encargaron de formular objeciones no sólo puntuales a cada medida, sino al espíritu de pacto corporativo que entendía discernir detrás de ellas. "Nunca debió el independiente votar por el mal menor"<sup>93</sup> sostuvo a mediados de 1987 Ricardo Zinn, en ese momento columnista de *Ámbito Financiero*. Para Zinn, lo que buscaba Alfonsín con el acuerdo

con los sindicatos era asegurarse una amplia mayoría de sufragios en las futuras elecciones presidenciales para hacerse reelegir.

"Hacia el socialismo, por vía impositiva" fue el título del editorial publicado por *La Nación* el 12 de noviembre de 1987. Durante años, la tradición de la izquierda mundial se había escindido en la discusión sobre las "vías" al socialismo: revolucionaria, electoral, y una combinación de ambas conocida como el austromarxismo. Ahora, el diario fundado por Mitre realizaba su aporte al debate en un editorial que retomaba en muchos aspectos un artículo publicado poco antes con la firma de Alberto J. B. Caprile. Lo de socialismo no era una argucia discursiva, decía el editorial mencionado, sino que la palabra se empleaba en su acepción más descarnada y tradicional. El radicalismo y el justicialismo se habían puesto de acuerdo, explicaba, para llevar la presión tributaria a niveles incompatibles con el mantenimiento del sistema capitalista en la Argentina. Para algunos sectores del gobierno, continuaba el razonamiento, aumentar los impuestos era parte de una salida ingenua ante la crisis económica y, probablemente, buscaban sacar algún provecho electoral con el uso de los fondos fiscales; pero había también miembros de los "equipos oficiales y en particular en algunos sectores que tienen fuerte penetración en medios estatales de comunicación y en los ámbitos culturales y educativos (para quienes) la persecución al capital satisface tendencias ideológicas marxistas y encuentra en la exacerbación de la presión impositiva una vía ideal que no se atreve a plantear desembozadamente en el terreno político"<sup>94</sup>. Difícilmente el rechazo a la política del gobierno podía haberse expresado con términos más frontales; se había pasado de la oposición a la política tributaria a un plano muy distinto: la deslegitimación de las autoridades adjudicándoles por acción u omisión un proyecto de subversión del orden social. Y como si todo esto no fuera suficiente, el texto aludido tildaba a los gobernantes de antiguos y desactualizados ya que, aseveraba, la ideología socialista estaba por ser abandonada en el mundo por sus cultores de otrora.

Entre las colaboraciones con firma más contundentes contra el gobierno que publicó el diario, se encontró una de Arnaldo T. Musich titulada "El fracaso económico del presidente Alfonsín". Sin ambages, el autor sostenía que Alfonsín se había especializado en obrar de una manera distinta y opuesta a todo lo que anunciaba: su gobierno había significado la pérdida de una gran oportunidad para realizar reformas económicas de fondo; daba por descartado que, para justificarse, los radicales buscarían

depositar la culpa de su fracaso en un chivo emisario, y suponía que tratarían de encontrarlo en las grandes empresas del sector privado<sup>95</sup>. Alfonsín reaccionó *ipso facto*, y creyó pertinente devolver el ataque con la acusación implícita de que *La Nación* había sido vehículo de "un artículo periodístico terrorista"<sup>96</sup>, y descalificó totalmente las argumentaciones de Musich. Las páginas del matutino habían sido, poco antes, el soporte material donde en forma de espacio pago una fundación simpatizante del gobierno radical había publicado la traducción de un artículo del *Wall Street Journal* donde se criticaba el comportamiento económico de algunos grandes grupos empresarios<sup>97</sup>. Musich era dirigente de uno de los grupos allí mencionados que mantenía buenas relaciones con el partido oficialista. Una de las consecuencias inmediatas del artículo de Musich, además del airado discurso de Alfonsín, fue que los encargados de la comisión de finanzas del sector del radicalismo que apoyaba la fórmula Angeloz-Casella para las elecciones de 1989, devolvieran al grupo empresario en cuestión una contribución económica. *La Nación* reflexionó en primera página sobre el tema de los aportes económicos a las campañas de los partidos, y dijo que era tradicional en países como la Argentina que los grandes grupos empresarios contribuyeran simultáneamente a financiar las campañas de los dos o tres postulantes con más posibilidades de éxito. Los sindicatos, destacaba, estaban haciendo esfuerzos considerables para sufragar los gastos de la campaña de la precandidatura de Carlos Saúl Menem. Pero en lo más sustancial, aun sin profundizar en el tópico, hacía también referencia a posibles contradicciones interempresarias susceptibles de explicar la aparición en el periódico norteamericano del litigioso artículo. Más que el gobierno radical, quienes podían estar interesados en fomentar la crítica a las empresas acusadas desde el *Wall Street Journal*, aseveraba, podían ser aquellos intereses directamente perjudicados por los privilegios proteccionistas de que las mismas gozaban. Señalaba, además, que el radicalismo y el presidente se habían reconciliado con la empresa donde trabajaba Musich, en tanto ella había declarado no compartir los ácidos juicios económicos y políticos emitidos como opinión personal por su alto miembro directivo<sup>98</sup>.

La situación de malestar que provocaba la política económica del gobierno de Alfonsín en los sectores dedicados a la producción agropecuaria tuvo una de sus mayores manifestaciones en la apertura de la exposición de la Sociedad Rural Argentina de 1988. Tal como lo señalamos al referirnos al triunfo electoral del radicalismo en 1983, la corporación ruralista había festejado con

alivio y hasta como propio aquel éxito, pero cinco años después fue con una tumultuosa silbatina que expresó su desilusión frente a la obra del gobierno. El evento opositor correspondió a una coyuntura muy especial; la política oficial se orientaba a la búsqueda de un acercamiento con sectores industriales y del comercio, una de cuyas primeras consecuencias fue provocar por la vía de impuestos a las exportaciones tradicionales una disminución de los ingresos del agro. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Guillermo Alchouron, en su discurso no sólo criticó la posición adoptada por el gobierno: además, atacó directamente a los sectores industriales que, dijo, vivían al calor de la protección estatal y de tipos de cambio preferenciales. Tanto el ruidoso repudio a que fue sometido el primer magistrado y otros miembros del Poder Ejecutivo, cuanto la escisión planteada en el seno de los sectores propietarios, fue reflexionada desde un editorial de *La Nación* con términos desaprobatorios. No se podía lesionar la investidura presidencial, argumentaba sobre la actitud del público de la Rural, con conductas propias de barras bravas de estadios de fútbol; igualmente rechazaba la idea de revivir "en el país las antinomias estériles entre el campo y la industria (...) Ambos sectores se complementan y se necesitan recíprocamente hasta el punto de configurar un solo ámbito empresario"<sup>99</sup>. Decía, además, que en el gobierno todavía había funcionarios propensos a escuchar las demandas de los productores agrarios, en cierta forma, una invitación a no cortar totalmente los puentes con las autoridades. Esa perspectiva más conciliadora no le impidió reaccionar con singular dureza, un par de días más tarde, cuando abordó editorialmente unas declaraciones del canciller Dante Caputo, quien entre otras consideraciones había, según citaba textualmente, calificado al sector agropecuario de "desgracia de la Argentina (...) responsable del atraso nacional (...) enojado porque estamos luchando contra la dependencia (...) chusma inaceptable (...) sector incapaz, especulativo e inútil (...) adulador de dictadores e inspirador de torturas"<sup>100</sup>. El comentario editorial parecía no poder dar crédito a las expresiones que transcribía y las comparó con los discursos de los peronistas de la primera época; al mismo tiempo, recordaba al alto funcionario que ideologías parecidas ya se habían divulgado en el país, y las caracterizaba como vagas e intelectualmente simples, aun cuando podían ser efectivas para la movilización demagógica y la agitación de fantasmas internos y externos acusados como responsables de todas las dificultades nacionales<sup>101</sup>. En ese clima política y socialmente crispado se aproximaban las elecciones presidenciales. Otra vez volvía a plantearse la pregunta sobre cuál sería el "mal menor"

para los "sectores independientes" a quienes el matutino había aconsejado, cinco años antes, votar por Alfonsín.

En 1989 el diario tiraba alrededor de 200.000 ejemplares. Una encuesta realizada en febrero de ese año revelaba que 36,8% de los lectores de *La Nación* manifestaba intenciones de votar por Álvaro Alsogaray; el 30,5% pensaba sufragar por Eduardo Angeloz; sólo un 7,7% optaba por Carlos Saúl Menem, en tanto un 25% se mostraba indeciso. En cuanto a los lectores de *La Prensa* la distribución era del 70% para Alsogaray y el 30% de indecisos. En fin, la relación entre la lectura de un diario y la preferencia electoral era igualmente interesante en el caso de *Crónica*: 66,9% por Menem; 9,1 % por Angeloz; 1% por Alsogaray, y 21% de indecisos<sup>102</sup>. La idea de que ningún candidato conseguiría mayoría propia en el Colegio Electoral para asegurarse directamente el acceso a la presidencia llevaba a reflexiones del más diverso carácter sobre las posibles alternativas por abrirse con las elecciones de mayo de 1989. Varios estudios electorales anunciaban como probable que el peronismo obtuviera la primera minoría, pero no así los sufragios suficientes en el Colegio Electoral. Ocho meses antes de las elecciones, Bonifacio del Carril escribió en *La Nación* un largo artículo donde invitaba a pensar sobre las alternativas que podrían abrirse ante un resultado electoral de esas características. En su opinión, los colegios electorales o el Congreso terminarían convertidos en la instancia decisiva; era inconstitucional suponer que la primera minoría debía ser considerada como mayoría absoluta. Respaldaba su posición en antecedentes históricos, y afirmaba que el nuevo presidente, seguramente, saldría de un acuerdo posterior a las elecciones y llamaba, en consecuencia, a tomar actitudes responsables a los partidos y a sus dirigentes<sup>103</sup>. Lo que en el citado artículo era todavía una meditación sin definiciones políticas directas, se convirtió en la proximidad de las elecciones en una temática explícita de confrontación. Oscar Alende, diputado nacional y titular del Partido Intransigente, formuló en marzo de 1989 un conjunto de consideraciones que fueron comentadas polémicamente en un editorial que dio al diario la ocasión de definir su propia posición. El dirigente intransigente había sostenido que el gobierno preparaba un acuerdo para desvirtuar en el Colegio Electoral el resultado de las elecciones, previsiblemente adverso al partido oficialista. Según Alende, los radicales buscarían pactar en el Colegio Electoral con sectores que habían sido solidarios con la dictadura militar y con la derecha liberal. *La Nación* defendió el procedimiento constitucional para la designación presidencial por vía indirecta o de segundo grado y afirmó

que, por el contrario, los principios de la Carta Magna querían ser desvirtuados por quienes creían que la primera minoría otorgaba sistemáticamente el triunfo; eso sería, estimaba, un alzamiento contra el estado de derecho. Retomaba las palabras de Alende para preguntarse si éste había querido decir que todos los votos no eran iguales y si haber apoyado al "proceso militar" o ser de "derecha liberal" era una condición inhabilitante para hacer negociaciones políticas y si cualquier eventual coincidencia con ellos era un "acuerdo palaciego"<sup>104</sup>.

En abril de 1989, el semanario católico *Esquiú* publicó una nota dedicada a analizar las orientaciones políticas de los principales diarios de Buenos Aires. La manera de caracterizar a *La Nación* revelaba cierta ambigüedad; combinaba la crítica ligeramente irónica con el respeto profesional. El diario de los Mitre había logrado persuadir a los sucesivos gobiernos, y en especial a los militares, decía *Esquiú*, de que era una verdadera institución de la República. Atribuía a su secretario de redacción, Claudio Escribano, la labor de haber "representado invariablemente la tendencia a polarizar a la burguesía laica en torno a las posiciones políticas del radicalismo"<sup>105</sup>. El mencionado artículo definía la estrategia de *La Nación*, de acuerdo con lo que llamaba el "proyecto Escribano", como orientada a convencer a su público liberal o independiente, pero en su mayoría no radical, de que la UCR era la única alternativa política realista y, al mismo tiempo, tratar de alentar a dicho partido a abandonar posibles tentaciones populistas. En la coyuntura electoral esto se reflejaba en el apoyo que el matutino daba, en opinión de *Esquiú*, a la candidatura presidencial de Eduardo Angeloz.

*La Nación* publicó dos días antes de las elecciones del 14 de mayo de 1989 un nuevo artículo de Bonifacio del Carril, explicativo de los mecanismos previstos por la Constitución para la designación del presidente y vice; destacaba el carácter normal de eventuales acuerdos si ningún candidato reunía por sí solo el número de electores para formar mayoría propia: "No debe hablarse de maniobras ni de trapisondas. Los acuerdos entre electores para elegir presidente son propios y naturales del sistema de elección de segundo grado, que, en caso contrario, carecería de sentido"<sup>106</sup>. Los pactos, decía del Carril, podían ser igualmente legítimos y constitucionales si se realizaban en los colegios electorales o en la segunda de las instancias previstas, el Congreso que reuniera a los miembros del Senado y de la Cámara de Diputados. En esta segunda instancia podía ocurrir que los legisladores disconformes con resultados previsiblemente negativos para su candidato se resistieran a formar quórum, y a ellos Del

Carril les recordaba sus obligaciones con las instituciones democráticas. No hacía falta una lectura excesivamente suspicaz para percibir detrás de todo el mencionado texto las hipotéticas y muy previsibles dificultades que se presentarían si el candidato peronista obtenía la primera minoría con los sufragios de la ciudadanía, y no lograba la mayoría para ser designado en el Colegio Electoral o en el Congreso. En otros términos, Del Carril pedía a los legisladores peronistas no obstaculizar los procedimientos que podrían consagrar al candidato de la segunda minoría, Eduardo Angeloz, todo ello en nombre de las virtudes republicanas. Con una óptica distinta, aunque en parte complementaria con la pre-ocupación de Del Carril, en la víspera de las elecciones el diario publicó un extenso artículo del general (R) Roberto F. Domínguez, de quien se aclaraba su condición de oficial de Estado Mayor y ex comandante del tercer cuerpo de Ejército. El hombre de armas puesto a politólogo se esmeraba en demostrar que, independientemente de quién ganara las elecciones, existía una serie de factores condicionantes que dejaba muy pocas opciones al futuro presidente, fuese Menem o Angeloz. El artículo llevaba como ilustración un sillón presidencial vacío amarrado con una veintena de cuerdas, para sugerir la imposibilidad de desplazarlo que encontraría su próximo ocupante. "La Argentina previsible", así se titulaba la nota, era un país en crisis y con agudización de todos sus problemas. Escrito en clave catastrófica, las soluciones propuestas por el autor —liberalismo económico, amnistía a los militares, prevención de posibles rebrotes terroristas y de desbordes populares— se diluían en un espíritu global pesimista que muy difícilmente pudiera dar elementos para el esclarecimiento a quienes aún no habían decidido su voto. Sólo un atisbo de esperanza dejaba el general Domínguez a sus lectores: el candidato triunfante no podría sino olvidar sus programas y promesas electorales y, quizás, la dirigencia política cambiara de mentalidad<sup>107</sup>. El editorial del día de las elecciones celebraba la importancia del evento, especialmente significativo, decía, si se tenía en cuenta que esa manifestación de la maduración del régimen democrático ocurría en un contexto de crisis económica de una gravedad superior a todos los conocidos en los tiempos recientes. Sin toques dramáticos, invitaba a votar de manera reflexiva, sin dejarse influir excesivamente por el malestar generado por la crisis: "Ni la democracia puede sacrificarse, ni las tribulaciones sociales y económicas ignorarse. Éste es el desafío que las elecciones de hoy plantean a la República"<sup>108</sup>. Así, un tanto críptico, el matutino eludía dar una definición explícita de sus propias preferencias.

Cuando se conoció el triunfo de Menem, el diario centró su análisis en una serie de sugerencias que repetía en muchos aspectos la misma tónica e ideas de los editoriales escritos en otras circunstancias de cambio de equipos gobernantes. Destacaba la necesidad de preservar las instituciones democráticas y de evitar las tentaciones de creer que el poder logrado era absoluto. El orden constitucional, decía, podía corromperse o desvirtuarse si quienes ejercían el gobierno avanzaban sobre las libertades de los ciudadanos o sobre el ejercicio de la propiedad, para imponer a las minorías exigencias que podían afectar derechos inalienables. Las orientaciones demagógicas o populistas, destacaba, no serían toleradas por la sociedad. La referencia a la crisis económica y social aparecía en la reflexión como un nexo entre las limitaciones necesarias que debía tener en cuenta el nuevo mandatario y las condiciones que habían jugado en contra del partido radical. Del fracaso de su antecesor, el matutino le proponía a Menem sacar una lección adecuada, debía comprender "con la fuerza irrefragable de los hechos, que las tendencias intervencionistas, reguladoras, estatizantes y falsamente distribuidoras de riquezas inexistentes deben ser reemplazadas por caminos diferentes, sobre la base de la libertad y el estímulo de la iniciativa privada, que permita el retorno de capitales argentinos y la presencia de inversiones extranjeras, a fin de que los sectores populares encuentren alivio a sus necesidades y el país todo el destino de progreso y crecimiento anhelado"<sup>109</sup>. ¿Escucharía Menem los consejos? El temor a la repetición de una experiencia similar a la protagonizada por anteriores gobiernos peronistas estaba presente en el pensamiento del matutino. Así, en oportunidad de un largo análisis sobre la necesidad de acortar el plazo de entrega de la presidencia al mandatario electo, volvía a recordar a éste que el país no aceptaría comportamientos gubernamentales autoritarios ni búsqueda de legitimidades de inspiración corporativista. La razón de esta advertencia fue una declaración de Menem en el sentido de condicionar su asunción adelantada de la presidencia a una demanda conjunta de las fuerzas armadas, los sindicatos, las entidades empresarias y la Iglesia. Esa idea carecía de sentido, decía *La Nación*, porque las mencionadas instituciones y entidades no tenían la representatividad política del pueblo. El nuevo mandatario debía, agregaba, ajustarse a los preceptos constitucionales y no buscar fuentes de legitimidad ajenas a las allí prescriptas<sup>110</sup>. En esa coyuntura tensa en la que se discutía la aceleración de la sucesión presidencial, las críticas de la columna editorial tomaron, también, como blanco a Alfonsín. Le objetaba falta de realismo para encarar los

momentos postreros de su gestión. Como para colmar la indignación del editorialista, el presidente había caracterizado a la Constitución Nacional como “de la época de las carretas”, al mismo tiempo que anunciaba la decisión de gobernar de modo enérgico hasta completar su mandato. El diario alentaba, en cambio, acortar ese periodo cuya prolongación podía, a su entender, perjudicar al futuro presidente<sup>111</sup>. La alarma por la creciente violencia protagonizada por sectores populares que saqueaban locales de venta de comestibles cundía en el país, y el matutino creyó conveniente destacar que las causas del desorden no se hallaban sólo en la carestía generada por la hiperinflación, sino también en grupos extremistas de izquierda organizados especialmente para provocar desmanes<sup>112</sup>. Cuando al fin llegó el día de la asunción de Menem, el editorial trasuntó alivio en más de un aspecto. Muchos signos, explicaba, parecían indicar que “la vieja antinomia de más de cuatro décadas de duración entre el peronismo y sectores democráticos podía estar llegando a su fin (...) En particular las orientaciones anunciadas en materia económica y social permiten suponer que la vida política nacional inicia caminos que pocos imaginaban (...) Al filo de los 90, la diferencia con una década atrás es impresionante (...) Más allá de los hombres, actores, a veces, de papeles que la historia les reserva a pesar de ellos mismos, bien puede ocurrir que algo haya cambiado en la República —como en el mundo— y quizás no estamos, todavía, en condiciones de advertirlo”<sup>113</sup>. Días más tarde, al analizar el mensaje pronunciado por el nuevo presidente ante el Congreso, la satisfacción desbordaba las columnas del editorial que, pleno de citas textuales, mostraba las coincidencias del primer mandatario con las ideas difundidas durante varias décadas desde sus páginas. Todo indicaba el fin de un ciclo de la historia argentina; y a tal punto era así que, como un elogio cuya alta dimensión simbólica no podía pasar desapercibida a sus lectores, *La Nación* afirmaba que Menem había pronunciado palabras dignas de ser suscriptas por los grandes de la organización nacional: Mitre, Sarmiento y Avellaneda<sup>114</sup>.

#### La Nación: 1983-1989

*La reflexión política de La Nación a partir del retorno del régimen democrático se orientó preferentemente a explicar qué se debía hacer para consolidar las instituciones. Sus puntos de vista podían no coincidir con los de otros actores políticos y sociales partidarios de la democracia. Sin embargo, en todo momento la dis-*

cusión se mantuvo en el seno de un campo acotado por la coincidencia básica en cuanto al valor de la democracia y la necesidad de asegurar su continuidad. Aun cuando el matutino discrepó en múltiples aspectos con el gobierno de Alfonsín, conservó siempre su identificación con el proyecto de fortalecer el orden institucional. Según su opinión, hasta 1983 el gran problema para la estabilidad de un régimen pluralista residía en el hecho de que la mayoría electoral correspondía al peronismo, al que caracterizaba como no democrático. En esa apreciación el diario coincidía con el radicalismo. El triunfo de Alfonsín en la elección presidencial le hizo considerar que se abría una nueva época. Otro problema importante, a su juicio, era terminar con la politización militar, y en esto también se acordaba con los radicales. En fin, el anticorporativismo de Alfonsín apuntaba fundamentalmente a la acción colectiva del movimiento sindical, y sólo marginalmente a los empresarios; allí había otro tema de convergencia con La Nación. De distintas maneras y por causas diferentes, el gobierno radical defraudó las expectativas de los sectores del pensamiento liberal-conservador en cuanto a resolver esos tres grandes problemas. No supo sostener en el tiempo la primacía lograda sobre el peronismo, prolongó dubitativamente la resolución de las tensiones militares y no pudo disminuir el peso de los sindicatos en la vida política. Además, tal como había ocurrido en todos los gobiernos anteriores, civiles y militares, se reprodujo la ya clásica situación de ingobernabilidad, y empresarios y asalariados quedaron insatisfechos en sus demandas sectoriales. Aun cuando globalmente fueron los empresarios quienes más se beneficiaron en esos años, esto no los llevó a expresar mayor solidaridad con el gobierno.

Los radicales habían recibido de los militares un aparato estatal cuya autoridad frente a la sociedad se hallaba totalmente en crisis. Más allá de algunas rupturas de fuerte contenido simbólico producidas luego del retorno a la democracia, como el juzgamiento de las juntas y de algunos responsables mayores del genocidio, en el plano del Estado no se produjo un verdadero corte con el período precedente y, en consecuencia, el nuevo gobierno cargó con el descrédito de las instituciones. Coherentes con su ideología, los radicales parecían creer que la clave del cambio hacia una nueva situación se hallaba automáticamente en la vuelta al libre funcionamiento del régimen de representación por medio de partidos políticos. De allí derivaba la base conceptual de su anticorporativismo, portadora de una idea del rol de la ciudadanía muy distante de la complejidad de las democracias modernas. Sin embargo, ése era el componente más definido de sus concepciones ideológicas iniciales; en los restantes dominios de la práctica social

oscilaron entre orientaciones divergentes y aun mutuamente excluyentes. Incluso, en la cuestión del anticorporativismo, terminaron invirtiendo de hecho sus postulados programáticos. Sin que esta ausencia de claridad en las metas fuese necesariamente el factor principal, contribuyó a granjear al gobierno de Alfonsín la animadversión de distintos sectores sociales, que se consideraban perjudicados por las iniciativas oficiales, sin atraerle el apoyo de aquellos que, eventualmente, resultan beneficiados.

El rechazo de La Nación al gobierno de Alfonsín nunca fue total. Las expectativas de una reorientación más acorde con las ideas del matutino y con los intereses de las categorías dominantes no fueron en ningún momento completamente abandonadas. La amenazante presencia del peronismo constituyó un factor de relativización de los conflictos con los radicales. El esfuerzo pedagógico del diario para persuadir sobre las bondades del liberalismo económico coincidió con el renovado interés por la acción ideológica de los principales sectores socioeconómicos, que resolvieron conquistar la opinión de la sociedad, convencidos de que ya no podían contar con los militares para salvar sus intereses en situaciones de peligro. En ese sentido, puede afirmarse que en los años analizados se registró un desplazamiento político del conjunto de las categorías dominantes, dispuestas a invertir ideológicamente en la democracia como no lo habían hecho nunca hasta entonces. La relativa participación que Alfonsín acordó a los grandes intereses socioeconómicos en los sistemas de toma de decisiones, más allá de las ambivalencias, contribuyó a reconciliar al gran empresariado con la democracia. Como sostiene Maurice Duverger, a los regímenes democráticos occidentales cabe caracterizarlos, en realidad, como plutodemocracias, en tanto combinan el poder de la riqueza con el de los representantes designados por el voto de la ciudadanía<sup>115</sup>. Los radicales no se mostraron totalmente decididos a concretar un juego político plutodemocrático, pero tampoco dejaron de dar importantes pasos en ese sentido. También la ambigüedad, en este aspecto, les generó conflictos con sus aliados empresarios pero, de todas maneras, sus iniciativas reforzaron la incorporación de dichos sectores sociales a las reglas del juego político democrático. El paulatino pero persistente giro hacia el liberalismo económico del radicalismo y las garantías que en 1989 ofrecía su candidato presidencial acortaron, en buena medida, la distancia existente entre dicha fuerza política y los sectores de pensamiento liberal-conservador. Con menos convicción que seis años antes, quienes decodificaban la realidad política en los mismos términos que el matutino volvieron a considerar al postulante radical como el "mal menor".

El año 1989 estaba predestinado a ser histórico desde hacía mucho tiempo: se celebraría el bicentenario del nacimiento político del llamado mundo burgués. El derrumbe del muro de Berlín le dio a ese año un singular significado: el museo de la historia inauguraba una sala para el "hecho maldito" de ese mundo, el comunismo soviético. Coincidencia: Menem mediante, ese mismo año el peronismo, alguna vez caracterizado por John William Cooke como el hecho maldito del país burgués, era asimilado por éste. Así, casi al mismo tiempo, las dos amenazas que habían inquietado a los lectores de La Nación, y no sólo a ellos por cierto, hacían mutis por el foro. El nuevo gobierno peronista convertía el peligro de otrora en un actor altamente contemporizador, que, sin duda a sabiendas de su mala imagen pasada, buscaba hacerse disculpar por la gente de pro. Los escombros de un muro habían sepultado el fantasma amenazante de Vladimir Ilich Uliánov. La obra de albañilería política de Menem inhumaba el de Juan Domingo Perón. Los críticos de ambas iniciativas podían recordar a aquellos padres fundadores, y pensar que habían sembrado leones y que la cosecha de herederos no estaba a la altura de las ideas de cambio social por aquéllos anunciadas. Quienes habían temido el ascenso de Menem vivían la hora de la divina sorpresa; D. Home lo apodararía simpáticamente Capicúa; se le podía disculpar, incluso haber cambiado en el pasado reciente nombres de calles y plazas. Transcurrido el primer año de su gobierno, un analista político equiparó a Menem con Urquiza: poncho y galera, pero en lo esencial, bisagra entre el país de caudillos telúricos y la Argentina institucional, liberal y conservadora. Después de Urquiza vendría Mitre. La imagen tenía su atractivo pero, en realidad, el desarrollo político representado por Menem podría interpretarse mejor en un sentido inverso. Al revés de lo ocurrido en el siglo pasado, ahora el desplazamiento se daba desde el centro urbano, moderno y complejo, hacia el interior tradicional y respetuoso de los poderes establecidos. Menem significaba el predominio del peronismo de las provincias pobres sobre el de las zonas ricas. Estas últimas habían perdido el dinamismo en 15 años de desindustrialización y con ese proceso se dieron las condiciones para el retroceso del peronismo urbano y el debilitamiento del sindicalismo. En sus momentos de esplendor, ambos actores habían reflejado en la escena política nacional y en el seno del peronismo los efectos de los conflictos sociales propios de una sociedad que se industrializaba. Los sindicatos habían construido organizaciones burocráticas de una consistencia que hubiera sorprendido a Max Weber, frente a las cuales fracasaron varios proyectos para desarticularlas. Pero la crisis de la Argentina industrial y la regresión de la modernización ampliaron el espacio

de los sectores más tradicionales del peronismo. Su visión de la política no era burocrática sino nepotista; en lugar de las estrategias populistas estatales, preservadoras de una cuota alta de universalismo, preferían el particularismo clientelista a la antigua; sustituían la institucionalización de los pactos sociales por la informalidad de las charlas de sobremesa. Proyectados al centro del poder político nacional, esos sectores más tradicionales del peronismo iniciaron una gestión en la que cierto realismo mágico se combinó con la realpolitik. La segunda les deparó aliados en los sectores socioeconómicos dominantes, con quienes comenzaron a construir el más singular bloque de poder hasta entonces conocido en el país.

Desde 1989, para emplear el concepto de Duverger, la articulación plutodemocrática se consolidaba en la Argentina. El programa liberal-conservador del gobierno satisfacía las expectativas de las categorías dominantes, que veían ampliar el consenso ideológico detrás de las propuestas por ellos defendidas desde hacía varias décadas. Se estaba lejos del optimismo del Centenario, pero era necesario remontarse a los tiempos de la presidencia de Marcelo T. de Alvear para hallar un gobierno, designado por sufragio universal totalmente libre, que revelara tan buena predisposición para aceptar como legítimas las demandas de los principales sectores socioeconómicos. El diario compartía con esos sectores el apoyo al proyecto gubernamental, si bien, como había ocurrido en otras ocasiones, por el carácter ético-político de su discurso, no podía dejar de llamar la atención sobre aspectos que inquietaban a la parte menos materialista de su "opinión pública". Así, con la Argentina de Menem se había inaugurado una nueva etapa para el país y para La Nación.

#### NOTAS

<sup>1</sup> *La Nación*, 11-12-1983, pág. 8.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Álvaro Alsogaray: "Ante una nueva oportunidad", *La Nación*, 11-12-1983, pág. 11.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *La Nación*, 15-12-1983, pág. 8.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *La Nación*, 13-4-1984, pág. 8.

<sup>8</sup> *La Nación*, 3-1-1984, pág. 8; 7-1-1984, pág. 8.

<sup>9</sup> *La Nación*, 18-1-1984, pág. 6.

<sup>10</sup> *La Nación*, 16-4-1984, pág. 9.

<sup>11</sup> *La Nación*, 27-4-1984, pág. 8.

- 12 *La Nación*, 29-4-1984, pág. 8.
- 13 Raúl Prebisch: "Hacia el consenso en la recuperación", *La Nación*, 13-5-1984, 3<sup>a</sup> secc., págs. 1 y 6.
- 14 *La Nación*, 5-1-1984, pág. 8.
- 15 *La Nación*, 11-2-1984, pág. 6.
- 16 *La Nación*, 10-3-1984, pág. 6; 22-3-1984, pág. 8.
- 17 *La Nación*, 11-4-1984, pág. 8.
- 18 *La Nación*, 23-9-1984, pág. 8.
- 19 *Ibid.*
- 20 *La Nación*, 28-9-1984, pág. 8.
- 21 *La Nación*, 12-10-1984, pág. 8.
- 22 Jaime Potenze: "El fin de la censura; ahora el Código Penal", *La Nación*, 29-2-1984, pág. 9. Sobre el tema de la censura cinematográfica, *La Nación* publicó el 1-4-1984 un editorial donde comentaba elogiosamente la eliminación del Ente Nacional de Cinematografía.
- 23 *La Nación*, 9-4-1984, pág. 8.
- 24 *La Nación*, 1-3-1984, pág. 6.
- 25 *La Nación*, 12-4-1984, pág. 8.
- 26 *La Nación*, 29-5-1984, pág. 8; 30-5-1984, pág. 8.
- 27 *La Nación*, 3-6-1984, pág. 10.
- 28 *La Nación*, 20-6-1984, pág. 8.
- 29 *La Nación*, 26-6-1984, pág. 8.
- 30 Manfred Schönfeld: "Realización de un pequeño plan tipo UNESCO de monopolio de comunicaciones, en el país", *La Prensa*, 16-8-1984, pág. 8.
- 31 *La Nación*, 4-3-1985, pág. 6.
- 32 *La Nación*, 16-3-1985, pág. 6.
- 33 *La Nación*, 12-4-1985, pág. 6.
- 34 *La Nación*, 24-4-1985, pág. 6.
- 35 Declaraciones publicadas por *La Razón*, 9-4-1985.
- 36 *La Nación*, 14-4-1985, pág. 8.
- 37 *La Nación*, 20-4-1985, pág. 6.
- 38 *La Nación*, 7-5-1985, pág. 8.
- 39 *La Nación*, 21-5-1985, pág. 8.
- 40 *Ibid.*
- 41 *La Nación*, 16-6-1985, editorial, pág. 8, y opiniones de Roberto Alemann y Luis García Martínez en el suplemento económico.
- 42 *La Nación*, 22-6-1985, editorial, pág. 8, y artículo de Jorge Oria: "Economía de guerra y ahorro forzoso".
- 43 Arnaldo Musich: "El programa de reforma económica", *La Nación*, 24-6-1985. Alberto Benegas Lynch (h): "Desatar el nudo gordiano", *La Nación*, 26-6-1985, sección Economía y Finanzas.
- 44 Adalbert Krieger Vasena: "Decadencia o modernización", *La Nación*, 30-6-1985, 3<sup>a</sup> secc.
- 45 *La Nación*, 1-7-1985, pág. 8; 3-7-1985, pág. 8.
- 46 *La Nación*, 6-7-1985, pág. 8.
- 47 *La Nación*, 14-8-1985, pág. 8.
- 48 *Revista Libre*, 24-1-1985. Reproducido en *La ficción política*, Sudamericana, Buenos Aires, 1985, pág. 122.

- 49 *Ámbito Financiero*, 29-7-1985, pág. 7.
- 50 *La Nación*, 31-7-1985, pág. 8. El editorial se titulaba: "La publicidad oficial".
- 51 *La Razón*, 2-8-1985. Reproducido en Pablo Giussani: *Los días de Alfonsín*, Legasa, Buenos Aires, 1987, pág. 239.
- 52 *La Nación*, 8-7-1985, pág. 6.
- 53 *La Nación*, 20-9-1985, pág. 8.
- 54 *La Nación*, 14-12-1985, pág. 8.
- 55 Ernesto Sabato: "Un juicio único a pesar de todo", *La Razón*, 11-12-1985.
- 56 *La Prensa*, 16-12-1985, pág. 6. El editorial se titulaba: "Ni paz, ni justicia, ni honor".
- 57 *La Nación*, 21-12-1985, pág. 8.
- 58 *La Razón*, 13-12-1985. Reproducido en Pablo Giussani: Ob. cit., pág. 423.
- 59 *La Nación*, 18-1-1986, pág. 4.
- 60 *La Nación*, 10-2-1986, pág. 8.
- 61 *La Nación*, 27-3-1986, pág. 8.
- 62 *La Nación*, 10-8-1986, pág. 8.
- 63 Hipólito Solari Yrigoyen: *Testimonios australes*, Galerna, Buenos Aires, 1986.
- 64 *La Nación*, 10-8-1986, artículo de José E. Campobassi en suplemento literario.
- 65 *La Nación*, 21-8-1986, pág. 6.
- 66 *La Nación*, 13-9-1986, pág. 8.
- 67 *La Nación*, 5-9-1986, pág. 8.
- 68 *La Nación*, 30-10-1986, pág. 8.
- 69 *La Nación*, 5-11-1986, pág. 8.
- 70 *Clarín*, 11-4-1986, pág. 25.
- 71 "Bajo el actual gobierno se perfecciona el control totalitario del periodismo", *La Prensa*, 16-6-1986, pág. 7.
- 72 "Injusto ataque de Papel Prensa", *Ámbito Financiero*, 7-7-1986.
- 73 "Papel Prensa y el Estado contra *La Prensa* y la prensa libre", *Ámbito Financiero*, 8-7-1986.
- 74 *Ámbito Financiero*, 9-7-1986.
- 75 "Manipuleo papelerero de los herederos del Proceso", *La Prensa*, 8-7-1986.
- 76 *La Prensa*, 10-7-1986, pág. 5.
- 77 *La Nación*, 7-1-1987, pág. 6.
- 78 Sobre el problema de la Marina, *La Nación*, 7-3-1987, pág. 6; sobre el discurso de Las Perdices, *La Nación*, 25-3-1987, pág. 6.
- 79 Sobre la sublevación de Semana Santa, *La Nación*, 18-4-1987, pág. 8; sobre el llamado a la reconciliación, *La Nación*, 20-4-1987, pág. 6.
- 80 *La Nación*, 9-6-1987, pág. 8.
- 81 *La Nación*, 26-6-1987, pág. 6.
- 82 Jaime Potenze: "El malestar de las fuerzas civiles", *La Nación*, 6-1-1988, pág. 7.
- 83 *La Nación*, 16-1-1988, pág. 8.

- <sup>84</sup> *La Nación*, 3-12-1988, pág. 8.
- <sup>85</sup> *La Nación*, 27-5-1987, pág. 8; 2-6-1987, pág. 8.
- <sup>86</sup> *Ámbito Financiero* publicó el informe entre el 22 y el 30-3-1988.
- <sup>87</sup> *Página/12*, 19-4-1988, pág. 1.
- <sup>88</sup> *La Nación*, 1-2-1987, pág. 8; 18-2-1987, pág. 8; 27-2-1987, pág. 6.
- <sup>89</sup> *La Nación*, 15-3-1987, pág. 8.
- <sup>90</sup> *La Nación*, 9-4-1987, pág. 8.
- <sup>91</sup> *La Nación*, 6-4-1987, pág. 8.
- <sup>92</sup> Juan Alemann: "Los sindicatos y el poder", *La Nación*, 9-4-1987, pág. 17.
- <sup>93</sup> Ricardo Zinn: "Cuando el mal menor es el mayor de los males", *Ámbito Financiero*, 22-7-1987, pág. 14.
- <sup>94</sup> *La Nación*, 12-11-1987, pág. 8.
- <sup>95</sup> Arnaldo Musich: "El fracaso económico del presidente Alfonsín", *La Nación*, 23-6-1988, pág. 9.
- <sup>96</sup> Discurso de Alfonsín, *La Nación*, 24-6-1988.
- <sup>97</sup> Solicitada de la Fundación Plural, *La Nación*, 5-6-1988.
- <sup>98</sup> "La UCR y el grupo Techint. Donde hubo fuego también hay cordial diálogo", *La Nación*, 30-6-1988, pág. 1.
- <sup>99</sup> *La Nación*, 16-8-1988, pág. 8.
- <sup>100</sup> "Réplicas a duros conceptos de Caputo", *La Nación*, 18-8-1988.
- <sup>101</sup> *La Nación*, 20-8-1988, pág. 6.
- <sup>102</sup> Rosendo Fraga con la colaboración de Marisa Szmukler: *Claves de la campaña electoral 1989*, Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, Buenos Aires, 1989, pág. 113.
- <sup>103</sup> Bonifacio del Carril: "Las mayorías en los colegios electorales", *La Nación*, 13-9-1988, pág. 9.
- <sup>104</sup> *La Nación*, 14-3-1988, pág. 8.
- <sup>105</sup> Revista *Esquiú* N° 1.509, 2 al 8-4-1989, pág. 9.
- <sup>106</sup> Bonifacio del Carril: "El quórum del Congreso en la elección presidencial", *La Nación*, 12-5-1989, pág. 9.
- <sup>107</sup> Roberto F. Domínguez: "La Argentina previsible", *La Nación*, 13-5-1989, pág. 7.
- <sup>108</sup> *La Nación*, 14-5-1989, pág. 8.
- <sup>109</sup> *La Nación*, 16-5-1989, pág. 6.
- <sup>110</sup> *La Nación*, 23-5-1989, pág. 6.
- <sup>111</sup> *La Nación*, 24-5-1989, pág. 6.
- <sup>112</sup> *La Nación*, 30-5-1989, pág. 6.
- <sup>113</sup> *La Nación*, 8-7-1989, pág. 6.
- <sup>114</sup> *La Nación*, 11-7-1989, pág. 6.
- <sup>115</sup> Maurice Duverger: *Janus. Les deux faces de l'Occident*, Fayard, Paris, 1972, pág. XIII.

## Conclusión: “Lo dijo *La Nación*...”

Las preguntas propuestas por Harold D. Lasswell para analizar los procesos de comunicación —¿quién dice qué a quién?— pueden ofrecernos un buen punto de partida para esta conclusión de nuestro estudio sobre el pensamiento político del diario *La Nación*. Comenzaremos por el primer *quién*. Descartemos la respuesta empirista centrada en las ideologías o cosmovisiones de los sujetos que redactaron los editoriales o estaban a cargo de la columna, o aun de los propietarios de la empresa. Los textos editoriales conformaron una combinación imposible de reducir a las contribuciones individuales; es notorio que los especialistas en cada tema, de algunos de quienes dimos los nombres y aspectos de sus respectivas trayectorias intelectuales, no necesariamente debían coincidir con el conjunto del pensamiento político expuesto en la columna a la que aportaban fragmentos sobre cuestiones de su especialidad. No faltó el caso —hemos señalado el de Alfonso de Laferrère en 1951— de un responsable de la página editorial que dejara el diario por disconformidad con la posición expresada en ella. Los cambios producidos en las orientaciones de la línea editorial no podrían remitirse a ninguna transformación en la composición de la empresa propietaria. Ese primer *quién* que se expresa en los editoriales tiene un carácter institucional, sus autores son intercambiables, no conforman en sentido estricto un grupo homogéneo, y sus posiciones políticas o creencias sobre lo social no son totalmente coincidentes o pudieron ser muy dispares: piénsese en Joaquín V. González, Leopoldo Lugones o Alberto Gerchunoff. Sin embargo, la columna editorial unifica objetivamente cada aporte y permite construir una especie de intelectual colectivo, cuyas ideas tienen eficacia no a pesar de la heterogeneidad de sus autores sino precisamente por ella. El espacio editorial del matutino operó como un *crisol* donde se produjo una fusión entre ideas presentadas, en principio yuxtapuestas, pero cuyo sentido cambia por la estructura o lugar institucional en que son expresadas. En toda ideología, la contigüidad modifica el contenido de cada fragmento. En tanto la

Argentina careció, en el período analizado, de un partido político, club intelectual o círculo de reflexión que asumiera la sistematización y difusión en gran escala de las ideas liberal-conservadoras, el rol de *La Nación* fue fundamental para cubrir esa tarea. Pero aun si esos otros actores hubiesen existido, quien podía llevar mejor adelante esa misión era, siguiendo a Tocqueville, un diario, el artefacto óptimamente dotado para poner una idea al alcance de muchos y dispersos sujetos en un mismo momento. *La Prensa* compartió idéntica vocación, pero su continuidad se vio afectada por la accidentada vida política del país de una manera más profunda que su colega.

Si el pensamiento político del matutino no puede reducirse al de los sujetos que elaboran los editoriales, tampoco cabría considerarlo una esencia. Para hacer inteligible la lógica de transformación de sus ideas hemos remitido, a lo largo de nuestro trabajo, a la situación en que la misma se registraba. No fue, naturalmente, el espíritu del numen fundador el que marcó nuevos rumbos ni imprimió los cambios. *La Nación*, al igual que todo actor político significativo, elaboró sus ideas a partir del entramado de relaciones del que participó. Sobre ese sistema de relaciones propuso explicaciones y sugirió orientaciones, y en ese proceso fue construyendo su identidad y sus ideas. Fue un *productor producido*, cuyo pensamiento reflejó los avatares de una realidad que contribuía a instituir y, por esa vía, se instituía a sí mismo. La capacidad de intervención de los editoriales sobre la vida política nacional fue de disímil importancia en cada etapa estudiada, aun cuando evidenció siempre una tensión entre tradición y estrategia que mostró el esfuerzo por no convertir la identidad del diario en una expresión meramente situacional. Pero la invocación de la tradición no hizo del matutino un actor integrista, y eso no sólo por su voluntad de actuar sobre la política, sino también en razón de la propensión a la ductilidad y el "acuerdo" presente en aquellas raíces.

Como todo actor que se halla colocado entre la sociedad y el Estado, el pensamiento político de *La Nación* pudo identificarse más con uno que con otro de esos dos planos de la práctica social, según los distintos problemas y circunstancias. Pero el esfuerzo más sistemático del diario, si bien no siempre lo logró, fue *mirar la política desde arriba*. En la búsqueda de ese objetivo se constituyó el *quién* de nuestra pregunta. Las coincidencias que por períodos el diario tuvo con el *arriba* social lo llevaron a una identificación con los sectores que ocupaban posiciones prominentes en la distribución del prestigio, de la riqueza y del poder político. Pero ser "tribuna de doctrina" suponía desempeñar un

lugar político e intelectual en un *arriba* propio, en muchos aspectos difícil de compatibilizar con las visiones e intereses de quienes se encontraban instalados en las cúspides mencionadas. Nunca la armonía podía ser total. Llevada a la perfección, su operación conceptual suponía mirar desde arriba a los de arriba, explicarles sus errores, aconsejarlos y relatarles el mundo que escuchaba como primicia en sus teletipos antes de convertirlo en letra impresa. En buena medida eso sucedió en *El tiempo de las certezas*, época en que el diario fue, básicamente, un actor político-intelectual. Bajo muchos aspectos, también para el matutino la *Nueva Argentina* introdujo un gran cambio: las visiones desde atalayas adversas disgustaban al poder político y nunca el campo de la prensa se había sentido tan amenazado. En esos años, el diario fue un actor político preocupado por su subsistencia, que mantuvo una línea de oposición al gobierno peronista hasta que éste modificó sus orientaciones iniciales y adoptó iniciativas que fueron apoyadas desde su columna editorial. El *quién* de la época del peronismo fue la combinación entre el actor político y el aparato institucional o empresa empeñado en sobrevivir; *La Prensa*, menos flexible, conoció otro destino. Mirar la política desde arriba en el periodo comprendido entre 1955 y 1976 fue, a la vez, fácil y difícil. Fácil, ya que todo se hizo pedestre y hacía falta elevarse muy poco para colocarse por encima de los actores. Las cúspides sociales perdieron prestigio y reconocimiento, la dirigencia de los partidos se enfrascó en discusiones sin vuelo, las corporaciones hicieron de la política una práctica mercantil de regateo, los militares destruyeron la autoridad del Estado a paso redoblado. Lo difícil para *La Nación* fue descubrir en esos años de *desconcierto* las claves de inteligibilidad de la situación. Un actor es siempre, como dice Bourdieu, un clasificador clasificado que se clasifica clasificando; como nunca antes, en esa época, los editoriales usaron el término *nostálgicos* creyendo clasificar la actitud de otros, cuando, en realidad, clasificaban la propia. Con desconsuelo ante el presente, el diario evocó con frecuencia la Argentina anterior a 1943 y la narró en forma tal que si un hipotético sociólogo se hubiera tomado el trabajo de leer sus editoriales desde los días del Centenario, se habría sorprendido al no hallar en dichos textos la imagen de ese paraíso perdido. *La Nación* fue, entre la caída de los dos gobiernos peronistas, un actor político e intelectual en cuyo pensamiento se reflejó la confusión reinante en los sectores sociales y políticos que le eran más próximos; perdió distancia con los intereses de las categorías dominantes y se hizo caja de resonancia de discursos corporativos. Los llamados a la cordura terminaron por sustituir su

vocación de otrora por la formulación de proyectos societarios de mayor alcance. Desde esa perspectiva módica miró la política desde arriba sin demasiado esfuerzo. La política argentina conservaba aún peldaños para descender, y así llegó el "proceso". En los editoriales del diario se expresaron los cambiantes puntos de vista de quienes saludaron la llegada de los políticos blindados como salvadores y los despidieron con horror y menosprecio. *La Nación* fue, en esos años, uno de los lugares, no el único, en que, a la luz del fracaso del autoritarismo y de la experiencia de autonomización política de los militares, los sectores de pensamiento liberal-conservador revaloraron las instituciones democráticas. A partir de 1983, encontrada la República, el diario buscó, también, su nuevo perfil. La dimensión ideológica de su acción editorial se vio acrecentada junto con el renovado interés de los sectores que compartían su visión social por conquistar consenso en la sociedad civil. Descartado el atajo militar, la lucha de ideas cobró una importancia desconocida desde hacía décadas. Dotar al otro de una matriz cognitiva, hacerle ver la realidad con los ojos "correctos", convencerlo de que la fuerza de las cosas limita las opciones, de que el mundo marcha irremediablemente hacia la dirección pregonada desde la propia perspectiva: la misión que desde antaño se dio a sí misma la "tribuna de doctrina" se reactualizó con la democracia. *Productor producido*, el actor político-intelectual pareció recuperar un poder de intervención muy superior al que tuvo en los decenios precedentes.

Pasemos a la segunda pregunta de Lasswell: *qué dijo La Nación*. Más allá de todas las modificaciones registradas en sus posiciones, el diario planteó a lo largo del periodo estudiado una cuestión central: cómo debía ser el orden social y político por constituir. En torno de este tema se articularon todas las preocupaciones de sus editoriales referidas al problema político.

Definir los rasgos principales de la meta deseada, los medios más adecuados para alcanzarla, los obstáculos inmediatos o previsible capaces de impedir su logro, fueron, según las épocas, los ejes en los cuales puso el acento. Sus consideraciones sobre el orden social y político suponían pensar el Estado, las relaciones entre los distintos sectores sociales y los sistemas de representación política. Como toda concepción sobre el orden social y político, la del matutino estaba orientada ideológicamente e implicaba una valoración del rol que debían asumir los distintos actores presentes en la sociedad argentina. Allí estaban expresadas sus afinidades sociales y políticas. La parcialidad de su enfoque se reveló fundamentalmente en los medios propuestos para aproximarse o llegar al fin ideal, cuya enunciación abstracta

se mantenía en un plano de relativa neutralidad. Liberalismo económico o economía dirigida, intervención estatal para amortiguar la desigualdad social o reclamos de menor acción compensadora del Estado en lo social, ampliación del sistema de participación política o apoyo a las medidas que proscribían candidatos con fuertes adhesiones electorales, fueron, como se vio, alternativas propuestas en distintos momentos por los editoriales. La proximidad del diario con los sectores socioeconómicos predominantes nos brinda una clave explicativa para analizar las variaciones de las iniciativas sostenidas o aconsejadas para construir el orden social y económico buscado. Si el fin tenía rasgos que invitaban a pensar en lo universal, los medios indicados se encontraban indisolublemente imbricados con los intereses de determinados actores que participaban en los conflictos políticos y sociales. El diario no era un instrumento de esos actores ni, tampoco, su vocero, pero mantenía con ellos una comunidad de ideas y de maneras globales de pensar la sociedad y la política. Sin embargo, el pensamiento del matutino tenía un carácter sistemático y permanente, y el de los sectores socioeconómicos mencionados era más superficial y espontáneo. El primero se inclinaba por la reflexión estratégica, y, aun cuando compartiera los prejuicios y temores de los segundos, podía ver más lejos, había hecho del pensar la política una profesión. Objetivamente, esa diferencia generaba tensiones entre *La Nación* y dichos sectores sociales. En muchas oportunidades el diario intentó explicarles cuál era la manera más conveniente de actuar para ampliar o preservar los intereses colectivos sin desatender por ello los propios, y encontró a sus interlocutores privilegiados encerrados en una estrecha y limitada defensa de sus demandas más inmediatas y economicistas. Así, el *qué* decían los editoriales nos lleva a nuestra tercera pregunta: *a quién* los dirigía.

Los destinatarios principales de la prédica editorial de *La Nación* fueron quienes estaban estratégicamente ubicados en las estructuras de poder social, político o económico. No necesariamente esos sujetos ocupaban posiciones en las cumbres, pero tenían, o se suponía que así era, capacidad de intervención en los procesos de toma de decisiones. A ellos el diario les explicaba cuál era la mejor manera de plantear y resolver los problemas del país. Esos interlocutores, según los momentos, podían encontrarse en la conducción del Estado, de los partidos políticos de oposición, en altos cargos de las fuerzas armadas, en la conducción de entidades corporativas empresarias o sindicales, en la dirección de instituciones culturales o en otros ámbitos que de manera directa o indirecta incidían sobre el desarrollo de la vida

social y política. El lector menos preocupado por responsabilidades societarias encontraba también, en esa columna, ideas para interpretar la realidad circundante, pero no era a él a quien el matutino se dirigía preferencialmente. *La Nación* le hablaba al poder con persuasión analítica, a veces con rigor, otras con ironía, y no faltaron ocasiones, como se vio, en que lo hizo con inocultable desdén. Su opinión debió ser tenida en cuenta, incluso, por quienes no acordaban con ella. En el juego de presiones y debates no es posible evaluar cuánto pesaba, pero su gravitación fue fundamental para fijar lo que se suele denominar la *agenda* de aquello que era necesario discutir. En un país donde los partidos políticos no se caracterizaron por la consistencia de sus programas, o éstos brillaron por su ausencia, y en el que las propuestas gubernamentales de los militares reflejaron la improvisación, su función de organizador conceptual de prioridades tuvo aún mayor influencia. Probablemente, Federico Pinedo exageró cuando sostuvo que sin el editorial de *La Nación* aconsejando a los conservadores en 1916 aceptar el triunfo de Yrigoyen, éste no habría sido designado presidente en el Colegio Electoral. Muchas de las opiniones y orientaciones expresadas en los editoriales no convencieron a quienes debieron ser sus destinatarios inmediatos; algunos golpes de Estado no habrían ocurrido si los mandos militares hubiesen aceptado las ideas allí expresadas; la economía habría tomado otros rumbos —intervencionista bajo Alvear o liberal desde mediados de la década del 50— si quienes ejercían la conducción del área hubieran aceptado las ideas del matutino; los ejecutores del fraude en los años 30 no modificaron sus prácticas por las advertencias y las admoniciones de los editoriales. Pero todos los actores interpelados desde la "tribuna de doctrina", más allá de las afinidades que pudieran tener con sus ideas políticas, en algún momento, con la reverencia que imponen las instituciones legitimadas por la historia, debieron pensar, al sopesar sus decisiones: "Lo dijo *La Nación*..." .



# Bibliografía

## 1. Bibliografía escogida sobre el período

*Se incluyen exclusivamente estudios y testimonios sobre aspectos de los debates de ideas sociales, políticas y económicas a que se hace referencia en la investigación.*

AA. VV.: *Tres revoluciones (Los últimos veinticinco años)*, Emilio Perrot, Buenos Aires, 1959.

Agulla, Juan, y otros: *Pensar la República*, Fundación Piñero Pacheco, Buenos Aires, 1977.

Albrieu, Oscar, y otros: *La reconstrucción de la democracia*, El Cid Editor, Buenos Aires, 1981.

Alemann, Roberto: *Cómo superar la crisis económica actual*, Selección Contable, Buenos Aires, 1956.

Alende, Oscar: *Entretelones de la trampa*, Santiago Rueda, Buenos Aires, 1964.

Alende, Oscar: *Los que mueven las palancas*, Peña Lillo, Buenos Aires, 1973.

Alende, Oscar: *Punto de partida*, Santiago Rueda, Buenos Aires, 1965.

Alfonsín, Raúl: *Inédito. Una batalla contra la dictadura*, Legasa, Buenos Aires, 1986.

Alfonsín, Raúl: *La cuestión argentina*, Propuesta Argentina, Santa Fe, 1980.

Alfonsín, Raúl: *Qué es el Radicalismo*, Sudamericana, Buenos Aires, 1983.

Allende, Alfredo E.: *Historia de una gran ley. El sindicalismo nacional y la Ley de Asociaciones Profesionales*, Arayú, Buenos Aires, 1963.

Amadeo, Mario: *Ayer, hoy y mañana*, Gure, Buenos Aires, 1956.

Amadeo, Octavio R.: *Política*, Librería Mendesky, Buenos Aires, 1916.

Amadeo, Octavio R.: *Vidas argentinas*, Bernabé y Cía., Buenos Aires, 1939.

- Amadeo, Octavio y otros: *El hombre del deber. Una serie de semblanzas del Gral. Manuel A. Rodríguez*, La Facultad, Buenos Aires, 1936.
- Arce, José: *Marcelino Ugarte (1855-1929). El hombre, el político, el gobernante*, s/e, Buenos Aires, 1959.
- Arenas Luque, Fermín V.: *Roque Sáenz Peña. El presidente del sufragio libre*, s/e, Buenos Aires, 1951.
- Auza, Néstor Tomás: *Católicos y liberales en la generación del ochenta*, Ediciones Culturales Argentinas, Buenos Aires, 1975.
- Avellaneda, Marco M.: *Del camino andado (Economía social argentina)*, Buenos Aires - Cooperativa Editorial Limitada, Buenos Aires, 1919.
- Ayarragaray, Lucas: *Cuestiones y problemas argentinos contemporáneos*, 2 tomos, Rosso, Buenos Aires, 1937.
- Babini, Nicolás: *Frondizi, de la oposición al gobierno. Testimonio*, CELTIA, Buenos Aires, 1984.
- Bach Cano, Ricardo: *El proceso que no fue*, s/e, Buenos Aires, 1982.
- Barcos, Julio R.: *Cómo educa el Estado a tu hijo*, Acción, Buenos Aires, 1928.
- Barcos, Julio R.: *Política para intelectuales*, s/e, Buenos Aires, 1931.
- Barcos, Julio R.: *Por el pan del pueblo*, Librería Renacimiento, Buenos Aires, 1938.
- Bayer, Osvaldo: *Los vengadores de la Patagonia trágica*, Galerna, Buenos Aires, 1972.
- Benítez, Hernán: *La aristocracia frente a la revolución*, s/e, Buenos Aires, 1953.
- Bianco, José: *Pequeños problemas*, Agencia general de librería y publicaciones, Buenos Aires, 1921.
- Bidabehere, Fernando Arturo: *Acción económica de la economía dirigida en la República Argentina. Control de cambios. Juntas reguladoras*, s/e, Buenos Aires, 1942.
- Bittel, Deolindo Felipe: *Peronismo y dictadura. 1976-1982*, Editora del Movimiento, Buenos Aires, 1983.
- Boffi, Luis L.: *Bajo la tiranía del sable. Juventud, Universidad y Patria*, Claridad, Buenos Aires, 1933.
- Borda, Guillermo, y otros: *Cinco discursos y una revolución*, Publicaciones Movimiento Humanista de Derecho, Buenos Aires, 1968.
- Botana, Natalio: *El orden conservador*, Sudamericana, Buenos Aires, 1977.
- Botana, Natalio, y otros: *El régimen militar. 1966-1973*, La Bastilla, Buenos Aires, 1973.

- Bravo, Mario: "La Revolución Rusa y la constitución de la república socialista federativa de los soviets", en *Almanaque del Trabajo*, páginas 55-110, Buenos Aires, 1921.
- Bravo, Mario, De la Torre, Lisandro, y Laurencena, Eduardo: *La democracia contra el fascismo*, Federación Gráfica Bonaerense, Buenos Aires, 1937.
- Buchrucker, Cristian: *Nacionalismo y peronismo. La Argentina en la crisis ideológica mundial (1927-1955)*, Sudamericana, Buenos Aires, 1987.
- Bunge, Alejandro, y Sasot, Miguel (Comp.): *El Estado industrial y comerciante*, Economía Argentina, Buenos Aires, 1932.
- Bunge, Augusto: *La guerra del petróleo en la Argentina*, s/e, Buenos Aires, 1933.
- Bustamante, Jure E.: *La república corporativa*, Emecé, Buenos Aires, 1988.
- Bustillo, José María: *Mi rumbo cívico*, Francisco Colombo Editor, Buenos Aires, 1942.
- Cañero, Antonio: *Cinco años después...*, s/e, Buenos Aires, 1961.
- Calle, Jorge: *Los iluminados. Su encumbramiento y su fracaso en la política argentina*, Agencia general de librería y publicaciones, Buenos Aires, 1922.
- Campobassi, José C.: *Ataques y defensa del laicismo escolar en la Argentina (1884-1963)*, Gure, Buenos Aires, 1964.
- Capdevila, Arturo: *Lugones*, Aguilar, Buenos Aires, 1973.
- Caprile, Alberto J. B.: *La libertad crucificada. Análisis de la economía argentina*, Ambassador, Buenos Aires, 1974.
- Carbonell, Cayetano: *Orden y trabajo*, 2 tomos, Librería Nacional J. Lajouanne y Cía. Libreros Editores, Buenos Aires, 1910.
- Cárcano, Miguel Ángel: *Realidad de una política*, Gleizer, Buenos Aires, 1938.
- Cárcano, Miguel Ángel: *Saenz Peña. La revolución por los comicios*, EUDEBA, Buenos Aires, 1976.
- Cárcano, Ramón J.: *En el camino*, El Inca, Buenos Aires, 1926.
- Cárcano, Ramón J.: *Mis primeros 80 años*, Sudamericana, Buenos Aires, 1943.
- Carrasco, Ángel: *Lo que yo vi desde el 80... Hombres y episodios de la transformación nacional*, Procmo, Buenos Aires, 1947.
- Carulla, Juan E.: *Al filo del medio siglo*, Llanura, Entre Ríos, 1951.
- Carulla, Juan E.: *El medio siglo se prolonga*, s/e, Buenos Aires, 1965.
- Carulla, Juan E.: *Genio de la Argentina. Deberes frente a la crisis política y social de nuestro tiempo*, Moderna, Buenos Aires, 1943.

- Carulla, Juan E.: *Valor ético de la revolución del 6 de septiembre de 1930*, s/e, Buenos Aires, 1931.
- Castellani, Leonardo: *Las canciones de Militis* (primera edición 1945), Dictio, Buenos Aires, 1977.
- Castex, Mariano: *El escorial de Onganía*, Hespérides, Buenos Aires, 1981.
- Castex, Mariano: *Un año de Lanusse. Del acuerdo increíble al retorno imposible*, Achával Solo, Buenos Aires, 1973.
- Castro Castillo, Marcial: *Fuerzas Armadas, ética y represión*, Nuevo Orden, Buenos Aires, 1979.
- Cattáneo, Atilio: *Plan 1932. El concurrencismo y la revolución*, Proceso, Buenos Aires, 1959.
- Cereijo, Ramón Antonio: *Sentido y alcance del Plan Económico de 1952*, Consejo Económico Nacional, Buenos Aires, 1952.
- Cerruti Costa, Luis B.: *El sindicalismo. Las masas y el poder*, Trafac, Buenos Aires, 1957.
- Cincuenta y tres periodistas argentinos: *Libro azul y blanco de la prensa argentina*, ONPA, Buenos Aires, 1951.
- Codovilla, Victorio: *La Unión Nacional en la victoria (Escritos y discursos)*, Problemas, Buenos Aires, 1943.
- Colom, Eduardo: *17 de Octubre. La revolución de los descamisados*, Virtus, Buenos Aires, 1946.
- Colombo, Luis: *¡Levántate y anda!*, Gleizer, Buenos Aires, 1929.
- Columba, Ramón: *El Congreso que yo he visto*, Columba, Buenos Aires, 1953.
- Comisión de Afirmación de la Revolución Libertadora: *Revolución Libertadora 20º aniversario. 1955 - 16 de septiembre - 1975*, Buenos Aires, 1976.
- Confederación General del Trabajo: *Jornadas Agrarias*, CGT, Buenos Aires, 1964.
- Conil Paz, Alberto: *Leopoldo Lugones*, Huemul, Buenos Aires, 1985.
- Corbière, Emilio: *El marxismo de Enrique del Valle Iberlucea*, CEAL, Buenos Aires, 1987.
- Cossio, Carlos: *La revolución del 6 de septiembre. Introducción filosófica a su historia y esquema universal de la política argentina*, La Facultad. Juan Roldán y Cia., Buenos Aires, 1933.
- Cuccorese, Horacio Juan: *El tiempo histórico de Carlos Pellegrini*, 2 tomos, FECIC, Buenos Aires, 1985.
- Cúneo, Dardo: *Comportamiento y crisis de la clase empresaria*, Pleamar, Buenos Aires, 1967.
- Cúneo, Dardo: *Juan B. Justo y las luchas sociales en la Argentina*, ALPE, Buenos Aires, 1956.

- D'Amico, Carlos: *Buenos Aires, sus hombres, su política (1860-1890)*, Editorial Americana, Buenos Aires, 1967.
- De Alvear, Marcelo T.: *Acción democrática. Discursos pronunciados en la campaña de renovación presidencial*, Cultura, Buenos Aires, 1937.
- De Alvear, Marcelo T.: *Democracia*, Gleizer, Buenos Aires, 1936.
- De Imaz, José Luis: *Promediados los cuarenta*, Sudamericana, Buenos Aires, 1977.
- De la Torre, Lisandro: *Las dos campañas presidenciales (1916-1931)*, Colegio Libre de Estudios Superiores, Buenos Aires, 1939.
- De Tomaso, Antonio: *El bolchevismo*, Almanaque del Trabajo, páginas 111-213, Buenos Aires, 1921.
- Del Campo Wilson, Estanislao: *Confusión en la Argentina*, Kraft Ltda., Buenos Aires, 1964.
- Del Carril, Bonifacio: *Problemas de la revolución y la democracia*, Emecé, Buenos Aires, 1956.
- Del Carril, Bonifacio: *Bajo el imperio de la fuerza*, Emecé, Buenos Aires, 1958.
- Del Carril, Bonifacio: *Crónica interna de la Revolución Libertadora*, Emecé, Buenos Aires, 1959.
- Del Carril, Bonifacio: *¿Qué nos pasa a los argentinos?*, Emecé, Buenos Aires, 1963.
- Del Carril, Bonifacio: *El retorno a la Constitución*, Emecé, Buenos Aires, 1983.
- Del Carril, Bonifacio: *Vote por el mal menor*, Emecé, Buenos Aires, 1983.
- Del Carril, Bonifacio: *Memorias dispersas. El coronel Perón*, Emecé, Buenos Aires, 1984.
- Del Mazo, Gabriel: *El Radicalismo. El Movimiento de Intransigencia y Renovación (1945-1957)*, Ediciones Gure, Buenos Aires, 1957.
- Del Mazo, Gabriel: *El Radicalismo. Notas sobre su historia y doctrina (1922-1952)*, Raigal, Buenos Aires, 1955.
- Del Mazo, Gabriel (Comp.): *El pensamiento escrito de Yrigoyen*, Raigal, Buenos Aires, 1945.
- Del Valle Iberlucea, Enrique: *La libertad de pensar. Mi desafío*, Librería Internacional, Buenos Aires, 1922.
- Díaz Loza, Florentino: *Las armas de la Revolución*, A. Peña Lillo, Buenos Aires, 1972.
- Dickmann, Enrique: *Recuerdos de un militante socialista*, La Vanguardia, Buenos Aires, 1949.
- Dickmann, Enrique: *¿Inconducta política o callejón sin salida?*, s/e, Buenos Aires, 1952.

- Diez periodistas porteños: *Al margen de la conspiración*, Biblos, Buenos Aires, 1930.
- Documentos de Hipólito Yrigoyen*, Comisión de la ley de homenaje, Buenos Aires, 1949.
- Doll, Ramón: *Acerca de una política nacional y otras obras*, Dictio, Buenos Aires, 1975.
- Domínguez, Emilio: *El 6 de septiembre de 1930*, Agencia general de librería y publicaciones, Buenos Aires, s/f.
- Dorfman, Adolfo: *La intervención del Estado y la industria*, Editorial Argentina de Finanzas y Administración, Buenos Aires, 1944.
- "El caso Sabato. Torturas y libertad de prensa. Carta abierta al Gral. Aramburu", folleto, s/e, Buenos Aires, 1956.
- El Presidente Ortiz y el Senado de la Nación*, Comisión de Homenaje, Buenos Aires, 1941.
- Espigares Moreno, José María: *Lo que me dijo el general Uriburu*, edición del autor, Buenos Aires, 1933.
- Etchepareborda, Roberto: *Yrigoyen y el Congreso*, Raigal, Buenos Aires, 1951.
- Etchepareborda, Roberto, y otros: "Crisis y revolución de 1930" en *Revista de Historia* N° 3, Buenos Aires, 1958.
- Etkin, Alberto: *Bosquejo de una historia y doctrina de la Unión Cívica Radical*, El Ateneo, Buenos Aires, 1928.
- Figuerola, José: *La colaboración social en Hispanoamérica*, Sudamericana, Buenos Aires, 1943.
- Filippo, Virgilio: *Drama de barbarie y comedia de civilización*, Editorial Lista Blanca, Buenos Aires, 1944.
- Fiorito, Susana: *Las huelgas de Santa Cruz (1921-1922)*, CEAL, Buenos Aires, 1985.
- Fitte, Rodolfo, y Sánchez Zinny, Eduardo F.: *Génesis de un sentimiento democrático*, s/e, Buenos Aires, 1944.
- Fontana, Iván: *Un ensayo de interpretación del Plan Pinedo*, Universidad Nacional del Tucumán, Buenos Aires, 1942.
- Fraga, Rosendo: *Claves de la campaña electoral 1989*, Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, Buenos Aires, 1989.
- Fresco, Manuel: *Acción agraria y colonizadora de mi gobierno*, s/e, Buenos Aires, 1941.
- Fresco, Manuel: *Conversando con el pueblo*, Damiano, Buenos Aires, 1938.
- Fresco, Manuel: *Cómo encaré la política obrera durante mi gobierno (1936-1940)*, La Plata, 1940.
- Frigerio, Rogelio: *Las condiciones de la victoria. Manual de política argentina* (cuarta edición), Palacio del Libro, Montevideo, 1963.
- Frigerio, Rogelio: *Los cuatro años (1958-1962). Política económica para argentinos*, Concordia, Buenos Aires, 1962.

- Frondizi, Arturo: "Régimen jurídico de la economía argentina", en *Cursos y conferencias*, octubre-diciembre de 1941, Año X, N° 7-8-9, págs. 859-956.
- Frondizi, Arturo: *Petróleo y política*, Raigal, Buenos Aires, 1954.
- Frondizi, Silvio, y otros: *Las izquierdas en el proceso político argentino*, Palestra, Buenos Aires, 1959.
- Galíndez, Baldomero: *Apuntes de tres revoluciones (1930-1943-1955)*, s/e, Buenos Aires, 1956.
- Gallo, Vicente C.: *Por la democracia y las instituciones*, Rosso, Buenos Aires, 1921.
- García Enciso, Isaías: *Los 100 años del Círculo Militar*, Círculo Militar, Buenos Aires, 1981.
- García Lupo, Rogelio: *Diplomacia secreta y rendición incondicional*, Legasa, Buenos Aires, 1983.
- García Martínez, Carlos: *La grandeza argentina*, Sudamericana, Buenos Aires, 1983.
- García Martínez, Carlos: *La telaraña argentina*, Sudamericana, Buenos Aires, 1970.
- García, Eduardo Augusto: *Yo fui testigo. Antes, durante y después de la segunda tiranía (memorias)*, Luis Lasserre, Buenos Aires, 1971.
- Gentiluomo, Federico A.: *Desafío a la Revolución Argentina*, Nueva Era, Buenos Aires, 1970.
- Ghioldi, Américo: *Palabras a la Nación a través de los editoriales de La Vanguardia*, La Vanguardia, Buenos Aires, 1945.
- Ghioldi, Américo: *Alpargatas y libros en la historia argentina*, La Vanguardia, Buenos Aires, 1946.
- Ghioldi, Américo: *Dos fechas: 4 de junio-24 de febrero*, La Vanguardia, Buenos Aires, 1946.
- Ghioldi, Américo: *Ejército y política. El golpe del 28 de junio de 1966*, s/e, Buenos Aires, 1967.
- Giudice, Ernesto: *Ha muerto el dictador pero no la dictadura*, s/e, Buenos Aires, 1932.
- Giudice, Ernesto, y otros: *¿Qué es la izquierda?*, Documentos, Buenos Aires, 1961.
- Giusti, Roberto: *Momentos y aspectos de la cultura argentina*, Raigal, Buenos Aires, 1954.
- Giusti, Roberto F.: *Visto y vivido*, Losada, Buenos Aires, 1965.
- Goldstraj, Manuel: *El camino del exilio*, Librerías Anaconda, Buenos Aires, 1935.
- Goldstraj, Manuel: *Años y errores. (Un cuarto de siglo de política argentina)*, Sophos, Buenos Aires, 1957.
- Gómez, Alejandro: *Política de entrega*, Peña Lillo, Buenos Aires, 1963.

- Gondra, Luis Roque: "A propósito del radicalismo" en *Nosotros*, octubre de 1915, Año IX, N° 78, págs. 38-50.
- Gondra, Luis Roque: *Problemas sociales y económicos del momento*, La Facultad, Buenos Aires, 1934.
- Gondra, Luis Roque: *El radicalismo y la política del momento. Motivos de crítica y polémica*, La Facultad, Buenos Aires, 1937.
- Gondra, Luis Roque: *Historia económica de la República Argentina*, Sudamericana, Buenos Aires, 1943.
- Gondra, Manuel Augusto: *Declinación del radicalismo y la política del futuro*, El Mirador, Buenos Aires, 1957.
- Gondra, Luis Roque, Palacios, Alfredo, y Carlés, Manuel: *El proceso Alvear*, Claridad, Buenos Aires, 1933.
- González Alberdi, Paulino: *Por qué está en crisis la economía argentina*, Anteo, Buenos Aires, 1949.
- González Iramain, Héctor: *Bajo la dictadura de junio*, s/e, Buenos Aires, 1946.
- González Iramain, Héctor: *Por la Patria*, Asociación Constitución y Libertad Argentinas, Buenos Aires, 1944.
- González, Joaquín V.: *El juicio del siglo o cien años de historia argentina. Obras completas de Joaquín V. González*, Volumen XXI, Universidad de La Plata, Buenos Aires, 1936. Texto publicado por primera vez en el número especial de *La Nación* dedicado a la celebración del Centenario.
- Goyeneche, Juan Carlos: *Ensayos, artículos, discursos*, Dictio, Buenos Aires, 1976.
- Graham-Yooll, Andrew W.: *Tiempo de tragedia*, Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1972.
- Groisman, Enrique: *La Corte Suprema de Justicia durante la dictadura (1976 - 1983)*, CISEA, Buenos Aires, 1987.
- Grondona, Mariano: *La Argentina en el tiempo y en el mundo*, Editorial Primera Plana, Buenos Aires, 1967.
- Grondona, Mariano: *La construcción de la democracia*, EUDEBA, Buenos Aires, 1983.
- Guevara, Juan Francisco: *Argentina y su sombra*, s/e, Buenos Aires, 1970.
- Guglielmelli, Juan Enrique: *120 días en el gobierno*, s/e, Buenos Aires, 1971.
- Güiraldes, Juan José: *El Frente Nacional. Coincidencia para forjar una gran Argentina*, Buenos Aires, 1963.
- Gutiérrez de Miguel, V.: *La Revolución Argentina. Relato de un testigo presencial*, CIAP, Madrid, 1930.
- Gutiérrez, Edmundo: *Bosquejo biográfico del Dr. Ramón S. Castillo*, López, Buenos Aires, 1941.

- Halperin Donghi, Tulio: *José Hernández y sus mundos*, Sudamericana, Buenos Aires, 1985.
- Hardoy, Emilio: *Defensa de la responsabilidad*, s/e, Buenos Aires, 1958.
- Hardoy, Emilio J.: *Qué son los conservadores en la Argentina*, Sudamericana, Buenos Aires, 1983.
- Hernández Arregui, Juan José: *La formación de la conciencia nacional*, Plus Ultra, Buenos Aires, 1973.
- Horne, Bernardino: *Política agraria y regulación económica*, Losada, Buenos Aires, 1945.
- Hueyo, Alberto: *La Argentina en la depresión mundial. 1932-1933. Discursos y conferencias*, El Ateneo, Buenos Aires, 1938.
- Ibarguren (h), Carlos: *Roberto de Laferrère. Periodismo, política, historia*, EUDEBA, Buenos Aires, 1970.
- Ibarguren, Carlos: *La inquietud de la hora. Liberalismo. Corporativismo. Nacionalismo*, Roldán Editor, Buenos Aires, 1934.
- Ibarguren, Carlos: *La historia que he vivido*, Dictio, Buenos Aires, 1977.
- Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas: *Nunca Más*, EUDEBA, Buenos Aires, 1984.
- Instituto Alejandro E. Bunge de Investigaciones Económicas y Sociales: *Soluciones argentinas a los problemas económicos y sociales del presente*, Ediciones Economía Argentina, Buenos Aires, 1945.
- Instituto de Ciencia Política (Universidad del Salvador): *La "Revolución Argentina" (Análisis y prospectiva)*, Depalma, Buenos Aires, 1966.
- Irazusta, Julio: *Balance de siglo y medio*, La Balandra, Buenos Aires, 1972.
- Irazusta, Julio: *El pensamiento político nacionalista (Antología)*, 2 tomos, Obligado Editora, Buenos Aires, 1975.
- Irazusta, Julio: *Perón y la crisis argentina*, Unión Republicana, Buenos Aires, 1956.
- James, Daniel: *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 1946-1976*, Sudamericana, Buenos Aires, 1990.
- Jitrik, Noé: *Los viajeros*, Jorge Álvarez, Buenos Aires, 1969.
- Junta de Abogados Democráticos: *La campaña presidencial de 1946 y la candidatura imposible*, s/e, Buenos Aires, 1946.
- Justo, Juan B.: *Socialismo*, La Vanguardia, Buenos Aires, 1920.
- Justo, Juan B.: *Internacionalismo y Patria*, La Vanguardia, Buenos Aires, 1925.

- Justo, Juan B.: *La realización del socialismo (prólogo de Américo Ghioldi y ordenación y notas de Dardo Cúneo)*, La Vanguardia, Buenos Aires, 1947.
- Justo, Juan B.: *Teoría y práctica de la historia*, Libera, Buenos Aires, 1969.
- Kraft, Guillermo, y otros: *La libre empresa y el progreso económico*, Cámara Argentina de Comercio, 1955.
- L.R.A. Radio del Estado: *Un ciclo de veintidós conferencias radiotelefónicas*, Unión Industrial Argentina, Buenos Aires, 1944.
- "La política económica del gobierno constitucional", presentación de Arturo Illia, folleto, Buenos Aires, 1966.
- La propuesta de la multipartidaria*, El Cid Editor, Buenos Aires, 1982.
- Laclau, Ernesto: *La formación política de la sociedad argentina*, Araujo Hnos., Buenos Aires, 1928.
- Lafiandra (h), Félix (Comp.): *Los panfletos, su aporte a la Revolución Libertadora*, Itinerarium, Buenos Aires, 1955.
- Lanús, Adolfo: *Campo minado*, s/e, Buenos Aires, 1942.
- Lanús, Roque: *Al servicio del Ejército*, s/e, Buenos Aires, 1946.
- Lanusse, Alejandro A.: *Mi testimonio*, Lasserre Editores, Buenos Aires, 1977.
- Lanusse, Alejandro A.: *Protagonista y testigo. (Reflexiones sobre 70 años de nuestra historia)*, Marcelo Lugones S.A. Editor, Buenos Aires, 1989.
- Laurencena, Eduardo: *Centralismo y federalismo*, Gleizer, Buenos Aires, 1938.
- Leumann, Carlos Alberto: *La Iglesia y el Hombre*, El Ateneo, Buenos Aires, 1927.
- Lonardi, Luis Ernesto: *Dios es justo. Lonardi y la revolución*, F. Colombo, Buenos Aires, 1958.
- Lonardi, Marta: *La revolución del 55*, Ediciones Cuenca del Plata, Buenos Aires, 1980.
- Lonardi, Marta: *Los detractores*, Ediciones Cuenca del Plata, Buenos Aires, 1981.
- Losada, Alejandro: *Andá cantale a Gardel*, Escritores Editores, Buenos Aires, 1970.
- Lugones (h), Leopoldo: *Mi padre*, Centurión, Buenos Aires, 1949.
- Lugones, Leopoldo: *Antología de la prosa*, Centurión, Buenos Aires, 1949.
- Lugones, Leopoldo: *La Patria fuerte*, Círculo Militar, Buenos Aires, 1930.
- Lugones, Leopoldo: *Mi beligerancia*, Otero y García, Buenos Aires, 1917.

- Lugones, Leopoldo: *La grande Argentina* (Primera edición junio 1930), Huemul, Buenos Aires, 1962.
- Luna, Félix: *Diálogos con Frondizi*, Desarrollo, Buenos Aires, 1963.
- Luna, Félix: *Perón y su tiempo*, 3 tomos, Sudamericana, Buenos Aires, 1984/6.
- Marsal, Juan F., y Arent, Margery J.: *La derecha intelectual argentina. Análisis de la ideología y la acción política de un grupo de intelectuales*, Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires, 1970.
- Martínez de Hoz, José A.: *Bases para una Argentina moderna 1976-1980*, s/e, Buenos Aires, 1981.
- Martínez Estrada, Ezequiel: *¿Qué es esto? Catilinaria*, Lautaro, Buenos Aires, 1956.
- Martínez Estrada, Ezequiel: *Leopoldo Lugones. Retrato sin retocar*, Emecé, Buenos Aires, 1968.
- Martínez, José Heriberto: *Al servicio del país*, Rosso, Buenos Aires, 1934.
- Martínez, Mariano Reinaldo: *Cobardía e incapacidad de los políticos opositores bajo el peronismo*, s/e, Buenos Aires, 1957.
- Massera, Emilio E.: *El camino de la democracia*, El Cid Editor, Buenos Aires, 1979.
- Matera, Raúl: *Cartas abiertas*, Centro de Investigaciones Sociales de la Argentina, Buenos Aires, 1969.
- Matiengo, José Nicolás: *La revolución de 1930 y los problemas de la democracia argentina*, Anaconda, Buenos Aires, 1930.
- Medina Onrubia de Botana, Salvadora: *"Crítica" y su verdad (Operación cadena)*, edición de la autora, Buenos Aires, 1958.
- Medina, Justo G.: *Por una orientación democrática en la política ganadera del país*, s/e, Buenos Aires, 1941.
- Meinvielle, Julio: *Política argentina 1949-1956*, Trafac, Buenos Aires, 1956.
- Melo, Carlos R.: *Los partidos políticos argentinos*, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1964.
- Melo, Leopoldo: *La postguerra y algunos de los planes sobre el nuevo orden económico*, Unión Industrial Argentina, Buenos Aires, 1942.
- Mignone, Emilio F.: *Iglesia y dictadura*, Pensamiento Nacional, Buenos Aires, 1986.
- Ministerios de Hacienda y Agricultura de la Nación: *El plan de acción económica ante el Congreso Nacional. Discursos de los ministros Pinedo y Duhau*, Buenos Aires, 1934.
- Ministerios de Hacienda y Agricultura de la Nación: *Plan de acción económica nacional*, Buenos Aires, 1934.

- Ministerio de Hacienda de la Nación: *El plan de reactivación económica ante el Honorable Senado*, Buenos Aires, 1940.
- Montemayor, Mariano: *Claves para entender a un gobierno*, Concordia, Buenos Aires, 1963.
- Moreno, Rodolfo: *La cuestión democrática*, s/e, Buenos Aires, 1937.
- Moreno, Rodolfo: *De frente a la dictadura*, s/e, Buenos Aires, 1945.
- Moyano Llerena, Carlos: *La pobreza de los argentinos*, Sudamericana, Buenos Aires, 1987.
- Navarro Gerassi, Marysa: *Los nacionalistas*, Jorge Álvarez, Buenos Aires, 1968.
- Noel, Martín Alberto: *El tema de la revolución en la literatura hispanoamericana*, Corregidor, Buenos Aires, 1982.
- Niosi, Jorge: *Los empresarios y el Estado argentino (1955-1969)*, Siglo XXI, Buenos Aires, 1974.
- Nudelman, Santiago: *El radicalismo al servicio de la libertad*, Jus, Buenos Aires, 1947.
- O'Donnell, Guillermo: *El Estado burocrático autoritario 1966-1973*, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1982.
- Observaciones y comentarios críticos del gobierno al informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en Argentina*, Círculo Militar, Buenos Aires, 1980.
- Oria, Salvador: *El Estado argentino y la nueva economía. Intervencionismo defensivo*, Peuser, Buenos Aires, 1945.
- Orona, Juan V.: *La logia militar que enfrentó a Hipólito Yrigoyen*, s/e, Buenos Aires, 1965.
- Orona, Juan V.: *La logia militar que derrocó a Castillo*, s/e, Buenos Aires, 1966.
- Orona, Juan V.: *La revolución del 6 de septiembre*, s/e, Buenos Aires, 1966.
- Orona, Juan V.: *La revolución del 16 de septiembre*, s/e, Buenos Aires, 1970.
- Ortelli, Roberto (Comp.): *Discursos y documentos políticos del Dr. Ricardo Caballero*, El Inca, Buenos Aires, 1929.
- Ortiz, Roberto M.: *Ideario democrático (A través de la República)*, M. Gleizer, Buenos Aires, 1937.
- Oses, Enrique: *Medios y fines del nacionalismo (Artículos de "El Pampero" de 1941)*, Sudestada, Buenos Aires, 1968.
- Otero, José Antonio: *Los terratenientes derrotaron al gobernador Alende*, Instituto Amigos del Libro Argentino, Buenos Aires, 1965.
- Oyhanarte, Raúl: *Radicalismo de siempre*, editado por el Club Radical de Hombres Libres, La Plata, 1932.

- Palacios, Alfredo L.: *La Corte Suprema ante el Tribunal del Senado*, Jus, Buenos Aires, 1947.
- Palacios, Alfredo L.: *Una revolución auténtica. (Textos de 1960 y 1961)*, Ediciones Teoría y Práctica, Buenos Aires, 1985.
- Palomino, Mirta L. de: *Tradición y Poder: la Sociedad Rural Argentina (1955 -1983)*, CISEA-GEL, Buenos Aires, 1988.
- Pandolfi, Rodolfo: *Fronzizi por él mismo*, Galerna, Buenos Aires, 1968.
- Partido Demócrata: *El Partido Demócrata hace el análisis crítico de algunos aspectos del mensaje presidencial al Congreso de la Nación (1-V-52) y del estado general de la República*, Buenos Aires, 1952.
- Partido Socialista: *Frente al gobierno de facto*, Buenos Aires, 1945.
- Pastor, Reynaldo A.: *La democracia argentina*, s/e, Buenos Aires, 1940.
- Pastor, Reynaldo: *Frente al totalitarismo peronista*, Bases, Buenos Aires, 1959.
- Pastor, Reynaldo A.: *La verdad conservadora*, Ediciones del Club Nicolás Avellaneda, Buenos Aires, 1961.
- Pastor, Reynaldo A.: *Mi lucha por la libertad (1916-1976)*, mimeógrafo, s/f.
- Pelletieri, Osvaldo y otros: *Testimonios culturales argentinos: la década del 10*, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1980.
- Perón, Juan Domingo: "Algunos apuntes en borrador sobre lo que yo vi, de la preparación y realización de la revolución del 6 de septiembre de 1930. Contribución personal a la historia de la revolución", en Sarobe, José María: *Memorias de la revolución del 6 de septiembre de 1930*, Gure, Buenos Aires, 1957.
- Perón, Juan Domingo (Descartes): *Política y estrategia (No ataco, crítico)*, publicación oficial, Buenos Aires, 1951.
- Perón, Juan Domingo: *La fuerza es el derecho de las bestias*, primera edición 1956, s/e, 1958.
- Perón, Juan Domingo: *Los vendepatria. Las pruebas de la traición*, Liberación, Buenos Aires, 1958.
- Perón, Juan Domingo: *La hora de los pueblos*, primera edición 1968, Volver, Buenos Aires, 1982.
- Perón, Juan Domingo: *Latinoamérica: Ahora o nunca*, Diálogo, Montevideo, 1968.
- Perón-Cooke: *Correspondencia*, 2 tomos, Granica Editor, Buenos Aires, 1971-1972.
- Pinedo, Federico: *La Argentina en la vorágine*, Mundo Forense, Buenos Aires, 1943.

- Pinedo, Federico: *En tiempos de la República*, Mundo Forense, Buenos Aires, 1946.
- Pinedo, Federico: *El fatal estatismo*, Kraft Ltda., Buenos Aires, 1956.
- Piñero, Norberto: *Política. El momento presente. Problemas sociales y políticos. Estabilidad de la Constitución*, Casa Editora Jesús Menéndez, Buenos Aires, 1929.
- Por defender la libertad*. Diario "La Prensa" de Buenos Aires, Argentina, Ed. Botas. México, 1952.
- Potash, Robert A.: *El Ejército y la política en la Argentina*, 2 tomos, Sudamericana, Buenos Aires, 1971-1981.
- Potash, Robert A.: *Perón y el GOU. Los documentos de una logia secreta*, Sudamericana, Buenos Aires, 1984.
- Prados Arrate, Jesús: *El control de cambios*, Sudamericana, Buenos Aires, 1944.
- Prebisch, Raúl: *Informe preliminar acerca de la situación económica*, Secretaría de Prensa y Actividades Culturales de la Presidencia de la Nación, 1955.
- Prebisch, Raúl: *La crisis del desarrollo argentino. De la frustración al crecimiento vigoroso*, El Ateneo, Buenos Aires, 1986.
- Prieto, Ramón: *El pacto. 8 años de política argentina*, En Marcha, Buenos Aires, 1963.
- Puigbó, Raúl: *La revancha oligárquica y el porvenir obrero*, Sigla, Buenos Aires, 1957.
- Puiggrós, Rodolfo: *Historia crítica de los partidos políticos*, Argumentos, Buenos Aires, 1956.
- Ravinovitz, Bernardo: *Sucedió en la Argentina (1943-1955). Lo que no se dijo*, Gure, Buenos Aires, 1956.
- Repetto, Nicolás: *Tiempos difíciles*, La Vanguardia, Buenos Aires, 1931.
- Repetto, Nicolás: *Azúcar y carne*, La Vanguardia, Buenos Aires, 1939.
- Repetto, Nicolás: *Deber cumplido*, La Vanguardia, Buenos Aires, 1943.
- Reyna Almadós, Luis: *Hacia la anarquía. Examen de la política radical*, El Ateneo, Buenos Aires, 1919.
- Reyna Almadós, Luis: *La demagogia radical y la tiranía (1916-1919)*, El Ateneo, Buenos Aires, 1920.
- Rivera, Jorge, y Romano, Eduardo: *Claves del periodismo argentino actual*, Tarso, Buenos Aires, 1987.
- Robustiano Patrón Costa (5 de agosto de 1878-24 de septiembre de 1965). Publicación de homenaje, s/e*, Buenos Aires, 1972.
- Roca, Deodoro: *El difícil tiempo nuevo*, Lautaro, Buenos Aires, 1956.

- Rock, David: *El Radicalismo argentino, 1890-1930*, Amorrortu, Buenos Aires, 1977.
- Rodolfo Moreno. *El hombre de la actualidad argentina*, Kraft Ltda., Buenos Aires, 1942.
- Rodríguez, Carlos J.: *Irigoyen. Su revolución política y social*, La Facultad, Buenos Aires, 1943.
- Rodríguez, Germinal: *Sociocracia y socialismo independiente*, Fontana, Buenos Aires, 1935.
- Rojas, Ricardo: *El Radicalismo de mañana*, primera edición 1931, Losada, Buenos Aires, 1946.
- Romero, José Luis: *Las ideas políticas en Argentina*, FCE, Argentina, 1975.
- Romero, José Luis: *Las ideas en la Argentina del siglo XX*, Solar, Buenos Aires, 1983.
- Romero, José Luis: *La experiencia argentina*, FCE, Buenos Aires, 1989.
- Romero, Luis A., y otros: *El Radicalismo*, Ediciones Cepe, Buenos Aires, 1974.
- Roth, Roberto: *El país quedó atrás*, Emecé, Buenos Aires, 1967.
- Roth, Roberto: *Los años de Onganía. Relato de un testigo*, La Campana, Buenos Aires, 1980.
- Roth, Roberto: *¿Después de Malvinas qué?*, La Campana, Buenos Aires, 1982.
- Rouquié, Alain: *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, 2 tomos, Emecé, Buenos Aires, 1981-1982.
- Ruzo, Alejandro: *Política social*, Rosso, Buenos Aires, 1918.
- Sabato, Ernesto: *El otro rostro del peronismo. Carta abierta a Mario Amadeo*, s/e, Buenos Aires, 1956.
- Saldías, José Antonio: *La inolvidable bohemia porteña. Radiografía ciudadana del primer cuarto de siglo*, Freeland, Buenos Aires, 1968.
- Sanmartino, Ernesto E.: *La verdad sobre la situación argentina*, s/e, Montevideo, 1951.
- Sánchez Sorondo, Marcelo: *La revolución que anunciamos*, Ediciones Nueva Política, Buenos Aires, 1945.
- Sánchez Sorondo, Marcelo: *Más allá del régimen*, folleto, Buenos Aires, 1964.
- Sánchez Sorondo, Marcelo: *La Argentina por dentro*, Sudamericana, Buenos Aires, 1987.
- Sánchez Viamonte, Carlos: *El último caudillo*, Diario El País Editor, Córdoba, 1930.
- Sánchez Viamonte, Carlos: *Visperas del 4 de junio (Responsabilidad de gobernantes)*, Futuro, Buenos Aires, 1943.

- Sánchez Zinny, Adolfo: *Argentina provisoria...*, Freeland, Buenos Aires, 1961.
- Sánchez Zinny, Eduardo F.: *La revolución inconclusa*, Buenos Aires, 1943.
- Sánchez Zinny, Eduardo F.: *El culto de la infamia. Historia documentada de la segunda tiranía argentina*, 2 tomos, s/e, Buenos Aires, 1958.
- Santamarina, Antonio: *Después del 4 de junio*, s/e, Buenos Aires, 1946.
- Saravia (h), José Manuel: *Hacia la salida*, Emecé, Buenos Aires, 1968.
- Sarlo, Beatriz: *Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920-1930*, Editorial Nueva Visión, Buenos Aires, 1988.
- Sarobe, José María: *Política económica argentina*, Unión Industrial Argentina, Buenos Aires, 1942.
- Sarobe, José María: *Memorias sobre la revolución del 6 de septiembre de 1930*, Gure, Buenos Aires, 1957.
- Schvarzer, Jorge: *La política económica de Martínez de Hoz*, Hyspamérica, Buenos Aires, 1986.
- Selser, Gregorio: *El onganato*, 2 tomos, Carlos Samonta Editor, Buenos Aires, 1973.
- Sidicaro, Ricardo: "Poder y crisis de la gran burguesía agraria argentina", en Alain Rouquié (Comp.): *Argentina, hoy*, Siglo XXI, Buenos Aires, 1982.
- Sigal, Silvia: *Intelectuales y poder en la década del sesenta*, Punto Sur, Buenos Aires, 1991.
- Silva, Francisco (Introducción y selección): *Semblanzas de Yrigoyen*, Rosso, Buenos Aires, 1928.
- Sirvén, Pablo: *Perón y los medios de comunicación*, Buenos Aires, 1984.
- Smith, Peter H.: *Carne y política en la Argentina*, Paidós, Buenos Aires, 1968.
- Sociedad Rural Argentina: *El pool de los frigoríficos. Necesidad de la intervención del Estado*, Buenos Aires, 1927.
- Solari, Juan Antonio: *En el Frente Democrático*, La Vanguardia, Buenos Aires, 1942.
- Solari, Juan Antonio: *Parias argentinos. Explotación y miseria de los trabajadores en el norte del país*, La Vanguardia, Buenos Aires, 1940.
- Solomonoff, Jorge N.: *Ideologías del movimiento obrero y conflicto social*, Proyección, Buenos Aires, 1971.
- Spangenberg Lequizamón, Enrique: *Los responsables. El Ejército y la Unión Cívica Radical ante la democracia argentina*, El Ateneo, Buenos Aires, 1936.

- Toledo, Antonio: *El Partido Radical (o la lucha por la democracia)*, s/e, Buenos Aires, 1931.
- Torrassa, Atilio E.: *Mitre, paladín del laicismo*, Ediciones de Sarmiento, Buenos Aires, 1957.
- Torres, Arturo: *Elpidio González. Biografía de una conducta*, Raigal, Buenos Aires, 1951.
- Torres, José Luis: *Los "perduellis"*, s/e, Buenos Aires, 1943.
- Torres, José Luis: *La década infame*, primera edición 1944, Free-land, Buenos Aires, 1973.
- Tosco, Agustín: *Presente en las luchas de la clase obrera. Selección de trabajos*, s/e, Buenos Aires, 1984.
- Ulla, Noemí (selección y prólogo): *La revista Nosotros*, Galerna, Buenos Aires, 1969.
- Unión Nacional: *Sáenz Peña. La campaña política de 1910*, Buenos Aires, 1910.
- Vázquez, Enrique: *P.R.N. La última. Origen, apogeo y caída de la dictadura militar*, EUDEBA, Buenos Aires, 1985.
- Velasco, Leopoldo: *Pedro C. Molina. Caballero de la democracia*, Rossi, Córdoba, 1947.
- Viale Ledesma, S.: *6 de septiembre. El pueblo, el ejército y la revolución*, Mercurio, Buenos Aires, 1930.
- Viale, Carlos Dalmiro: *Buenos Aires, 1902. La batalla del divorcio, El Cuarto Poder*, Buenos Aires, 1957.
- Villafañe, Benjamín: *Irigoyen. El último dictador*, Moro, Tello y Cía., Buenos Aires, 1922.
- Villafañe, Benjamín: *La miseria de un país rico*, El Ateneo, Buenos Aires, 1927.
- Villafañe, Benjamín: *Chusmocracia. La chusma no está en las masas, sino en quienes la explotan*, s/e, Buenos Aires, 1937.
- Villegas, Osiris G.: *No acuso, reflexiono*, Pleamar, Buenos Aires, 1976.
- Viñas, Ismael: *Orden y progreso. (La era del frondizismo)*, Palestra, Buenos Aires, 1960.
- Walsh, Rodolfo: *Caso Satanowsky*, Ediciones de la Flor, 1986.
- Weinstein, Donald F.: *Juan B. Justo y su época*, Fundación Juan B. Justo, Buenos Aires, 1978.
- Yo, Juan Perón. Relato autobiográfico*, Planeta, Barcelona, 1976.
- Zinn, Ricardo: *La segunda fundación de la república*, Pleamar, Buenos Aires, 1976.
- Zinn, Ricardo: *4 años después en la segunda fundación de la República*, Pleamar, Buenos Aires, 1980.
- Zorraquín Becú, Horacio, y otros: *Cuatro revoluciones argentinas (1890-1930—1943-1955)*, Ediciones del Club Nicolás Avellaneda, Buenos Aires, 1960.

## 2. Bibliografía teórica empleada

- Ansart, Pierre: *Ideología, conflicto y poder*, Premia Editora, México, 1983.
- Ansart, Pierre: *Les idéologies politiques*, PUF, Paris, 1974.
- Aron, Raymond: *Estudios Sociológicos*, Espasa Calpe, Madrid, 1989.
- Birnbaum, Pierre: *La logique de l'Etat*, Fayard, Paris, 1982.
- Boudon, Raymond: *L'idéologie, ou l'origine des idées reçues*, Fayard, Paris, 1986.
- Bourdieu, Pierre: *La distinction. Critique sociale du jugement*, Minuit, Paris, 1979.
- Bourdieu, Pierre, avec Lóic J. D. Wacquant: *Réponses*, Séuil, Paris, 1992.
- Coser, Lewis A.: *Hombres de ideas*, FCE, México, 1968.
- Debray, Régis: *Cours de médiologie générale*, Gallimard, Paris, 1991.
- Duverger, Maurice: *Janus. Les deux faces de l'Occident*, Fayard, Paris, 1972.
- Durkheim, Emilio: *Lecciones de sociología. Física de las costumbres y del derecho*, Schapire, Buenos Aires, 1966.
- Geiger, Theodor: *Ideología y verdad*, Amorrortu, Buenos Aires, 1974.
- Giner, Salvador: *Sociedad masa: crítica del pensamiento conservador*, Península, Barcelona, 1979.
- Habermas, Jürgen: *Historia y crítica de la opinión pública*, G. Gili, Barcelona, 1981.
- Harbour, William R.: *El pensamiento conservador*, GEL, Buenos Aires, 1985.
- Key (h), Vladimir O.: *Opinión pública*, 2 tomos, Omeba, Buenos Aires, 1967.
- Kirchneimer, Otto: "El camino hacia el partido de todo el mundo", en Kurt Lenk y Franz Neumann (eds.): *Teoría y sociología de los partidos políticos*, Anagrama, Barcelona, 1980.
- Lasswell, Harold D.: "Estructura y función de la comunicación en la sociedad", en M. de Moragas (ed.): *Sociología de la comunicación de masas*, G. Gili, Barcelona, 1985.
- Linz, Juan: "Una interpretación de los regimenes autoritarios", en *Paper (Revista de Sociología publicada por la Universidad Autónoma de Barcelona)* N° 8, Editorial Península, Barcelona, 1970.
- Linz, Juan: *La quiebra de las democracias*, Alianza, Madrid, 1987.

- Lippmann, Walter: *La opinión pública*, Fabril, Buenos Aires, 1964.
- Lipset, Seymour Martin: *El hombre y la política*, EUDEBA, Buenos Aires, 1964.
- Mannheim, Karl: *Ideología y utopía*, FCE, México, 1941.
- Moodie, Graeme C., y Studdert-Kennedy, Gerald: *Opiniones, públicos y grupos de presión*, FCE, México, 1975.
- Offe, Claus: *Lo stato nel capitalismo maturo*, Etas Libri, Milano, 1977.
- Offe, Claus: *Contradicciones en el Estado de bienestar*, Alianza, Madrid, 1990.
- Poulantzas, Nicos: "Les transformations actuelles de l'Etat, la crise politique et la crise de l'Etat", en N. Poulantzas (Comp.): *La crise de l'Etat*, PUF, Paris, 1976.
- Rusconi, Gian Enrico: *Scambio, minaccia, decisione. Elementi di sociologia politica*, Il Mulino, Bologna, 1984.
- Schmitter, Philippe C.: "Still the Century of Corporatism?", en Philippe C. Schmitter and Gerhard Lembruch (eds.): *Trends Toward Corporatist Intermediation*, Sage, Beverly Hills, 1981.
- Therborn, Göran: *¿Cómo domina la clase dominante?*, Siglo XXI, Madrid, 1979.
- Tocqueville, Alexis de: *De la démocratie en Amérique*, Flammarion, Paris, 1981.
- Touraine, Alain: *Production de la société*, Seuil, Paris, 1973.
- Weber, Max: *Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva*, FCE, México, 1969.
- Weber, Max: *Escritos políticos*, 2 tomos, Folio, México, 1982.
- Wolf, Mauro: *La investigación de la comunicación de masas*, Paidós, Barcelona, 1987.



# Índice

Introducción .....	7
--------------------	---

## PRIMERA PARTE

### EL TIEMPO DE LAS CERTEZAS 1909 - 1943

I. Las propuestas de modernización política y social en la época del Centenario.....	25
II. La oposición al gobierno de Hipólito Yrigoyen .....	55
III. Los debates del período de Alvear. <i>La Nación</i> : precursora del intervencionismo económico del Estado .....	82
IV. El retorno de Yrigoyen y... de corceles y de acero.....	108
V. Contra el corporativismo de Uriburu y a favor de la economía dirigida.....	123
VI. La ilegitimidad del poder y las transformaciones de las ideas sobre el Estado durante el período 1932-1943 ....	136

## SEGUNDA PARTE

### PENSANDO LA NUEVA ARGENTINA. 1943-1955

VII. La revolución de 1943: del apoyo a la crítica .....	177
VIII. El gobierno peronista: de la crítica al apoyo.....	200

## TERCERA PARTE

### DESCONCIERTO Y NOSTALGIA. 1955-1976

IX. Después de Perón: la búsqueda de nuevas claves para explicar la política .....	251
X. Críticas y apoyos a Frondizi .....	271

XI. Guido e Illia: gobiernos sin legitimidad e interpretaciones en clave trágica .....	300
XII. <i>La Nación</i> y el fracaso de la "Revolución Argentina" .....	321
XIII. El tercer peronismo. Consejos y desesperanzas .....	371

CUARTA PARTE  
 DESHOJANDO EL AUTORITARISMO. 1976-1983

XIV. La tipografía en frío de los años de plomo.....	397
XV. Despidiendo a los políticos blindados .....	451

QUINTA PARTE  
 EN BUSCA DE LA REPÚBLICA PERDIDA. 1983-1989

XVI. La reconstrucción de la democracia .....	473
<i>Conclusión: "Lo dijo La Nación..."</i> .....	520
<i>Bibliografía</i> .....	527

Esta edición de 2000 ejemplares  
se terminó de imprimir en  
La Ley S.A.E.eI., Bernardino Rivadavia 130  
Avellaneda, Buenos Aires,  
en el mes de mayo de 1993.









El diario *La Nación* optó en 1909 por tomar distancia de las luchas partidarias y decidió asumir el papel de orientador intelectual de la clase dirigente argentina. Desde entonces y hasta nuestros días, ningún acontecimiento político importante dejó de ser materia de reflexión en sus editoriales. Redactados con notoria vocación pedagógica, en ellos se combinan la perspectiva ética con el realismo político. Seguir la transformación de las ideas del matutino fundado por Bartolomé Mitre supone introducirse desde su óptica en el accidentado desarrollo político en nuestro país. Según observadores destacados hubo momentos en que la opinión del diario fue decisiva en la orientación de los sucesos políticos; en otros, su influencia quizás fue menor, pero en todos los casos su punto de vista fue difícil de ignorar.

El análisis sociológico del pensamiento político de *La Nación* realizado en esta obra constituye un aporte original para la mejor comprensión de la historia argentina de las últimas ocho décadas. Las esperanzas, las crisis, las certezas, los desconciertos, las furias y las pasiones que a su turno poblaron el imaginario social se reflejan, en el estilo que le es propio, en las ideas del diario. La evolución de la sociedad y sus conflictos, los cambios del Estado y del régimen político, la ingobernabilidad prolongada, el militarismo y la democracia, la Argentina que fue y la que no fue dejaron sus trazas en el *corpus* constituido por aproximadamente 80.000 editoriales, sobre los que trabajó Ricardo Sidicaro. De este libro surge una visión en muchos aspectos distinta de la conocida sobre el período, una aproximación nueva a la dinámica del campo político, basada en el empleo de una fuente vivencial y cotidiana que nos ofrece claves renovadas para pensar *La Nación* y el país.

Ricardo Sidicaro, sociólogo, doctorado en Francia, profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET en el CISEA y en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), es autor de numerosos trabajos sobre la evolución sociopolítica argentina y latinoamericana, publicados en nuestro medio y en el extranjero.

ISBN 950-07-0845-0



9 789500 708456